

2000-2001



Panorama social

DE AMÉRICA LATINA



NACIONES UNIDAS





PUBLICACION DE LAS NACIONES UNIDAS
LC/G.2138-P

Copyright © Naciones Unidas, octubre 2001. Todos los derechos reservados.

Primera edición

ISSN 1020-5152

ISBN 92-1-321903-2

Número de venta: S.01.II.G.141

Impreso en Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, EE.UU. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

El *Panorama social de América Latina* es preparado anualmente por la División de Desarrollo Social y la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL, dirigidas por los señores Rolando Franco y Enrique Ordaz, respectivamente. La edición 2000-2001 fue coordinada por los señores Juan Carlos Feres y Arturo León, quienes junto con la señora Irma Arriagada y los señores Ernesto Espindola, Xavier Mancero, Fernando Medina y Pedro Sáinz, se encargaron también de la redacción de los capítulos. En el capítulo IV colaboraron, además, los señores Álvaro Fuentes y Pascual Gerstenfeld. En las tareas de preparación y procesamiento de los antecedentes estadísticos trabajaron la señora Mariluz Avendaño y los señores Carlos Daroch y Carlos Howes.

Notas explicativas

En los cuadros del presente *Panorama social de América Latina* se han empleado los siguientes signos:

- Tres puntos (...) indican que los datos faltan, no constan por separado o no están disponibles.
- Dos rayas y un punto (-.-) indican que el tamaño de la muestra no resulta suficiente para estimar la categoría respectiva con una confiabilidad y precisión adecuadas.
- La raya (-) indica que la cantidad es nula o despreciable.
- Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable o no es comparable.
- Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
- El punto (.) se usa para separar los decimales.
- El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1990-1998, indica que se trata de todo el periodo considerado, ambos años inclusive.
- La palabra “dólares” se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
- Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

RESEÑA		11
SÍNTESIS		13
CAPÍTULO I	LOGROS Y DESAFÍOS DE LA LUCHA CONTRA LA POBREZA	33
	A. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN EL PERÍODO 1997-2000	35
	B. LA POBREZA EN LOS AÑOS NOVENTA	41
	C. EL PERFIL DE LOS HOGARES POBRES	52
	D. ESCENARIOS FUTUROS EN EL COMBATE A LA POBREZA	56
	1. Crecimiento económico y disminución de la pobreza	56
	2. La magnitud de los desafíos	61
CAPÍTULO II	CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	65
	A. LA CONCENTRACIÓN DEL INGRESO A FINES DE LOS AÑOS NOVENTA	67
	B. EVOLUCIÓN A LO LARGO DE LA DÉCADA	74
CAPÍTULO III	DINÁMICA DEL EMPLEO Y EL DESEMPLEO EN AMÉRICA LATINA DURANTE LOS AÑOS NOVENTA	85
	A. DINÁMICA DEL EMPLEO Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL	87
	B. EL DESEMPLEO EN AMÉRICA LATINA DURANTE LOS AÑOS NOVENTA: MAGNITUD, EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	99
	1. Evolución del desempleo y su relación con el crecimiento económico	100
	2. Características de los desocupados y duración media del desempleo . .	105
CAPÍTULO IV	EL GASTO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA: BALANCE DE UNA DÉCADA	113
	Introducción	115
	A. EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL DURANTE LOS AÑOS NOVENTA	116
	B. EL IMPACTO DE LA CRISIS Y EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO SOCIAL EN LAS COYUNTURAS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO	125
	1. El comportamiento del gasto público social en escenarios de alta volatilidad del crecimiento	126
	2. El comportamiento del gasto social durante la recesión de fines de los años noventa	131
	C. EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL POR SECTORES Y SU IMPACTO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	133
	1. El efecto redistributivo de los componentes del gasto social	133
	2. Evolución sectorial del gasto social entre 1990 y 1999	137

CAPÍTULO V	LAS FAMILIAS EN AMÉRICA LATINA: DIAGNÓSTICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS	145
	Introducción	147
	A. DIAGNÓSTICO DE LAS FAMILIAS EN AMÉRICA LATINA: PRINCIPALES CAMBIOS	148
	1. Cambios demográficos	148
	2. Nuevos tipos de familias	150
	3. Transformación de los papeles sociales de las mujeres	152
	B. LA FAMILIA Y EL ESTADO	154
	1. Los organismos encargados de la familia	154
	2. La percepción de las autoridades de los cambios y problemas que enfrentan las familias en América Latina	155
	C. LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS	160
	1. Dificultades para el diseño de políticas familiares	160
	2. Ausencia de políticas y escasez de programas y proyectos referidos a la familia	162
	3. Buenas prácticas: programas, iniciativas y proyectos interesantes	164
	4. Algunos criterios para el diseño de políticas dirigidas a la familia	167
	D. LA AGENDA SOCIAL INTERNACIONAL: LA ASAMBLEA DEL MILENIO	169
	Anexo 1 Países, instituciones y personas que respondieron a la encuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)	171
	Anexo 2 Encuesta sobre programas dirigidos hacia la familia en América Latina	172
	BIBLIOGRAFÍA	175
	ANEXO ESTADÍSTICO	177
	PUBLICACIONES DE LA CEPAL	273

Índice de recuadros, cuadros y gráficos

Cuadros

Cuadro I.1	América Latina (19 países): evolución de algunos indicadores socioeconómicos, 1990-2000	37
Cuadro I.2	América Latina: magnitud de la pobreza e indigencia, 1980-1999.	38
Cuadro I.3	América Latina: población pobre e indigente, 1980-1999.	38
Cuadro I.4	América Latina (17 países): indicadores de pobreza, 1990-1999	44
Cuadro I.5	América Latina (17 países): indicadores de indigencia, 1990-1999	45
Cuadro I.6	América Latina: rasgos seleccionados del perfil de la pobreza, 1999	53
Cuadro I.7	América Latina (14 países): evolución del producto interno bruto (PIB) per cápita y del porcentaje de población en situación de pobreza e indigencia, 1990-1999	57
Cuadro I.8	América Latina: tasa de crecimiento económico requerida para reducir a la mitad la proporción de población en pobreza extrema en los próximos 15 años	63
Cuadro II.1	América Latina (17 países): distribución del ingreso de los hogares, 1990-1999	69
Cuadro II.2	América Latina (17 países): indicadores de concentración del ingreso, 1990-1999	71
Cuadro II.3	América Latina (17 países): nivel de producto per cápita y grado de concentración del ingreso en las zonas urbanas, 1999	80
Cuadro II.4	América Latina (18 países): cambios en la distribución del ingreso en las zonas urbanas, 1990-1997-1999	80
Cuadro III.1	América Latina: principales agregados del mercado de trabajo, 1990-1999	88
Cuadro III.2	América Latina: composición de la población en edad de trabajar, por sexo y zona	91
Cuadro III.3	América Latina: características seleccionadas de la población ocupada.	94
Cuadro III.4	América Latina: segmentos del mercado de trabajo en las zonas urbanas	96
Cuadro III.5	América Latina: proporción de empleo femenino	98
Cuadro III.6	América Latina: nivel y composición de la desocupación, por zonas, 1990-1999.	101
Cuadro III.7	América Latina y el Caribe (22 países): desempleo urbano	105
Cuadro III.8	América Latina (17 países) y países con fuerte aumento del desempleo: tasas de desempleo urbano, 1994-1999	106
Cuadro III.9	América Latina (11 países): tiempo de búsqueda de trabajo entre quienes han perdido el empleo	108
Cuadro IV.1	América Latina (17 países): gasto público social per cápita.	139
Cuadro IV.2	América Latina (17 países): gasto público social como porcentaje del gasto público total	139
Cuadro IV.3	América Latina (17 países): gasto público social como porcentaje del PIB	140
Cuadro IV.4	América Latina (17 países): evolución del gasto social sin seguridad social en los años noventa	140

Cuadro IV.5	América Latina (8 países): distribución del gasto social por estratos de ingreso e índices de progresividad de sus distintos componentes.	141
Cuadro IV.6	América Latina (8 países): incidencia del gasto público social en el ingreso de los hogares	143
Cuadro IV.7	América Latina (15 países): nivel y evolución del gasto social por sectores en los años noventa.	144
Cuadro V.1	América Latina (17 países): tamaño medio de los hogares urbanos, según quintiles de ingreso alrededor de 1987 y 1999.	149
Cuadro V.2	América Latina (16 países): tipos de hogares urbanos, según nivel de ingreso familiar, 1997.	150
Cuadro V.3	América Latina (17 países): magnitud de la pobreza y la indigencia en hogares encabezados por mujeres, zonas urbanas, alrededor de 1990 y 1999	151
Cuadro V.4	América Latina (10 países): familias urbanas con más de un aportante de ingresos laborales por tipos de hogar en quintiles seleccionados, 1990-1999.	153
Cuadro V.5	América Latina (15 países): los tres principales cambios experimentados por las familias según la percepción de los organismos oficiales.	156
Cuadro V.6	América Latina (16 países): los tres principales problemas que enfrentan las familias según la percepción de los organismos oficiales.	159

Gráficos

Gráfico I.1	América Latina: evolución de la pobreza y de la indigencia	38
Gráfico I.2	América Latina (14 países): variación anual del producto interno bruto (PIB) per cápita y del coeficiente de pobreza, 1990-1999	58
Gráfico II.1	América Latina (13 países): cambios en la concentración del ingreso, total nacional, 1990-1999	77
Gráfico II.2	América Latina: cambios en el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso, 1990-1999	78
Gráfico III.1	América Latina: evolución de algunas variables generales del mercado de trabajo, 1990-1999.	89
Gráfico III.2	América Latina: evolución de algunas relaciones seleccionadas, 1990-1999	90
Gráfico III.3	América Latina: evolución del producto interno bruto (PIB) total y del empleo en los años noventa	93
Gráfico III.4	América Latina: evolución del crecimiento económico y del desempleo abierto urbano en los años ochenta y noventa	100
Gráfico III.5	América Latina y el Caribe (21 países): tasas de desempleo urbano, períodos 1991-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999 y 2000	103
Gráfico III.6	América Latina (11 países): tiempo de búsqueda de trabajo entre quienes han perdido el empleo, 1994-1999	107
Gráfico III.7	América Latina (6 países): tiempo de búsqueda de trabajo en países con fuerte aumento del desempleo, según número de años de instrucción, 1994-1999.	109
Gráfico IV.1	América Latina (17 países): gasto público social por habitante, 1990-1991 y 1998-1999	117
Gráfico IV.2	América Latina (17 países): gasto público social como porcentaje del gasto público total, 1990-1991 y 1998-1999	118

Gráfico IV.3	América Latina (17 países): gasto público social como porcentaje del producto interno bruto (PIB), 1990-1991 y 1998-1999	118
Gráfico IV.4a	América Latina (17 países): gasto social en seguridad social como porcentaje del PIB en función del PIB por habitante	120
Gráfico IV.4b	América Latina (17 países): gasto social como porcentaje del PIB en función del PIB por habitante	120
Gráfico IV.5	Factores explicativos del crecimiento del gasto público social por habitante, América Latina, promedio de 17 países, 1990-1999	121
Gráfico IV.6a	América Latina (17 países): variaciones porcentuales del gasto público total y del producto interno bruto en el período 1990-1999	128
Gráfico IV.6b	América Latina (17 países): variaciones porcentuales del gasto público social y del gasto público total en el período 1990-1999	128
Gráfico IV.6c	América Latina (17 países): variaciones porcentuales del gasto público social sin seguridad social y del gasto público total en el período 1990-1999	128
Gráfico IV.6d	América Latina (17 países): variaciones porcentuales del gasto público social y del producto interno bruto en el período 1990-1999	128
Gráfico IV.7	Evolución del producto interno bruto, del gasto público total, del gasto público social y del gasto público social sin seguridad social, 1997-2000.	132
Gráfico IV.8	Distribución del ingreso primario y del gasto en educación primaria, secundaria y terciaria por quintiles de hogares	134
Gráfico IV.9	Distribución del ingreso primario, del ingreso total y del gasto social por quintiles de hogares	135
Gráfico IV.10	América Latina (8 países): impacto redistributivo del gasto social, excluida la seguridad social, y de la seguridad social en el ingreso de los hogares	136

Recuadros

Recuadro I.1	Método utilizado para la medición de la pobreza.	39
Recuadro I.2	Indicadores para la medición de la pobreza	42
Recuadro I.3	La pobreza en el Caribe	47
Recuadro I.4	Medición de la pobreza y escalas de equivalencia	49
Recuadro I.5	Precisiones metodológicas con respecto a estimaciones de pobreza alternativas.	51
Recuadro I.6	Crecimiento económico y evolución de la pobreza en América Latina	60
Recuadro I.7	La Declaración del Milenio	61
Recuadro II.1	Alternativas metodológicas para el cálculo del coeficiente de Gini.	72
Recuadro II.2	Concentración del ingreso y pobreza	73
Recuadro II.3	La medición de la desigualdad	81
Recuadro II.4	Índices de concentración del ingreso	82
Recuadro II.5	Medición de la desigualdad y escalas de equivalencia	84
Recuadro III.1	Fuentes de información de las cifras sobre desempleo	92
Recuadro III.2	Las pérdidas salariales asociadas al desempleo	110
Recuadro IV.1	Descentralización y financiamiento del gasto social: el caso de Brasil	119
Recuadro IV.2	Un procedimiento para estimar el efecto de los distintos factores que inciden en el gasto social por habitante	122

Recuadro IV.3	Precisiones metodológicas y fuentes de las estadísticas de gasto público total y de gasto social	124
Recuadro IV.4	Un modelo para examinar el comportamiento del gasto público social	130
Recuadro IV.5	La progresividad del gasto social por sectores	134
Recuadro IV.6	Gasto público en servicios sociales básicos y la iniciativa 20/20	138
Recuadro V.1	Panamá: criterios orientadores para el diseño de políticas dirigidas a la familia	161
Recuadro V.2	Cuidado de los niños: tres modelos europeos.	163
Recuadro V.3	Chile: proyecto de ley sobre tribunales de familia	164
Recuadro V.4	México (Estado de Sinaloa): propuestas legales referidas a la familia recompuesta	165
Recuadro V.5	Cantera: un programa para prevenir la violencia intrafamiliar	166
Recuadro V.6	La Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas y la Cumbre del Milenio, quincuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General	170

La edición 2000-2001 del *Panorama social de América Latina* provee nuevas estimaciones sobre la magnitud de la pobreza en los países de la región, basadas en las encuestas de hogares realizadas alrededor de 1999, junto con entregar resultados recientes sobre la distribución del ingreso y la estructura del empleo y el desempleo. Asimismo, analiza la cuantía del gasto público destinado a los sectores sociales y examina la situación de las familias latinoamericanas y las principales políticas públicas orientadas a ellas.

En el primer capítulo se presenta un análisis de la evolución de la pobreza y la indigencia durante los últimos años y se evalúan los logros alcanzados en este aspecto por los países de América Latina. Además, se describen algunos rasgos básicos del perfil de los hogares pobres, y se discute acerca de la factibilidad de reducir a la mitad la incidencia de la pobreza extrema en la región, conforme a la meta trazada para el año 2015 por la Cumbre del Milenio.

Sobre la base de diversos indicadores, el segundo capítulo analiza la situación de los países según su grado de desigualdad en la distribución del ingreso, y su evolución reciente. Se destaca que, si bien muchos países lograron expandir su economía y aumentar considerablemente el gasto social durante los años noventa, América Latina no consiguió modificar sustancialmente la elevada concentración del ingreso que la caracteriza.

En el tercer capítulo se examina la dinámica del empleo y el desempleo, y por primera vez se presentan antecedentes agregados para el conjunto de los países latinoamericanos, con el fin de destacar las principales tendencias en materia de oferta y demanda laboral, segmentación del mercado de trabajo y evolución y características del creciente desempleo abierto que afecta a un considerable número de países.

En el cuarto capítulo se hace un balance de la evolución del gasto público social. Se destacan los factores que contribuyeron al importante aumento del gasto social por habitante durante la década pasada, y se examina su comportamiento en las coyunturas de expansión y contracción del crecimiento económico. Además, se proveen antecedentes sobre la evolución del gasto público social en distintos sectores (educación, salud, seguridad social y vivienda) y su impacto en la distribución del ingreso.

Finalmente, en el capítulo quinto, dedicado a la agenda social, se proporcionan antecedentes cuantitativos acerca de los cambios en la estructura de la familia en los países latinoamericanos, destacándose la relación entre ésta, las transformaciones demográficas y la participación femenina en el mercado laboral. En el mismo capítulo, se examina la institucionalidad social encargada de diseñar y ejecutar las políticas referidas a la familia, y su articulación con otras políticas públicas.

La presente edición del *Panorama social* se acompaña también de un Anexo estadístico que contiene 48 cuadros con indicadores referidos a una amplia gama de fenómenos sociales.

La evolución de la situación social de América Latina hacia fines del decenio de 1990 estuvo marcada por la desaceleración y mayor volatilidad del crecimiento económico. No obstante la recuperación que experimentó la actividad económica en el año 2000, los efectos de la contracción se hicieron sentir en numerosos países de la región. Así, a pesar de los logros en materia de mejoramiento de las condiciones de vida de la población latinoamericana y de los notables avances en el aumento y protección del gasto público social, particularmente durante el primer quinquenio de la década, la pobreza afecta a más personas que antes. Este fenómeno ha sido reforzado por la persistente desigualdad en la distribución del ingreso, que subsiste en la región, y por las características del desempeño del mercado laboral. El mercado de trabajo ha sido relativamente incapaz de incorporar la mano de obra a la economía formal, por lo que han aumentado la informalidad y el desempleo, que se han visto agravados por la reciente desaceleración económica.

En la edición 2000-2001 del *Panorama social de América Latina* se presta especial atención a la evolución y magnitud de la pobreza hacia finales de la década pasada, la desigualdad en la distribución del ingreso, la situación de empleo y desempleo, y el desempeño de los países en materia de incremento del gasto social y su efecto redistributivo. Finalmente, se examina la agenda de los gobiernos en el área de la familia. En relación con cada uno de los temas abordados en los cinco capítulos del *Panorama social*, junto con examinar las tendencias más recientes en los principales indicadores sociales se hace un balance de las tendencias registradas en ellos a lo largo de todo el decenio de 1990.

Pobreza

A fines de los años noventa la pobreza en América Latina afectaba al 35% de los hogares, mientras que la indigencia o pobreza extrema alcanzaba al 14%. Si se comparan estas cifras con las estimadas para el año 1997, se advierte que ambos porcentajes muestran una leve reducción. En efecto, durante el último trienio la incidencia de la pobreza disminuyó en dos décimas de punto, al reducirse de 35.5% a 35.3% de los hogares, variación algo menor a la que presenta el porcentaje de indigencia, que pasó de 14.4% a 13.9%.

La proporción de personas pobres revela una tendencia levemente distinta a la de los hogares. En torno a 1999, el 43.8% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza, tres décimas de punto más que en 1997. Por su parte, la indigencia pasó del 19% al 18.5% en ese período. En términos del volumen de población en situación de pobreza, éste alcanzaba en 1999 a poco más de 211 millones de personas, de las cuales algo más de 89 millones se encontraban bajo la línea de indigencia. Con respecto a 1997 esta cifra representa un aumento de 7.6 millones de personas pobres, en tanto que el número de indigentes tuvo un pequeño incremento en el trienio, que abarcó a 0.6 millones de personas (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

AMÉRICA LATINA: HOGARES Y POBLACIÓN POBRES E INDIGENTES, 1980-1999 a/												
	Pobres b/						Indigentes c/					
	Total		Urbana		Rural		Total		Urbana		Rural	
	Millones	Porcentaje	Millones	Porcentaje	Millones	Porcentaje	Millones	Porcentaje	Millones	Porcentaje	Millones	Porcentaje
Hogares												
1980	24.2	34.7	11.8	25.3	12.4	53.9	10.4	15.0	4.1	8.8	6.3	27.5
1990	39.1	41.0	24.7	35.0	14.4	58.2	16.9	17.7	8.5	12.0	8.4	34.1
1994	38.5	37.5	25.0	31.8	13.5	56.1	16.4	15.9	8.3	10.5	8.1	33.5
1997	39.4	35.5	25.1	29.7	14.3	54.0	16.0	14.4	8.0	9.5	8.0	30.3
1999	41.3	35.3	27.1	29.8	14.2	54.3	16.3	13.9	8.3	9.1	8.0	30.7
Población												
1980	135.9	40.5	62.9	29.8	73.0	59.9	62.4	18.6	22.5	10.6	39.9	32.7
1990	200.2	48.3	121.7	41.4	78.5	65.4	93.4	22.5	45.0	15.3	48.4	40.4
1994	201.5	45.7	125.9	38.7	75.6	65.1	91.6	20.8	44.3	13.6	47.4	40.8
1997	203.8	43.5	125.7	36.5	78.2	63.0	88.8	19.0	42.2	12.3	46.6	37.6
1999	211.4	43.8	134.2	37.1	77.2	63.7	89.4	18.5	43.0	11.9	46.4	38.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Estimación correspondiente a 19 países de la región.

b/ Hogares y población en hogares en situación de pobreza. Incluye los hogares (población) en situación de indigencia.

c/ Hogares y población en hogares en situación de indigencia.

La evolución de la pobreza en el conjunto de América Latina se vio particularmente influida por el desempeño de algunos países, en atención ya sea a su mayor peso demográfico o a la magnitud de sus índices de privación. Así, por ejemplo, en Argentina, Brasil y Colombia se advirtió un repunte de la incidencia de la pobreza, mientras que en México y la mayoría de los países centroamericanos, entre los que destacan El Salvador y Panamá, hubo reducciones importantes.

En la región, la incidencia relativa de la pobreza rural sigue superando ampliamente a la de la urbana (54% y 30% de los hogares, respectivamente), pese a lo cual en 1999 los pobres urbanos ascendían a cerca de 134 millones y los rurales a 77 millones, debido a la proporción significativamente más alta de población residente en las áreas urbanas. Esta situación contrasta con la de la pobreza extrema, ya que la población que vive en esa situación es levemente menor en el área urbana (43 millones) que en la rural (46 millones).

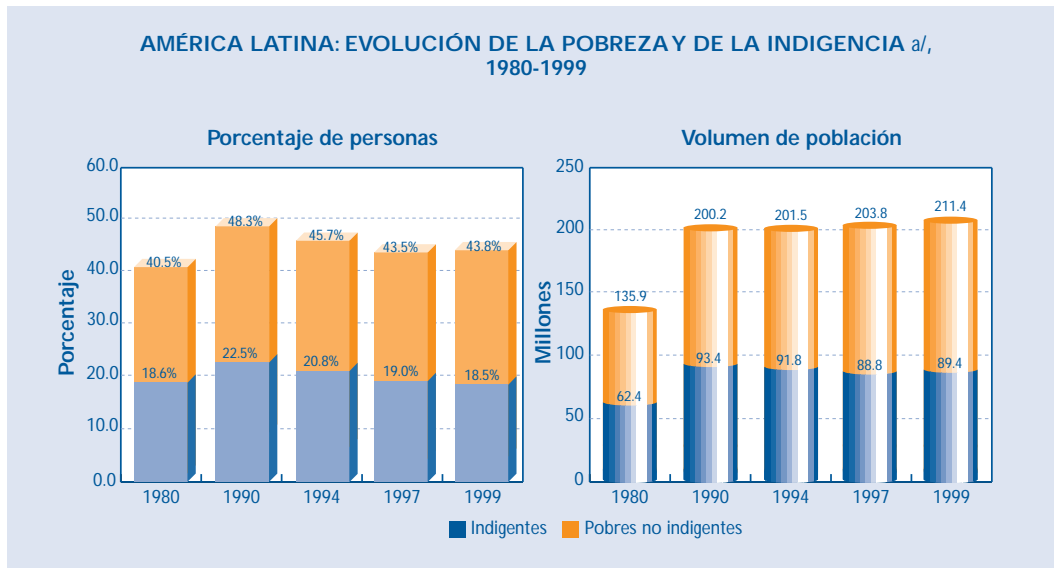
Ahora bien, una proyección de las cifras de América Latina al año 2000, con carácter conjetural y basada esencialmente en el comportamiento macroeconómico de los distintos países, indica que la pobreza podría mostrar una ligera tendencia a la baja. Para el 2000 el porcentaje de hogares pobres podría alcanzar a alrededor del 34%, mientras que los hogares en situación de indigencia se mantendrían en torno al 14% del total. En consecuencia, el nuevo decenio se iniciaría con un menor número de personas pobres que en 1999, rompiéndose así la tendencia creciente que predominó durante la década precedente. De esta forma, el número de pobres al año 2000 alcanzaría a alrededor de 210 millones de personas, y la indigencia afectaría a cerca de 87 millones.

El porcentaje de hogares pobres en América Latina estimado para 1999 fue inferior en casi 6 puntos porcentuales a los niveles de pobreza registrados en 1990. Esta tendencia des-

cedente también se hizo ostensible en la magnitud de la indigencia, que disminuyó paulatinamente desde el 18% de los hogares en 1990 hasta el 14% en 1999. Por su parte, la comparación con las cifras vigentes en 1980 revela que en 1999 se equipararon los porcentajes globales de pobreza e indigencia prevalentes en la región en ese entonces. No sucede lo mismo al trasladar el enfoque desde los hogares a las personas, ya que si bien durante la década de 1990 disminuyó el porcentaje de población pobre, éste no alcanzó a reducirse hasta los niveles prevalentes en 1980, sino que siguió excediéndolos en tres puntos porcentuales (43.8% comparado con 40.5%).

En estas circunstancias, los logros del último decenio en cuanto a reducción de la incidencia relativa de pobreza, tanto a nivel de los hogares como de las personas, no fueron suficientes para contrarrestar por completo el crecimiento demográfico de ese período, ya que de 1990 a 1999 la pobreza aumentó en 11 millones de personas. En cambio, en esos años sí se consiguió reducir la población en situación de indigencia o de pobreza extrema, en una magnitud cercana a los 4 millones de personas (véase el gráfico 1).

Gráfico 1



Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ Estimación correspondiente a 19 países de la región. Las cifras sobre la barra amarilla representan el número total de personas pobres (indigentes más pobres no indigentes).

La disminución del porcentaje de hogares pobres durante la década pasada se observó tanto en las áreas urbanas como en las rurales, y alcanzó a 5 puntos porcentuales en el primer caso y 4 puntos porcentuales en el segundo. De igual manera, los niveles de indigencia pasaron de 12% a 9% de los hogares en las áreas urbanas y de 34% a 31% en las áreas rurales. No obstante, desde la perspectiva del volumen de población en situación de pobreza, la evolución en estas dos áreas fue dispar. La pobreza urbana aumentó en 12.5 millones de personas, en tanto que en las áreas rurales el número de pobres se redujo en 1.3 millones.

Por otra parte, el análisis de la pobreza a nivel de países revela que, a pesar de la heterogénea evolución mostrada en el bienio 1997-1999, los años noventa se caracterizaron más bien por una tendencia generalizada a la reducción del porcentaje de hogares pobres. Así, durante el período 1990-1999, en la mayoría de los países de la región se produjo una disminución significativa de la incidencia de la pobreza. Hacia el final de la década, por lo menos 11 países en los que se logró reducir los niveles relativos de pobreza en relación con 1990, y ellos comprenden a la mayoría de la población pobre de la región.

Entre los países donde disminuyó la pobreza cabe resaltar los importantes logros alcanzados por Brasil, Chile y Panamá, en los que la proporción de hogares pobres se redujo en más de 10 puntos porcentuales. En países como Costa Rica, Guatemala y Uruguay también se constató un progreso destacable en la lucha contra la pobreza, con descensos en el porcentaje de hogares pobres que oscilan entre 5 y 10 puntos porcentuales. En contraste, resulta preocupante la situación de aquellos países en los que se registró un estancamiento o inclusive un retroceso en los indicadores de pobreza durante los años noventa. Al respecto, destaca sobre todo el caso de Venezuela, donde el porcentaje de hogares pobres pasó del 22% en 1981 al 34% en 1990, y actualmente alcanza a un 44%. En Ecuador, Colombia y Paraguay tampoco se consiguieron logros significativos en el alivio de la pobreza durante la última década.

La caracterización de los hogares pobres de América Latina revela, entre otros rasgos, que la mayoría de ellos habita en viviendas que carecen de acceso al agua potable y, en menor medida, con más de tres personas por cuarto. Además, son hogares con una alta tasa de dependencia demográfica y baja densidad ocupacional, donde el jefe generalmente posee menos de tres años de estudio y en algunos casos se encuentra desempleado. Los niños y jóvenes de hogares pobres suelen desenvolverse en entornos de bajo clima educacional, se incorporan tempranamente al trabajo, y muchos de ellos no estudian ni trabajan.

En términos absolutos, poco menos de 77 millones de habitantes de la región residen en viviendas hacinadas, condición que caracteriza al 29% de los pobres y al 6% de los no pobres. A su vez, 165 millones de personas, de las cuales más de 109 millones son pobres, no tienen acceso al agua potable. Asimismo, el 39% de los 130 millones de personas que viven en un hogar cuyo jefe tiene menos de tres años de estudio son pobres. Aunque la inasistencia a la escuela es una realidad cada vez menos común entre los grupos pobres y no pobres, los menores de 15 años que residen en hogares con bajo clima educacional ascienden a más de 83 millones, de los cuales un 74% es pobre.

Finalmente, cabe destacar que la reducción a la mitad de los actuales índices de pobreza extrema hacia el año 2015, objetivo central de la Declaración del Milenio, supone un esfuerzo importante pero realizable para muchos países de América Latina. En el contexto de las modalidades de desarrollo vigentes, el crecimiento económico debiera jugar un papel destacado en el logro de esta meta, que exigiría una tasa de aumento del producto per cápita no inferior al 2.3% promedio anual (que dado el crecimiento esperado de la población equivale a un aumento de 3.8% del producto interno bruto (PIB)). En la región en su conjunto, durante los años noventa cada punto porcentual de crecimiento redujo la tasa de pobreza extrema en 1.21%, pero en torno a este valor medio se constata una gran dispersión, dado que este efecto fue claramente mayor en las áreas urbanas que en las rurales, así como en los países con niveles de pobreza extrema inferiores al promedio regional en comparación con los de menor desarrollo relativo.

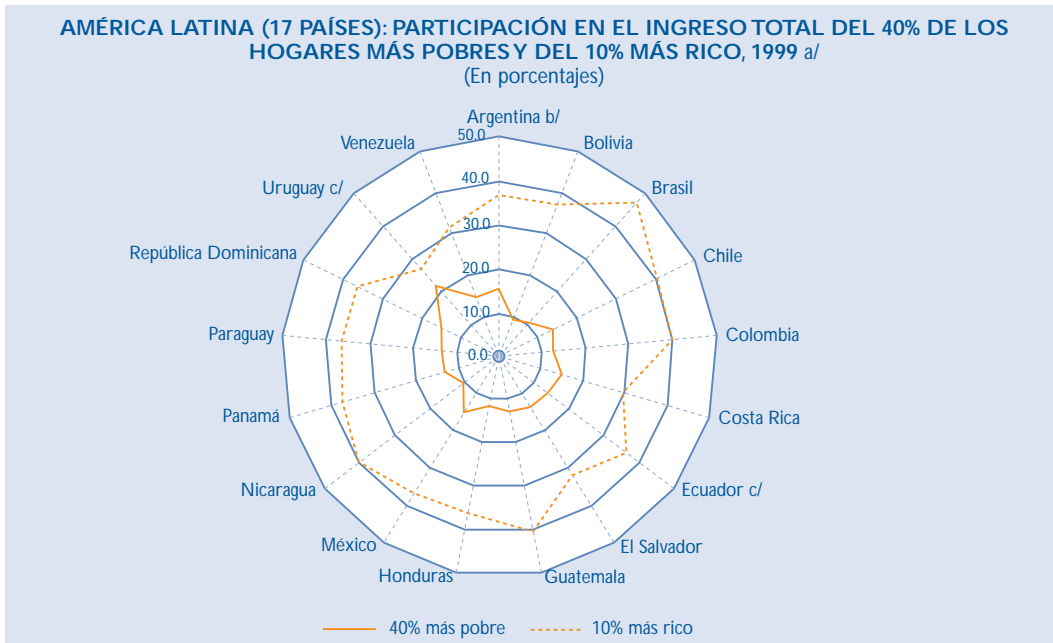
Ahora bien, un objetivo más ambicioso para la región consistiría en reducir a la mitad no sólo la extrema pobreza, sino también el porcentaje de personas pobres no indigentes. En términos agregados, el cumplimiento de esta meta se traduce en alcanzar tasas de crecimiento del producto por habitante en torno al 2.9% anual (4.5% del PIB), en promedio, durante los próximos tres quinquenios. Una cifra similar de crecimiento se requeriría para el grupo de países con mayor desarrollo relativo, en tanto que el resto de las economías de la región, en las que por cierto se observa una mayor presión demográfica, debieran hacer crecer su PIB per cápita a una tasa cercana al 4% anual.

Tendencias de la distribución del ingreso

A rededor de 1999, la desigual distribución de los ingresos continuaba siendo un rasgo sobresaliente de la estructura económica y social de América Latina, lo que le ha valido ser considerada la región menos equitativa del mundo. A su vez, las estimaciones más recientes permiten concluir que en la mayoría de los países esta situación no mejoró significativamente -e incluso en algunos empeoró- durante los años noventa.

La distribución del ingreso en América Latina resalta en el contexto internacional, especialmente por la abultada fracción de los ingresos totales que reúne el 10% de los hogares de mayores recursos. Salvo en Costa Rica y Uruguay,¹ este estrato recibe en todos los países de la región más del 30% de los ingresos, y en la mayoría de ellos ese porcentaje supera el 35%. En contraposición, la fracción del ingreso recibida por el 40% de los hogares más pobres es muy reducida, y se ubican en casi todos los países entre el 9% y el 15% de los ingresos totales, con excepción de Uruguay donde el grupo mencionado recibe cerca del 22% (véase el gráfico 2).

Gráfico 2



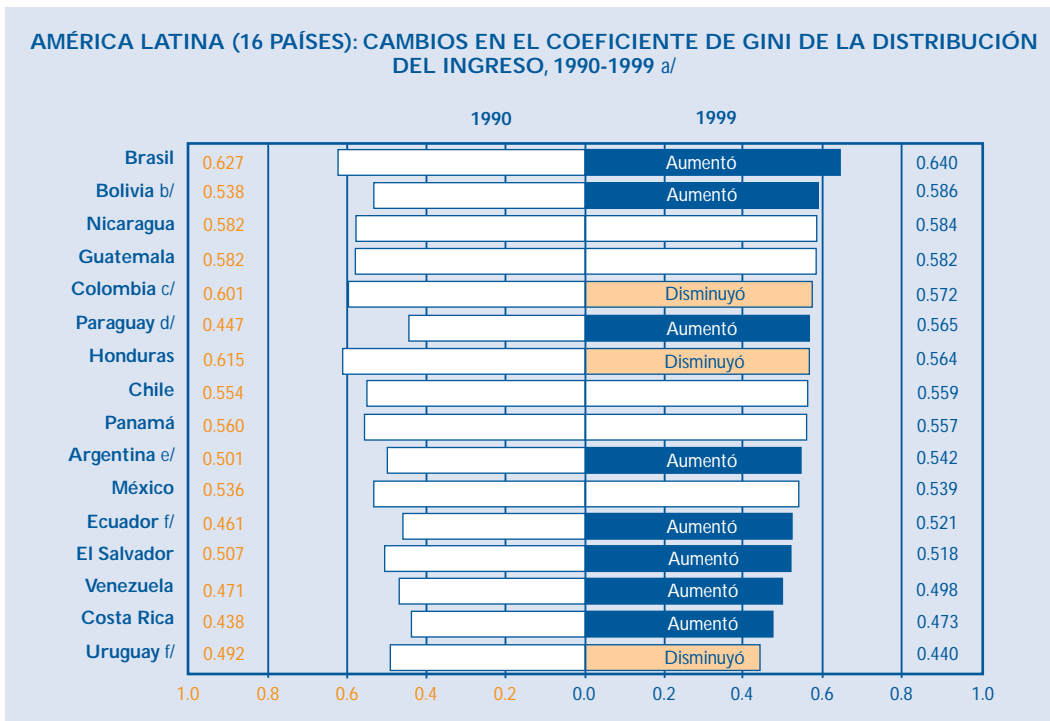
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ Hogares del conjunto del país ordenados según su ingreso per cápita.
b/ Gran Buenos Aires.
c/ Total urbano.

1 Cuba es, sin duda, otra excepción, pero para este país no existen estadísticas estrictamente comparables.

Por otra parte, la simple comparación entre los ingresos medios de los distintos grupos de hogares revela la gran dimensión que alcanza la falta de equidad en América Latina. Llama la atención en este sentido que en países como Bolivia, Brasil y Nicaragua, los ingresos per cápita del quintil más rico (20% de los hogares) superen más de 30 veces el ingreso del quintil más pobre. En el caso de la relación de ingresos entre el decil más rico y los cuatro deciles más pobres, la mayor distancia se presenta en Brasil, donde el decil más acomodado tiene un ingreso 32 veces superior al de la suma de los cuatro primeros deciles, al tiempo que el promedio simple de la región equivale a 19.3 veces.

A fines de la década de 1990, el ordenamiento de los países en función del coeficiente de Gini, calculado a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas, confirma que la mayor concentración al nivel nacional se presenta en Brasil, con un valor de 0.64. Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Paraguay, Chile, Panamá y Honduras son también países de alta desigualdad, con coeficientes de Gini entre 0.55 y 0.60. Algo más moderada es la concentración del ingreso en Argentina, México, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Venezuela, donde el coeficiente de Gini es igual o superior a 0.50. En tanto, Uruguay y Costa Rica vuelven a aparecer como los países con menor desigualdad, con índices por debajo de 0.48 (véase el gráfico 3).

Gráfico 3



Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Calculados a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas del conjunto del país. Las barras de color azul indican un aumento de la concentración del ingreso, en tanto que las barras de color naranja representan una disminución.

b/ En el año inicial (1989) comprende sólo ocho ciudades principales y El Alto.

c/ El año inicial corresponde a 1994.

d/ Área metropolitana de Asunción en 1990.

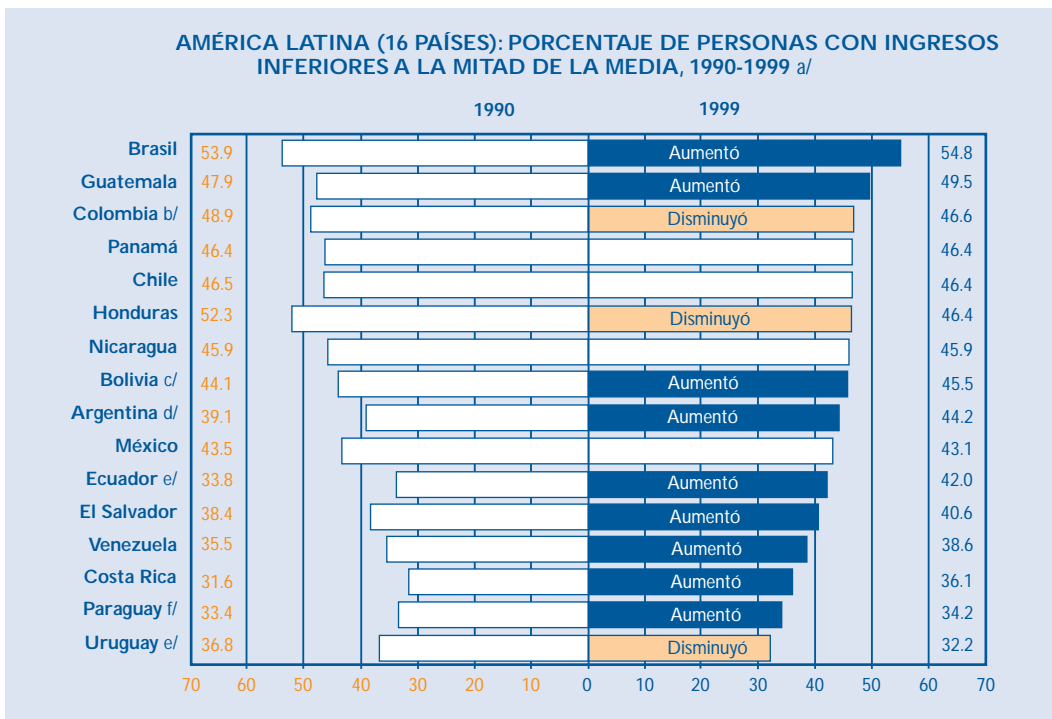
e/ Gran Buenos Aires.

f/ Total urbano.

Si se analiza el bienio 1997-1999, las variaciones del coeficiente de Gini y de los porcentajes de ingresos captados por los grupos poblacionales en los distintos países sustentan la apreciación de un cierto deterioro distributivo. Se observa que este índice aumentó en siete países (para los cuales se dispone de cifras de cobertura comparable) y disminuyó en cuatro, en tanto que los incrementos fueron generalmente mayores que las reducciones. Asimismo, la evolución de la distribución del ingreso en el conjunto del decenio reitera el carácter concentrador que distingue desde hace ya muchos años a las economías latinoamericanas. De 13 países con información a nivel nacional para los años extremos de la década, 8 experimentaron un aumento en la relación de ingresos entre el decil superior y el 40% más pobre, mientras que sólo 4 mostraron una reducción y en uno se mantuvo constante.

Un resultado similar se obtiene al examinar el porcentaje de población con ingresos per cápita inferiores al 50% del promedio, en el cual sólo dos países presentaron una reducción significativa; el resto evidenció un marcado aumento, un aumento moderado o bien una mantención. Conforme a este indicador, la gran mayoría de los países de América Latina se ubican en un rango intermedio (entre 40% y 50%) según la proporción de población con ingresos inferiores a la mitad del promedio. Uruguay, Costa Rica, Venezuela y República Dominicana conforman el grupo de menor concentración, donde el porcentaje analizado es inferior al 40%, mientras que Brasil es el único caso en que más de la mitad de la población recibe ingresos bajo el 50% de la media (véase el gráfico 4).

Gráfico 4



Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Las barras de color azul indican un aumento de la concentración del ingreso, en tanto que las barras de color naranja representan una disminución.

b/ El año inicial corresponde a 1994.

c/ En el año inicial (1989) comprende sólo ocho ciudades principales y El Alto.

d/ Gran Buenos Aires.

e/ Total urbano.

f/ Área metropolitana de Asunción en 1990.

Los estratos medios, representados por el 50% de los hogares que se ubica entre el 40% más pobre y el 10% de más altos ingresos, muestran variaciones que no son asimilables por una regla general a la suerte que corrieron los grupos extremos. En al menos siete países, las variaciones en participación -tanto al alza como a la baja- no excedieron los dos puntos porcentuales, y sólo en dos casos se registraron pérdidas mayores a los tres puntos porcentuales. En este sentido, la evolución del ingreso relativo de los grupos medios pone en evidencia que en varios países disponen de mecanismos más poderosos que los de los grupos pobres para defender su cuota de participación en el ingreso total.

En síntesis, pese a que en los años noventa muchos países lograron expandir su economía y aumentar significativamente el gasto social, y a la constante y justificada preocupación por la distribución, la realidad es que en general América Latina no ha conseguido en los últimos años modificar sustancialmente y de manera positiva la distribución del ingreso. Más aún, las opiniones tienden a coincidir en que en el presente tampoco se advierten signos alentadores en este sentido, que permitan suponer variaciones importantes en la situación descrita al corto y mediano plazo. En efecto, de 17 países analizados, sólo 2 finalizaron la década con resultados que denotan avances en materia de desigualdad distributiva. La evidencia incluso confirma que aun en aquellos países que lograron mantener un alto ritmo de crecimiento sostenido, Chile entre otros, la distribución del ingreso mostró una enorme resistencia a alterar su elevado grado de concentración, y las disparidades en materia de ingresos persistieron como un rasgo no deseado de la estructura económica y social prevaleciente.

Dinámica del empleo y el desempleo

En un entorno demográfico caracterizado por el marcado aumento (2.4% al año) de la población en edad de trabajar (PET) y la creciente participación laboral de las mujeres, la población económicamente activa (PEA) mostró un crecimiento aún mayor, que promedió el 2.6% anual. Así, la fuerza de trabajo de la región, constituida a fines de los años noventa por cerca de 212 millones de personas, creció en 44 millones en el último decenio, llegando a representar en 1999 un 42% de la población total, tres puntos porcentuales por encima de lo registrado en 1990 (véase el gráfico 5).

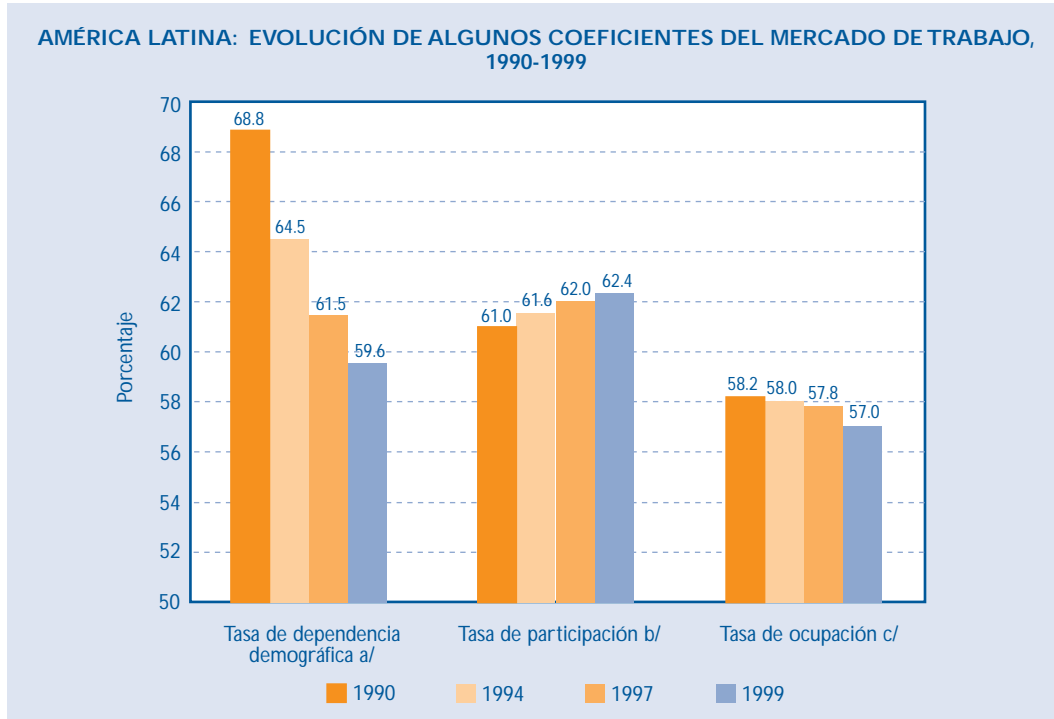
En términos absolutos, el crecimiento de la oferta laboral se concentró sobre todo en las áreas urbanas. De los 44 millones de personas que se integraron a la PEA durante la década, el 93% reside en estas áreas, lo que ha conducido a que más de tres cuartas partes de la fuerza de trabajo de la región (76.3%) se localice actualmente en las ciudades, lo que se compara con un 72% en 1990.

Por otra parte, durante los años noventa se fueron modificando algunas características de la población ocupada de América Latina, lo que se refleja, por ejemplo, en la mayor incidencia de determinados grupos de edad y niveles educativos, en su inserción en los diferentes sectores productivos, o bien en la creciente incorporación de las mujeres a ciertas actividades laborales. A su vez, los cambios en la estructura ocupacional también han repercutido en la calidad del empleo y el grado de informalidad de la economía.

Tal como lo sugiere la creciente proporción de empleos de baja productividad, la precariedad de las ocupaciones se acentuó durante los años noventa. Desde 1990, la proporción de empleos informales en el área urbana se ha elevado en más de cinco puntos porcentua-

les, lo que equivale a un crecimiento del sector informal cercano a los 20 millones de personas. Más aún, la proporción de los nuevos empleos absorbidos por el sector informal pasó del 67.3% en el período 1990-1994 al 70.7% en el de 1997-1999.

Gráfico 5



Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la División de Población - Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Relación entre población menor de 15 años de edad y mayor de 64 y población de 15 a 64 años.

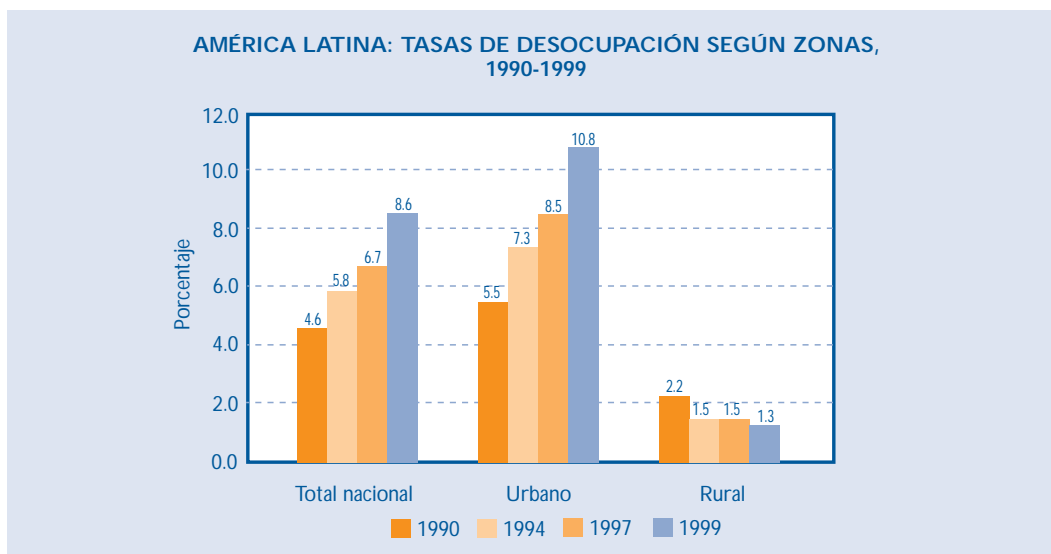
b/ Relación entre población económicamente activa y población en edad de trabajar (ambas de 15 y más años de edad).

c/ Relación entre población ocupada y población en edad de trabajar (ambas de 15 años y más).

El sostenido aumento de la población activa ejerció gran presión sobre la necesidad de crear nuevos empleos. En ese sentido, la demanda de trabajo no logró responder adecuadamente al importante crecimiento registrado por la fuerza laboral. A consecuencia de ello, en el decenio de 1990 hubo un considerable aumento del número de desempleados, a razón de un 10.1% anual concentrado sobre todo en el período 1997-1999. Durante la década, más de 10 millones de personas engrosaron las filas de la desocupación, la que en 1999 alcanzó al 8.6% de la fuerza de trabajo a nivel nacional (poco más de 18 millones de personas), en contraste con el 4.6% de 1990. Este fenómeno afectó particularmente a la población urbana, al punto que entre 1990 y 1999 la tasa de desempleo en esas zonas se elevó de 5.5% a 10.8% en el conjunto de la región² (véase el gráfico 6).

² Estas cifras de desempleo agregadas sobre América Latina están basadas en las encuestas nacionales utilizadas para elaborar los diversos capítulos de este *Panorama social*, y no coinciden necesariamente con las registradas en otras publicaciones de la CEPAL. Para una explicación de las discrepancias véase el recuadro III.1 del *Panorama social*.

Gráfico 6



Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la División de Población-Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.

El aumento del desempleo a lo largo de la década pasada no fue generalizado en la región, y afectó mayormente a los países de América del Sur. En Argentina, Brasil y Colombia, los tres países sudamericanos de mayor tamaño, el desempleo creció persistentemente. Este fenómeno también mostró una tendencia al alza en Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En México y en la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe predominó, por el contrario, una tendencia a la reducción de la desocupación. En los países centroamericanos el desempleo tendió a reducirse (El Salvador, Honduras y Nicaragua) o se mantuvo en niveles relativamente moderados (Costa Rica). Esta tendencia también predominó en el grupo de países insulares del Caribe (Barbados, Cuba, República Dominicana y Trinidad y Tabago), aunque los niveles de desempleo en estos países, con excepción de Cuba, se mantuvieron en tasas más elevadas que en el grupo anterior, cercanas o superiores a 10%.

A la falta de dinamismo del mercado de trabajo han contribuido tanto la reducción del papel del Estado en la generación directa de puestos de trabajo como la reestructuración del sistema productivo, particularmente en los sectores primario y secundario. Éstos han registrado una pérdida de participación en el empleo, en tanto que la generación de nuevos puestos de trabajo ha tendido a concentrarse en actividades terciarias, cuya progresiva modernización sobre la base del uso intensivo de nuevas tecnologías hace prever una capacidad cada vez menor de generación de puestos de trabajo en el sector estructurado o formal. Además, la reducción salarial ha tendido a perder peso como factor primario de ajuste del mercado de trabajo, y la contracción de la actividad económica tiende a expresarse cada vez más en destrucción de empleos y caída de la demanda de mano de obra, y menos en reducción de los salarios reales.

En cuanto a las características del desempleo, éste sigue afectando desproporcionadamente a los estratos de menores ingresos: en 1999, la tasa de desempleo urbano en el 20% de hogares más pobres de la región (22.3%) duplicó con creces la tasa global (10.6%), por

lo que la desocupación sigue siendo uno de los principales determinantes de la pobreza y la desigualdad. El aumento del desempleo hacia el final de la década también afectó crecientemente a los sectores medios. En los quintiles 3 y 4 de ingreso de los hogares, la tasa de desempleo se elevó en más de 3 puntos porcentuales, y en los países más afectados por la desocupación en ese período cerca de 1 de cada 10 personas activas en esos quintiles están desempleadas.

Asimismo, los antecedentes disponibles para seis países de la región en que aumentó el desempleo durante la segunda mitad de la década pasada denotan una prolongación del tiempo medio de desocupación, de 4.4 a 5.3 meses como promedio, a lo que se agregan algunas evidencias de las pérdidas salariales que afectan a las personas que se reintegran al empleo luego de haber pasado por un episodio de desocupación. Estas pérdidas de ingreso actuarían como un mecanismo secundario de ajuste en mercados de trabajo caracterizados por una creciente flexibilización de la contratación y despido de mano de obra. Las estimaciones para el caso de Uruguay indican que tales pérdidas habrían representado entre 23% y 34% del salario anterior, y fueron mayores en la segunda mitad de la década a medida que aumentó el desempleo urbano.

Es probable que el alto nivel de desempleo actual en la región tienda a mantenerse, dado que se prevé un crecimiento en el año 2001 cercano al 2%, lo que representa una caída sustancial respecto del nivel algo superior a 4% alcanzado en el año 2000. A lo anterior se agregan indicios de la persistencia de un factor de carácter estructural en el desempleo y una mayor lentitud en la recuperación de los niveles de desocupación después de períodos de contracción del crecimiento. La mayor volatilidad de éste, unida a la vulnerabilidad de los estratos medios y bajos en períodos de destrucción y lenta recuperación de los niveles de empleo, pone de relieve la necesidad de establecer mecanismos de protección que cubran ese riesgo.

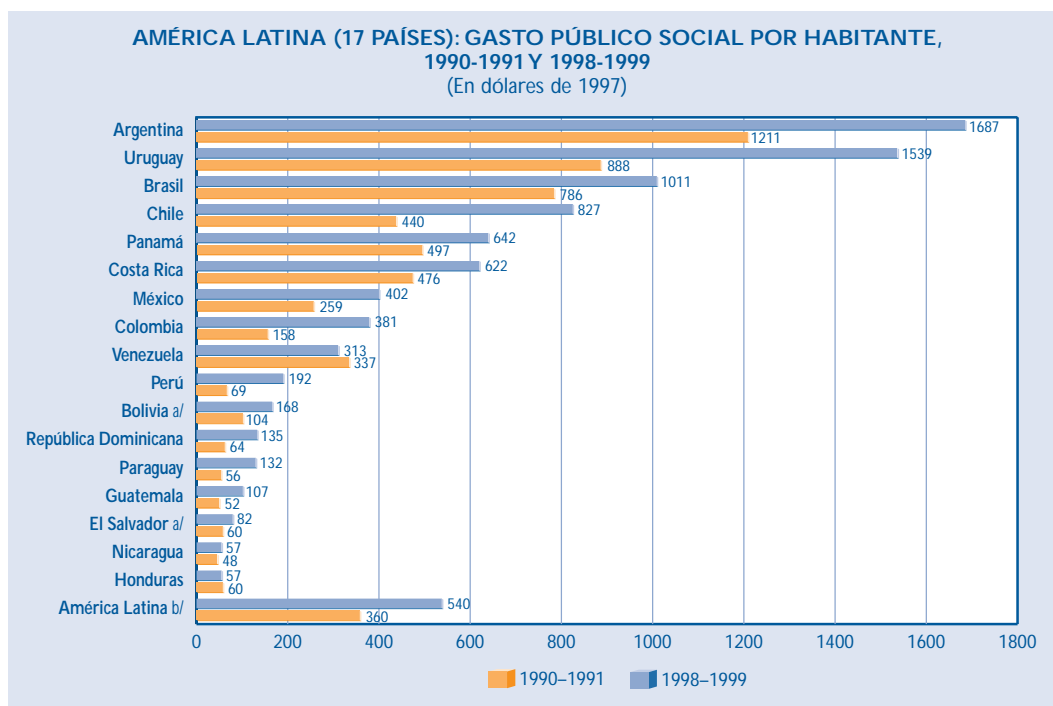
Gasto social en América Latina: Balance de una década

Durante los años noventa, el mayor esfuerzo que realizaron los países latinoamericanos por asignar más recursos públicos a los sectores sociales se tradujo en un considerable aumento del gasto social por habitante, de alrededor de 50%. De un promedio de 360 dólares per cápita al principio de la década, el gasto social se elevó a 540 dólares anuales por habitante (véase el gráfico 7).

La mayoría de los países elevaron los recursos por habitante destinados a los sectores sociales, como consecuencia de la recuperación del crecimiento económico y del aumento de la prioridad fiscal otorgada al gasto social (porcentaje del gasto público total que se destina a los sectores sociales). Ello permitió que en la región la fracción del PIB destinada al área social creciera de 10.4% a 13.1% (véase el cuadro 2).

En la mayoría de los países el gasto social se expandió a un ritmo más elevado durante la primera mitad de la década (30%), y aunque en la segunda se mantuvo la tendencia al aumento, éste fue menor (16%). Esta evolución estuvo relacionada con el crecimiento económico: la tasa anual de crecimiento del PIB en América Latina fue de 4.1% hasta 1995, y se redujo a 2.5% en el quinquenio siguiente.

Gráfico 7



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

a/ La cifra inicial corresponde al promedio 1994-1995.

b/ Promedio simple de los países, excluidos Bolivia y El Salvador.

Cuadro 2

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB					
País	1990-1991	1992-1993	1994-1995	1996-1997	1998-1999
América Latina a/	10.4	11.4	12.1	12.5	13.1
Argentina	17.7	19.2	21.0	19.8	20.5
Bolivia	12.4	14.6	16.1
Brasil b/	18.1	17.7	20.0	19.7	21.0
Chile	13.0	13.6	13.6	14.4	16.0
Colombia c/	8.0	9.4	11.5	15.3	15.0
Costa Rica	15.7	15.3	16.0	17.0	16.8
El Salvador	3.3	3.8	4.3
Guatemala	3.4	4.1	4.1	4.2	6.2
Honduras	7.9	8.5	7.7	7.2	7.4
México	6.5	8.1	8.8	8.5	9.1
Nicaragua	10.8	10.6	12.6	11.0	12.7
Panamá	18.6	19.5	19.8	20.9	19.4
Paraguay	3.1	6.2	7.0	8.0	7.4
Perú	3.3	4.8	5.8	6.1	6.8
R. Dominicana	4.3	5.9	6.1	6.0	6.6
Uruguay	16.8	18.9	20.3	20.9	22.8
Venezuela	9.0	8.9	7.6	8.3	8.6

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

a/ Promedio simple de los países, excluidos Bolivia y El Salvador. El promedio para América Latina si se incluyen estos países en los bienios 1994-1995, 1996-1997 y 1998-1999 es de 11.6%, 12.1% y 12.7%, respectivamente.

b/ Estimación del gasto social consolidado.

c/ A partir de 1994 la cifras se calcularon utilizando la nueva serie de producto interno bruto a precios corrientes.

El incremento del gasto social durante el decenio pasado no sólo estuvo asociado a la dinámica del crecimiento económico, sino también a la preocupación cada vez mayor de los países por acrecentarlo a través del mayor volumen de los recursos captados por el Estado y de su reorientación en favor de los sectores sociales. La prioridad fiscal del gasto social se elevó de cerca de 42% a casi 48% del gasto público total a lo largo de la década.

Aunque entre los países que incrementaron el gasto social se encuentran varios con bajo nivel de gasto, las diferencias entre los 17 países examinados sólo disminuyeron levemente, manteniéndose la enorme heterogeneidad prevaleciente a comienzos de la década. Un grupo de países, entre los que se hallan los de mayor gasto social por habitante (Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá y Uruguay), siguieron destinando a lo social una proporción del PIB superior a lo esperado de acuerdo a su nivel de ingreso por habitante. Otro grupo, integrado por países de nivel bajo o muy bajo de gasto social per cápita (El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana), destina a los sectores sociales una fracción de su producto muy inferior al patrón medio regional. La excepción la constituye Colombia, que entre los bienios 1992-1993 y 1996-1997 duplicó con creces su gasto social per cápita, con lo que elevó notablemente su prioridad macroeconómica y pasó de estar muy por debajo del patrón medio, dado su ingreso per cápita, a sobrepasarlo.

Si bien los logros en materia de incremento del gasto social durante el decenio fueron considerables, los niveles alcanzados resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de amplios sectores de la población. La mayoría de los países presentan, además, importantes márgenes para expandir la base de ingresos públicos y reorientar el gasto a fines sociales. No obstante, en varios de ellos la reducida base de los ingresos públicos es el principal factor que sigue limitando la capacidad de asignar mayores proporciones del gasto público a lo social. Con todo, hay países en la región que asignan una alta proporción de su producto al gasto social -comparable a la que destinan a ese efecto varios países industrializados-, y su principal desafío es proteger el gasto ante las coyunturas adversas y aumentar su eficacia y eficiencia.

La experiencia regional no sólo revela la insuficiencia del gasto tradicionalmente asignado a los sectores sociales, sino también la vulnerabilidad de las políticas sociales durante los períodos de crisis, como consecuencia de que el gasto social ha tendido a expandirse cuando han existido más recursos presupuestarios para su financiamiento y a contraerse en los episodios de empeoramiento de la situación financiera del sector público, la mayoría de las veces como secuela de la reducción del crecimiento económico, lo que habitualmente se denomina "comportamiento procíclico". Por ello, un objetivo prioritario de las políticas públicas es evitar o moderar ese comportamiento en las coyunturas adversas, sobre todo proteger el gasto que favorece a los sectores más pobres, fortaleciendo las prácticas que permiten consolidarlo y darle estabilidad.

En esta materia ha habido un avance reciente en la región. En efecto, el examen de la evolución del gasto público total y del gasto público social ante la caída del PIB en seis países que experimentaron una contracción de éste en 1999 (Argentina, Chile, Colombia, Honduras, Uruguay y Venezuela) permite constatar que los recursos destinados a los sectores sociales resultaron protegidos. Con excepción de Venezuela, en todos los países considerados el gasto total del sector público creció en el período 1998-1999, a pesar de la caída del PIB. Más aún, en Venezuela este gasto se recuperó con rapidez entre 1999 y 2000, para crecer prácticamente a las mismas tasas previas a la crisis.

Además de la importancia de estabilizar el financiamiento del gasto social a fin de evitar las severas consecuencias adversas de su disminución en las fases recesivas del ciclo económico, se ha señalado la necesidad de mejorar la focalización y el efecto positivo del gasto público social, especialmente del orientado a poblaciones vulnerables o en situación de pobreza, reasignándolo a los componentes de mayor impacto progresivo en la distribución del ingreso.

El examen de los cambios de los distintos componentes del gasto social a lo largo de la década revela que en el conjunto de la región los recursos destinados a educación, salud y nutrición se elevaron prácticamente en la misma magnitud que los destinados a la seguridad social, que tiene un menor impacto redistributivo que los primeros, puesto que beneficia relativamente más a los estratos medios y altos. Entre 1990-1991 y 1998-1999 los gastos en capital humano crecieron en 1.3 puntos porcentuales del PIB, mientras que los destinados a la seguridad social se incrementaron en 1.2 puntos porcentuales. Los recursos destinados a vivienda, agua y saneamiento siguieron teniendo una prioridad menor, y como promedio aumentaron de 1.2% a 1.4% del PIB (véase el cuadro 3).

Cuadro 3

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): GASTO SOCIAL POR SECTORES EN LOS AÑOS NOVENTA COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1990-1991 Y 1998-1999 ^{a/}								
País	Educación		Salud y nutrición		Seguridad social		Vivienda, agua, saneamiento y otros	
	1990-1991	1998-1999	1990-1991	1998-1999	1990-1991	1998-1999	1990-1991	1998-1999
	(Porcentajes)							
Promedio simple	2.9	3.9	2.6	2.9	3.6	4.8	1.2	1.4
Argentina	3.3	4.7	4.0	4.6	8.3	8.7	2.1	2.5
Brasil ^{b/}	3.7	3.9	3.6	3.4	8.1	11.5	2.7	2.2
Chile	2.6	3.9	2.1	2.8	7.0	7.5	1.4	1.8
Colombia	3.2	4.7	1.2	4.1	3.0	5.2	0.6	1.0
Costa Rica	3.8	4.4	5.0	4.9	4.9	5.9	2.1	1.8
Guatemala	1.6	2.3	0.9	1.3	0.8	0.9	0.1	1.7
Honduras	4.3	4.1	2.6	2.0	0.1	0.0	0.9	1.3
México	2.6	3.8	3.0	2.1	0.3	2.3	0.7	0.9
Nicaragua	5.0	5.7	4.6	4.5	0.0	0.0	1.3	2.5
Panamá	4.7	6.0	6.1	6.8	5.9	5.4	2.0	1.3
Paraguay	1.2	3.7	0.3	1.1	1.2	2.6	0.4	0.1
Perú	1.3	2.2	0.7	1.3	1.1	2.8	0.1	0.5
República Dominicana	1.2	2.8	1.0	1.5	0.4	0.8	1.8	1.5
Uruguay	2.5	3.3	2.9	2.8	11.2	16.3	0.3	0.5
Venezuela	3.5	3.8	1.6	1.4	2.4	2.6	1.6	0.8

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

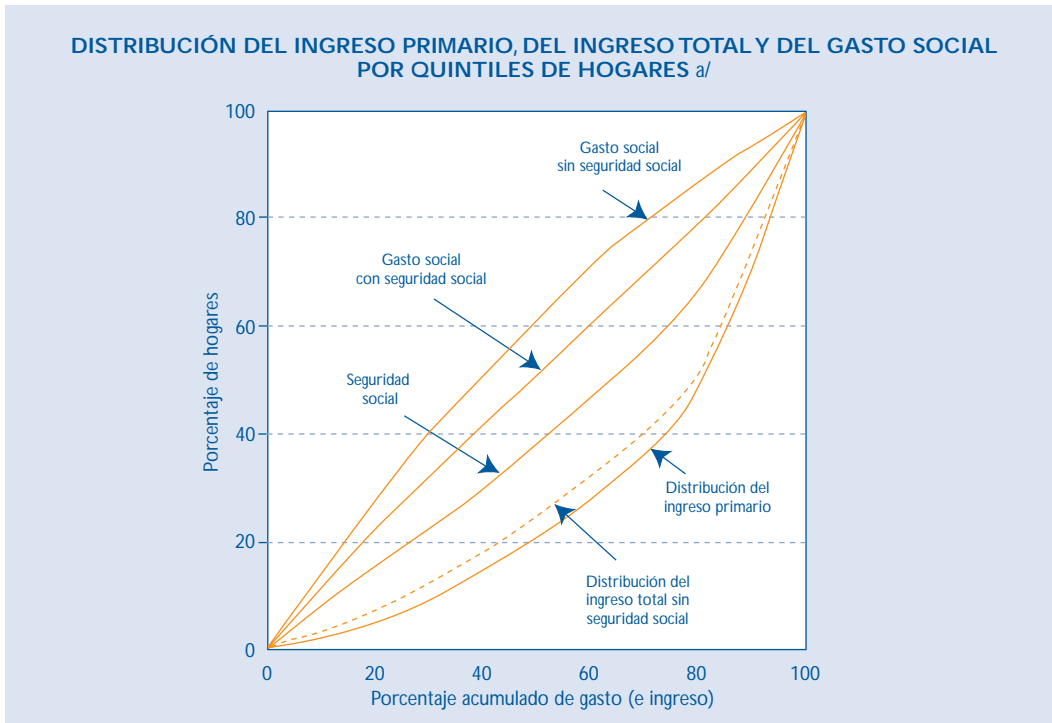
a/ Excluye a Bolivia y El Salvador. Para estos países sólo se dispone de información a partir de 1995 y 1994, respectivamente.

b/ Estimación del gasto social consolidado. El promedio 1998-1999 corresponde a la cifra de 1998.

Los datos sobre un conjunto de ocho países de la región indican que los gastos más progresivos -aquellos que benefician relativamente más a los hogares más pobres- correspon-

den a los efectuados en la educación primaria y secundaria, seguidos de los gastos en salud y nutrición, y luego en vivienda y servicios básicos (agua y saneamiento). A diferencia de lo que se observaba en estudios similares realizados en los años setenta y a comienzos de los años ochenta, el gasto en educación secundaria aparece con un grado de progresividad relativamente elevado, lo que se explica por la notable expansión de la cobertura de la educación secundaria (véase el gráfico 8).

Gráfico 8



Fuente: Cuadro IV.4

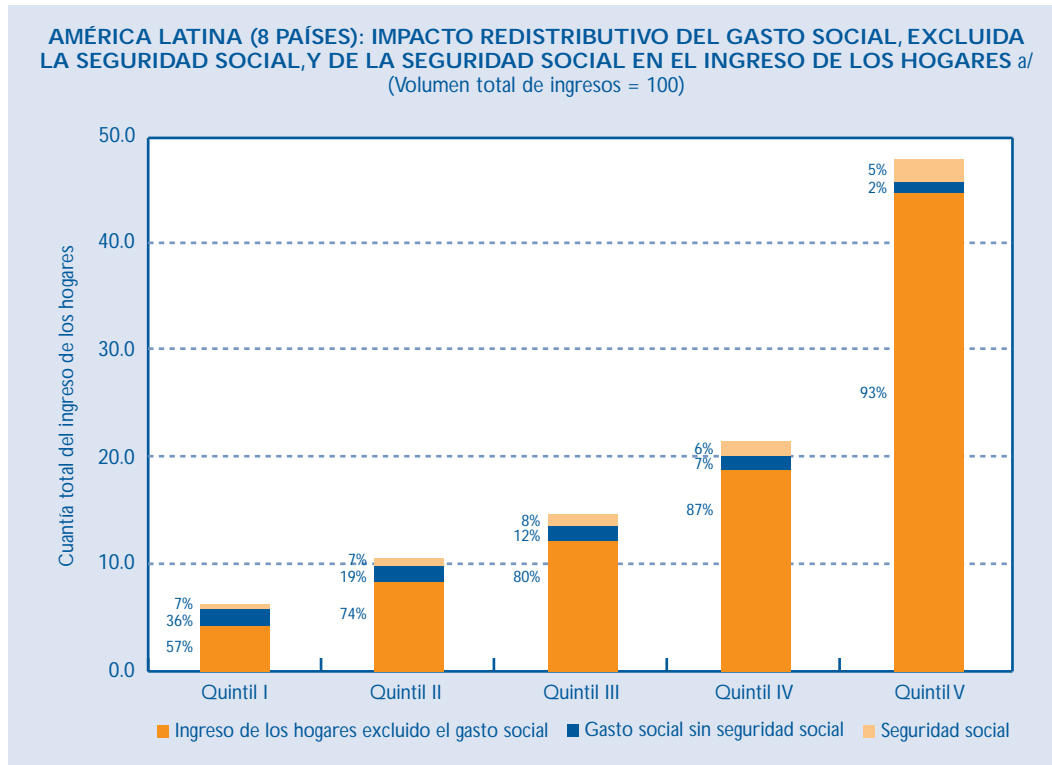
a/ Promedio simple de datos correspondientes a ocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.

En su conjunto, el gasto social es altamente redistributivo en todos los países, sobre todo si se excluye la seguridad social. En efecto, descontada ésta, el 20% de hogares de menores ingresos recibe 28% de los recursos públicos, en tanto que el 20% de mayores ingresos recibe sólo 12% de esos recursos. Así, el 20% de hogares más pobres recibe una fracción del gasto social -excluida la seguridad social- que en promedio sextuplica su participación en la distribución del ingreso primario (28.2% del gasto social en comparación con 4.8% del total del ingreso primario). En el 20% de hogares más ricos esta relación se invierte, y representa sólo la cuarta parte de su participación en la distribución del ingreso (12.4% del gasto social en comparación con 50.7% del total del ingreso primario).

El efecto redistributivo neto del gasto público social se desprende de la importancia relativa de las transferencias monetarias y de bienes y servicios gratuitos o subsidiados dentro del ingreso total de los hogares de cada estrato. Ésta es mucho mayor en los estratos de

menores ingresos, por cuanto entre ellos representa el 43% de éstos; en cambio, en los estratos de mayores ingresos (quintiles cuarto y quinto) representa entre un 13% y un 7%, respectivamente (véase el gráfico 9). Pese a la baja repercusión del gasto social en los ingresos del estrato más rico, éste involucra un volumen cuantioso de recursos, que en varios de los países analizados supera e incluso duplica los destinados a los hogares del estrato más pobre, lo que se explica por la cuantía de las transferencias de la seguridad social.

Gráfico 9



Fuente: Cuadro IV.5.

a/ Promedio simple de datos correspondientes a ocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.

Durante los años noventa el aumento del gasto social tuvo un efecto redistributivo relativamente mayor en los países de ingreso por habitante más bajo, debido al marcado incremento del gasto público en educación y salud. En los países de más alto ingreso por habitante, en cambio, el impacto redistributivo fue menor debido a que cerca de 50% del incremento del gasto público social correspondió a seguridad social, su componente menos progresivo.

Agenda social : Las familias en América Latina

En la mayoría de los análisis y propuestas de políticas se otorga a la institución familiar un papel central, tanto para explicar comportamientos individuales como para poner en marcha medidas vinculadas a temas tan variados como el desempleo, la drogadicción y la violencia. Al mismo tiempo, se hace especial hincapié en los cambios experimentados por las estructuras tradicionales de la familia como factores asociados a la desintegración social. Llama la atención, sin embargo, que la extrema importancia que se asigna a la familia en el discurso de los gobiernos, las instituciones civiles y religiosas y las personas vaya aparejada con el escaso interés que se le otorga en las políticas públicas.

En vista de lo anterior, en esta oportunidad en el capítulo sobre la agenda social se ofrece un diagnóstico de las familias de la región, elaborado sobre la base de las respuestas proporcionadas por los organismos nacionales oficiales encargados de la familia a un cuestionario que les hizo llegar la CEPAL y de la información estadística proveniente de las encuestas de hogares de los países de la región. En el diagnóstico hay consenso en cuanto a que las familias en la región se han visto enfrentadas a grandes cambios: transformaciones demográficas, aumento de los hogares con jefatura femenina y creciente participación de las mujeres en el mercado laboral.

También ha habido modificaciones relacionadas con el ámbito simbólico, que se manifiestan en nuevos modelos de familia y estilos de relación familiar. Las tres dimensiones de la definición clásica de familia -sexualidad, procreación y convivencia- han experimentado transformaciones y evolucionado en direcciones divergentes, generando una creciente multiplicidad de formas de familia y de convivencia.³ Asimismo, al incrementarse la frecuencia de separaciones y divorcios las familias reconstituidas constituyen un nuevo y creciente fenómeno en la región, aunque las familias nucleares siguen predominando tanto en las zonas urbanas como rurales.

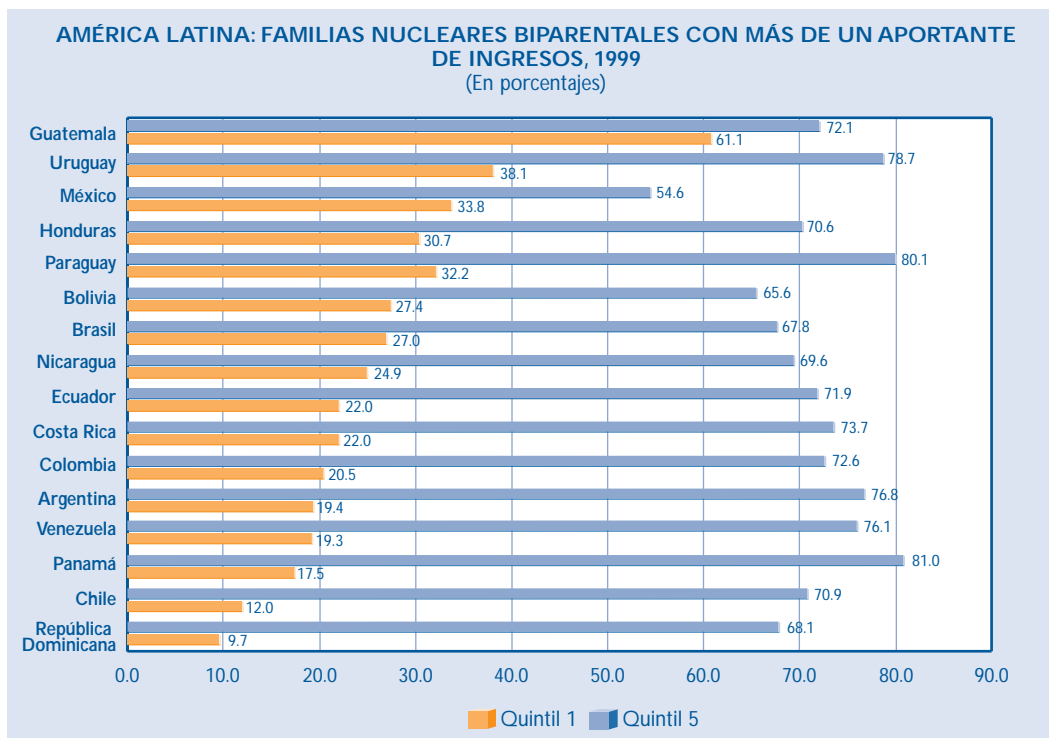
Entre los principales cambios demográficos se observa que el tamaño medio de la familia se ha reducido, debido a la declinación del número de hijos y al mayor espaciamiento entre ellos. A esto se agrega la disminución de los hogares multigeneracionales y el aumento de los unipersonales, así como el efecto de las migraciones por diversas causas (económicas, conflictos armados y otras). Entre los años ochenta y noventa, el tamaño promedio de los hogares disminuyó en todos los países de la región. La heterogeneidad entre países obedece al hecho de que se encuentran en distintas etapas de la transición demográfica. Uruguay es el país que registra el menor tamaño promedio por hogar: 3.2 personas en 1999; Guatemala y Honduras, con 4.8, y Nicaragua con 4.9 personas promedio por hogar, se sitúan en el extremo opuesto.

Por otra parte, la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha continuado a un ritmo ascendente. En diversos estudios se ha mostrado que en el último decenio han sido las mujeres que se encuentran en las etapas del ciclo reproductivo familiar, es decir, cuando tienen a su cargo hijos pequeños, las que se han venido incorporando en mayor proporción. Asimismo, el aporte económico de las mujeres que trabajan contribuye a que una proporción importante de los hogares situados sobre la línea de pobreza puedan mantenerse en esa posición.

3 Los tipos de hogares y familias que se distinguen en este trabajo son: **hogares unipersonales** (una sola persona); **hogares sin núcleo** (aquellos donde no existe un núcleo conyugal o una relación padre/madre-hijo/hija, aunque puede haber otras relaciones de parentesco). Entre los tipos de familias se distinguen las **nucleares** (padre o madre o ambos, con o sin hijos), **extendidas** (padre o madre o ambos, con o sin hijos y otros parientes) y **compuestas** (padre o madre o ambos, con o sin hijos, con o sin otros parientes y otros no parientes). Las familias pueden ser **monoparentales** (con sólo un padre, habitualmente la madre) o **biparentales** (con ambos padres); también pueden tener hijos o no tenerlos.

El aporte que hace al ingreso familiar un perceptor adicional establece la diferencia entre los hogares del quintil más pobre y los del más rico (véase el gráfico 10). Los hogares con más de un aportante corresponden con mayor frecuencia a las familias en que ambos padres están presentes, así como a las extensas y las compuestas. En la década de 1990 en casi todos los países se aprecia un aumento de los hogares con más de un aportante, tanto en los quintiles más pobres como menos pobres.

Gráfico 10



Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Las instituciones sociales encargadas de diseñar y ejecutar las políticas referidas a las familias son muy diversas en la región, e incluyen desde ministerios, pasando por secretarías, subsecretarías y consejos adscritos a diversas instancias; en algunos países, no hay una institución responsable de esta área. También existen diferencias en cuanto a la concepción de familia entre las entidades gubernamentales encargadas del tema y el resto de la institucionalidad estatal.

Entre los principales cambios que las autoridades gubernamentales que se ocupan de las familias perciben en la región, figura la transformación del papel de las mujeres en el hogar, sea por su ingreso al mercado laboral o por el aumento de los hogares con jefatura femenina. También se destacan los cambios demográficos, y los derivados de procesos culturales y de modernización. En sus respuestas a estas situaciones, las autoridades muestran diferencias entre visiones más tradicionales y más modernas de la familia.

Existe consenso entre los encargados del tema de la familia respecto de los principales proble-

mas que ésta enfrenta. En 16 de 18 países, las autoridades coinciden en que la violencia intrafamiliar es uno de los más graves. En segundo lugar, las entidades de 12 de los 18 países encuestados mencionan el desempleo, que se asocia también a la pobreza, la crisis económica y el deterioro de las condiciones materiales de vida de las familias, junto con la falta de servicios de salud y educación. Finalmente, se señala la importancia de la desintegración familiar.

Al comenzar este nuevo siglo, las políticas dirigidas a las familias carecen aún de una definición específica, de un campo bien delimitado y de una legitimidad evidente. Su diseño enfrenta diversos escollos, sobre todo las tensiones entre intereses familiares y personales, así como la dificultad para equilibrar la autonomía y la libertad individuales con las responsabilidades familiares. El énfasis en la dimensión legal de los programas apuntaría a una nueva visión de familia como instancia de derechos. De esta forma, en la mayoría de los países de la región, más que políticas familiares explícitas, existen intervenciones dispersas y no coordinadas mediante programas y proyectos de salud, educación, lucha contra la pobreza y prevención y erradicación de la violencia, entre muchos otros objetivos. En la amplia gama de políticas sobre la familia es posible identificar iniciativas y proyectos interesantes, tales como los que apuntan a enfrentar los cambios experimentados por las familias y los nuevos papeles sociales de hombres y mujeres en el hogar.

La diversidad de situaciones familiares en la región y las diferencias entre países entranaban el establecimiento de normas comunes. Pese a ello, es necesario recalcar que el criterio básico para el diseño de estas políticas es contar con un adecuado diagnóstico que considere la heterogeneidad de situaciones y los cambios recientes que han vivido las familias latinoamericanas. Asimismo, dada la transversalidad de los temas pertinentes, los programas y las políticas dirigidos a ellas deben coordinarse apropiadamente.

Agenda social internacional

Finalmente, como es habitual, en el capítulo mencionado se incluye la reseña de las principales reuniones y acuerdos sobre temas sociales en el marco del sistema de las Naciones Unidas. En esta ocasión, está dedicada a la Asamblea General, celebrada en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, oportunidad en la que los principales mandatarios del mundo emitieron la Declaración del Milenio.

En la Declaración del Milenio, con el objetivo de plasmar los valores comunes de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad común, se formularon una serie de objetivos fundamentales en las siguientes áreas:

- La paz, la seguridad y el desarme
- El desarrollo y la erradicación de la pobreza
- La protección de nuestro entorno común
- Derechos humanos, democracia y buen gobierno
- Protección de las personas vulnerables
- Atención a las necesidades especiales de África
- Fortalecimiento de las Naciones Unidas

Resulta particularmente importante la meta establecida en la Declaración del Milenio de reducir a la mitad la pobreza extrema para el año 2015. En el capítulo I de este *Panorama social de América Latina* se analizan los requisitos de crecimiento económico para alcanzar esa meta en la región.



Logros y desafíos de la lucha contra la pobreza

A. Evolución de la pobreza en el período 1997-2000

Durante la segunda mitad de los años noventa, México, República Dominicana y la mayoría de los países centroamericanos evidenciaron un sostenido crecimiento económico, y varios de ellos lograron avances en la lucha contra la pobreza. En Sudamérica, en tanto, predominó un proceso de desaceleración, estancamiento y posterior recuperación, que en algunos casos se tradujo en mantención o deterioro de las condiciones de vida. Con todo, aunque en el trienio 1997-1999 el número de personas en situación de pobreza en América Latina creció de 204 a 211 millones, tanto el porcentaje de hogares como de personas pobres permanecieron relativamente constantes.

La trayectoria económica de América Latina en el último trienio ha estado marcada por la desaceleración del crecimiento en 1998, seguida de un estancamiento en 1999 y una posterior recuperación en el año 2000. No obstante, y con más intensidad que en otros períodos, esta evolución engloba un comportamiento muy dispar de los distintos países y grupos de países de la región.

En efecto, México y República Dominicana mostraron un crecimiento alto y persistente durante esos años, al igual que la mayoría de los países centroamericanos, aunque en estos últimos alcanzó un nivel más moderado. Más aún, lo anterior permitió prolongar en todos estos casos la tendencia observada en el bienio 1996–1997, completando así un quinquenio de ininterrumpida expansión económica. A su vez, este crecimiento ha gestado disminuciones en las tasas de desempleo que, si bien se enmarcan en la difi-

cultad que vienen presentando las actuales modalidades de desarrollo en orden a ampliar significativamente los volúmenes de empleo, han contribuido a aliviar la situación económica de las familias más pobres. Ello se ha visto reforzado también por la dirección de los flujos migratorios característicos de estos países, que producen el doble efecto de reducir la tasa de crecimiento de la población en edad activa e incrementar el valor de las remesas provenientes de familiares residentes en el exterior.

Estas circunstancias han repercutido favorablemente en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, debe tenerse presente que la crisis de 1995 significó para algunos de los países mencionados una reversión de los logros alcanzados a comienzos de los años noventa, de modo que los resultados registrados en el conjunto de la década no siempre muestran un éxito semejante.

Por su parte, los países sudamericanos experimentaron una evolución diferente en el período 1998–2000. En muchos de ellos se observa en términos generales la tendencia señalada de desaceleración, estancamiento o recesión, y posterior recuperación del crecimiento económico. Precisamente debido a la incidencia de estos países en las cifras agregadas de América Latina, en ocasiones se atribuye a la región en su conjunto la trayectoria antes indicada. Incluso esta propensión puede ser calificada en términos más estrictos si se examina la evolución del producto por habitante en vez del producto global, puesto que, por ejemplo, bajo esta perspectiva la aludida desaceleración de 1998 significó para varios de estos países más bien un cierto retroceso.

La intensidad de esta trayectoria también fue diversa en cada país. La observada en Chile es quizás la que mejor se ajusta a la evolución promedio de la región. En cambio, en un grupo importante de países la recuperación del año 2000 fue débil, lo que ha implicado que, por ejemplo, Argentina, Paraguay y Uruguay presenten en el trienio un crecimiento negativo del producto por habitante. A su vez, en Colombia, Ecuador y Venezuela, donde la recesión de 1999 fue muy intensa con caídas del producto per cápita que se sitúan entre -6% y -9% , se constató una recuperación leve en el año 2000, que osciló entre el estancamiento (Ecuador) y un crecimiento algo superior al 1% (Colombia y Venezuela). Por último, un caso particular es el de Brasil, en el que la crisis cambiaria de fines de 1997 provocó la disminución del producto por habitante en 1998 (-1.1%) y 1999 (-0.4%), pero seguida de una recuperación en el 2000 (2.2%), lo que permitió que en ese año se alcanzara un nivel ligeramente superior al de 1997, hecho a destacar en la visión de conjunto de los países sudamericanos dado el alto tamaño relativo de Brasil –en lo económico y demográfico–, en el ámbito regional (véase el cuadro I.1).

La situación descrita significó que en la mayoría de los países de esta área se incrementaran las tasas de desempleo abierto. Como era de esperar, tal efecto

fue especialmente notorio en Colombia, Ecuador y Venezuela, donde la desocupación entre 1997 y 2000 aumentó de 12% a 20% , de 9% a 14% y de 11% a 14% , respectivamente. En tanto, el incremento fue considerablemente más moderado en Brasil y Uruguay (algo menos de 2 puntos porcentuales) y en Perú (un punto porcentual). Argentina, que había logrado una reducción de 2 puntos en 1998, perdió lo avanzado y terminó el año 2000 con un promedio de desempleo abierto del 15% . A su vez, en los países para los cuales se dispone de información sobre el comportamiento de los salarios reales no se verificaron caídas apreciables en el nivel medio de las remuneraciones, e incluso en algunos de ellos los asalariados lograron una pequeña mejoría, como por ejemplo en el caso de Chile (véase el cuadro 1 del Anexo estadístico).

En este contexto, hacia 1999¹ la incidencia de la pobreza en América Latina alcanzaba al 35% de los hogares, mientras que la indigencia o pobreza extrema afectaba al 14% . En otras palabras, de cada 100 hogares de la región, 35 carecen de los recursos para satisfacer sus necesidades básicas, en tanto que 14 no cuentan con un ingreso suficiente que les permita adquirir al menos la canasta básica de alimentos (véase el cuadro I.2).

Si se comparan estas cifras con las estimadas para el año 1997, se advierte que los porcentajes tanto de pobreza como de indigencia muestran una leve reducción. En efecto, durante el período 1997–1999 la incidencia de la pobreza disminuyó en dos décimas de punto –al reducirse de 35.5% a 35.3% de los hogares–, variación algo menor a la que presenta el porcentaje de indigencia –que pasó de 14.4% a 13.9% (véanse el cuadro I.2 y el gráfico I.1). Si bien los cambios mencionados difícilmente pueden ser catalogados como un logro apreciable en el combate a la pobreza, éstos son consecuentes con un crecimiento económico anual por habitante de sólo 0.3% en 1999, que inclusive hacía presagiar un deterioro de las condiciones de vida de la población menos favorecida.

¹ Año más reciente para el cual se dispone de estimaciones detalladas sobre la magnitud de la pobreza en cada país. Con respecto a la descripción de la metodología utilizada en estas estimaciones, véase el recuadro I.1.

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS, 1990-2000											
País	Año	PIB per cápita (Tasa promedio anual de variación) a/	Desempleo urbano	Remuneración	Salario	País	Año	PIB per cápita (Tasa promedio anual de variación) a/	Desempleo urbano	Remuneración	Salario
				media real b/	mínimo urbano c/					media real b/	mínimo urbano c/
		Promedio simple del período (porcentajes)		Tasa promedio anual de variación				Promedio simple del período (porcentajes)		Tasa promedio anual de variación	
Argentina	1990-1997	3.6	11.5	0.6	1.0	Honduras	1990-1997	0.2	6.3	...	0.8
	1998-2000	-1.3	14.1	0.9	0.4		1998-2000	-0.5	5.3	...	4.0
Bolivia	1990-1997	1.9	5.2	2.8	6.3	México	1990-1997	1.3	3.8	0.6	-5.5
	1998-2000	0.2	7.2	1.7	8.7		1998-2000	3.6	2.6	3.2	1.8
Brasil	1990-1997	0.5	5.1	-0.7	-1.1	Nicaragua	1990-1997	-0.5	14.9	8.6	...
	1998-2000	0.4	7.4	-1.8	2.8		1998-2000	2.6	11.0	4.4	...
Chile	1990-1997	5.3	7.0	3.7	5.5	Panamá	1990-1997	3.4	17.2	...	1.1
	1998-2000	1.4	8.5	2.2	7.3		1998-2000	1.9	14.8	...	3.3
Colombia	1990-1997	1.6	10.1	1.0	-0.7	Paraguay	1990-1997	0.0	5.9	0.9	-1.3
	1998-2000	-2.1	18.3	1.9	1.0		1998-2000	-3.0	8.2	-0.9	-0.5
Costa Rica	1990-1997	1.4	5.3	1.4	0.7	Perú	1990-1997	2.1	8.5	-0.5	0.8
	1998-2000	3.5	5.6	3.7	1.7		1998-2000	-0.2	8.7	-1.0	6.0
Ecuador	1990-1997	0.9	8.5	6.7	3.5	República Dominicana	1990-1997	1.8	17.7	...	0.3
	1998-2000	-3.9	13.6	-2.0	-7.2		1998-2000	6.0	14.0	...	3.0
El Salvador	1990-1997	2.8	7.9	...	-1.4	Uruguay	1990-1997	3.1	9.8	0.2	-7.8
	1998-2000	0.9	7.1	...	1.1		1998-2000	-1.0	11.7	0.7	0.7
Guatemala	1990-1997	1.3	4.4	5.6	-13.1	Venezuela c/	1990-1997	1.6	9.6	-5.0	-3.9
	1998-2000	1.2	3.8	4.7	4.2		1998-2000	-2.4	13.4	-2.0	-4.5
Haití	1990-1997	-3.9	-8.0	América Latina	1990-1997	1.4	7.0
	1998-2000	0.5	-10.3		1998-2000	0.6	8.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

a/ A partir del valor del producto interno bruto (PIB) per cápita en dólares, a precios constantes de 1995. La cifra correspondiente a 2000 es una estimación preliminar.

b/ Por lo general, la cobertura de este índice es muy parcial. En la mayoría de los países se refiere sólo a los trabajadores formales del sector industrial. La cifra correspondiente a 2000 es una estimación preliminar.

c/ En el caso del salario mínimo urbano, la variación corresponde al período 1997-1999.

... : No hay datos disponibles.

El análisis en términos de la proporción de personas pobres revela tendencias levemente distintas a las ya comentadas para los hogares. Hacia 1999, el 43.8% de la población de América Latina se encontraba en situación de pobreza, tres décimas de punto más que en 1997. Por su parte, la indigencia pasó del 19% al 18.5% en el período 1997–1999. Es posible notar que las diferencias en la incidencia de la pobreza, según se elija personas u hogares como unidad de análisis,

pueden llegar a ser considerables (8.5 puntos porcentuales en 1999). Este fenómeno se explica básicamente por el mayor tamaño promedio de los hogares pobres con respecto al tamaño promedio de los hogares en general. Mientras más miembros contengan los hogares pobres por sobre el promedio de toda la población, cualquier proporción estimada de hogares pobres se traducirá necesariamente en un porcentaje más alto de personas pobres.²

2 Probablemente resulte llamativo que las mediciones de pobreza en términos de personas se vayan distanciando cada vez más de las efectuadas en términos de hogares -de 6 puntos porcentuales en 1980 a 8.5 puntos en 1999- a pesar de que el tamaño medio de los hogares haya venido decreciendo en la región. Este efecto se produce porque la reducción en el tamaño medio de los hogares pobres (conjunto que a su vez ha venido disminuyendo) ha sido menor que la reducción en el tamaño medio de los hogares en general: mientras que los primeros casi no cambiaron de tamaño entre 1990 y 1999 (5.12 y 5.11 miembros, respectivamente), el tamaño medio de los hogares cayó de 4.35 a 4.13.

Cuadro I.2

AMÉRICA LATINA: MAGNITUD DE LA POBREZA E INDIGENCIA, a/						
1980-1999						
	Porcentaje de hogares					
	Total	Pobres b/		Rural	Indigentes c/	
		Urbana	Rural		Urbana	Rural
1980	34.7	25.3	53.9	15.0	8.8	27.5
1990	41.0	35.0	58.2	17.7	12.0	34.1
1994	37.5	31.8	56.1	15.9	10.5	33.5
1997	35.5	29.7	54.0	14.4	9.5	30.3
1999	35.3	29.8	54.3	13.9	9.1	30.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Estimación correspondiente a 19 países de la región.

b/ Porcentaje de hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Incluye a los hogares que se encuentran en situación de indigencia.

c/ Porcentaje de hogares con ingresos inferiores a la línea de indigencia.

Cuadro I.3

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN POBRE E INDIGENTE, a/												
1980-1999												
	Pobres b/						Indigentes c/					
	Total		Urbana		Rural		Total		Urbana		Rural	
	Millones	Porcentaje	Millones	Porcentaje	Millones	Porcentaje	Millones	Porcentaje	Millones	Porcentaje	Millones	Porcentaje
1980	135.9	40.5	62.9	29.8	73.0	59.9	62.4	18.6	22.5	0.6	39.9	32.7
1990	200.2	48.3	121.7	41.4	78.5	65.4	93.4	22.5	45.0	15.3	48.4	40.4
1994	201.5	45.7	125.9	38.7	75.6	65.1	91.6	20.8	44.3	13.6	47.4	40.8
1997	203.8	43.5	125.7	36.5	78.2	63.0	88.8	19.0	42.2	12.3	46.6	37.6
1999	211.4	43.8	134.2	37.1	77.2	63.7	89.4	18.5	43.0	11.9	46.4	38.3

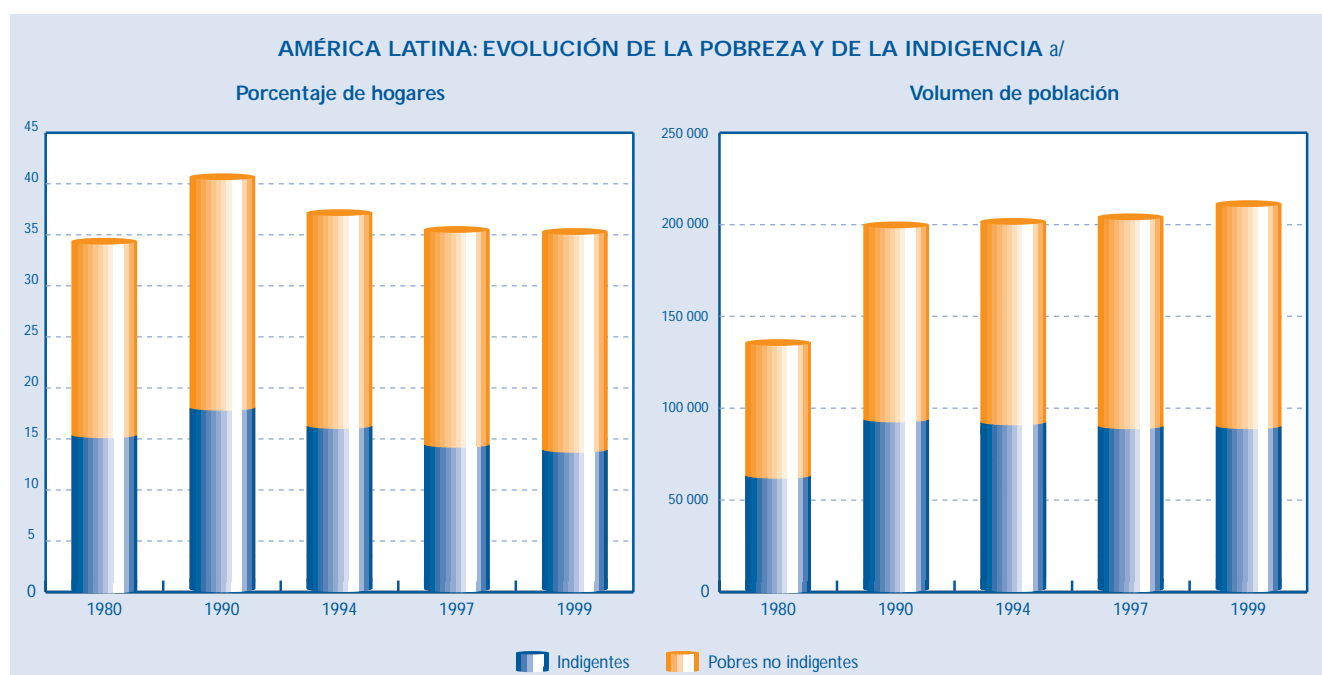
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Estimación correspondiente a 19 países de la región.

b/ Personas en hogares en situación de pobreza. Incluye a la población en situación de indigencia.

c/ Personas en hogares en situación de indigencia.

Gráfico I.1



Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Corresponde al total nacional.

MÉTODO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA

Las estimaciones de la magnitud de la pobreza presentadas en este informe fueron realizadas por medio del método del costo de las necesidades básicas, basado en el cálculo de líneas de pobreza. Estas líneas dan cuenta del ingreso mínimo necesario para que los miembros de un hogar puedan satisfacer sus necesidades esenciales. Siempre que se dispuso de los antecedentes necesarios, la línea de pobreza de cada país y zona geográfica se estimó a partir del costo de una canasta básica de alimentos que cubre las necesidades nutricionales de la población, tomando en consideración sus hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos y sus precios relativos. Al valor de esta canasta se sumó luego una estimación de los recursos requeridos por los hogares para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas no alimentarias.^a

La línea de indigencia corresponde al costo de la canasta alimentaria, entendiéndose por indigentes (o extremadamente pobres) las personas que residen en hogares cuyos ingresos son tan bajos que, aunque se destinaran íntegramente a la compra de alimentos, no permitirían satisfacer adecuadamente las necesidades nutricionales de todos sus miembros. El valor de la línea de pobreza se obtuvo multiplicando el valor de la línea de indigencia por un factor constante que da cuenta de los gastos básicos no alimentarios, que para áreas urbanas corresponde al valor 2 y para zonas rurales a alrededor de 1.75^b (CEPAL, 1999, recuadro I.2).

En el cálculo de las líneas de indigencia se tomaron en cuenta las diferencias de precios de los alimentos entre las áreas metropolitanas y las restantes zonas urbanas y rurales. En general, los precios considerados para los centros urbanos y rurales son menores en un 5% y un 25% respectivamente, en relación a los precios en áreas metropolitanas.

Respecto de las fuentes de información, los datos sobre el ingreso de las familias provienen de las encuestas de hogares realizadas por los respectivos países. Como es habitual, se corrigieron tanto la falta de respuesta a algunas preguntas sobre el valor de los ingresos –en el caso de los asalariados, trabajadores independientes y jubilados– como los probables sesgos por subdeclaración. Esto último se efectuó contrastando las partidas de ingreso de la encuesta con las provenientes de una estimación de la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), elaborada para estos propósitos a partir de información oficial. El concepto de ingreso utilizado fue el constituido por los ingresos del trabajo asalariado (monetarios y en especie), del trabajo independiente (incluidos el autosuministro y el valor del consumo de productos producidos por el hogar), las rentas de la propiedad, las jubilaciones y pensiones y otras transferencias recibidas por los hogares. En la mayoría de los países, el ingreso de los hogares incluye, además, un valor o imputación por concepto de arriendo de la vivienda cuando ésta es habitada por sus propietarios.

Los porcentajes de hogares y de población pobre e indigente se calcularon comparando el valor mensual per cápita de las respectivas líneas con el ingreso total de cada hogar, expresado también en términos per cápita. A su vez, los índices nacionales de pobreza e indigencia se calcularon como un promedio ponderado de los índices correspondientes a cada área geográfica, por lo que no sólo dependen de la incidencia de la pobreza en cada una de ellas, sino también del porcentaje que éstas representan en la población total de cada país.

a/ La información acerca de la estructura del consumo de los hogares, tanto de alimentos como de otros bienes y servicios, se obtuvo de las encuestas sobre presupuestos familiares que se llevan a cabo en los distintos países. Cuando no se dispuso de los datos de una encuesta reciente de este tipo, se utilizaron otros antecedentes pertinentes sobre consumo familiar.

b/ La única excepción a este criterio general es Brasil. En este caso, se utilizaron las nuevas líneas de indigencia estimadas para diferentes contextos geográficos subnacionales, en el marco de un trabajo conjunto realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) de Brasil y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En términos del volumen de población en situación de pobreza, éste alcanzaba en 1999 a poco más de 211 millones de personas, de las cuales algo más de 89 millones se encontraban bajo la línea de indigencia. Con respecto a 1997, esta cifra representa un au-

mento de 7.6 millones de personas pobres. Por su parte, el número de indigentes tuvo un pequeño incremento en el último trienio, que abarcó a 0.6 millones de personas (véanse el cuadro I.3 y el gráfico I.1).

La evolución de la pobreza en el conjunto de América Latina se vio particularmente influida por el desempeño de algunos países, en atención ya sea a su mayor peso demográfico o a la magnitud de sus índices de privación. Por una parte, en países como Argentina, Brasil y Colombia se advirtió un repunte de la incidencia de la pobreza, mientras que en México y la mayoría de los países centroamericanos hubo reducciones importantes. Entre estos últimos destacan especialmente –además de México– El Salvador y Panamá cuyas incidencias de pobreza disminuyeron en tres o más puntos porcentuales.

Ahora bien, una proyección de las cifras de América Latina al año 2000 con carácter conjetural y basada esencialmente en el comportamiento macroeconómico de los distintos países, supone que la pobreza en la región podría mostrar una tendencia a la baja gracias al mayor crecimiento obtenido en el último año, particularmente en México y Brasil, países que representan más de la mitad de la población latinoamericana. Así, para el año 2000 el porcentaje de hogares pobres podría alcanzar a alrededor del 34%, mientras que los hogares en situación de indigencia se mantendrían en torno al 14% del total.

De acuerdo con esta proyección, el nuevo decenio se iniciaría con un menor número de personas pobres que en 1999, rompiéndose así la tendencia creciente que predominó durante la década precedente. La reducción estimada del volumen de pobreza sería de 1.9 millones de personas, con lo que el número de pobres al año 2000 se situaría en alrededor de los 210 millones. Asimismo, la proyección apunta a retomar el proceso de reducción de la extrema pobreza, que disminuiría en aproximadamente 2 millones de personas; de esta forma, al comenzar la presente década la indigencia afectaría a cerca de 87 millones de personas.

Por otra parte, es sabido que la pobreza y la indigencia son fenómenos que se manifiestan de modo distinto –en cuanto a magnitud, intensidad y características– en las áreas urbanas y rurales. Por ello, la identificación de estas diferencias resulta esencial, ya que en América Latina el creciente predominio de la

pobreza urbana sobre la rural tiene implicancias directas sobre la asignación de recursos para combatir este flagelo social.

En la región, la incidencia relativa de la pobreza rural sigue superando ampliamente a la de la urbana (54% y 30% de los hogares, respectivamente), pese a lo cual en 1999 los pobres urbanos ascendían a cerca de 134 millones y los rurales a 77 millones, debido a la proporción significativamente más alta de población residente en las áreas urbanas. Esta situación contrasta con la de la pobreza extrema, ya que la población que vive en esa situación es levemente menor en el área urbana (43 millones) que en la rural (46 millones), lo que denota de paso la mayor severidad de la pobreza que prevalece en esta última (véase el cuadro I.3).

Durante el período 1997–1999 se produjeron variaciones menores en la evolución a nivel urbano y rural, no solamente en cuanto a las proporciones de hogares y personas en situación de pobreza e indigencia –donde la mayoría de los cambios no excede 0.4 puntos porcentuales–, sino en el número de personas que se encuentran en cada situación. La excepción la constituye sin embargo la pobreza urbana cuyo volumen creció en cerca de 8.5 millones de personas en ese lapso de dos años.

En las proyecciones para el año 2000 ya mencionadas, las reducciones previstas a nivel de hogares se manifestarían fundamentalmente en una menor incidencia de la pobreza urbana (de 0.8 puntos porcentuales), ya que en el resto de los casos la disminución en la proporción de hogares sería inferior a 0.5 puntos porcentuales. De esta manera, la pobreza urbana alcanzaría el 29%, mientras que la pobreza rural, la indigencia urbana y la indigencia rural se mantendrían en alrededor del 54%, 9% y 30% respectivamente. En términos de personas, por su parte, tanto la pobreza urbana y rural como la indigencia rural podrían reducirse en un punto porcentual, mientras que el porcentaje de indigentes urbanos se situaría 0.5 puntos porcentuales por debajo del nivel de 1999.

b. La pobreza en los años noventa

En el decenio de 1990 se redujo el porcentaje de hogares y de personas en situación de pobreza, así como también la severidad de este fenómeno. En términos agregados, esta reducción ha logrado contrarrestar en gran parte el retroceso producido en los años ochenta; no obstante, las incidencias relativas de pobreza urbana y de indigencia rural aún superan claramente las existentes hace 20 años. En la evolución de la década pasada destaca positivamente el hecho de que en Brasil, Chile y Panamá disminuyeron los niveles de pobreza en más de 10 puntos porcentuales, en contextos de muy diferentes ritmos de crecimiento económico por habitante.

El examen de la evolución de la pobreza en el largo plazo en América Latina pone de manifiesto que la recuperación del crecimiento económico en los años noventa, junto con los esfuerzos desplegados en el campo de las políticas públicas, tuvo éxito en la mayoría de los países, al menos en cuanto a revertir los retrocesos evidenciados en el decenio anterior.

El porcentaje de hogares pobres en América Latina estimado para 1999 fue inferior en casi 6 puntos porcentuales a los niveles de pobreza registrados en 1990. Esta tendencia descendente también se hizo ostensible en la magnitud de la indigencia, que disminuyó paulatinamente desde el 18% en 1990 hasta el 14% de los hogares en 1999. Por su parte, la comparación con las cifras vigentes en 1980 revela que en 1999 se equipararon los porcentajes globales de pobreza e indigen-

cia prevalentes en la región en ese entonces (véase el cuadro I.2), lo que de paso refleja un cierto retroceso distributivo experimentado en las pasadas dos décadas, en la medida en que esta igualación de los niveles de pobreza se habría producido con un mayor ingreso per cápita que el alcanzado en 1980.³

A su vez, al trasladar el enfoque desde los hogares a las personas se observa que si bien durante la década de 1990 también disminuyó el porcentaje de población pobre, éste no alcanzó a reducirse hasta los niveles prevalentes en 1980, excediéndolos todavía en tres puntos porcentuales (44% comparado con 41%). Como se señaló anteriormente, este resultado es consecuencia de un menor decrecimiento relativo en el tamaño de los hogares pobres con respecto al tamaño de los hogares no pobres.

3 Mientras que en 1980 el ingreso promedio per cápita en América Latina era de 3.606 dólares (a precios constantes de 1995), en 1999 éste llegó a 3.761 dólares.

En estas circunstancias, los logros de la última década en cuanto a reducción de la incidencia relativa de pobreza, tanto a nivel de hogares como de personas, no fueron suficientes para contrarrestar por completo el crecimiento demográfico de ese período, ya que de 1990 a 1999 la pobreza aumentó en 11 millones

de personas en América Latina. En cambio, en esos años sí se consiguió reducir la población en situación de indigencia o de pobreza extrema, en una magnitud cercana a los 4 millones de personas (véase el cuadro I.3).

Recuadro I.2

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA

La pobreza es considerada un concepto eminentemente normativo, vinculado al bienestar de las personas, por lo que no existe una única noción de este fenómeno ni tampoco un método universal para medirlo. Sin embargo, existe consenso en que su medición comprende al menos dos etapas: i) la identificación de las personas pobres y, ii) la agregación de la pobreza en una medida sintética.

El primer aspecto se aborda a partir de la definición de un umbral denominado línea de pobreza (z), que permite identificar a la población cuyo ingreso per cápita (y_{pc}) es inferior al costo de una canasta de satisfactores de las necesidades básicas ($y_{pc} < z$) (véase el recuadro I.1).

Por su parte, la agregación se lleva a cabo seleccionando un indicador que considere los déficit de ingreso de las personas con relación al valor de la línea de pobreza. Un "buen" indicador de pobreza debe cumplir algunos axiomas, entre los que cabe destacar:

- i) **Monotonicidad.** Una reducción en el ingreso de un hogar pobre (ceteris paribus) debiera incrementar el índice de pobreza.
- ii) **Transferencia.** Una transferencia de ingresos de un hogar pobre a otro más rico (ceteris paribus) debiera incrementar el valor del indicador de pobreza.
- iii) **Descomposición aditiva.** El índice de pobreza de una población debiera poder calcularse como la suma ponderada de los índices de los diferentes subgrupos que la conforman.

Las medidas de pobreza más utilizadas pueden ser resumidas a partir de una familia de índices paramétricos, propuestos por Foster, Greer y Thorbecke: a/

$$FTG_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_j}{z} \right]^{\alpha} \quad (1)$$

Donde $\alpha > 0$, y q representa el número de personas con ingresos inferiores a z .

Cuando $\alpha = 0$, la expresión (1) corresponde al denominado índice de incidencia de la pobreza (H), que contabiliza la proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza (z):

$$H = q / n \quad (2)$$

Debido a su facilidad de cálculo e interpretación, este indicador es el más utilizado de todos. No obstante, si bien se puede descomponer aditivamente, no satisface los dos primeros axiomas mencionados con anterioridad, lo que supone limitaciones para el análisis de la pobreza.

Por otra parte, cuando $\alpha = 1$ se obtiene un indicador que mide el déficit relativo de ingresos de los pobres con respecto al valor de z , y se conoce como brecha de la pobreza (PG):

$$PG = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_j}{z} \right] \quad (3)$$

(continúa)

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA

A pesar de que la brecha de la pobreza (PG) satisface el axioma de monotonicidad, no sucede lo mismo con el axioma de transferencias; por tanto, este indicador no considera la desigualdad en la distribución del ingreso entre los pobres.

Finalmente, un índice que considera en forma conjunta la brecha de la pobreza y la distribución del ingreso se obtiene cuando $\alpha = 2$:

$$FTG_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_j}{z} \right]^2$$

A pesar de ser menos intuitivo que los anteriores, este indicador es útil particularmente para el diseño y evaluación de políticas. Dado que satisface los tres axiomas mencionados, permite generar ordenamientos concluyentes de países, unidades geográficas o grupos sociales, con el fin de identificar dónde se concentran las situaciones más agudas de pobreza.

a/ James Foster, Joel Greer y Erik Thorbecke, "A class of decomposable poverty measures", *Econometrica*, vol. 52, 1984, pp. 761–766.

Estas cifras agregadas encierran cambios en la distribución urbano–rural de los hogares en situación de pobreza, que revisten especial importancia dada la diferente naturaleza que caracteriza a este fenómeno en esos dos contextos geográficos. La disminución en los porcentajes de pobreza durante la década pasada se observó tanto en las áreas urbanas como en las rurales, alcanzando 5 puntos porcentuales en el primer caso y 4 puntos porcentuales en el segundo. De igual manera, los niveles de indigencia pasaron de 12% a 9% en las áreas urbanas y de 34% a 31% en las áreas rurales. No obstante, desde la perspectiva del volumen de población en situación de pobreza, la evolución en estas dos áreas fue dispar. La pobreza urbana aumentó en 12.5 millones de personas, en tanto que en las áreas rurales el número de pobres se redujo en 1.3 millones.

Más aún, si se examina el estado actual de la pobreza en las zonas urbanas se constata que ésta mantiene niveles notablemente superiores a los registrados en 1980 (30% comparado con 25%), y algo parecido sucede con la indigencia rural (31% comparado con 28%). Esto indica que a pesar de los avances alcanzados en la última década, queda todavía un largo trecho por recorrer en materia de alivio de la pobreza en ciertas áreas específicas, aunque sólo sea para recuperar niveles similares a los de hace 20 años.

Los guarismos reiteran la tendencia a la urbanización de la pobreza, ya señalada en otras ediciones del

Panorama social, que fue muy marcada durante los años ochenta y algo menor en los años noventa: en 1999 la proporción de los pobres que residía en áreas urbanas llegó al 64%, mientras que en los años 1980 y 1990 ese porcentaje fue de 46% y 61%, respectivamente. La mencionada propensión se presenta de forma más moderada en relación a la pobreza extrema, cuya composición por área se alteró de manera pronunciada en los años ochenta para luego permanecer relativamente estable en los últimos 10 años, en torno al 48% en la zona urbana y al 52% en la zona rural. De modo que, en este sentido, el combate a la indigencia demanda hoy esfuerzos relativamente similares en ambas áreas.

Por otra parte, el análisis de la pobreza a nivel de países revela que, a pesar de las heterogéneas tendencias en su evolución durante el bienio 1997–1999, la década de 1990 se caracterizó más bien por una tendencia generalizada a la reducción en el porcentaje de hogares pobres. Así, durante el período 1990–1999, en la mayoría de los países de la región se experimentó una disminución significativa de la incidencia de la pobreza. Hacia el final de la década, son por lo menos 11 los países en los que se logró reducir los niveles relativos de pobreza en relación con 1990, y ellos comprenden a la mayoría de la población pobre de la región. En cuatro de los casos registrados se observan aumentos en el porcentaje de hogares pobres (véanse los cuadros I.4 y I.5).

AMERICA LATINA (17 PAISES): INDICADORES DE POBREZA ^{a/}. 1990-1999
(En porcentajes)

Países	Años	Hogares y población bajo la línea de pobreza b/											
		Total país				Area urbana				Area rural			
		H		PG	FGT ₂	H		PG	FGT ₂	H		PG	FGT ₂
		Hogares	Población			Hogares	Población			Hogares	Población		
<i>Argentina c/</i>	1990	-	-	-	-	16.2	21.2	7.2	3.4	-	-	-	-
	1994	-	-	-	-	10.2	13.2	4.3	1.9	-	-	-	-
	1997	-	-	-	-	13.1	17.8	6.2	3.1	-	-	-	-
	1999	-	-	-	-	13.1	19.7	6.8	3.3	-	-	-	-
<i>Bolivia</i>	1989 d/	-	-	-	-	49.4	53.1	24.5	15.0	-	-	-	-
	1994 d/	-	-	-	-	45.6	51.6	21.6	11.8	-	-	-	-
	1997	56.7	62.1	33.6	22.8	46.8	52.3	23.2	13.6	72.0	78.5	51.0	38.1
	1999	54.7	60.6	33.6	23.9	42.3	48.7	20.5	11.8	75.6	80.7	55.7	44.4
<i>Brasil</i>	1990	41.4	48.0	23.5	14.7	35.6	41.2	18.9	11.4	63.9	70.6	38.9	25.7
	1993	37.1	45.3	21.7	13.6	33.3	40.3	18.2	11.0	62.9	63.0	34.3	23.0
	1996	28.6	35.8	16.7	10.4	24.6	30.6	13.5	8.2	45.6	55.6	29.0	19.0
	1999	29.9	37.5	17.0	10.2	26.4	32.9	14.3	8.4	45.2	55.3	27.5	17.2
<i>Chile</i>	1990	33.3	38.6	14.7	7.9	33.3	38.4	14.8	7.9	33.5	39.5	14.6	7.8
	1994	23.2	27.5	9.7	5.0	22.8	26.9	9.6	5.0	25.5	30.9	10.4	5.1
	1998	17.8	21.7	7.5	3.8	17.0	20.7	7.2	3.7	22.7	27.6	9.1	4.3
	2000	16.6	20.6	7.1	3.7	16.2	20.1	6.9	3.6	19.2	23.8	8.2	4.3
<i>Colombia</i>	1991	50.5	56.1	24.9	14.5	47.1	52.7	22.0	12.1	55.4	60.7	28.9	17.7
	1994	47.3	52.5	26.6	17.5	40.6	45.4	20.2	11.9	57.4	62.4	35.7	25.3
	1997	44.9	50.9	22.9	13.8	39.5	45.0	19.1	10.8	54.0	60.1	28.9	18.1
	1999	48.7	54.9	25.6	15.7	44.6	50.6	23.1	13.9	55.8	61.8	29.6	18.6
<i>Costa Rica</i>	1990	23.7	26.2	10.7	6.5	22.2	24.8	9.3	5.6	24.9	27.3	11.7	7.2
	1994	20.8	23.1	8.6	5.0	18.1	20.7	7.2	4.0	23.1	25.0	9.8	5.8
	1997	20.3	22.5	8.5	4.9	17.1	19.3	7.1	4.0	22.9	24.8	9.6	5.6
	1999	18.2	20.3	8.1	4.8	15.7	18.1	6.8	3.8	20.5	22.3	9.3	5.6
<i>Ecuador</i>	1990	-	-	-	-	55.8	62.1	27.6	15.8	-	-	-	-
	1994	-	-	-	-	52.3	57.9	26.2	15.6	-	-	-	-
	1997	-	-	-	-	49.8	56.2	23.9	13.5	-	-	-	-
	1999	-	-	-	-	58.0	63.6	30.1	18.2	-	-	-	-
<i>El Salvador</i>	1995	47.6	54.2	24.0	14.3	40.0	45.8	17.8	9.7	58.2	64.4	31.3	19.8
	1997	48.0	55.5	24.3	13.9	38.6	44.4	17.5	9.4	61.6	69.2	32.7	19.3
	1999	43.5	49.8	22.9	14.0	34.0	38.7	15.3	8.3	59.0	65.1	33.4	22.0
<i>Guatemala</i>	1989	63.0	69.1	32.6	20.7	48.2	53.1	23.0	14.1	72.1	77.7	38.2	24.6
	1998	53.5	60.5	29.2	17.2	38.8	46.0	19.7	10.7	64.7	70.0	35.4	21.4
<i>Honduras</i>	1990	75.2	80.5	50.2	35.9	64.5	69.8	39.0	25.8	83.5	88.0	58.0	42.9
	1994	73.1	77.9	45.3	31.3	69.6	74.5	41.2	27.4	76.1	80.5	48.4	34.2
	1997	73.8	79.1	45.6	30.8	67.0	72.6	39.0	25.2	79.9	84.2	50.7	35.2
	1999	74.3	79.7	47.4	32.9	65.6	71.7	38.9	25.5	82.3	86.3	54.2	39.0
<i>México</i>	1989	39.0	47.8	18.7	9.9	33.9	42.1	15.8	8.1	48.4	57.0	23.5	12.7
	1994	35.8	45.1	17.0	8.4	29.0	36.8	12.6	5.8	46.5	56.5	22.9	12.0
	1996	43.4	52.1	21.8	11.7	37.5	45.1	17.4	8.7	53.4	62.5	28.2	15.9
	1998	38.0	46.9	18.4	9.4	31.1	38.9	13.4	6.4	49.3	58.5	25.6	13.9
<i>Nicaragua</i>	1993	68.1	73.6	41.9	29.3	60.3	66.3	35.0	23.4	78.7	82.7	50.6	36.6
	1998	65.1	69.9	39.4	27.3	59.3	64.0	32.9	21.2	72.7	77.0	47.3	34.7
<i>Panamá</i>	1991	36.3	42.8	19.2	11.5	33.6	40.9	17.9	10.9	42.5	50.6	22.5	12.8
	1994	29.7	36.1	15.8	9.0	25.2	30.8	13.1	7.5	40.6	49.2	22.1	12.8
	1997	27.3	33.2	10.6	6.2	24.6	29.7	9.5	5.7	33.5	41.9	13.2	7.4
	1999	24.2	30.2	11.8	6.4	20.8	25.7	10.2	5.6	32.6	41.5	16.0	8.3
<i>Paraguay</i>	1990 e/	-	-	-	-	36.8	42.2	16.1	8.0	-	-	-	-
	1994	-	-	-	-	42.4	49.9	20.7	11.5	-	-	-	-
	1996	-	-	-	-	39.6	46.3	18.5	9.8	-	-	-	-
	1999	51.7	60.6	30.2	19.0	41.4	49.0	20.3	11.2	65.2	73.9	41.7	27.9
<i>República Dominicana</i>	1997	32.4	37.2	15.3	8.5	31.6	35.6	14.1	7.7	33.6	39.4	16.7	9.5
<i>Uruguay</i>	1990	-	-	-	-	11.8	17.8	5.3	2.4	-	-	-	-
	1994	-	-	-	-	5.8	9.7	2.9	1.3	-	-	-	-
	1997	-	-	-	-	5.7	9.5	2.8	1.2	-	-	-	-
	1999	-	-	-	-	5.6	9.4	2.8	1.2	-	-	-	-
<i>Venezuela</i>	1990	34.2	40.0	15.9	8.7	33.4	38.8	15.4	8.4	38.4	46.5	18.8	10.0
	1994	42.1	48.7	19.9	10.8	40.9	47.1	19.0	10.3	47.7	55.6	23.8	13.2
	1997	42.3	48.1	21.1	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	1999	44.0	49.4	22.7	13.8	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>América Latina f/</i>	1990	41.0	48.3	-	-	35.0	41.4	-	-	58.2	65.4	-	-
	1994	37.5	45.7	-	-	31.8	38.7	-	-	56.1	65.1	-	-
	1997	35.5	43.5	-	-	29.7	36.5	-	-	54.0	63.0	-	-
	1999	35.3	43.8	-	-	29.8	37.1	-	-	54.3	63.7	-	-

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Para la definición de cada indicador, véase el recuadro I.2. Los índices PG y FGT₂ están calculados en base a la distribución de la población pobre.

b/ Incluye a los hogares (personas) en situación de indigencia o en extrema pobreza.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Ocho Capitales Departamentales más la ciudad de El Alto.

e/ Área metropolitana de Asunción.

f/ Estimación para 19 países de la región.

AMERICA LATINA (17 PAISES): INDICADORES DE INDIGENCIA ^{a/}. 1990-1999
(En porcentajes)

Países	Años	Hogares y población bajo la línea de indigencia											
		Total país				Area urbana			Area rural				
		H		PG	FGT ₂	H		PG	FGT ₂	H		PG	FGT ₂
		Hogares	Población			Hogares	Población			Hogares	Población		
<i>Argentina b/</i>	1990	-	-	-	-	3.5	5.2	1.6	0.8	-	-	-	-
	1994	-	-	-	-	1.5	2.6	0.7	0.3	-	-	-	-
	1997	-	-	-	-	3.3	4.8	1.5	0.7	-	-	-	-
	1999	-	-	-	-	3.1	4.8	1.4	0.7	-	-	-	-
<i>Bolivia</i>	1989 c/	-	-	-	-	22.1	23.3	9.7	6.1	-	-	-	-
	1994 c/	-	-	-	-	16.8	19.8	6.3	3.0	-	-	-	-
	1997	32.7	37.2	18.6	12.1	19.2	22.6	8.4	4.6	53.8	61.5	35.6	24.6
	1999	32.6	36.5	20.1	14.6	16.4	19.8	6.9	4.0	59.6	64.7	42.3	32.6
<i>Brasil</i>	1990	18.3	23.4	9.7	5.5	13.3	16.7	6.6	3.7	37.9	46.1	20.2	11.6
	1993	15.3	20.2	8.7	5.3	11.6	15.0	6.1	3.8	30.2	38.8	17.8	10.9
	1996	10.5	13.9	6.2	4.0	7.6	9.6	4.3	2.9	23.1	30.2	13.5	8.3
	1999	9.6	12.9	5.3	3.3	7.1	9.3	3.9	2.5	20.5	27.1	10.8	6.1
<i>Chile</i>	1990	10.6	12.9	4.3	2.3	10.2	12.4	4.0	2.1	12.1	15.2	5.4	3.0
	1994	6.2	7.6	2.6	1.5	5.9	7.1	2.5	1.5	7.9	9.8	3.2	1.7
	1998	4.7	5.6	2.0	1.1	4.3	5.1	1.9	1.1	6.9	8.7	2.6	1.2
	2000	4.6	5.7	2.1	1.2	4.2	5.3	1.9	1.2	6.7	8.3	2.9	1.6
<i>Colombia</i>	1991	22.6	26.1	9.8	5.5	17.2	20.0	6.7	3.4	30.6	34.3	14.1	8.3
	1994	25.0	28.5	13.8	9.1	16.2	18.6	7.5	4.5	38.2	42.5	22.6	15.6
	1997	20.1	23.5	9.6	5.8	14.6	17.2	6.1	3.5	29.3	33.4	15.1	9.5
	1999	23.2	26.8	11.2	6.9	18.7	21.9	8.9	5.3	31.1	34.6	15.0	9.4
<i>Costa Rica</i>	1990	9.8	9.8	4.8	3.4	6.9	6.4	3.8	2.9	12.3	12.5	5.7	3.8
	1994	7.7	8.0	3.6	2.4	5.6	5.7	2.4	1.6	9.5	9.7	4.5	3.1
	1997	7.4	7.8	3.5	2.3	5.2	5.5	2.4	1.6	9.1	9.6	4.3	2.9
	1999	7.5	7.8	3.5	2.3	5.4	5.4	2.4	1.5	9.4	9.8	4.4	2.9
<i>Ecuador</i>	1990	-	-	-	-	22.6	26.2	9.2	4.9	-	-	-	-
	1994	-	-	-	-	22.4	25.5	9.7	5.6	-	-	-	-
	1997	-	-	-	-	18.6	22.2	7.7	4.1	-	-	-	-
	1999	-	-	-	-	27.2	31.3	11.5	6.3	-	-	-	-
<i>El Salvador</i>	1995	18.2	21.7	9.1	5.6	12.4	14.9	5.2	2.9	26.5	29.9	13.7	8.8
	1997	18.5	23.3	8.4	4.1	12.0	14.8	5.5	2.7	27.9	33.7	12.1	5.8
	1999	18.3	21.9	9.4	5.8	11.1	13.0	4.6	2.5	29.3	34.3	16.0	10.3
<i>Guatemala</i>	1989	36.7	41.8	16.3	9.9	22.9	26.2	9.2	5.6	45.2	50.1	20.5	12.4
	1998	28.0	34.1	12.6	6.2	12.9	17.2	5.7	2.5	39.6	45.2	17.1	8.6
<i>Honduras</i>	1990	54.0	60.6	31.5	20.2	38.0	43.2	18.9	10.8	66.4	72.8	40.2	26.6
	1994	48.5	53.9	26.3	16.4	40.8	46.0	20.3	11.8	54.9	59.8	30.8	19.9
	1997	48.3	54.4	25.4	15.4	36.8	41.5	17.7	10.2	58.7	64.0	31.5	19.5
	1999	50.6	56.8	27.9	17.5	37.1	42.9	18.3	10.6	63.2	68.0	35.7	23.1
<i>México</i>	1989	14.0	18.8	5.9	2.7	9.3	13.1	3.9	1.9	22.4	27.9	9.0	4.2
	1994	11.8	16.8	4.6	1.8	6.2	9.0	2.1	0.8	20.4	27.5	8.1	3.3
	1996	15.6	21.3	7.1	3.3	10.0	13.8	3.9	1.6	25.0	32.4	11.8	5.8
	1998	13.2	18.5	5.3	2.2	6.9	9.7	2.5	1.0	23.5	31.1	9.5	4.1
<i>Nicaragua</i>	1993	43.2	48.4	24.3	16.2	32.2	36.8	17.0	11.1	58.3	62.8	33.4	22.6
	1998	40.1	44.6	22.6	15.1	30.7	33.9	15.0	9.2	52.6	57.5	31.6	22.2
<i>Panamá</i>	1991	16.0	19.2	7.9	4.7	13.9	16.0	7.3	4.7	21.1	26.7	9.4	4.8
	1994	12.0	15.7	6.0	3.2	8.7	11.4	4.5	2.5	19.8	26.2	9.6	4.9
	1997	10.2	13.0	3.7	2.3	8.6	10.7	3.4	2.1	14.1	18.8	4.7	2.7
	1999	8.3	10.7	3.9	2.1	6.6	8.1	3.3	1.9	12.6	17.2	5.4	2.6
<i>Paraguay</i>	1990 d/	-	-	-	-	10.4	12.7	3.6	1.5	-	-	-	-
	1994	-	-	-	-	14.8	18.8	6.5	3.3	-	-	-	-
	1996	-	-	-	-	13.0	16.3	5.0	2.4	-	-	-	-
	1999	26.0	33.9	14.5	8.5	13.9	17.4	6.1	3.3	42.0	52.8	24.3	14.5
<i>República Dominicana</i>	1997	12.8	14.4	5.5	3.0	11.0	11.8	4.2	2.4	15.2	17.9	7.1	3.8
<i>Uruguay</i>	1990	-	-	-	-	2.0	3.4	0.9	0.4	-	-	-	-
	1994	-	-	-	-	1.1	1.9	0.5	0.2	-	-	-	-
	1997	-	-	-	-	0.9	1.7	0.5	0.2	-	-	-	-
	1999	-	-	-	-	0.9	1.8	0.4	0.2	-	-	-	-
<i>Venezuela</i>	1990	11.8	14.6	5.1	2.5	10.9	13.3	4.8	2.4	16.5	21.7	6.9	3.1
	1994	15.1	19.2	6.2	3.0	13.5	17.1	5.4	2.6	22.9	28.3	9.6	4.8
	1997	17.1	20.5	7.4	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	1999	19.4	21.7	9.1	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>América Latina e/</i>	1990	17.7	22.5	-	-	12.0	15.3	-	-	34.1	40.4	-	-
	1994	15.9	20.8	-	-	10.5	13.6	-	-	33.5	40.8	-	-
	1997	14.4	19.0	-	-	9.5	12.3	-	-	30.2	37.6	-	-
	1999	13.9	18.5	-	-	9.1	11.9	-	-	30.7	38.3	-	-

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Para la definición de cada indicador, véase el recuadro I.2. Los índices PG y FGT₂ están calculados en base a la distribución de la población indigente.

b/ Gran Buenos Aires.

c/ Ocho Capitales Departamentales más la ciudad de El Alto.

d/ Área metropolitana de Asunción.

e/ Estimación para 19 países de la región.

Entre los países donde disminuyó la pobreza cabe resaltar los importantes logros alcanzados en Brasil, Chile y Panamá, en los que ésta se redujo en más de 10 puntos porcentuales. A manera de ejemplo, en el período 1991–2000 el crecimiento anual por habitante en estos países alcanzó 1.2%, 5.0% y 2.6%, respectivamente. Estas cifras ponen en evidencia que, si bien en todos los países se han puesto en marcha reformas de signo liberal, las transformaciones económicas y sociales impulsadas han tomado distinto rumbo e intensidad, condicionadas –entre otros factores– por la naturaleza y oportunidad de las políticas aplicadas y por las diferentes circunstancias iniciales.

En países como Costa Rica, Guatemala y Uruguay también se constató un desempeño destacable en la lucha contra la pobreza, con reducciones en el porcentaje de hogares pobres que oscilan entre 5 y 10 puntos porcentuales.

En contraste, resulta preocupante la situación de aquellos países en los que se registró un estancamiento o inclusive un retroceso en los indicadores de pobreza durante los años noventa, ya que con ello serían dos las "décadas perdidas" en términos de avanzar hacia una mayor equidad social. Al respecto, destaca sobre todo el caso de Venezuela, donde el porcentaje de hogares pobres pasó del 22% en 1981 al 34% en 1990, y actualmente alcanza un 44%. Ecuador, Colombia y Paraguay son también países donde no se consiguieron logros significativos en el alivio de la pobreza durante la última década.

A su vez, en lo que respecta a los países del Caribe, la evidencia disponible es aún muy escasa y no permite conocer en detalle lo sucedido con la magnitud de la pobreza en el último tiempo. No obstante, los pocos antecedentes recogidos para los años noventa conducen a señalar que la extensión de la pobreza en la subregión presenta un perfil marcadamente heterogéneo, con incidencias que fluctúan entre menos del 10% y más del 50% de la población en los diferentes países (véase el recuadro I.3).

Cabe hacer notar, sin embargo, que a la hora de juzgar la evolución de la pobreza es necesario tener pre-

sente que ciertos componentes esenciales de las políticas de gasto público producen efectos de mediano y largo plazo. Esto es particularmente importante para aquellos programas que persiguen fortalecer el capital humano y el capital social de los grupos de menores ingresos, pues aunque sólo rinden frutos en el largo plazo, suelen tener una gran repercusión en la capacidad de generación de ingresos corrientes de los más pobres, como asimismo en la corrección de las desigualdades estructurales.

Medidas de pobreza al ternativas y uso de "escalas de equivalencia"

El examen anterior acerca de los cambios ocurridos en la situación de pobreza en la región puede ser complementado mediante el uso de índices más completos que aquel que mide el porcentaje de hogares o de personas pobres. Sobre todo, el índice de brecha de pobreza –denotado como PG– es útil para medir la "profundidad" de la pobreza, al evaluar la distancia que media entre el ingreso promedio de los hogares pobres y la línea de pobreza. Mediante un cálculo similar, pero asignando mayor ponderación a las distancias de los hogares más pobres, el índice de "severidad" de la pobreza, o FGT₂, incorpora consideraciones de carácter distributivo en los resultados (véase el recuadro I.2).

En la medida en que el crecimiento del ingreso de los hogares pobres no altere fundamentalmente su distribución, debiera presentarse una mejora simultánea en el porcentaje de pobreza y en los indicadores de su profundidad (PG) y severidad (FTG₂). De manera similar, en los períodos en que se producen caídas generalizadas de los ingresos en los hogares de bajos recursos, es de esperar un empeoramiento de los tres indicadores. Precisamente, entre los años 1990 y 1999, todos los países de América Latina presentaron el paralelismo descrito en la evolución de sus indicadores de pobreza (véase el cuadro I.4).

Por otra parte, es sabido que la medición del bienestar a través de indicadores monetarios hace reco-

LA POBREZA EN EL CARIBE

En la actualidad, sólo algunos de los países del Caribe cuentan con encuestas de hogares periódicas de alta calidad, que permitan analizar la situación social y, especialmente, efectuar mediciones de la pobreza y de la inequidad en la distribución del ingreso. No obstante, para algunos de estos países existen estudios más o menos recientes sobre la pobreza y sus características a nivel nacional, elaborados ya sea por los propios gobiernos o por organismos internacionales. Sin embargo, el panorama general es que resulta poco habitual encontrar recopilaciones estadísticas sobre la pobreza en el Caribe, y hasta ahora no existen estudios que presenten mediciones equiparables para toda la región.

Entre los problemas que limitan la integración regional de las estadísticas sobre pobreza aparece, como un elemento central, la incompletitud o ausencia total de detalle sobre la metodología empleada para las estimaciones. Aspectos tales como el método de cálculo de la línea de pobreza, la elección de hogares o personas como unidad de análisis, la elección del ingreso o el consumo como indicadores de pobreza, o la especificación del año al que se refieren las estimaciones, entre otros, afectan de manera importante los resultados, haciendo casi imposible conocer la diferencia real en las incidencias de pobreza. A manera de ejemplo, es posible encontrar estimaciones de pobreza para Jamaica que difieren en más de 15 puntos porcentuales, aun cuando utilicen el mismo método para construir la línea de pobreza.

Una evaluación general de los estudios recientes sobre la pobreza en el Caribe permite apreciar que, aunque existen ciertas características comunes a todos los países, ésta se manifiesta de manera heterogénea en la región, sobre todo en lo referente a los porcentajes de población afectados por ella. Entre las características más recurrentes de los hogares pobres destacan su tamaño significativamente mayor que el de los hogares no pobres, sus niveles de educación relativamente bajos –aun en países como Barbados, donde la alfabetización alcanza al 98%– su hacinamiento, y acceso limitado al agua potable, servicios sanitarios y electricidad. Si bien en algunos casos la pobreza se concentra en áreas rurales, la región presenta un crecimiento acelerado de la pobreza urbana.

Con el objetivo de proveer una visión general de la pobreza en el Caribe, a continuación se presentan algunas estimaciones recopiladas en diversas fuentes. Es importante destacar que, debido a la multiplicidad de metodologías y años de referencia de las estimaciones, los datos no son directamente comparables con los que se incluyen en este documento para los países de América Latina, y en varios casos tampoco son cotejables con los de otros países listados en el cuadro. En todo caso, las cifras muestran que la variación en las condiciones de vida entre distintos países del Caribe puede ser muy amplia, y también permiten concluir que el país con mayor incidencia de pobreza es Haití, y los de menor incidencia son las Bahamas y Barbados.

ESTIMACIONES DE INCIDENCIA DE LA POBREZA EN ALGUNOS PAÍSES DEL CARIBE

País	Año	Método	Hogares/ Personas	Porcentaje de pobreza
Antigua y Barbuda	...	Otro	...	12
Bahamas	...	Otro	...	5
Barbados a/	1996	LP absoluta b/	Hogares	9
Belize c/	1995	LP absoluta	Personas	33
Dominica	...	Otro	...	33
Granada	...	Otro	...	20
Guyana	1993	LP absoluta	...	43
Haití	1987	Otro	...	65
Jamaica d/	1995	LP absoluta	Hogares	50
Saint Kitts y Nevis	...	Otro	...	15
Santa Lucía	1995	LP absoluta	...	25
San Vicente y las Granadinas	...	Otro	...	17
Suriname	1986	Otro	...	47
Trinidad y Tabago	1992	LP absoluta	...	21

Fuente: Las cifras corresponden a la recopilación incluida en Banco Mundial, *Poverty Reduction and Human Resource Development in the Caribbean*, Washington, D.C., 1996. Excepciones: a/ Rafael Diez de Medina, *Poverty and Income Distribution in Barbados 1996–1997*, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 1998. b/ Línea de pobreza absoluta. c/ Belize, *Poverty Assessment Report–Belize*, Ministerio de Desarrollo Económico, Oficina Central de Estadística, Banco de Desarrollo del Caribe, 1996. d/ Damien King, "Reforma macroeconómica y pobreza en Jamaica: desempeño y perspectivas 1989–2001", *Política macroeconómica y pobreza en América Latina y el Caribe*, Enrique Ganuza, Lance Taylor y Samuel Morley (comps.), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Madrid, Mundi–Prensa, 1998.

mendable, entre otras cosas, considerar las diferencias entre las necesidades de los hogares, habida cuenta no sólo de su tamaño sino también de su estructura demográfica. Las mediciones de pobreza tradicionalmente efectuadas para el *Panorama social* consideran estas diferencias, implícitamente, en los requerimientos nutricionales que dan lugar a las líneas de pobreza, los que no corresponden a los de un adulto tipo, sino que reflejan la composición familiar promedio de los hogares según sexo, edad y actividad física de sus miembros.

En los últimos años, han ganado popularidad fuera de la región las denominadas escalas de equivalencia como instrumentos que permiten dar cuenta de las distintas necesidades de los hogares. En general, éstas tienden a ser más "discriminantes" que la escala implícita en los requerimientos calóricos, ya que asignan una menor ponderación al consumo de los menores de edad y asumen un mayor grado de economías de escala para tamaños grandes de hogar. Con el objetivo de complementar el análisis, en el recuadro I.4 se presentan estimaciones de pobreza que utilizan tres distintas escalas de equivalencia alternativas.

En primer lugar, los datos muestran que las incidencias de pobreza estimadas mediante esas escalas de equivalencia –usadas preferentemente en algunos países desarrollados– son siempre menores que los valores per cápita, con diferencias que oscilan en un amplio rango. En los casos más extremos, los niveles de pobreza "adulto-equivalentes" pueden llegar a constituir una cuarta parte de las estimaciones per cápita.

Pese a lo anterior, la evolución de la pobreza a lo largo de la década de 1990, calculada en términos per cápita, presenta una tendencia similar a la de las estimaciones que emplean las referidas escalas de equivalencia, con la sola excepción de México. De igual manera, el ordenamiento de países en términos de la incidencia de la pobreza también señala cambios relativamente pequeños ante el uso de estas escalas. En particular, todas las estimaciones para 1999 coinciden en que los mayores porcentajes de pobreza se presentan en Honduras y Nicaragua, y que el país con menor incidencia de la pobreza es Uruguay.

A partir de lo expuesto cabe concluir, por ende, que las tendencias de la pobreza identificadas anteriormente en este capítulo son fuertes, y no se ven alteradas de manera importante por el uso de otras escalas de equivalencia. Sin embargo, la utilización de esas escalas demuestra tener un impacto sustancial sobre los niveles de pobreza estimados. Esta observación es crucial en el momento de elegir la escala de equivalencia más apropiada para las mediciones de pobreza en América Latina, debido a que no se dispone de un sustento teórico apropiado para cumplir con este objetivo. Parece pertinente, entonces, que mientras no exista un mayor consenso en torno a la aplicación de determinadas escalas de equivalencia, la medición de la pobreza continúe basándose fundamentalmente en indicadores per cápita, definidos a partir de estándares de necesidades que toman en cuenta la composición promedio de los hogares de cada país.

MEDICIÓN DE LA POBREZA Y ESCALAS DE EQUIVALENCIA

Establecer comparaciones adecuadas de los niveles de pobreza, ya sea entre países o en el tiempo para un mismo país, depende de diversos aspectos metodológicos. Al respecto, es particularmente importante tomar en consideración el tipo de indicador utilizado en la medición, la robustez de los resultados y las características demográficas de los hogares.

Como se señaló en el recuadro I.2, los indicadores de pobreza suelen caracterizarse por un desequilibrio entre la facilidad de interpretación y la satisfacción de ciertas condiciones consideradas deseables. Así como el indicador de mayor popularidad, la *incidencia de la pobreza* (H), es limitado para el análisis, puesto que no satisface algunos axiomas básicos, el *índice de severidad de la pobreza* (FGT_2) puede ser difícil de interpretar, aunque cumpla con todos los requerimientos esperados de un buen indicador de pobreza. En todo caso, el índice FGT_2 se considera preferible para fines comparativos, ya que refleja de manera más completa la situación de pobreza en los países.

Por otra parte, la "robustez" estadística de las medidas de pobreza es también un factor relevante en el análisis y comparación de resultados. Existen propuestas que sugieren utilizar rangos de líneas de pobreza en lugar de valores puntuales de ésta, con el fin de evaluar el grado de *dominancia estocástica*, equivalente al orden de Lorenz en los estudios de desigualdad. Bajo este enfoque, cuando se compara la incidencia de la pobreza entre dos poblaciones (**A** y **B**), se satisface el principio de dominancia estocástica de primer orden si para todo valor de la línea de pobreza, **A** se ubica siempre por debajo de **B**. En este caso, se puede afirmar que en **A** existe menos pobreza, resultado que será compatible con aquel generado por índices más completos (como PG o FGT_2). Si a partir de H no se pueden derivar resultados concluyentes, se debe proceder a efectuar el análisis con el índice PG (dominancia estocástica de 2º orden) o, en caso de que éste falle, con el índice FGT_2 (dominancia estocástica de 3er orden).

Un tercer aspecto a considerar en la estimación de medidas de pobreza se refiere a las características demográficas del hogar. Como se sabe, el ingreso requerido para satisfacer las necesidades de un hogar difiere según la composición de éste. Por lo tanto, variables como el ingreso (o el gasto) total del hogar o el ingreso per cápita son insuficientes como indicadores del bienestar, ya que el primero ignora cualquier característica demográfica de los miembros del hogar, y el segundo sólo toma en cuenta el número de miembros.

Un enfoque más completo para abordar el análisis del bienestar contempla el uso de las denominadas *escalas de equivalencia*, índices que permiten comparar el costo de vida relativo de las familias en consideración a su tamaño y composición por edad y género. El concepto de escalas de equivalencia agrupa dos elementos simultáneamente, la *equivalencia por unidad de consumidor* –que toma en cuenta las diferentes necesidades entre miembros del hogar, expresadas en términos de un miembro referencial–, y las *economías de escala* –en las que la adición de un nuevo miembro a la familia implica gastos cada vez menores para mantener constante el nivel de utilidad del hogar.

Las escalas de equivalencia expresan el tamaño del hogar en términos del número de "adulto-equivalentes" que hay en él. Este valor está acotado entre un mínimo de uno –caso en el que las necesidades de todos los miembros del hogar equivalen a las de un solo miembro–, y un máximo igual al número de miembros del hogar –cuando cada miembro de éste equivale por sí solo a un adulto. En consecuencia, el "ingreso por adulto-equivalente" (es decir, el ingreso total dividido por el número de "adulto-equivalentes") se encontrará siempre entre el ingreso per cápita y el ingreso total del hogar.

La estimación de escalas de equivalencia puede abordarse mediante alternativas variadas, que difieren tanto en su base teórica como en su mecanismo de estimación. Una de las opciones más utilizadas consiste en calcular las escalas a partir de los patrones de consumo observado de las familias. Para ello se suele estimar los parámetros de una ecuación del tipo $w = \alpha + \beta \ln(y/n) + \sum_i \gamma_i n_i + \varepsilon$, donde γ representa el ingreso del hogar, n el total de personas, y n_i el número de personas en una categoría de interés i (por ejemplo, grupos de edad); la variable w representa la proporción de gasto en alimentos o de gasto en bienes consumidos exclusivamente por los adultos, según la metodología empleada sea la de Engel o Rothbart.

Desde hace algunos años han recibido gran atención las escalas paramétricas, que plantean explícitamente los grados de economías de escala y de equivalencias de consumo a través de una forma funcional genérica. La mayor parte de las escalas paramétricas pueden sintetizarse en la expresión $(A + pN)^F$, donde el parámetro p representa la equivalencia del consumo de un niño en términos del de un adulto, el parámetro F da cuenta de las economías de escala, y las variables **A** y **N** corresponden al número de personas adultas y al número de niños, respectivamente.

No obstante lo anterior, debe señalarse que no existe aún un consenso respecto del tipo de escala más apropiada para los estudios de pobreza, o bien sobre el valor de los respectivos parámetros. Sin embargo, con el objetivo de ilustrar los efectos de incorporar escalas de equivalencia, a continuación se presentan estimaciones de la incidencia de la pobreza para diversos

(continúa)

Recuadro I.4 (conclusión)

MEDICIÓN DE LA POBREZA Y ESCALAS DE EQUIVALENCIA

países de América Latina empleando tres escalas paramétricas comúnmente utilizadas. La escala "OCDE" (utilizada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos), correspondiente a la forma $1 + 0.7(A-1) + 0.5N$, expresa al primer adulto con el valor 1, cada adulto agregado como 0.7 del primer adulto, y cada niño (menores de 14 años) como 0.5 del primer adulto. La escala denominada como "USA", recomendada para la construcción de la línea de pobreza estadounidense, corresponde a la forma $(A + 0.7N)^{0.7}$. Por último, la escala "LIS", propuesta por el Luxembourg Income Study y empleada extensamente en algunos países desarrollados, equivale a la raíz cuadrada del número de miembros del hogar.

El cuadro que se presenta enseguida permite extraer al menos dos conclusiones. En primer lugar, el uso de escalas de equivalencia reduce las estimaciones de pobreza en una magnitud que crece a medida que aumenta el grado de economías de escala y disminuyen las equivalencias por unidad de consumidor. La gran proporción que pueden alcanzar estas reducciones revela que la elección de una escala de equivalencia no es un factor trivial en las estimaciones de pobreza.

En segundo lugar, debido precisamente a ese gran impacto que pueden llegar a tener las escalas de equivalencia sobre las estimaciones de pobreza, y ante la ausencia de un sustento teórico que permita elegir la escala más apropiada, se justifica seguir utilizando las tradicionales estimaciones per cápita de pobreza, al menos mientras no exista un acuerdo general sobre algunos aspectos centrales, tales como el tipo de escala a utilizar, los valores más adecuados para los parámetros, o si en cada país debe aplicarse una escala distinta.

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBREZA SEGÚN DISTINTAS ESCALAS DE EQUIVALENCIA, TOTAL NACIONAL, 1990 Y 1999

(En porcentajes de personas)

Criterio						Criterio					
País	Año	Per cápita	OCDE a/	USA b/	LIS c/	País	Año	Per cápita	OCDE a/	USA b/	LIS c/
Argentina d/	1990	21.2	18.4	12.9	8.3	Honduras	1990	80.5	77.6	70.3	60.1
	1999	19.7	16.6	11.2	6.3		1999	79.7	76.6	68.6	56.2
Bolivia	1989 e/	53.1	47.5	37.8	26.8	México	1989	47.8	40.9	29.2	17.6
	1999	60.6	56.1	48.0	39.0		1998	46.9	41.5	31.7	19.8
Brasil	1990	48.0	44.7	37.5	28.9	Nicaragua	1993	73.6	68.1	58.1	46.5
	1999	37.5	34.5	27.8	20.6		1998	69.9	65.2	55.6	43.6
Chile	1990	38.6	34.5	25.7	17.1	Panamá	1991	42.8	38.9	30.0	21.1
	1998	21.7	18.4	12.7	7.7		1999	30.2	26.6	19.4	12.7
Colombia	1991	56.1	51.4	40.9	28.4	Paraguay	1990 g/	42.2	37.8	25.8	16.3
	1999	54.9	50.8	41.2	30.2		1999	60.6	56.2	47.3	35.5
Costa Rica	1990	26.2	21.2	14.8	10.2	República Dominicana	1997	37.2	32.6	24.7	16.7
	1999	20.3	17.0	12.1	8.7		Uruguay f/	1990	17.8	14.5	9.2
Ecuador f/	1990	62.1	57.1	40.5	31.3	1999		9.4	7.5	4.3	2.2
	El Salvador	1995	54.2	48.5	36.8	25.3	Venezuela	1990	40.0	34.4	23.9
1999		49.8	44.9	35.0	25.5	1999		49.4	44.8	34.4	24.3
Guatemala	1989	69.1	66.2	54.5	41.0						
	1998	60.5	56.3	44.8	32.3						

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ OCDE = Escala aplicada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

b/ USA = Escala recomendada para la construcción de la línea de pobreza estadounidense.

c/ LIS = Escala propuesta por el Luxembourg Income Study (LIS).

d/ Gran Buenos Aires.

e/ Ocho ciudades principales y El Alto.

f/ Total urbano.

g/ Área metropolitana de Asunción.

PRECISIONES METODOLÓGICAS CON RESPECTO A ESTIMACIONES DE POBREZA ALTERNATIVAS

La medición de la pobreza puede realizarse mediante metodologías diversas cuyos resultados abarcan un amplio margen de variación y que incluso pueden llegar a ser contradictorios. Resulta importante, por tanto, conocer en qué consisten otras alternativas de medición, distintas a las que emplea la CEPAL en su *Panorama social de América Latina*, para así tomar las precauciones necesarias en el momento de interpretar y comparar resultados. De manera específica, en el presente recuadro se describe el procedimiento del Banco Mundial para comparaciones internacionales de pobreza como ejemplo del uso de una metodología alternativa para el cálculo de líneas de pobreza.

Con el propósito de evaluar comparativamente la pobreza entre países o a lo largo del tiempo, el Banco Mundial utiliza una línea de pobreza única. Esta línea, que tiene por objeto reflejar los estándares de pobreza prevalentes en los países de menores ingresos, se calcula como el valor mediano de las 10 líneas de pobreza nacionales per cápita más bajas a nivel mundial. El valor resultante equivale, para el año 2000, a 32.74 dólares PPA (paridad del poder adquisitivo) mensuales, o 1.08 dólares diarios. De esta manera, la línea conocida como "1 dólar al día" refleja un nivel de ingresos lo suficientemente bajo como para que una persona sea considerada pobre en cualquier región del mundo. Asimismo, el Banco Mundial suele incluir en sus tablas una línea de pobreza más alta, que se obtiene al multiplicar por dos el valor anterior, y que refleja estándares de pobreza un poco más elevados.

Al fijar una línea de pobreza común a todos los países, inevitablemente surgen dificultades de comparabilidad relacionadas con los distintos niveles de precios vigentes en cada uno de ellos. Este problema se intenta resolver, al menos parcialmente, empleando tipos de cambio que reflejen una "paridad del poder adquisitivo" (PPA), es decir, tipos de cambio corregidos de manera que un dólar tenga la misma capacidad de compra en cualquier lugar del mundo. En el caso del Banco Mundial, la línea de pobreza publicada en el *Informe sobre el desarrollo mundial 2000–2001: lucha contra la pobreza* está expresada en "dólares PPA", avaluados a los precios de 1993.^{*} El último paso en el procedimiento para calcular la pobreza consiste en llevar los datos de la encuesta al mismo año de referencia de la línea de pobreza, para lo que se deflactan estos valores de acuerdo a la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) en ese período.

Es importante aclarar que la línea de pobreza aquí descrita tiene la finalidad de establecer una base común para efectuar comparaciones internacionales. Por lo tanto, cuando el objetivo es evaluar y formular políticas o analizar en detalle las características de la pobreza, el mismo Banco Mundial recomienda la utilización de líneas de pobreza que correspondan a las realidades específicas de cada país. Precisamente, las líneas de pobreza que calcula la CEPAL son de este tipo, ya que consideran los requerimientos calóricos y características demográficas prevalentes en cada país.

A continuación, se presentan las estimaciones de pobreza para los países de América Latina que incluye el Banco Mundial en el citado *Informe sobre el desarrollo mundial*, utilizando líneas de pobreza internacionales equivalentes a 32.74 dólares y 65.48 dólares (PPA de 1993) mensuales, respectivamente. Obsérvese que la primera de ellas produce estimaciones bastante bajas, que en casi todos los casos resultan inferiores a los porcentajes de indigencia registrados por la CEPAL. En tanto, la segunda genera resultados de incidencia de la pobreza que, con excepción de un caso, son inferiores a las estimaciones basadas en líneas nacionales.

ESTIMACIONES CON LÍNEAS DE POBREZA NACIONALES E INTERNACIONALES

(En porcentajes de población)

País	Líneas nacionales (CEPAL)			Líneas internacionales (Banco Mundial)		
	Año	Indigencia	Pobreza	Año	Menos de 1 dólar diario a/	Menos de 2 dólares diarios b/
Bolivia	1989 c/	23.3	53.2	1990	11.3	38.6
Brasil	1996	13.9	35.8	1997	5.1	17.4
Chile	1994	8.0	28.6	1994	4.2	20.3
Colombia	1997	23.5	50.9	1996	11.0	28.7
Costa Rica	1997	7.8	22.5	1996	9.6	26.3
Ecuador	1994 d/	25.5	57.9	1995	20.2	52.3
El Salvador	1997	23.3	55.5	1996	25.3	51.9
Guatemala	1989	41.8	69.1	1989	39.8	64.3
Honduras	1997	54.4	79.1	1996	40.5	68.8
México	1996	21.3	52.1	1995	17.9	42.5
Panamá	1997	13.0	33.2	1997	10.3	25.1
Paraguay	1994 d/	18.8	49.9	1995	19.4	38.5
Rep. Dominicana	1997	14.4	37.2	1996	3.2	16.0
Uruguay	1990 d/	3.4	17.8	1989	< 2.0	6.6
Venezuela	1996	20.5	48.1	1996	14.7	36.4

Fuente: CEPAL, cuadros I.4 y I.5; Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo mundial 2000–2001: lucha contra la pobreza*, Washington, D.C., abril de 2001.

a/ Equivalente a 32.74 dólares por persona al mes.

b/ Equivalente a 65.48 dólares por persona al mes.

c/ Ocho capitales departamentales más la ciudad de El Alto.

d/ Área urbana.

* Los "tipos de cambio PPA" utilizados actualmente son estimados por el Banco Mundial a través del Proyecto de comparación internacional (PCI) de 1993, que cuenta con una cobertura de 110 países. Las estimaciones no son comparables con los valores PPA utilizados en años anteriores, provenientes de las Penn World Tables, ya que pueden variar considerablemente en función de la metodología empleada.

C. El perfil de los hogares pobres

La mayoría de los hogares pobres en América Latina residen en viviendas que carecen de acceso al agua potable y, en menor medida, en viviendas con más de tres personas por cuarto. Además, son hogares con una alta tasa de dependencia demográfica y baja densidad ocupacional, donde el jefe generalmente posee menos de 3 años de estudio y en algunos casos se encuentra desempleado. Los niños y jóvenes de hogares pobres suelen desenvolverse en entornos de bajo clima educacional, se incorporan tempranamente al trabajo, y muchos de ellos no estudian ni trabajan.

De los 211 millones de latinoamericanos que en 1999 se encontraban en situación de pobreza, alrededor de 22 millones residían en hogares cuyos ingresos per cápita eran no inferiores al 90% del umbral monetario mínimo requerido para satisfacer sus necesidades básicas.⁴ Esto quiere decir que cerca de una décima parte de los pobres se encuentran en condiciones relativamente favorables para superar la línea de la pobreza, pues sus ingresos corrientes son apenas inferiores a los que demanda la satisfacción de sus necesidades mínimas de consumo. Presumiblemente, la mejor posición de este conglomerado frente al resto de los pobres los dota de una mayor capacidad de respuesta ante la aplicación de políticas económicas y sociales orientadas a la reducción de la pobreza. En contraste, el grupo de no pobres con ma-

yor riesgo de caer en la pobreza abarca a 45 millones de personas, en la medida en que sus ingresos superan en no más de un 25% los de la línea de pobreza. Estas personas son altamente vulnerables a las fluctuaciones económicas, ya que impactos adversos a sus ingresos, por pequeños que sean, pueden acarrear deterioros importantes en su calidad de vida⁵ (véase el cuadro I.6).

Otro acercamiento a las condiciones en que se desenvuelven quienes viven en situación de pobreza, también basado en los niveles de ingreso, se deriva de la opción de adoptar un valor referencial común a todos los países, que denote graves privaciones monetarias. Un nivel de ingresos correspondiente a "1 dólar diario", tradicionalmente empleado por el Ban-

4 Cabe recordar que para las estimaciones presentadas hasta aquí en este primer capítulo del *Panorama social*, la identificación de las personas y hogares pobres ha sido determinada en función de la insuficiencia de sus ingresos con respecto a una línea de pobreza preestablecida para cada país.

5 Esto podría interpretarse además, aunque desde luego con cierta cautela, como un rango plausible en el que se encuentra el número de personas pobres en la región, según se utilice líneas de pobreza más o menos austeras que las actualmente empleadas. Así, es posible afirmar, en términos muy generales, que el volumen de población pobre en América Latina asciende al menos a 190 millones de personas, ya que es poco probable que alteraciones metodológicas aceptables reduzcan el valor de las líneas de pobreza por país en más de un 10%. Por su parte, si se utilizan líneas más altas, como por ejemplo 25% superiores a las actuales, el número de personas pobres subiría a 256 millones, que representan el 53% de la población total.

co Mundial como línea de pobreza internacional, resulta muy ilustrativo en este caso (véase el recuadro I.5). Al respecto, cabe advertir sin embargo que los valores presentados en el cuadro I.6 constituyen solamente una aproximación a esa línea, pues están basados en dólares corrientes que no consideran la paridad del poder adquisitivo.

Las estimaciones señalan que en 1999 76 millones de personas subsistían con un ingreso inferior a 1 dólar diario, monto insuficiente inclusive para satisfacer las necesidades alimentarias mínimas (un ingreso per cápita equivalente a 1 dólar diario es aún menor que la línea de indigencia promedio). Por su parte, cerca de 175 millones de personas, el 36% de la po-

Cuadro I.6

AMÉRICA LATINA: RASGOS SELECCIONADOS DEL PERFIL DE LA POBREZA, 1999				
Población en hogares particulares	Cantidad de personas (miles)	Proporción respecto de la población total a/ (En porcentajes)	Probabilidad de b/	
			Pobreza (En porcentajes)	Indigencia (En porcentajes)
Total	482 727	100.0	43.1	18.4
Urbana	361 619	74.9	36.6	11.9
Rural	121 108	25.1	62.7	37.8
Pobre	211 392	100.0	-	-
Urbana	134 229	63.5	-	-
Rural	77 163	36.5	-	-
Indigente	89 368	100.0	-	-
Urbana	43 033	48.2	-	-
Rural	46 334	51.8	-	-
Con ingresos entre 0.9 y 1.0 líneas de pobreza per cápita	21 668	4.5	100.0	-
Con ingresos entre 1.0 y 1.25 líneas de pobreza per cápita	44 897	9.3	-	-
Con menos de 1.0 dólares per cápita al día c/	76 415	15.8	100.0	88.1
Con menos de 2.0 dólares per cápita al día c/	175 189	36.3	95.1	50.0
En viviendas con hacinamiento d/	76 605	15.9	79.6	46.4
En viviendas sin acceso a agua potable e/	164 506	34.1	66.7	34.9
En hogares con alta tasa de dependencia demográfica f/	68 381	14.2	68.1	41.2
En hogares con baja densidad ocupacional g/	109 995	22.8	65.1	35.9
En hogares con jefes:				
Mujeres	90 677	18.8	43.1	17.5
De baja educación				
- Menos de 3 años de estudio	130 465	27.0	63.3	31.8
- Menos de 10 años de estudio	375 636	77.8	51.7	22.3
Desempleados	15 825	3.3	71.2	43.6
Ocupados en sectores de baja productividad h/	152 615	31.6	48.7	23.4
Que trabajan en la agricultura i/	100 696	20.9	65.1	36.8
Ocupada en establecimientos de:				
- Hasta 5 trabajadores	37 879	7.8 (17.8)	39.0	12.2
- De 6 a 10 trabajadores	12 575	2.6 (5.9)	29.1	8.2
Ocupada sin calificación profesional o técnica	165 443	34.3 (86.4)	38.5	14.1
Niños que no asisten a la escuela j/	05 972	1.2 (7.9)	76.5	48.2
Niños en hogares con bajo clima educacional k/	83 661	17.3 (56.0)	74.0	39.2
Jóvenes de 15 a 19 años que trabajan	18 655	3.9 (36.6)	46.9	18.6
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan	21 823	4.5 (23.2)	58.1	24.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Entre paréntesis se indica el porcentaje de las personas con el atributo definido, respecto del total de personas del grupo (ejemplo: niños de 6 a 12 años que no asisten a la escuela, como proporción del total de niños de esa edad).

b/ Porcentaje de pobres e indigentes sobre el total de personas en cada categoría.

c/ Calculado a partir del tipo de cambio corriente en cada país.

d/ Se considera "hacinado" a los hogares con tres o más personas por cuarto (excluidos cocina y baño).

e/ Hogares sin agua potable por cañería dentro de la vivienda.

f/ Hogares con una proporción de personas menores de 15 y mayores de 64 años de edad respecto de las de 15 a 64 años superior a 0.75.

g/ Hogares con una proporción de ocupados respecto del número de miembros inferior a 0.25.

h/ Patrones y asalariados en establecimientos de hasta cinco personas, empleados domésticos y trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

i/ Incluye a los ocupados en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.

j/ Se refiere a niños de 6 a 12 años de edad.

k/ Niños menores de 15 años en hogares cuyos miembros adultos (de 25 años y más de edad) tienen en promedio de 0 a 5.99 años de estudio.

blación total, obtuvieron ingresos per cápita inferiores a 2 dólares diarios en ese mismo año. Aunque estas líneas referenciales no pretenden medir la indigencia y la pobreza, ilustran de manera directa la notable precariedad en los ingresos que sufre más de un tercio de la población de América Latina.

Lo anterior puede a su vez complementarse mediante la identificación de ciertos elementos consustanciales al fenómeno de la pobreza, que acompañan a la insuficiencia de ingresos y que ofrecen una caracterización más amplia de las condiciones de vida de los pobres en la región. Entre ellos cabe mencionar rasgos tales como el residir en una vivienda hacinada, el desempleo del jefe del hogar, y el bajo clima educacional de los hogares, aspectos que conllevan altas probabilidades de pobreza.⁶

En efecto, poco menos de 77 millones de personas en América Latina habitan en viviendas hacinadas (tres o más personas por cuarto), con probabilidades de pobreza e indigencia de 80% y 46%, respectivamente. De las características seleccionadas para el análisis, ésta es la que más discrimina entre grupos pobres y no pobres, en el sentido que poseerla constituye un poderoso indicio de que la persona no cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Residir en una vivienda hacinada es una condición que caracteriza al 29% de los pobres, mientras que tan solo el 6% de los no pobres se encuentran en situación similar.

Aunque con menor probabilidad de pobreza, otro indicador de vivienda representativo de la insuficiencia de recursos es la falta de acceso al agua potable, situación en la que se encuentran 165 millones de personas, de las cuales más de 109 millones son pobres (66.7%). Sin embargo, la dificultad de acceder al agua potable no sólo afecta a un 52% de las personas pobres, sino también al 20% de la población no pobre de la región.

Algunas características demográficas de los hogares también presentan una correlación importante con la pobreza, sobre todo cuando éstas se relacionan es-

trechamente con su capacidad de generación de ingresos. La alta tasa de dependencia demográfica es una de ellas, ya que mientras menor es la proporción de personas en edad de trabajar en relación a la proporción de niños y ancianos en el hogar, más difícil se vuelve obtener los recursos necesarios. Por otra parte, la baja densidad ocupacional, entendida como la presencia de un ocupado por cada cuatro o más miembros en el hogar, es también una característica que se asocia a una probabilidad de pobreza superior al promedio. Si bien ambos factores son representativos de la pobreza –con probabilidades de 68.1% y 65.1%, respectivamente–, el segundo se encuentra más extendido en la región, y comprende un tercio de las personas pobres.

La posibilidad de que las personas sean pobres depende además, entre otros factores, de la situación laboral y educativa del jefe del hogar, que generalmente actúa como el proveedor principal de recursos. Así, el desempleo del jefe del hogar aparece como una de las características de mayor probabilidad de pobreza (71%) para los miembros de ese hogar. No obstante, la proporción de pobres que se encuentra en esta situación es muy baja (5.3%), por lo que este rasgo presenta una baja incidencia cuantitativa en la caracterización agregada de la pobreza. En consecuencia, es posible deducir que por más que los programas de generación de empleo puedan estar adecuadamente focalizados hacia los grupos pobres, su capacidad para afectar significativamente los resultados globales de pobreza es limitada; en tal sentido, lograr este objetivo requiere más bien de acciones que contribuyan a aumentar la remuneración de los empleados, ya sea a través de políticas salariales o programas de capacitación y especialización. A su vez, esto último se ve reforzado por el hecho que cerca de un 39% de las personas pobres viven en un hogar cuyo jefe cuenta con menos de 3 años de estudio, aun cuando esta particularidad también se registra en el 18% de las personas no pobres.

Merecen destacarse también otras dos características relevantes relativas a los jefes de hogar. Una de ellas es que la probabilidad de pobreza de los casi 91 mi-

6 Se entiende como "probabilidad de pobreza" la proporción de personas pobres en una categoría determinada.

llones de personas pertenecientes a hogares encabezados por mujeres es similar a la probabilidad promedio, lo que expresa que este atributo no connota –por sí solo– una condicionante particular de la pobreza. De igual manera, se observa que el trabajo agrícola de los jefes de hogar, típicamente caracterizado por ingresos precarios, no se vincula a mayores probabilidades de pobreza de los miembros de esos hogares que las derivadas de la mera residencia en áreas rurales.

Por otra parte, la pobreza implica comúnmente graves consecuencias en cuanto a deficiencias educativas de los menores, como la inasistencia a clases de los niños y la deserción escolar juvenil para incorporarse al mercado laboral. Los antecedentes analizados muestran que, efectivamente, los niños que no asisten a la escuela tienen altas probabilidades de pobreza (76.5%). No obstante, la inasistencia a la escuela es una condición cada vez menos común entre los grupos pobres y no pobres, y afecta actualmente sólo al 1.2% de la población y al 7.9% de los niños de 6 a 12 años de edad. En cambio, los menores de 15 años que residen en hogares con bajo clima educacional –aquellos donde los adultos tienen, en promedio, menos de 6 años de estudio– ascienden en América Latina a más de 83 millones (56% de los niños de esa edad), de los cuales un 74% es pobre. El clima edu-

cacional del hogar es un factor de gran relevancia en la continuidad de los estudios y la obtención de mayores niveles educativos de niños y jóvenes. Además, la presencia en el hogar de jóvenes que trabajan y de jóvenes que no estudian ni trabajan son también atributos asociados a probabilidades de pobreza superiores al promedio. En la región trabajan poco más de 18 millones de jóvenes de 15 a 19 años, en tanto que entre los de 15 a 24 años de edad hay casi 22 millones que no estudian ni trabajan, lo que representa alrededor de una cuarta parte de las personas de ese grupo etáreo (véase el cuadro I.6).

En resumen, y de una manera muy general, una caracterización de las condiciones de vida de los pobres en América Latina permite resaltar al menos los siguientes rasgos principales: son residentes en viviendas que carecen de acceso al agua potable y, en menor proporción, en viviendas con más de tres personas por cuarto (hacinadas); pertenecen a hogares con alta tasa de dependencia demográfica y baja densidad ocupacional; el jefe de hogar posee menos de 3 años de estudio y, en algunos casos, está desempleado. Entre los niños menores de 15 años, el bajo clima educacional de los adultos del hogar es también una característica imputable a la condición de pobreza.

D. Escenarios futuros en el combate a la pobreza

La reducción a la mitad de los actuales índices de pobreza extrema hacia el año 2015, objetivo central de la denominada Declaración del Milenio, supone un esfuerzo importante pero realizable para muchos países de América Latina. En el contexto de las modalidades de desarrollo vigentes, el crecimiento económico debiera jugar un papel destacado en el cumplimiento de esta meta, demandándose para ello una tasa de aumento del producto per cápita no inferior al 2.3% promedio anual. En la región en su conjunto, durante los años noventa cada punto porcentual de crecimiento redujo la tasa de pobreza extrema en 1.21%, pero en torno a este valor medio se constata una gran dispersión, dado que este efecto fue claramente mayor en las áreas urbanas que en las rurales, así como en los países con niveles de pobreza inferiores al promedio regional (18%) respecto de aquellos de menor desarrollo relativo.

1. Crecimiento económico y disminución de la pobreza

El restablecimiento de una senda de crecimiento económico, aunque algo débil e inestable, jugó sin duda un papel determinante en la evolución de la pobreza de América Latina en los años noventa. Las estadísticas confirman que ante períodos de auge las incidencias de pobreza tendieron a disminuir en la mayoría de los países, en tanto que situaciones contractivas o de estancamiento económico acarrearán un deterioro de las condiciones de vida de la población, sobre todo de aquella de menores recursos.

Sin embargo, pese a la clara relación que queda de

manifiesto entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, se refuerza al mismo tiempo la idea, ya comentada en ediciones anteriores de este *Panorama social*, de que la modalidad particular del crecimiento en cada país ha tenido efectos diferenciados sobre el desarrollo social y, específicamente, en el alivio de la pobreza. Así, mientras que en Chile una tasa media anual de crecimiento del producto per cápita de 4.5% en el período 1990–2000 (medida en dólares de 1995) generó una disminución de 6.1% anual en el coeficiente de pobreza (18 puntos porcentuales en total), en Uruguay una tasa de 2.7% indujo la caída de este índice en 6.8%, y en Brasil una tasa de crecimiento de sólo 1% promedio anual entre 1990 y 1999 provocó una disminución de la

pobreza de 2.7% en ese período, y de 6.4% de la indigencia o pobreza extrema. Del mismo modo, Argentina, con un crecimiento promedio del ingreso per cápita de 3.3% en la década de 1990, redujo la pobreza en un modesto 0.8%, mientras que en Colombia un crecimiento de tan solo 0.6% permitió una merma de la pobreza apenas inferior a la de Argentina (0.3%).

Por otra parte, entre los países que experimentaron un relativo estancamiento del producto, en Honduras se logró, pese a ello, evitar un aumento de la po-

breza y atenuar el de la indigencia a razón de un 0.7% anual, mientras que en Venezuela no se consiguió impedir un cierto deterioro social, que alcanzó a 2.4% en la tasa de pobreza y 4.5% en la de indigencia, al igual que Ecuador con 0.2% y 2.0%, respectivamente (véase el cuadro I.7).

Como se aprecia, esta variedad de situaciones nacionales registradas a lo largo del último decenio se traduce en un amplio rango de valores del coeficiente de elasticidad que asocia la variación del producto per cápita y la de la pobreza. En algunos países, esta elas-

Cuadro I.7

AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA Y DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA, 1990-1999									
País	Año	PIB per cápita (dólares de 1995)	Porcentaje de población		Variación en el período (promedio anual)			Coeficiente de elasticidad	
			Pobre	Indigente	PIB per cápita	Coeficiente de		(P)/PIB per cápita	(I)/PIB per cápita
						pobreza (P)	indigencia (I)		
Argentina a/	1990	5545	21.2	5.2					
	1999	7435	19.7	4.8	3.3	-0.8	-0.9	-0.21	-0.23
Brasil	1990	3859	48.0	23.4					
	1999	4204	37.5	12.9	1.0	-2.7	-6.4	-2.45	-5.03
Chile	1990	3425	38.6	12.9					
	2000	5309	20.6	5.7	4.5	-6.1	-7.8	-0.85	-1.01
Colombia	1991	2158	56.1	26.1					
	1999	2271	54.9	26.8	0.6	-0.3	0.3	-0.41	0.51
Costa Rica	1990	2994	26.2	9.8					
	1999	3693	20.4	7.8	2.4	-2.7	-2.5	-0.95	-0.87
Ecuador b/	1990	1472	62.1	26.2					
	1999	1404	63.5	31.3	-0.5	0.2	2.0	-0.49	-4.27
El Salvador	1995	1675	54.2	21.7					
	1999	1750	49.8	21.9	1.1	-2.1	0.2	-1.81	0.21
Guatemala	1989	1347	69.1	41.8					
	1998	1534	60.5	34.1	1.5	-1.5	-2.2	-0.90	-1.33
Honduras	1990	686	80.5	60.6					
	1999	694	79.7	56.8	0.1	-0.1	-0.7	-	-
México	1989	3925	47.8	18.8					
	1998	4489	46.9	18.5	1.5	-0.2	-0.2	-0.13	-0.11
Nicaragua	1993	416	73.6	48.4					
	1998	453	69.9	44.6	1.7	-1.0	-1.6	-0.57	-0.89
Panamá	1991	2700	42.8	19.2					
	1999	3264	30.2	10.7	2.4	-4.3	-7.0	-1.41	-2.12
Uruguay b/	1990	4707	17.8	3.4					
	1999	5982	9.4	1.8	2.7	-6.8	-6.8	-1.74	-1.74
Venezuela	1990	3030	40.0	14.6					
	1999	3037	49.4	21.7	0.0	2.4	4.5	-	-
América Latina	1990	3349	48.3	22.5					
	1999	3804	43.8	18.5	1.4	-1.1	-2.2	-0.69	-1.31

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

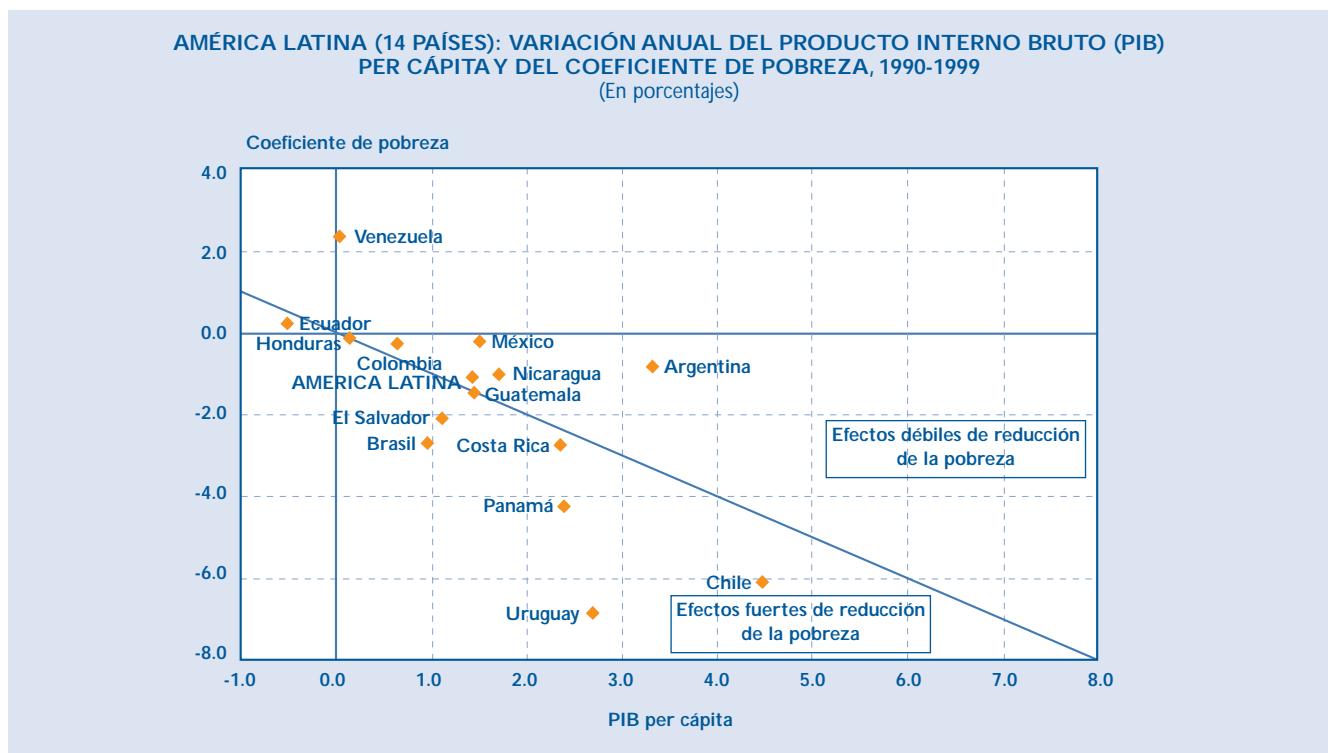
a/ Gran Buenos Aires.

b/ Total urbano.

ticidad –calculada en términos puntuales– alcanzó un valor cercano a -1 (Chile, Costa Rica y Guatemala), o fue algo más pronunciada, en un rango de -1 a -1.5 (Panamá), denotando con ello que cada punto porcentual de crecimiento implicó un cambio equivalente en la pobreza o bien de poco más de un punto de disminución en la tasa de pobreza, según los casos; pero en otros países se advierten diferencias marcadas, hacia arriba o hacia abajo, respecto de esos valores. Tomando en cuenta esta dispersión, para el conjunto de América Latina el coeficiente aludido asumió valores en torno de -0.70 respecto de la pobreza y de -1.30 en cuanto a la indigencia o pobreza extrema.

Lo anterior confirma que el aumento de la actividad económica, si bien constituye un elemento muy importante, no es el único asociado a la reducción de la pobreza, dado que las situaciones descritas dejan traslucir rasgos propios de la modalidad de desarrollo de cada país, reflejada –entre otros aspectos– en la dinámica sectorial del producto, el desempeño del mercado de trabajo, el efecto de las políticas sociales sobre la conformación del ingreso familiar de los grupos pobres, y en la mayor o menor estabilidad del crecimiento; esto último, en virtud de la reconocida asimetría que presentan las diferentes etapas del ciclo económico en relación al comportamiento de la pobreza (véase el gráfico I.2).

Gráfico I.2



Fuente: Cuadro I.7.

Por otra parte, la aplicación de un modelo de regresión simple, que vincula el crecimiento económico y la evolución de la pobreza extrema, permite mostrar que, en promedio, por cada punto porcentual que aumenta el PIB per cápita, la tasa de indigencia, a nivel nacional, se reduce en alrededor de 1.21%⁷ (véase el recuadro I.6). A su vez, deja de manifiesto el efecto dispar que el crecimiento genera en los distintos contextos geográficos. Así, en las zonas rurales, por cada punto de aumento en el producto per cápita se estima que la tasa de indigencia se reduce sólo en 0.61 puntos porcentuales, en tanto que en las zonas urbanas la efectividad del crecimiento es notablemente mayor, ya que ese mismo nivel de aumento se corresponde con una baja en la tasa de indigencia de 1.65%. De igual modo, es posible verificar que la sensibilidad del indicador de indigencia a las variaciones del producto no es homogénea en todos los países. En efecto, las economías que tradicionalmente han logrado mantener niveles de pobreza extrema inferiores al promedio de América Latina (18.5%): Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, son las que presentan mejores condiciones para impulsar cambios favorables en el nivel de vida de los hogares como consecuencia de la expansión del producto per cápita. En este grupo, el efecto de cada punto de crecimiento sobre la caída de la indigencia es 27% mayor que el observado en el

conjunto de los países que durante la década pasada mantuvieron niveles de pobreza superiores al promedio regional.

No obstante, la experiencia reciente de la región advierte acerca de la cautela con que deben asumirse los resultados derivados de estudios econométricos como el mencionado, que conducen a establecer relaciones constantes entre el crecimiento económico y la evolución de la pobreza. De los resultados incluidos en el recuadro I.6, así como de los de otros estudios similares, se desprende claramente la precaución que debiera tenerse al utilizar los valores del coeficiente de elasticidad (ϵ) para proyectar el comportamiento futuro de las tasas de pobreza e indigencia, evitando asociarlo exclusivamente a los cambios en el nivel del producto.⁸ Al respecto, se requiere al menos calibrar permanentemente el valor de ϵ y desagregar el análisis por país, como asimismo profundizar en el estudio de un conjunto de nuevas variables que también contribuyen a explicar la evolución de la pobreza, atendiendo a las características particulares de cada país en materia de desempeño económico, estructura y dinámica demográfica, funcionamiento del mercado laboral, nivel de pobreza en períodos pasados, o a los efectos esperados en el ingreso de los hogares de los recursos que los gobiernos destinan al gasto social.

7 Que representa un valor muy cercano a aquel de -1.31 calculado para la elasticidad puntual entre 1990 y 1999.

8 Si bien es ampliamente aceptado que el análisis econométrico es una herramienta útil para el estudio de las relaciones entre distintas variables económicas, se debe tener presente que la falta de información sistemática sobre otras dimensiones limita el ejercicio de modelización, y por tanto es muy difícil establecer con precisión a través de estos modelos la forma específica en que interactúan distintas situaciones para explicar el comportamiento de un fenómeno multidimensional y complejo como el de la pobreza.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA

Diversas investigaciones han abordado el estudio de la relación existente entre la evolución de la pobreza y la del ingreso de las personas, dando cuenta de la influencia positiva que ejerce el crecimiento económico en la reducción de la pobreza (Fields, 1989; Morley, 1992 y 1995; Ravallion, 1995). En particular, estudios recientes (de Javry y Sadoulet, 2000 y CEPAL, 2000d), comprueban una asociación inversa entre el producto interno bruto (PIB) per cápita y la incidencia de la pobreza: a su vez, en la medida en que el crecimiento económico se acentúa, la pobreza muestra una franca tendencia a disminuir, sobre todo en aquellos países donde el aumento del producto per cápita ha sido muy significativo. Asimismo, cuando se registran episodios de contracción o estancamiento económico, los niveles de pobreza aumentan en forma acelerada, evidenciando la alta sensibilidad de este indicador a la caída en el ingreso real de los hogares. De modo que, como lo señalan varios estudios (Fields, 1980; Morley, 1992 y Psacharopoulos y otros, 1997), en situaciones de crisis la pobreza se incrementa a un ritmo mayor que la disminución que muestra en períodos de recuperación y expansión económica.

A continuación se presentan algunos resultados de la relación entre crecimiento económico y evolución de la pobreza, calculados por la CEPAL.*

AMÉRICA LATINA: COEFICIENTE DE ELASTICIDAD (ϵ) PIB PERCÁPITA-POBREZA EXTREMA, 1990-1999											
Países	Indigencia	Pobreza ^a	Población indigente								
			Nacional			Urbano			Rural		
			H	PG	FGT2	H	PG	FGT2	H	PG	FGT2
Todos los países	-1.21	-0.94	-1.21	-1.08	-1.39	-1.65	-1.20	-2.30	-0.61	-0.70	-0.91
Países de mayor desarrollo relativo b/	-1.31	-0.92	-1.31	-	-	-2.20	-1.75	-2.08	-1.09	-0.61	-0.51
Países de menor desarrollo relativo c/	-1.03	-0.63	-1.03	-1.08	-1.16	-1.51	-0.90	-1.40	-0.86	-	-

Fuente: CEPAL, a partir de información de las encuestas de hogares de los países de la región para distintos años del período 1990-1999.

-: Valores estadísticamente no significativos.

a/ Incluye la indigencia o pobreza extrema.

b/ Países con tasa de indigencia menor o igual al 18%, equivalente al promedio de América Latina estimado para el año 2000.

c/ Países con tasa de indigencia superior al 18%.

Al mismo tiempo que se corrobora que el crecimiento contribuye a reducir la pobreza, se aprecia que distintos factores inciden en el valor del coeficiente de elasticidad (ϵ). Para el conjunto de los países en el período 1990-1999, por cada punto porcentual que se incrementó el producto por habitante, la tasa de indigencia a nivel nacional disminuyó en promedio en 1.21%. En las áreas urbanas, el coeficiente fue de -1.65, en tanto que en las rurales llegó a -0.61, denotando el efecto diferencial del crecimiento en ambas áreas, y poniendo de manifiesto que los esfuerzos por mejorar el nivel de vida de las personas han generado resultados menos expresivos en las áreas rurales. También se comprueba que existen diferencias en los valores de ϵ entre países, identificándose contrastes muy marcados cuando éstos se agrupan según su nivel de desarrollo relativo. Las economías con menores tasas de pobreza extrema ($H \leq 18\%$) son las que más se beneficiaron con la expansión del producto, en tanto que aquellas con pobreza de nivel medio o alto obtuvieron mejoras menos sustanciales, debido a la lenta recuperación económica o incluso a los episodios de estancamiento y crisis que debieron enfrentar. Asimismo, se infiere que el avance económico ejerce mayor influencia en la caída de la pobreza extrema (H) que en la de la pobreza total (indigencia más pobreza moderada). Finalmente, se constata una mayor sensibilidad en el índice de severidad de la pobreza (FGT₂), ya que los coeficientes de elasticidad estimados muestran valores más altos que en el caso del índice H, confirmando de paso la situación dispar que se advierte en el comportamiento de los hogares de distintos contextos geográficos.

* Los modelos ajustados consideran como variable explicativa la tasa de cambio del PIB per cápita (Δ PIBpc) en cada subperíodo, y como variable dependiente la tasa de variación de la incidencia de la pobreza extrema de las personas (H), la brecha de ingresos (Δ PG) o la severidad de la pobreza (Δ FGT₂), según el caso. Los parámetros estimados son significativos al 1% y 5%, y los modelos se ajustaron ante la presencia de autocorrelación y heterocedasticidad en los datos. Un valor de $\epsilon = -1.21$ se interpreta en el sentido de que cada punto porcentual de incremento en el PIB per cápita se traduce en una caída de poco más del 1% en la tasa de indigencia de las personas.

2. La magnitud de los desafíos

En diversos foros internacionales se ha venido manifestando una creciente preocupación por atender a los acuciantes problemas asociados a la proliferación de la pobreza y la marginalidad. Los bajos niveles de bienestar que se observan en diferentes regiones del mundo y el acelerado deterioro de la calidad de vida en algunos países, han redoblado la inquietud por el aumento de la pobreza y la exclusión, que conspiraría contra la estabilidad y el orden social. Ello ha encontrado cada vez más acogida en la comunidad internacional, y actualmente existe un amplio consenso sobre la urgente necesidad de comprometer esfuerzos para luchar de manera decidida en favor del alivio de la pobreza, la reducción de la desigualdad y el mejoramiento de los niveles de vida de la población del mundo en desarrollo.

En este contexto, durante el quincuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Jefes de Estado y de Gobierno

aprobaron la denominada Declaración del Milenio, que entre otras cosas consagra un conjunto de postulados orientados a fortalecer ciertos valores y principios fundamentales, e incentiva la promoción de políticas públicas que propicien un desarrollo sostenido e incluyente que contribuya a la erradicación de la pobreza y a mejorar la calidad de vida de las personas y familias que se desenvuelven en condiciones de miseria. Sobre todo, la Declaración formaliza el compromiso de desplegar acciones que permitan mejorar sensiblemente la situación de alrededor de 1 000 millones de personas que en la actualidad subsisten en condiciones muy precarias, con ingresos inferiores al costo de una canasta básica de alimentación (véase el recuadro I.7).

Sin duda se trata de una empresa ambiciosa y difícil de cumplir. En el caso de América Latina, este desafío significa que en los próximos 15 años las iniciativas debieran encaminarse a promover y concertar políticas de desarrollo económico y social que permitan a millones de personas acceder a un umbral bási-

Recuadro I.7

LA DECLARACIÓN DEL MILENIO

La Cumbre del Milenio es la denominación que recibe el encuentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizado en diciembre del año 2000 en Nueva York. La Asamblea General, integrada por todos los Jefes de Estado y de Gobierno que conforman las Naciones Unidas, se reunió con el propósito de reafirmar la adhesión de los países a la Organización y a sus principios como elementos indispensables para un mejor futuro. En este histórico evento, los gobernantes de todo el mundo se comprometieron a participar activamente en el cumplimiento de las nuevas metas de desarrollo definidas para las próximas décadas, resumidas en la Declaración del Milenio.

Las metas y compromisos expresados en la Declaración del Milenio se asientan sobre valores que se consideran fundamentales para el adecuado funcionamiento de las relaciones internacionales, tales como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad común. En este contexto, los deberes de la comunidad mundial apuntan a la solución de problemas relacionados con la paz mundial y el desarme, el desarrollo de los países y la erradicación de la pobreza, la protección del medio ambiente, los derechos humanos y la democracia, la protección a personas vulnerables, la atención especial a las necesidades del África y el fortalecimiento de las Naciones Unidas.

El acuerdo explícito de los países para alcanzar objetivos comunes de desarrollo y la definición de nuevas metas hacen de la Declaración del Milenio un documento trascendental. Entre ellos, cabe destacar los objetivos de desarrollo social que deben cumplirse hasta el año 2015: reducción a la mitad del número de personas pobres y del número de personas sin acceso al agua potable; que todos los niños y niñas del mundo tengan igual posibilidad de acceso a la educación y que todos terminen un ciclo completo de enseñanza primaria; reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes y la de los niños menores de cinco años en dos terceras partes; y, detener y empezar a reducir la propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). En particular, la presente edición del *Panorama social de América Latina* evalúa las condiciones que harían factible el cumplimiento del primero de los objetivos específicos mencionados, es decir, reducir a la mitad el número de personas en pobreza extrema, medido como la población que vive con menos de un dólar al día.

co de consumo, que les genere condiciones mínimas de salud e inserción productiva. Asimismo, el cumplimiento de esta meta supone un esfuerzo sostenido que armonice las políticas de desarrollo económico con la dinámica demográfica, impidiendo que el crecimiento de la población erosione los avances en favor de procurar mayores recursos a las familias en pobreza.

El magro desempeño económico observado en la última década y la difícil situación por la que atraviesan actualmente algunas de las economías más dinámicas de la región, sumados al escenario de desaceleración que enfrentan las potencias económicas del mundo desarrollado, dan cuenta de algunos de los obstáculos que deberán superarse para dar cumplimiento a las metas planteadas, y asimismo perfilan la magnitud de los desafíos que existen para dar viabilidad al compromiso adquirido.

En el inicio de un nuevo milenio, se estima que en América Latina el 18% de las personas viven en condiciones de pobreza extrema. En este sentido, de mantenerse invariables los factores que derivaron en los coeficientes de elasticidad presentados en el recuadro I.6, y por cierto atendiendo también a las consideraciones efectuadas sobre la validez e interpretación de esos coeficientes para la región como un todo, reducir el actual nivel de indigencia a la mitad requeriría que el producto por habitante creciera en América Latina a una tasa media anual del 2.3% durante los próximos 15 años, lo que significa que la actividad económica global debiera expandirse a un ritmo no inferior al 3.8% anual. Aunque parezca una meta alcanzable, en las condiciones actuales este escenario representa un enorme desafío, ya que ese ni-

vel de crecimiento no se observa en la región –como promedio decenal– desde los años setenta. Por el contrario, de mantenerse en algunos países la situación de estancamiento o contracción que prevalece actualmente, y si el aumento del producto por persona en el conjunto de la región continúa al ritmo observado durante la década pasada (1.5% anual), habría que esperar un lapso de alrededor de 23 años para reducir a la mitad los índices de indigencia.

A su vez, la gran heterogeneidad que se advierte en la evolución económica de los países y al interior de los mismos, así como los dispares resultados obtenidos en materia de alivio de la pobreza, conducen a concluir que reducir a la mitad la indigencia demandará esfuerzos diferentes en cada caso, ya que una tasa de crecimiento dada provoca –como se indicó anteriormente– efectos distintos en cada país y entre las zonas urbanas y rurales. Especialmente en aquel grupo de países más rezagado –cuya tasa de indigencia promedio se ubica en niveles cercanos al 25%– implicará que durante un período de 15 años el ingreso por habitante deba crecer en alrededor de 2.7% anual, lo que significa un aumento del producto interno a razón de casi 4.5% cada año. Asimismo, si se considera el impacto diferencial del crecimiento en las distintas regiones, el desafío de reducir en un 50% el porcentaje de personas en pobreza extrema en las zonas rurales de esos países, donde esta condición afecta a casi una de cada dos personas, supone que el producto per cápita debiera alcanzar un crecimiento anual sostenido de un nivel cercano a 3.1%, que representa una tasa superior en más de 60% a aquella requerida para lograr esa misma meta en las áreas urbanas (1.9%) (véase el cuadro I.8).

AMÉRICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO REQUERIDA PARA REDUCIR A LA MITAD LA PROPORCIÓN DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA EN LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS									
	Nacional			Urbano			Rural		
	Pobreza extrema (En porcentaje)		Crecimiento PIB p/c a/ (Promedio anual)	Pobreza extrema (En porcentaje)		Crecimiento PIB p/c a/ (Promedio anual)	Pobreza extrema (En porcentaje)		Crecimiento PIB p/c a/ (Promedio anual)
	Actual	Meta		Actual	Meta		Actual	Meta	
América Latina	18	9	2.3	12	6	1.8	38	19	4.1
Países con menor pobreza	11	6	2.2	8	4	1.4	23	12	2.5
Países con mayor pobreza b/	25	13	2.7	16	8	1.9	47	24	3.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de los datos del recuadro 1.6.

a/ PIB p/c = Producto interno bruto per cápita

b/ Respecto del promedio regional en 1999.

Con todo, los escenarios planteados sugieren que América Latina deberá desplegar un gran esfuerzo, aunque en un marco de relativa viabilidad, para atender satisfactoriamente a la meta establecida por la Organización de las Naciones Unidas en materia de reducción de la pobreza para los próximos 15 años. Respecto de esta predicción, no debiera perderse de vista, sin embargo, que algunos países se encuentran en una situación más favorable para ello, en atención a las disparidades aludidas, por lo que se hace necesario incorporar en el análisis, y especialmente en los cálculos proyectivos, nuevos elementos que permitan visualizar con mayor precisión la magnitud del desafío en cada caso particular, a objeto de generar las condiciones necesarias para que –en un plazo máximo de 15 años– la mitad de la población indigente abandone la situación de extrema pobreza que actualmente le afecta.

Ahora bien, un objetivo más ambicioso para América Latina, consecuente con el avance relativo de la región en el contexto internacional, consistiría en reducir a la mitad no sólo la extrema pobreza, sino también el porcentaje de personas pobres no indigentes. En términos agregados, el cumplimiento de esta meta se traduce en alcanzar tasas de crecimiento

del producto por habitante en torno al 2.9% anual, en promedio, durante los próximos tres quinquenios. Una cifra similar de crecimiento se requeriría para el grupo de países con mayor desarrollo relativo, en tanto que el resto de las economías de la región, en las que por cierto se observa una mayor presión demográfica, debieran hacer crecer su PIB per cápita a una tasa cercana al 4% anual.

El cumplimiento de una meta como ésta representa, sin lugar a dudas, un enorme desafío en el actual contexto de desarrollo, precedido por un período fuertemente recesivo en los años ochenta y por tasas de crecimiento moderadas en la década más reciente. No obstante, el crecimiento requerido para reducir la pobreza a la mitad no escapa de las posibilidades económicas de la región. Al respecto, es pertinente recordar que tasas promedio similares o mayores que las señaladas se alcanzaron sostenidamente durante las décadas de 1950, 1960 y 1970. En consecuencia, de llevarse a cabo las transformaciones necesarias para que América Latina recupere su ritmo histórico de crecimiento, 15 años podrían ser suficientes no sólo para cumplir con la meta de la Declaración del Milenio, sino para disminuir a la mitad la pobreza total.



Características y tendencias de la distribución del ingreso

A. La concentración del ingreso a fines de los años noventa

A fines de la década de 1990, la mayoría de los países de América Latina continuaron presentando un perfil de la distribución de los ingresos caracterizado por altos niveles de desigualdad. Éstos se expresan, entre otros indicadores, en la elevada proporción del ingreso total captada por el 10% de los hogares de mayores recursos, que supera 19 veces la que recibe, en promedio, el 40% de los hogares más pobres. Asimismo, entre dos tercios y tres cuartas partes de la población, según el país, perciben un ingreso per cápita inferior al promedio general.

Al terminar el decenio de 1990, la desigual distribución de los ingresos sigue siendo un rasgo sobresaliente de la estructura económica y social de América Latina, lo que le ha valido ser considerada como la región más inequitativa del mundo. A su vez, las estimaciones más recientes permiten concluir que en la mayoría de los países esta situación no mejoró significativamente –e incluso en algunos empeoró– durante los años noventa, pese a la relativa recuperación del crecimiento económico y al aumento del gasto social, de modo que no fue posible contrarrestar el marcado deterioro distributivo experimentado en la década precedente.

Una primera apreciación del elevado grado de concentración de los ingresos prevalente en la región surge al evaluar la proporción de éstos captada por diferentes grupos de hogares, clasificados en función de su ingreso per cápita. En este sentido, la distribución del ingreso latinoamericano destaca en el contexto internacional especialmente por la abultada fracción de los ingresos totales que reúne el 10% de los hogares

de mayores recursos. Con excepción de Costa Rica y Uruguay, en todos los países este estrato se apropia, al nivel nacional, de más del 30% de los ingresos, y en la mayoría de ellos, exceptuando sólo El Salvador y Venezuela, el porcentaje supera el 35% y en Brasil, el 45%. Durante el trienio 1997–1999 tendió a agudizarse la situación, no obstante la mejora del ingreso medio de los hogares producida en ese período en algunos países de América Latina. En los seis casos en que se registró un aumento significativo de la participación del decil superior, las variaciones excedieron un punto porcentual, y en uno rebasó los cuatro puntos (Ecuador). En tanto, de los cinco países en que este grupo disminuyó su participación en el ingreso total, en sólo uno de ellos (Bolivia) la variación fue de más de dos puntos porcentuales.

En contraposición con la participación relativa del decil más rico, la fracción del ingreso captada por el 40% de los hogares más pobres es muy reducida, ubicándose en casi todos los países de la región entre el 9% y el 15% de los ingresos totales –con excepción

de Uruguay, donde el grupo mencionado recibe cerca del 22%. Esto es, la suma de los ingresos de dos quintas partes de los hogares equivale apenas a poco más de la décima parte del total. A su vez, en el último trienio en sólo cuatro de los países analizados (Argentina, Brasil, Chile y Panamá) hubo un incremento en el porcentaje de los ingresos recibido por el 40% de los hogares más pobres. En los demás casos, incluidos aquellos de distribución más equitativa, se registraron deterioros o bien cambios de menor significación en la participación de los cuatro primeros deciles (véase el cuadro II.1).

Una tendencia algo más dispar se presentó en cuanto al grupo conformado por los deciles quinto, sexto y séptimo cuya participación disminuyó en siete países y aumentó en seis. Es interesante constatar a este respecto que no son pocas las situaciones en las que se produjo una reducción simultánea en la participación de los siete primeros deciles, lo que de por sí sugiere un aumento de la concentración en la distribución del ingreso.¹

De este modo, dado que en la mayoría de los países se produjo una retracción en el porcentaje de ingresos captado por los grupos de menores recursos y los incrementos en la participación del decil más rico fueron de magnitud considerable, resulta evidente que en el trienio 1997–1999 se configuró en la región un panorama de deterioro distributivo, similar al que –como se verá más adelante– caracterizó al conjunto de los años noventa.

Por otra parte, la simple comparación entre los ingresos medios de los distintos grupos de hogares revela la gran dimensión que alcanza la inequidad en América Latina. Llama la atención en este sentido que en países como Bolivia, Brasil y Nicaragua, los ingresos per cápita del quintil más rico (20% de los

hogares) superen más de 30 veces el ingreso del quintil más pobre. Particularmente sorprendente es el caso de Bolivia, donde el último quintil recibe ingresos casi 50 veces superiores a los del primero, mientras que el promedio de los demás países se sitúa en alrededor de 23 veces. Por su parte, la relación de ingresos entre el decil más rico y los cuatro deciles más pobres también da cuenta de una alta concentración. En este caso la mayor distancia se presenta en Brasil, donde el decil más acomodado tiene un ingreso 32 veces superior al de la suma de los cuatro primeros deciles, en tanto que el promedio simple de esta brecha en la región es de 19.3 veces, valor considerablemente alto si se lo compara por ejemplo con el de Uruguay (8.8 veces) o Costa Rica (12.6 veces), países con la mejor distribución de ingresos en toda la región.²

La alta concentración de los ingresos existente en América Latina se puede constatar también a través del valor que alcanzan algunos índices sintéticos, como el índice de desigualdad o coeficiente de Gini, que permiten comparar la situación distributiva global entre distintos países o en diversos períodos. A fines de la década de 1990, el ordenamiento de los países en función de este indicador, calculado a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas,³ confirma que la mayor concentración a nivel nacional se presenta en Brasil, con un valor de 0.64, y Bolivia, Nicaragua y Guatemala, en ese orden, con valores cercanos a 0.60; en el otro extremo, Uruguay y Costa Rica se reiteran como aquellos de menor desigualdad, con índices por debajo de 0.48 (véase el cuadro II.2).

La desigualdad a nivel nacional no necesariamente se traduce de manera semejante en las áreas urbanas y rurales.⁴ En la mayoría de los países, las primeras tienden a ser menos equitativas que las segundas.

1 La excepción más notable en este sentido es Panamá. En este país, los hogares agrupados en los siete primeros deciles aumentaron su participación en el ingreso total entre 1997 y 1999 (de 33.9% a 35.3%), en tanto que el 10% superior la redujo en 1.5 puntos porcentuales (de 38.6% a 37.1%).

2 Entre los países con mejor distribución del ingreso debiera mencionarse también a Cuba, pese a que no se dispone de cifras oficiales recientes. Si bien se admite que la profunda transformación económica de los últimos años generó un deterioro distributivo durante la década de 1990, el país mantendría un esquema que favorece la equidad y el bienestar social (CEPAL, 2000b). La baja concentración del ingreso en Cuba se evidencia, por ejemplo, en la reducida participación que alcanzaría el decil superior (19.7%), o en el valor del coeficiente de Gini, cercano a 0.30 cuando se consideran las transferencias de ingreso –monetario y en especies– efectuadas por el Estado (Ferriol, 2000).

3 Cabe hacer notar que esta forma de cálculo del coeficiente de Gini difiere de aquella utilizada en ediciones anteriores del *Panorama social*, en las que tradicionalmente los valores estaban basados en la distribución del ingreso de los hogares. Al respecto, véase el recuadro II.1.

4 Como se sabe, los niveles medios de ingreso son distintos en ambas áreas, y siempre más altos en las zonas urbanas. Si bien en varios casos estas diferencias son relativamente pequeñas –por ejemplo, en Costa Rica–, en otros se evidencian disparidades significativas. En Bolivia, el ingreso promedio en áreas urbanas alcanza a más del doble del ingreso promedio en las áreas rurales (véase el cuadro 22 del Anexo estadístico).

Cuadro II.1

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES, a/ 1990-1999 (En porcentajes)								
País	Año	Ingreso promedio b/	Participación en el ingreso total del:				Relación del ingreso medio per cápita c/	
			40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico	D ¹⁰ /D ^(1 a 4)	Q ⁵ /Q ¹
Argentina d/	1990	10.6	14.9	23.6	26.7	34.8	13.5	13.5
	1997	12.4	14.9	22.3	27.1	35.8	16.0	16.4
	1999	12.5	15.4	21.6	26.1	37.0	16.4	16.5
Bolivia	1989 e/	7.7	12.1	22.0	27.9	38.2	17.1	21.4
	1997	5.8	9.4	22.0	27.9	40.7	25.9	34.6
	1999	5.7	9.2	24.0	29.6	37.2	26.7	48.1
Brasil	1990	9.3	9.5	18.6	28.0	43.9	31.2	35.0
	1996	12.3	9.9	17.7	26.5	46.0	32.2	38.0
	1999	11.3	10.1	17.3	25.5	47.1	32.0	35.6
Chile	1990	9.4	13.2	20.8	25.4	40.7	18.2	18.4
	1996	12.9	13.1	20.5	26.2	40.2	18.3	18.6
	2000	13.6	13.8	20.8	25.1	40.3	18.7	19.0
Colombia	1994	8.4	10.0	21.3	26.9	41.8	26.8	35.2
	1997	7.3	12.5	21.7	25.7	40.1	21.4	24.1
	1999	6.7	12.3	21.6	26.0	40.1	22.3	25.6
Costa Rica	1990	9.5	16.7	27.4	30.2	25.6	10.1	13.1
	1997	10.0	16.5	26.8	29.4	27.3	10.8	13.0
	1999	11.4	15.3	25.7	29.7	29.4	12.6	15.3
Ecuador f/	1990	5.5	17.1	25.4	27.0	30.5	11.4	12.3
	1997	6.0	17.0	24.7	26.4	31.9	11.5	12.2
	1999	5.6	14.1	22.8	26.5	36.6	17.2	18.4
El Salvador	1995	6.2	15.4	24.8	26.9	32.9	14.1	16.9
	1997	6.1	15.3	24.5	27.3	33.0	14.8	15.9
	1999	6.6	13.8	25.0	29.1	32.1	15.2	19.6
Guatemala	1989	6.0	11.8	20.9	26.8	40.6	23.5	27.3
	1998	7.3	12.8	20.9	26.1	40.3	23.6	22.9
Honduras	1990	4.3	10.1	19.7	27.0	43.1	27.4	30.7
	1997	4.1	12.6	22.5	27.3	37.7	21.1	23.7
	1999	3.9	11.8	22.9	28.9	36.5	22.3	26.5
México	1989	8.6	15.8	22.5	25.1	36.6	17.2	16.9
	1994	8.5	15.3	22.9	26.1	35.6	17.3	17.4
	1998	7.7	15.1	22.7	25.6	36.7	18.4	18.5
Nicaragua	1993	5.2	10.4	22.8	28.4	38.4	26.1	37.7
	1998	5.6	10.4	22.1	27.1	40.5	25.3	33.1
Panamá	1991	8.9	12.5	22.9	28.8	35.9	20.0	24.3
	1997	11.0	12.4	21.5	27.5	38.6	21.5	23.8
	1999	11.1	12.9	22.4	27.7	37.1	19.5	21.6
Paraguay	1990 g/	7.7	18.6	25.7	26.9	28.9	10.2	10.6
	1996 f/	7.4	16.7	24.6	25.3	33.4	13.0	13.4
	1999	6.2	13.1	23.0	27.8	36.2	19.3	22.6
República Dominicana	1997	8.5	14.5	23.6	26.0	36.0	16.0	17.6
Uruguay f/	1990	9.3	20.1	24.6	24.1	31.2	9.4	9.4
	1997	11.2	22.0	26.1	26.1	25.8	8.5	9.1
	1999	11.9	21.6	25.5	25.9	27.0	8.8	9.5
Venezuela	1990	8.9	16.7	25.7	28.9	28.7	12.1	13.4
	1997	7.8	14.7	24.0	28.6	32.8	14.9	16.1
	1999	7.2	14.6	25.1	29.0	31.4	15.0	18.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Hogares del conjunto del país ordenados según su ingreso per cápita. En el cuadro 22 del Anexo estadístico se presentan las cifras desagregadas por áreas urbana y rural.

b/ Ingreso promedio mensual de los hogares, en múltiplos de la línea de pobreza per cápita.

c/ D^(1 a 4) representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D¹⁰ es el 10% de los hogares de más altos ingresos. La misma notación se usa en el caso de los quintiles (Q), que representan grupos de 20% de los hogares.

d/ Gran Buenos Aires.

e/ Ocho ciudades principales y El Alto.

f/ Total urbano.

g/ Área metropolitana de Asunción.

Así, en 7 de 13 casos el coeficiente de Gini para áreas urbanas es superior al de las áreas rurales; los casos más notables son Brasil, Chile y Colombia, donde las diferencias entre los índices, alrededor de 1999, alcanzan 0.049 puntos en el primero y 0.042 puntos en los otros dos. No obstante, existen países que presentan un comportamiento marcadamente contrario al descrito, con niveles de concentración en áreas rurales que exceden de manera importante a los de las áreas urbanas. Entre los que están en esta situación, las mayores diferencias entre coeficientes de Gini urbanos y rurales se manifiestan en Bolivia y Paraguay (con 0.136 y 0.073 puntos, respectivamente)⁵ (véanse los cuadros 23 y 24 del Anexo estadístico).

Las variaciones del coeficiente de Gini en los distintos países confirman la apreciación de un cierto deterioro distributivo durante el último trienio. Se observa que este índice aumentó en siete países (para los cuales se dispone de cifras de cobertura comparable) y disminuyó en cuatro, en tanto que los incrementos fueron generalmente mayores que las reducciones. Ecuador, Costa Rica y Argentina destacan como los países con mayor crecimiento del coeficiente de Gini entre los años 1997 y 1999, mientras que Panamá, Venezuela y Bolivia son aquellos donde más disminuyó, aunque esta reducción fue sumamente leve en todos los casos (entre -2.3% y -1.5%).

Otro tipo de indicador que refrenda el panorama descrito de la concentración del ingreso es el porcentaje de personas cuyos ingresos per cápita son inferiores al promedio general. En América Latina el ingreso per cápita medio se sitúa entre el séptimo y el octavo decil, con porcentajes de población bajo ese umbral que van de 67% a 77%, según el país. Esto quiere decir que en la actualidad alrededor de tres cuartas partes de los hogares reciben menos que el ingreso promedio, de modo que los eventuales incrementos del producto por habitante son captados

en mucho mayor grado por el 25% de los hogares de más altos ingresos que por el resto de los hogares. Consecuentemente, Uruguay y Costa Rica son los países con menor proporción de personas bajo el ingreso per cápita promedio, mientras que Brasil y Guatemala se ubican en el extremo opuesto (véase el cuadro II.2).

Una variante del indicador anterior es el porcentaje de personas con ingresos per cápita inferiores a la mitad de la media, opción que resulta aún más apropiada para ilustrar la heterogeneidad distributiva de la región, gracias a que describe un tramo más irregular de la distribución de ingresos. A manera de ejemplo, obsérvese que los mencionados Uruguay y Costa Rica presentan prácticamente el mismo porcentaje de personas con ingresos inferiores a la media, pero que ambos se distancian en cuatro puntos porcentuales cuando se utiliza como umbral el 50% de ese valor.

Conforme a este indicador, la gran mayoría de los países de América Latina se ubican en un rango intermedio (entre 40% y 50%) según la proporción de población con ingresos inferiores a la mitad del promedio. Uruguay, Costa Rica, Venezuela y República Dominicana conformarían el grupo de menor concentración, donde el porcentaje analizado es inferior al 40%, mientras que Brasil es el único caso en que más de la mitad de la población recibe ingresos inferiores al 50% de la media (véase el cuadro II.2).

Cabe destacar que esta medida ha sido utilizada en otros países para dimensionar la "pobreza relativa", entendida ésta como la situación en que los ingresos son insuficientes para gozar de un nivel de consumo acorde con los estándares prevalentes en una sociedad determinada. En este caso, el indicador se utiliza de manera similar a una línea de pobreza tradicional, con la diferencia de que se mueve junto con las fluctuaciones del ingreso promedio (véase el recuadro II.2).

5 Además, una característica común a gran parte de la región es que la desigualdad a nivel nacional resulta mayor que la que se presenta en las áreas urbanas y rurales por separado. Las únicas excepciones se dan en Bolivia y Paraguay (coeficiente rural más alto que el nacional). Grados de desigualdad nacionales mayores a los que se presentan dentro de los subgrupos urbano y rural indican que las disparidades distributivas entre áreas pueden jugar un papel muy relevante en la configuración del panorama distributivo.

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, a/ 1990-1999							
País	Año	Porcentaje de personas con ingreso per cápita menor que:		Índices de concentración			
		el promedio	el 50% del promedio	Gini b/	Varianza de los logaritmos	Theil	Atkinson
Argentina c/	1990	70.6	39.1	0.501	0.982	0.555	0.570
	1997	72.1	43.4	0.530	1.143	0.601	0.607
	1999	72.5	44.2	0.542	1.183	0.681	0.623
Bolivia	1989 d/	71.9	44.1	0.538	1.528	0.574	0.771
	1997	73.1	47.7	0.595	2.024	0.728	0.795
Brasil	1999	70.4	45.5	0.586	2.548	0.658	0.867
	1990	75.2	53.9	0.627	1.938	0.816	0.790
	1996	76.3	54.4	0.638	1.962	0.871	0.762
Chile	1999	77.1	54.8	0.640	1.913	0.914	0.754
	1990	74.6	46.5	0.554	1.258	0.644	0.671
	1996	73.9	46.9	0.553	1.261	0.630	0.667
Colombia	2000	75.0	46.4	0.559	1.278	0.666	0.658
	1994	73.6	48.9	0.601	2.042	0.794	0.817
	1997	74.2	46.4	0.569	1.399	0.857	0.822
Costa Rica	1999	74.5	46.6	0.572	1.456	0.734	0.945
	1990	65.0	31.6	0.438	0.833	0.328	0.539
	1997	66.6	33.0	0.450	0.860	0.356	0.535
Ecuador e/	1999	67.6	36.1	0.473	0.974	0.395	0.573
	1990	69.6	33.8	0.461	0.823	0.403	0.591
	1997	68.9	34.8	0.469	0.832	0.409	0.510
El Salvador	1999	72.1	42.0	0.521	1.075	0.567	0.597
	1995	69.7	38.4	0.507	1.192	0.502	0.695
	1997	69.9	40.2	0.510	1.083	0.512	0.583
Guatemala	1999	68.5	40.6	0.518	1.548	0.496	0.798
	1989	74.9	47.9	0.582	1.477	0.736	0.700
	1998	75.0	49.5	0.582	1.331	0.795	0.645
Honduras	1990	75.1	52.3	0.615	1.842	0.817	0.746
	1997	72.5	45.4	0.558	1.388	0.652	0.697
	1999	71.8	46.4	0.564	1.560	0.636	0.746
México	1989	74.2	43.5	0.536	1.096	0.680	0.598
	1994	73.1	44.7	0.539	1.130	0.606	0.592
	1998	72.8	43.1	0.539	1.142	0.634	0.599
Nicaragua	1993	71.5	45.9	0.582	1.598	0.671	0.802
	1998	73.1	45.9	0.584	1.800	0.731	0.822
Panamá	1991	71.3	46.4	0.560	1.373	0.628	0.661
	1997	72.6	47.6	0.570	1.464	0.681	0.686
	1999	72.1	46.4	0.557	1.363	0.629	0.658
Paraguay	1990 f/	69.2	33.4	0.447	0.737	0.365	0.468
	1996 e/	72.9	37.9	0.493	0.916	0.515	0.544
	1999	72.3	46.3	0.565	1.555	0.668	0.716
República Dominicana	1997	71.4	39.8	0.517	1.075	0.557	0.603
Uruguay e/	1990	73.2	36.8	0.492	0.812	0.699	0.519
	1997	66.8	31.3	0.430	0.730	0.336	0.475
	1999	67.1	32.2	0.440	0.764	0.354	0.483
Venezuela	1990	68.0	35.5	0.471	0.930	0.416	0.545
	1997	70.8	40.7	0.507	1.223	0.508	0.985
	1999	69.4	38.6	0.498	1.134	0.464	0.664

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Calculados a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas del conjunto del país. En los cuadros 23 y 24 del Anexo estadístico se presentan las cifras desagregadas por área urbana y rural.

b/ Incluye a las personas con ingreso igual a cero.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Ocho ciudades principales y El Alto.

e/ Total urbano.

f/ Área metropolitana de Asunción.

ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS PARA EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE GINI

El índice de desigualdad de Gini es uno de los indicadores sintéticos más utilizados para medir la concentración del ingreso. Probablemente su popularidad estriba en la sencillez de su interpretación gráfica basada en la curva de Lorenz, más allá de que el mismo no satisfaga algunas de las propiedades comúnmente requeridas en la medición de la desigualdad (para un resumen de estas propiedades, véase el recuadro II.3).

El coeficiente de Gini se diferencia de otros indicadores de desigualdad, entre otras cosas, por ser uno de los que mayores alternativas metodológicas ofrece para su cálculo. Por una parte, existe una amplia gama de fórmulas disponibles que no necesariamente son equivalentes entre sí, debido a que la curva de Lorenz no tiene una formulación algebraica explícita. A su vez, otro ámbito de opciones se relaciona con el proceso de ordenamiento y acumulación de los datos, cuestión requerida previamente al cálculo del índice. Al respecto, las alternativas consisten en utilizar ya sea la misma variable para ambos procesos, o bien variables distintas, según cual sea la finalidad analítica de la estimación.

Tradicionalmente, los coeficientes de Gini presentados en la serie del *Panorama social* se han basado en el ordenamiento de los hogares de acuerdo a su ingreso per cápita y la acumulación de su ingreso total. No obstante, es del caso reconocer que últimamente se ha venido produciendo un cierto consenso en cuanto a utilizar una sola variable de análisis, preferiblemente el ingreso per cápita de las personas. Por ello, con el fin de facilitar la comparabilidad de los resultados con otras mediciones de desigualdad, tanto el ordenamiento de las personas como la acumulación de sus ingresos se realiza, desde la presente edición, en función de su ingreso per cápita.

Se debe aclarar, sin embargo, que este cambio de metodología afecta –en la gran mayoría de los casos– únicamente al nivel de los coeficientes de Gini, que resulta superior a los presentados en ediciones anteriores, pero tanto la comparación del grado de desigualdad entre países como la evolución de la concentración a lo largo del tiempo en cada país se mantienen prácticamente inalteradas.

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): ÍNDICES DE GINI, 1990 Y 1999

País	Año	Personas a/	Hogares b/	País	Año	Personas a/	Hogares b/
Argentina c/	1990	0.501	0.423	Honduras	1990	0.615	0.530
	1999	0.542	0.438		1999	0.564	0.477
Bolivia	1989 d/	0.538	0.484	México	1989	0.536	0.427
	1999	0.586	0.508		1998	0.539	0.435
Brasil	1990	0.627	0.546	Nicaragua	1993	0.582	0.499
	1999	0.640	0.552		1998	0.584	0.511
Chile	1990	0.554	0.480	Panamá	1991	0.560	0.467
	2000	0.559	0.472		1999	0.557	0.466
Colombia	1994	0.601	0.524	Paraguay f/	1990	0.447	0.357
	1999	0.572	0.487		1999	0.565	0.457
Costa Rica	1990	0.438	0.364	República Dominicana	1997	0.517	0.439
	1999	0.473	0.402	Uruguay e/	1990	0.492	0.345
Ecuador e/	1990	0.461	0.381		1999	0.440	0.312
	1999	0.521	0.447	Venezuela	1990	0.471	0.381
El Salvador	1999	0.518	0.431		1999	0.498	0.419
Guatemala	1989	0.582	0.498				
	1998	0.582	0.485				

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de los respectivos países.

a/ Calculados a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas del conjunto del país. Incluye a las personas con ingreso igual a cero.

b/ Calculados a partir de la distribución del ingreso per cápita de los hogares del conjunto del país.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Ocho ciudades principales y El Alto.

e/ Total urbano.

f/ Área metropolitana de Asunción.

CONCENTRACIÓN DEL INGRESO Y POBREZA

La medición de la concentración del ingreso puede abordarse mediante distintos instrumentos, de naturaleza diversa y con virtudes y limitaciones específicas cada uno de ellos. Una opción sencilla consiste en calcular el porcentaje de población que tiene ingresos inferiores al promedio, o a una fracción del promedio. Mientras mayor sea este porcentaje, mayor será la diferencia entre los valores altos y bajos de una distribución o, lo que es lo mismo, mayor será la inequidad distributiva.

En algunos países, en particular los de Europa occidental, un indicador de este tipo es utilizado habitualmente como una forma de medir la "pobreza relativa". El concepto de "pobreza relativa" implica que las personas se encuentran en una situación de carencia cuando no pueden integrarse adecuadamente a la sociedad, debido a que no disponen de ciertos bienes que en ella son considerados elementales. Por ejemplo, en países con alto grado de desarrollo una persona podría calificarse en situación de privación si no puede adquirir un televisor, aunque haya satisfecho sus necesidades mínimas de alimentación y vivienda. Bajo este enfoque se hace prácticamente imposible establecer una "línea de pobreza" similar a la utilizada en el enfoque tradicional, o normativo, de medición de la pobreza, no sólo por la complejidad que entraña definir los tipos, cantidades y precios de los bienes a considerar, sino porque ella debiera ser modificada periódicamente para reflejar los cambios en el nivel de vida. Ante esta situación, alguna fracción de los ingresos medios puede constituir un valor razonable para ser utilizado como "línea de pobreza relativa". Típicamente, esta fracción oscila entre el 40% y el 60% de los ingresos, representados ya sea por la media o mediana de la distribución.

Sin embargo, este método para la medición de la "pobreza relativa" presenta algunos inconvenientes prácticos. Entre ellos se suele mencionar el alto grado de arbitrariedad que supone la elección del indicador del nivel de ingresos (media o mediana) y de la respectiva fracción de corte, o que la línea tenga elasticidad unitaria con respecto al ingreso medio. No obstante, más allá de tales dificultades esta propuesta destaca el alto grado de interrelación existente entre los conceptos y medidas de la pobreza y la distribución del ingreso, y por ende las ventajas de integrar analíticamente ambas dimensiones.

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS CON INGRESOS INFERIORES A LA MITAD DE LA MEDIA Y LA MITAD DE LA MEDIANA

País	Año	50% media	50% mediana	País	Año	50% media	50% mediana
Argentina a/	1990	39.1	20.5	Honduras	1990	52.3	26.1
	1999	44.2	21.4		1999	46.4	25.7
Bolivia	1989 b/	44.1	20.6	México	1989	43.5	19.7
	1999	45.5	29.5		1998	43.1	22.9
Brasil	1990	53.9	26.6	Nicaragua	1993	45.9	27.4
	1999	54.8	25.9		1998	45.9	26.7
Chile	1990	46.5	20.3	Panamá	1991	46.4	24.1
	2000	46.4	20.3		1999	46.4	23.7
Colombia	1994	48.9	26.0	Paraguay d/	1990	33.4	16.4
	1999	46.6	21.8		1999	34.2	15.8
Costa Rica	1990	31.6	19.4	República Dominicana	1997	39.8	20.8
	1999	36.1	20.7	Uruguay c/	1990	36.8	17.4
Ecuador c/	1990	33.8	17.4	Venezuela	1999	32.2	19.0
	1999	42.0	18.8		1990	35.5	20.2
El Salvador	1995	38.4	22.0	1999	38.6	21.6	
	1999	40.6	24.3				
Guatemala	1989	47.9	22.7				
	1998	49.5	21.7				

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de los respectivos países.

Los niveles de pobreza reportados se refieren al nivel nacional, excepto en los siguientes casos:

a/ Gran Buenos Aires.

b/ Ocho ciudades principales y El Alto.

c/ Área urbana.

d/ Área metropolitana.

B. Evolución a lo largo de la década

En el último decenio la distribución del ingreso en América Latina tendió a empeorar frente a episodios de crisis económica, a la vez que en general mostró resistencia a mejorar ante la recuperación del crecimiento. Las recesiones más intensas perjudicaron sobre todo al 40% más pobre de los hogares, mientras que el 10% de mayores ingresos consiguió aumentar su participación en el ingreso total, y mantenerla –cuando no también acrecentarla– en los auges. Por su parte, los grupos medios mostraron variaciones en su participación en el ingreso que –aunque no son asimilables a las de los grupos extremos– resultaron más moderadas, evidenciando así que en muchos países cuentan con un apreciable poder de negociación que les permite beneficiarse –al menos parcialmente– de los aumentos de productividad.

La evolución de la distribución del ingreso durante la década de 1990 reafirma el carácter concentrador que caracteriza desde hace ya muchos años a las economías latinoamericanas. En efecto, pese a que en el pasado decenio en la mayoría de los países se logró elevar el ingreso medio de los hogares, persiste una acentuada desigualdad, e incluso en varios casos una profundización de las enormes diferencias existentes entre ricos y pobres. En ese sentido, se confirma lo planteado en ediciones anteriores de este *Panorama social* respecto de la dificultad que entraña modificar sustancialmente en el corto plazo los factores estructurales que subyacen a la distribución del ingreso.

En los años noventa, el porcentaje del ingreso captado a nivel nacional por los hogares del decil superior se incrementó en ocho países, disminuyó en cinco (pero en sólo dos de ellos en medida importante, Honduras⁶ y Uruguay) y se mantuvo en uno (México). Entre los países en que aumentó la participación de este grupo destacan, en primer lugar, algunos que en la posguerra se caracterizaban por tener, en términos relativos, una mejor distribución del ingreso. Es así como en Argentina ésta subió de 35% a 37%, en Costa Rica de 26% a 29% y en Venezuela de 29% a 31%, mientras que en Chile se mantuvo ligeramente por sobre el 40% y en Uruguay –pese a haber dis-

6 Es necesario advertir, sin embargo, que los datos de Honduras para los años noventa adolecen de ciertos problemas de comparabilidad, derivados de algunos cambios introducidos en la metodología de medición de los ingresos a partir de la encuesta de hogares de 1994. Estos cambios, que se refieren especialmente a la amplitud del concepto de ingreso investigado, pueden haber incidido –aunque de un modo difícil de precisar– en el perfil de la distribución de los ingresos familiares registrado en 1990, comparado con el de los años posteriores, y por ende afectar el análisis de su evolución a lo largo de la década.

minuido entre los años extremos de la década– creció entre 1997 y 1999 de 26% a 27%. Asimismo, en Brasil, Ecuador, Nicaragua y Panamá también aumentó la participación del decil superior, pasando de 44% a 47%, 31% a 37%, 38% a 41% y 36% a 37%, respectivamente. En contraste, en algunos países como Colombia (en el período 1994–1999), El Salvador y Honduras se redujo la proporción captada por el grupo de altos ingresos, que en los dos primeros no superaron los dos puntos porcentuales, en tanto que en el último alcanzó una magnitud mayor (véase el cuadro II.1).

El hecho que durante la última década en la mayoría de los países haya continuado en alza la participación en el ingreso total del 10% de los hogares de más altas rentas, constituye de por sí un elemento muy significativo, no sólo porque contribuye a avalar la afirmación de que en América Latina viene prevaleciendo una cierta tendencia al deterioro distributivo, sino además porque –como se señaló anteriormente– la elevada participación previa de este grupo es considerada un rasgo decisivo al momento de calificar a la región como la de peor distribución en el mundo.

A su vez, en lo que se refiere al porcentaje de ingresos captado por el 40% de los hogares más pobres se advierten situaciones disímiles, ya que éste se redujo durante la década en cinco países, aumentó en ocho y se mantuvo en uno (Nicaragua). En particular, algunas de las caídas más importantes se registraron en aquellos que atravesaron crisis de mayor intensidad (Ecuador y Venezuela), pero también se observaron retrocesos en El Salvador, Costa Rica y México. Por otra parte, las mejorías registradas son relativamente leves, pues exceden los dos puntos porcentuales en tan solo un caso (Colombia, entre 1994 y 1997, pero seguida de un pequeño deterioro entre 1997 y 1999), un punto porcentual en otros tres (Honduras, Uruguay y Guatemala), mientras que en el resto de los países se sitúan en torno de 0.5 (Brasil, Chile, Argentina y Panamá).

Los estratos medios, representados por el 50% de los hogares que se ubica entre el 40% más pobre y el

10% de más altos ingresos, muestran variaciones que no son asimilables por regla general a la suerte que corrieron los grupos extremos. En al menos siete países, las variaciones en participación –tanto al alza como a la baja– no excedieron los dos puntos porcentuales. La fracción del ingreso captada por este grupo fue muy similar a comienzos y finales de la década en Chile, Colombia (entre 1994 y 1999), Guatemala, México y Venezuela. Entre ellos, el caso más particular es el de Venezuela, ya que los grupos medios mantuvieron su participación a pesar de la profunda crisis que afectó al país en el último quinquenio de los años noventa. Sólo en El Salvador (entre 1995 y 1999), Honduras y Uruguay se registraron aumentos importantes en el ingreso relativo captado por los estratos medios, generados en los dos últimos a costa de la participación de los hogares del decil superior, mientras que Brasil y Ecuador son los únicos casos en que las pérdidas superaron los tres puntos porcentuales, como resultado de las fuertes ganancias relativas de los estratos de altos ingresos. En este marco merece una mención especial lo sucedido en Argentina, donde los grupos medios experimentaron un sostenido deterioro de su participación a lo largo de la década (de 2.6 puntos porcentuales), así como el caso de Chile, en el que esta participación se redujo en 0.8 puntos entre 1996 y 2000, perdiendo de este modo los incrementos acumulados en la primera mitad de los años noventa. En cambio en Uruguay, donde también se produjo una pérdida de participación de los grupos medios de 0.8 puntos entre 1997 y 1999, ésta no alcanzó a revertir la importante mejoría lograda en los años previos. De cualquier manera, y no obstante las oscilaciones anotadas, la evolución del ingreso relativo de estos grupos evidencia que en varios países ellos disponen de mecanismos más poderosos que los de los grupos pobres para defender su cuota de participación en el ingreso total.

A consecuencia de lo anterior, en la mayoría de los países se ha verificado una ampliación de las distancias entre el ingreso medio de ambos grupos de hogares, lo que contribuye a reforzar la percepción de un retroceso en las condiciones distributivas. De 13 países con información a nivel nacional para los años extremos de la década, 8 experimentaron un aumen-

to en la relación de ingresos del decil superior respecto del 40% más pobre, mientras que sólo 4 mostraron una reducción y en uno se mantuvo constante. Los países donde se acentuó con más fuerza esa disparidad fueron Ecuador –área urbana–, Costa Rica, Venezuela y Argentina, en tanto que las mayores disminuciones se produjeron en Colombia (entre 1994 y 1997) y probablemente también en Honduras (véase el gráfico II.1).

Un resultado similar se registra al analizar el porcentaje de población con ingresos per cápita inferiores al 50% del promedio. Del conjunto de países analizados, en sólo dos se observó una reducción significativa en este indicador de desigualdad (Honduras y Uruguay).⁷ El resto evidenció un marcado aumento (entre los que destacan los mismos países que experimentaron un ensanchamiento de la brecha de ingresos, mencionados en el párrafo anterior), un incremento moderado (Brasil y Guatemala), o bien una mantención (Chile, Nicaragua y Panamá) (véase el gráfico II.1).

En términos del valor del coeficiente de Gini, los mayores incrementos en el decenio de 1990, a nivel nacional, se observaron en Costa Rica (que también experimentó un deterioro en el trienio 1997–1999) y Venezuela. Asimismo, Ecuador (área urbana) y Argentina (Gran Buenos Aires) también mostraron un retroceso en este indicador. Aunque en menor grado, Brasil y El Salvador (entre 1995 y 1999) se caracterizaron por terminar la década con una desigualdad distributiva algo superior a la de sus inicios, mientras que Chile, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá mantuvieron una situación relativamente invariante. Por su parte, Uruguay (área urbana) y Honduras,

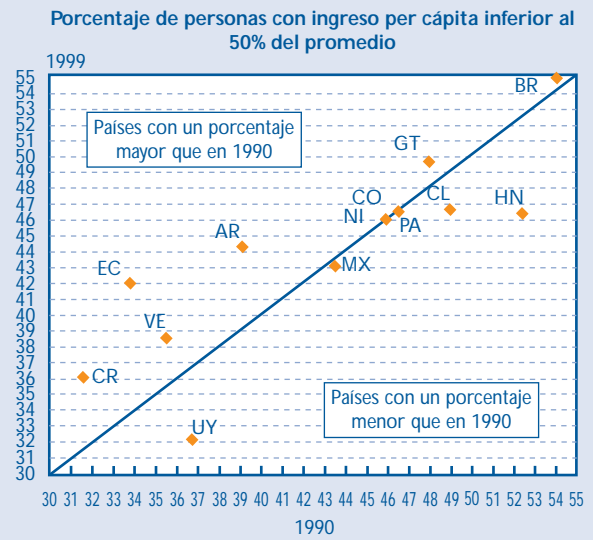
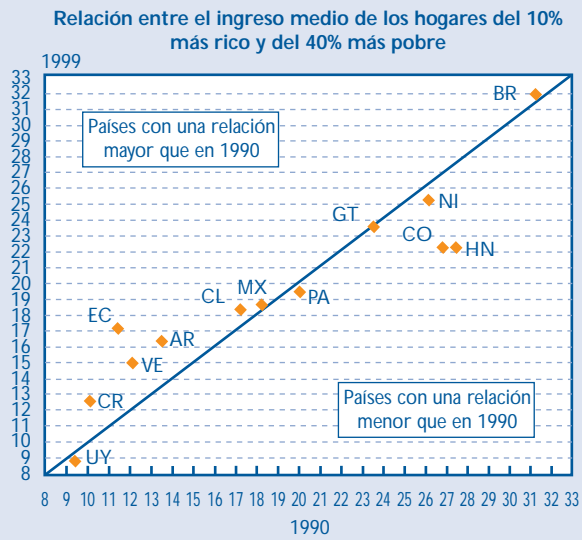
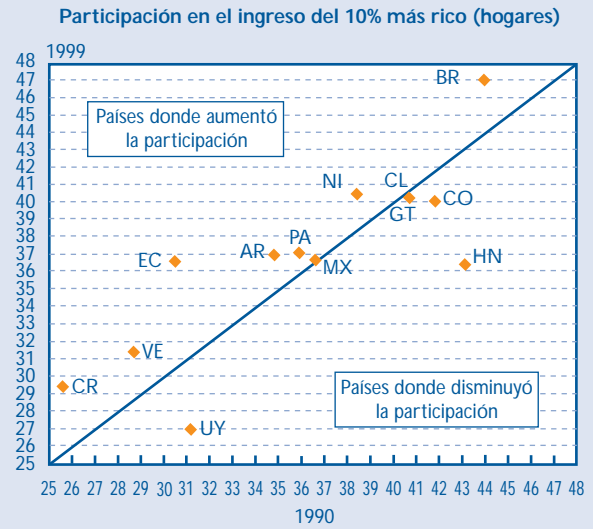
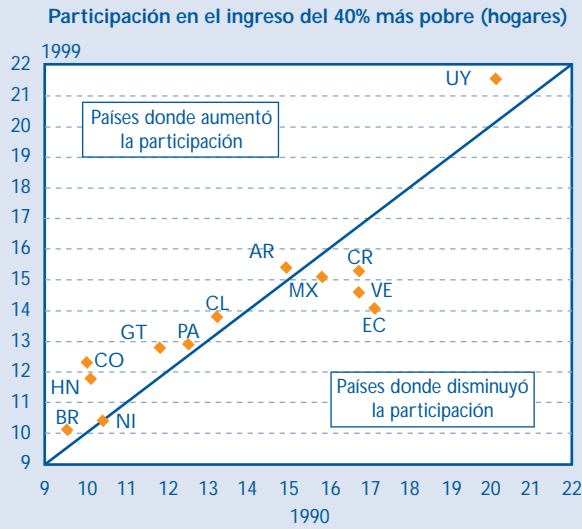
así como Colombia entre 1994 y 1999, fueron los únicos países de la región donde se logró reducir la concentración del ingreso, evaluada mediante el índice de Gini, en este período (véase el gráfico II.2).

Entre los países mencionados, cabe resaltar el gran desafío que enfrenta Brasil con miras a revertir la tendencia –moderada pero creciente– que mostró la desigualdad del ingreso en la década pasada, desde el momento que en la actualidad se ubica como el país con los más altos índices de concentración de toda la región, con un coeficiente de Gini de 0.64. En el otro extremo, es claro que Uruguay consolidó su avance en materia de reducción de la desigualdad dado que, además de los bajos registros que mantiene en los indicadores de pobreza, continuó un proceso gradual –aunque con altibajos en el período 1997–1999– de mejoría de la distribución del ingreso, que lo situó nuevamente en ese último año como el país con menor concentración de la región, con un valor de 0.44 en el índice de Gini de las áreas urbanas.

Otro grupo de países que durante la década anterior también logró reducir el nivel de los indicadores de desigualdad en las áreas urbanas fue aquel formado por Honduras, Bolivia, México, Guatemala y Panamá. Sin embargo, en algunos de estos casos los niveles observados en 1999 son aún de los más altos de la región. A su vez, la desigualdad rural, en aquellos países en que fue posible evaluarla, presentó un incremento en seis casos –principalmente en Costa Rica y México, y secundariamente en Brasil, Nicaragua, Guatemala y Panamá–, frente a tres en los que ésta manifestó una disminución: Chile, Honduras y Colombia (véase el gráfico II.2).

⁷ Recuérdese que el mismo índice es posible interpretarlo, además, conforme a lo señalado en el recuadro II.1, como una medida de la magnitud de la denominada "pobreza relativa".

AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): CAMBIOS EN LA CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, a/
TOTAL NACIONAL, 1990-1999

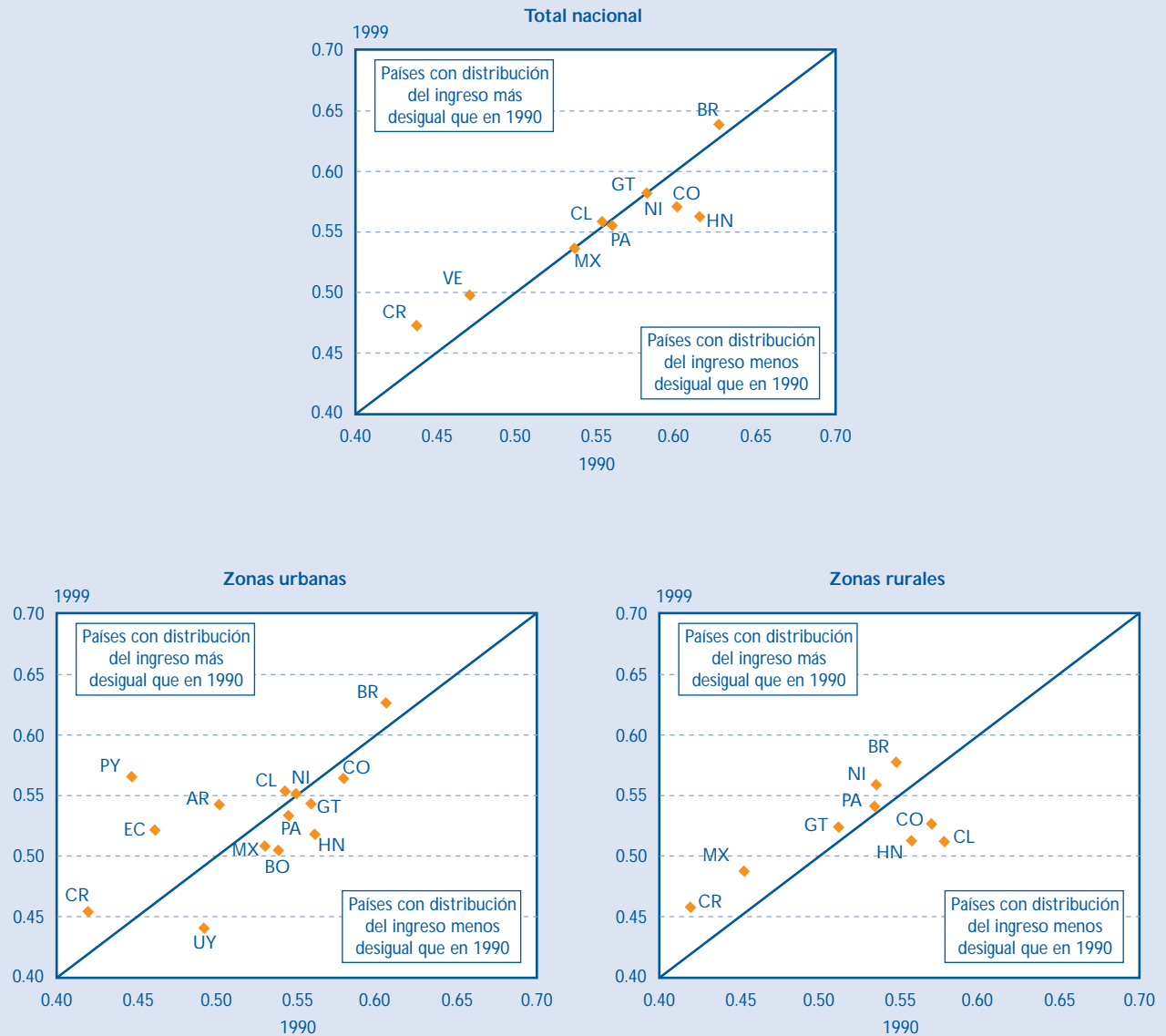


Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Calculada a partir de la distribución de los hogares ordenados según el ingreso per cápita. En el caso de Argentina las cifras corresponden al Gran Buenos Aires, mientras que para Ecuador y Uruguay corresponden al área urbana. Para los años específicos de cada estimación, véanse los cuadros II.1 y II.2.

Gráfico II.2

AMÉRICA LATINA: CAMBIOS EN EL COEFICIENTE DE GINI DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, a/ 1990-1999



Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Calculada a partir de la distribución de las personas ordenadas según su ingreso per cápita. Para las zonas urbanas, en Argentina las cifras corresponden al Gran Buenos Aires, mientras que para Bolivia (1990) y Paraguay (1990 y 1997), corresponden a ocho ciudades principales y al área metropolitana de Asunción, respectivamente. Para los años específicos de cada estimación, véanse los cuadros 23 y 24 del Anexo estadístico.

El análisis de conjunto permite agregar a las características de la evolución del ingreso de los grupos altos, medios y bajos, otros antecedentes que confirman apreciaciones formuladas anteriormente en este *Panorama social* sobre ciertas particularidades de las economías y sociedades latinoamericanas. En general, se observa que la distribución del ingreso no muestra una clara relación con los niveles de desarrollo de los países. Así por ejemplo, Argentina y Uruguay, que destacan por su alto nivel de ingreso en el contexto regional, muestran hoy estructuras y tendencias de la distribución sustancialmente distintas; y algo similar sucede con las economías de menores ingresos medios, que resultan ser indistintamente países de alta, mediana y baja desigualdad (véanse los cuadros II.3 y II.4). También es del caso señalar que en los años ochenta y noventa algunos países mantuvieron sus características distributivas en tanto que otros las modificaron sustancialmente. Argentina y Chile, que destacaban en los años sesenta por su buena distribución relativa del ingreso en el ámbito de América Latina, se sitúan actualmente en torno del promedio regional, e incluso lo superan en algunos indicadores. Por el contrario, Uruguay y Costa Rica siguen mostrando una estructura social y política proclive a la defensa de la distribución del ingreso, más allá de los cambios económicos internos y de relacionamiento externo de los últimos años. En el mismo sentido llama la atención el caso de Venezuela, que pese a ser fuertemente afectada por la crisis en la segunda mitad de los años noventa y sufrir un evidente deterioro en la distribución del ingreso a lo largo de la década, sigue siendo menos inequitativa que la mayoría de los demás países de la región.

En síntesis, pese a que en los años noventa muchos países lograron expandir su economía y aumentar significativamente el gasto social, y a la constante y justificada preocupación por el tema distributivo, la realidad es que en general América Latina no ha conseguido en los últimos años modificar sustancialmente y de manera positiva la distribución del ingreso. De modo que, más allá de que el crecimiento económico de la última década se haya traducido, como era de esperar, en progresos relativos en materia de reducción de la pobreza absoluta, la expansión productiva no ha surtido el mismo efecto –en orientación ni en intensidad de los cambios– en el ámbito de la distribución de los frutos de ese crecimiento. Más aún, las opiniones tienden a coincidir en cuanto a que en el presente tampoco se advierten signos alentadores en este sentido, que permitan suponer variaciones importantes en la situación descrita al corto y mediano plazo.

Como se señaló anteriormente, en el pasado decenio de un conjunto de 17 países analizados sólo 2 (Honduras⁸ y Uruguay) finalizaron el período con resultados que denotan avances en materia de desigualdad distributiva. Más aún, la evidencia confirma que incluso en aquellos países que lograron mantener un alto ritmo de crecimiento sostenido en el tiempo (como Chile), la distribución del ingreso mostró una enorme rigidez para alterar su elevado grado de concentración, y las disparidades en materia de ingresos persistieron como un rasgo no deseado de la estructura económica y social prevalente.

⁸ Habida cuenta en este caso de la dificultad que entraña la comparación de las cifras sobre el ingreso total de los hogares reportada en las encuestas de 1990 y 1999, señalada previamente en la nota 6 infra.

Cuadro II.3

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): NIVEL DE PRODUCTO PER CÁPITA Y GRADO DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO EN LAS ZONAS URBANAS, 1999		
Ingreso per cápita		Concentración del ingreso a/
Alto (Más de 4 000 dólares)	Argentina Uruguay Chile México Brasil	Alta Baja Alta Media Alta
Medio (Entre 2 000 y 4 000 dólares)	Costa Rica Panamá Venezuela b/ República Dominicana Colombia	Baja Media Baja Media Alta
Bajo (Menos de 2 000 dólares)	EL Salvador Paraguay Guatemala Ecuador Bolivia Honduras Nicaragua	Baja Media Alta Media Media Alta Alta

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Coeficiente de Gini **bajo** (inferior a 0.48), **medio** (entre 0.48 y 0.54) y **alto** (superior a 0.54).

b/ Se refiere al total nacional.

Cuadro II.4

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LAS ZONAS URBANAS, 1990-1997-1999						
Crecimiento del PIB por habitante en la década de 1990 a/	Relación $D^{10} / D^{(1 \text{ a } 4)}$ b/			Índice de Gini		
	1990-1997	1997-1999	1990-1999	1990-1997	1997-1999	1990-1999
Alto (más de 4%) Chile República Dominicana	Aumentó -	Aumentó -	Aumentó -	Se mantuvo -	Aumentó -	Aumentó -
Medio (2% a 4%) Argentina c/ Panamá El Salvador Perú Uruguay Costa Rica	Aumentó Aumentó - - Disminuyó Aumentó	Aumentó Disminuyó Se mantuvo - - Aumentó Aumentó	Aumentó Disminuyó - - Disminuyó Aumentó	Aumentó Aumentó - - Disminuyó Aumentó	Aumentó Disminuyó Disminuyó - Aumentó Aumentó	Aumentó Disminuyó - - Disminuyó Aumentó
Bajo (1% a 2%) México Bolivia Guatemala Brasil	- - - Aumentó	- Disminuyó - Aumentó	Disminuyó - Disminuyó Aumentó	- - - Aumentó	- Disminuyó - Aumentó	Disminuyó - Disminuyó Aumentó
Nulo o negativo (-1% a 1%) Colombia d/ Nicaragua Honduras Venezuela e/ Ecuador Paraguay	Disminuyó - Disminuyó Aumentó Se mantuvo -	Aumentó Aumentó Disminuyó Se mantuvo Aumentó Aumentó	Disminuyó - Disminuyó Aumentó Aumentó -	Se mantuvo - Disminuyó Aumentó Aumentó -	Disminuyó Se mantuvo Disminuyó Disminuyó Aumentó Aumentó	Disminuyó - Disminuyó Aumentó Aumentó -

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Tasa promedio anual de variación del producto interno bruto (PIB) por habitante, sobre la base de valores a precios de 1995.

b/ $D^{(1 \text{ a } 4)}$ representa el 40% de los hogares de menores ingresos, en tanto que D^{10} es el 10% de los hogares de más altos ingresos.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ El año inicial corresponde a 1994.

e/ Se refiere al total nacional.

En este contexto, es sin embargo alentador que en la última década en algunos países centroamericanos se hayan logrado –aunque con distinta intensidad y alcance– ciertos progresos distributivos en las áreas urbanas, sin perjuicio de los altos niveles de concentración todavía existentes en esa subregión. La estabilidad económica, las menores fluctuaciones financieras, el aprovechamiento del auge de los países de América del Norte, la reducción de la presión demográfica fruto de las migraciones internacionales, y el aumento del flujo de remesas recibidas de nacionales residentes en el exterior, son algunos de los factores que han contribuido a ese resultado.

Medidas de concentración alternativas y uso de "escalas de equivalencia"

Tal como se indicó en el capítulo anterior en relación con la medición de la pobreza, también en el caso de la desigualdad distributiva la utilización de un solo indicador puede resultar insuficiente para dar una visión completa sobre las características del fe-

nómeno y de su evolución en el tiempo. Al respecto, son conocidas ciertas limitaciones por ejemplo del coeficiente de Gini, quizás el más usado en este campo, derivadas del hecho que en particular no refleja adecuadamente las variaciones que ocurren en los extremos de la distribución de ingresos, o que genera resultados ambiguos cuando se comparan curvas de Lorenz entrecruzadas (véase el recuadro II.3). Por esta razón, es aconsejable ampliar el análisis efectuado a partir de los valores de este indicador, o de cualquier otra medida específica, mediante la incorporación de algunos índices complementarios. En atención a ello, en el cuadro II.2 se presenta además la estimación de los índices de varianza de los logaritmos, Theil y Atkinson, tres indicadores especialmente sensibles a lo que sucede en la parte baja de la distribución e independientes del ordenamiento de los ingresos. Cabe destacar que aunque las magnitudes de los indicadores no son comparables entre sí, es deseable que una firme conclusión acerca de la dirección de los cambios en la desigualdad sea sustentada en lo posible por todos ellos (véase el recuadro II.4).

Recuadro II.3

LA MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD

La literatura económica y estadística recoge un conjunto amplio de indicadores para la medición de la desigualdad de los ingresos. En términos generales, éstos pueden clasificarse en: i) estadísticos tradicionales (rango absoluto y relativo, estadísticos de orden, desviación media relativa, varianza, coeficiente de variación, varianza de los logaritmos); ii) medidas basadas en la entropía (índice de Theil); iii) índice de Gini; iv) funciones de bienestar social (índices de Dalton y Atkinson); y, v) curva de Lorenz.

A su vez, entre las propiedades más importantes que debiera satisfacer todo buen indicador de desigualdad se mencionan usualmente las siguientes (Cowell, 1995):

- i) **Principio de transferencia "débil"**: Ante una transferencia de ingreso de un hogar "rico" a un hogar "pobre", ceteris paribus, el indicador debe reflejar una disminución en el grado de desigualdad.
- ii) **Independencia de escala**: El indicador no debe variar ante transformaciones proporcionales o cambios de escala (por ejemplo, cambios en la unidad de medida del ingreso).
- iii) **Principio de población**: La concentración del ingreso en dos poblaciones con idénticas curvas de Lorenz debe ser la misma, independiente del tamaño de esas poblaciones.
- iv) **Descomposición aditiva**: La concentración del ingreso para una población debe ser igual a la suma ponderada de la desigualdad en todos los subgrupos que la conforman.
- v) **Principio de transferencia "fuerte"**: Ante una transferencia de ingreso de un hogar "rico" a un hogar "pobre", la disminución en la desigualdad será más pronunciada a medida que aumente la distancia entre los ingresos de ambos hogares.

El cumplimiento de estas propiedades, sumado a ciertas consideraciones de carácter práctico, han llevado a la elección de un conjunto de índices típicamente utilizados en el análisis de la distribución del ingreso. Así, la curva de Lorenz constituye un instrumento estadístico básico, ya que permite conocer la forma de la distribución del ingreso y la participación de los distintos grupos poblacionales. Por su parte, la facilidad de cálculo e interpretación del índice de Gini –derivado de la curva de Lorenz–, lo ha convertido en uno de los indicadores más ampliamente utilizados, pese a sus limitaciones para descomponerse en forma aditiva.

Entre los índices estadísticos tradicionales, el coeficiente de variación y la varianza de los logaritmos son también muy útiles, de-

(continúa)

Recuadro II.3 (conclusión)

LA MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD

bido a que aprovechan toda la información disponible en la distribución. Asimismo, es particularmente aconsejable el uso de los índices de Theil y Atkinson, tanto por sus interesantes propiedades teóricas como por la mayor importancia que asignan a los ingresos más bajos en la conformación de la medida de desigualdad.

A su vez, en lo que se refiere a la comparabilidad de resultados entre estos indicadores, se debe destacar que todos ellos tienen un carácter ordinal, presentan rangos de variación diferentes y satisfacen distintas propiedades, por lo que sus valores no son equiparables entre sí. Aun más, dado que cada uno mide aspectos parciales de la desigualdad, es común que generen distintos ordenamientos de las observaciones. Por lo tanto, sólo es posible establecer un ordenamiento definitivo para un grupo de distribuciones cuando éste se mantiene invariante ante cualquier índice utilizado. Lo más apropiado es, por consiguiente, utilizar los índices de desigualdad de manera complementaria y analizar sus resultados conjuntamente.

Por último, cabe mencionar que los valores de un mismo índice son comparables entre diversas poblaciones, pero sólo en un sentido ordinal; es decir, únicamente permiten determinar en qué situación existe mayor o menor desigualdad, pero no la magnitud de las diferencias.

Recuadro II.4

ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO

Existe una diversidad de indicadores que se utilizan para medir el nivel de concentración del ingreso. Sin embargo, como se mencionó en el recuadro II.2, sólo algunos de ellos satisfacen un conjunto básico de propiedades consideradas importantes desde el punto de vista teórico. Así, en los estudios empíricos es común encontrar los siguientes índices de desigualdad:

- i) **Coefficiente de variación al cuadrado:** $CV^2 = \frac{V}{\mu^2}$

donde μ representa el ingreso medio de la distribución y V la varianza. Es una medida estadística que se emplea para conocer la dispersión de una variable, y su inclusión en el estudio de la desigualdad se justifica por la relación que guarda con la familia de índices generalizados de entropía.

- ii) **Varianza de los logaritmos:** $VL = \sum_{i=1}^n (\log y_i - \log \mu)^2 / n$

Se considera importante ya que es uno de los pocos indicadores que se pueden descomponer en forma aditiva y, además, le concede mayor importancia a las observaciones que se ubican en la parte baja de la distribución.

- iii) **Índice de Gini:** $G = 1 - \sum_{i=1}^m p_i [Q_i + Q_{i+1}]$

donde Q_i representa el ingreso acumulado por el grupo i y p_i la proporción de personas en el mismo. Es el índice más usual, de fácil interpretación, y además se puede derivar geoméricamente a partir de la curva de Lorenz.

- iv) **Índice de Theil:** $IT = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{\mu} \log \left(\frac{y_i}{\mu} \right)$

Es un índice que le otorga más importancia a las transferencias que se realizan en la parte baja de la distribución, y se puede descomponer en forma aditiva.

- v) **Índice de Atkinson:** $IA_\varepsilon = 1 - \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\mu} \right)^{1-\varepsilon} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}}$

Tiene implícita una función de utilidad, que asigna mayor relevancia a las observaciones que se ubican en la parte baja de la distribución, en la medida que aumente el valor del parámetro ε (que expresa "aversión a la desigualdad").

A excepción del índice de Gini y del índice de Atkinson, que varían entre 0 y 1, los valores del resto de los indicadores no están acotados superiormente. En todos los casos, no obstante, valores iguales a cero se interpretan como la ausencia de desigualdad (cuando todos los individuos tienen el mismo ingreso).

Los valores de estos índices tienen un significado estrictamente ordinal y no son comparables entre sí, ya que cada uno de ellos puede propiciar un ordenamiento diferente. En todo caso, los resultados que genera un mismo indicador se pueden contrastar en el tiempo. Por otra parte, se deben considerar algunas relaciones existentes entre los indicadores propuestos, que además justifican su análisis conjunto. Por ejemplo, el IA_ε con un parámetro $\varepsilon = 1$ equivale ordinalmente al IT . Asimismo, también existe relación entre el VL y el IA_ε con $\varepsilon = 2$, en tanto que el CV^2 forma parte de la familia de índices a la cual pertenece el IT . Dado que cada indicador analiza sólo una parte del problema de la desigualdad, lo anterior no significa necesariamente que los índices deban generar el mismo valor o presentar una evolución uniforme en el tiempo. De allí la importancia de incorporar simultáneamente distintos indicadores, con el fin de ampliar las posibilidades de análisis.

Los valores estimados para estos índices permiten formular dos conclusiones importantes respecto de la evolución de la desigualdad, que matizan para algunos países los comentarios realizados anteriormente a partir del índice de Gini. En primer lugar, se comprueba que –a pesar de sus limitaciones– el coeficiente de Gini arroja resultados contundentes en alrededor de seis países de la región en cuanto a los cambios en la desigualdad ocurridos en los últimos años. Debido a que el sentido de esos cambios según el indicador mencionado coincide con el de los indicadores más completos, es posible afirmar que en Argentina, Costa Rica, Ecuador y Venezuela se deterioró la distribución del ingreso entre 1990 y 1999, y que en Honduras y Uruguay sucedió lo contrario, tal como se ha venido indicando a lo largo de este capítulo.

Para otros países, en cambio, la aplicación de medidas de concentración alternativas revela que la tendencia mostrada por el índice de concentración de Gini puede no representar en todas sus dimensiones la evolución de la desigualdad distributiva. En Brasil, por ejemplo, el coeficiente de Gini y el índice de Theil dan cuenta de un deterioro de la distribución del ingreso, en contraste con lo que señala la varianza de los logaritmos y el índice de Atkinson. La aparente contradicción entre los indicadores podría sugerir, en este caso, que mientras los grupos de menores recursos mejoraron su participación durante la década, otros grupos de bajos ingresos –pero ubicados en una mejor posición relativa– la empeoraron. Una interpretación similar podría aplicarse al caso de Guatemala, donde el estancamiento de la desigualdad señalado por el coeficiente de Gini no guarda relación con las disminuciones de la varianza de los logaritmos y del índice de Atkinson, ni con el aumento del índice de Theil. Si bien para resolver estas faltas de correspondencia –que se presentan también en Chile, México y Panamá– se requiere evaluar con mayor detalle el comportamiento de la distribución del ingreso en sus distintos tramos, queda en claro que los indicadores aludidos proveen información útil para complementar el análisis del amplio espectro de situaciones que abarcan los cambios distributivos.

Finalmente, también suele mencionarse en el ámbito de los estudios respecto de la desigualdad –sobre todo a la hora de realizar comparaciones entre países y regiones– el efecto que introducen en el cálculo de la distribución de los ingresos las disparidades observadas en la estructura demográfica y en los hábitos de consumo de los distintos tipos de familias. Como ya se indicó en el marco de las estimaciones de pobreza, la literatura económica sugiere con este propósito el empleo de las denominadas "escalas de equivalencia", que consideran las diferentes necesidades de los hogares atribuibles a las características de sus miembros.

En este sentido, es posible afirmar que el panorama descrito acerca de los altos niveles de desigualdad distributiva existentes en la región, así como su evolución en el curso de los últimos años, no se vería alterado sustancialmente en el caso que se incorporasen estas escalas en el cálculo de los indicadores de concentración. Así al menos se desprende de los resultados de un análisis de sensibilidad del índice de Gini ante el uso de tres distintas escalas de equivalencia, denotadas respectivamente por las siglas OCDE, USA y LIS.⁹

En general, el valor de este índice de concentración del ingreso calculado mediante la aplicación de las referidas escalas tiende a ser menor que aquel que se obtiene cuando se utiliza el criterio per cápita, pero las diferencias entre éste y cualquiera de los otros son más bien reducidas (la diferencia máxima observada fue de 0.04 en el valor del coeficiente de Gini). Únicamente en dos de los casos examinados se registra un incremento, en vez de una disminución, de la desigualdad al utilizar alguna de esas escalas de equivalencia, aunque en proporciones mínimas (Guatemala en 1989 y Panamá en 1999).

A su vez, las tendencias mostradas por este indicador ante la incorporación de escalas de equivalencia son prácticamente iguales a las señaladas anteriormente. De los países que presentan un aumento de la concentración según el cálculo per cápita, todos menos uno (Guatemala) registran la misma tendencia bajo las escalas OCDE y USA, y todos menos dos (Gua-

9 Para una descripción del significado de estas escalas, véase el recuadro II.5, y también el recuadro I.4 *infra*.

temala y Panamá) presentan la misma tendencia bajo la escala LIS. Además, la utilización de equivalencias no produce mayores cambios en el ordenamiento de países de acuerdo a su grado de desigualdad, en comparación con el que se obtiene de acuerdo al ingreso per cápita. En todos los casos, Brasil aparece

como el país con mayor concentración del ingreso, seguido por un grupo constituido por Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay, mientras que Uruguay y Costa Rica figuran como los más equitativos de la región¹⁰ (véase el recuadro II.5).

Recuadro II.5

MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD Y ESCALAS DE EQUIVALENCIA

El uso de indicadores monetarios para medir el bienestar conlleva la opción de considerar las diferentes necesidades de los hogares y el costo de satisfacerlas. Los indicadores típicamente utilizados, ingreso (o gasto) **total** e ingreso (o gasto) **per cápita**, resultan insuficientes para este propósito, ya que así como el primero no hace ninguna distinción entre hogares, el segundo ignora las posibles diferencias en necesidades atribuibles a las características de los miembros. Las "escalas de equivalencia" constituyen una alternativa más completa, en la que el tamaño del hogar se transforma en una unidad ficticia ("adulto-equivalente"), que recoge el costo proporcional de satisfacer las necesidades de los miembros del hogar determinadas a partir de su número y sus características demográficas, usualmente la edad (véase el recuadro I.4).

A continuación se presentan estimaciones del índice de desigualdad de Gini utilizando tres escalas de equivalencia distintas, "OCDE", "USA", y "LIS", construidas a partir del número de adultos (**A**) y de niños (**N**). La escala "OCDE", aplicada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, y que corresponde a la forma $1 + 0.7(A-1) + 0.5N$, expresada al primer adulto con el valor 1, cada adulto más como 0.7 del primer adulto, y cada niño (menores de 14 años) como 0.5 del primer adulto. La escala que se denota como "USA", recomendada para la construcción de la línea de pobreza estadounidense, corresponde a la forma $(A + 0.7N)^{0.7}$. Por último, la escala "LIS" (Luxembourg Income Study), empleada extensamente en algunos países desarrollados, equivale a la raíz cuadrada del número de miembros del hogar.

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): COEFICIENTE DE GINI SEGÚN DISTINTAS ESCALAS DE EQUIVALENCIA TOTAL NACIONAL, 1990 Y 1999

País	Año	Criterio				País	Año	Criterio			
		Per cápita	OCDE	USA	LIS			Per cápita	OCDE	USA	LIS
Argentina a/	1990	0.501	0.484	0.476	0.474	Honduras	1990	0.615	0.599	0.591	0.592
	1999	0.542	0.522	0.513	0.510		1999	0.564	0.546	0.535	0.533
Bolivia	1989 b/	0.538	0.529	0.524	0.526	México	1989	0.536	0.517	0.502	0.496
	1999	0.586	0.571	0.564	0.563		1998	0.539	0.519	0.505	0.500
Brasil	1990	0.628	0.612	0.602	0.598	Nicaragua	1993	0.582	0.566	0.556	0.563
	1999	0.640	0.623	0.614	0.611		1998	0.583	0.568	0.559	0.565
Chile	1990	0.554	0.541	0.534	0.533	Panamá	1991	0.560	0.544	0.533	0.529
	2000	0.560	0.547	0.540	0.537		1999	0.558	0.540	0.529	0.567
Colombia	1994	0.601	0.587	0.578	0.577	Paraguay	1990 d/	0.447	0.432	0.419	0.415
	1999	0.572	0.554	0.544	0.541		1999	0.565	0.546	0.538	0.540
Costa Rica	1990	0.438	0.422	0.414	0.415	República Dominicana	1997	0.518	0.502	0.495	0.498
	1999	0.473	0.456	0.447	0.446	Uruguay c/	1990	0.492	0.476	0.470	0.472
Ecuador c/	1990	0.461	0.446	0.437	0.438	Venezuela	1999	0.440	0.420	0.410	0.407
	1999	0.426	0.511	0.500	0.497		1990	0.471	0.453	0.441	0.441
El Salvador	1995	0.507	0.490	0.479	0.478	1999	0.498	0.480	0.469	0.468	
	1999	0.518	0.503	0.493	0.501						
Guatemala	1989	0.583	0.588	0.554	0.553						
	1998	0.582	0.561	0.547	0.543						

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Gran Buenos Aires.

b/ Ocho ciudades principales y El Alto.

c/ Total urbano.

d/ Área metropolitana de Asunción.

10 Esta evidencia da pie para señalar que la precisión del análisis sobre la situación distributiva en América Latina no debiera verse particularmente afectada –al menos en lo que respecta al coeficiente de Gini– por la introducción de escalas de equivalencia, a diferencia de lo concluido anteriormente en relación a los niveles de pobreza.



Dinámica del empleo y el desempleo en América Latina durante los años noventa

A. Dinámica del empleo y cambios en la estructura ocupacional

Durante los años noventa, la oferta de trabajo creció en América Latina a una tasa promedio anual del 2.6%, mientras que la demanda laboral aumentó al 2.2%. Como consecuencia de la insuficiente creación de puestos de trabajo la desocupación se elevó notablemente en ese período, alcanzando a fines de la década a alrededor del 8.6% (más de 18 millones de personas). Al mismo tiempo, hubo un deterioro en la calidad de los empleos –medida de acuerdo a su grado de informalización–, dado que 7 de cada 10 nuevas plazas ocupacionales en las zonas urbanas se generaron en el sector informal o de baja productividad. Por su parte, en los últimos 10 años la tasa de participación femenina subió de 37.9% a 42.0%, y ciertas actividades laborales tendieron hacia la "feminización"; no obstante, la brecha entre el desempleo femenino y el masculino se ha hecho cada vez mayor.

En el decenio de 1990, el mercado de trabajo en América Latina mostró algunos cambios significativos, producto de la interacción entre las tendencias de la oferta y la demanda laboral. Ciertas transformaciones demográficas ocurridas en el período aceleraron de manera importante el incremento de la oferta de mano de obra, destacándose entre ellas el fuerte crecimiento de la población en edad de trabajar y, en el caso de las áreas urbanas, la continuación del proceso migratorio hacia las ciudades. A su vez, la demanda de trabajo mantuvo un ritmo de crecimiento menos dinámico que el de la oferta, relegando al desempleo a una proporción creciente de la población, particularmente en las zonas urbanas.

Las tendencias demográficas de la última década se

han traducido en una disminución del ritmo de crecimiento de la población regional, como consecuencia principalmente de la sostenida baja de la tasa de fecundidad. Luego de situarse en torno de 1.8% entre 1990 y 1994, la tasa promedio anual de crecimiento de la población se redujo a 1.6% en el período 1997–1999. Esta reducción ha afectado sobre todo a los más jóvenes. El número de personas menores de 15 años de edad, que ya venía aumentando muy lentamente durante la primera mitad del decenio (a una tasa del 0.4% anual), creció apenas al 0.2% hacia fines de éste. Igualmente, la población mayor de 64 años, que todavía representa sólo poco más del 5% del total, aumentó a una tasa relativamente constante durante la década (3.1%) (véanse el cuadro III.1 y el gráfico III.1).

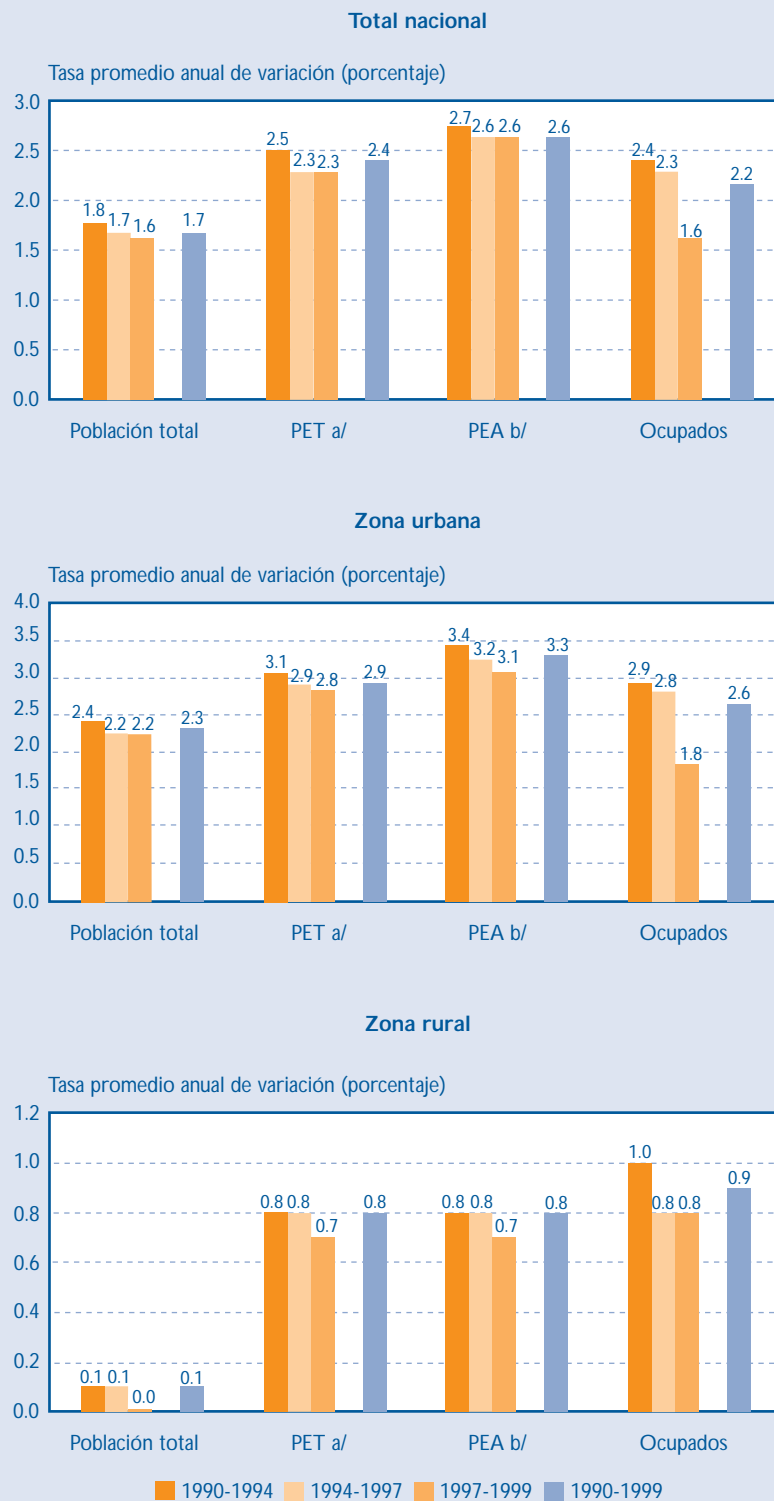
Cuadro III.1

AMÉRICA LATINA: PRINCIPALES AGREGADOS DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999								
Descripción	Personas (miles)				Tasa promedio anual de variación (porcentaje)			
	1990	1994	1997	1999	1990-1994	1994-1997	1997-1999	1990-1999
Población total	429 775	460 791	484 133	499 872	1.8	1.7	1.6	1.7
Urbana	305 252	335 804	358 904	374 553	2.4	2.2	2.2	2.3
Rural	124 524	124 987	125 229	125 319	0.1	0.1	0.0	0.1
Población menor de 15 años de edad	155 156	157 940	159 447	160 191	0.4	0.3	0.2	0.3
Urbana	102 798	107 447	110 426	112 199	1.1	0.9	0.8	1.0
Rural	52 358	50 493	49 021	47 992	-0.9	-1.0	-1.1	-1.0
Población en edad de trabajar	274 619	302 852	324 685	339 680	2.5	2.3	2.3	2.4
Urbana	202 454	228 358	248 478	262 354	3.1	2.9	2.8	2.9
Rural	72 165	74 494	76 208	77 327	0.8	0.8	0.7	0.8
De 15 a 64 años de edad	254 569	280 102	299 741	313 203	2.4	2.3	2.2	2.3
Urbana	187 968	211 517	229 732	242 187	3.0	2.8	2.7	2.9
Rural	66 601	68 586	70 009	71 016	0.7	0.7	0.7	0.7
De más de 64 años de edad	20 050	22 749	24 944	26 478	3.2	3.1	3.0	3.1
Urbana	14 486	16 841	18 745	20 167	3.8	3.6	3.7	3.7
Rural	5 564	5 908	6 199	6 311	1.5	1.6	0.9	1.4
Población económicamente activa a/	167 485	186 446	201 417	211 833	2.7	2.6	2.6	2.6
Urbana	120 688	138 097	151 968	161 648	3.4	3.2	3.1	3.3
Rural	46 797	48 349	49 448	50 185	0.8	0.8	0.7	0.8
Ocupados	159 841	175 632	187 824	193 714	2.4	2.3	1.6	2.2
Urbana	114 087	127 987	139 094	144 190	2.9	2.8	1.8	2.6
Rural	45 754	47 645	48 730	49 524	1.0	0.8	0.8	0.9
Desocupados	7 643	10 814	13 593	18 118	9.1	7.9	15.5	10.1
Urbana	6 600	10 110	12 874	17 457	11.2	8.4	16.4	11.4
Rural	1 043	704	719	661	-9.4	0.7	-4.1	-4.9
Cesantes	5 932	8 308	10 397	15 391	8.8	7.8	21.7	11.2
Urbana	5 225	8 112	10 221	15 204	11.6	8.0	22.0	12.6
Rural	708	196	176	186	-27.4	-3.6	2.9	-13.8
Buscan trabajo por primera vez	1 711	2 506	3 195	2 728	10.0	8.4	-7.6	5.3
Urbana	1 376	1 998	2 653	2 253	9.8	9.9	-7.8	5.6
Rural	335	507	543	475	10.9	2.3	-6.5	3.9
Población económicamente inactiva a/	107 135	116 406	123 269	127 848	2.1	1.9	1.8	2.0
Urbana	81 766	90 261	96 510	100 706	2.5	2.3	2.2	2.3
Rural	25 369	26 145	26 759	27 141	0.8	0.8	0.7	0.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la División de Población-Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ De 15 años y más de edad.

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE ALGUNAS VARIABLES GENERALES DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990–1999



Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la División de Población–Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

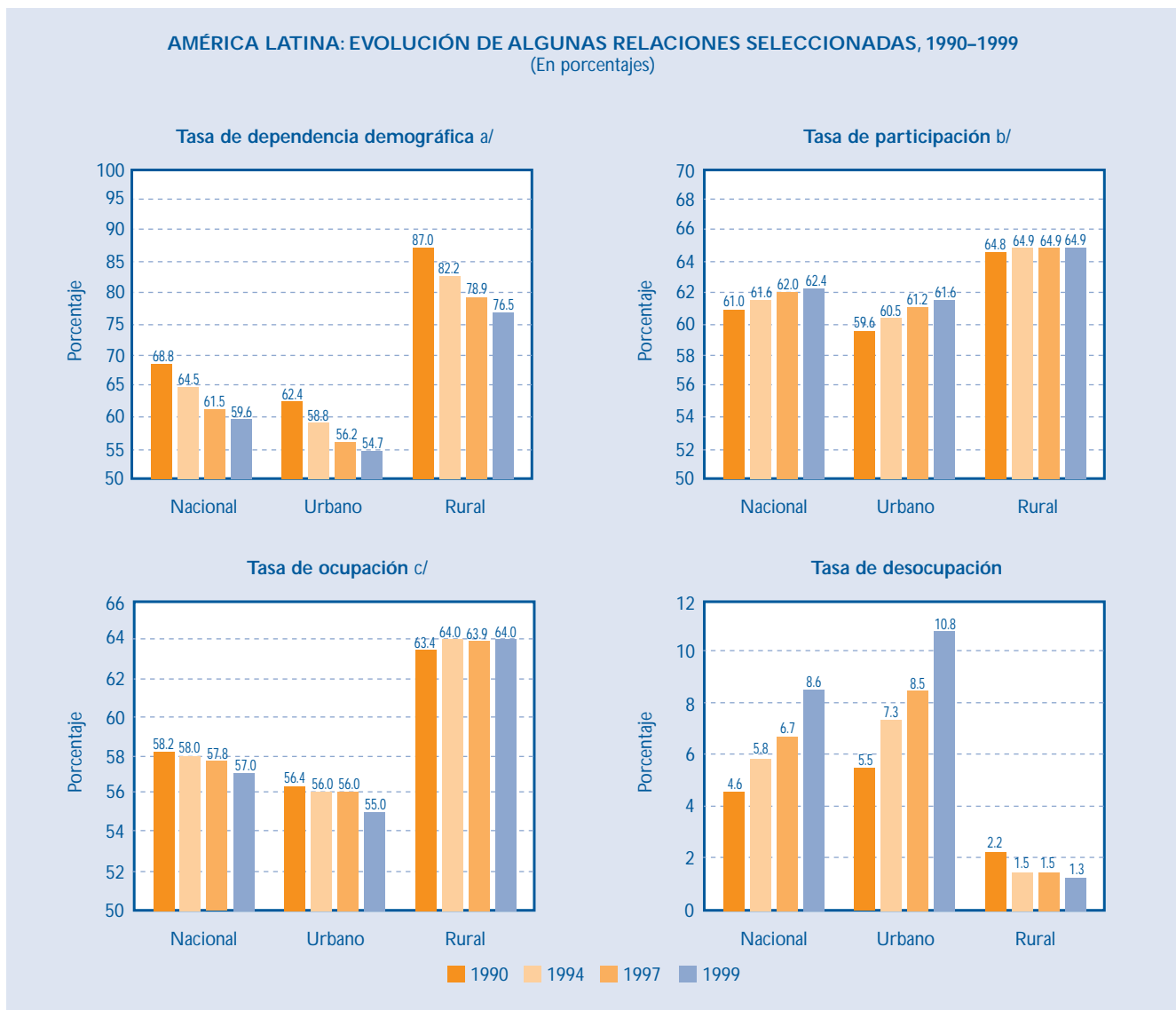
a/ Población en edad de trabajar (de 15 años y más de edad).

b/ Población económicamente activa (de 15 años y más de edad).

Debido a la paulatina pérdida de participación de los menores de 15 años y a la baja participación que aún tienen dentro de la población total los mayores de 64 años, el crecimiento poblacional del decenio se concentró en el grupo de personas cuyas edades se encuentran en el tramo intermedio (de 15 a 64 años). Entre 1990 y 1999, el tamaño relativo de este grupo pasó del 59.2% al 62.7% de la población total. A

consecuencia de ello, la población en edad de trabajar (PET) alcanzó un crecimiento promedio de 2.4% anual durante la década, que además de determinar una notable reducción en la tasa de dependencia demográfica de más de nueve puntos porcentuales (de 68.8% a 59.6%), permitió un aumento importante de la población económicamente activa (PEA) (véase el gráfico III.2).

Gráfico III.2



Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la División de Población—Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Población menor de 15 años de edad y mayor de 64 sobre la población de 15 a 64 años.

b/ Población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar (ambas de 15 años y más de edad).

c/ Población ocupada sobre la población en edad de trabajar (ambas de 15 años y más).

El conjunto de los fenómenos descritos ha sido denominado como el "bono demográfico" de los años noventa, en alusión al potencial incremento de la producción regional que podría haberse generado a partir de la nueva estructura demográfica. No obstante, tal como lo ha señalado la CEPAL (CEPAL, 2000c, cap. 2), los beneficios de este "bono" no se obtienen automáticamente. De hecho, la oportunidad de acrecentar el producto por habitante sobre la base de una mayor disponibilidad de fuerza de trabajo fue desaprovechada durante la década.

En este entorno demográfico, la población económicamente activa (PEA) mostró un crecimiento promedio anual de 2.6%. Así, la fuerza de trabajo de la región, constituida a fines de los años noventa por cerca de 212 millones de personas, aumentó en 44 millones durante el decenio, llegando a representar en 1999 un 42% de la población total, es decir, tres

puntos porcentuales sobre el registro de 1990. La magnitud del crecimiento de la población activa se hace evidente en el alza experimentada por la tasa de participación –cociente entre la PEA y la PET–, que subió de 61.0% a 62.4% en la década pasada. Este fenómeno se manifestó especialmente en las áreas urbanas, donde esa relación se elevó en dos puntos porcentuales (de 59.6% a 61.6%), mientras que en las áreas rurales tanto la PEA como la PET aumentaron a un ritmo similar (0.8% anual), manteniéndose relativamente constante la tasa de participación (alrededor de 64.9%). La evolución de esta tasa a nivel agregado responde esencialmente al rápido crecimiento de la PEA femenina; tal como se detalla más adelante, entre 1990 y 1999 la tasa de participación de las mujeres se incrementó significativamente, en contraste con la paulatina reducción que experimentó en el caso de los hombres (véase el cuadro III.2).

Cuadro III.2

AMÉRICA LATINA: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, POR SEXO Y ZONA a/												
Descripción	Total nacional				Zona urbana				Zona rural			
	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999
	(Miles)											
Población en edad de trabajar	274 619	302 852	324 685	339 680	202 454	228 358	248 478	262 354	72 165	74 494	76 208	77 327
Hombres	134 901	148 463	159 031	166 320	97 109	109 526	119 197	125 878	37 792	38 937	39 834	40 442
Mujeres	139 718	154 389	165 655	173 360	105 345	118 832	129 281	136 476	34 373	35 557	36 374	36 885
Población económicamente activa	167 485	186 446	201 417	211 833	120 688	138 097	151 968	161 648	46 797	48 349	49 448	50 185
Hombres	114 479	125 101	133 336	138 995	79 065	88 954	96 681	102 005	35 414	36 147	36 655	36 990
Mujeres	53 005	61 345	68 081	72 838	41 623	49 142	55 287	59 642	11 383	12 202	12 794	13 196
Ocupados	159 841	175 632	187 824	193 714	114 087	127 987	139 094	144 190	45 754	47 645	48 730	49 524
Hombres	109 537	118 678	125 669	129 006	74 834	83 141	89 526	92 460	34 703	35 538	36 143	36 546
Mujeres	50 304	56 954	62 155	64 708	39 253	44 846	49 568	51 730	11 051	12 108	12 586	12 978
Desocupados	7 643	10 814	13 593	18 118	6 600	10 110	12 874	17 457	1 043	704	719	661
Hombres	4 942	6 423	7 667	9 989	4 231	5 814	7 156	9 546	712	609	511	443
Mujeres	2 701	4 391	5 926	8 129	2 370	4 296	5 718	7 912	331	95	208	218
	(En porcentajes)											
Tasa de participación b/	61.0	61.6	62.0	62.4	59.6	60.5	61.2	61.6	64.8	64.9	64.9	64.9
Hombres	84.9	84.3	83.8	83.6	81.4	81.2	81.1	81.0	93.7	92.8	92.0	91.5
Mujeres	37.9	39.7	41.1	42.0	39.5	41.4	42.8	43.7	33.1	34.3	35.2	35.8
Tasa de ocupación c/	58.2	58.0	57.8	57.0	56.4	56.0	56.0	55.0	63.4	64.0	63.9	64.0
Hombres	81.2	79.9	79.0	77.6	77.1	75.9	75.1	73.5	91.8	91.3	90.7	90.4
Mujeres	36.0	36.9	37.5	37.3	37.3	37.7	38.3	37.9	32.2	34.1	34.6	35.2
Tasa de desocupación	4.6	5.8	6.7	8.6	5.5	7.3	8.5	10.8	2.2	1.5	1.5	1.3
Hombres	4.3	5.1	5.7	7.2	5.4	6.5	7.4	9.4	2.0	1.7	1.4	1.2
Mujeres	5.1	7.2	8.7	11.2	5.7	8.7	10.3	13.3	2.9	0.8	1.6	1.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la División de Población–Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ De 15 años y más de edad.

b/ Proporción de la población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar.

c/ Proporción de los ocupados sobre la población en edad de trabajar.

Por otra parte, en los años noventa se acentuó la tendencia a la urbanización: mientras que la población en áreas urbanas creció a una tasa promedio anual de 2.3%, la de las áreas rurales prácticamente se mantuvo, aumentando tan sólo en 0.1% anual. De esta forma, la proporción de personas que residía en las zonas urbanas de América Latina alcanzó en 1999 a un 75% del total, o sea, cuatro puntos porcentuales más que en 1990. Este fenómeno incidió notablemente en la evolución de la oferta laboral, que tendió a concentrarse en las áreas urbanas. De los 44 millones de personas que se integraron a la PEA durante la década, el 93% reside en dichas áreas, lo que condujo a que más de tres cuartas partes de la fuerza de trabajo de la región (76.3%) se localice actualmente en las ciudades, comparado con un 72% en 1990.

Como era de esperar, este fuerte y sostenido incremento de la población activa ejerció gran presión sobre la necesidad de crear nuevos empleos. En ese sentido, si se observa el comportamiento de la demanda de traba-

jo, resulta claro que ésta no logró responder adecuadamente al importante crecimiento registrado por la fuerza laboral. Con un aumento promedio de 2.2% anual, los empleos generados en el decenio permitieron además que 34 millones de personas encontraran ocupación, elevando el total de ocupados en 1999 a 194 millones. Sin embargo, ello no bastó para impedir una merma en la tasa de ocupación, que cayó de 58.2% en 1990 a 57.0% en 1999 (véase el gráfico III.2).

A consecuencia de lo anterior, en los años noventa aumentó considerablemente el número de desempleados, a razón de un 10.1% anual, sobre todo en el período 1997–1999. Así, durante la década, más de 10 millones de personas engrosaron las filas de la desocupación, que en 1999 alcanzó al 8.6% de la fuerza de trabajo (poco más de 18 millones de personas), en contraste con el 4.6% de 1990 (para la explicación de ciertas diferencias entre las cifras de desempleo regional aquí presentadas y otras que se incluyen más adelante, véase el recuadro III.1).

Recuadro III.1

FUENTES DE INFORMACIÓN DE LAS CIFRAS SOBRE DESEMPLEO

Las cifras de desempleo agregadas para América Latina incluidas en esta sección, estimadas a partir de las mismas encuestas nacionales que sirvieron de base para la elaboración de los capítulos previos de este *Panorama social*, no coinciden con las registradas tanto en los gráficos III.4, III.5 y en el cuadro III.6 que se presentan más adelante, como en otras publicaciones de la CEPAL. En particular, los niveles de desocupación para las áreas urbanas presentados aquí tienden a ser un poco más altos que los publicados en otras fuentes.

Diversos aspectos relacionados con las encuestas de hogares –fuentes primarias de información en las que se basan las mediciones del desempleo– explican esas diferencias. Un primer punto a considerar es que en algunos casos –como Brasil, Chile y México– se han utilizado encuestas distintas, que difieren tanto en su diseño muestral como en el instrumento de recopilación de los datos (cuestionario). En el caso de Brasil, por ejemplo, el desempleo que reporta el país se estima mediante la Encuesta mensual de empleo, mientras que el de esta sección se basa en la Encuesta nacional de hogares. Un segundo aspecto es que aun tratándose de la misma encuesta, ciertas estimaciones difieren en cuanto a la cobertura geográfica de los datos, pese a presentarse como representativa del área urbana del país. A manera de ejemplo, el desempleo estimado para Bolivia en esta sección abarca toda el área urbana y no sólo las capitales departamentales, como ocurre en la medición oficial. Por último, el período de referencia de las cifras juega también un papel importante en la explicación de las diferencias en el cálculo de la desocupación. En algunos países, la tasa anual de desocupación corresponde a un promedio de las estimaciones realizadas a lo largo del año mediante rondas sucesivas de una misma encuesta; en cambio, aquí se considera a veces sólo la ronda más reciente de las encuestas disponibles.

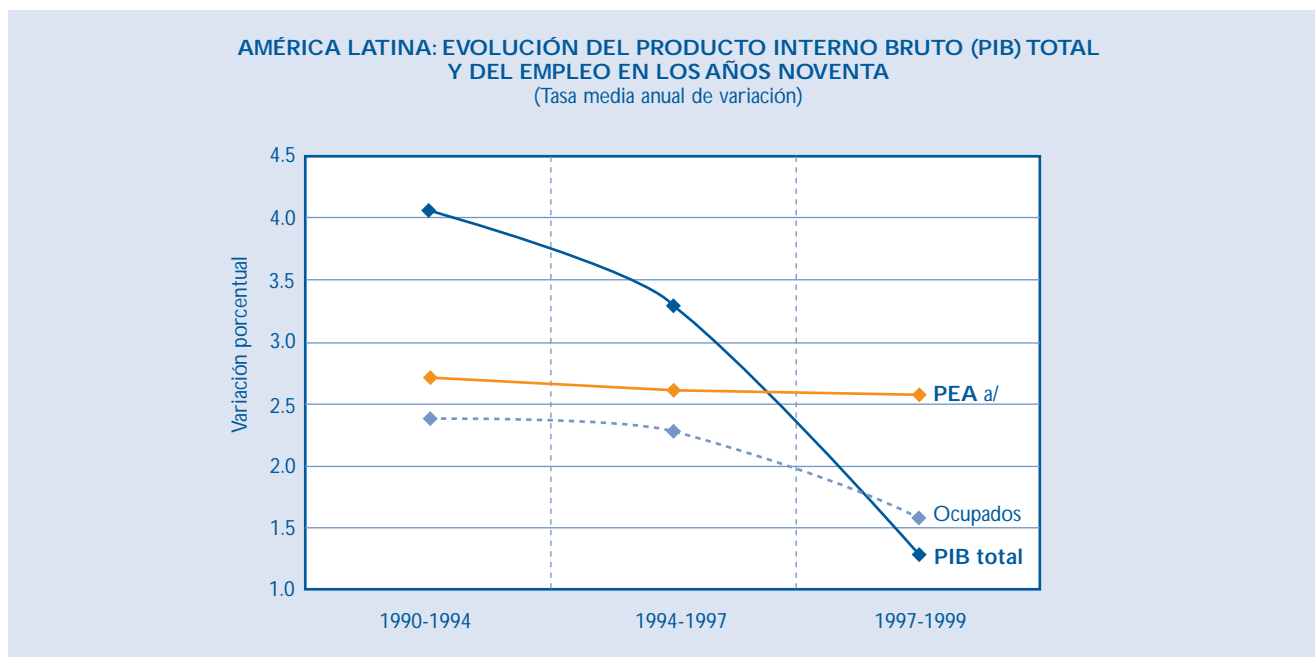
Aun cuando ello implique en ciertos casos una discrepancia con respecto a las cifras comúnmente difundidas de desempleo, se ha optado por utilizar en esta sección las mismas encuestas nacionales empleadas en la elaboración de los capítulos I y II del *Panorama social*, con el objetivo de preservar la coherencia con los datos presentados sobre la pobreza y la desigualdad en la región. El uso de una misma fuente de información posibilita, en este caso, una comparación directa entre las cifras sobre pobreza, concentración del ingreso y desempleo, y facilita el análisis de la interrelación entre estos fenómenos.

Por último, es importante destacar que ambos conjuntos de cifras manifiestan tendencias similares, concordando sobre todo en que hubo un aumento del desempleo en la región durante la última década. En este sentido, las conclusiones principales acerca del empleo formuladas a lo largo de este capítulo son consistentes con cualquiera de las fuentes de información utilizadas.

Durante el decenio, tanto la evolución del empleo en la región como la del producto global se caracterizaron por una constante disminución en su ritmo de crecimiento, la que incluso se acentuó en el último trienio. En efecto, entre 1990 y 1994 el crecimiento del empleo alcanzó un 2.4% promedio anual, mientras que el producto se incrementó al 4.1% anual. En el período siguiente (1994–1997), la tasa de aumento del empleo se redujo levemente (de 2.4% a 2.3%), en tanto que la del producto decreció en ocho décimas

de punto (de 4.1% a 3.3%). Fue entre 1997 y 1999, sin embargo, cuando ambas variables manifestaron una drástica caída en su crecimiento, alcanzando tasas de 1.6% anual en el caso del volumen de empleados y de 1.3% anual del PIB. Además de ilustrar la pérdida de dinamismo de la economía durante los años noventa, estas cifras revelan que la productividad media de la mano de obra ha sufrido un paulatino deterioro, que ha alcanzado mayor gravedad en los años recientes (véase el gráfico III.3).

Gráfico III.3



Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ Población económicamente activa de 15 años y más de edad.

Por otra parte, durante los años noventa se han ido modificando algunas características de la población ocupada de América Latina, lo que se refleja, por ejemplo, en una mayor incidencia en la inserción en los diferentes sectores productivos de determinados grupos de edad y niveles educacionales, o bien en la creciente incorporación de las mujeres a ciertas actividades laborales. A su vez, los cambios en la estructura ocupacional también han influido en la calidad del empleo y el grado de informalidad de la economía.

A fines del decenio, la mitad de los empleos de la región eran ocupados por personas de mediana edad –en el rango de 25 a 44 años–, que totalizaban 96 millones, en tanto que del resto casi el 50% los ocupaban personas jóvenes (de 15 a 24 años). Asimismo, en el grupo de los mayores de 45 años predominaban los menores de 60, sin perjuicio de lo cual poco más de 14 millones de personas en edades cercanas a la de jubilación aún participaban activamente en el mercado laboral (véase el cuadro III.3).

Cuadro III.3

AMÉRICA LATINA: CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA a/								
Descripción	Personas (miles)				Estructura porcentual			
	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999
Ocupados								
Edad (en años)	159 841	175 632	187 824	193 714	100.0	100.0	100.0	100.0
15 - 24	42 741	44 706	45 450	45 275	26.7	25.5	24.2	23.4
25 - 44	79 612	87 609	94 515	96 042	49.8	49.9	50.3	49.6
45 - 59	27 724	31 051	34 712	38 216	17.3	17.7	18.5	19.7
60 y más	9 764	12 266	13 147	14 181	6.1	7.0	7.0	7.3
Años de instrucción	159 841	175 632	187 824	193 714	100.0	100.0	100.0	100.0
0 a 5	73 387	75 771	74 746	72 505	45.9	43.1	39.8	37.4
6 a 9	41 366	47 910	56 557	59 066	25.9	27.3	30.1	30.5
10 a 12	22 046	26 314	34 095	37 783	13.8	15.0	18.2	19.5
13 y más	23 043	25 636	22 426	24 361	14.4	14.6	11.9	12.6
Rama de actividad	159 841	175 632	187 824	193 714	100.0	100.0	100.0	100.0
Agricultura	37 227	39 540	39 424	39 789	23.3	22.5	21.0	20.5
Industria	26 911	28 738	29 564	29 065	16.8	16.4	15.7	15.0
Construcción	9 499	12 119	12 057	12 284	5.9	6.9	6.4	6.3
Transporte y comunicaciones	7 159	8 129	9 337	9 839	4.5	4.6	5.0	5.1
Comercio	27 747	31 211	34 824	36 968	17.4	17.8	18.5	19.1
Finanzas	4 581	7 359	8 273	8 932	2.9	4.2	4.4	4.6
Servicios sociales	30 325	31 042	35 084	36 695	19.0	17.7	18.7	18.9
Servicios personales	8 131	8 546	9 572	9 960	5.1	4.9	5.1	5.1
Servicio doméstico	7 886	8 552	9 273	9 754	4.9	4.9	4.9	5.0
Ignorado	374	395	418	429	0.2	0.2	0.2	0.2
Tamaño del establecimiento b/ (empresarios y empleados)	100 116	104 779	110 889	113 051	100.0	100.0	100.0	100.0
1 - 5	26 538	27 849	33 495	34 621	30.7	30.2	31.9	32.3
6 - 10	9 242	9 163	11 479	11 687	10.7	9.9	10.9	10.9
11 - 49	28 267	29 972	31 121	31 572	32.7	32.5	29.6	29.4
50 y más	22 514	25 321	29 029	29 352	26.0	27.4	27.6	27.4
Ignorado	13 554	12 474	5 764	5 818	-	-	-	-
Ocupados secundarios c/	71 404	75 031	80 626	82 393	44.7	42.7	42.9	42.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la División de Población–Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ De 15 años y más de edad.

b/ Según número de personas ocupadas. La estructura porcentual excluye a los ignorados.

c/ Se refiere a los ocupados con ingresos inferiores a los del principal aportante del hogar.

Si bien la estructura del empleo según el grupo etáreo se caracterizó por una presencia mayoritaria de personas jóvenes a lo largo de toda la década, es notoria la tendencia al aumento en la edad promedio de la fuerza laboral. Este fenómeno se manifiesta principalmente en la creciente participación de las personas ocupadas con edades entre 45 y 59 años, y en la progresiva reducción de aquellas de entre 15 a 24 años; inclusive, el tamaño de este último grupo llegó a reducirse en casi 200 000 personas de 1997 a 1999.

En cuanto al nivel educativo de la fuerza de trabajo, se advierte que en 1999 más de la tercera parte de los ocupados de la región –aproximadamente 73 millones de personas– habían estudiado menos de seis años. Un grupo significativo, pero de tamaño un poco menor (31% de los ocupados), lo integraban personas con entre seis y nueve años de estudio. Por tanto, casi 7 de cada 10 ocupados contaban con un nivel educacional inferior a 10 años de estudio, y sólo un 13% de ellos poseía estudios superiores (más de 12 años).

No obstante, el nivel de instrucción de los ocupados se elevó sostenidamente en la última década, como queda de manifiesto en la reducción del porcentaje de quienes estudiaron menos de seis años (de 46% a 37%), y en el aumento del de aquellos que alcanzaron entre 10 y 12 años de enseñanza (de 14% a 20%). El crecimiento de este último grupo fue especialmente pronunciado en la segunda mitad del decenio: entre 1994 y 1999, 11.5 millones de personas se sumaron a esta categoría, abarcando el 63% de los nuevos puestos de trabajo creados en ese período.

Respecto de la estructura sectorial del empleo, la agricultura, el comercio y los servicios sociales constituían hacia 1999 las ramas de actividad económica que concentraban el mayor número de personas ocupadas; cada una de ellas comprendía aproximadamente una quinta parte de los empleos totales. De las tres, la agricultura sigue siendo la actividad mayoritaria, al proveer de trabajo a casi 40 millones de personas en toda la región. En el otro extremo, los servicios financieros, domésticos y personales son los

sectores con menor participación; la suma de estas tres categorías abarca aproximadamente a un 15% de la población ocupada, porcentaje similar al de la industria.

Sin embargo, el reducido crecimiento de la demanda laboral agrícola de 0.7% anual –cuya incapacidad para absorber el incremento de la mano de obra en las áreas rurales alentó la migración– se tradujo en un continuo debilitamiento de su participación, en favor de otras ramas de mayor dinamismo ocupacional. Entre ellas, el caso más notable es la que comprende a los establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, que prácticamente duplicó su tamaño entre 1990 y 1999, gracias a un crecimiento del 12.6% anual en los primeros cuatro años de la década, seguido de incrementos en torno del 4% anual en los períodos subsiguientes. El comercio, transporte y comunicaciones se encuentran también entre los sectores que mayor cantidad de puestos de trabajo generaron en el decenio, al emplear al 35% de los nuevos ocupados en ese lapso.

En contraste, el empleo en el sector agrícola prácticamente se estancó en los años noventa, con un crecimiento promedio anual que no alcanzó al 1%. La mermada capacidad de la agricultura para generar nuevos empleos explica en buena medida el progresivo abandono de las áreas rurales –de contenido predominantemente agrícola– y la migración hacia las áreas urbanas, fenómeno ya destacado como una de las características demográficas de la década. A su vez, el empleo en las áreas rurales ha propendido a diversificarse hacia ramas de actividad distintas a la agricultura, con claros aumentos en la participación del comercio (de 8.2% a 9.4%), la industria (de 7.9% a 8.8%), la construcción (de 4.1% a 4.8%) y los servicios sociales (de 8.6% a 9.0%).

El resto de las actividades, entre las que se cuentan aquellas relacionadas con la prestación de servicios sociales, personales y domésticos, mostraron un crecimiento similar al promedio, manteniendo tasas de participación relativamente estables. En las áreas urbanas, contexto de mayor relevancia para estos sec-

tores, los servicios presentaron un comportamiento levemente más dinámico durante los últimos años, particularmente en el caso del servicio doméstico, que creció en promedio a un 2.4% anual.

Por otra parte, alrededor de 66 millones de personas en las áreas urbanas laboran actualmente en el sector informal o de baja productividad, que provee del orden del 48% de los empleos urbanos en América Latina. La alta correlación entre la informalidad y la precariedad en el mercado laboral permite interpretar estas cifras como un indicio de la mala calidad del empleo prevalente en la región, usualmente relacionada con aspectos tales como la inestabilidad laboral y la falta de acceso a la seguridad social. Un 52% de los ocupados urbanos –alrededor de 70 millones de personas– realizan actividades enmarcadas en el ámbito del sector formal (véase el cuadro III.4).

En los años noventa, la precariedad de las ocupaciones se fue acentuando paulatinamente, como lo sugiere la creciente proporción de empleos de baja productividad. Desde 1990, la proporción de empleos informales en el área urbana se ha elevado en más de cinco puntos porcentuales, equivalentes a un crecimiento del sector informal cercano a los 20 millones de personas. En otras palabras, de cada 10 personas que se integraron al mercado laboral durante el decenio, 7 lo hicieron al sector informal. El deterioro de la calidad laboral se hace más ostensible cuando se comprueba que la proporción de los nuevos empleos absorbidos por el sector informal ha venido creciendo en los últimos años, al pasar de 67.3% en el período 1990–1994 a 70.7% en el de 1997–1999.

Por otra parte, la forma en que se reparten los ocupados entre establecimientos de distinto tamaño es

Cuadro III.4

AMÉRICA LATINA: SEGMENTOS DEL MERCADO DE TRABAJO EN LAS ZONAS URBANAS a/				
	1990	1994	1997	1999
Número de ocupados (miles)				
Total	107 581	120 886	130 996	136 626
Sector formal	61 318	65 668	68 810	70 462
Sector informal	46 264	55 218	62 185	66 164
Estructura porcentual				
Sector formal	57.0	54.3	52.5	51.6
Sector informal	43.0	45.7	47.5	48.4
Inserción de los nuevos empleos (porcentajes)				
	1990-1994	1994-1997	1997-1999	1990-1999
Sector formal	32.7	31.1	29.3	31.5
Sector informal	67.3	68.9	70.7	68.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ El empleo informal o de baja productividad incluye a las personas que trabajan en microempresas (establecimientos de hasta cinco personas), al empleo doméstico, a los trabajadores por cuenta propia no calificados y a los trabajadores familiares no remunerados.

relativamente pareja. Cada una de las categorías (microempresa, empresa mediana y empresa grande) da trabajo a cerca de un 30% de los ocupados. El 11% restante participa en establecimientos pequeños, conformados por entre 6 y 10 personas. En la década, los crecimientos más importantes se registraron en los establecimientos con menos de 6 trabajadores y en los que emplean a más de 50. En conjunto, ambas categorías generaron cerca de 15 millones de nuevos puestos de trabajo durante el decenio, lo que equivale al 72% de los nuevos empresarios y asalariados que encontraron empleo.

Otro rasgo que merece destacarse de la estructura ocupacional de la región, es que 4 de cada 10 ocupados, porcentaje equivalente a más de 82 millones de personas, constituyen mano de obra secundaria, es decir, personas con ingresos inferiores a los del principal aportante del hogar. Esto confirma que una proporción significativa de los hogares consigue aumentar su densidad ocupacional mediante la incorporación de más de un miembro al mercado de trabajo. No obstante, si bien el número de ocupados secundarios se incrementó en casi 11 millones de personas durante la década, éstos representan una fracción cada vez menor del total de los ocupados, la que se ha reducido en poco más de dos puntos porcentuales. Entre 1997 y 1999, los perceptores secundarios accedieron al 30% de los nuevos empleos.

A su vez, el objetivo de equidad de género en el mercado laboral mostró algunos logros sobresalientes en la década, que coexisten con disparidades cuya corrección representa todavía un gran desafío. La creciente proporción de mujeres cuya meta es integrarse al mercado laboral revela, de hecho, una mayor voluntad de participación y una aceptación social de la importancia de brindar a ambos sexos las mismas oportunidades de trabajo. En 1990, la tasa de participación femenina alcanzaba el 38%, lo que implicaba que de un total de 140 millones de mujeres en edad de trabajar, sólo 53 millones estaban integradas o se proponían incorporarse al mercado de trabajo. En 1999, en cambio, eran casi 73 millones de mujeres

que formaban parte de la población económicamente activa, con una tasa de participación del 42% (véase el cuadro III.2).

No obstante, esta mayor inserción laboral femenina en la década de 1990 no ha estado exenta de cierta ambigüedad, por cuanto algunos aspectos positivos han ido acompañados de un relativo deterioro en la equidad de género. Por una parte, la tasa de ocupación femenina (medida como porcentaje de la población en edad de trabajar) se incrementó en 1.3 puntos porcentuales entre 1990 y 1999, mientras que la masculina se redujo en 3.6 puntos porcentuales. Es decir, de las mujeres en edad de trabajar, el porcentaje que se integra al mercado laboral ha sido cada vez mayor. Sin embargo, el crecimiento del empleo entre las mujeres ha resultado insuficiente para dar cabida a la rápida expansión de la población femenina económicamente activa, fenómeno que se ha traducido en cada vez mayores tasas de desempleo y en brechas también cada vez mayores con respecto al desempleo masculino. Mientras la PEA femenina aumentó a un ritmo de 3.6% anual, el empleo de las mujeres sólo creció al 2.8%. En consecuencia, el desempleo femenino se elevó de 5.1% a 11.2% durante el decenio, y la diferencia de 0.8 puntos porcentuales entre las tasas de desocupación femenina y masculina en 1990 se convirtió en una brecha de 4 puntos porcentuales nueve años después.

Las proporciones de empleo femenino en las distintas categorías analizadas presentan ciertas variaciones, aun cuando en muchos casos éstas no alcanzan una magnitud significativa. Existen, sin embargo, ciertas diferencias relevantes, por ejemplo en lo que se refiere al nivel educativo, donde se observa que las mujeres ocupadas cuentan con más años de educación que los hombres. De hecho, el 39% de ellas posee más de 10 años de estudio, mientras que sólo el 29% de los hombres se encuentra en similar situación. En este aspecto también cabe destacar el rápido crecimiento de la participación femenina entre los ocupados con 13 y más años de instrucción (véase el cuadro III.5).

Cuadro III.5

AMÉRICA LATINA: PROPORCIÓN DE EMPLEO FEMENINO ^{a/} (En porcentajes)												
Descripción	Total nacional				Zona urbana				Zona rural			
	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999
Ocupados												
Edad (en años)	31.5	32.4	33.1	33.4	34.4	35.0	35.6	35.9	24.2	25.4	25.8	26.2
15 - 24	31.9	31.8	32.1	32.3	36.3	35.6	35.5	35.9	23.4	24.0	24.6	24.4
25 - 44	33.6	34.2	35.0	35.1	35.9	36.3	37.0	37.1	26.6	26.9	27.8	27.7
45 - 59	28.1	31.0	31.9	33.1	30.4	32.7	34.2	34.8	22.1	26.1	24.7	27.3
60 y más	21.6	25.6	25.8	26.3	23.8	27.7	27.7	28.0	18.5	22.6	23.0	23.8
Años de instrucción	31.5	32.4	33.1	33.4	34.4	35.0	35.6	35.9	24.2	25.4	25.8	26.2
0 a 5	28.0	29.8	30.1	30.3	31.6	33.1	33.6	33.6	23.7	25.5	25.6	26.1
6 a 9	30.3	30.6	31.1	31.0	32.6	32.9	32.8	32.8	22.4	22.8	24.5	24.6
10 a 12	39.8	38.9	38.0	38.1	40.3	39.4	38.6	38.8	35.0	33.4	31.1	31.0
13 y más	36.7	37.0	40.8	41.1	36.9	37.2	41.2	41.6	32.2	31.4	32.4	31.9
Rama de actividad	31.5	32.4	33.1	33.4	34.4	35.0	35.6	35.9	24.2	25.4	25.8	26.2
Agricultura	14.1	20.5	19.2	19.9	10.2	22.5	19.1	19.2	15.1	20.0	19.2	20.1
Industria	28.1	27.1	28.3	28.9	26.6	26.4	27.2	28.2	37.3	31.1	35.2	33.0
Construcción	2.8	2.8	2.4	3.2	3.1	3.0	2.8	3.3	1.4	2.2	1.0	2.7
Transporte y comunicaciones	8.0	7.6	8.2	8.8	8.5	7.9	8.7	9.0	4.9	5.1	4.4	6.3
Comercio	38.3	38.5	40.9	41.2	37.0	38.1	40.3	40.8	46.5	40.8	45.2	44.6
Finanzas	34.2	33.1	32.5	32.6	34.8	33.6	32.8	33.0	21.7	19.5	24.9	21.7
Servicios sociales	47.6	48.5	48.3	46.9	47.2	48.6	48.5	47.2	50.2	48.0	46.6	44.6
Servicios personales	42.1	41.0	39.8	39.6	39.7	39.1	38.6	38.4	60.4	60.5	53.6	51.9
Servicio doméstico	82.9	81.5	79.4	79.0	83.4	81.8	79.7	79.6	79.4	79.5	76.3	72.9
Ignorado	21.3	23.3	28.0	26.0	23.3	27.4	28.4	27.9	10.0	5.1	23.7	9.5
Tamaño del establecimiento ^{b/}	31.1	30.9	31.8	31.8	33.5	34.3	34.9	35.1	21.2	13.5	14.0	11.9
1 - 5	39.3	37.6	37.8	37.9	43.7	43.7	42.7	43.1	24.8	15.6	16.5	13.7
6 - 10	23.5	22.4	24.7	24.3	25.9	25.7	27.5	27.1	12.4	7.2	9.0	6.0
11 - 49	24.5	25.3	26.1	26.3	25.8	27.0	27.7	28.1	15.9	11.0	11.7	9.5
50 y más	38.2	37.1	38.2	37.7	38.5	38.8	39.7	39.4	36.6	24.7	23.7	21.5
Ignorado	22.6	22.7	8.8	10.3	27.7	29.6	12.8	15.6	12.6	5.6	4.7	4.5
Ocupados secundarios ^{c/}	50.2	52.7	54.3	54.8	56.9	57.9	57.4	57.9	37.1	40.3	46.3	46.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la División de Población—Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Entre las personas de 15 años y más de edad.

b/ Según el número de personas ocupadas. Considera sólo a empresarios y empleados.

c/ Se refiere a los ocupados con ingresos inferiores a los del principal aportante del hogar.

Ciertas ramas de actividad se caracterizan por estar asociadas con algún sexo en particular. Tal es el caso de la construcción, el transporte y las telecomunicaciones, ramas donde la participación masculina supera el 90%. Aunque en menor grado, la agricultura y la industria son también actividades desempeñadas principalmente por hombres, cuyos porcentajes de participación alcanzan a 80% y 71%, respectivamente. A su vez, la única actividad predominantemente femenina es el servicio doméstico; de los casi 10 millones de personas que laboran en ella, poco menos de 8 millones son mujeres.

Sin embargo, ciertas ocupaciones han mostrado una tendencia a la "feminización" en el curso de la década. Tal es el caso de la agricultura—donde la participación femenina se incrementó en más de cinco puntos porcentuales entre 1990 y 1994— y el comercio—con una proporción de mujeres en 1999 casi tres puntos superior a la de 1990. Tanto esta última categoría como la de servicios sociales resultan particularmente importantes para el trabajo femenino, ya que en cada una de ellas labora cerca de la cuarta parte de las mujeres ocupadas de la región.

B. El desempleo en América Latina durante los años noventa: magnitud, evolución y características

El aumento del desempleo abierto en América Latina durante los años noventa es una de las manifestaciones más preocupantes del desempeño actual del mercado de trabajo, por su fuerte incidencia en la pobreza y en la desigualdad de la distribución del ingreso. La cada vez mayor disociación entre el crecimiento económico y el nivel de desempleo en los países sugiere que este último responde no sólo a factores coyunturales, sino también a factores estructurales ligados a la rápida incorporación de nuevas tecnologías. El impacto de la desocupación en el bienestar se ha acrecentado debido a la mayor amplitud de los estratos de población afectados, al aumento de la duración de los episodios de desempleo y las mermas en el patrimonio de los hogares que conlleva, y a las pérdidas salariales que sufren los trabajadores que se recontratan.

El empleo es el principal vínculo entre el crecimiento económico y el desarrollo social, por cuanto la fuerza de trabajo es el factor de producción básico, su utilización es la principal fuente de ingreso de los hogares y el trabajo una fuente de satisfacción personal. En *Equidad, desarrollo y ciudadanía*, la CEPAL señala que la creación de empleo productivo constituye en sí misma una meta y una condición necesaria para crecer con equidad (CEPAL, 2000c). Parte importante de la desigualdad social, que se plasma en la inequitativa distribución del ingreso que caracteriza a la región, se transmite a través de la organización y funcionamiento del mercado de trabajo, donde se determinan los niveles de ocupación, desocupación y subutilización de la mano de obra, junto con las remuneraciones e ingresos que perciben las personas.

El enfoque integrado del desarrollo que postula la CEPAL asigna al Estado un papel central en materia de empleo, no sólo con acciones en los ámbitos del mejoramiento de los recursos humanos y de su aprovechamiento a través de la utilización plena de la fuerza de trabajo, de la ampliación de los mercados, de la inversión y del desarrollo tecnológico, sino también mediante la creación de empleos de emergencia y de políticas de protección a la población afectada por el desempleo abierto en situaciones de crisis.

Un crecimiento económico elevado y estable es decisivo –aunque no suficiente– para mejorar el nivel y la calidad del empleo. La CEPAL ha estimado que el logro de avances simultáneos y perdurables en empleo, incorporación tecnológica y equidad requiere tasas sos-

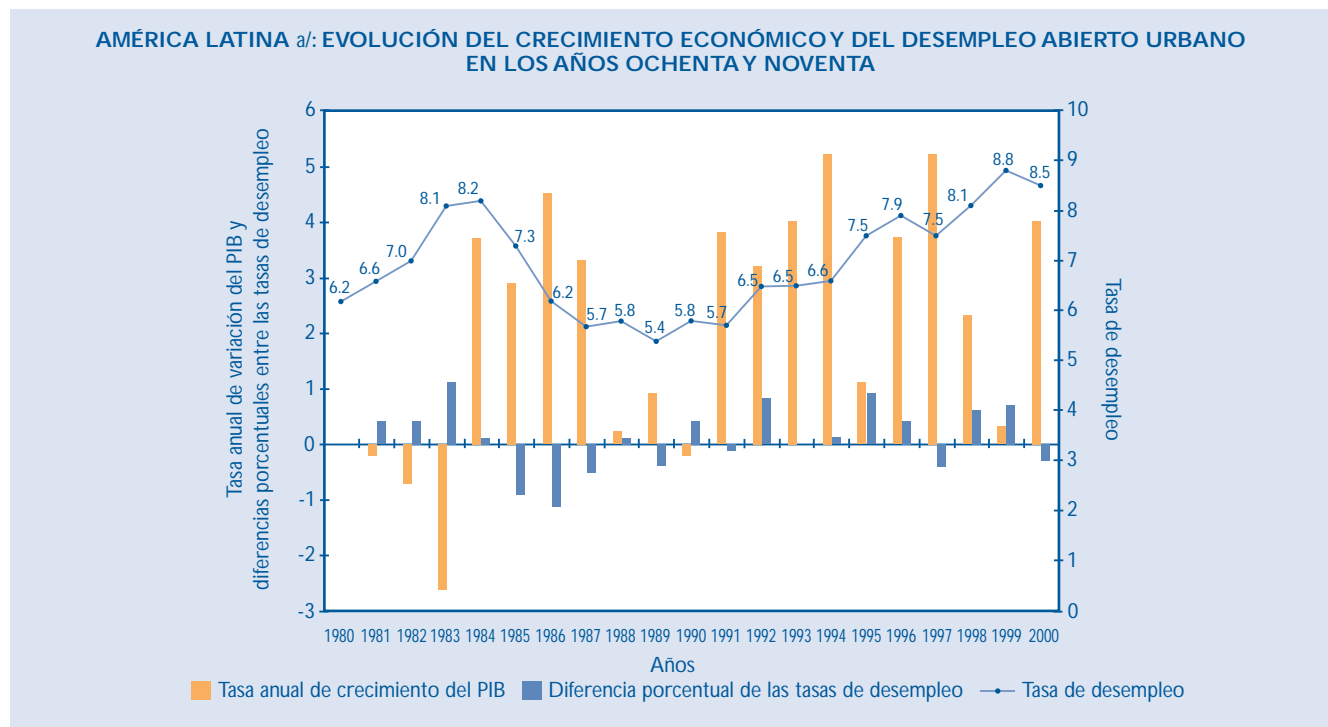
tenidas de aumento del PIB del orden de 6% anual. La insuficiencia del crecimiento económico en la región (3.2% como promedio en 1991–2000) y su creciente volatilidad,¹ unidas a la rápida expansión de la fuerza de trabajo (2.6% anual entre 1990 y 1999) y al menor ritmo de expansión del empleo (2.2% anual), se tradujeron en una abultada y persistente desocupación, acentuada por la crisis que se inició a fines de 1998. Hacia el año 2000, el desempleo afectaba a poco menos del 9% de la población económicamente activa.

En esta sección se proveen antecedentes acerca de la magnitud, evolución y principales características del alto desempleo que en la mayoría de los países sigue afectando con mayor intensidad a los estratos de menores ingresos y crecientemente a los estratos medios, constituyéndose en un factor cada vez más gravitante en el bienestar de la población y en la persistente desigualdad en la distribución del ingreso en la región.

1. Evolución del desempleo y su relación con el crecimiento económico

El desempleo abierto urbano mostró, en el conjunto de la región, una clara tendencia al aumento. Como se observa en el gráfico III.4, luego de la significativa reducción de las tasas de desempleo que siguió a la recuperación del crecimiento en la etapa posterior a la crisis de la deuda de comienzos de los años ochenta, se registró en la región un ascenso persistente de la tasa de desempleo a partir de 1991, con sólo dos inflexiones menores: su disminución en 1997 (de 7.9% a 7.5%), como consecuencia del alto ritmo de crecimiento que alcanzó el PIB en la mayoría de los países en ese año, y la disminución (de 8.8% a 8.5%) que se observó en 2000, asociada a la recuperación del crecimiento en los países que se vieron más afectados desde fines de 1998 por las crisis asiática y rusa.

Gráfico III.4



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países.

a/ Las cifras de crecimiento económico corresponden al promedio ponderado de 19 países de la región, y las de desempleo a 22 países.

1 El coeficiente de variación de las tasas anuales de crecimiento del PIB fue para el período 1991–1999 de 1.14, mientras que para el período 1991–1997 fue de 0.74.

Esta evolución pone de manifiesto el persistente desajuste estructural entre oferta y demanda laboral que enfrentan los países latinoamericanos. En su conjunto, ello se tradujo en un incremento absoluto de 10.5 millones de desocupados (de 7.6 a 18.1 millones de personas). Prácticamente la totalidad de dicho aumento correspondió a pérdida de empleos (cesantía), por cuanto los desocupados que buscaban su primer trabajo representan una cifra menor dentro del total de la desocupación: de los 18.1 millones de desocupados en 1999, 2.7 millones corresponden a personas que buscaban su primer empleo (véase el cuadro III.6).

países. Así, en los períodos de contracción de la actividad económica el ajuste tendería a expresarse cada vez más en destrucción de empleos y caída de la demanda de mano de obra, y menos en reducciones de los salarios reales de los que se mantienen ocupados.

Por otra parte, se ha señalado que la mantención del alto desempleo poscrisis obedece a una asimetría en los procesos de destrucción y generación de empleos en las fases recesivas y de recuperación del ciclo económico. Bajo esta interpretación, la disociación entre las tasas de crecimiento del producto y de desem-

Cuadro III.6

AMÉRICA LATINA: NIVELY COMPOSICIÓN DE LA DESOCUPACIÓN, POR ZONAS, 1990-1999			
	Personas (miles)		Tasa anual de variación (porcentaje)
	1990	1999	1990-1999
Desocupados	7 643	18 118	10.1
Zonas urbanas	6 600	17 457	11.4
Zonas rurales	1 043	661	-4.9
Cesantes	5 932	15 391	11.2
Zonas urbanas	5 225	15 204	12.6
Zonas rurales	708	186	-13.8
Buscan trabajo por primera vez	1 711	2 728	5.3
Zonas urbanas	1 376	2 253	5.6
Zonas rurales	335	475	3.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la División de Población–Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

La preocupación por el alto nivel de desempleo en la mayoría de los países de la región y su persistencia, no obstante la recuperación del crecimiento económico en el año 2000, ha dado lugar a distintas explicaciones sobre su naturaleza.

En primer lugar, se ha destacado que si no todo, al menos gran parte del desempleo registrado en 1999 responde al impacto de la crisis iniciada en 1998 y a la caída de la actividad económica en los países más afectados por ésta. El rápido aumento del desempleo que trajo consigo la contracción de la actividad económica, respondería en parte a que la reducción salarial habría tendido a perder peso como factor primario de ajuste del mercado de trabajo, debido a los bajos y decrecientes niveles de inflación en la mayoría de los

pleo respondería a la mayor rapidez con que el PIB recupera los niveles previos a las crisis, de modo que habría un rezago en la generación de empleos que mantendría por un tiempo más prolongado la desocupación. Esto significaría que, de retomarse el ritmo de crecimiento del producto en las economías más afectadas por la recesión, el desempleo podría volver a situarse en los niveles precrisis.

Sin embargo, estos niveles ya eran elevados antes de la crisis y mostraban desde comienzos de los años noventa una tendencia ascendente. En efecto, como se aprecia en el gráfico III.4, la evolución de la tasa de desempleo a partir de 1991 ha mostrado un ritmo creciente, aun en períodos de mayor crecimiento. Esto indica que en la mayoría de los países la oferta de

puestos de trabajo ha resultado crecientemente insuficiente para absorber a la población económicamente activa (PEA). Una estimación simple para años recientes muestra que si a partir de 1997 se hubiese mantenido el mismo ritmo de crecimiento anual del empleo prevalente en la región entre 1990 y 1994 (2.4%), el desempleo en 1999 habría sido de alrededor de 7.1%, esto es, 1.9 puntos porcentuales por sobre la tasa promedio de desempleo de 5.2% que prevaleció en los primeros cuatro años de la década (estimación basada en las cifras de empleo y desempleo que se presentan en el cuadro III.1). Nótese que, dado que el desempleo en 1999 se elevó a 8.8%, sólo cerca de la mitad de su incremento en el período analizado puede atribuirse principalmente a la desaceleración del crecimiento en la región a partir de 1998.

A esta insuficiencia más estructural entre la oferta y la demanda de mano de obra habrían contribuido tanto la reducción de la importancia del Estado en la generación directa de puestos de trabajo como la reestructuración del sistema productivo, que se habrían traducido en una tendencia a la reducción de la elasticidad del empleo respecto del producto en los sectores primario y secundario. Éstos han registrado una pérdida de participación en el empleo, en tanto que la generación de nuevos puestos de trabajo se ha concentrado en actividades terciarias.² Sin embargo, algunos subsectores (establecimientos financieros, telecomunicaciones, seguros y servicios prestados a las empresas) han ido modernizándose progresivamente sobre la base del uso intensivo de nuevas tecnologías, lo que hace prever una capacidad cada vez menor de generación de puestos de trabajo.

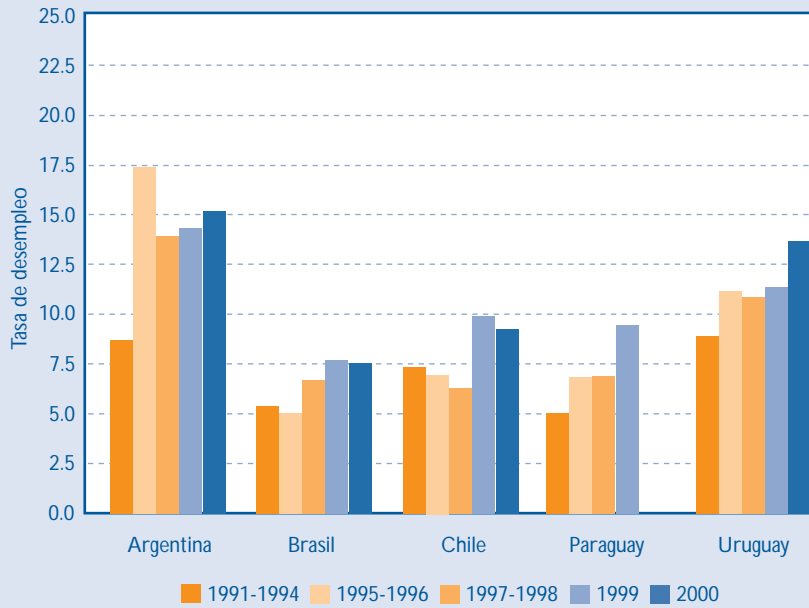
El examen del desempleo a lo largo del decenio pasado muestra que, aunque las tendencias a su aumento no fueron generalizadas en la región, afectaron a la mayoría de los países sudamericanos. En Argentina, Brasil y Colombia, los tres países sudamericanos de mayor tamaño, el desempleo creció persistentemente durante la década, aunque la desocupación en Brasil alcanza niveles equivalentes a la mitad de los registrados en los otros dos países. El desempleo también mostró una tendencia al alza en Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, aunque cabría destacar que en el caso de Chile el desempleo sólo se incrementó a partir de 1998, después de una disminución sistemática desde comienzos de la década hasta ese año.

Por el contrario, en México y en la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe predominó una tendencia a la disminución de la desocupación. México registró una clara reducción del desempleo urbano luego de los efectos de la crisis de 1995, para volver a situarse en tasas en torno de 2.5%. En los países centroamericanos el desempleo también tendió a reducirse (El Salvador, Honduras y Nicaragua) o se mantuvo en niveles relativamente moderados (Costa Rica). Esta tendencia a la reducción del desempleo también predominó en el grupo de países insulares del Caribe (Barbados, Cuba, República Dominicana y Trinidad y Tabago), aunque los niveles de desempleo en estos países, con excepción de Cuba, se mantuvieron en tasas más elevadas que en el grupo anterior, cercanas o superiores a 10%. Sólo en Jamaica el desempleo no se redujo significativamente y fluctuó entre 15% y 16% a lo largo de la década (véase el gráfico III.5).

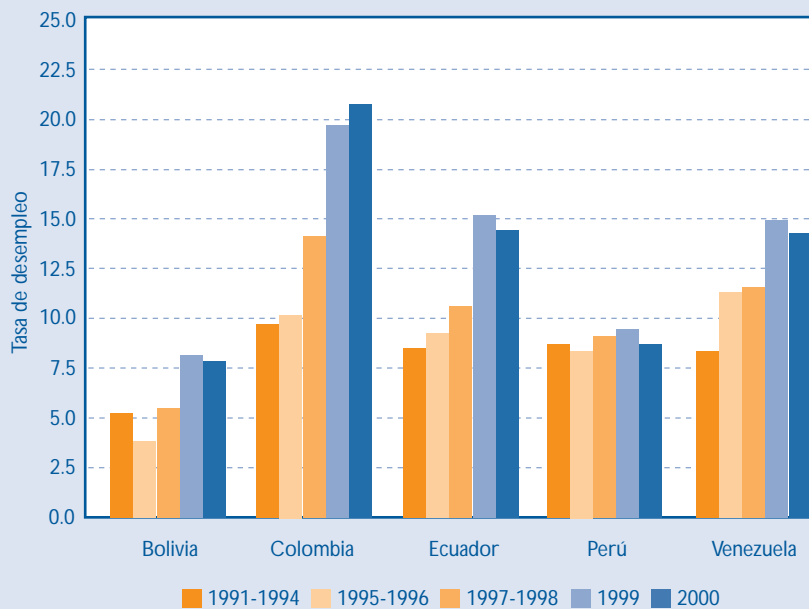
2 De los cerca de 34 millones de empleos generados entre 1990 y 1999, 68% (cerca de 23 millones) correspondieron a puestos de trabajo en transporte y comunicaciones, comercio, finanzas y servicios sociales. Estas cifras se elevan a cerca de 78% (algo más de 26 millones de empleos) si se consideran los servicios personales y de los hogares, incluido el servicio doméstico.

**AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO URBANO
PERÍODOS 1991-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999 Y 2000**

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay



Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

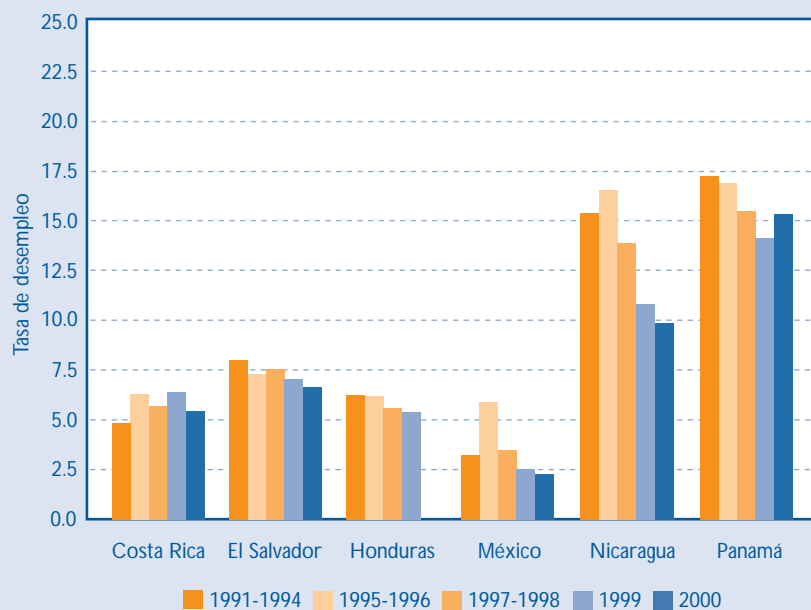


(continúa)

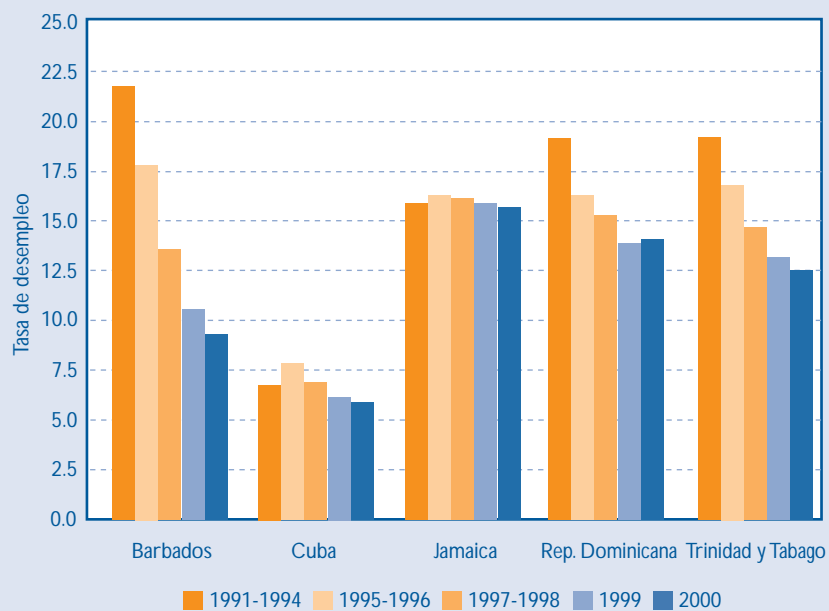
Gráfico III.5 (conclusión)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO URBANO
PERÍODOS 1991-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999 Y 2000

Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Panamá



Barbados, Cuba, Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tabago



Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países. Véase el cuadro III.7.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (22 PAÍSES): DESEMPLEO URBANO (Tasas anuales medias)											
País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000 a/
América Latina y el Caribe											
Promedio ponderado	5.8	5.7	6.5	6.5	6.6	7.5	7.9	7.5	8.1	8.8	8.5
Promedio simple	9.5	9.6	9.8	10.0	9.5	10.1	10.5	9.9	9.7	10.6	10.8
Argentina b/	7.4	6.5	7.0	9.6	11.5	17.5	17.2	14.9	12.9	14.3	15.1
Barbados c/	14.7	17.3	23.0	24.3	21.9	19.7	15.6	14.5	12.3	10.4	9.2
Bolivia b/	7.3	5.8	5.4	5.8	3.1	3.6	3.8	4.4	6.1	8.0	7.6
Brasil b/	4.3	4.8	5.8	5.4	5.1	4.6	5.4	5.7	7.6	7.6	7.1
Chile d/	9.2	8.2	6.7	6.5	7.8	7.4	6.4	6.1	6.4	9.8	9.2
Colombia b/ e/	10.5	10.2	10.2	8.6	8.9	8.8	11.2	12.4	15.3	19.4	20.2
Costa Rica	5.4	6.0	4.3	4.0	4.3	5.7	6.6	5.9	5.4	6.2	5.3
Cuba c/	...	7.7	6.1	6.2	6.7	7.9	7.6	7.0	6.6	6.0	5.5
Ecuador e/	6.1	7.7	8.9	8.9	7.8	7.7	10.4	9.3	11.5	15.1	14.1
El Salvador	10.0	7.9	8.2	8.1	7.0	7.0	7.5	7.5	7.6	6.9	6.5
Guatemala	6.0	4.2	1.6	2.6	3.5	3.9	5.2	5.1	3.8
Honduras c/	7.8	7.4	6.0	7.0	4.0	5.6	6.5	5.8	5.2	5.3	...
Jamaica c/	15.3	15.4	15.7	16.3	15.4	16.2	16.0	16.5	15.5	15.7	15.5
México	2.7	2.7	2.8	3.4	3.7	6.2	5.5	3.7	3.2	2.5	2.2
Nicaragua	7.6	11.5	14.4	17.8	17.1	16.9	16.0	14.3	13.2	10.7	9.8
Panamá d/ e/	20.0	19.3	17.5	15.6	16.0	16.6	16.9	15.5	15.2	14.0	15.2
Paraguay	6.6	5.1	5.3	5.1	4.4	5.3	8.2	7.1	6.6	9.4	10.7
Perú f/	8.3	5.9	9.4	9.9	8.8	8.2	8.0	9.2	8.5	9.2	8.5
República Dominicana c/ e/	...	19.6	20.3	19.9	16.0	15.8	16.5	15.9	14.3	13.8	13.9
Trinidad y Tabago c/ e/	20.1	18.5	19.6	19.8	18.4	17.2	16.2	15.0	14.2	13.1	12.5
Uruguay f/	9.2	8.9	9.0	8.3	9.2	10.3	11.9	11.5	10.1	11.3	13.6
Venezuela	11.0	9.5	7.8	6.6	8.7	10.3	11.8	11.4	11.3	14.9	14.0

Fuente: CEPAL, *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2000* (LC/G.2118-P), Santiago de Chile, 2001. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.00.II.G.1; y *Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2000–2001. Situación y perspectivas* (LC/G.2142-P), Santiago de Chile, agosto de 2001. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.00.II.G.121.

a/ Cifras preliminares. b/ Principales áreas urbanas. c/ Nacional. d/ Región metropolitana. e/ Incluye desempleo oculto. f/ Ciudad capital.

Es probable que el alto nivel de desempleo actual en la región se mantenga en la medida que se prevé un crecimiento en el año 2001 cercano al 2% (CEPAL, 2001a), lo que representa una caída sustancial respecto del nivel algo superior a 4% alcanzado en el año 2000. A lo anterior se agregan indicios sobre la persistencia de un factor de carácter estructural en el desempleo y una mayor lentitud en la recuperación de los niveles de desempleo después de períodos de contracción del crecimiento. La mayor volatilidad del crecimiento, unida a la vulnerabilidad de los estratos medios y bajos en períodos de destrucción y lenta recuperación de los niveles de empleo, pone de relieve la necesidad de establecer mecanismos de protección que cubran dicho riesgo.

En la siguiente sección se examinan las características de la población afectada por el desempleo y en qué medida han cambiado éstas a lo largo del decenio; además, se destaca la importancia de la mayor

duración de los episodios de desocupación y las pérdidas salariales que conlleva.

2. Características de los desocupados y duración media del desempleo

La desocupación ha venido cobrando mayor importancia entre los factores que han impedido lograr mejoras tanto en el bienestar de la población como en la distribución del ingreso. En efecto, el desempleo sigue afectando desproporcionadamente a los estratos de menores ingresos. Como se puede apreciar en el cuadro III.8, tanto en el conjunto de 17 países de América Latina como en el grupo de 8 países que registraron un mayor aumento de la desocupación entre mediados y finales de la década pasada (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Para-

guay, Uruguay y Venezuela), el porcentaje de desocupados en el 40% más pobre de la población (quintiles 1 y 2) siguió siendo considerablemente superior a la tasa global de desempleo y aumentó significativamente entre 1994 y 1999, de modo que este fenómeno persiste como uno de los principales determinantes de la pobreza y de la desigualdad.

En segundo lugar, los sectores medios se vieron crecientemente afectados. En el 40% de hogares (quintiles 3 y 4) que siguen al 40% de menores ingresos, el nivel de desempleo subió en el conjunto de la región en el segundo quinquenio de los noventa, pero más pronunciadamente en los ocho países más afectados por la crisis (véase el cuadro III.8). El aumento del desempleo urbano afectó incluso a la población perteneciente al quintil de más altos ingresos, de modo que, al final de la década, los estratos medios y altos registraron tasas de desocupación que duplicaron y en algunos países llegaron a triplicar las de mediados de ella.

en la mayoría de los países, cerca de la mitad del total de desocupados. Entre 1994 y 1999, el nivel de desocupación entre los jóvenes del conjunto de la región creció de 14% a 20%, mientras que en los ocho países más afectados esta tasa se elevó hasta 24.8%. En estos países, hubo una leve disminución del peso relativo de este grupo en el total de desocupados urbanos debido al incremento que experimentó la cesantía de la fuerza de trabajo primaria por destrucción de empleos.

Finalmente, se acentuaron las diferencias entre el desempleo femenino y masculino. En las zonas urbanas de 17 países de la región, el desempleo femenino pasó de 7.7% a 12.3% como promedio, en tanto que entre los varones esta tasa aumentó de 6.7% a 9.4%. Estas diferencias se acrecentaron aún más en desmedro de las mujeres entre los 8 países más afectados.

El impacto de la desocupación sobre el bienestar de los distintos grupos afectados depende no sólo de la

Cuadro III.8

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES) Y PAÍSES CON FUERTE AUMENTO DEL DESEMPLEO a/: TASAS DE DESEMPLEO URBANO, 1994-1999				
	América Latina		Países con fuerte aumento del desempleo	
	1994	1999	1994	1999
Tasa de desempleo:				
Ambos sexos	7.1	10.6	6.6	13.1
Hombres	6.7	9.4	5.8	11.3
Mujeres	7.7	12.3	7.8	15.5
Jóvenes entre 15 y 24 años	14.0	20.0	14.0	24.8
Quintil 1 (20% de más bajos ingresos)	14.8	22.3	15.8	27.8
Quintil 2	8.1	12.7	8.3	15.6
Quintil 3	5.6	9.4	5.5	11.2
Quintil 4	3.9	6.5	3.7	8.0
Quintil 5 (20% de ingresos más altos)	2.3	4.3	2.0	4.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Incluye a los países con tasas crecientes de desempleo en el período, cercanas o superiores a 10% (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela).

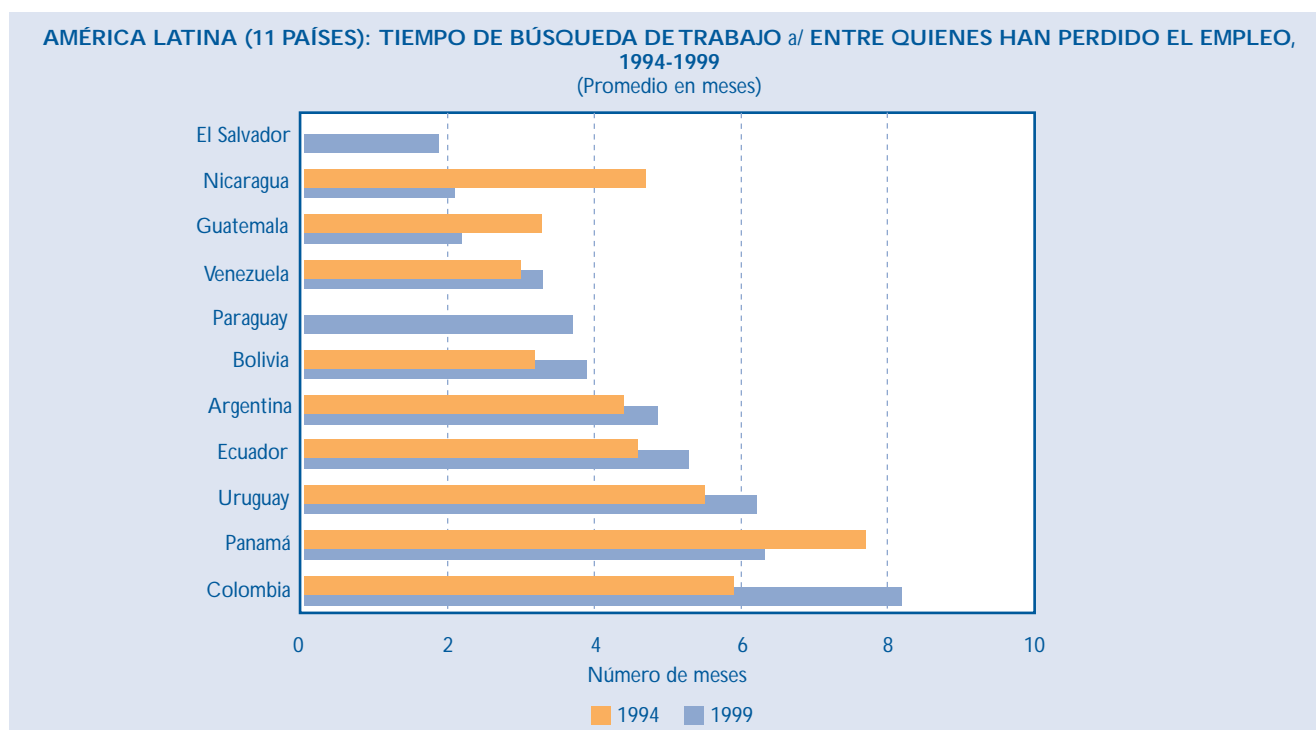
Por otra parte, el desempleo sigue afectando sobre todo a los jóvenes de 15 a 24 años de edad, quienes representan entre la cuarta y la quinta parte de la fuerza de trabajo latinoamericana. Hasta antes de la crisis asiática, la desocupación en este grupo prácticamente duplicaba la tasa promedio regional, y estos jóvenes representaban,

incidencia del fenómeno (nivel de desempleo), sino también de la duración media de los episodios de desocupación y de las pérdidas salariales que sufren quienes logran reinsertarse en los puestos de trabajo disponibles (véase el gráfico III.6). En economías con tasas de desempleo abierto que superan larga-

mente los niveles que se consideran normales –vinculados a la desocupación friccional–, la prolongación del desempleo tiene importantes efectos negativos en los individuos afectados (por pérdida de capital humano, reintegros al empleo con salarios más bajos), en el bienestar de los miembros del grupo familiar (liquidación de patrimonio, trabajo infantil y deserción escolar) y en la economía en su conjunto (compresión del nivel medio de los salarios, disminución de la demanda de bienes, y sus consecuentes efectos recesivos).

gación del tiempo de desempleo³ de 4.4 a 5.3 meses como promedio, y levemente mayor para las mujeres (de 4.7 a 5.7 meses). El hecho que el tiempo de desempleo entre los jefes de hogar aumentara en la misma magnitud (alrededor de un mes) que entre los que no lo son, indicaría que no lograron emplearse principalmente como consecuencia de la insuficiencia de puestos de trabajo. En efecto, debido a la importancia del aporte de los jefes al presupuesto del hogar, su salario de reserva –nivel de salario por el que están dispuestos a emplearse– es menor precisamente a

Gráfico III.6



Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ Excluye a aquellos cesantes que han buscado empleo por un periodo superior a dos años.

Normalmente, en los períodos en que aumenta el desempleo tiende a dilatarse también el período de duración de los episodios de desocupación, con las consecuencias reseñadas. El examen de cifras para seis países de la región donde el desempleo creció hasta prácticamente duplicarse, muestra una prolon-

causa de la mayor urgencia que éstos tienen de minimizar el tiempo de desocupación.

Aunque el salario de reserva explicaría gran parte de las pronunciadas diferencias en la duración media del desempleo entre los desocupados con distinto nivel de

3 No todas las encuestas de hogares de los países de la región investigan el tiempo de desempleo, y la información disponible para 11 de ellos registra la duración transcurrida del episodio de desempleo al momento de su recopilación. Esta medición se refiere al tiempo de búsqueda de empleo, y no a la duración total de los episodios de desempleo, la que depende además del momento de su término.

educación, el mayor aumento del tiempo de desocupación entre los menos calificados reflejaría también los problemas de oferta y destrucción de puestos de trabajo que están afectando a las economías de la región. En efecto, tanto en el conjunto de 11 países para los que se dispone de antecedentes como en los 6 países que registraron un mayor incremento del desempleo

(véanse el cuadro III.9 y el gráfico III.7), el tiempo de desocupación entre los más calificados supera con largueza el de los de menor nivel de calificación. Sin embargo, la duración media de los episodios de desempleo entre 1994 y 1999 aumentó más entre los desocupados con menos de 10 años de instrucción.

Cuadro III.9

AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): TIEMPO DE BÚSQUDA DE TRABAJO a/ ENTRE QUIENES HAN PERDIDO EL EMPLEO (En meses)												
País	Año	Tasa general de desempleo	Promedio de meses de búsqueda de trabajo					Número de años de instrucción				
			Total	Hombres	Mujeres	Jefes de hogar	No jefes de hogar	0 a 5	6 a 9	10 a 12	13 a 16	17 y más
Argentina b/	1990	5.9	4.4	4.3	4.5	4.0	4.5	3.0	4.0	5.5	6.3	
	1999	14.7	4.9	3.8	6.2	4.5	5.1	3.7	4.7	4.6	6.4	6.5
Bolivia	1994	3.2	3.2	3.2	3.1	3.7	2.8	2.1	2.9	2.5	4.5	6.1
	1999	7.1	3.9	3.7	4.2	3.9	4.0	3.5	2.9	3.9	5.1	7.5
Colombia	1994	8.0	5.9	5.6	6.1	6.0	5.9	5.0	5.5	6.5	7.3	14.3
	1999	19.2	8.2	7.9	8.5	8.0	8.3	7.6	7.7	8.5	9.9	8.0
Ecuador	1994	7.1	4.6	4.1	5.1	3.8	4.8	4.0	3.1	5.1	6.6	6.9
	1999	14.2	5.3	5.4	5.2	5.1	5.4	5.0	4.5	5.8	6.7	6.4
El Salvador	1999	6.9	1.9	1.8	2.0	2.0	1.9	1.3	1.5	2.1	2.2	4.8
Guatemala	1989	3.5	3.3	3.4	3.0	4.2	2.9	2.0	3.0	4.3	7.4	...
	1998	2.8	2.2	2.3	2.1	1.3	2.6	0.9	1.9	3.7	2.2	1.6
Nicaragua	1993	14.1	4.7	5.1	3.9	5.2	4.5	3.9	4.8	5.9	5.6	8.2
	1998	13.8	2.1	2.7	1.3	3.2	1.4	2.7	1.6	2.0	1.6	11.5
Panamá	1991	18.6	7.7	6.9	8.6	8.0	7.6	6.8	6.7	7.8	9.8	11.1
	1999	13.1	6.3	5.6	7.2	5.8	6.5	3.3	6.0	6.4	7.7	8.2
Paraguay	1999	9.1	3.7	4.1	3.1	3.4	3.8	2.5	3.3	5.3	4.8	6.8
Uruguay	1992	8.4	5.5	4.9	6.0	5.1	5.5	3.9	4.9	7.0	7.4	4.5
	1999	11.2	6.2	5.8	6.6	6.1	6.3	6.2	6.0	6.7	6.5	6.7
Venezuela c/ d/	1994	8.4	3.0	2.9	3.2	2.9	3.1	3.1	2.9	3.3	3.3	2.8
	1999	14.5	3.3	3.1	3.7	3.1	3.3	2.8	3.1	3.7	3.9	4.1
América Latina e/	1994	8.6	4.7	4.5	4.8	4.8	4.6	3.8	4.2	5.3	6.5	7.7
	1999	12.3	4.7	4.5	5.0	4.6	4.8	4.0	4.3	5.0	5.6	6.7
Promedio simple (6 países) f/	1994	6.8	4.4	4.2	4.7	4.3	4.4	3.5	3.9	5.0	5.8	6.9
	1999	13.5	5.3	5.0	5.7	5.1	5.4	4.8	4.8	5.5	6.4	6.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los distintos países.

a/ Excluye a aquellos cesantes que han buscado empleo por un periodo superior a dos años.

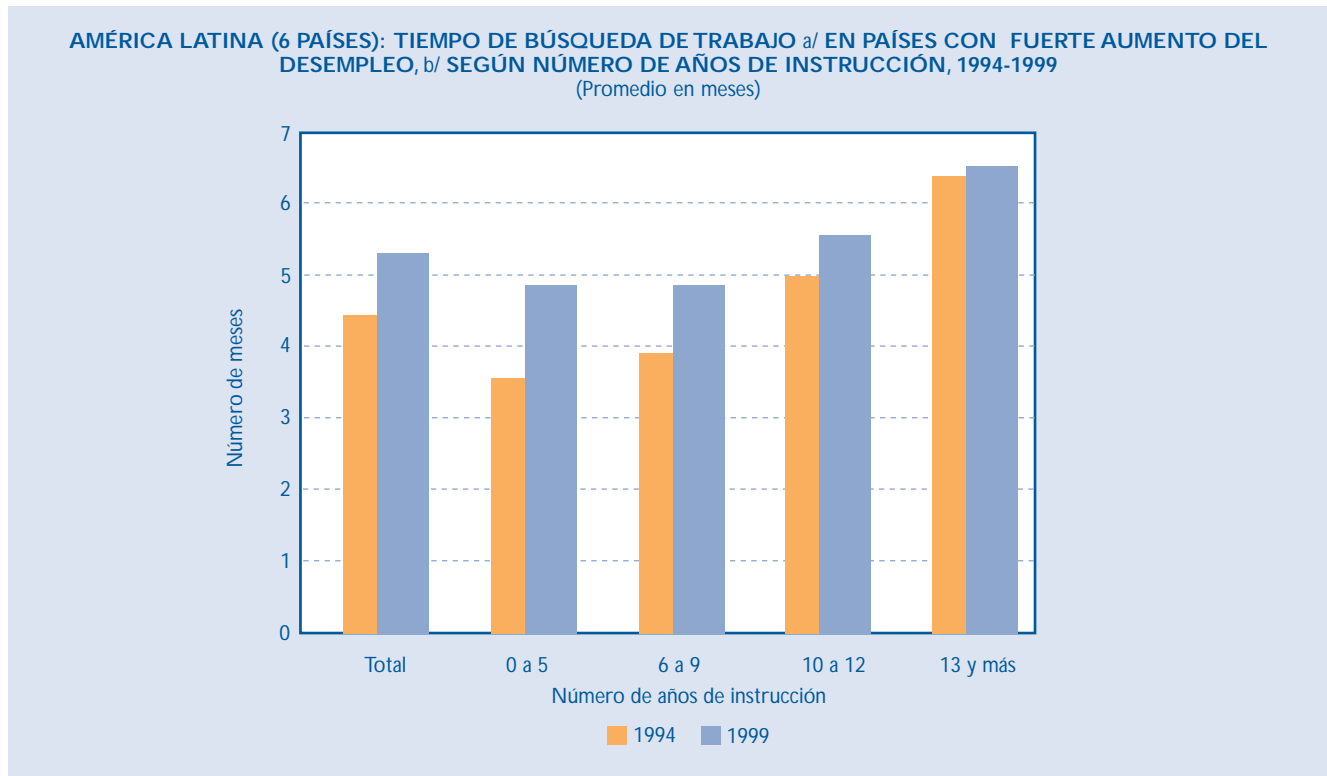
b/ Corresponde al Gran Buenos Aires.

c/ La medición registra el tiempo que el informante lleva sin trabajo, no el tiempo que lleva buscando trabajo.

d/ Corresponde al total nacional.

e/ Promedio simple de 9 países.

f/ Países donde el desempleo abierto urbano creció en el período considerado (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela).



Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere al tiempo de búsqueda entre quienes han perdido el empleo (cesantes). Excluye a aquellos que declaran haber buscado empleo por un período superior a dos años.

b/ Países donde el desempleo abierto urbano creció en el período (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela).

Por último, cabe destacar el papel que pueden estar desempeñando en la región las pérdidas de ingreso de los trabajadores que se reincorporan al empleo, las que actuarían como un mecanismo secundario de ajuste en mercados de trabajo caracterizados por una creciente flexibilización de la contratación y despido de mano de obra. Aunque se trata de evidencia parcial, los resultados obtenidos en un estudio reciente de la CEPAL para Uruguay son relevantes porque ilustran lo que ocurre

en mercados urbanos que se caracterizan por presentar niveles elevados de asalarización de la fuerza de trabajo y tasas relativamente altas y persistentes de desocupación. El estudio estimó que la pérdida salarial que experimentaron los asalariados privados entre 23 y 59 años de edad, que quedaron desocupados pero lograron reencontrarse, habría representado entre 23% y 34% del salario anterior (véase el recuadro III.2).

LAS PÉRDIDAS SALARIALES ASOCIADAS AL DESEMPLEO

Los elevados y crecientes niveles de desocupación en la región durante los años noventa y su persistencia en el último bienio han aumentado la preocupación por los efectos de este fenómeno en el bienestar de la población. Si bien existe evidencia acerca de la mayor duración media de los períodos de desempleo que acompañan a los incrementos de la desocupación, no se dispone de antecedentes sobre el efecto del desempleo en el salario que logran los trabajadores una vez que se reincorporan al mercado de trabajo.

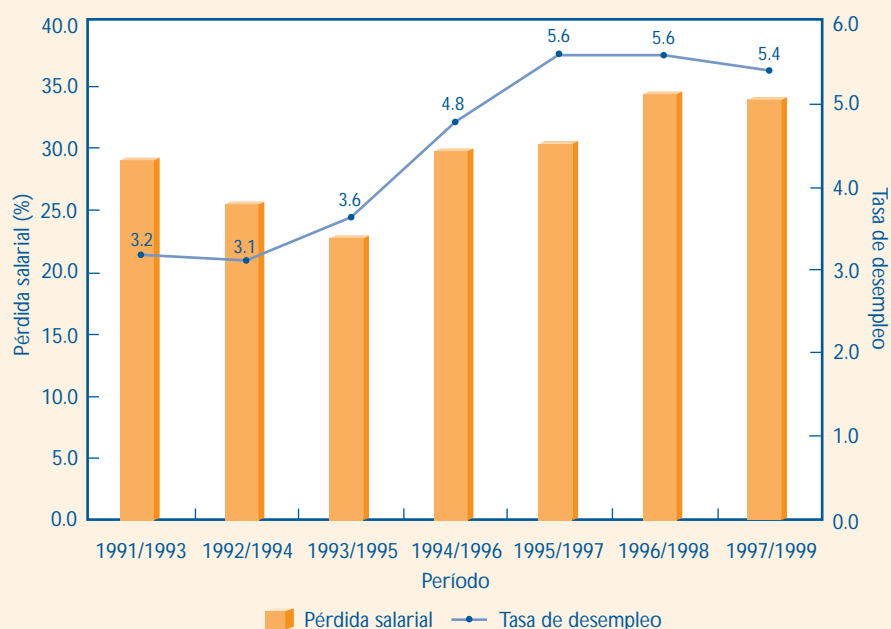
La preocupación que suscita el desempleo no se limita, por lo tanto, a la circunstancia presente de los desocupados sino que comprende también su trayectoria laboral futura. No es de extrañar que en situaciones de desocupación elevada se manifiesten temores no sólo respecto de las posibilidades de obtener un nuevo empleo y del tiempo que tomará encontrarlo, sino también si ello conducirá a una reinserción laboral de peor calidad, que puede manifestarse en un empeoramiento en la remuneración por hora, en una mayor carga horaria, en una menor estabilidad en el empleo o en una menor cobertura previsional.

La evidencia para países desarrollados indica que en contextos de reestructuración productiva y de cambios tecnológicos acompañados de reformas de los marcos regulatorios que afectan la demanda de trabajo, los asalariados que han perdido el empleo sufren mermas de ingresos al reincorporarse, debido básicamente a tres motivos. En primer lugar, la dificultad de reintersertarse como asalariado, por lo que un grupo de trabajadores recurre al empleo por cuenta propia, actividad en que la remuneración por hora suele ser menor. En segundo lugar, entre quienes se reinsertan como asalariados muchas veces se observa una reducción del número de horas trabajadas con respecto a la carga horaria del empleo anterior, lo que reduce el ingreso mensual del trabajador. Por último, incluso quienes trabajan a tiempo completo sufren una disminución del salario por hora en comparación con su puesto previo, pérdida que denota cierta persistencia en el tiempo. Por estas vías, los episodios de desempleo –agravados por su duración– pueden reducir de manera importante el ingreso y el bienestar de los trabajadores y sus familias por períodos más prolongados que el mero tiempo de desocupación.

Para los países latinoamericanos, sin embargo, no se dispone de evidencias sólidas acerca de los ingresos laborales que obtienen los desocupados una vez que consiguen un nuevo empleo. Un estudio pionero realizado por la CEPAL para Uruguay provee evidencias de importantes pérdidas salariales en una situación de aumento del desempleo.

El estudio se basó en información de la Encuesta Continua de Hogares de los años 1991 a 1999 y estimó las pérdidas salariales en los siete trienios móviles de la década (1991/1993 a 1997/1999) de los asalariados privados hombres de 23 a 59 años de edad, no asistentes al sistema educativo y residentes en Montevideo.

URUGUAY (MONTEVIDEO): PÉRDIDAS SALARIALES Y TASA DE DESEMPLEO ENTRE VARONES ASALARIADOS PRIVADOS DE 23 A 59 AÑOS QUE NO ESTUDIAN, 1991-1999



Fuente: CEPAL, Impacto del desempleo sobre el salario. Una estimación de la pérdida salarial para Uruguay (LC/MVD/R.188/Rev.1), Montevideo, Oficina de la CEPAL en Montevideo, junio de 2001.

(continúa)

LAS PÉRDIDAS SALARIALES ASOCIADAS AL DESEMPLEO

Para estimar las pérdidas mencionadas, se compararon los ingresos por hora obtenidos por los asalariados afectados por un episodio de desempleo en el año anterior a la encuesta, independientemente de la categoría del empleo anterior (asalariado o trabajador por cuenta propia), con los de asalariados de características similares (educación, antigüedad en el empleo, sector de actividad y ocupación) no afectados por la desocupación. Los resultados se obtuvieron a partir del ajuste de una ecuación salarial (1) a la que se le agregó una variable binaria (*des*) que refleja la ocurrencia o no de desempleo en los 12 meses previos a la entrevista, controlando el sector de actividad y la ocupación actual.

$$(1) \quad \ln S_i = \alpha + \sum_j \beta_j X_{j_i} + \mu \text{des}_i + \varepsilon_i$$

En la ecuación estimada por el método de los mínimos cuadrados, $\ln S_i$ corresponde al logaritmo del salario por hora y X_j corresponde a las típicas variables de capital humano: una especificación lineal de los años de educación aprobados en el sistema oficial de enseñanza; y la experiencia laboral, calculada como la diferencia entre la edad y los años de instrucción menos seis, además de una especificación cuadrática de esta misma experiencia.

Los resultados indicaron que se produjeron fuertes pérdidas salariales atribuibles a la ocurrencia de un episodio de desempleo durante el año anterior, que variaron durante la década entre 23% y 34% del salario. Es decir, aquellos que se reinsertaron como asalariados después del episodio de desempleo se habrían recontratado con salarios reales significativamente más bajos. Además, la magnitud de esas pérdidas estuvo asociada al aumento de la duración de la desocupación que acompañó al incremento de los niveles de desempleo abierto en Uruguay, crecientemente explicados por cierres de establecimientos, despidos y suspensiones a partir del segundo quinquenio de los noventa.

En síntesis, esta evidencia, aunque restringida sólo a un país, es indicativa de los mecanismos de ajuste que podrían estar operando en los mercados urbanos de trabajo de la región en períodos de aumento del desempleo. Así, la mayor duración de la desocupación reduciría el salario de reserva (aquel que se está dispuesto a aceptar al insertarse en un nuevo puesto de trabajo) que, junto con el incremento de la fuerza de trabajo, posibilitaría contrataciones a salarios reales menores, elevando las pérdidas salariales.

Fuente: CEPAL, Impacto del desempleo sobre el salario. Una estimación de la pérdida salarial para Uruguay (LC/MVD/R.188/Rev.1), Montevideo, Oficina de la CEPAL en Montevideo, junio de 2001.



El gasto social en América Latina: balance de una década

Introducción

En diversas ocasiones, la CEPAL ha señalado tres objetivos generales en relación con el gasto social en la región. Teniendo en cuenta la importancia de los efectos distributivos de los recursos públicos destinados a los sectores sociales, ha destacado la necesidad de: i) acrecentar los esfuerzos por elevar el gasto social y consolidar su recuperación considerando su bajo nivel en la mayoría de los países de la región, a lo que se suman las pronunciadas menguas que experimentó durante la década de 1980; ii) estabilizar su financiamiento a fin de evitar los severos efectos adversos derivados de la disminución de los recursos destinados a la inversión social en las fases recesivas del ciclo económico; iii) mejorar la focalización y el efecto positivo del gasto público destinado a los sectores sociales, particularmente de aquel orientado a poblaciones vulnerables o en situación de pobreza, reasignándolo a los componentes de gasto social de mayor impacto progresivo en la distribución del ingreso.

Atendiendo a estos tres objetivos principales, en este capítulo se presenta un balance general del comportamiento del gasto público social en América Latina durante la década de 1990, con el objeto de responder a un conjunto de interrogantes básicas:

- a. ¿Cuál es la magnitud de los recursos que los países latinoamericanos destinan a los sectores sociales y cómo evolucionó entre 1990 y 1999?
- b. ¿Cuál fue la contribución relativa del crecimiento económico, de la presión presupuestaria y de la prioridad fiscal al aumento del gasto social de la década pasada?
- c. ¿Cómo afectó al gasto social la recesión económica que experimentaron varios países durante el último bienio de los años noventa?
- d. ¿Hubo cambios en los años noventa con respecto al comportamiento que tradicionalmente ha mostrado el gasto social ante la expansión o contracción del gasto público?
- e. ¿Se hizo más o menos progresiva la estructura del gasto público social?
- f. ¿Se otorgó mayor prioridad a los gastos destinados a mejorar el capital humano en la región?

Al igual que en ediciones anteriores del *Panorama social de América Latina*, los antecedentes utilizados en el presente capítulo provienen de información oficial sobre la clasificación funcional del gasto público proporcionada por 17 países de la región. Estos antecedentes cubren el período 1990–1999¹ y abarcan en todos los casos el total del gasto público corriente y de inversión efectuado por los países en educación (comprendidos sus niveles preescolar, primario, secundario y superior), salud y nutrición, seguridad y asistencia social, vivienda, agua y saneamiento.

1 Sólo para un grupo reducido de países se dispuso de cifras del gasto público social presupuestado para el año 2000, lo que impide examinar en toda su magnitud el impacto de la crisis –cuyos efectos se hicieron sentir en la mayoría de los países a partir de 1999– sobre la cuantía de los recursos destinados a los sectores sociales en América Latina.

A. Evolución del gasto público social durante los años noventa

Durante los años noventa, el mayor esfuerzo realizado por los países latinoamericanos por asignar más recursos públicos a los sectores sociales se tradujo en un considerable aumento del gasto social por habitante, de alrededor de 50%. Aunque parte importante de este incremento fue facilitado por la recuperación de las tasas de crecimiento económico, sobre todo en la primera mitad de la década, destaca el hecho de que cerca de dos quintas partes de él provinieron de la reasignación de los ingresos públicos a fines sociales, y una parte menor, cercana a un quinto, de la expansión de los recursos para el presupuesto público. Ello permitió que la fracción del producto interno bruto destinada a los sectores sociales aumentara en la región de 10.4% a 13.1%.

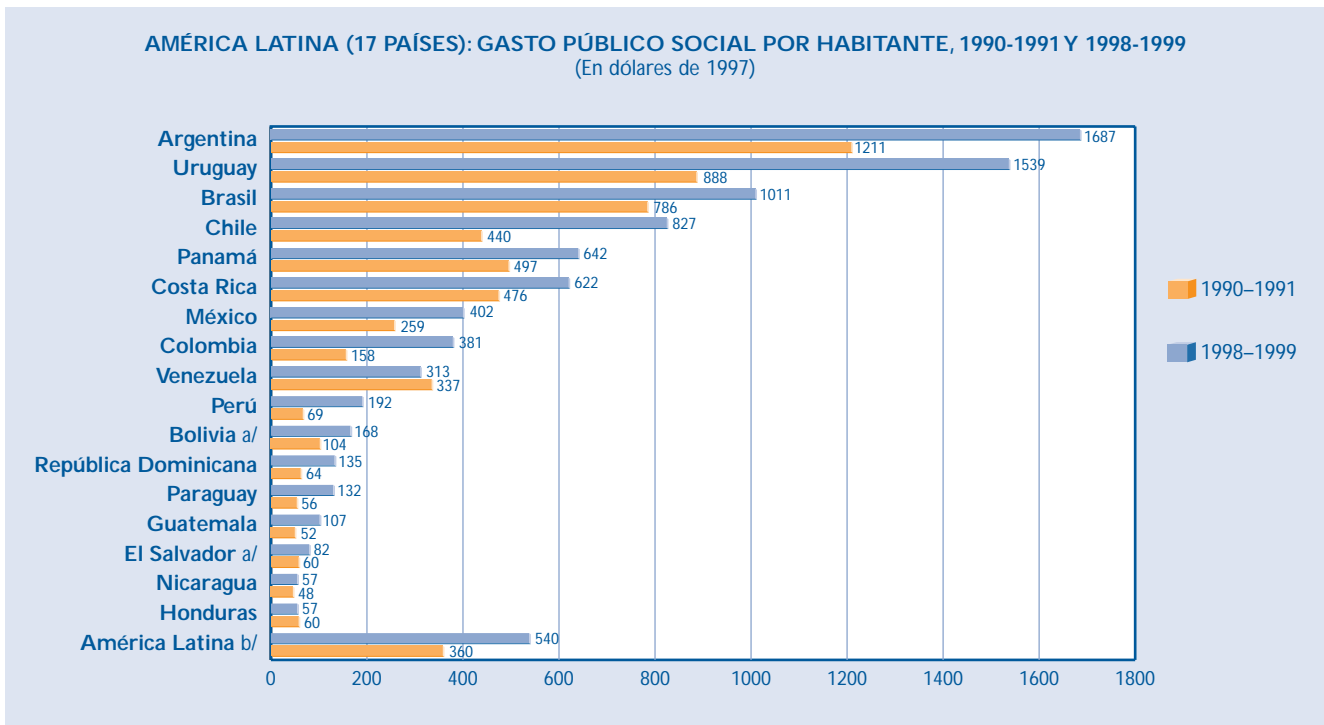
El gasto social se elevó considerablemente durante la década pasada. En la mayoría de los países creció el monto de recursos por habitante destinado a los sectores sociales, como consecuencia de la recuperación del crecimiento económico y, en mayor o menor medida, del aumento de la prioridad fiscal otorgada al gasto social (porcentaje del gasto público total destinado a los sectores sociales), lo que redundó en una mayor prioridad macroeconómica de éste (porcentaje del PIB destinado a lo social). En efecto, para el conjunto de 17 países de la región, el gasto público por habitante entre los bienios 1990/1991 y 1998/1999 se expandió, en promedio, en un 50%. Esto implicó que de un promedio de 360 dólares per cápita al principio de la década, el gasto social se elevara a 540 dólares anuales por habitante.² El crecimiento del gasto social en la región fue generalizado, pues sólo en dos países (Honduras y Venezuela) se registró una disminución

de éste en términos reales (véase el cuadro IV.1).

Sin embargo, los incrementos no fueron de la misma magnitud y tendieron a ser mayores en los países con niveles medios y bajos de gasto social por habitante: en Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana éste subió en más de 100%, mientras que en los países con niveles relativamente elevados de gasto (Argentina, Brasil, Costa Rica y Panamá), estos aumentos fueron bastante menores: entre 20% y 40% con respecto al inicio de la década.

Como se analiza más adelante, el incremento del gasto social en la región tampoco fue homogéneo a lo largo de la década; en la mayoría de los países su ritmo de expansión fue mayor durante el primer quinquenio y aunque en el segundo se mantuvo la tendencia al aumento, éste fue menor. Entre

² Corresponde al promedio simple de las cifras de los países. Las de gasto social por habitante están expresadas en dólares de 1997.



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

a/ La cifra inicial corresponde al promedio 1994–1995.

b/ Promedio simple de los países, excluidos Bolivia y El Salvador.

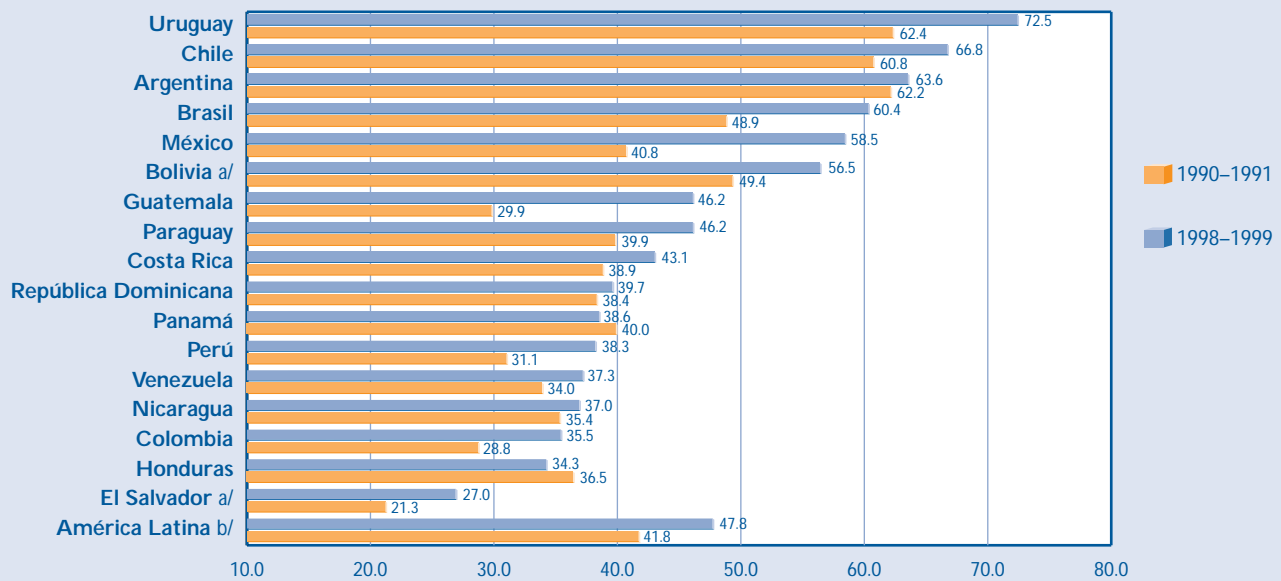
1990/1991 y 1994/1995 el gasto por habitante en América Latina en su conjunto creció un 30%, en tanto que entre 1994/1995 y 1998/1999 sólo lo hizo en 16%. Esta evolución se relacionó estrechamente con la dinámica del crecimiento económico registrado en la región durante los años noventa: en la primera mitad de la década, la tasa anual de crecimiento del producto interno bruto (PIB) en América Latina fue de 4.1%, cifra que se redujo a 2.5% en el quinquenio siguiente. Ello pone de manifiesto el fuerte vínculo existente entre la cuantía de los recursos que cada país puede destinar a los sectores sociales y el nivel del producto interno alcanzado y su ritmo de expansión, al margen de los esfuerzos de los gobiernos por otorgar mayor prioridad a los componentes sociales del gasto público.

En efecto, los logros en materia de aumento del gasto social durante la década pasada no sólo estuvieron asociados a la dinámica del crecimiento económico, sino también a la creciente preocupación de los países por acrecentar el gasto destinado a los sectores sociales a través del incremento de los recursos captados por el Estado y de su reorientación en favor de los sectores sociales.

Así, la prioridad fiscal del gasto social para el conjunto de la región se elevó de cerca de 42% hasta casi 48% del gasto público total (véase el cuadro IV.2). Esta tendencia, que fue generalizada en la región –sólo Honduras y, en menor medida, Panamá vieron reducida en la década la proporción del gasto público destinado a lo social–, no permitió disminuir las pronunciadas diferencias existentes al respecto entre los países, que obedecen a dos factores: por una parte, al hecho de que el componente de seguridad social dentro del gasto tiene la característica de "bien superior", pues adquiere un peso relativo creciente a medida que aumenta el ingreso por habitante de los países (véanse el gráfico IV.4A y el cuadro IV.4), como consecuencia de la mayor cobertura que alcanzan los sistemas de seguridad social, asociada al peso relativo de la población adulta mayor, y por otra parte, a que una muy alta proporción de los bajos volúmenes de recursos que logra captar el Estado en algunos países, se destina a las funciones generales (gobierno, defensa y justicia) y a las funciones económicas básicas de éste.

Gráfico IV.2

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO TOTAL, 1990-1991 Y 1998-1999



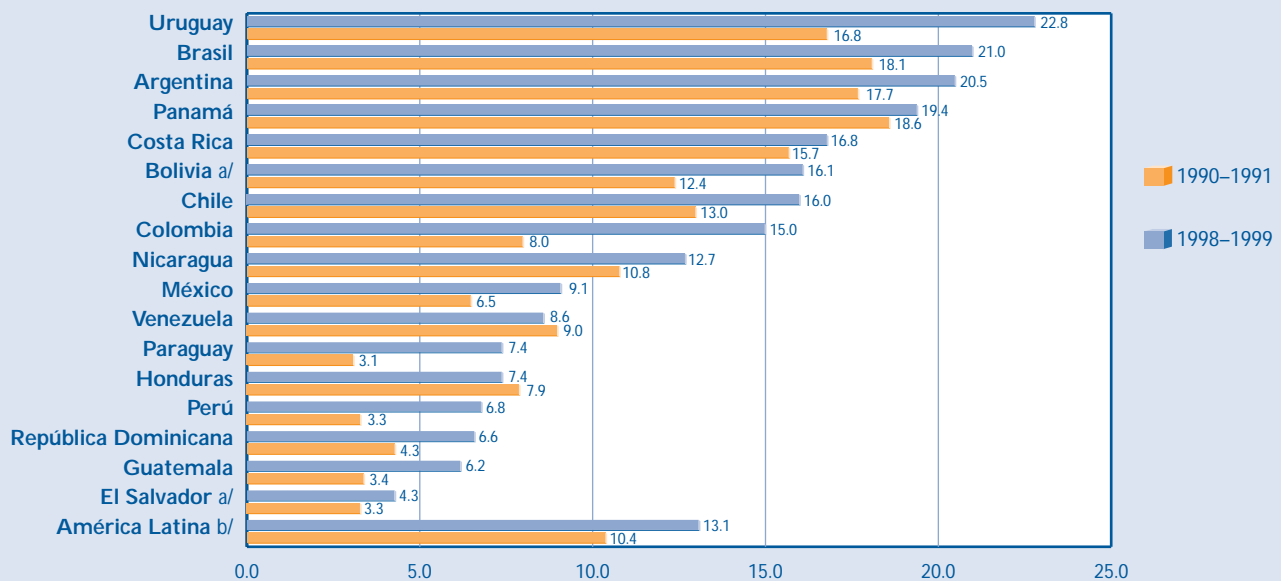
Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

a/ La cifra inicial corresponde al promedio 1994-1995.

b/ Promedio simple de los países, excluidos Bolivia y El Salvador.

Gráfico IV.3

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), 1990-1991 Y 1998-1999



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

a/ La cifra inicial corresponde al promedio 1994-1995.

b/ Promedio simple de los países, excluidos Bolivia y El Salvador.

DESCENTRALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL GASTO SOCIAL: EL CASO DE BRASIL

En los países en que el grado de descentralización del financiamiento del gasto público y del gasto social es relativamente elevado, es necesario utilizar el total consolidado de la nación para el análisis intertemporal y comparativo regional del gasto público total y social. Así se evita la considerable subestimación del nivel del gasto en que se incurre cuando sólo se registra el gasto realizado por el gobierno central, con lo que se proveen cifras más acordes con las reales variaciones absolutas y relativas del gasto per cápita global y sectorial.

El caso de la República Federativa de Brasil –donde una fracción elevada de los ingresos públicos y del gasto social se obtiene y ejecuta en forma descentralizada– ilustra este problema, así como las diferencias que se producen en los distintos indicadores relativos al gasto social cuando se consideran todos los niveles de la administración. A modo de ejemplo, si se analiza sólo el gasto federal, en Brasil se registra un gasto social por habitante de 613 dólares en 1998 (en dólares de 1997), con un aumento real en el período 1990–1998 de 20.7%. Sin embargo, si se atiende al origen de los recursos y se consolida la totalidad del gasto realizado en las tres esferas del gobierno (federal, estadual y municipal), el gasto social por habitante en 1998 asciende a 1 011 dólares, cifra que supera en cerca de 65% la correspondiente al gasto federal, con una variación de 21.5% en el mismo período.

Puesto que el grado de descentralización del gasto social en Brasil presenta grandes diferencias entre sectores (salud, educación, seguridad social, y otros), las diferencias de magnitud y las variaciones correspondientes entre distintos años se vuelven más significativas. Por ejemplo, la pronunciada y progresiva descentralización del financiamiento de la educación ha significado que el gasto del gobierno federal en esta área pasara de representar 34.0% del gasto en todas las esferas de gobierno en 1990, a 26.1% en 1996.

La consolidación de los niveles de gasto para las tres esferas de gobierno no está disponible en forma sistemática, por lo que se estimó a partir de 3 estudios que permitieron calcular coeficientes sectoriales de expansión del gasto federal al gasto realizado en las tres esferas de gobierno. De esta forma, se obtuvo la serie de datos de gasto social consolidado entre 1990 y 1998 utilizada en este capítulo.

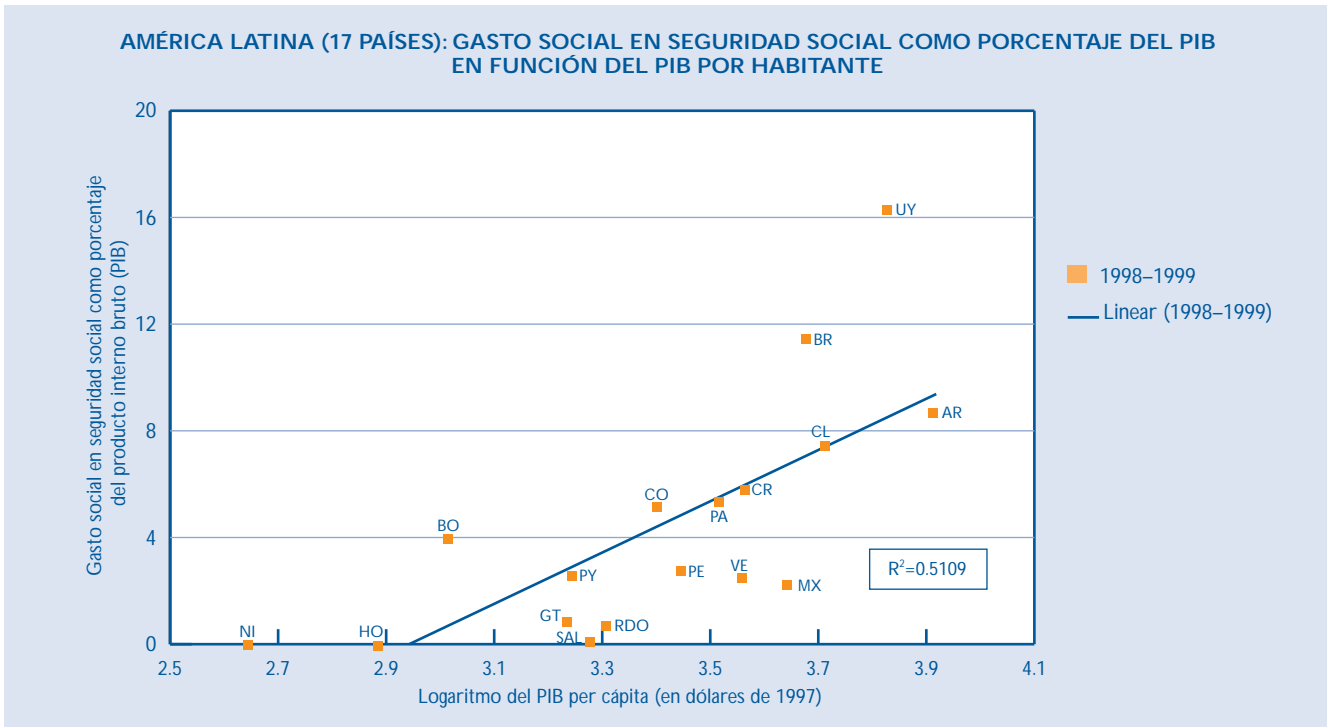
BRASIL: GASTO SOCIAL FEDERAL Y CONSOLIDADO				
Sector social	Promedio 1990–1991		Promedio 1997–1998	
	Gasto social per cápita (En dólares de 1997)	Gasto social como porcentaje del PIB a/	Gasto social per cápita (En dólares de 1997)	Gasto social como porcentaje del PIB a/
Gasto social federal	476	11.0	605	12.5
Educación, ciencia y tecnología	55	1.3	43	0.9
Salud, alimentación y nutrición	115	2.7	95	2.0
Seguridad y asistencia social	254	5.8	423	8.7
Trabajo y capacitación	36	0.8	35	0.7
Vivienda y saneamiento	16	0.4	9	0.2
Gasto social consolidado (Federal, estadual y municipal)	786	18.1	1007	20.8
Educación, ciencia y tecnología	162	3.7	188	3.9
Salud, alimentación y nutrición	156	3.6	174	3.6
Seguridad y asistencia social	351	8.1	540	11.1
Trabajo y capacitación	50	1.2	45	0.9
Vivienda y saneamiento	67	1.5	60	1.2

a/ Producto interno bruto.

Esta estructura de coeficientes se extrapoló a los años más cercanos, suponiendo que se mantienen constantes. Este supuesto se basa en los estudios citados más adelante, que muestran que esos coeficientes no varían sustancialmente en años consecutivos, y señalan una progresiva descentralización del gasto social en Brasil, como se deduce de los coeficientes de expansión del gasto federal al gasto consolidado: a inicios de la década de 1980 el coeficiente era alrededor de 1.50; entre 1984 y 1989 los coeficientes variaron entre 1.60 y 1.65; y a lo largo de los años noventa fluctuaron en alrededor de 1.70.

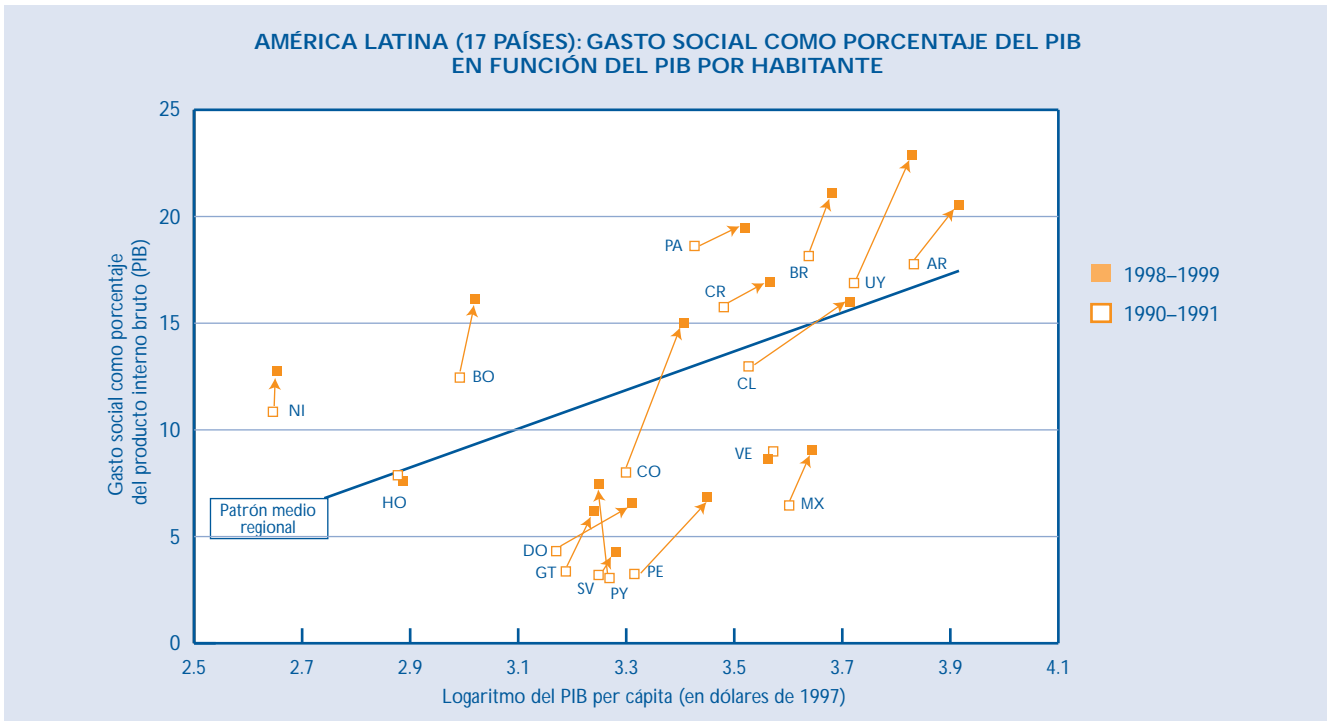
Fuente: Para 1990–1993: Andrés A. Médici, “A dinamica do gasto social no Brasil nas tres esferas do governo: uma análise do período 1980–1992”, Rio de Janeiro, Fundação de Desenvolvimento Administrativo (FUNDAPE)/Instituto de Economia do Setor Público (IESP), junio de 1994.
Para 1994–1996: Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), “Gastos Sociais das tres esferas de governo–1995”, Rio de Janeiro, 1995.
Para 1997–1998: Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), “Gastos Sociais das tres esferas de governo–1996”, Rio de Janeiro, 1996.

Gráfico IV.4a

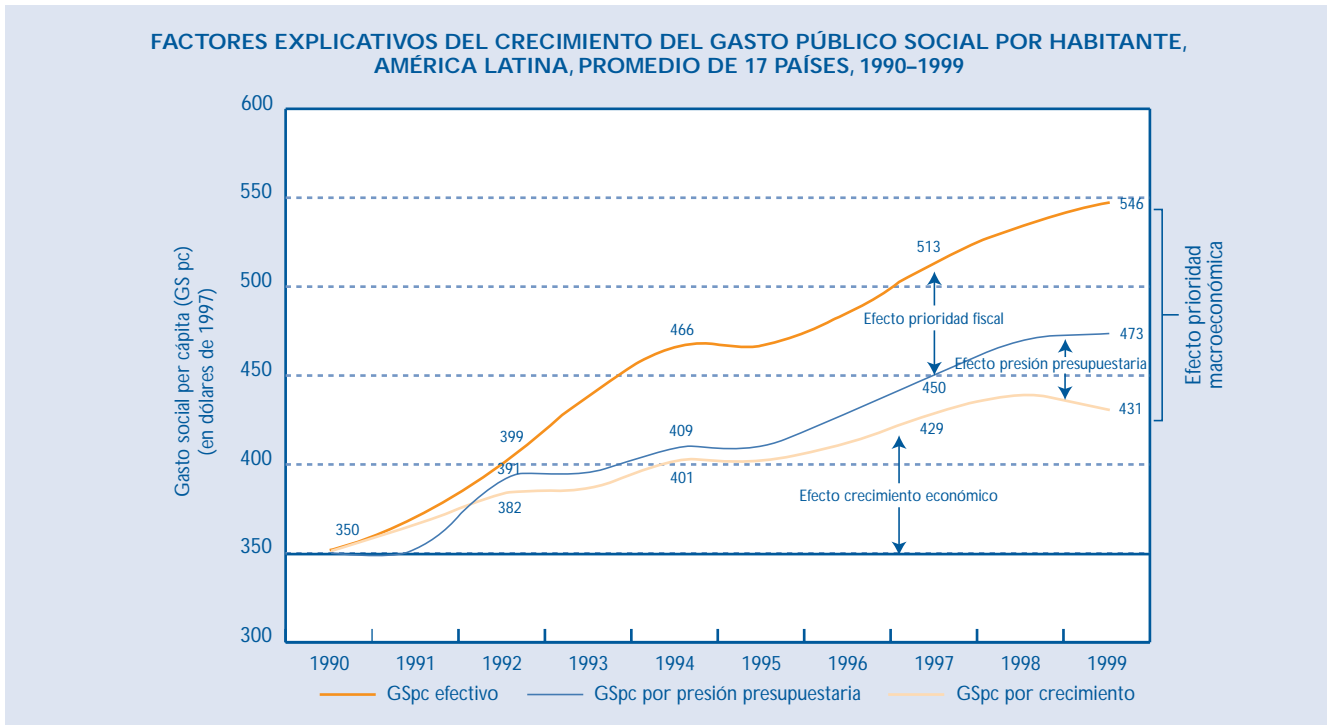


Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

Gráfico IV.4b



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

El efecto conjunto de ambos factores, es decir, de la mayor presión presupuestaria (proporción que alcanza el gasto público dentro del PIB) y de una más elevada prioridad fiscal del gasto social (proporción que éste representa dentro del gasto público), se expresó en un importante aumento de la fracción del PIB destinada a gasto público social (prioridad macroeconómica). En el conjunto de la región, ésta creció de 10.4% a 13.1% entre 1990/1991 y 1998/1999 (véase el cuadro IV.3). Cabe destacar que entre 1996/1997 y 1998/1999 esa proporción continuó en alza en la mayoría de los países de la región, debido a que en varios de ellos se hicieron esfuerzos por sostener en alguna medida los niveles de gasto social previos a la crisis. Sin embargo, ello se explica también por el rezago de los ajustes presupuestarios ante las caídas del producto y, consecuentemente, de los ingresos públicos.

No obstante que en 12 países se registraron aumentos considerables de la prioridad macroeconómica del gasto social y que entre ellos se encuentran varios

con bajo nivel de gasto, las diferencias entre los 17 países examinados sólo disminuyeron levemente, manteniéndose la enorme heterogeneidad que prevalecía a comienzos de la década. Como se aprecia en el gráfico IV.4B, no se alteró sustancialmente el cuadro regional en cuanto al esfuerzo que se realiza en los países por destinar recursos a los sectores sociales en función de su nivel de ingreso por habitante. Así, un grupo de países siguieron destinando a esos sectores una proporción del PIB superior a lo esperado de acuerdo al patrón medio regional, entre los que se encuentran aquellos de mayor gasto social por habitante: Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá y Uruguay. Sólo Bolivia y Nicaragua presentan un gasto superior al esperado de acuerdo a su nivel de ingreso, no obstante que integran el grupo de países de bajo nivel de gasto social por habitante. El otro grupo lo integran los países de nivel bajo o muy bajo de gasto social per cápita, y destinan a los sectores sociales una fracción de su producto muy inferior al patrón medio regional. La excepción la constituye Colombia, que entre los bienios 1992/1993 y 1996/1997

duplicó con creces su gasto social per cápita, con lo que acrecentó notablemente su prioridad macroeconómica y pasó de estar muy por debajo del patrón medio a sobrepasarlo.

En lo que se refiere a los ya mencionados factores que dan cuenta del crecimiento del gasto social por habitante (la expansión del PIB, la mayor presión presupuestaria y la mayor prioridad brindada a los sectores sociales dentro del presupuesto fiscal), se concluye que a lo largo de la década aumentó la importancia relativa de la prioridad macroeconómica otorgada al gasto social, con respecto a la del crecimiento del producto (véase el gráfico IV.5). Del incremento total del gasto social per cápita (de 350 dó-

lares en 1990 a 546 dólares en 1999: unos 196 dólares por persona), el esfuerzo por elevar la proporción del PIB destinada a los sectores sociales dio cuenta de cerca del 60% de este incremento (115 dólares). Sin embargo, el efecto de la reestructuración del gasto público total en favor de sus componentes sociales no fue menor: de los 115 dólares de aumento del gasto social por habitante no atribuibles al crecimiento económico, alrededor de 73 dólares provinieron sólo de la mayor prioridad fiscal otorgada al gasto social. De ese modo, el acrecentamiento de los recursos públicos totales provenientes de la mayor presión presupuestaria sería el factor que menos contribuyó a elevar el gasto social en la región en la década pasada (véase el recuadro IV.2).

Recuadro IV.2

UN PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR EL EFECTO DE LOS DISTINTOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL GASTO SOCIAL POR HABITANTE

Para analizar el peso relativo de los factores que explican el crecimiento del gasto social por habitante (GSpc) en el conjunto de la región, se optó por un método de descomposición que permite analizar el efecto acumulado de cada uno de los factores intervinientes, en el orden en que éstos ocurren cuando se adoptan decisiones en relación con el presupuesto público: en primer lugar, el efecto que tiene por sí solo el crecimiento del producto interno bruto (PIB) ante una situación de mantención de la presión presupuestaria (PP) del gasto público total (GPT) y de la prioridad fiscal del gasto social (PF) dentro del anterior; en segundo lugar, el efecto que tiene en el gasto social por habitante el aumento de la presión presupuestaria dado el crecimiento del PIB; en tercer lugar, el efecto que tiene el incremento de la prioridad fiscal del gasto social dado el aumento en la presión presupuestaria y el crecimiento económico.

Para identificar cada uno de los efectos se utilizó la siguiente relación:

$$GSpc = GS/GPT \times GPT/PIB \times PIBpc, \text{ donde}$$

$$GS/GPT = \text{Prioridad fiscal del gasto social (PF), y}$$

$$GPT/PIB = \text{Presión presupuestaria (PP)}$$

$$GS/PIB = \text{Prioridad macroeconómica.}$$

Entonces:

$$(1) \text{ Efecto neto del crecimiento} = PF_{\text{constante}} \times PP_{\text{constante}} \times PIBpc$$

$$(2) \text{ Efecto crecimiento + presión presupuestaria} = PF_{\text{constante}} \times PP \times PIBpc$$

Puesto que este efecto incluye el crecimiento económico, el efecto neto de la PP se puede calcular restando de la expresión (2) la expresión (1).

$$(3) \text{ Efecto crecimiento + presión presupuestaria + prioridad fiscal} = PF \times PP \times PIBpc$$

Puesto que este efecto incluye el crecimiento económico, el efecto neto de la presión presupuestaria y de la prioridad fiscal (prioridad macroeconómica del gasto social) se puede calcular restando de la expresión (3) la expresión (1).

$$(4) \text{ Efecto crecimiento + prioridad fiscal} = PF \times PP_{\text{constante}} \times PIBpc$$

Por último, dado que este último efecto incluye el crecimiento económico, el efecto neto de la PF se puede calcular restando de la expresión (4) la expresión (1), o bien restando de la expresión (3) las expresiones (1) y (2).

Como balance general, se puede afirmar que durante la década tanto el crecimiento económico como el esfuerzo por aumentar la participación de los sectores sociales dentro del presupuesto público explican la mayor parte del incremento del gasto social (cerca de 80%), con una importancia relativa similar; y que sólo un quinto del aumento obedeció al crecimiento de los recursos públicos.

La siguiente es la clasificación de los países latinoamericanos de acuerdo a las prioridades (fiscal y macroeconómica) del gasto social y la fracción que representa el gasto público total (GPT) dentro del PIB en el bienio 1998–1999.

del 20% del PIB a los sectores sociales, en otros se asigna menos del 10% a estos rubros. Entre estos últimos, la reducida base de los ingresos públicos es el principal factor que limita la capacidad de asignar importantes proporciones del gasto público a lo social. En los países en que existe más holgura presupuestaria se necesitan mayores esfuerzos para redistribuir los recursos públicos en favor del gasto social. Con todo, hay países en la región que destinan una alta proporción de su producto al gasto social –comparable a la que destinan a ese efecto varios países industrializados. En estos países el principal desafío es proteger el gasto ante las coyunturas adversas y aumentar su eficacia y eficiencia.

Gasto público total como porcentaje del PIB a/ (presión presupuestaria) b/	Porcentaje del gasto público total destinado a los sectores sociales (prioridad fiscal del gasto social) b/		
	Menor que 40%	Entre 40% y 60%	Mayor que 60%
Mayor que 30%	Nicaragua (12.7) Colombia (15.0) Panamá (19.4)	Costa Rica (16.8)	Argentina (20.5) Brasil (21.0) Uruguay (22.8)
Entre 20% y 30%	Honduras (7.4) Venezuela (8.6)	Bolivia (16.1)	Chile (16.0)
Menor que 20%	El Salvador (4.3) República Dominicana (6.6) Perú (6.8)	Guatemala (6.2) México (9.1) Paraguay (7.4)	

a/ Véase el recuadro IV.3.

b/ Las cifras entre paréntesis corresponden al porcentaje del PIB destinado a gasto social.

Si bien durante la década los logros en materia de incremento del gasto social fueron considerables, aún resultan insuficientes, tanto porque los recursos por habitante destinados a lo social están en niveles muy bajos para satisfacer las necesidades de amplios sectores de la población, como por el hecho de que la mayoría de los países presentan importantes márgenes para expandir la base de ingresos públicos y reorientar el gasto a fines sociales, según se desprende de la clasificación anterior. Ello se refleja en la pronunciada heterogeneidad que persiste en la región en cuanto a los esfuerzos que realizan los países: mientras que en algunos se destina alrededor

**PRECISIONES METODOLÓGICAS Y FUENTES DE LAS ESTADÍSTICAS
DE GASTO PÚBLICO TOTAL Y DE GASTO SOCIAL**

A nivel regional existen diferencias metodológicas y sobre todo de cobertura de las series de gasto público total y de gasto social. Las más importantes de las primeras se asocian al registro contable de los gastos y a la definición de gasto social. En las segundas, las discrepancias se vinculan a las distintas características institucionales de los Estados, así como a la posibilidad de incorporar los gastos efectuados por los gobiernos locales (véase el recuadro IV.1).

El gasto público se puede desagregar según las distintas entidades que lo ejecutan. Una primera distinción es entre el gasto público efectuado por el sector público financiero (SPF): Banco Central y el resto de entidades financieras de propiedad estatal, y el sector público no financiero (SPNF): gobierno central (GC), empresas públicas (EP) y gobiernos locales (GL); esta última (SPNF) es la cobertura alcanzada en el caso de cinco países.

En 11 de los 17 países analizados, las series refieren al gasto efectuado por el gobierno central. En su interior puede distinguirse entre las entidades con organización presupuestaria autónoma (EA) y las que dependen directamente del presupuesto del fisco (gobierno central presupuestario (GCP)). Esta última es la cobertura del gasto en tres países. En otro caso se considera el gasto del gobierno general (GG) que agrupa al GC y a los GL.

A continuación se clasifican los países según la cobertura institucional de las series de gasto social.

Cobertura institucional	Países
SPNF = GC + EP + GL	Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá
GG = GC + GL	Bolivia
GC = GCP + EA	Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela
GCP	México, Nicaragua y Paraguay

Atendiendo a las definiciones contables de las series correspondientes a estos 17 países y a las características del financiamiento y ejecución del gasto social en cada uno de ellos, se puede considerar que en 16 países las cifras son razonablemente comparables. En cambio, en el caso de México, la no inclusión del gasto social efectuado en el ámbito local en combinación con un cierto grado de descentralización de su financiamiento, se traduce en un cierto grado de subestimación del gasto público social que limita su comparabilidad.

Los indicadores de prioridad (gasto social/PIB y gasto social/gasto público total) son relaciones calculadas con las cifras a precios corrientes de cada año. El gasto social per cápita en dólares de 1997 se calculó a partir del gasto social total a precios corrientes. Para expresarlo en dólares constantes de 1997 se utilizó el deflactor implícito del producto interno bruto (PIB) y el tipo de cambio promedio de ese año.

Los datos en moneda corriente sobre el gasto público total y social, así como la desagregación sectorial de este último, son cifras oficiales proporcionadas por las respectivas instituciones gubernamentales de cada país. El PIB a precios corrientes y el deflactor implícito del PIB corresponden también a cifras oficiales obtenidas del Banco de Datos de Estadísticas Anuales (BADEANU) de la CEPAL. El tipo de cambio utilizado corresponde al promedio para 1997 de la serie "rf", extraído de las *Estadísticas financieras internacionales* del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las cifras de población provienen de las proyecciones de la División de Población–Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), publicadas en su *Boletín demográfico*.

B. El impacto de la crisis y el comportamiento del gasto social en las coyunturas de expansión y contracción del crecimiento económico

En los años de la década pasada en que se registraron tasas elevadas de crecimiento económico, en la mayoría de los países latinoamericanos se logró incrementar tanto la participación del gasto social dentro del presupuesto público como en relación con el PIB. Asimismo, el esfuerzo realizado en varios de ellos para proteger el gasto social evitó que la caída del crecimiento económico y la menor holgura en materia de recursos públicos de los últimos años derivara en una disminución de su cuantía.

La superación de las condiciones de pobreza y de inequidad en la región requiere que se otorgue un alto grado de prioridad al gasto social en los países. Éste debe concebirse en toda su complejidad: como componente prioritario del gasto público y sobre la base de criterios explícitos de búsqueda de mayor equidad. Esto último demanda la identificación de áreas prioritarias de inversión social, con el objetivo de interrumpir los principales circuitos de reproducción de las desigualdades.

Hacia mediados de la década pasada, el gasto público en relación con el PIB en los países latinoamericanos era inferior en alrededor de nueve puntos porcentuales al estándar que le correspondería en relación con su nivel de producto (BID, 1998, p. 200),³ lo que limita las posibilidades de los Estados de impulsar políticas redistributivas mediante el gasto social. De lo anterior se desprende que, para el

conjunto de los países de la región, existe un margen para expandir el gasto de 3.5 a 4.5 puntos porcentuales del PIB sólo por la vía del aumento de los recursos públicos, dado que el gasto social representa típicamente entre 40% y 50% del gasto público total.

Sin embargo, la evidencia no sólo indica la insuficiencia del gasto tradicionalmente asignado a los sectores sociales; la experiencia regional también ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las políticas sociales durante los períodos de crisis, como consecuencia del hecho que, por regla general, el gasto social ha tendido a expandirse cuando han existido más recursos presupuestarios para su financiamiento y a contraerse en los episodios de empeoramiento de la situación financiera del sector público, la mayoría de las veces como consecuencia de la reducción del crecimiento económico. Para referirse a este comportamiento se ha utilizado frecuentemente el término

3 A su vez, el bajo nivel de gasto público con respecto al PIB se asocia al hecho de que los niveles de tributación de varios países de la región son también inferiores a los estándares internacionales, e incluso muy inferiores a aquellos correspondientes al Caribe de habla inglesa. Estimaciones de la CEPAL, coincidentes con las de otras entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indican que los ingresos tributarios como proporción del PIB en la región son inferiores en alrededor de 6 puntos porcentuales a los que corresponderían de acuerdo a su patrón de desarrollo (CEPAL, 1998).

"procíclico", en oposición a un comportamiento "contracíclico" que correspondería a la situación inversa, esto es, de aumento del gasto social en años de contracción económica que derivan en una disminución de los ingresos y gastos públicos. Ello permitiría proteger los recursos para la asistencia social en las fases recesivas del ciclo económico, precisamente cuando éstos son más necesarios para impedir o contrarrestar el deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Por ello, un objetivo prioritario de las políticas públicas es evitar o moderar el comportamiento procíclico del gasto social en las coyunturas adversas, sobre todo del gasto que favorece a los sectores más pobres, fortaleciendo las prácticas que permiten consolidarlo y darle estabilidad.

1. El comportamiento del gasto público social en escenarios de alta volatilidad del crecimiento

El análisis de la evolución de los recursos destinados a los sectores sociales se ha centrado frecuentemente en el examen de las variaciones que experimenta de año en año el gasto social ante las fluctuaciones del presupuesto público. Puesto que la cuantía total de recursos públicos tiende a covariar con el nivel del PIB de los países, se ha constatado que el gasto social en los países latinoamericanos ha seguido, por regla general, el comportamiento del ciclo macroeconómico, contrayéndose en los períodos recesivos para aumentar en los de crecimiento económico.

El objetivo de contrarrestar los severos efectos negativos de las crisis recesivas en las poblaciones más vulnerables mediante la protección de los recursos destinados a los sectores sociales y el mejoramiento de las políticas públicas que tienen por objeto elevar su repercusión ha pasado a ocupar un lugar prominente en los últimos años (CEPAL, 1998). Ello se explica no sólo por la reducida magnitud de los recursos que tradicionalmente han destinado a lo social la mayoría de los países de la región, sino también por la creciente volatilidad del crecimiento económico. En efecto, du-

rante la década pasada la mayor parte de ellos continuó desenvolviéndose en un contexto de vulnerabilidad, debido a que la estabilidad macroeconómica ha dependido cada vez más de abultados déficit en cuenta corriente, financiados a menudo con capitales volátiles, lo que se ha traducido en ciclos cortos de expansión y ajuste, acordes con el comportamiento de esos capitales.⁴ A ello se ha sumado la fragilidad de los sistemas productivos y financieros, y el impacto en las economías de las diversas crisis internacionales, con altos costos para las finanzas públicas.

Lo anterior indica la necesidad de disponer de un esquema que permita calificar el espacio de posibilidades lógico-empíricas surgidas de los distintos comportamientos de los agregados que inciden en la evolución de los recursos destinados a los sectores sociales durante un cierto período: el tipo de escenario macroeconómico, determinado por la evolución del PIB y de los recursos financieros de que dispone el Estado para su asignación a los distintos componentes del gasto social; y la evolución efectiva que frente a esos escenarios registra el gasto social en términos reales. Cabe hacer notar que el esquema que se propone a continuación –especialmente útil en situaciones de volatilidad del crecimiento– es adecuado para calificar decisiones de corto plazo en materia de asignación de los recursos presupuestarios y que se manifiestan en las cifras de gasto público total y de gasto social realizado.

De acuerdo con lo señalado, es necesario distinguir escenarios de aumento y disminución del PIB, según se observa en los siguientes esquemas. En el escenario de crecimiento económico predominante entre 1990 y 2000 –124 episodios de un total de 144– destacan, en primer lugar, aquellos episodios en que la expansión del PIB fue acompañada de aumentos del total de recursos públicos (GPT) (95 episodios). En esta situación, fueron más frecuentes los incrementos de gasto social a un ritmo mayor que los del GPT, y redundaron en un acrecentamiento de su prioridad fiscal (54 episodios). Una fracción de los episodios en que ascendió el gasto social (34 de un total de 88) fueron acompañados de una caída de su prioridad,

⁴ Una indicación de la creciente volatilidad del crecimiento económico en la región surge de la comparación de los coeficientes de variabilidad de las tasas anuales de crecimiento del PIB: este coeficiente fue de 0.71 en el período 1990–1997 y de 1.1 entre 1990 y 1999 (CEPAL, 2001a).

pues el gasto social creció menos que el GPT. Una tercera situación, mucho menos frecuente (7 episodios), fue aquella en que los recursos destinados al gasto social disminuyeron en términos reales, marcando una fuerte caída de su prioridad fiscal, en un contexto de aumento de los recursos públicos.

Naturalmente, en los eventos en que hubo una reducción del presupuesto público con crecimiento económico (un total de 29 episodios) más de la mitad de éstos (16) fueron de incremento del gasto social, lo que derivó en un aumento de su prioridad.

Aunque menos frecuentes, merecen especial atención las situaciones ocurridas en los años de caída del PIB. A diferencia del escenario anterior, en que los repuntes del gasto social entrañaban un incremento de su *prioridad* en un contexto de expansión económica, interesa en este caso destacar aquellas situaciones en que se logró *proteger* la cuantía de recursos destinada a los sectores sociales. Ello se hizo en los casos en que el gasto social se elevó más que el GPT (fuerte protección), o incluso cuando aumentó pero a un ritmo menor que el GPT, situación que puede

calificarse como de "protección moderada" del gasto social, pues si bien éste perdió participación en el presupuesto público, lo hizo en un contexto de recesión, engrosando la cuantía absoluta de recursos. En sólo 3 episodios hubo un aumento del gasto social frente a la caída del GPT; ésta constituye la situación más evidente de *protección* de los recursos destinados a los componentes sociales del gasto.

Por último, las situaciones "menos deseables", a las que se alude cuando se señala la necesidad de proteger los sectores sociales en condiciones de alta volatilidad del crecimiento, ocurrieron cuando hubo una disminución absoluta de los recursos destinados al gasto social junto con una baja de su prioridad fiscal. A lo largo de la década, esto sucedió sólo en 6 de los 20 episodios de contracción del PIB (véase el recuadro IV.4).

En los gráficos IV.6a al IV.6d se puede apreciar cómo evolucionó el gasto social durante la década de 1990. Estos gráficos resumen el conjunto de episodios de variación anual del gasto social, del gasto público y del producto interno bruto en 17 países latinoamericanos.

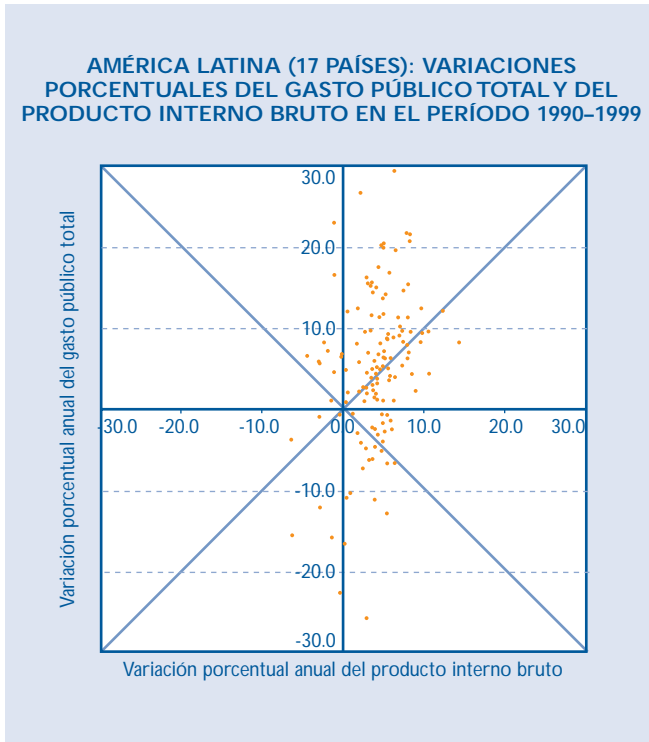
ESCENARIO DE AUMENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ^{a/}			
Gasto social		Gasto público total (GPT)	
		Disminuye	Aumenta
Aumenta...	a una tasa mayor que la del GPT a una tasa menor que la del GPT	I. Fuerte aumento de prioridad (16)	II.1. Aumento de prioridad (54)
			II.2. Disminución de prioridad (34)
Disminuye...	a una tasa menor que la del GPT a una tasa mayor que la del GPT	IV.1. Aumento de prioridad (9) IV.2. Disminución de prioridad (4)	III. Fuerte disminución de prioridad (7)

a/ Entre paréntesis se representa la cantidad de episodios ocurridos en los 17 países durante el período 1990–2000.

ESCENARIO DE CAÍDA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ^{a/}			
Gasto social		Gasto público total (GPT)	
		Disminuye	Aumenta
Aumenta...	a una tasa mayor que la del GPT a una tasa menor que la del GPT	I. Fuerte protección (3)	II.1. Fuerte protección (4)
			II.2. Protección moderada (4)
Disminuye...	a una tasa menor que la del GPT a una tasa mayor que la del GPT	IV.1. Protección moderada (3) IV.2. Desprotección (3)	III. Fuerte desprotección (3)

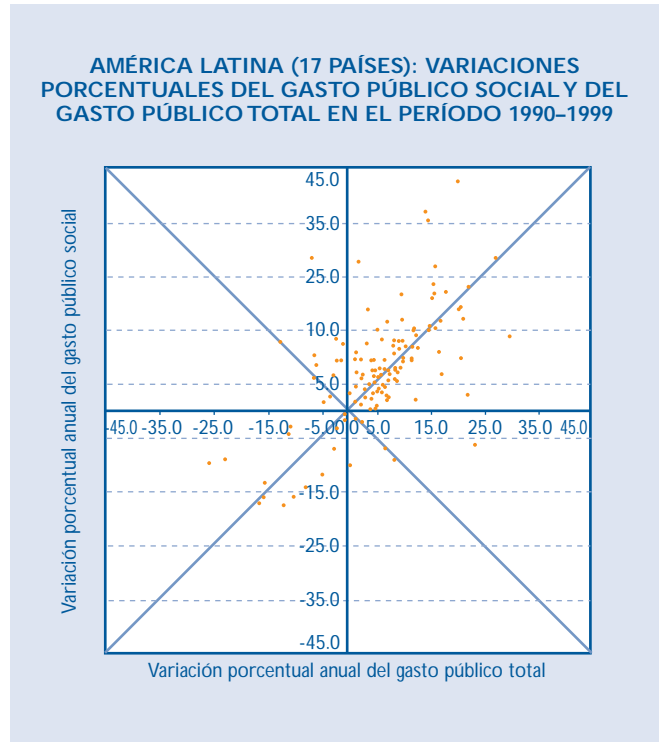
a/ Entre paréntesis se representa la cantidad de episodios ocurridos en los 17 países durante el período 1990–2000.

Gráfico IV.6a



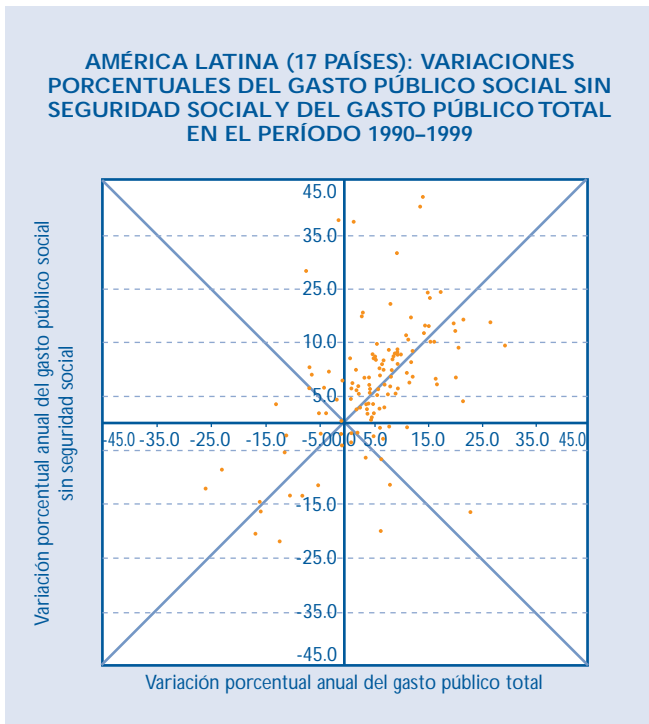
Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

Gráfico IV.6b



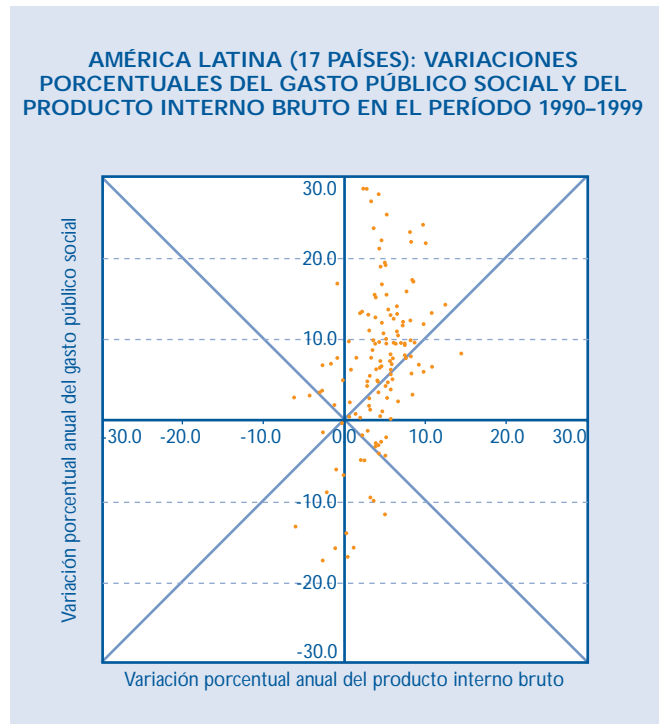
Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

Gráfico IV.6c



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

Gráfico IV.6d



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

En el gráfico IV.6a se puede observar que el gasto público tendió a covariar estrechamente con el PIB: la gran mayoría de los episodios de crecimiento económico fueron acompañados de un aumento de los recursos presupuestarios y, por regla general, estos aumentos fueron mayores que los del producto. No obstante, se constata que durante la década también se registraron episodios de incremento moderado del producto, que fueron acompañados de reducciones absolutas de los recursos financieros del sector público y en algunos casos esas reducciones fueron mayores que los respectivos aumentos del PIB. Del mismo modo, hubo situaciones en que caídas moderadas del producto no fueron acompañadas de una disminución del gasto público.

Cabe preguntarse si frente a los episodios de acrecentamiento de los recursos públicos totales, tendieron o no a predominar aquellos en que el gasto social se mantuvo o aumentó, es decir, si hubo o no una propensión a priorizar sus componentes sociales. Del gráfico IV.6b se desprende que, por regla general, el gasto social no sólo creció ante los incrementos del

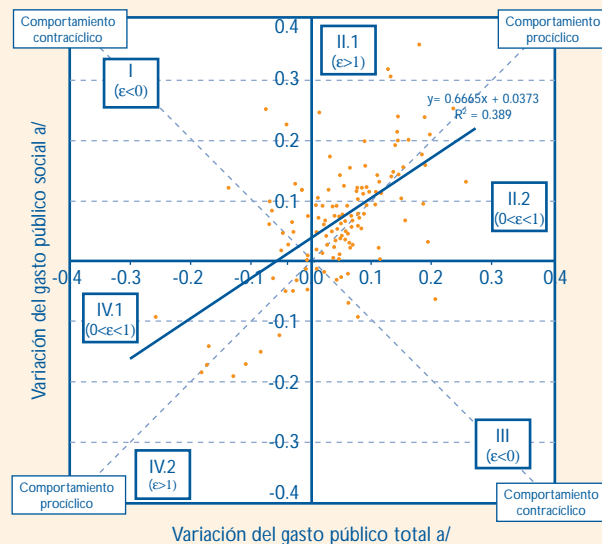
presupuesto público, sino que en una proporción muy elevada de los episodios los recursos destinados a los componentes sociales se expandieron a un ritmo mayor. Esto indica una tendencia a priorizar el gasto social dentro del presupuesto público durante la década pasada. Es interesante constatar que lo señalado es válido también para el gasto social cuando de éste se excluye la seguridad social –el componente que tiene un efecto menos progresivo en la distribución del ingreso–, con lo que la mayor priorización del gasto social se habría traducido en un beneficio relativamente mayor para los sectores de ingresos medios y bajos, no obstante que la seguridad social fue el componente del gasto que más creció durante la década pasada, como se verá en la sección C.

En síntesis, en una década en que predominaron los episodios de crecimiento económico el gasto social creció y, en la mayoría de los casos, lo hizo a un ritmo mayor (véase el gráfico IV.6d). Pero esta constatación de una tendencia a otorgar mayor prioridad a los sectores sociales no es suficiente por sí sola para dar cuenta del efecto redistributivo del gasto social.

UN MODELO PARA EXAMINAR EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL

Una forma de resumir el comportamiento del gasto social en términos de su mayor o menor prioridad fiscal ante distintos escenarios macroeconómicos consiste en estimar la elasticidad gasto social/gasto público, es decir, en qué proporción aumenta o disminuye el gasto social ante un aumento o disminución del gasto público total. Este parámetro (ϵ) puede estimarse considerando como observaciones los distintos episodios que aparecen representados por los puntos del gráfico adjunto y que corresponden a las variaciones entre años consecutivos del monto del presupuesto público y del gasto social para cada uno de los 17 países y bienes respecto de los que se dispuso de información.

VARIACIONES DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL Y DEL GASTO PÚBLICO TOTAL a/



a/ Corresponde a las diferencias en los logaritmos en años consecutivos del gasto público social y del gasto público total.

La estimación de ϵ se puede obtener a partir de la siguiente expresión:

$$\frac{GS_{t+1}}{GS_t} = \alpha \left[\frac{GPT_{t+1}}{GPT_t} \right]^\epsilon$$

donde GS_{t+1} y GS_t representan el gasto social en años consecutivos, y GPT_{t+1} y GPT_t el gasto público total.

Tomando logaritmos, se tiene:

$$\log GS_{t+1} - \log GS_t = \alpha' + \epsilon [\log GPT_{t+1} - \log GPT_t] + e_t$$

donde α' es el logaritmo de α , ϵ es la elasticidad gasto social/gasto público, y e el error de estimación.*

La estimación de ϵ para los 144 episodios observados entre 1990 y 2000 arrojó un valor de $\epsilon = 0.666$, parámetro que es altamente significativo ($t = 9.58$), con un valor de R^2 ajustado = 0.385. La estimación de esta elasticidad para los episodios en que el gasto público aumentó –la situación más frecuente durante la década (106 de los 144 episodios)– arroja un valor de la elasticidad gasto social/gasto público total más cercano a la unidad ($\epsilon = 0.937$, con un valor de $t = 7.40$ y R^2 de 0.368). Esto muestra el carácter inercial y procíclico del gasto social en la medida en que la mayoría de las veces su crecimiento fue similar al ritmo de expansión de los recursos presupuestarios.

Lo anterior es válido tanto para el gasto social total como para aquel que excluye el que asignan los países a la seguridad social. En este último caso, la elasticidad promedio para el total de episodios arroja un valor de $\epsilon = 0.701$ ($t = 4.61$), cifra que prácticamente no difiere de la estimada para el conjunto del gasto destinado a los sectores sociales. Por último, destaca el hecho de que el valor de la elasticidad gasto social/PIB es superior a la unidad ($\epsilon = 1.147$, $t = 6.16$), lo que concuerda con que a lo largo de la década y para el conjunto de los países de la región se elevara la prioridad macroeconómica del gasto social (véase el gráfico IV.3).

* Para una aplicación extendida del modelo en el caso de Argentina, véase Martin Ravallion: "Are the poor protected from budget cuts? Theory and evidence for Argentina", Toulouse, Banco Mundial/ Université des Sciences Sociales, 1999.

2. El comportamiento del gasto social durante la recesión de fines de los años noventa

Para los efectos de examinar el comportamiento del gasto social en relación con la evolución del gasto público total durante la recesión de fines de los años noventa, se seleccionaron seis países que tuvieron una contracción de su PIB en 1999: Argentina, Chile, Colombia, Honduras, Uruguay y Venezuela. En todos ellos, la caída del producto siguió a un período de crecimiento de éste, por lo que presentan situaciones propicias para analizar el comportamiento del gasto social.

El examen de la evolución del gasto público total y del gasto público social ante la caída del PIB en esos países permite constatar que los recursos destinados a los sectores sociales resultaron protegidos, en parte como consecuencia del carácter inercial de muchas de las partidas de gasto corriente dentro del gasto social (véase el gráfico IV.7). Con excepción de Venezuela, en todos los países considerados el gasto total del sector público creció en el período 1998–1999, a pesar de la caída del PIB. Más aún, en Venezuela este gasto se recuperó con rapidez entre 1999 y 2000, para crecer prácticamente a las mismas tasas previas a la crisis.

En lo referido al gasto social, en Argentina, Chile y Uruguay hubo una clara decisión de reasignar los recursos en favor de los sectores sociales, aunque con diferencias entre ellos que es preciso destacar. En Argentina, aunque se destinaron mayores recursos a los sectores sociales, esta reasignación favoreció relativamente más a los estratos más pobres en el bienio 1998–1999, en tanto que en el período siguiente (1999–2000) creció más el componente de seguridad social, que representa la fracción principal del gasto social en el país. Como conjunto, y a nivel del gasto consolidado –administración pública nacional, gobiernos provinciales y de Buenos Aires, y gobiernos municipales–, la mayor prioridad otorgada a los componentes sociales evitó que la caída del PIB se tradujera en una contracción del gasto social por habitante. En Chile, en cambio, tanto el gasto social total como aquel que excluye la seguridad social crecieron a ritmos similares y las tasas de incremento fueron levemente inferiores durante el ejercicio presupuestario del año 2000 en comparación con las del año anterior, lo que refleja el carácter inercial de los principales componentes del gasto social. Por otra parte, los

datos disponibles de Uruguay hasta el año 1999 denotan que hubo una clara protección del gasto social, tanto si se incluye como si se excluye el gasto en seguridad social, pues ambos agregados presentaron incrementos de magnitud similar en el bienio 1998–1999 frente a un gasto público que no se expandió.

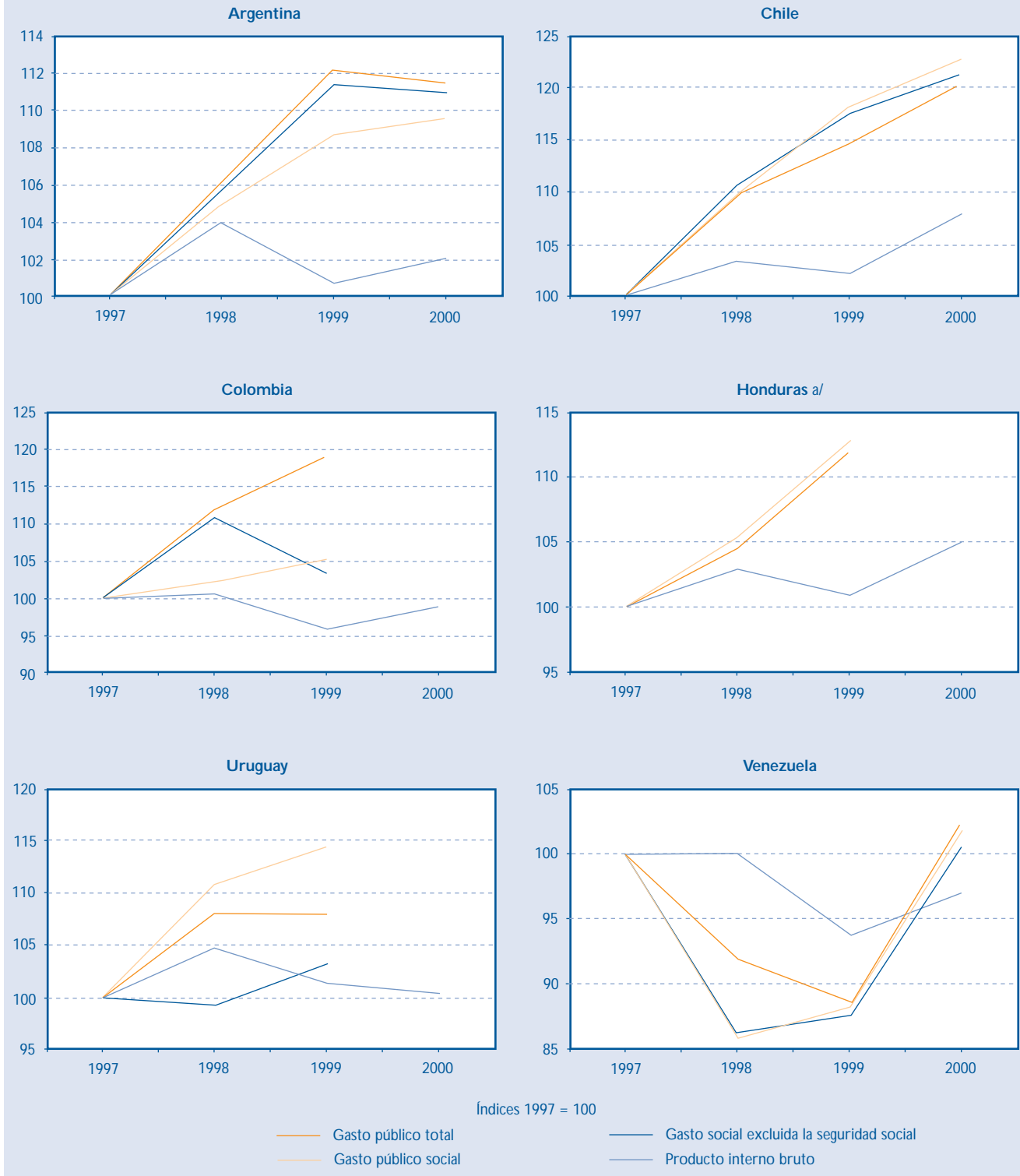
El caso de Colombia representa una situación particular, pues la caída del gasto sin seguridad social no significa que se hayan destinado menos recursos a los componentes que benefician mayormente a los estratos medios y bajos, los más perjudicados en los períodos de contracción del crecimiento. En efecto, como consecuencia de la ampliación de la cobertura de la seguridad social y de las prestaciones de salud y asistencia social que incluye esa partida, el gasto en seguridad social fue el componente que más creció en términos reales entre 1998 y 1999, de modo que el gasto social en su conjunto aumentó a una tasa muy superior a la del gasto público total, no obstante la contracción que experimentó el PIB entre ambos años.

Honduras permite ilustrar el comportamiento del gasto en países que destinan una fracción relativamente baja de sus recursos a los sectores sociales. Allí, el gasto social –que no tiene un componente significativo de seguridad social– y el gasto público crecieron a ritmos relativamente importantes antes y durante la recesión de 1999. Sin embargo, ese comportamiento inercial se debe menos a una política explícita de protección y más a la gravitación de los recursos provenientes de la ayuda internacional canalizados a través del presupuesto público.

Por último, lo característico de la situación venezolana es la volatilidad de su crecimiento y, por lo tanto, de la cuantía de los recursos públicos y de aquellos destinados a los sectores sociales. El fuerte aumento del gasto público y del gasto social entre 1996 y 1997, incluida y excluida la seguridad social, obedece a un proceso de recuperación que siguió a la expansión del producto luego de su fuerte caída en 1996. Con todo, el comportamiento del gasto social en el período 1998–1999 representa un claro intento de proteger los recursos destinados a lo social, ya que en ese mismo año hubo una disminución de los recursos presupuestarios totales como consecuencia de la caída del PIB. Sin embargo, entre 1999 y 2000 todos los componentes del gasto público volvieron a expandirse prácticamente a la misma tasa (alrededor de 15%).

Gráfico IV.7

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, DEL GASTO PÚBLICO TOTAL, DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL Y DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL SIN SEGURIDAD SOCIAL, 1997-2000
(Índices 1997 = 100)



Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.
a/ La información sectorial disponible en Honduras no registra gasto en seguridad social.

C. Evolución del gasto social por sectores y su impacto en la distribución del ingreso

Durante los años noventa el aumento del gasto social tuvo un efecto redistributivo relativamente mayor en los países de ingreso por habitante más bajo, debido al marcado incremento del gasto público en educación y salud. En los países de más alto ingreso por habitante, en cambio, el impacto redistributivo fue menor debido a que cerca de 50% del aumento del gasto público social correspondió a la seguridad social, su componente menos progresivo.

En esta sección se presentan algunos antecedentes que permiten examinar el impacto que el gasto público social tuvo en la distribución del ingreso de los hogares latinoamericanos. Con ese propósito se resumen, en primer lugar, los resultados de un conjunto de estudios para ocho países que permiten evaluar el impacto que registra en distintos estratos de la población el gasto público realizado en los sectores sociales. En segundo lugar, se analiza su evolución sectorial durante la década a fin de evaluar si el aumento del gasto público social tuvo o no un efecto desconcentrador de la distribución del ingreso.

1. El efecto redistributivo de los componentes del gasto social

Antecedentes para un conjunto de ocho países de la región evidencian que los distintos componentes del

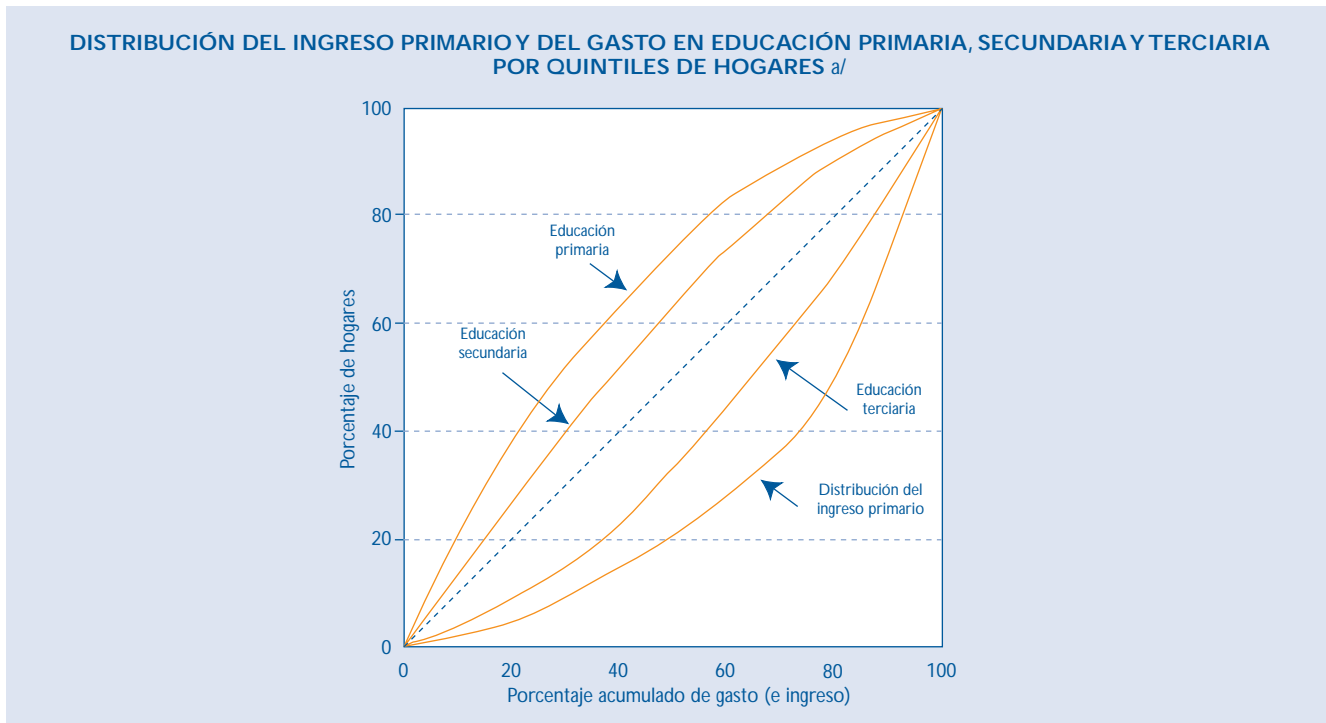
gasto público social presentan marcadas diferencias en cuanto a su grado de progresividad distributiva. En el cuadro IV.5 se resume la información sobre la proporción del gasto que reciben los hogares de cada uno de los quintiles de la distribución del ingreso.⁵ Como se puede apreciar, los gastos más progresivos –aquellos que benefician relativamente más a los hogares más pobres– corresponden a los efectuados en la educación primaria y secundaria, seguidos de los gastos en salud y nutrición, y luego en vivienda y servicios básicos (agua y saneamiento). Estos antecedentes confirman que el gasto en educación primaria sigue siendo el rubro más progresivo y de mayor efecto desconcentrador de la distribución del ingreso (véase el gráfico IV.8). Hay que destacar que, a diferencia de lo que se observaba en estudios similares realizados en los años setenta y a comienzos de los años ochenta, el gasto en educación secundaria aparece con un grado de progresividad relativamente elevado, similar al gasto en salud y nutrición. Esto se explica por la notable expansión que ha experi-

⁵ Se presentan además dos índices de la progresividad de este gasto: el coeficiente de Gini y un índice que compara la proporción del total del gasto en cada rubro que recibe el 40% de hogares de más bajos ingresos con la fracción del ingreso primario que éstos obtienen (véase el recuadro IV.4).

mentado la cobertura de la educación secundaria (CEPAL, 2000d), sobre todo durante las últimas dos décadas. Esto se tradujo en aumentos muy significa-

tivos de las tasas de matrícula en la educación media, que beneficiaron proporcionalmente más a los jóvenes provenientes de estratos medios y bajos.

Gráfico IV.8



Fuente: Cuadro IV.4

a/ Promedio simple de datos correspondientes a ocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.

Recuadro IV.5

LA PROGRESIVIDAD DEL GASTO SOCIAL POR SECTORES

Para analizar el grado de progresividad distributiva del gasto social de cada uno de los sectores sociales (educación, salud, vivienda y seguridad social) se utilizó un índice sintético basado en la proporción del gasto que perciben los hogares de cada uno de los quintiles de la distribución del ingreso.

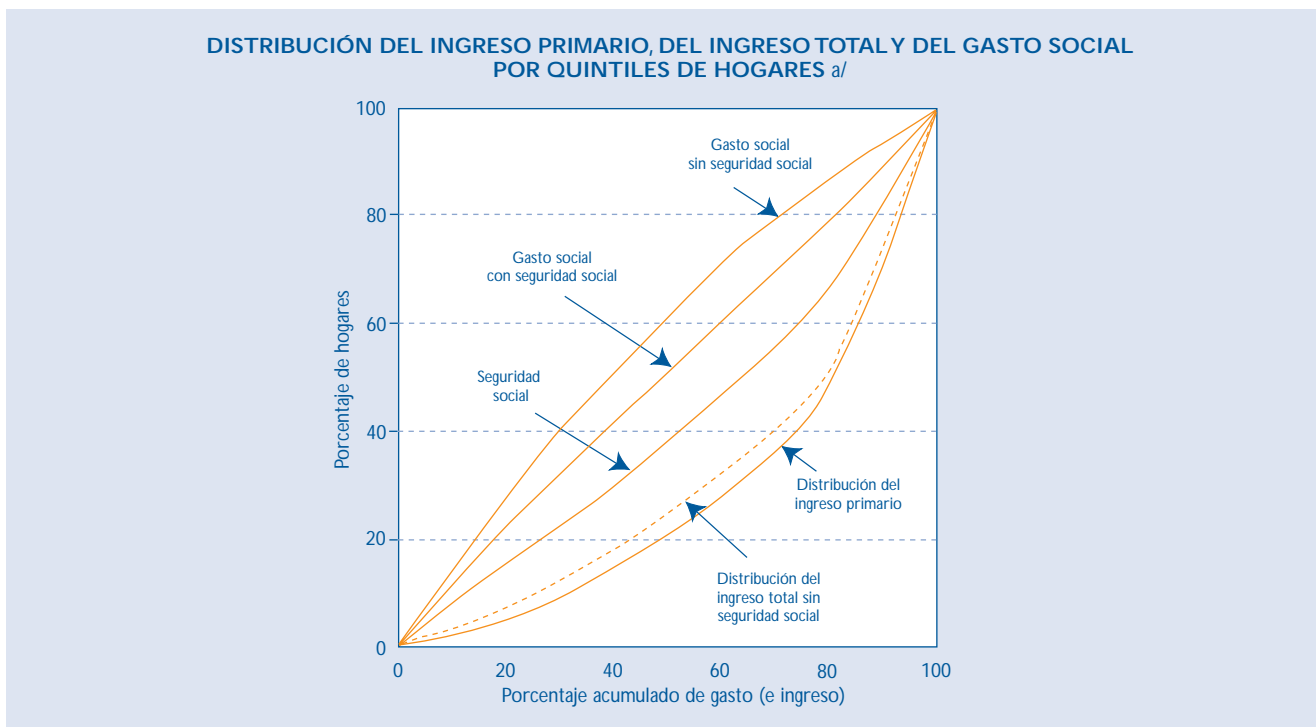
El índice se calculó sobre la base de la siguiente expresión:

$$I_G = \frac{N+1}{N} - \frac{2}{N} \cdot \sum_{i=1}^N Q_i$$

En esta expresión, N representa el número de tramos en que se dividió la población (5 tramos), y Q_i corresponde al porcentaje acumulado de gasto que recibe la población de cada uno de los quintiles de la distribución del ingreso autónomo de los hogares.

Según el grado de progresividad del gasto, este índice puede adoptar los siguientes valores:

- Si $-1 \leq I_G < 0$ entonces la distribución del gasto es progresiva, vale decir, si los hogares de menores ingresos reciben una fracción de él proporcionalmente mayor que los hogares de ingresos medios y altos;
- Si $0 < I_G \leq 1$ entonces la distribución del gasto es regresiva, vale decir, si los hogares de menores ingresos reciben una fracción de él proporcionalmente menor que los hogares de ingresos medios y altos.



Fuente: Cuadro IV.4

a/ Promedio simple de datos correspondientes a ocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.

Por otra parte, los gastos en seguridad social y en educación universitaria son los menos progresivos, particularmente este último. Ello refleja el menor acceso que todavía tienen los estratos medios y bajos a este nivel de educación.

Los gastos en vivienda, que aparecen en el promedio regional con un grado de progresividad intermedia, presentan en este sentido un patrón menos regular entre los países examinados, lo que obedece a las acusadas diferencias entre los programas y el acceso que tienen a éstos los hogares pertenecientes al 40% de más bajos ingresos.

En su conjunto, el gasto social resulta ser altamente redistributivo en todos los países, sobre todo si de él se excluye la seguridad social (véase el gráfico IV.9). En efecto, descontada ésta, el 20% de hogares de menores ingresos reciben 28% de los recursos públicos, en tanto que el 20% más rico recibe sólo

12% de esos recursos. Las diferencias anotadas quedan a la vista al comparar estas cifras con las de la distribución del ingreso primario de los hogares, esto es, el ingreso excluidas las transferencias monetarias del Estado y excluidos los beneficios del gasto social. El 20% de hogares más pobres reciben una fracción del gasto social –excluida la seguridad social– que en promedio sextuplica su participación en la distribución del ingreso primario (28.2% del gasto social en comparación con 4.8% del total del ingreso primario). En el 20% de hogares más ricos esta relación se invierte, y representa sólo la cuarta parte de su participación en la distribución del ingreso (12.4% del gasto social en comparación con 50.7% del total del ingreso primario).

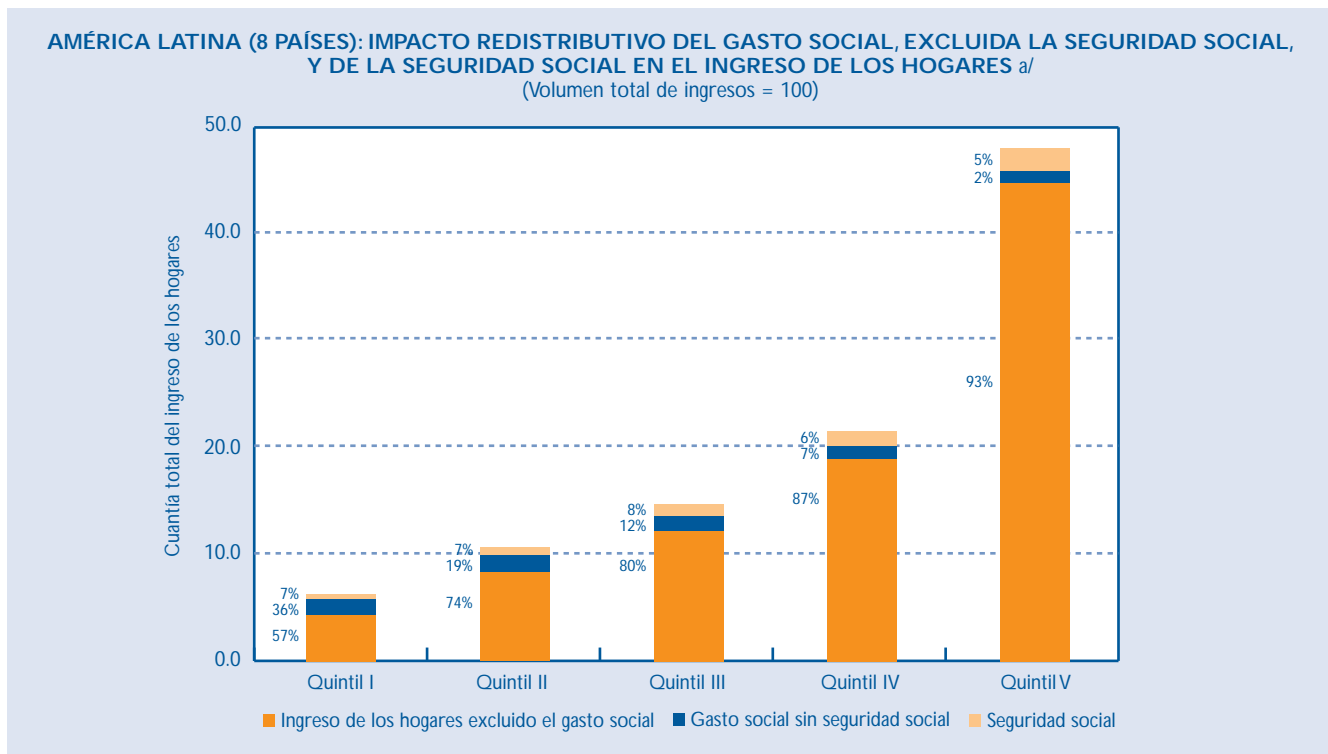
El mismo patrón, en cuanto al grado de progresividad del gasto, se desprende del valor del coeficiente de Gini. Con escasas excepciones, en todos los países el coeficiente de Gini del gasto en educa-

ción terciaria y el correspondiente a seguridad social presentan, a diferencia de los demás componentes del gasto, valores positivos, aunque de todas maneras más bajos que el correspondiente a la distribución del ingreso primario (véase el cuadro IV.5). El hecho de que el valor del coeficiente de Gini en algún rubro de gasto en particular sea superior a cero (0) no significa que este gasto tenga un impacto neto regresivo en la distribución final del ingreso de los hogares. Para que su efecto sea progresivo el valor de ese coeficiente debe ser menor que el correspondiente a la distribución del ingreso autónomo. En este sentido, como se aprecia en el gráfico IV.9, todos los componentes del gasto social son, aunque en diferente medida, progresivos con respecto a la distribución del ingreso primario.

La focalización relativa del gasto sin seguridad social presenta diferencias importantes entre los países ex-

aminados. En efecto, Chile y Colombia, países en los que se han venido realizando esfuerzos por concentrar los beneficios de los programas sociales en los estratos de menores ingresos, presentan los grados más pronunciados de focalización relativa del gasto en el 40% de hogares más pobres, en comparación con la fracción del ingreso que éstos captan. Los índices alcanzan a 4.9 y 4.2, respectivamente (véase nuevamente el cuadro IV.5). En cambio, Costa Rica y Uruguay registran los grados menores de focalización relativa, 2.6 y 2.9, respectivamente. Ambos países se han caracterizado por programas sociales de corte más universal, que benefician en proporciones semejantes a una fracción elevada del total de hogares. Por su parte, Argentina, Bolivia y Ecuador muestran grados intermedios de progresividad del gasto social, con índices de focalización en el 40% más pobre que alcanzan a 3.7, 3.8 y 3.5, respectivamente.

Gráfico IV.10



Fuente: Cuadro IV.5.

a/ Promedio simple de datos correspondientes a ocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.

El efecto redistributivo neto del gasto público social puede apreciarse en el gráfico IV.10 (y con mayor detalle en el cuadro IV.6), en el que se combinan las estimaciones de la distribución sectorial de los subsidios con las de la magnitud de éstos, a fin de determinar la cuantía adicional que representan las transferencias monetarias y de bienes y servicios gratuitos o subsidiados dentro del ingreso total de los hogares de cada estrato. Del gráfico se desprende que la importancia relativa de este gasto es mucho mayor en los estratos de menores ingresos, por cuanto entre ellos representa el 43% de su ingreso; en cambio, en los estratos de mayores ingresos (quintiles cuarto y quinto) representa entre un 13% y un 7%, respectivamente. Si se descuenta la seguridad social (principalmente jubilaciones y pensiones), la incidencia del gasto social disminuye en una proporción mucho menor entre los estratos más pobres, debido a que en el estrato superior más del 60% de las transferencias corresponden a seguridad social, mientras que en el quintil más pobre representan sólo cerca del 25% del total. Nótese que no obstante la baja repercusión del gasto social en los ingresos del estrato más rico, éste involucra un volumen cuantioso de recursos, que en varios de los países analizados supera e incluso duplica los destinados a los hogares del estrato más pobre. Ello se explica por la cuantía de las transferencias de la seguridad social. Además, hay que destacar que las cifras señaladas no representan la acción redistributiva neta del Estado, ya que no consideran el financiamiento del gasto social proveniente de los ingresos por tributación.

El importante efecto redistributivo del conjunto de renglones de gasto social, excluido el correspondiente a la seguridad social, se aprecia con claridad en el gráfico IV.9, que compara las curvas de concentración de Lorenz del gasto con y sin seguridad social con la de la distribución del ingreso primario y del ingreso total de los hogares. Si bien estas curvas representan el patrón promedio para los ocho países de los que se dispone de antecedentes, en todos ellos se constata la misma ordenación de las respectivas curvas de distribución del gasto y del ingreso.

2. Evolución sectorial del gasto social entre 1990 y 1999

Al tomar en consideración el distinto efecto redistributivo que tiene en los países cada uno de los componentes del gasto público social, cabe examinar si el considerable aumento del gasto social por habitante en los años noventa se orientó hacia sus componentes más progresivos, pues la influencia del aumento del gasto social en la equidad está asociada a la importancia relativa de su acrecentamiento en cada uno de los sectores sociales. Para el conjunto de la región, se puede estimar que el 44% de la expansión del gasto correspondió a los incrementos en educación y salud (28% y 16%, respectivamente); el 51%, a la ampliación del gasto en seguridad social, principalmente pensiones y jubilaciones; y el 5% restante a otros gastos, como vivienda, agua potable y saneamiento. Estas variaciones indicarían que, en el conjunto de la región, contribuyeron en partes similares a la expansión del gasto los sectores sociales de menor y de mayor progresividad.

La incidencia en la equidad no fue igual en todos los países. En los de menor ingreso por habitante creció relativamente más el gasto en sus componentes globalmente más progresivos –educación y salud–, que representaron 56% del total, mientras que la seguridad social sólo representó un quinto. En cambio, en los países de mayor gasto, la seguridad social captó alrededor de la mitad del incremento global (véase el cuadro IV.7).

El significativo aumento de los gastos en educación se vinculó al desarrollo de programas de reforma, predominantemente en la educación básica y media, que tienen por objeto elevar la calidad y equidad de la educación. Estas reformas incluyen, entre otras cosas, capacitación docente y elevación de las remuneraciones, gastos estos últimos de una considerable incidencia en el presupuesto del sector. También contribuyó a ese incremento la expansión de las partidas destinadas a gasto corriente y de capital, sobre todo en los países que se propusieron mejorar la infraestructura fi-

sica y tecnológica, actualizar los métodos y materiales de enseñanza y establecer sistemas de medición de los resultados del proceso educacional.

En lo referente a la evolución del gasto en salud, los mayores progresos se registraron en Argentina, Chile y Colombia (entre 76 y 109 dólares per cápita), superando ampliamente los 28 dólares en que creció el promedio regional.

Finalmente, los mayores aumentos del gasto en seguridad social se registraron precisamente en los países en que ésta capta una fracción más considerable de los recursos públicos (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), con incrementos comprendidos entre 150 y 200 dólares por habitante en los tres primeros países y algo superior a 500 dólares en el último. Estos aumentos obedecen a

los mejoramientos de las jubilaciones y pensiones, especialmente en Uruguay, donde se aplicaron reajustes cuatrimestrales como resultado de la enmienda constitucional aprobada en 1989. Otros factores que influyeron fueron el reconocimiento y amortización de pasivos acumulados por el sistema, y la expansión de la cobertura y del valor de las prestaciones.

Lo expuesto indica que el mayor esfuerzo realizado por los países que destinan una fracción menor del producto a los sectores sociales tuvo un efecto positivo en la distribución del bienestar, que fue más acentuado que en los países de más alto gasto social por habitante, en los que la seguridad social, que beneficia mayoritariamente a los estratos de ingreso medio y alto, representa una fracción mucho mayor de los recursos públicos.

Recuadro IV.6

GASTO PÚBLICO EN SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y LA INICIATIVA 20/20

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, marzo de 1995) adoptó la llamada iniciativa 20/20, que propone alcanzar la cobertura universal de los servicios sociales básicos (SSB). Para ello, los países deberían destinar a esos servicios el 20% de los recursos del presupuesto público y el 20% de los flujos de asistencia oficial para el desarrollo. La iniciativa asume que la provisión de SSB es una de las maneras más efectivas y costo-eficientes de combatir las manifestaciones más extremas de la pobreza. Asimismo, considera que mediante la reorientación de los recursos existentes, la movilización de nuevos recursos y el aumento de la eficacia en la entrega de SSB con criterios de eficiencia y calidad, se logrará, en un plazo relativamente corto pero realista, el acceso universal a esos servicios.

Para dar seguimiento a la iniciativa, los gobiernos de Noruega y de los Países Bajos convocaron a una reunión internacional, que se efectuó en Oslo en abril de 1996, de la cual emanó el Consenso de Oslo sobre la iniciativa 20/20. También se acordó realizar una reunión de seguimiento a la iniciativa para intercambiar información, examinar experiencias nacionales y evaluar los progresos en la materia, la que se realizó en Hanoi en octubre de 1998.

En Oslo se especificó con mayor precisión que en Copenhague lo que se entiende por SSB. Éstos comprenden: la educación básica y la atención primaria de salud, incluidos la salud reproductiva y los programas de población, los programas de nutrición, el agua salubre y el saneamiento, así como la capacidad institucional de prestar esos servicios.

Por su parte, el sistema de las Naciones Unidas decidió apoyar esta iniciativa, acorde con la convicción de que en el debate sobre ajuste, reformas y desarrollo no sólo debe ponerse énfasis en los niveles macro y globales, sino también en los micro y subnacionales, y en los instrumentos de política que afectan la asignación y distribución de los recursos. Éstos incluyen, entre otros, la asignación del gasto público, la utilización de la ayuda externa, la asignación de crédito, la política de precios y de ingresos y la política impositiva. Entre estos instrumentos, la iniciativa 20/20 destaca la reestructuración del gasto público y de los flujos de ayuda a los países.

En este marco, en 13 países de América Latina y el Caribe (Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Perú y República Dominicana) se realizaron estudios cuyos objetivos principales fueron:

- determinar el porcentaje del presupuesto público nacional y del flujo de asistencia internacional para el desarrollo que se gastan actualmente en SSB;
- analizar la incidencia del gasto público en SSB en los distintos estratos socioeconómicos de la población;
- evaluar la posibilidad de reestructurar inter e intrasectorialmente el presupuesto público nacional en favor de los SSB;
- identificar áreas en las que puede mejorarse la incidencia y costo-efectividad de la entrega de SSB.

Entre otros aspectos, estos estudios concluyeron que aunque la mayoría de los países han incrementado el gasto social durante los años noventa, ninguno ha logrado aún el acceso universal a servicios de calidad en educación básica, salud básica y agua potable, ni cumplido las metas de esta iniciativa: el gasto en servicios sociales básicos sólo representa 12.4% del gasto público total (algo más de la tercera parte del gasto público social), y 10% de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a estos servicios.

Fuente: Enrique Ganuza, Arturo León y Pablo Sauma (comps.), "Gasto público en servicios sociales básicos en América Latina y el Caribe. Análisis desde la perspectiva de la iniciativa 20/20" (LC/R.1933), Santiago de Chile, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), octubre de 1999.

Cuadro IV.1

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL PER CÁPITA (En dólares de 1997)					
País	1990–1991	1992–1993	1994–1995	1996–1997	1998–1999
América Latina a/	360	419	466	499	540
Argentina	1 211	1 447	1 583	1 576	1 687
Bolivia	121	147	168
Brasil b/	786	765	932	952	1 011
Chile	440	538	597	719	827
Colombia	158	195	297	403	381
Costa Rica	476	495	536	568	622
El Salvador	60	70	82
Guatemala	52	65	66	69	107
Honduras	60	67	59	56	57
México	259	333	358	352	402
Nicaragua	48	44	52	47	57
Panamá	497	582	606	653	642
Paraguay	56	114	131	149	132
Perú	69	100	140	158	192
República Dominicana	64	92	100	108	135
Uruguay	888	1 095	1 248	1 358	1 539
Venezuela	337	355	287	318	313

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

a/ Promedio simple de los países, excluidos Bolivia y El Salvador. El promedio para América Latina, si se incluyen estos países en los bienios 1994–1995, 1996–1997 y 1998–1999, es de 422, 453 y 491 dólares, respectivamente.

b/ Estimación del gasto social consolidado. Véase el recuadro IV.1.

Cuadro IV.2

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO TOTAL					
País	1990–1991	1992–1993	1994–1995	1996–1997	1998–1999
América Latina a/	41.8	43.9	46.7	46.7	47.8
Argentina	62.2	63.3	65.3	65.3	63.6
Bolivia	49.4	54.9	56.5
Brasil b/	48.9	47.2	60.0	60.4	60.4
Chile	60.8	62.4	64.7	65.9	66.8
Colombia	28.8	32.2	39.9	41.8	35.5
Costa Rica	38.9	41.2	38.3	42.2	43.1
El Salvador	21.3	24.9	27.0
Guatemala	29.9	33.4	38.5	37.4	46.2
Honduras	36.5	33.7	32.7	34.6	34.3
México	40.8	49.7	52.4	51.9	58.5
Nicaragua	35.4	38.1	40.9	37.1	37.0
Panamá	40.0	37.9	43.2	38.2	38.6
Paraguay	39.9	42.9	43.4	47.1	46.2
Perú	31.1	32.5	34.8	35.2	38.3
República Dominicana	38.4	37.0	41.2	39.0	39.7
Uruguay	62.4	67.7	70.8	69.9	72.5
Venezuela	34.0	40.1	35.3	35.5	37.3

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

a/ Promedio simple de los países, excluidos Bolivia y El Salvador. El promedio para América Latina si se incluyen estos países en los bienios 1994/1995, 1996/1997 y 1998/1999 es de 45.5%, 45.9% y 47.1%, respectivamente.

b/ Estimación del gasto social consolidado. Véase recuadro IV.1.

Cuadro IV.3

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): GASTO PÚBLICO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB					
País	1990–1991	1992–1993	1994–1995	1996–1997	1998–1999
América Latina a/	10.4	11.4	12.1	12.5	13.1
Argentina	17.7	19.2	21.0	19.8	20.5
Bolivia	12.4	14.6	16.1
Brasil b/	18.1	17.7	20.0	19.7	21.0
Chile	13.0	13.6	13.6	14.4	16.0
Colombia c/	8.0	9.4	11.5	15.3	15.0
Costa Rica	15.7	15.3	16.0	17.0	16.8
El Salvador	3.3	3.8	4.3
Guatemala	3.4	4.1	4.1	4.2	6.2
Honduras	7.9	8.5	7.7	7.2	7.4
México	6.5	8.1	8.8	8.5	9.1
Nicaragua	10.8	10.6	12.6	11.0	12.7
Panamá	18.6	19.5	19.8	20.9	19.4
Paraguay	3.1	6.2	7.0	8.0	7.4
Perú	3.3	4.8	5.8	6.1	6.8
República Dominicana	4.3	5.9	6.1	6.0	6.6
Uruguay	16.8	18.9	20.3	20.9	22.8
Venezuela	9.0	8.9	7.6	8.3	8.6

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

a/ Promedio simple de los países, excluidos Bolivia y El Salvador. El promedio para América Latina si se incluyen estos países en los bienios 1994/1995, 1996/1997 y 1998/1999 es de 11.6%, 12.1% y 12.7%, respectivamente.

b/ Estimación del gasto social consolidado. Véase recuadro IV.1.

c/ A partir de 1994 las cifras se calcularon utilizando la nueva serie de Producto Interno Bruto a precios corrientes.

Cuadro IV.4

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL SIN SEGURIDAD SOCIAL EN LOS AÑOS NOVENTA						
País	Gasto social real per cápita sin seguridad social		Gasto social sin seguridad social como porcentaje del PIB a/		Seguridad social como porcentaje del gasto social	
	1990–1991	1998–1999	1990–1991	1998–1999	1990–1991	1998–1999
Argentina	641	969	9.4	11.8	47.0	42.6
Bolivia b/	107	127	11.0	12.2	11.6	24.2
Brasil c/	435	456	10.0	9.5	44.8	54.8
Chile	204	438	6.0	8.5	53.7	47.0
Colombia	98	250	4.9	9.8	38.0	34.5
Costa Rica	327	406	10.8	11.0	31.3	34.7
El Salvador b/	56	81	3.2	4.3	0.8	1.2
Guatemala	40	92	2.6	5.3	22.3	14.4
Honduras	59	57	7.8	7.4	1.3	0.0
México	249	299	6.2	6.8	4.1	25.5
Nicaragua	48	57	10.8	12.7	0.0	0.0
Panamá	342	463	12.8	14.0	31.5	27.9
Paraguay	35	86	1.9	4.9	37.1	34.9
Perú	45	113	2.2	4.0	33.6	41.5
República Dominicana	58	118	3.9	5.8	8.7	11.8
Uruguay	299	438	5.7	6.5	66.3	71.6
Venezuela	248	220	6.6	6.0	26.7	29.9
Promedio regional d/	212	304	6.5	8.0	30.5	33.1

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

a/ Producto interno bruto.

b/ La cifra de 1990–1991 corresponde a 1995 en el caso de Bolivia y a 1994 en el de El Salvador.

c/ Estimación del gasto social consolidado. Véase el recuadro IV.1. La cifra final corresponde a 1998.

d/ Promedio simple excluidos Honduras y Nicaragua.

Cuadro IV.5

AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SOCIAL POR ESTRATOS DE INGRESO a/ E ÍNDICES DE PROGRESIVIDAD DE SUS DISTINTOS COMPONENTES							
País	Distribución porcentual del gasto social por quintiles					Coeficiente de Gini b/	Índice de progresividad del gasto social c/
	I (Más pobre)	II	III	IV	V (Más rico)		
Argentina 1991 d/							
Educación	32.5	18.7	21.1	15.4	12.4	-0.17	3.69
Primaria	42.7	21.0	19.9	11.9	4.5	-0.34	4.60
Secundaria	28.7	19.0	26.0	15.6	10.7	-0.16	3.45
Terciaria	8.3	11.1	16.0	25.8	38.8	0.30	1.40
Salud y nutrición	38.7	16.6	25.5	14.8	4.5	-0.28	3.99
Vivienda y otros	20.5	18.0	25.8	19.0	16.7	-0.03	2.77
Seguridad social	11.0	17.2	20.9	22.5	28.4	0.16	2.04
Gasto social sin seguridad social	33.1	17.9	23.0	15.6	10.3	-0.19	3.68
Gasto social con seguridad social	21.1	17.5	21.9	19.3	20.1	-0.001	2.79
<i>Distribución del ingreso e/</i>	5.3	8.6	14.1	21.4	50.6	0.41	
Bolivia 1990							
Educación	32.0	24.3	20.0	14.8	8.9	-0.22	4.66
Primaria y secundaria	36.6	26.3	19.3	12.3	5.5	-0.30	5.21
Terciaria	12.4	15.5	22.9	25.8	23.4	0.13	2.31
Salud y nutrición	15.2	14.7	24.4	24.4	21.3	0.09	2.48
Vivienda y otros	7.8	11.1	14.7	20.6	45.8	0.34	1.56
Seguridad social	13.5	19.9	22.4	19.0	25.2	0.09	2.76
Gasto social sin seguridad social	25.8	20.5	19.6	16.9	17.2	-0.08	3.83
Gasto social con seguridad social	23.5	20.4	20.2	17.3	18.7	-0.05	3.63
<i>Distribución del ingreso e/</i>	3.4	8.7	13.1	20.5	54.3	0.45	
Brasil 1994 f/							
Educación primaria	30.1	27.3	21.6	14.3	6.8	-0.24	4.34
Salud y nutrición	31.5	26.5	19.5	14.2	8.3	-0.23	4.38
Vivienda y otros	30.8	26.9	20.6	14.2	7.5	-0.24	4.36
Seguridad social	42.0	10.1	13.5	15.1	19.4	-0.16	3.94
Gasto social con seguridad social	33.8	22.1	18.1	14.8	11.3	-0.21	4.22
<i>Distribución del ingreso e/</i>	4.5	8.8	11.8	19.5	55.4	0.45	
Chile 1996							
Educación	34.0	26.1	19.4	14.0	6.5	-0.27	5.05
Primaria	38.2	26.3	17.6	12.5	5.3	-0.32	5.42
Secundaria	26.5	24.7	22.2	17.6	9.1	-0.17	4.30
Terciaria	6.3	16.3	37.9	20.5	19.0	0.12	1.90
Salud y nutrición	30.9	23.2	22.2	16.5	7.2	-0.22	4.55
Vivienda y otros	37.3	27.5	20.3	11.2	3.8	-0.33	5.45
Seguridad social g/	4.0	9.0	15.0	25.0	47.0	0.41	1.09
Gasto social sin seguridad social	33.3	25.0	20.5	14.4	6.8	-0.25	4.90
Gasto social con seguridad social g/	16.0	16.0	17.0	21.0	30.0	0.13	2.69
<i>Distribución del ingreso e/</i>	3.9	8.0	11.8	19.2	57.1	0.47	
Colombia 1997							
Educación	21.4	21.2	21.5	18.1	17.6	-0.04	3.40
Primaria	35.9	28.7	21.2	10.2	4.1	-0.33	5.15
Secundaria	24.9	26.8	24.4	16.6	7.3	-0.18	4.12
Terciaria	3.4	8.0	19.1	27.6	41.6	0.39	0.91
Salud y nutrición	17.5	19.7	22.2	20.7	19.7	0.02	2.97
Gasto social sin seguridad social g/	27.0	25.0	21.0	17.0	10.0	-0.17	4.15
Gasto social con seguridad social g/	23.0	23.0	20.0	18.0	15.0	-0.07	3.67
<i>Distribución del ingreso e/</i>	3.9	8.7	12.9	19.7	54.9	0.45	

(continúa)

Cuadro IV.5 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SOCIAL POR ESTRATOS DE INGRESO /a E ÍNDICES DE PROGRESIVIDAD DE SUS DISTINTOS COMPONENTES							
País	Distribución porcentual del gasto social por quintiles					Coeficiente de Gini b/	Índice de progresividad del gasto social c/
	I (Más pobre)	II	III	IV	V (Más rico)		
Costa Rica 1986							
Educación	15.7	18.4	19.6	23.8	22.5	0.08	2.04
Primaria	30.0	27.0	22.0	13.0	8.0	-0.23	3.40
Secundaria	17.8	21.4	23.1	21.2	16.5	-0.01	2.34
Terciaria	1.7	9.1	15.5	35.0	38.7	0.40	0.65
Salud y nutrición	27.7	23.6	24.1	13.9	10.7	-0.17	3.06
Seguridad social	7.1	13.2	12.0	23.1	44.6	0.34	1.21
Gasto social sin seguridad social	22.1	21.2	22.0	18.5	16.2	-0.06	2.58
Gasto social con seguridad social	17.6	18.8	19.0	19.9	24.8	0.06	2.17
<i>Distribución del ingreso e/</i>	5.1	11.6	16.7	24.5	42.0	0.35	
Ecuador 1994							
Educación	26.5	31.8	18.5	12.8	10.4	-0.20	3.74
Primaria	37.5	25.6	18.2	10.8	7.9	-0.30	4.04
Secundaria	26.7	34.5	17.3	15.6	5.9	-0.24	3.92
Terciaria	22.3	32.8	18.8	12.1	14.0	-0.15	3.53
Salud y nutrición	18.8	41.9	16.0	16.3	7.0	-0.20	3.89
Gasto social sin seguridad social	24.5	30.3	18.5	14.4	12.2	-0.16	3.51
<i>Distribución del ingreso e/</i>	5.0	10.6	15.9	22.2	46.3	0.38	
Uruguay 1993							
Educación	33.2	21.3	16.5	14.7	14.3	-0.18	3.03
Primaria	51.6	22.2	12.7	9.9	3.7	-0.43	4.10
Secundaria	30.3	28.9	17.6	14.2	9.0	-0.23	3.30
Terciaria	5.4	7.2	21.4	24.3	41.7	0.36	0.70
Salud y nutrición	34.9	19.9	22.1	13.2	10.0	-0.23	3.05
Vivienda y otros	14.1	17.2	13.6	25.3	29.8	0.16	1.74
Seguridad social	12.4	16.2	20.5	20.1	30.8	0.16	1.59
Gasto social sin seguridad social	31.8	20.1	19.1	15.2	13.9	-0.16	2.88
Gasto social con seguridad social	19.6	17.6	20.0	18.3	24.5	0.04	2.07
<i>Distribución del ingreso e/</i>	7.3	10.7	13.3	23.8	44.9	0.35	
Promedio no ponderado							
Educación	27.9	23.1	19.5	16.2	13.2	-0.14	3.66
Primaria	38.0	25.4	19.0	11.8	5.8	-0.31	4.44
Secundaria	25.8	25.9	21.8	16.8	9.7	-0.17	3.57
Terciaria	8.5	14.3	21.7	24.4	31.0	0.22	1.63
Salud y nutrición	26.9	23.3	22.0	16.7	11.1	-0.15	3.54
Vivienda y otros	22.1	20.1	19.0	18.1	20.7	-0.02	3.18
Seguridad social	15.0	14.3	17.4	20.8	32.6	0.17	2.11
Gasto social sin seguridad social	28.2	22.9	20.5	16.0	12.4	-0.15	3.65
Gasto social con seguridad social	22.1	19.3	19.4	18.4	20.6	-0.01	3.03
<i>Distribución del ingreso e/</i>	4.8	9.4	13.7	21.4	50.7	0.41	

Fuente: CEPAL, sobre la base de estudios nacionales y de información oficial de los países.

a/ Se refiere a grupos quintílicos de hogares ordenados según su ingreso per cápita.

b/ Véase el recuadro IV.3.

c/ Corresponde al cociente entre la proporción de diferentes rubros de gasto social destinados a los hogares pertenecientes al 40% más pobre de la población y la participación de éstos en la distribución del ingreso primario.

d/ Corresponde al Gran Buenos Aires.

e/ Corresponde a la distribución de los hogares ordenados según su ingreso autónomo per cápita. El ingreso autónomo corresponde a la suma de los ingresos percibidos por las personas, una vez descontadas las cotizaciones previsionales, el impuesto sobre la renta y los subsidios monetarios proporcionados por el Estado. Para efectos de comparación, el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso autónomo se calculó a partir de grupos quintílicos de hogares.

f/ Corresponde a Sao Paulo. En Brasil, el gasto en seguridad social sólo incluye pensiones.

g/ Véase CEPAL, 1994, p. 65.

AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): INCIDENCIA DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EL INGRESO DE LOS HOGARES (Gasto social como porcentaje del ingreso primario y del ingreso total de los hogares)												
País	Total	Incluye el gasto público en seguridad social					Total	Excluye el gasto público en seguridad social				
		Quintil 1 (más pobre)	Quintil 2	Quintil 3	Quintil 4	Quintil 5		Quintil 1 (más pobre)	Quintil 2	Quintil 3	Quintil 4	Quintil 5
Argentina (1991)												
% del ingreso primario	40	90	46	35	21	9	26	73	31	15	9	2
% del ingreso total a/	25	48	32	26	17	2	18	42	24	13	8	2
Bolivia (1990)												
% del ingreso primario	16	49	15	10	6	2	14	42	13	8	5	2
% del ingreso total a/	12	31	13	9	5	2	11	29	11	8	4	2
Brasil (1994)												
% del ingreso primario	57	170	56	35	17	5
% del ingreso total a/	29	63	36	26	15	4
Chile (1994)												
% del ingreso primario	32	72	35	25	19	9	23	68	25	14	6	1
% del ingreso total a/	22	42	26	20	16	8	16	40	20	12	6	1
Colombia (1997)												
% del ingreso primario	38	99	45	26	15	5	26	72	30	17	9	2
% del ingreso total a/	24	50	31	21	13	4	18	42	23	15	8	2
Costa Rica (1986)												
% del ingreso primario	31	70	33	23	16	12	26	66	28	20	11	6
% del ingreso total a/	22	41	25	19	14	11	19	40	22	17	10	6
Ecuador (1994)												
% del ingreso primario	16	39	23	9	5	2
% del ingreso total a/	12	28	19	8	5	2
Uruguay (1993)												
% del ingreso primario	38	71	43	40	20	14	15	39	17	13	6	3
% del ingreso total a/	26	41	30	28	17	13	12	28	14	11	5	3
Promedio simple												
% del ingreso primario	32	76	37	25	15	7	21	57	24	14	7	3
% del ingreso total a/	22	43	26	20	13	7	15	36	19	12	7	2

Fuente: CEPAL, sobre la base de estudios nacionales y de información oficial de los países.

a/ Incluye el gasto social.

Cuadro IV.7

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): NIVEL Y EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL POR SECTORES EN LOS AÑOS NOVENTA a/ (En dólares de 1997)								
País	Educación		Salud y nutrición		Seguridad social		Vivienda, agua, saneamiento y otros	
	Gasto social per cápita en 1998–1999	Variación absoluta respecto de 1990–1991	Gasto social per cápita en 1998–1999	Variación absoluta respecto de 1990–1991	Gasto social per cápita en 1998–1999	Variación absoluta respecto de 1990–1991	Gasto social per cápita en 1998–1999	Variación absoluta respecto de 1990–1991
Promedio simple	137	51	111	28	243	91	49	10
Argentina	383	157	380	109	719	150	206	62
Brasil b/	187	26	163	8	554	203	107	-11
Chile	202	115	145	76	389	154	92	45
Colombia	120	58	104	81	132	72	26	14
Costa Rica	163	48	181	31	216	68	63	1
Guatemala	40	16	22	8	16	4	30	28
Honduras	32	-1	16	-4	0	-1	10	4
México	167	63	93	-26	103	92	40	14
Nicaragua	26	4	20	0	0	0	12	6
Panamá	198	73	223	60	179	24	42	-11
Paraguay	66	44	19	14	46	25	2	-6
Perú	62	34	38	23	80	57	14	11
República Dominicana	57	40	31	16	16	10	31	5
Uruguay	218	88	187	34	1101	511	33	17
Venezuela	140	11	49	-8	94	5	31	-31

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, base de datos sobre gasto social.

a/ Excluye Bolivia y El Salvador. Para estos países sólo se dispone de información a partir de 1995 y 1994, respectivamente.

b/ Estimación del gasto social consolidado. Véase el recuadro IV.1. El promedio 1998–1999 corresponde a la cifra de 1998.



Las familias en América Latina: diagnóstico y políticas públicas

Introducción

El propósito de la agenda social es aportar un diagnóstico sobre temas sociales emergentes en la región para contribuir a la actualización del conocimiento sobre estas materias y a la optimización de las políticas sociales. Se procura, asimismo, detectar las preocupaciones que van surgiendo en esta esfera y difundir las experiencias exitosas. Así, en ediciones anteriores del *Panorama social* se han abordado temas pertinentes a la integración social y a la gobernabilidad de los países de América Latina, con énfasis en aspectos como la seguridad ciudadana, el aumento de la violencia y la producción, tráfico y consumo de drogas (CEPAL, 1999; CEPAL, 2000d).

En la mayoría de los análisis y propuestas de políticas se otorga a la institución familiar un papel central tanto para explicar comportamientos individuales como para poner en marcha medidas vinculadas a temas tan variados como el desempleo, la drogadicción o la violencia. Al mismo tiempo se hace especial hincapié en los cambios experimentados por las estructuras tradicionales de la familia como factores asociados a la desintegración social. Considerando esta doble dimensión, en esta oportunidad se decidió analizar las políticas públicas referidas a las familias.

Habitualmente en el diseño y la ejecución de las políticas sociales tradicionales prima una orientación sectorial y su enfoque se centra en las personas como individuos y no como pertenecientes a una familia.¹ Por lo tanto, no se basan en una visión integral y transversal, lo que en muchos casos lleva a que los temas referidos a las familias continúen tratándose como si correspondieran al ámbito privado. Tal enfoque impide percibir los impactos que ejercen las políticas públicas sobre las familias y sus miembros. Llama la atención, entonces, la contradicción entre la extrema importancia asignada a las familias en los discursos de los gobiernos, las instituciones civiles y religiosas y las personas, y la escasa atención que se les otorga en las políticas públicas.

Desde la perspectiva individual, se deposita una gran confianza en la familia, es la primera institución a la que se recurre en situaciones difíciles o de crisis, y constituye uno de los principales tópicos de conversación. Se ha afirmado así que "la familia conforma un espacio de acción en el que se definen las dimensiones más básicas de la Seguridad Humana: los procesos de reproducción material y de integración social de las personas" (PNUD, 1998, p. 192).

En el presente capítulo se ofrece un diagnóstico de las familias de la región, elaborado sobre la base de información proporcionada por los organismos oficiales encargados de la familia en respuesta a un cuestionario que les hizo llegar la CEPAL (véanse los anexos 1 y 2);² se aborda igualmente el tema de las instituciones dedicadas a la familia y sus diversas formas de dependencia administrativa. Finalmente, se procura determinar si los gobiernos de los países de América Latina se ocupan o no del diseño y ejecución de políticas orientadas a las familias, plano en el que se destacan algunas iniciativas novedosas.

Como es habitual, se incluye también la agenda social internacional, en la que se reseñan las principales reuniones y acuerdos sobre temas sociales en el marco del sistema de las Naciones Unidas. En esta oportunidad está dedicada a la Asamblea del Milenio, celebrada en Nueva York entre el 6 y el 8 de septiembre de 2000, en la que los principales mandatarios del mundo emitieron la Declaración del Milenio.

1 No obstante el hecho de que durante los años sesenta y setenta el modelo estatal centralizado dio gran importancia al fortalecimiento de la familia.

2 Cabe destacar el renovado interés en el tema de la familia no sólo en América Latina, sino también fuera de la región. El *Cambridge Journal of Economics* (Humphries, 1999) le dedicó un número especial y el *Journal of Marriage and the Family* (Milardo, 2000) presentó una evaluación del tema de la familia en Estados Unidos que cubría los últimos 10 años. También *Feminist Economics* (Folbre y Himmelweit, 2000) destinó un número especial a las políticas dirigidas a la familia y a los niños.

A. Diagnóstico de las familias en América Latina: principales cambios

Académicos y diseñadores de políticas concuerdan en que las familias en la región se han visto enfrentadas a cambios muy importantes. Entre los más notables figuran las transformaciones demográficas, el aumento de los hogares con jefatura femenina y la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral. También ha habido modificaciones relacionadas con el ámbito simbólico, que se manifiestan en nuevos modelos de familia y estilos de relación familiar.

Se ha planteado que vivimos en un mundo en el que las tres dimensiones de la definición clásica de familia –la sexualidad, la procreación y la convivencia– han experimentado profundas transformaciones y evolucionado en direcciones divergentes, de lo que ha resultado una creciente multiplicidad de formas de familia y de convivencia (Jelin, 1998). En los estudios se coincide en señalar que la mayoría de los cambios en la estructura familiar son graduales e inciden en ellos el contexto urbano o rural, la clase social y las diversas experiencias por las que han atravesado las sociedades latinoamericanas.

Sin embargo, hay otras transformaciones referidas a los papeles sociales de las mujeres dentro y fuera de la familia que han evolucionado muy dinámicamente: en el ámbito económico atañen en particular al aumento en su participación laboral, y en el familiar, al incremento de los hogares con jefatura femenina.

Algunas de las principales modificaciones demográficas y sociales que muestra la familia son las siguientes (Ariza y Oliveira, 1997; Arriagada, 1998; Jelin, 1998; Salles y Tuirán, 1997):³

1. Cambios demográficos

El tamaño medio de la familia se ha reducido debido a la declinación del número de hijos y al mayor espaciamiento entre ellos. A esto se agrega la disminución de los hogares multigeneracionales y el aumento de los unipersonales, así como el efecto de las migraciones por diversas causas (económicas, conflictos armados y otras).

Entre los años ochenta y noventa, el tamaño promedio de los hogares disminuyó en todos los países de la región. La heterogeneidad de las situaciones naciona-

³ Se ha elaborado un gran número de estudios en que se examina la realidad de las familias en diversos países de América Latina desde los ángulos demográfico, psicológico, sociológico y económico. Baste señalar al respecto que a la quinta Conferencia Iberoamericana sobre Familia (Madrid, 2000), se presentaron 104 ponencias de la región. Sin embargo, hay una importante carencia de estudios comparados sobre el tema.

les obedece al hecho de que se encuentran en distintas etapas de la transición demográfica. Uruguay es el país que registra el menor tamaño promedio por hogar: 3.2 personas en 1999; Guatemala y Honduras, por su parte, se sitúan en el extremo opuesto, con promedios de 4.8 y Nicaragua con 4.9 personas por hogar. Además, el tamaño de los hogares varía ampliamente según los niveles de ingreso. En 1999, la diferencia en-

tre el quintil 1 (más pobre) y el 5 (más rico) era de 1.4 personas en República Dominicana y 1.5 en Costa Rica, en tanto que en Guatemala y México alcanzaba a 2.8 y 2.7 personas, respectivamente (véase el cuadro V.1). En Costa Rica y República Dominicana lo reducido de la diferencia puede deberse a que en ambos países existen patrones culturales más compartidos respecto de la familia.

Cuadro V.1

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TAMAÑO MEDIO DE LOS HOGARES URBANOS, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO a/ ALREDEDOR DE 1987 Y 1999 (Número de personas)					
País	Año	Quintiles de ingreso familiar			
		Total	Quintil 1	Quintil 5	Q1-Q5
Argentina b/	1986	3.5	4.2	2.9	1.3
	1999	3.3	4.7	2.6	2.1
Bolivia c/	1989	4.7	4.9	4.0	0.9
	1999	4.3	5.2	3.4	1.8
Brasil	1987	3.9	4.4	3.2	1.2
	1999	3.6	4.7	2.9	1.8
Chile	1987	4.2	5.0	3.4	1.6
	1998	3.9	4.7	3.1	1.6
Colombia d/	1986	4.6	5.2	3.6	1.6
	1999	4.1	4.8	3.2	1.6
Costa Rica	1988	4.4	5.0	3.5	1.5
	1999	4.0	4.6	3.1	1.5
Ecuador	1990	4.7	5.3	3.7	1.6
	1999	4.4	5.0	3.4	1.6
El Salvador	1997	4.3	5.1	3.4	1.7
Guatemala	1998	4.8	6.3	3.5	2.8
Honduras	1988	5.1	6.0	4.0	2.0
	1999	4.8	5.6	3.7	1.9
México	1984	5.0	6.6	3.5	3.1
	1998	4.1	6.1	3.5	2.6
Nicaragua	1997	4.9	5.6	3.8	1.8
Panamá	1986	4.5	5.6	3.3	2.3
	1999	3.9	4.8	2.9	1.9
Paraguay e/	1986	4.6	5.5	3.7	1.8
	1999	4.3	5.4	3.1	2.3
República Dominicana	1997	4.2	4.7	3.3	1.4
Uruguay	1986	3.4	4.5	2.9	1.6
	1999	3.2	4.6	2.3	2.3
Venezuela f/	1986	5.1	6.1	3.7	2.4
	1999	4.7	5.3	3.7	1.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países y CEPAL, *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe*, 1999 (LC/G.2066-P), Santiago de Chile, 2000. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.00.II.G.1.

a/ Ordenados según ingreso per cápita. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5 a los hogares más ricos.

b/ Corresponde al Gran Buenos Aires.

c/ Incluye ocho capitales de Departamento, más El Alto.

d/ Incluye las ocho ciudades principales.

e/ Incluye el Área Metropolitana.

f/ Total nacional.

2. Nuevos tipos de familias

En América Latina han surgido nuevas configuraciones familiares, tales como familias de parejas sin hijos y hogares sin núcleo, a la vez que continúan aumentando los hogares con jefatura femenina.⁴ Asimismo, al incrementarse la frecuencia de separaciones y divorcios, las familias reconstituidas han aparecido como un nuevo y creciente fenómeno en la región. Sin embargo, las familias nucleares mantienen su predominio en América Latina, tanto en las zonas urbanas como rurales.⁵ La gran diversidad de situaciones que existe, por ejemplo, tras las familias nucleares, apunta a la necesidad de analizar más a fondo la configuración interna de esos hogares. Si bien los hogares nucleares biparentales (que incluyen los reconstituidos) son los más numerosos, es preciso considerar que los hogares nucleares monoparentales –habitualmente con jefatura femenina– están aumentando, al igual que los nucleares sin hijos correspondientes a familias de adultos mayores cuyos hijos han constituido sus propios hogares. Independiente-

mente de su magnitud, la aparición y visibilidad de nuevas formas familiares en los medios de comunicación, como es el caso de familias sin hijos, hogares sin núcleo o unipersonales, modifica el imaginario social sobre la diversidad de tipos de familias existente en la región.

Tal como se indicó al comienzo, la estructura de las familias latinoamericanas varía notablemente según el nivel de los ingresos percibidos. Por ejemplo, constituir un hogar unipersonal requiere recursos económicos de los que no disponen todos los que quisieran vivir solos. En el extremo opuesto hay un mayor porcentaje de familias pobres que son extensas y compuestas. El número de hijos marca la diferencia entre las familias nucleares pertenecientes a los quintiles más pobre y más rico (véase el cuadro V.2). No es posible establecer una causalidad directa y temporal (¿el mayor número de hijos empobrece un hogar o la mayor pobreza induce a tener un mayor número de hijos?), pero existe una correlación importante entre los ingresos del hogar y la estructura familiar.

Cuadro V.2

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): TIPOS DE HOGARES URBANOS, SEGÚN NIVEL DE INGRESO FAMILIAR, 1997 a/											
(En porcentaje del total de hogares)											
País	Total	Tipos de hogares									
		Unipersonal		Nuclear biparental		Nuclear monoparental		Nuclear sin hijos		Extensa y compuesta	
Quintiles de ingreso		1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Argentina b/	100.0	8.4	26.0	46.6	35.2	9.7	8.7	11.7	18.1	23.6	12.0
Bolivia	100.0	4.5	18.7	58.0	42.2	13.9	10.2	2.7	8.0	20.8	20.9
Brasil	100.0	3.2	14.3	53.0	44.7	13.7	8.4	4.9	16.5	25.2	16.0
Chile	100.0	3.2	13.7	54.5	44.0	9.8	9.3	2.3	13.9	30.2	18.9
Colombia	100.0	3.7	13.5	44.8	40.3	12.6	10.6	3.1	12.1	35.8	23.4
Costa Rica	100.0	5.1	13.9	40.8	46.0	17.1	9.2	4.6	13.6	32.4	17.3
Ecuador	100.0	3.6	13.4	50.0	42.8	11.0	7.6	2.2	10.5	33.3	25.8
El Salvador	100.0	3.9	11.7	38.1	40.0	12.6	11.0	2.5	8.8	42.9	28.4
Honduras	100.0	5.1	11.6	37.1	36.5	12.0	8.9	2.8	6.6	43.0	36.5
México	100.0	0.5	16.3	62.5	45.9	6.7	9.7	1.7	14.1	28.7	14.0
Nicaragua	100.0	3.3	10.8	36.3	37.4	16.8	13.6	1.5	7.8	42.0	30.4
Panamá	100.0	4.8	15.7	42.9	36.2	17.5	11.4	3.3	13.8	31.5	22.9
Paraguay	100.0	2.8	17.4	43.7	34.3	8.6	9.0	4.0	12.7	40.9	26.5
República Dominicana	100.0	6.1	16.7	33.5	32.7	16.1	9.7	2.0	11.1	42.4	29.8
Uruguay	100.0	2.7	32.4	48.7	25.5	10.9	8.1	4.4	22.2	33.3	11.8
Venezuela c/	100.0	1.8	9.2	49.0	42.5	11.0	9.8	2.1	10.2	36.1	28.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Ordenados por quintiles según ingreso per cápita. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5 a los hogares más ricos.

b/ Incluye el Gran Buenos Aires.

c/ Total nacional.

4 Los tipos de hogares y familias que se distinguen en este trabajo son: hogares unipersonales (una sola persona); hogares sin núcleo (aquellos donde no existe un núcleo conyugal o una relación padre/madre-hijo/hija, aunque puede haber otras relaciones de parentesco). Entre los tipos de familias se distinguen las nucleares (padre o madre o ambos, con o sin hijos), extensas (padre o madre o ambos, con o sin hijos y otros parientes) y compuestas (padre o madre o ambos, con o sin hijos, con o sin otros parientes y otros no parientes). Las familias pueden ser monoparentales (con sólo un padre, habitualmente la madre) o biparentales (con ambos padres); también pueden tener hijos o no tenerlos.

5 El fenómeno de los hogares reconstituidos o familias recompuestas es difícil de cuantificar por medio de las encuestas de hogares, puesto que en el cuestionario no se pregunta si es la primera unión o una posterior, y no se diferencia entre hijos e hijastros; por lo tanto, estas familias se clasifican como hogares nucleares biparentales.

El número de hogares encabezados por mujeres ha continuado creciendo desde comienzos de los años noventa hasta llegar a representar entre una cuarta y una tercera parte de los hogares, según los países. En 1998, Nicaragua (35%) y en 1999, República Dominicana y Uruguay (31%), registraban las más altas tasas de ho-

gares encabezados por mujeres. Al mismo tiempo persiste la tendencia a que en estos hogares la incidencia de la pobreza sea mayor: en Costa Rica y República Dominicana más de la mitad de los hogares indigentes tenían jefatura femenina (véase el cuadro V.3).

Cuadro V.3

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): MAGNITUD DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN HOGARES ENCABEZADOS POR MUJERES, ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990 Y 1999 (En porcentajes)					
País	Año	Hogares encabezados por mujeres según estratos de pobreza			
		Total hogares	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres
Argentina	1990	21	26	12	22
	1999	27	37	28	27
Bolivia	1989	17	23	16	15
	1999	21	24	19	21
Brasil	1990	20	24	23	18
	1999	25	24	24	26
Chile	1990	21	25	20	22
	1998	24	28	23	24
Colombia	1991	24	28	22	24
	1999	29	31	27	29
Costa Rica	1990	23	36	25	21
	1999	28	56	39	25
Ecuador	1990	17	22	16	15
	1999	20	23	21	18
El Salvador	1995	31	38	31	29
	1997	31	36	36	29
Guatemala	1987	20	23	19	20
	1998	24	24	22	25
Honduras	1990	27	35	21	21
	1999	30	32	30	28
México	1989	16	14	14	17
	1998	19	18	16	20
Nicaragua	1993	35	40	34	32
	1998	35	39	36	30
Panamá	1991	26	34	29	24
	1999	27	45	28	26
Paraguay (Asunción)	1990	20	21	23	18
	1999	27	30	23	29
R. Dominicana	1997	31	50	31	29
Uruguay	1990	25	28	22	26
	1999	31	29	26	31
Venezuela	1990	22	40	25	18
	1999 a/	27	34	27	25

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Total nacional.

3. Transformación de los papeles sociales de las mujeres

La incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo ha modificado los patrones habituales de funcionamiento de los hogares latinoamericanos. Para los países de la región en su conjunto, las tasas de actividad femenina subieron de 39% en 1990 a 44.7% en 1998 (Abramo, Valenzuela y Pollack, 2000), si bien con grandes diferencias entre países y según zona de residencia, edad y nivel educativo. Aun cuando las tasas de actividad más altas corresponden a las mujeres con mayor educación, las crecientes dificultades económicas que acosan a los hogares latinoamericanos han impulsado también una creciente participación laboral de las mujeres menos educadas; se aprecia así que aumenta el número de personas que aportan ingresos al hogar (mujeres, jóvenes y niños), poniendo fin al sistema del aportante único (breadwinner system) en los hogares más expuestos a la vulnerabilidad social.

Si bien los cambios demográficos han sido lentos, la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha continuado a un ritmo ascendente. En diversos estudios se ha mostrado que en el último decenio han sido las mujeres en las etapas del ciclo reproductivo familiar, es decir, cuando tienen a su cargo hijos pequeños, las que se han venido incorporando en mayor proporción. Asimismo, el aporte económico de las mujeres que trabajan contribuye a que una proporción importante de los hogares situados sobre la línea de pobreza puedan mantenerse en esa posición (CEPAL, 1995; Arriagada, 1998).

El aporte de un ingreso adicional establece la diferencia entre los hogares del quintil más pobre y el más rico (véase el cuadro V.4). Los hogares con más de un aportante económico corresponden con mayor frecuencia a las familias en que ambos padres están

presentes, así como a las extensas y las compuestas. Por sus características, la proporción de hogares con más de un aportante es menor entre las familias monoparentales, ya que ese segundo ingreso es el que generan los hijos que se incorporan al mercado laboral. Asimismo, en la década de 1990 en casi todos los países se puede observar un aumento de los hogares con más de un aportante económico, tanto en los quintiles más pobres como menos pobres.

La participación femenina en el ámbito público origina nuevas percepciones de los papeles que cumplen las mujeres y les permite una mayor autonomía con respecto a sus familias. Este cambio cultural se expresa en la postergación de la primera unión o del nacimiento del primer hijo, en una fecundidad más baja, en los conflictos que surgen en las parejas de doble carrera⁶ y en la necesidad de equilibrar el trabajo doméstico con el trabajo remunerado.

Los acelerados cambios sociales, económicos y culturales inciden en las relaciones internas de las familias, las mentalidades y las prácticas sociales, al coexistir lo nuevo (la autonomía, la reducción de la maternidad y la independencia económica femenina) con lo antiguo (dependencia subjetiva, mantenimiento de la división del trabajo doméstico según género).

En el plano social persisten formas de representación e imágenes culturales de dominación, así como normas sustentadas en esas imágenes, que ayudan a comprender la falta de concordancia entre los discursos tradicionales y las nuevas prácticas de las familias. Ha ido surgiendo una definición diferente de los roles conyugales en la que el principio de igualdad se manifiesta lentamente y se relaciona con el aporte económico de mujeres e hijos al hogar. Hay nuevas relaciones paterno-filiales que reflejan un aumento de los derechos de los niños y una pérdida de importancia de las relaciones de jerarquía y sumisión. También se observan, aunque aún incipientes, procesos

6 Las parejas de doble carrera son las uniones conyugales en las que marido y mujer ejercen una actividad profesional que exige niveles comparables de calificación y responsabilidad. En esta categoría se distinguen cuatro tipos: las parejas conciliadoras, en que cada cónyuge está comprometido en una esfera diferente, la profesional o la familiar; las aliadas, cuando ambos están comprometidos en una misma esfera y no exigen mucha perfección en la otra; las adversarias, en las que uno está muy comprometido con el trabajo, pero desearía que el otro se comprometiera más con el hogar; y las acróbatas, cuando ambos están comprometidos con el trabajo y con el hogar (Viveros, 1997).

de individuación, es decir, de afirmación del derecho individual por sobre el familiar y de la realización personal por sobre los intereses familiares. En estos procesos de cambio cultural, las imágenes globalizadas de tipos de familias distintos han contribuido a

impulsar los procesos de individuación y la autonomía, así como los cambios en los modelos de sexualidad, especialmente adolescente, y el énfasis en la cultura de "pares" (identificación de los jóvenes con otros jóvenes).

Cuadro V.4

AMÉRICA LATINA (10 PAÍSES): FAMILIAS URBANAS CON MÁS DE UN APORTANTE DE INGRESOS LABORALES POR TIPOS DE HOGAR EN QUINTILES SELECCIONADOS, 1990–1999					
País Quintiles de ingreso	Año	Total hogares		Nuclear biparental	
		1	5	1	5
Argentina a/	1990	12.4	34.3	14.5	44.8
	1999	18.8	51.7	19.4	76.8
Bolivia	1989	14.5	60.1	16.3	68.0
	1999	28.4	50.3	27.4	65.6
Brasil	1990	30.3	55.3	31.1	67.3
	1999	28.2	48.1	27.0	67.8
Chile	1990	30.3	55.3	31.1	67.3
	1998	17.3	53.2	12.0	70.9
Colombia	1991	30.3	55.3	31.1	67.3
	1999	25.3	56.9	20.5	72.6
Costa Rica	1990	17.8	56.2	14.2	69.9
	1999	22.8	59.2	22.0	73.7
Ecuador	1990	20.6	60.3	18.5	72.0
	1999	24.8	57.2	22.0	71.9
México	1989	32.2	43.1	24.8	48.6
	1998	35.0	46.1	33.8	54.6
Paraguay b/	1990	36.0	66.3	24.3	79.0
	1999	35.9	61.4	32.2	80.1
Uruguay	1990	31.0	35.7	33.6	67.4
	1999	37.1	38.2	38.1	78.7

Fuente: CEPAL–DDS, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Gran Buenos Aires.

b/ Asunción y Departamento Central.

B. La familia y el Estado

1. Los organismos encargados de la familia

En América Latina la institucionalidad social encargada de diseñar y ejecutar las políticas referidas a las familias es sumamente variada: desde ministerios de la familia, pasando por secretarías, subsecretarías y consejos adscritos a diversas instancias, hasta la ausencia de una institución responsable. También existen diferencias en cuanto a la concepción de familia entre las entidades gubernamentales encargadas del tema y el resto de la institucionalidad estatal.

Los organismos gubernamentales encargados de los temas que atañen a la familia dependen de una variada gama de instituciones. Actualmente, en muy pocos países se cuenta con un ministerio de la familia (Nicaragua es uno de ellos); en otros el tema ha sido integrado a los de mujer/género, niñez y juventud (como en Panamá, donde existe un Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia); en algunos casos se ha creado una secretaría o servicio nacional de la mujer que depende directamente de la Presidencia de la República (Chile, Paraguay, República Dominicana), o bien la entidad está adscrita al ministerio de desarrollo social (Argentina, Bolivia), o a instancias sectoriales, como los ministerios de educación y cultura (Uruguay), o de salud (México⁷ y Colombia). Existen asimismo algunas instituciones dependientes de la Primera Dama y otras de carácter autónomo o semiautónomo (Costa Rica, Cuba) (véase el cuadro 1 del anexo).

Cabe mencionar algunos aspectos importantes del funcionamiento de las oficinas encargadas de los temas referidos a la familia. En primer lugar, su ubicación en el organigrama es determinada por la relevancia que se les otorga y siempre existe una desproporción entre la magnitud de las tareas establecidas y los recursos que se les asignan para llevarlas a cabo; por otra parte, los ministerios y oficinas encargados del tema y el resto de los funcionarios gubernamentales sustentan diferentes concepciones de desarrollo social, familia y género (especialmente respecto de estos dos últimos), lo que va distanciando los discursos de las prácticas burocráticas; esto, a su vez, dificulta la puesta en marcha de políticas y programas. Además, se perciben diferencias entre los enfoques tradicionales del tema (instancias sectoriales, como los ministerios de salud y vivienda, por ejemplo), y los menos tradicionales (entidades que se ocupan de cuestiones de género y de familia).

⁷ Con posterioridad a la encuesta realizada por la CEPAL, el Gobierno de México trasladó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) desde el sector de la salud a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

En cuanto a la articulación de esfuerzos, la mayoría de los organismos encargados de las políticas centradas en las familias colaboran con los demás ministerios sociales, principalmente con los de salud, educación, vivienda y trabajo. También se relacionan con los ministerios de justicia y, en menor grado, con los de economía, hacienda e interior. En todos los países coordinan sus esfuerzos con organizaciones no gubernamentales (en especial aquellas dedicadas a combatir la violencia intrafamiliar o que trabajan en las áreas de educación y capacitación), así como con organismos internacionales de las Naciones Unidas y de cooperación en general. Entre las ventajas de esta coordinación, las entidades pertinentes a la temática de la familia destacan la optimización del uso de los recursos, el fortalecimiento de la legitimidad de su trabajo y la mayor cobertura, enriquecimiento y sostenibilidad de sus acciones. Entre las desventajas señalan el aumento de la burocracia, las dificultades para llegar a consensos y la dualidad de protagonismo con otros órganos estatales, aspectos que, en conjunto, obstaculizan la toma de decisiones oportunas. Cabe mencionar que, en ciertos casos, hay hasta cuatro instituciones que se ocupan del tema de la familia, muchas veces en competencia y no siempre de manera coordinada: la entidad encargada de la problemática mujer/género, las instituciones pertinentes a la familia, las oficinas de las primeras damas y, más recientemente, los órganos locales/municipales que llevan a cabo programas en esta área.

Es importante destacar la asociación, explícita en algunos casos e implícita en otros, de los temas atinentes a la familia con los de mujer o género. En varios países, la entidad encargada de la familia también se ocupa de lo relacionado con mujeres y niños, con lo cual se consolida un modelo de familia en el que el binomio madre-hija o hijo se percibe como central, ignorando la presencia paterna. Si bien aproximadamente una cuarta parte de los hogares de la región tienen jefatura femenina (en la mayoría de los casos con ausencia del padre), dicho modelo no guarda correspondencia con el diseño de otras políticas de carácter sectorial que se dirigen principalmente a los varones (padres o jefes de familia). Habitualmente, se enfoca a la familia a partir de sus miembros y no

como institución; esto es aún más llamativo si se considera que familia y mujer son vistas de manera casi análoga. Además, cuando los temas de familia se vinculan a los de género surgen enfoques más actualizados desde la perspectiva de los derechos y con énfasis en la introducción de modificaciones legales.

En suma, es necesario recalcar el contraste entre la sobrevaloración de las mujeres como "encargadas" de la familia y su notoria ausencia en el diseño de políticas y programas que refuercen sus funciones. Esta situación puede ser muy conflictiva si se considera que para las mujeres el costo de oportunidad del trabajo destinado al cuidado familiar es cada vez mayor. Por consiguiente, el progresivo ingreso de las mujeres –especialmente las casadas y con hijos– al mercado laboral exige políticas públicas en que la economía del cuidado se considere como un tema central. Además, esta creciente incorporación de las mujeres al mundo público contribuye a que emprendan nuevos proyectos individuales, con mayor independencia de sus familias.

2. La percepción de las autoridades de los cambios y problemas que enfrentan las familias en América Latina

a. Los principales cambios

Entre los principales cambios que las autoridades gubernamentales dedicadas a las familias perciben en la región figura la transformación del papel que las mujeres desempeñan en el hogar, sea por su ingreso al mercado laboral o por el aumento de los hogares con jefatura femenina. También se destacan los cambios demográficos y los originados por procesos culturales y de modernización. En sus respuestas a estas situaciones, los énfasis acusan las diferencias entre las visiones más tradicionales o más modernas de la familia.

Las autoridades encargadas de los temas relativos a la familia tienen diferentes percepciones de los cam-

bios que ésta ha experimentado en la región (véase el cuadro V.5).

Esto puede apreciarse al establecer tres categorías: i) los cambios referidos al papel de la mujer en la familia, ya sea por el aumento de las mujeres jefas de hogar (mencionado en las respuestas de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana) o por su incorporación al mercado laboral (Bolivia, Cuba, Chile, México y Uruguay); ii) las modificaciones de la composición y el tamaño de la familia debido al descenso de la tasa de natalidad y las migraciones, a la aparición de nuevas formas familiares, al aumento de las familias monoparentales, al paso de las familias extensas a las nucleares y al incremento de las uniones consensuales, así como de las separaciones y divorcios (Bolivia, Cuba, El Salvador, Perú, Uruguay); y iii) los fenómenos relacionados con la dimensión cultural y los procesos de modernización, como los cambios en los sistemas de valores familiares, la desintegración de los vínculos familiares, el retroceso del predominio de la religión frente a la creciente influencia de los medios de comunicación y la incertidumbre

que esto genera (Argentina, Colombia, Chile y Perú).

El aumento de la proporción de hogares con jefatura femenina, así como la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, han inducido importantes modificaciones valóricas y de comportamiento en el interior de la familia al flexibilizar los patrones y modelos de las relaciones familiares y de género, fortalecer la autonomía de las mujeres y modificar las identidades masculina y femenina. Otro de los factores señalados es el descenso del peso de la religión y la progresiva influencia de los medios de comunicación en todos los hogares de América Latina, fenómenos estrechamente asociados al avance de la modernidad en la región. Sin embargo, la carencia de estudios sobre los cambios en la dinámica interna de las familias no permite ahondar en este proceso. Según algunos estudios de caso, las modificaciones en el interior de la familia han sido muy lentas y, muchas veces, se han traducido en un aumento tanto de la violencia contra las mujeres, como de la carga de trabajo que éstas deben asumir para compatibilizar su actividad remunerada con las tareas domésticas.

Cuadro V.5

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): LOS TRES PRINCIPALES CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR LAS FAMILIAS SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS ORGANISMOS OFICIALES			
País	Cambio más importante	Segundo cambio más importante	Tercer cambio más importante
Argentina	Falta de trabajo estable o temporario. Alto porcentaje de mujeres jefas de hogar.	Desintegración de vínculos.	Dificultades para acceder a una vivienda propia o alquilada.
Bolivia	Incremento de la violencia intrafamiliar.	Inserción de todos los miembros del hogar en el mercado laboral.	Migración de las familias.
Brasil	Aumento de las mujeres jefas de hogar.	Aumento de las familias monoparentales.	Caída de la tasa de natalidad.
Colombia	Cambios en la estructura: incremento de las separaciones, uniones libres y uniones sucesivas, aumento de las mujeres jefas de hogar.	Cambios en el comportamiento sexo-reproductivo: descenso de tasas de fecundidad y natalidad, inicio de relaciones sexuales a edades más tempranas.	Cambios en el sistema de valores tradicionales y en las relaciones de género (mujer-proveedora). Decreciente influencia religiosa y aumento de la de los medios de comunicación.
Costa Rica	Aumento de las mujeres jefas de hogar.	Aumento de las brechas entre los hogares pobres y los ricos.	Cambios en la estructura familiar.

(continúa)

Cuadro V.5 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): LOS TRES PRINCIPALES CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR LAS FAMILIAS SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS ORGANISMOS OFICIALES			
País	Cambio más importante	Segundo cambio más importante	Tercer cambio más importante
Cuba	Incorporación de la mujer al trabajo asalariado.	Cambios en la composición y tamaño de las familias: disminución del tamaño promedio, aumento de núcleos unipersonales y de las mujeres jefas de hogar.	Rejuvenecimiento de la nupcialidad, aumento de uniones consensuales, papel más gravitante de los adultos mayores en actividades económicas productivas, en la socialización de las nuevas generaciones y en la vida familiar.
Chile	Masiva incorporación de las mujeres al trabajo remunerado con tensiones en la asignación tradicional de roles.	Diversificación de las estructuras familiares.	Las familias asumen nuevas funciones en un contexto social lleno de incertidumbres.
Ecuador	Ampliación del concepto de familia en la Constitución de 1998.	Aumento de las mujeres jefas de hogar.	La mayoría de los hogares con jefatura femenina carecen de cónyuge.
El Salvador	Demográfico.	Migraciones.	Paso de familias extensas a nucleares.
México	Incorporación de las madres de familia al mercado de trabajo.	Flexibilización de los patrones y modelos de relación familiar.	
Panamá	Disminución del número de hijos por familia.	Paso de familias extendidas a nucleares o uniparentales.	Aumento de las mujeres jefas de hogar.
Paraguay	Reconocimiento de los derechos de la familia en la Constitución de 1992.	Incremento de las mujeres jefas de hogar.	
Perú	Rol más relevante de la mujer en la jefatura y conducción de los hogares.	Cambio en la conceptualización y asunción de valores morales en la familia.	Institucionalización de las uniones consensuales.
República Dominicana	Incremento de las mujeres jefas de hogar.	Incremento en la proporción de madres adolescentes.	Descenso de la tasa de fecundidad.
Uruguay	Inserción de la mujer en el mercado de trabajo y proceso de autonomización.	Paso de la familia nuclear a la monoparental.	Descenso de la fecundidad por cambios vinculados a la modernización.

Fuente: Sobre la base de CEPAL, *Encuesta sobre programas dirigidos hacia la familia en América Latina*, Santiago de Chile, División de Desarrollo Social, 2000.

b. Los principales problemas

Las autoridades competentes concuerdan en que los principales problemas que afectan a la familia en América Latina son la violencia intrafamiliar, el desempleo y su desintegración.

Hay consenso entre los encargados del tema de la familia respecto de los principales problemas que ésta enfrenta. Todos coinciden en la identificación de la

violencia intrafamiliar como uno de los más graves (con excepción de Chile y Cuba). En segundo lugar, las entidades de 12 de los 18 países encuestados mencionan el desempleo, que se asocia también a la pobreza, la crisis económica y el deterioro de las condiciones materiales de vida de las familias, junto con la ausencia de servicios de salud y educación. Finalmente, se señala la importancia de la desintegración familiar (Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, México y Panamá) (véase el cuadro V.6).

En los años noventa, uno de los principales logros de

los movimientos de las mujeres fue el reconocimiento de la violencia intrafamiliar como problema público relevante, lo que propició la creación de mecanismos legales para incorporarlo en la agenda institucional (Araujo, Guzmán y Mauro, 2000). Consecuentemente, en la mayoría de los países se ha legislado sobre el tema, aunque cabe resaltar que se ha puesto un menor énfasis en los esquemas de prevención de la violencia intrafamiliar, aspecto que se analizará en la próxima sección.

El desempleo se ha acentuado durante la última década y afecta con mayor fuerza a sectores específicos de la población; las autoridades lo han identificado como uno de los principales problemas que sufren las familias latinoamericanas.

Aun cuando en un número importante de países se menciona la desintegración familiar como problema, curiosamente no se especifica a qué se está haciendo referencia con esta expresión. Muchas veces pareciera relacionarse con el aumento de los divorcios, aunque en otros casos se vincula a la asunción de nuevas funciones en el seno de las familias. En otras respuestas podría aludirse a la falta de comunicación intrafamiliar. Vale la pena reiterar que los discursos sobre estos temas muestran una gran diversidad. Un ejemplo emblemático puede ser el del debate en torno de la educación parvularia, caso en el que el énfasis se desplaza desde la necesidad de ampliar su cobertura con recursos estatales hasta la consideración de la madre como única cuidadora adecuada de los niños pequeños.

El acceso de las mujeres al mercado laboral ha significado para ellas una sobrecarga de trabajo, ya que las tareas domésticas no han sido redistribuidas. En algunos casos, la consecuencia ha sido la incorporación de las hijas mayores a las labores de la casa y al cuidado de sus hermanos menores. Asimismo, ha dado lugar a un replanteamiento de los roles tradicionales

de la mujer, lo que no ha ocurrido con los roles masculinos. Como resultado se generan tensiones provocadas por la coexistencia de dos lógicas, una tradicional, fuertemente sexista y patriarcal, que está siendo cuestionada, con una nueva lógica de democratización y equidad de género, todavía muy incipiente. Se podría pensar que, hasta cierto punto, estas tensiones influyen en el aumento de la violencia intrafamiliar, ya que muchos hombres se sienten cuestionados y atacados en un ámbito en el que anteriormente ejercían, y en muchos casos aún ejercen, un poder indiscutible; consideran así que los nuevos papeles sociales de las mujeres socavan sus identidades masculinas.

La violencia, pero aún más los problemas estructurales de pobreza, desempleo y difícil acceso a los servicios básicos de vivienda, salud y educación, se expresan en lo que se ha caracterizado como la desintegración familiar, concepto que se aplica a varias situaciones: hogares en situación de extrema pobreza con jefatura femenina por ausencia de padres, niños en el mercado laboral en lugar de estar en el sistema educativo, niños viviendo en las calles, aumento del consumo de drogas y el alcoholismo e incremento de la violencia intrafamiliar.

La percepción de los problemas que enfrentan las familias, así como la evaluación de sus principales transformaciones, permite identificar, a grandes rasgos, polos de modernidad y tradicionalismo en los enfoques con que se aborda esta problemática. Es así que si el énfasis se pone en los derechos, se trata de una visión más ligada a la búsqueda de igualdad y reconocimiento; si lo que se resalta es la pobreza y sus manifestaciones, la tendencia apunta a la búsqueda de políticas y programas tradicionales, de carácter más asistencial. Sin embargo, el énfasis en los derechos, aun cuando es necesario, por sí solo no basta para mejorar la situación de muchas familias con carencias en América Latina.

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): LOS TRES PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS FAMILIAS SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS ORGANISMOS OFICIALES			
País	Primer problema	Segundo problema	Tercer problema
Argentina	Desempleo, necesidades económicas severas.	Exclusión de los sistemas de cobertura médica. Imposibilidad de mantener una dieta adecuada. Aparición de enfermedades que se relacionan con necesidades básicas insatisfechas (NBI).	Deterioro de los vínculos, violencia.
Bolivia	Crisis económica y pobreza.	Violencia intrafamiliar.	Desintegración familiar.
Brasil	Violencia social, desempleo y desigualdad social.	Violencia intrafamiliar.	Persistencia de patrones sexistas.
Brasil	Desempleo.	Violencia intrafamiliar.	Muerte de hijos hombres y jóvenes debido a la violencia urbana.
Colombia	Disminución del bienestar y deterioro de calidad de vida por empobrecimiento, desempleo.	Violencia intrafamiliar, violencia cotidiana, violencia social y política que provoca migraciones en zonas de conflicto.	Debilitamiento de lazos y vínculos familiares y sociales.
Costa Rica (sin orden de prioridades)	Violencia intrafamiliar.	Aumento de las mujeres jefas de hogares pobres.	Aumento del número de nacimientos fuera del matrimonio.
Cuba	Deterioro de algunas condiciones materiales de vida.	Problemas en el funcionamiento familiar. Sobrecarga de trabajo para la mujer, incumplimiento de las responsabilidades paternales. Modelos sexistas.	Necesidad de mayor orientación y preparación de los jóvenes para las relaciones de pareja y la vida familiar. Imagen no realista del matrimonio que lleva al divorcio.
Chile	Falta de infraestructura de apoyo para sus funciones y exigencia excesiva de la sociedad.	Tensiones producto de las nuevas funciones y el necesario ajuste de los roles de los miembros de la familia.	Pobreza que agudiza los dos primeros problemas.
Ecuador	Falta de trabajo remunerado. Alto desempleo.	Falta de dinero y carestía de los alimentos.	Violencia intrafamiliar.
El Salvador	Pobreza y falta de acceso a los servicios.	Falta de comunicación y desintegración familiar.	Violencia intrafamiliar e inseguridad ciudadana.
México	Pobreza y marginación.	Desintegración familiar.	Violencia y maltrato.
Panamá	Desintegración familiar.	Violencia intrafamiliar.	Desempleo.
Paraguay	Desempleo o empleo informal mal remunerado.	Falta de promoción y concientización respecto de la maternidad y paternidad responsables.	Violencia intrafamiliar y estructural.
Perú	Violencia intrafamiliar, dirigida principalmente contra la mujer y los niños.	Bajos niveles de ingreso económico.	Incremento del consumo de drogas y alcohol, principalmente entre adolescentes y jóvenes.
República Dominicana	Elevado desempleo.	Violencia intrafamiliar.	Precariedad de los servicios públicos.
Uruguay	Violencia en el hogar.	Embarazo adolescente.	Desocupación de los diferentes integrantes de la familia.

Fuente: sobre la base de CEPAL, *Encuesta sobre programas dirigidos hacia la familia en América Latina*, Santiago de Chile, División de Desarrollo Social, 2000.

C. Las políticas y los programas dirigidos a las familias

Al comenzar este nuevo siglo, las políticas dirigidas a las familias aún carecen de una definición debidamente específica, de un campo bien delimitado y de una legitimidad evidente. Su diseño enfrenta diversos escollos, en particular las tensiones entre intereses familiares y personales, así como la dificultad para equilibrar la autonomía y la libertad individuales con las responsabilidades familiares. El énfasis en la dimensión legal de los programas apuntaría a una nueva visión de familia como instancia de derechos.

1. Dificultades para el diseño de políticas familiares

En la mayoría de los análisis sobre la familia se parte del supuesto de que existe. Sin embargo, no se cuenta con una definición o una concepción común de la familia, sea como institución, sistema o grupo de actores. Más aún, es difícil encontrar una definición explícita de familia; la mayoría de las veces se resaltan más bien su complejidad, heterogeneidad y carácter cambiante (Gobierno de Colombia, 1999). Al proponer a la familia como objeto de políticas en sociedades en transición y cambio se han señalado algunos ejes de tensión en su interior (SERNAM, 2000):

- Tensión entre el sujeto como individuo y el sujeto como componente de la familia, teniendo en cuenta la oposición de intereses en diversas esferas. La noción de sujeto que acompaña a la modernidad surge como búsqueda de satisfacción de ciertos derechos y ampliación de los papeles históricos atribuidos a las identidades femenina y masculina.
- La tensión entre la familia considerada como una institución o en términos valóricos que definen un tipo de familia como el "ideal" al que deben aproximarse todas las familias reales. Si se concibe a la familia como perteneciente al mundo de las emociones, el altruismo y la solidaridad se tiende a descuidar el papel que corresponde al Estado en la generación de los espacios necesarios para que la familia pueda efectivamente hacer realidad esos valores.
- La tensión entre la autonomía y la libertad de las personas, que como sujetos plantean crecientes demandas, y las exigencias que impone la familia.
- La disyuntiva entre los derechos individuales y los derechos de la familia, cuya resolución hasta hace poco favorecía a la familia, pero que en la actualidad tiende a priorizar al individuo.
- La tensión entre el mundo público y el privado. En algunas concepciones, la familia aparece como el paradigma de lo privado, lo que supone que las políticas no deberían interferir en su ámbito.

PANAMÁ: CRITERIOS ORIENTADORES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA FAMILIA

Subsidiariedad y participación: el Estado facilita las acciones de las organizaciones intermedias (educativas, de salud, culturales), a fin de fortalecer la capacidad de las familias para solucionar sus problemas.

Universalidad: los derechos y deberes son aplicables a todas las familias, sin distinción de clase, credo, tipo, sitio de residencia, sexo o jefatura.

Integralidad: las necesidades de las familias y sus miembros deben considerarse integralmente.

Unidad familiar: corresponde al Estado promover la estabilidad de la familia y su cohesión mediante la oferta de servicios que garanticen el disfrute de una vida en común.

Fuente: Ruby Moscoso de Young, "Incidencia de la globalización en las familias. Las políticas públicas para promoción familiar en Panamá: avances y dificultades", documento presentado en la Quinta Conferencia Iberoamericana sobre Familia (Madrid, 19 al 22 de septiembre de 2000).

Es frecuente que los debates sobre política familiar partan por la discusión del concepto propiamente tal, dado que todas las políticas públicas inciden, directa o indirectamente, en las familias (Meil, 1995). Las políticas referidas a la familia pueden caracterizarse como el conjunto de medidas o instrumentos de política pública cuyo objetivo es fortalecer las funciones sociales que cumplen las familias. El carácter de estas medidas puede ser explícito o implícito (Jelin, 1994).

Si lo que se persigue es promover la equidad y disminuir las desigualdades sociales, se requiere una intervención activa de instituciones extrafamiliares compensadoras y transformadoras. Esta intervención supone buscar la ampliación de las garantías públicas relacionadas con los derechos de la ciudadanía social, lo que significa aplicar una política igualitaria y universalista (Jelin, 1998). No obstante, también es preciso llevar a cabo acciones centradas en la población en riesgo, las que necesariamente deben tener un carácter selectivo.

En esa perspectiva, los criterios orientadores de las políticas referidas a la familia tienen que contemplar una cuidadosa combinación de universalidad, participación y subsidiariedad, como se ha planteado en el caso de Panamá (véase el recuadro V.1).

Las familias, como agentes y beneficiarias, son importantes en el diseño de políticas públicas por las siguientes razones:

- Las relaciones intrafamiliares pueden generar externalidades positivas o negativas para sus miembros;
- Las características de las familias son utilizables como criterios de focalización;
- Las familias pueden ser consideradas en las etapas de concepción, ejecución y evaluación de programas;
- Las políticas sociales pueden afectar a las formas de organización familiar o verse afectadas por ellas (De Souza, 2000).

2 Ausencia de políticas y escasez de programas y proyectos referidos a la familia

Básicamente, las intervenciones dirigidas a las familias pueden ser de dos tipos: las legales y las económicas o compensatorias. En la mayoría de los países de la región, más que políticas familiares explícitas, existen intervenciones dispersas y no coordinadas mediante programas y proyectos en materia de salud, educación, combate contra la pobreza y prevención y erradicación de la violencia, entre muchos otros objetivos.

Como muchas de las instituciones públicas encargadas de las políticas familiares⁸ combinan la temática de la familia con la de género, en gran parte de los países de América Latina las políticas familiares, cuando son innovadoras, se centran principalmente en las mujeres (combate contra la violencia intrafamiliar), y cuando siguen en la línea de la asistencia social a grupos "vulnerables", priorizan a los niños y adolescentes en riesgo (desayunos escolares, cocinas populares, adopción de menores). Es importante resaltar que en los enfoques tanto de las instituciones gubernamentales como de las organizaciones de la sociedad civil hay diversas mezclas de modernidad y tradicionalismo. Es así que en el debate sobre la violencia sexual y el maltrato intrafamiliar es posible encontrar posiciones que bajan el perfil del problema para no erosionar la "institución familiar", encubriendo las desigualdades que se dan en el seno de las familias, así como otros enfoques más modernos que, por el contrario, visualizan a la familia como el espacio del afecto, la protección y la confianza, en el cual deben primar criterios democráticos.

A partir de los años noventa, las medidas más difundidas para enfrentar la violencia intrafamiliar en la región han sido las legislativas, que tienden a controlar y castigar estos comportamientos; las propuestas para la prevención de la violencia por la vía educativa han recibido menos atención (Arriagada, 1998). También en el ámbito del derecho de familia se han introducido cambios legislativos que buscan proteger a los hijos. Así, en Chile, se promulgó finalmente la ley sobre filiación, que elimina las diferencias entre hijos naturales, legítimos e ilegítimos, igualando sus derechos a beneficios; sin embargo, éste sigue siendo el único país latinoamericano que no cuenta con una ley de divorcio con disolución de vínculo.

Si bien las políticas familiares se focalizan en algunos de sus miembros, habitualmente las mujeres y los niños, no son explícitas respecto del cuidado de los niños ni lo apoyan de manera integral. Desde esa perspectiva, pueden asimilarse al modelo español de cuidado infantil (véase el recuadro V.2).

8 Se entiende aquí por políticas familiares las acciones referidas a: i) los aspectos legales que regulan la familia, de acuerdo con las legislaciones nacionales; ii) sus formas de constitución, desarrollo y disolución: edad al unirse la pareja, formalización de las uniones, número de hijos, estabilidad de la unión, etapa del ciclo vital y otras; iii) sus relaciones internas: marido-mujer; padres-hijos, hermanos entre sí, familia nuclear-red de parentesco, formas de socialización, distribución del poder en el interior de la familia, comunicación y otras; iv) sus relaciones externas en cuanto grupo y los distintos aspectos que inciden en su bienestar, como ingreso, vivienda, servicios de infraestructura, acceso a servicios de salud, educación y seguridad social, entre otros.

CUIDADO DE LOS NIÑOS: TRES MODELOS EUROPEOS

Las grandes tendencias de las políticas sociales centradas en la familia y el cuidado de los niños pueden esquematizarse en los enfoques aplicados por tres países europeos: Suecia, España y Alemania.

La política sueca es considerada como "amistosa" con las madres (*woman-friendly*), ya que su propósito explícito es ayudar a conciliar las responsabilidades familiares con las laborales. En ese marco, las madres (incluidas las madres solteras) son consideradas como trabajadoras y se les ofrece un sistema público de cuidado infantil, de alta calidad y financiado con impuestos en alrededor de un 90%.

En Alemania, la política tiende a procurar que las madres se especialicen en el cuidado de la familia, para lo cual subsidia a las amas de casa que permanecen en el hogar, bajo el supuesto de que los niños serán mejor cuidados en su casa y por uno de sus padres. El mecanismo aplicado consiste en dividir por dos el ingreso familiar de ambos esposos y cobrar a uno de ellos los impuestos correspondientes a la mitad de dicho ingreso (*Ehegattensplitting*); esto beneficia a aquellos matrimonios en que uno de los miembros gana considerablemente más que el otro.

La política aplicada en España ignora el problema y ofrece escaso apoyo público para el cuidado infantil, que sigue siendo un problema del que deben ocuparse las propias familias. Los niños quedan a cargo de miembros de la familia extendida (principalmente las abuelas), o son cuidados de manera informal por amigas o vecinas. El Estado financia sólo el 2% del cuidado de la población infantil entre 0 y 3 años, porcentaje que resulta el más bajo de Europa. El apoyo público es sustancialmente mayor (alrededor de 84%) para el cuidado de los niños entre los 3 y 6 años de edad.

Fuente: Nancy Folbre y Susan Himmelweit (comps.), "Children and family policy: a feminist issue", *Feminist Economics: A Special Issue on Children and Family Policy*, vol. 6, N° 1, marzo de 2000.

La política familiar (en la medida en que existe) se ocupa menos de la familia que de los derechos y responsabilidades de sus miembros individuales. Más específicamente, en la mayoría de los países se hace hincapié en la formación y disolución del matrimonio, las obligaciones de los padres y los derechos de los niños (Bruce, 1998). En general, el objetivo preferente de las políticas dirigidas a las familias es normar sus relaciones internas, así como sus formas de constitución, desarrollo y disolución. Menor es el avance en cuanto al diseño y la ejecución de políticas que consideren las relaciones externas de las familias y los factores que determinan sus circunstancias, como ingreso, vivienda, servicios de infraestruc-

tura, acceso a servicios de salud, educación y seguridad social.

En este panorama se observa que, a menudo, los programas quedan circunscritos a acciones antipobreza, que generalmente son intervenciones microsociales, de corto plazo, asistencialistas, fragmentarias y sin mayor vinculación con las políticas sociales de más amplia envergadura. De esta manera, en la mayoría de los países se considera como políticas familiares las destinadas a combatir la pobreza, la drogadicción y el trabajo infantil. Sólo en ciertos casos (Brasil, Cuba) se trabaja con una visión comunitaria y de ciudadanía social.

3. Buenas prácticas: programas, iniciativas y proyectos interesantes

En la amplia gama de políticas familiares es posible identificar iniciativas y proyectos interesantes, tales como los que apuntan a enfrentar los cambios experimentados por las familias y los nuevos papeles sociales de hombres y mujeres en el hogar.

No obstante el creciente consenso sobre los importantes cambios que se observan en el funcionamiento y la estructura de las familias, en América Latina la modalidad y el enfoque de los programas y proyectos en esta esfera muestran pocas modificaciones. Las normativas legales han sido objeto de importantes transformaciones, debido a que en la mayoría de los países ha sido necesario adaptar la legislación a las regula-

ciones internacionales. Cabe destacar en este plano los avances en contra de la violencia intrafamiliar. Entre las iniciativas interesantes resalta un proyecto de ley sobre la creación de tribunales de familia en Chile (véase el recuadro V.3), y una propuesta estadual en México cuyo propósito es introducir en la legislación normas relativas a las familias reconstituidas para ajustarla a los cambios en las estructuras familiares (véase el recuadro V.4).

Recuadro V.3

CHILE: PROYECTO DE LEY SOBRE TRIBUNALES DE FAMILIA

Propuesta:

Crear un tipo de juzgado que incorpore todas las materias relacionadas con la familia que actualmente son vistas en tribunales de menores y tribunales civiles.

Objetivos:

Contar con un sistema de administración de justicia más eficiente y de mayor calidad que el actual en temas relativos a la familia.

Deficiencias del actual sistema:

- Problemas de cobertura.
- Procedimientos largos y engorrosos.
- Existencia de un juez por tribunal que cumple tareas tanto administrativas como de administración de justicia, lo cual implica una sobrecarga burocrática.

Puesta en marcha:

Inicialmente, el sistema de tribunales de familia contaría con 35 tribunales distribuidos por todo el país. La nueva organización establece un número variable de jueces, con un juez presidente (rotativo), un consejo técnico integrado por asistentes sociales y psicólogos, un administrador con título profesional, y el personal de secretaría.

En este sistema se elimina la figura del Secretario del Tribunal y se crea el cargo de administrador, así como el consejo técnico, lo cual permitiría mejorar la gestión administrativa y contar con personal especializado para dar soluciones de carácter integral a los casos juzgados.

(continúa)

CHILE: PROYECTO DE LEY SOBRE TRIBUNALES DE FAMILIA

Se instauraría además un Sistema de Mediación como instancia alternativa para resolver conflictos. El procedimiento será esencialmente oral, público, informalizado y concentrado.

Análisis que avalan el proyecto:

Un análisis costo–beneficio muestra que si bien el nuevo sistema de tribunales de familia implica mayores costos, éstos se concentran básicamente en los primeros años y la situación se equilibra en el largo plazo, una vez absorbidas las fuertes inversiones iniciales. En el nuevo esquema el nivel de la relación costo usuario/costo sistema es más bajo que en los tribunales de menores y civiles. En cuanto al tiempo de los usuarios (costos indirectos) por causa atendida, también resulta menor en los tribunales de familia. En suma, el análisis costo–beneficio tomando en cuenta únicamente el beneficio mensurable en términos monetarios muestra que el costo neto es de 23 000 millones de pesos y que los beneficios netos superarán claramente dicho monto.

Dificultades:

Habría que señalar que la implementación de este nuevo sistema de tribunales familiares requiere de profesionales calificados y especializados en el tema.

Fuente: Programa de posgrado en Economía del Instituto Latinoamericano de Doctrinas y Estudios Sociales (ILADES) y la Universidad de Georgetown.

MÉXICO (ESTADO DE SINALOA): PROPUESTAS LEGALES REFERIDAS A LA FAMILIA RECOMPUESTA

Entre los múltiples modelos de familia que hoy existen figura la familia recompuesta (también denominada familia reconstituida, familia ensamblada, nueva familia o segunda familia), que resulta del divorcio, la nulidad de matrimonio, la viudez o la ruptura de la convivencia de hecho. Una de sus características es que los niños no crecen con ambos padres biológicos. Para lograr una sana convivencia es necesario establecer normas claras que regulen la participación y la cooperación entre los miembros de un grupo recompuesto. En la ley deben reconocerse los deberes y los derechos de la madre o el padre afín respecto de los hijos habidos en otras uniones y aunque sea de manera subsidiaria respecto de los padres biológicos, como tutores o como padres guardadores.

El magistrado presidente de la Sala Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa propone las siguientes medidas legales:

1. Deben modificarse los artículos inherentes al parentesco de afinidad.
2. Los padres afines deben dar alimentos en forma subsidiaria o principal a sus hijos afines.
3. Debe otorgársele a los padres afines facultades para socializar al hijo afín, sobre todo en los ámbitos doméstico y escolar, creando en la legislación esa posibilidad.
4. Deben existir reglas claras de crianza y sustento entre los [padres e hijos] afines.
5. No puede eximirse al padre biológico del deber de pagar alimentos a su acreedor cuando éste forme parte de una familia recompuesta.
6. Hay que garantizar a los [padres e hijos] afines el derecho a comunicarse y visitarse aun con posterioridad a la disolución del matrimonio.
7. Debe señalarse en la ley la posibilidad de que el hijo afín herede de su padre o madre afines.
8. Habrá que establecer en la ley las facultades que tendrían los [padres] afines para usufructuar, administrar y disponer de los bienes del hijo afín, e incluso obtener alguna remuneración por ello, cuando se pruebe que, gracias a su esfuerzo, esos bienes evidentemente se incrementaron.
9. Pudiera ser útil aplicar a los padres afines las reglas sobre la suspensión, privación, limitación y terminación de la patria potestad, contenidas en los artículos 283, 444, 445 y 448 del Código Civil para el Estado de Sinaloa.

Fuente: Claudio Gámez Perea, "La familia recompuesta", memoria presentada al coloquio nacional "Convenciones internacionales en el proceso de impartición de justicia", México, D.F., noviembre de 2000.

CANTERA: UN PROGRAMA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Cantera es una organización no gubernamental de Nicaragua que ha promovido el trabajo con y entre mujeres. A partir de 1993 ha prestado atención a la temática de la masculinidad e imparte cursos abiertos a todos los hombres del país. Cantera reconoce la importancia que cobra el manejo de un enfoque familiar sistémico, así como la necesidad de abordar de manera cronológica los temas, temores, prejuicios y metas comunes entre los hombres en relación con el género y la masculinidad.

Los temas tratados en los cursos son:

- Identidades masculinas.
- Género, poder y violencia.
- Desaprendiendo el machismo; metodologías de trabajo con hombres.
- Forjando relaciones justas (taller mixto).

Llama la atención la perspectiva desde la cual Cantera aborda el problema del género y el reconocimiento de la necesidad de un proceso que sea vivido tanto por los hombres como por las mujeres, haciéndose cargo de las tensiones que esto genera. La labor preventiva implica crear opciones y ésta podría ser una forma interesante de construir juntos, hombres y mujeres, nuevas formas de relación y nuevas identidades.

Fuente: Respuesta a la encuesta de la CEPAL.

Cabe destacar algunas experiencias y programas piloto encaminados a ajustar los roles masculinos a los cambios en los papeles sociales de las mujeres; estas iniciativas se enmarcan, en especial, en los programas de prevención de la violencia intrafamiliar. En varios países de la región se realizan talleres para hombres, como

por ejemplo el programa Paternar en Colombia y el Cantera en Nicaragua (véase el recuadro V.5), con el propósito de intervenir en los roles paternos y varoniles para modificar las formas que asume la masculinidad. También son importantes las escuelas para padres y madres que existen en Cuba, El Salvador y México.

4. Algunos criterios para el diseño de políticas dirigidas a la familia

La diversidad de situaciones familiares en la región y las diferencias entre países dificultan el establecimiento de normas comunes. Pese a ello, es necesario recalcar que el criterio básico para el diseño de estas políticas es contar con un adecuado diagnóstico que considere la heterogeneidad de situaciones y los cambios recientes que han experimentado las familias latinoamericanas. Asimismo, dada la transversalidad de los temas que atañen a la familia, programas y políticas deben coordinarse apropiadamente.

Algunos criterios importantes cuando se diseñan políticas relativas a las familias son los siguientes:

- Deber del Estado de asegurar a todos los derechos de familia, en especial los de ciudadanía y dignidad de sus miembros; responsabilidad del Estado, la sociedad y las familias de proteger y respetar las especificidades de las familias y sus integrantes.
- Respeto al pluralismo de las estructuras familiares para que no sean discriminadas bajo concepto alguno y respeto a los lazos afectivos establecidos en el interior del hogar. Adaptación de las políticas familiares a la realidad cultural sobre la que se pretende incidir, por lo cual deberán respetarse las opciones individuales a partir del reconocimiento de la diversidad de formas y estructuras familiares. Identificación de las necesidades que surgen de las nuevas configuraciones familiares para poder prever y proveer mecanismos idóneos para satisfacer dichas necesidades (Rico, 1997).
- Respeto, legitimación y garantía del pleno ejercicio de las expresiones culturales como elemento esencial en la formación y fortalecimiento de la identidad de la familia.
- Igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres en el desempeño de sus papeles y responsabilidades familiares. Derecho a hacer uso libremente de la planificación familiar con vistas al ejercicio de la paternidad responsable. Reafirmación de la importancia de los papeles y funciones del adulto como proveedor de la familia para evitar que niños y adolescentes asuman esas obligaciones. Generación de un entorno favorable para que las personas puedan cumplir sus funciones familiares y compatibilizar el trabajo doméstico de las mujeres con su trabajo remunerado, especialmente en el caso de las familias en mayor riesgo de caer en la pobreza.
- Apoyo y refuerzo de la función socializadora de

las familias mediante diversas medidas de política (centros abiertos, asesoramiento familiar, fomento de la igualdad de oportunidades). Más que a las familias mismas se tendría que apoyar algunas de sus funciones, lo que supone reconocer su heterogeneidad y brindarles asistencia para que cumplan sus deberes de protección social; así, por ejemplo, habría que facilitar el cuidado de ancianos y enfermos.

- Considerar en las políticas familiares el principio de la universalidad, teniendo en cuenta las necesidades de las familias que asumen cargas familiares y los costos personales y económicos que ello

implica. Se requiere una compensación pública por cargas familiares que considere sus crecientes costos.

- Principio de complementariedad de los agentes sociales públicos, privados y mixtos en la cobertura de las necesidades familiares.
- En síntesis, es necesario fortalecer a las familias como sujeto de derechos, que deben conjugarse de manera flexible con los derechos de sus miembros, y velar especialmente por aquellas familias con mayores carencias y por sus miembros con mayores desventajas.

D. La agenda social internacional : La asamblea del milenio

En el segundo semestre del 2000 se celebró la Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas, la reunión más importante en su género en lo que va del siglo XXI, a la que precedieron diversas reuniones preparatorias regionales. En la Asamblea los jefes de Estado y de gobierno reafirmaron su compromiso de apoyar el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, así como los principios de la Carta, y adoptaron decisiones específicas en los ámbitos de la paz, el desarrollo, la protección del entorno y los derechos humanos.

En la resolución A/RES/53/202, aprobada el 17 de diciembre 1998, la Asamblea General decidió designar su quincuagésimo quinto período de sesiones como "Asamblea de las Naciones Unidas dedicada al Milenio", en el convencimiento de que el cambio de siglo constituía un momento único y planteaba un desafío simbólico a los 188 Estados Miembros de las Naciones Unidas para que formularan y afirmaran una visión renovada de la Organización y sus funciones en la nueva era. Simultáneamente se programó el Foro del Milenio, vinculado estrechamente a los temas de la Asamblea y de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.

Entre las medidas acordadas en la Declaración del Milenio cabe destacar las referidas al desarrollo y la erradicación de la pobreza: los gobiernos de los Estados Miembros decidieron "Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre; igualmente, para

esa misma fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo". También decidieron velar por que, para el 2015, niños y niñas "puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria", así como por reducir "la mortalidad materna en tres cuartas partes y la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes...". Se comprometieron asimismo a detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA y a prestar especial asistencia a los huérfanos por causa de ese flagelo; para el año 2020 se propusieron haber mejorado considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.

Otra de las decisiones adoptadas fue la de promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible; elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo

la posibilidad real de encontrar un trabajo digno y productivo; alentar a la industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas las personas de los países en desarrollo que los necesiten; establecer sólidas formas de colaboración con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil en pro del desarrollo y de la erradicación de la pobreza; y velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Finalmente, cabe destacar la importancia atribuida al fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas (Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social y Corte Internacional de Justicia) para lograr los objetivos prioritarios en la lucha por el desarrollo y en contra de la pobreza, la ignorancia y las enfermedades; la erradicación de la injusticia, la violencia, el terror y el delito; y el término de la degradación y destrucción del planeta.

Recuadro V.6

LA ASAMBLEA DEL MILENIO DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA CUMBRE DEL MILENIO, QUINCUAGÉSIMO QUINTO PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Lugar y fecha:	Nueva York, 6 al 8 de septiembre de 2000.
Participantes:	Representantes de 188 gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.
Organizadores:	Sistema de las Naciones Unidas.
Actividades preparatorias:	Audiencias regionales realizadas en las sedes de las Comisiones Regionales: <ul style="list-style-type: none"> • África, Addis Abeba, Etiopía, 24–26 de junio de 1999 • América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 1–2 septiembre de 1999 • Asia Occidental, Beirut, Líbano, 23–24 de mayo de 1999 • Asia y el Pacífico, Tokio, Japón, 9–10 de septiembre de 1999 • Europa, Ginebra, Suiza, 7–8 de julio de 1999
Principales acuerdos:	<p>Declaración del Milenio</p> <p>Los jefes de Estado y de Gobierno consideran que los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad común son esenciales en las relaciones internacionales. Para plasmar esos valores comunes se formuló una serie de objetivos clave en las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La paz, la seguridad y el desarme • El desarrollo y la erradicación de la pobreza • La protección de nuestro entorno común • Derechos humanos, democracia y buen gobierno • Protección de las personas vulnerables • Atención a las necesidades especiales de África • Fortalecimiento de las Naciones Unidas

PAÍSES, INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE RESPONDIERON A LA ENCUESTA DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)			
País	Dependencia e institución	Cargo	Nombre
Argentina	Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente Consejo Nacional del Menor y la Familia	Coordinadora Nacional de Planificación y Diseño, Coordinadora del Programa de Fortalecimiento Familiar y del Programa de Relaciones Interinstitucionales	Silvia Stuchlik
			Graciela Piltz
			María Rosa Avila
Bolivia	Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia	Jefe Unidad de la Dirección de Asuntos Generacionales y Familia	Mirtha K. Villarroel G.
Brasil	Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de los Derechos Humanos, Consejo Nacional pro Derechos de la Mujer (CNDM)	Gerente de Programa	Juliana Villar
Brasil	Pacto Comunitario contra la Violencia Intrafamiliar Secretaría Pro Tempore SEDH/MJ	Coordinadora del Pacto Comunitario Contra la Violencia Intrafamiliar	Roseane Correa
Colombia	Ministerio de Salud Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	Especialista en Dirección de Gestión Territorial con aportes de la Subdirección de Promoción y Fomento de la Dirección Técnica	María del Carmen Sánchez
Costa Rica	Instituto Nacional de las Mujeres	Relaciones Internacionales y Planificación	Gina Valitutti Ch.
Cuba	Federación de Mujeres Cubanas (FMC)	Funcionarias e Investigadoras del Centro de Estudios de la Mujer.	Magalys Arocha
Chile	Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)	Profesional Área Familia del Departamento de Planificación y Estudios	Andrea Bagnara Calvo
	Fundación de la Familia	Directora	Nuria Núñez
Ecuador	Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU)	Especialista del Área de Estadísticas e Información Estratégica	Lily Jara
El Salvador	Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)	Directora Ejecutiva	Lic. Jenny Flores de Coto
México a/	Secretaría de Salud Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Coordinación de Asesores de la Dirección General	Jefe Departamento de Atención a Familias	Amado Villa Acevedo
		Director de Protección a la Infancia	Edgardo Rocha P.
Nicaragua	Ministerio de la Familia	Directora General de la División de Planificación	Omara Sequeira García
Panamá	Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia	Directora Nacional de la Familia	Haydeé Jurado de Romero
Paraguay	Secretaría de la Mujer Dirección de Planificación	Directora de Planificación	Sonia Brucke
Perú	Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH)	Jefa de la Oficina de Población de la Gerencia de Desarrollo Humano	Patricia Neyra
República Dominicana	Secretaría de Estado de la Mujer	Encargada del Departamento de Planificación	Carmen J. Gómez
Uruguay	Ministerio de Educación y Cultura Instituto Nacional de la Familia y de la Mujer	Asistente social	Rosa Almenares

a/ Con posterioridad a la encuesta, bajo la nueva administración del Presidente Vicente Fox se decidió integrar el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y se nombró a la Sra. Ana Teresa Aranda como directora general del DIF.



COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA (CEPAL)

ENCUESTA SOBRE PROGRAMAS DIRIGIDOS HACIA LA FAMILIA EN AMÉRICA LATINA

Identificación Institución: _____ País: _____
 Persona que contesta cuestionario: _____ Cargo: _____

Responder brevemente

1. Nombre los tres principales cambios en relación con las familias en su país. Liste en orden de importancia:

1. _____
2. _____
3. _____

2. Nombre los tres principales problemas que enfrentan las familias. Liste en orden de importancia:

1. _____
2. _____
3. _____

3. Afectan de la misma forma estos problemas a familias de distintos sectores sociales

	Familias extrema pobreza	Familias pobres	Familias no pobres
Si / No			
¿Por qué?			

4. ¿Qué problemas específicos enfrentan los distintos miembros de la familia: padre/madre/hijos/ otros?

1. Padre _____
2. Madre _____
3. Hijos _____
4. Otros/especificar _____

5. ¿Cuáles han sido las principales medidas puestas en marcha por su programa para fortalecer a las familias?

Medidas generales _____

Medidas hacia familias en extrema pobreza _____

Medidas hacia familias pobres _____

6. ¿Cuáles han sido las principales medidas puestas en marcha por su programa para fortalecer a los distintos miembros de las familias?

Padre _____

Madre _____

Hijos _____

7. ¿Qué políticas, programas y medidas han sido más exitosos y por qué?

Políticas _____
Programas _____
Medidas _____

8. En la implementación de programas y políticas dirigidas hacia las familias ¿con qué organizaciones trabaja principalmente?

Gubernamentales _____
ONG's comunitarias/locales _____
ONG's nacionales _____
Otras _____

9. ¿Con qué ministerios y oficinas sectoriales coordina la puesta en marcha de políticas de fortalecimiento de las familias? Ventajas y desventajas de este trabajo en red

	Ventajas	Desventajas
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____

USE HOJAS ADICIONALES SI ES NECESARIO

Agradeceremos el envío de toda la información que disponga sobre familias: tipos, estructura, desagregada por grupos sociales u orientarnos sobre cómo buscarla por vía electrónica.

Respuestas a: Irma Arriagada, División de Desarrollo Social, CEPAL, Casilla 179-D Santiago, CHILE; Fax: 56 2 2080252 o 56 2 2081946; E-mail: iarriaga@eclac.cl

Bibliografía

- Abramo, Laís, María Elena Valenzuela y Molly Pollack (2000), *Equidad de género en el mundo del trabajo en América Latina. Avances y desafíos cinco años después de Beijing*, Santiago de Chile, Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Araujo, Kathya, Virginia Guzmán y Amalia Mauro (2000), "El surgimiento de la violencia doméstica como problema público y objeto de política", *Revista de la CEPAL*, N° 70 (LC/G.2095-P), Santiago de Chile, abril.
- Ariza, Marina y Orlandina de Oliveira (1997), "Formación y dinámica familiar en México, Centroamérica y el Caribe", *Ibero-Amerikanisches Archiv*, N° 1-2.
- Arriagada, Irma (1998), "Familias latinoamericanas: convergencias y divergencias de modelos y políticas", *Revista de la CEPAL*, N° 65 (LC/G.2033-P), Santiago de Chile, agosto.
- BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (1998), *América Latina frente a la desigualdad. Informe de progreso económico y social en América Latina, edición 1998-1999*, Washington, D.C.
- Bogensneider, Karen (2000), "Has family policy come of age? A decade review of the State U.S. family policy in the 1990s", *Journal of Marriage and the Family*, vol. 62, N° 4, noviembre.
- Bruce, Judith (1998), "Política familiar: apoyo al vínculo entre padre e hijo", *La familia en la mira*, Judith Bruce y otros (comps.), Nueva York, Consejo de Población.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2001a), *Situación y perspectivas: estudio económico de América Latina y el Caribe, 2000-2001*. (LC/G.2142-P), Santiago de Chile, agosto. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.01.II.G.121.
- ____ (2001b), Impacto del desempleo sobre el salario. Una estimación de la pérdida salarial para Uruguay (LC/MVD/R.188.Rev.1), Montevideo, Oficina de la CEPAL en Montevideo, junio.
- ____ (2000a), *La brecha de la equidad: una segunda evaluación* (LC/G.2096), Santiago de Chile.
- ____ (2000b), *La economía cubana: reformas estructurales y desempeño en los noventa, 2ª edición*, México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
- ____ (2000c), *Equidad, desarrollo y ciudadanía* (LC/G.2071/Rev.1-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.00.II.G.81.
- ____ (2000d), *Panorama social de América Latina, 1999-2000* (LC/G.2068-P), Santiago de Chile, julio. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.00.II.G.18.
- ____ (1999), *Panorama social de América Latina, 1998* (LC/G.2050-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.99.II.G.4.
- ____ (1998), *El pacto fiscal: fortalezas, debilidades, desafíos* (LC/G.1997/Rev.1), Santiago de Chile, abril.
- ____ (1995), *Panorama social de América Latina, 1995* (LC/G.1886-P), Santiago de Chile, diciembre. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.95.II.G.17.
- ____ (1994), *Panorama social de América Latina, 1994* (LC/G.1844), Santiago de Chile, noviembre.
- CEPAL-CELADE (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, División de Población - Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) (1999), "América Latina: población económicamente activa 1980-2025", *Boletín demográfico*, N° 64 (LC/G.2059), Santiago de Chile, julio.
- Cowell, Frank (1995), *Measuring Inequality, Second Edition*, LSE Handbooks in Economics Series, Londres, Prentice Hall.
- De Janvry, Alain y Elisabeth Sadoulet (2000), "Growth, poverty, and inequality in Latin America: a causal analysis, 1970-94", *The Review of Income and Wealth*, N° 3, septiembre.
- De Souza, Marcelo (2000), "A importância de se conhecer melhor as famílias para a elaboração de políticas sociais na América Latina", *Texto para discussão*, N° 699, Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).
- Ferriol, Angela (2000), "Apertura externa, mercado laboral y política social", *Investigación económica*, año 6, N° 1, Cuba, enero-marzo.

- Fields, Gary (1989), "Changes in poverty and inequality in developing countries", *World Bank Research Observer*, N° 4.
- (1980), *Poverty, Inequality and Development*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Folbre, Nancy y Susan Himmelweit (comps.) (2000), "Children and family policy: a feminist issue", *Feminist Economics. A special Issue on Children and Family Policy*, vol. 6, N° 1, marzo.
- Gobierno de Colombia (1999), *Conceptualización y orientaciones para el trabajo con la familia*, Bogotá, D.C., Ministerio de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
- Humphries, Jane (comp.) (1999), "Special issue on the family: introduction", *Cambridge Journal of Economics*, vol. 23, N° 5, septiembre.
- Jelin, Elizabeth (1998), *Pan y afectos. La transformación de las familias*, Buenos Aires, Editorial Fondo de Cultura Económica.
- (1994), "Las familias en América Latina", *Familias Siglo XXI*, Ediciones de las Mujeres, N° 20, Santiago de Chile, ISIS Internacional.
- Meil, Gerardo (1995), "Presente y futuro de la política familiar en España", *Revista española de investigaciones sociológicas*, N° 70, abril-junio.
- Milardo, Robert (comp.) (2000), "The decade in review", *Journal of Marriage and the Family*, vol. 62, N° 4, noviembre.
- Morley, Samuel A. (1995), *Poverty and Inequality in Latin America: The Impact of Adjustment and Recovery in the 1980s*, Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins University Press.
- (1992), *Structural Adjustment and the Determinants of Poverty in Latin America*, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mayo.
- Moscoso de Young, Ruby (2000), "Incidencia de la globalización en las familias. Las políticas públicas para promoción familiar en Panamá: avances y dificultades", ponencia presentada en la Quinta Conferencia Iberoamericana sobre Familia (Madrid, 19 al 22 de septiembre).
- PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) (1998), *Desarrollo humano en Chile. Las paradojas de la modernización*, Santiago de Chile, marzo.
- Psacharopoulos, George y otros (1997), "La pobreza y la distribución de los ingresos en América Latina: historia del decenio de 1980", Documento Técnico, N° 351S, Washington, D.C., Banco Mundial, junio.
- Ravallion, Martin (1995), "Growth and poverty: evidence for developing countries in the 1980s", *Economic Letters*, vol. 48, julio.
- Rico, Ana (1997), "Bases para una conceptualización de familia en el marco de las políticas sociales", ponencia presentada en el Quinto Congreso Javeriano de Investigación (Bogotá, D.C., 6 al 8 de octubre de 1999).
- Salles, Vania y Rodolfo Tuirán (1997), "The family in Latin America: a gender approach", *Current Sociology*, vol. 45, N° 1, enero.
- SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) (2000), *Familias y políticas públicas. Una reflexión necesaria*, Santiago de Chile.
- Viveros, Mara (1997), "Entre familia y trabajo. Las trayectorias sociales de las parejas de doble carrera (un estudio de caso colombiano)", ponencia presentada en la Cuarta Conferencia Iberoamericana sobre Familia (Cartagena de Indias, Colombia, 8 al 12 de septiembre).



Anexo estadístico

Cuadro 1	América Latina (18 países): Evolución de algunos indicadores socioeconómicos, 1990-2000	181
Cuadro 2	América Latina (17 países): Tasa de participación de hombres y mujeres en la actividad económica, según tramos de edad, zonas urbanas, 1990-1999	183
Cuadro 3	América Latina (17 países): Tasa de participación de hombres y mujeres en la actividad económica, según número de años de instrucción, zonas urbanas, 1990-1999	185
Cuadro 4	América Latina (17 países): Distribución de la población económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-1999	187
Cuadro 4.1	América Latina (17 países): Distribución de la población masculina económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-1999	189
Cuadro 4.2	América Latina (17 países): Distribución de la población femenina económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-1999	191
Cuadro 5	América Latina (14 países): Distribución de la población económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas rurales, 1990-1999	193
Cuadro 6	América Latina (17 países): Ingreso medio de la población económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-1999	194
Cuadro 6.1	América Latina (17 países): Ingreso medio de la población masculina económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-1999	196
Cuadro 6.2	América Latina (17 países): Ingreso medio de la población femenina económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas urbanas, 1990-1999	198
Cuadro 7	América Latina (14 países): Ingreso medio de la población económicamente activa ocupada, según inserción laboral, zonas rurales, 1990-1999	200
Cuadro 8	América Latina (17 países): Ingreso medio de las mujeres, comparado con el de los hombres, según grupos de edad, zonas urbanas, 1990-1999	201
Cuadro 9	América Latina (17 países): Ingreso medio de las mujeres, comparado con el de los hombres, según número de años de instrucción, zonas urbanas, 1990-1999	203
Cuadro 10	América Latina (17 países): Población urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado de trabajo, 1990-1999	205
Cuadro 10.1	América Latina (17 países): Población masculina urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado de trabajo, 1990-1999	207
Cuadro 10.2	América Latina (17 países): Población femenina urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado de trabajo, 1990-1999	209
Cuadro 11	América Latina (17 países): Ingreso medio de la población urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado de trabajo, 1990-1999	211
Cuadro 11.1	América Latina (17 países): Ingreso medio de la población masculina urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado de trabajo, 1990-1999	213
Cuadro 11.2	América Latina (17 países): Ingreso medio de la población femenina urbana ocupada en sectores de baja productividad del mercado de trabajo, 1990-1999	215
Cuadro 12	América Latina (17 países): Tasas de desempleo abierto, según sexo y edad, en zonas urbanas, alrededor de 1990, 1994, 1997 y 1999	217
Cuadro 13	América Latina (17 países): Tasas de desempleo abierto, según sexo y número de años de instrucción, en zonas urbanas, alrededor de 1990, 1994, 1997 y 1999	219
Cuadro 14	América Latina (17 países): Magnitud de la pobreza y la indigencia, 1990-1999	221
Cuadro 15	América Latina (17 países): Líneas de indigencia (LI) y de pobreza (LP)	223
Cuadro 16	América Latina (17 países): Distribución de los hogares según tramo de ingreso per cápita, en términos del valor de la línea de pobreza, zonas urbanas, 1990-1999	225

Cuadro 17	América Latina (17 países): Incidencia de la pobreza en algunas categorías ocupacionales, zonas urbanas, 1990-1999	227
Cuadro 18	América Latina (14 países): Incidencia de la pobreza en algunas categorías ocupacionales, zonas rurales, 1990-1999	229
Cuadro 19	América Latina (17 países): Distribución del total de personas ocupadas en situación de pobreza, según categorías ocupacionales, zonas urbanas, 1990-1999	230
Cuadro 20	América Latina (14 países): Distribución del total de personas ocupadas en situación de pobreza, según categorías ocupacionales, zonas rurales, 1990-1999	232
Cuadro 21	América Latina (17 países): Magnitud y distribución de la pobreza y la indigencia en hogares encabezados por mujeres, zonas urbanas, 1990-1999	233
Cuadro 22	América Latina (17 países): Nivel y distribución del ingreso de los hogares, por zona, 1990-1999	235
Cuadro 23	América Latina (17 países): Indicadores de concentración del ingreso, zonas urbanas, 1990-1999	237
Cuadro 24	América Latina (14 países): Indicadores de concentración del ingreso, zonas rurales, 1990-1999	239
Cuadro 25	América Latina (17 países): Población de 15 a 24 años de edad, según años de instrucción, por zona, 1980-1999	240
Cuadro 25.1	América Latina (17 países): Población masculina de 15 a 24 años de edad, según años de instrucción, por zona, 1980-1999	242
Cuadro 25.2	América Latina (17 países): Población femenina de 15 a 24 años de edad, según años de instrucción, por zona, 1980-1999	244
Cuadro 26	América Latina (17 países): Población de 25 a 59 años de edad, según años de instrucción, por zona, 1980-1999	246
Cuadro 26.1	América Latina (17 países): Población masculina de 25 a 59 años de edad, según años de instrucción, por zona, 1980-1999	248
Cuadro 26.2	América Latina (17 países): Población femenina de 25 a 59 años de edad, según años de instrucción, por zona, 1980-1999	250
Cuadro 27	América Latina (17 países): Población económicamente activa de 15 años de edad y más, según años de instrucción, por zona, 1980-1999	252
Cuadro 27.1	América Latina (17 países): Población masculina económicamente activa de 15 años de edad y más, según años de instrucción, por zona, 1980-1999	254
Cuadro 27.2	América Latina (17 países): Población femenina económicamente activa de 15 años de edad y más, según años de instrucción, por zona, 1980-1999	256
Cuadro 28	América Latina (17 países): Promedio de años de estudio de la población de 15 a 24 años de edad, según sexo, por zona, 1980-1999	258
Cuadro 29	América Latina (17 países): Promedio de años de estudio de la población de 25 a 59 años de edad, según sexo, por zona, 1980-1999	260
Cuadro 30	América Latina (17 países): Promedio de años de estudio de la población económicamente activa de 15 años y más, según sexo, por zona, 1980-1999	262
Cuadro 31	América Latina (17 países): CEMIT de jóvenes de 15 a 24 años de edad que trabajan 20 o más horas semanales, según sexo, por zona, 1980-1999	264
Cuadro 32	América Latina (17 países): CEMIT de personas de 25 a 59 años de edad que trabajan 20 o más horas semanales, según años de instrucción, por zona, 1980-1999	266
Cuadro 33	América Latina (17 países): Indicadores sobre gasto público social, 1990/1991-1998/1999	268
Cuadro 34	América Latina (17 países): Indicadores sobre gasto público social en educación y salud, 1990/1991-1998/1999	270

Cuadro 1

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS, 1990-2000										
País	Año	PIB por habitante (en dólares de 1995)	Ingreso por habitante (en dólares de 1995) a/	Desempleo urbano (porcentaje)	Variación media mensual del índice de precios al consumidor (porcentaje)	Variaciones porcentuales del período				
						Período	PIB por habitante	Ingreso por habitante a/	Remuneración media real	Salario mínimo urbano
Argentina	1990	5 545	5 403	7.4	24.92	1990-1994	28.7	30.8	2.1	264.1
	1994	7 138	7 065	11.5	0.32	1994-1997	6.5	5.8	-1.8	-4.0
	1997	7 599	7 473	14.9	0.03	1997-2000	-3.9	-4.9	2.7	1.2
	2000	7 305	7 104	15.1	-0.06	1990-2000	31.8	31.5	3.0	253.9
Bolivia	1989	816	834	10.2	1.29	1989-1994	8.6	5.9	10.3	70.5
	1994	886	883	3.1	0.68	1994-1997	7.2	9.6	8.2	-3.6
	1997	950	967	4.4	0.54	1997-2000	0.1	-0.9	10.7	29.3
	2000	951	959	7.6	0.28	1989-2000	16.5	15.0	32.1	112.4
Brasil	1990	3 859	3 733	4.3	26.53	1990-1993	0.5	1.5	28.8	13.0
	1993	3 877	3 790	5.4	31.15	1993-1996	8.7	9.6	12.9	5.1
	1996	4 213	4 155	5.4	0.73	1996-2000	2.9	0.2	-2.9	11.3
	2000	4 337	4 163	7.1	0.43	1990-2000	12.4	11.5	41.2	32.2
Chile	1990	3 425	3 164	7.8 b/	2.03	1990-1994	24.8	23.9	18.7	24.3
	1994	4 273	3 920	7.8 b/	0.72	1994-1996	13.1	13.1	8.3	9.0
	1996	4 834	4 433	6.4 b/	0.54	1996-2000	9.8	6.1	9.2	27.8
	2000	5 309	4 705	9.2 b/	0.37	1990-2000	55.0	48.7	40.5	73.2
Colombia	1991	2 158	2 142	10.5	2.15	1991-1994	8.1	8.4	4.2	-4.0
	1994	2 332	2 321	8.9	1.73	1994-1997	4.2	2.8	5.5	0.8
	1997	2 431	2 387	12.4	1.37	1997-2000	-6.2	-8.5	5.8	3.0
	2000	2 282	2 184	20.2	0.70	1991-2000	5.7	1.9	16.2	-0.4
Costa Rica	1990	2 994	2 896	5.4	2.03	1990-1994	9.0	13.1	13.5	1.0
	1994	3 264	3 275	4.3	1.52	1994-1997	1.6	0.4	-3.2	3.4
	1997	3 316	3 288	5.9	0.89	1997-2000	10.7	-0.5	11.6	5.1
	2000	3 672	3 273	5.3	0.81	1990-2000	22.6	13.0	22.6	9.8
Ecuador	1990	1 472	1 390	6.1	3.41	1990-1994	5.5	6.3	39.0	15.9
	1994	1 553	1 478	7.8	1.90	1994-1997	2.9	1.3	13.3	25.4
	1997	1 597	1 497	9.3	2.25	1997-2000	-11.3	-10.1	...	-20.0
	2000	1 417	1 346	14.1	5.54	1990-2000	-3.7	-3.2	...	16.2
El Salvador	1990	1 406	1 462	10.0	1.48	1990-1995	19.1	30.5	...	3.1
	1995	1 675	1 908	7.0	0.90	1995-1997	1.7	-1.9	...	-7.8
	1997	1 704	1 873	7.5	0.16	1997-2000	2.6	-1.0	...	3.5
	2000	1 749	1 854	6.7	0.35	1990-2000	24.4	26.8	...	-1.6
Guatemala	1989	1 347	1 304	6.0 b/	1.54	1989-1994	6.7	10.5	0.7	-44.5
	1994	1 437	1 440	3.5 b/	0.92	1992-1998	6.7	9.7	30.7	-13.0
	1998	1 534	1 579	3.8 b/	0.60	1998-2000	1.3	-1.1	...	7.7
	2000	1 554	1 562	...	0.41	1989-2000	15.4	19.9	...	-48.0
Honduras	1990	686	614	7.8	2.62	1990-1994	1.4	11.2	...	-5.2
	1994	695	683	4.0	2.14	1994-1997	3.6	2.7	...	-3.6
	1997	720	701	5.8	1.00	1997-2000	-1.6	5.1	...	12.5
	2000	709	737	...	0.85	1990-2000	3.3	20.1	...	2.8

(continúa)

Cuadro 1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS, 1990-2000															
País	Año	PIB por habitante (en dólares de 1995)	Ingreso por habitante (en dólares de 1995) a/	Desempleo urbano (porcentaje)	Variación media mensual del índice de precios al consumidor (porcentaje)	Variaciones porcentuales del período									
						Período	PIB por habitante	Ingreso por habitante a/	Remuneración media real	Salario mínimo urbano					
México	1989	3 925	3 853	2.7	1.51	1989-1994	10.1	11.0	36.2	-10.4					
	1994	4 320	4 277	3.7	0.57						1994-1996	-4.4	-4.7	-21.6	-20.7
	1996	4 131	4 075	5.5	2.06						1996-2000	16.9	20.3	8.8	5.1
	2000	4 831	4 901	2.2	0.72						1989-2000	23.1	27.2	16.2	-25.3
Nicaragua	1990	454	361	7.6 b/	50.58	1990-1994	-7.4	-14.3	20.0	...					
	1994	420	310	17.1 b/	0.98	1992-1998	7.8	44.7	6.8	...					
	1998	453	448	13.2 b/	1.42	1998-2000	6.4	3.1	6.1	...					
	2000	482	462	9.0 b/	0.79	1990-2000	6.2	27.8	36.0	...					
Panamá	1991	2 700	2 463	19.3	0.13	1991-1994	11.1	25.9	...	8.5					
	1994	3 001	3 101	16.0	0.12	1994-1997	4.0	3.5	...	2.5					
	1997	3 122	3 208	15.5	-0.04	1997-2000	5.9	-2.4	...	10.2					
	2000	3 306	3 133	15.2	0.06	1991-2000	22.4	27.2	...	22.5					
Paraguay	1990	1 697	1 705	6.6	3.09	1990-1994	0.2	-2.1	...	-14.0					
	1994	1 701	1 669	4.4	1.41	1994-1996	0.2	5.5	...	4.0					
	1996	1 704	1 760	8.2	0.66	1996-2000	-8.9	-9.8	...	3.3					
	2000	1 552	1 589	8.6	0.69	1990-2000	-8.5	-6.8	...	-7.6					
Perú	1990	1 894	1 811	8.3	43.69	1990-1995	20.2	22.5	16.7	-36.7					
	1995	2 277	2 218	8.2	0.81	1995-1997	5.7	7.2	-5.5	81.2					
	1997	2 406	2 378	9.2	0.52	1997-2000	-0.7	-4.2	-2.9	19.0					
	2000	2 390	2 279	8.5	0.31	1990-2000	26.2	25.8	7.1	36.5					
República Dominicana	1990	1 370	1 407	...	5.02	1990-1994	8.3	8.4	...	19.3					
	1994	1 484	1 525	16.0 b/	1.12	1994-1997	15.3	18.3	...	2.5					
	1997	1 711	1 804	15.9 b/	0.67	1997-2000	19.0	21.5	...	9.2					
	2000	2 035	2 192	13.9 b/	0.72	1990-2000	48.6	55.7	...	33.6					
Uruguay	1990	4 707	4 577	8.5	7.15	1990-1994	20.9	22.0	12.2	-32.7					
	1994	5 690	5 585	9.2	3.09	1994-1997	5.8	6.5	-2.0	-12.6					
	1997	6 019	5 947	11.5	1.18	1997-2000	-3.0	-5.0	2.1	2.2					
	2000	5 841	5 649	13.6	0.41	1990-2000	24.1	23.4	12.2	-39.9					
Venezuela	1990	3 030	3 294	10.4 b/	2.63	1990-1994	3.4	-8.2	-24.1	21.0					
	1994	3 133	3 025	8.7 b/	4.56	1994-1997	6.4	9.2	-8.1	-24.4					
	1997	3 332	3 303	11.4 b/	2.70	1998-2000	-7.1	7.6	-6.0	...					
	2000	3 097	3 553	13.9 b/	1.06	1990-2000	2.2	7.8	-34.5	...					

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial suministrada por los países.

a/ Se refiere al ingreso bruto nacional real por habitante.

b/ Total nacional.

Cuadro 2

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASA DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN TRAMOS DE EDAD, ZONAS URBANAS, 1990-1999											
País	Año	Edad									
		Hombres					Mujeres				
		Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más	Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	76	62	97	97	55	38	41	53	52	19
	1994	76	65	98	97	54	41	43	59	56	21
	1997	76	61	97	97	59	45	44	61	60	27
	1999	74	53	94	97	59	44	36	62	61	27
	(Urbano)	1999	76	58	96	97	62	47	42	66	63
Bolivia	1989	73	47	90	97	64	47	35	57	61	34
	1994	75	50	92	98	65	51	37	62	68	37
	1997	75	48	92	98	73	51	35	61	68	42
	1999	75	49	93	98	72	54	40	64	71	46
Brasil	1990	82	78	96	95	59	45	48	56	53	21
	1993	83	77	96	95	60	50	51	60	60	27
	1996	80	72	94	94	59	50	50	63	61	26
	1999	80	72	95	93	59	53	51	67	64	28
Chile	1990	72	47	94	95	56	35	29	47	46	20
	1994	75	49	94	96	62	38	32	50	50	23
	1996	74	44	94	96	62	39	29	53	51	23
	1998	74	44	93	97	64	41	30	57	54	26
Colombia a/	1991	81	62	97	97	69	48	44	63	56	22
	1994	79	58	96	97	65	48	43	65	59	21
	1997	78	55	96	97	65	50	42	68	63	24
	1999	79	59	96	96	64	55	48	73	69	27
Costa Rica	1990	78	62	96	95	61	39	39	53	49	14
	1994	76	59	94	96	57	40	35	54	52	17
	1997	77	60	96	96	58	42	33	61	54	21
	1999	79	61	95	96	65	45	40	58	58	23
Ecuador	1990	80	56	95	98	78	43	33	54	56	31
	1994	81	59	96	98	76	47	39	58	58	34
	1997	81	58	97	98	75	49	38	61	62	35
	1999	82	64	97	98	76	54	45	65	67	36
El Salvador	1990	80	64	95	96	72	51	41	66	66	36
	1995	78	61	95	96	68	49	36	65	69	34
	1997	75	54	95	97	66	48	33	65	68	34
	1999	75	58	93	94	63	52	38	68	69	37
Guatemala	1989	84	69	97	97	78	43	42	50	49	29
	1998	82	66	95	97	77	54	47	60	68	44
Honduras	1990	81	66	95	97	73	43	35	54	57	30
	1994	80	64	93	96	74	43	35	54	51	31
	1997	83	70	96	98	74	51	43	63	63	35
	1999	82	67	97	96	78	54	45	64	69	37
México	1989	77	58	96	97	68	33	31	45	39	18
	1994	81	63	97	97	69	38	34	49	46	21
	1996	80	60	97	97	68	41	36	50	50	24
	1998	81	61	96	98	71	43	39	51	51	28
Nicaragua	1993	71	50	86	89	66	44	26	57	62	32
	1998	81	66	95	95	74	51	36	66	67	38

(continúa)

Cuadro 2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASA DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN TRAMOS DE EDAD, ZONAS URBANAS, 1990-1999											
País	Año	Edad									
		Hombres					Mujeres				
		Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más	Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 49 años	50 años y más
Panamá	1991	74	58	95	96	52	43	37	59	59	18
	1994	79	62	97	97	56	47	39	61	61	20
	1997	78	60	96	97	59	50	40	66	69	26
	1999	78	62	97	97	60	48	41	61	65	25
Paraguay (Asunción)	1990	84	69	97	99	75	50	51	63	58	27
	1994	82	69	99	98	66	58	58	74	76	31
	1996	86	76	97	97	75	59	54	69	71	40
	1999	83	68	97	95	73	54	46	65	66	39
(Urbano)	1994	86	75	98	98	71	53	53	62	62	32
	1996	86	78	98	97	73	58	54	65	69	40
	1999	83	64	97	95	76	55	47	66	67	42
República Dominicana	1992	86	77	96	98	76	53	57	66	57	25
	1995	78	62	95	98	68	44	40	64	57	20
	1997	83	70	96	97	71	49	44	65	61	22
Uruguay	1990	75	68	98	97	54	44	47	69	64	21
	1994	75	72	97	97	52	47	52	74	70	23
	1997	73	71	96	97	49	47	51	74	71	23
	1999	73	67	96	97	50	50	50	75	74	26
Venezuela b/	1990	78	55	93	96	71	38	25	51	52	21
	1994	79	58	94	97	68	38	26	52	53	20
	1997	83	66	96	97	73	46	34	59	61	28
	1999	84	67	97	97	75	48	36	61	64	30

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país.

Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en que se realizó una encuesta de carácter nacional.

b/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 3

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASA DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS, 1990-1999													
País	Año	Años de instrucción											
		Hombres						Mujeres					
		Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1990	76	74	86	84	38	31	50	66
	1994	76	74	85	83	41	33	53	70
	1997	76	63	68	73	77	88	45	27	29	35	48	74
	1999	74	58	71	72	76	80	44	25	30	34	47	70
	(Urbano)	1999	71	56	68	71	72	73	40	21	28	32	42
Bolivia	1989	73	78	87	68	71	68	47	50	51	41	40	53
	1994	75	80	87	69	71	75	51	54	56	43	45	57
	1997	75	83	88	67	72	72	51	55	57	41	45	58
	1999	75	78	86	76	71	73	54	57	57	53	47	61
Brasil	1990	82	76	84	83	88	91	45	33	41	45	61	77
	1993	83	77	84	83	88	90	50	38	47	50	65	79
	1996	80	73	80	80	86	89	50	36	46	50	64	80
	1999	80	72	80	79	86	88	53	37	47	52	67	79
Chile	1990	72	59	74	66	74	80	35	20	28	26	35	62
	1994	75	59	74	67	79	80	38	21	28	29	40	58
	1996	74	61	74	67	78	79	39	20	26	31	41	62
	1998	74	60	72	66	78	81	41	23	29	31	43	64
Colombia b/	1991	81	80	85	76	81	83	48	37	42	42	56	70
	1994	79	75	84	71	80	86	48	35	43	39	56	76
	1997	78	73	82	69	79	84	50	34	43	42	57	76
	1999	79	74	83	70	79	85	55	38	49	48	61	78
Costa Rica	1990	78	66	84	73	77	82	39	21	33	35	47	62
	1994	76	62	83	70	77	81	40	22	33	34	46	64
	1997	77	59	82	72	77	83	42	19	37	35	44	68
	1999	79	61	84	75	80	84	45	28	39	38	49	67
Ecuador	1990	80	82	90	69	73	81	43	39	39	34	44	65
	1994	81	79	90	70	76	84	47	41	45	37	47	66
	1997	81	81	88	71	76	86	49	43	45	37	46	70
	1999	82	81	89	74	78	86	54	45	50	44	53	72
El Salvador	1990	80	80	86	75	78	80	51	45	56	45	56	68
	1995	78	77	84	71	77	79	49	43	52	43	53	67
	1997	75	76	80	71	74	76	48	44	49	40	53	65
	1999	75	72	80	73	75	78	52	43	53	46	57	69
Guatemala	1989	84	90	89	65	81	87	43	38	41	37	57	77
	1998	82	85	88	68	81	82	54	53	54	45	58	74
Honduras	1990	81	84	88	61	80	76	43	39	43	31	59	53
	1994	80	81	88	59	82	79	43	37	45	29	50	63
	1997	83	83	90	72	80	82	51	43	53	38	59	67
	1999	82	85	87	64	81	84	54	48	56	41	61	65
México	1989	77	79	87	74	65	80	33	21	33	37	42	55
	1994	81	80	88	81	69	83	38	29	32	41	40	58
	1996	80	75	87	81	71	82	41	32	36	42	41	62
	1998	81	71	83	85	79	81	43	33	39	38	43	63
Nicaragua	1993	71	70	74	66	70	83	44	39	43	40	51	67
	1998	81	83	87	79	75	90	51	46	49	46	54	76

(continúa)

Cuadro 3 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASA DE PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS, 1990-1999													
País	Año	Años de instrucción											
		Hombres						Mujeres					
		Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Panamá	1991	74	67	78	69	73	81	43	21	31	37	49	71
	1994	79	70	81	74	78	88	47	18	34	41	52	73
	1997	78	64	76	72	80	85	50	23	39	41	52	73
	1999	78	66	80	75	77	85	48	19	36	40	50	73
Paraguay (Asunción)	1990	84	75	88	82	83	87	50	29	53	45	50	71
	1994	82	64	83	78	82	89	58	39	57	51	57	74
	1996	86	76	91	82	86	91	59	43	57	53	63	81
	1999	83	73	88	79	81	91	54	40	51	49	57	79
(Urbano)	1994	86	76	92	83	84	91	53	38	53	47	58	78
	1996	86	77	92	82	87	92	58	44	57	53	63	81
	1999	83	70	87	80	81	91	55	43	49	50	57	78
República Dominicana	1992	86	87	91	85	85	88	53	38	43	48	61	80
	1995	78	74	81	76	74	86	44	28	37	39	47	72
	1997	83	77	84	84	82	90	49	34	41	42	56	80
Uruguay	1990	75	50	74	79	84	83	44	18	36	48	57	72
	1994	75	41	74	84	82	83	47	17	36	56	61	74
	1997	73	40	70	82	80	84	47	16	35	57	59	71
	1999	73	39	69	83	78	83	50	17	38	57	59	74
Venezuela c/	1990	78	73	84	74	77	76	38	23	34	34	47	58
	1994	79	73	86	78	76	76	38	22	34	36	45	58
	1997	83	80	87	81	82	82	46	28	40	43	53	69
	1999	84	80	88	81	82	83	48	28	41	46	55	70

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ Para los años 1990 y 1994 las categorías de instrucción consideradas son: primaria completa y secundaria incompleta; secundaria completa y educación superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 4

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes)											
País	Año	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Sector privado						
					Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
							En establecimientos de más de 5 personas b/	En establecimientos de hasta 5 personas	Empleo doméstico	Total c/	No profesionales ni técnicos
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	5.4	69.0	...	69.0	6.9	44.8	11.6	5.7	25.6	23.0
	1994	4.8	70.2	...	70.2	...	50.7	14.7	4.8	25.0	...
	1997	5.3	73.3	...	73.3	...	52.3	15.9	5.1	21.5	...
	1999	4.6	73.5	11.6	61.9	10.7	32.1	13.9	5.2	21.8	17.3
(Urbano)	1999	4.4	72.7	15.6	57.1	9.1	28.5	13.7	5.8	23.0	18.6
Bolivia	1989	2.2	53.8	17.9	35.9	4.3	13.5	12.3	5.8	43.8	41.0
	1994	7.6	54.1	12.8	41.3	6.8	15.5	13.8	5.2	38.4	36.8
	1997	7.0	46.1	10.5	35.6	6.7	14.3	11.0	3.6	46.8	44.9
	1999	4.2	48.1	10.3	37.8	7.3	15.1	11.8	3.1	48.2	45.9
Brasil d/	1990	5.2	72.0	...	72.0	14.3	34.2	17.3	6.2	22.8	21.5
	1993	4.1	67.2	14.4	52.8	4.6	31.5 e/	8.5	8.2	27.8	26.4
	1996	4.2	68.5	13.7	54.8	4.8	31.7 e/	9.9	8.4	27.3	25.7
	1999	4.7	66.6	13.0	53.6	11.0	25.7	8.4	8.5	28.6	26.5
Chile f/	1990	2.5	75.0	...	75.0	12.9	45.7	9.4	7.0	22.5	20.6
	1994	3.3	75.0	...	75.0	15.4	44.9	8.6	6.1	21.8	17.4
	1996	3.9	76.4	10.9	65.5	11.6	38.7	9.1	6.1	19.7	16.1
	1998	4.2	76.0	...	76.0	17.0	43.4	9.7	5.9	19.8	15.2
Colombia g/	1991	4.2	66.2	11.6	54.6	4.9	44.1	...	5.6	29.6	27.3
	1994	4.8	68.2	8.6	59.6	6.0	48.3	...	5.3	27.1	25.0
	1997	4.4	62.2	9.9	52.3	6.4	41.4	...	4.5	33.4	30.7
	1999	4.3	57.4	8.7	48.7	5.7	37.8	...	5.2	38.3	35.7
Costa Rica	1990	5.5	74.8	25.0	49.7	6.1	29.5	9.7	4.4	19.7	17.6
	1994	6.6	75.3	21.8	53.5	7.5	31.0	11.2	3.8	18.2	16.5
	1997	7.7	72.4	20.5	51.9	7.3	29.9	11.2	3.5	19.8	17.7
	1999	8.0	72.7	17.2	55.5	8.9	29.7	11.8	5.1	19.2	17.2
Ecuador	1990	5.0	58.9	17.5	41.4	4.5	21.1	11.3	4.5	36.1	34.5
	1994	7.9	58.0	13.7	44.3	5.6	21.8	12.2	4.7	34.1	32.1
	1997	7.8	59.1	13.8	45.3	6.3	23.0	11.0	5.0	33.1	31.1
	1999	8.8	59.0	10.7	48.3	7.0	22.5	13.4	5.4	32.1	31.5
El Salvador h/	1990	3.4	62.9	13.8	49.1	3.4	26.3	13.3	6.1	33.7	33.3
	1995	6.2	61.8	12.5	49.3	7.2	27.2	10.5	4.4	32.1	31.1
	1997	5.7	61.7	13.3	48.4	7.8	25.0	11.2	4.4	32.6	31.5
	1999	4.6	65.2	12.3	52.9	9.1	25.7	13.8	4.3	30.3	29.2
Guatemala	1989	2.8	64.2	14.4	49.8	6.2	22.8	13.8	7.0	33.0	30.9
	1998	4.7	60.0	8.2	51.8	9.2	18.3	17.6	6.7	35.4	24.3
Honduras	1990	1.5	65.5	14.4	51.1	4.9	26.3	13.2	6.7	33.0	31.7
	1994	4.2	65.0	11.3	53.7	6.8	30.5	11.0	5.4	30.8	29.5
	1997	6.3	60.4	10.1	50.3	6.5	27.7	11.0	5.1	33.4	32.3
	1999	6.2	60.2	9.7	50.5	7.5	27.0	11.2	4.8	33.6	33.1

(continúa)

Cuadro 4 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes)											
País	Año	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Total a/	Sector privado			Total c/	No profesionales ni técnicos	
						Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
							En establecimientos de más de 5 personas b/	En establecimientos de hasta 5 personas			Empleo doméstico
México i/	1989	3.3	76.4	...	76.4	9.0	64.7	...	2.7	20.3	18.9
	1994	3.7	74.5	16.1	58.4	6.6	48.1	...	3.7	21.7	20.4
	1996	4.5	73.5	15.1	58.4	7.1	33.1	14.6	3.6	22.1	20.5
	1998	4.8	72.9	14.2	58.7	6.6	33.1	14.9	4.1	22.4	20.5
Nicaragua	1993	0.7	60.8	20.3	40.5	6.6	16.0	11.7	6.2	38.5	29.3
	1998	3.8	59.8	...	59.8	13.5	25.4	14.5	6.4	36.5	35.1
Panamá	1991	3.4	73.2	26.6	46.6	7.4	27.0	5.2	7.0	23.4	22.4
	1994	2.5	76.3	24.8	51.5	7.2	31.3	5.7	7.3	21.2	20.5
	1997	3.0	73.9	22.4	51.5	10.1	29.4	5.6	6.4	23.0	21.8
	1999	2.8	74.2	19.4	54.8	10.8	31.4	6.5	6.1	23.0	21.9
Paraguay (Asunción)	1990	8.9	68.4	11.9	56.5	5.5	24.9	15.6	10.5	22.7	21.2
	1994	9.4	67.0	11.6	55.4	6.3	24.3	13.3	11.5	23.6	23.1
	1996	7.0	62.3	11.3	51.0	5.0	22.9	13.8	9.3	30.7	28.6
	1999	6.4	67.7	12.7	55.0	6.9	25.4	13.6	9.1	25.8	23.2
(Urbano)	1994	9.2	62.0	10.5	51.5	4.5	21.5	15.0	10.5	28.9	28.6
	1996	6.8	57.9	10.0	47.9	3.8	20.4	14.4	9.3	35.3	33.7
	1999	6.6	62.1	11.8	50.3	5.1	21.1	14.9	9.2	31.2	29.1
República Dominicana	1992	2.8	61.9	14.3	47.6	8.7	35.7	...	3.2	35.3	32.8
	1995	4.2	62.8	13.1	49.7	9.0	36.9	...	3.8	33.2	30.6
	1997	3.7	62.5	11.9	50.6	6.7	31.1	8.4	4.4	33.9	31.4
Uruguay	1990	4.6	74.2	21.8	52.4	5.1	30.1	10.3	6.9	21.3	19.0
	1994	4.8	72.3	18.7	53.6	5.4	31.8	9.4	7.0	22.9	20.1
	1997	4.3	72.2	17.7	54.5	5.9	30.5	11.0	7.1	23.6	20.8
	1999	4.0	72.4	16.2	56.2	6.5	31.8	10.4	7.5	23.6	20.6
Venezuela j/	1990	7.5	70.0	21.4	48.6	5.8	30.0	6.5	6.3	22.5	21.4
	1994	6.1	64.5	18.1	46.4	6.1	27.1	9.2	4.0	29.3	27.4
	1997	5.0	62.8	16.8	46.0	5.5	25.4	10.8	4.3	32.3	30.3
	1999	5.1	57.9	14.9	43.0	4.9	24.0	12.1	2.0	36.9	35.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ En Argentina, Brasil (excepto para 1993 y 1996), Chile (1990), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público.

b/ En los casos de Argentina (1994), Chile (1990), Colombia y México (1989 y 1994) no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos. Por lo tanto, los asalariados no profesionales ni técnicos en establecimientos que ocupan hasta cinco personas fueron incluidos en la columna correspondiente a los establecimientos con más de cinco personas. Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se consideran los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.

c/ Incluye a profesionales y técnicos.

d/ La Encuesta Nacional de Hogares (PNAD) de Brasil no contiene información sobre el tamaño de los establecimientos, salvo para 1993 y 1996. Por lo tanto, en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas fueron incluidos los asalariados con contrato de trabajo (carteira) y en la de los que ocupan hasta cinco personas, aquellos sin contrato de trabajo.

e/ Incluye a los empleados del sector privado no profesionales ni técnicos que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.

f/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

g/ A partir de 1993 la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

h/ Las cifras de 1990 no son estrictamente comparables con las correspondientes a 1997, debido a cambios en la clasificación de profesionales y técnicos.

i/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).

j/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 4.1

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes)											
País	Año	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Sector privado						
					Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos			Total c/	No profesionales ni técnicos
							En establecimientos de más de 5 personas b/	En establecimientos de hasta 5 personas	Empleo doméstico		
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	6.9	68.3	...	68.3	6.3	47.8	12.4	1.8	24.7	23.1
	1994	6.2	69.1	...	69.1	...	53.0	15.7	0.4	24.7	...
	1997	6.4	72.6	...	72.6	...	53.5	18.7	0.4	21.1	...
	1999	6.0	71.5	8.7	62.8	9.4	37.1	16.2	0.1	22.5	18.1
	(Urbano)	1999	5.8	70.1	12.3	57.8	8.2	33.6	15.8	0.2	24.1
Bolivia	1989	3.2	60.4	20.0	40.4	4.8	18.6	16.4	0.6	36.4	32.8
	1994	10.7	62.0	13.9	48.1	7.8	21.5	18.3	0.5	27.4	25.4
	1997	10.1	52.0	10.0	42.0	7.8	19.6	14.1	0.5	37.9	35.5
	1999	5.8	55.5	10.3	45.2	9.1	20.2	15.6	0.3	38.7	35.5
Brasil d/	1990	6.9	71.0	...	71.0	10.4	39.1	21.1	0.4	22.1	20.9
	1993	5.6	66.5	11.8	54.7	4.5	39.3 e/	10.1	0.8	27.9	26.7
	1996	5.4	65.8	10.9	54.9	4.4	38.3 e/	11.4	0.8	28.7	27.2
	1999	6.2	63.4	10.2	53.2	9.1	32.8	10.5	0.8	30.4	28.5
Chile f/	1990	3.1	73.0	...	73.0	9.9	52.9	10.0	0.2	23.9	22.0
	1994	3.9	73.7	...	73.7	13.4	51.1	9.1	0.1	22.5	18.3
	1996	4.5	75.0	9.6	65.4	11.4	44.1	9.7	0.2	20.5	17.0
	1998	5.0	74.2	...	74.2	14.9	49.5	9.7	0.1	20.7	16.4
Colombia g/	1991	5.6	63.1	10.8	52.3	4.4	47.6	...	0.3	31.3	28.5
	1994	6.3	65.3	8.0	57.3	5.2	51.9	...	0.2	28.4	26.1
	1997	5.6	58.8	8.7	50.1	5.9	44.0	...	0.2	35.6	32.5
	1999	5.4	54.4	7.9	46.5	5.1	40.9	...	0.5	40.2	37.4
Costa Rica	1990	7.2	72.1	23.0	49.1	7.0	31.6	10.3	0.2	20.6	18.1
	1994	8.1	73.2	20.1	53.1	7.7	33.5	11.6	0.3	18.7	16.7
	1997	9.9	70.7	16.5	54.2	7.7	33.9	12.4	0.2	19.4	17.1
	1999	10.2	71.2	14.6	56.6	9.6	33.3	13.3	0.4	18.5	16.7
Ecuador	1990	6.3	60.3	17.4	42.9	4.0	24.5	13.8	0.6	33.5	31.7
	1994	9.7	59.6	13.0	46.6	5.3	26.0	15.0	0.3	30.7	28.5
	1997	9.8	59.6	12.8	46.8	5.7	27.3	13.1	0.7	30.6	28.3
	1999	10.2	60.7	10.4	50.3	5.8	27.3	16.6	0.6	28.2	27.7
El Salvador h/	1990	4.8	71.4	15.5	55.9	4.2	33.1	18.2	0.4	23.8	23.2
	1995	8.6	68.7	13.0	55.7	8.3	32.6	14.3	0.5	22.7	21.3
	1997	7.6	68.1	14.1	54.0	8.8	30.3	14.6	0.3	24.4	22.9
	1999	6.2	72.4	12.9	59.5	10.3	30.0	18.6	0.6	21.5	20.0
Guatemala	1989	3.6	66.1	15.0	51.1	6.2	27.3	17.4	0.2	30.3	28.6
	1998	6.2	64.8	8.4	56.4	9.7	22.4	22.8	1.5	28.9	21.0
Honduras	1990	1.9	69.8	13.6	56.2	5.4	33.0	17.4	0.4	28.3	26.8
	1994	5.7	65.9	10.3	55.6	6.9	34.5	14.2	0.0	28.4	26.9
	1997	8.8	62.5	8.3	54.2	6.1	31.5	15.8	0.8	28.9	27.8
	1999	8.4	63.3	8.0	55.3	6.6	31.9	16.2	0.6	28.4	28.0

(continúa)

Cuadro 4.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes)											
País	Año	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Total a/	Sector privado			Total c/	No profesionales ni técnicos	
						Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
							En establecimientos de más de 5 personas b/	En establecimientos de hasta 5 personas			Empleo doméstico
México i/	1989	4.3	76.4	...	76.4	9.3	66.5	...	0.6	19.2	17.4
	1994	4.9	75.5	13.9	61.6	6.9	54.1	...	0.6	19.6	18.0
	1996	5.8	75.2	13.7	61.5	7.2	36.1	17.3	0.9	19.0	17.4
	1998	6.3	75.0	12.9	62.1	6.8	36.7	17.4	1.2	18.9	16.6
Nicaragua	1993	0.9	64.3	18.8	45.5	6.6	22.4	16.2	0.3	34.9	27.5
	1998	5.6	63.1	...	63.1	11.7	31.5	18.7	1.2	31.3	30.0
Panamá	1991	4.4	65.5	23.2	42.3	7.7	28.1	5.9	0.6	30.0	28.8
	1994	3.0	70.6	21.7	48.9	7.4	33.6	6.7	1.2	26.4	25.4
	1997	4.0	68.3	19.3	49.0	10.4	31.6	6.0	1.0	27.8	26.2
	1999	3.6	70.1	17.0	53.1	11.1	33.6	7.4	1.0	26.4	25.1
Paraguay (Asunción)	1990	13.5	69.2	12.3	56.9	4.9	31.4	20.6	0.0	17.4	16.4
	1994	12.3	68.1	11.7	56.4	6.5	30.2	18.1	1.6	19.5	19.1
	1996	9.3	64.3	10.3	54.0	5.1	29.5	18.4	1.0	26.3	24.6
	1999	8.5	69.4	13.4	56.0	7.4	33.3	14.5	0.8	22.1	19.5
(Urbano)	1994	11.9	63.4	10.2	53.2	4.6	27.0	20.2	1.4	24.7	24.5
	1996	9.1	60.3	9.0	51.3	4.0	27.1	19.3	0.9	30.6	29.2
	1999	9.0	64.0	11.9	52.1	5.3	28.0	17.9	0.9	27.0	25.1
República Dominicana	1992	3.9	57.1	13.8	43.3	6.9	36.2	...	0.2	39.0	36.1
	1995	5.3	56.7	11.0	45.7	8.0	37.5	...	0.2	37.9	35.2
	1997	4.9	58.1	11.4	46.7	5.6	31.3	9.4	0.4	37.0	34.5
Uruguay	1990	6.4	73.0	22.8	50.2	4.4	33.9	11.8	0.1	20.5	18.9
	1994	6.3	70.8	18.6	52.2	4.8	36.7	10.6	0.1	23.0	20.7
	1997	5.8	69.2	17.3	51.9	4.9	34.8	12.0	0.2	24.9	22.6
	1999	5.2	69.1	15.6	53.5	5.4	36.2	11.7	0.2	25.6	23.2
Venezuela j/	1990	10.2	66.1	16.8	49.3	5.5	33.9	8.0	1.9	23.6	22.5
	1994	8.4	60.6	13.0	47.6	5.2	30.0	10.9	1.5	31.1	29.2
	1997	6.7	61.2	12.1	49.1	5.0	29.2	13.4	1.5	32.0	30.3
	1999	6.9	57.5	10.6	46.9	4.0	27.9	14.9	0.1	35.6	34.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ En Argentina, Brasil (excepto para 1993 y 1996), Chile (1990), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público.

b/ En los casos de Argentina (1994), Chile (1990), Colombia y México (1989 y 1994) no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos. Por lo tanto, los asalariados no profesionales ni técnicos en establecimientos que ocupan hasta cinco personas fueron incluidos en la columna correspondiente a los establecimientos con más de cinco personas. Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se consideran los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.

c/ Incluye a profesionales y técnicos.

d/ La Encuesta Nacional de Hogares (PNAD) de Brasil no contiene información sobre el tamaño de los establecimientos salvo para 1993 y 1996. Por lo tanto, en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas fueron incluidos los asalariados con contrato de trabajo (carteira) y en la de los que ocupan hasta cinco personas, aquellos sin contrato de trabajo.

e/ Incluye a los empleados del sector privado no profesionales ni técnicos que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.

f/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

g/ A partir de 1993 la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

h/ Las cifras de 1990 no son estrictamente comparables con las correspondientes a 1997, debido a cambios en la clasificación de profesionales y técnicos.

i/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).

j/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 4.2

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes)											
País	Año	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Sector privado					Total c/	No profesionales ni técnicos
					Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
							En establecimientos de más de 5 personas b/	En establecimientos de hasta 5 personas	Empleo doméstico		
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	2.8	70.3	...	70.3	8.0	39.6	10.2	12.5	27.1	22.7
	1994	2.4	72.1	...	72.1	...	46.7	13.1	12.3	25.4	...
	1997	3.5	74.2	...	74.2	...	50.3	11.2	12.7	22.2	...
	1999	2.6	76.7	15.9	60.8	12.6	24.8	10.7	12.7	20.7	16.1
(Urbano)	1999	2.5	76.2	20.4	55.8	10.4	20.7	10.5	14.2	21.3	16.9
Bolivia	1989	0.8	45.2	15.0	30.2	3.6	7.1	6.6	12.9	54.0	52.2
	1994	3.5	43.7	11.4	32.3	5.4	7.8	7.9	11.2	52.9	51.7
	1997	2.8	38.5	11.1	27.4	5.4	7.3	7.0	7.7	58.7	57.4
	1999	2.2	37.4	10.2	27.2	5.0	8.6	6.9	6.7	60.6	59.3
Brasil d/	1990	2.5	73.6	...	73.6	20.7	26.1	11.2	15.6	24.0	22.4
	1993	1.8	70.7	18.3	52.4	4.7	21.9 e/	6.0	19.8	27.4	25.8
	1996	2.5	72.3	17.9	54.4	5.4	21.7 e/	7.6	19.7	25.2	23.4
	1999	2.7	71.2	16.9	54.3	13.8	15.5	5.3	19.7	26.1	23.6
Chile f/	1990	1.4	78.6	...	78.6	18.4	32.6	8.2	19.4	20.1	18.2
	1994	2.2	77.4	...	77.4	19.1	33.8	7.7	16.8	20.6	15.8
	1996	2.8	78.9	13.2	65.7	12.0	29.2	8.2	16.3	18.4	14.5
	1998	3.0	78.8	...	78.8	20.6	33.3	9.7	15.2	18.1	13.2
Colombia g/	1991	2.2	70.7	12.8	57.9	5.5	38.8	...	13.6	27.1	25.5
	1994	2.7	72.3	9.4	62.9	7.2	43.0	...	12.7	25.2	23.4
	1997	2.8	66.9	11.6	55.3	6.9	38.0	...	10.4	30.3	28.2
	1999	2.7	61.7	9.9	51.8	6.6	33.7	...	11.5	35.6	33.4
Costa Rica	1990	2.3	79.6	28.7	50.9	4.5	25.8	8.6	12.0	18.1	16.6
	1994	4.0	78.6	24.7	53.9	7.1	26.4	10.3	10.1	17.3	16.1
	1997	4.0	75.7	27.5	48.2	6.6	23.2	9.2	9.2	20.4	18.7
	1999	4.4	75.0	21.5	53.5	7.5	24.0	9.4	12.6	20.4	18.1
Ecuador	1990	2.7	56.4	17.7	38.7	5.5	14.9	6.7	11.6	40.8	39.5
	1994	5.0	55.5	14.8	40.7	6.2	15.0	7.7	11.8	39.5	37.8
	1997	4.5	57.5	15.5	42.0	7.3	15.8	8.0	10.9	37.1	35.7
	1999	5.0	56.7	11.3	45.4	8.9	15.0	8.4	13.1	38.3	37.4
El Salvador h/	1990	1.6	52.5	11.7	40.8	2.5	18.0	7.2	13.1	45.9	45.8
	1995	3.3	53.4	11.8	41.6	5.9	20.8	5.8	9.1	43.3	42.8
	1997	3.3	53.9	12.2	41.7	6.5	18.7	7.1	9.4	42.8	42.0
	1999	2.7	57.0	11.5	45.5	7.6	20.9	8.4	8.6	40.2	39.6
Guatemala	1989	1.5	61.2	13.4	47.8	6.1	15.7	7.9	18.1	37.3	34.6
	1998	2.7	53.6	7.8	45.8	8.5	13.0	11.0	13.3	43.6	28.4
Honduras	1990	0.9	59.0	15.5	43.5	4.1	16.5	6.9	16.0	40.0	39.0
	1994	1.8	63.6	12.9	50.7	6.7	24.3	6.0	13.7	34.6	33.6
	1997	3.1	57.4	12.4	45.0	7.0	22.6	4.7	10.7	39.4	38.3
	1999	3.6	56.6	11.8	44.8	8.6	21.2	5.1	9.9	39.8	39.2

(continúa)

Cuadro 4.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes)											
País	Año	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
			Total	Sector público	Total a/	Sector privado			Total c/	No profesionales ni técnicos	
						Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
							En establecimientos de más de 5 personas b/	En establecimientos de hasta 5 personas			Empleo doméstico
México i/	1989	1.3	76.3	...	76.3	8.4	60.8	...	7.1	22.4	21.9
	1994	1.5	72.8	20.3	52.5	6.1	36.8	...	9.6	25.8	25.0
	1996	2.1	70.4	17.5	52.9	7.0	27.7	9.9	8.3	27.5	25.9
	1998	2.2	69.5	16.5	53.0	6.5	26.8	10.7	9.0	28.4	27.1
Nicaragua	1993	0.5	56.2	22.4	33.8	6.6	7.5	5.6	14.1	43.4	31.7
	1998	1.3	55.4	...	55.4	15.8	17.2	8.9	13.5	43.3	41.9
Panamá	1991	1.7	86.1	32.5	53.6	6.9	24.9	4.0	17.8	12.2	11.5
	1994	1.5	86.6	30.3	56.3	6.9	27.3	4.0	18.1	12.0	11.7
	1997	1.4	83.3	27.4	55.9	9.7	25.9	5.0	15.3	15.4	14.8
	1999	1.6	81.1	23.5	57.6	10.3	27.7	5.2	14.4	17.3	16.7
Paraguay (Asunción)	1990	2.4	67.5	11.3	56.2	6.5	15.5	8.6	25.6	30.2	28.1
	1994	5.7	65.5	11.5	54.0	6.1	16.6	7.0	24.3	28.8	28.2
	1996	4.0	59.5	12.5	47.0	4.9	14.3	7.8	20.0	36.5	33.9
	1999	3.7	65.4	11.7	53.7	6.3	14.9	12.4	20.1	30.8	28.2
(Urbano)	1994	5.3	59.7	10.9	48.8	4.3	13.7	7.5	23.3	34.9	34.5
	1996	3.5	54.7	11.4	43.3	3.5	11.3	7.7	20.8	41.8	39.9
	1999	3.4	59.7	11.6	48.1	5.0	11.6	10.8	20.7	36.9	34.6
República Dominicana	1992	0.9	70.9	15.1	55.8	12.1	35.0	...	8.7	28.3	26.7
	1995	2.0	73.7	16.9	56.8	10.7	35.6	...	10.5	24.3	21.9
	1997	1.5	70.1	12.6	57.5	8.6	30.6	6.7	11.6	28.4	25.8
Uruguay	1990	1.9	75.9	20.2	55.7	6.1	24.4	8.1	17.1	22.3	19.1
	1994	2.8	74.4	18.9	55.5	6.2	24.9	7.6	16.8	22.8	19.2
	1997	2.3	75.9	18.1	57.8	7.2	24.4	9.5	16.7	21.8	18.3
	1999	2.3	76.7	17.0	59.7	7.9	25.8	8.6	17.4	21.1	17.1
Venezuela j/	1990	2.3	77.5	30.4	47.1	6.4	22.3	3.4	15.0	20.2	19.1
	1994	1.7	72.3	28.1	44.2	8.0	21.3	5.9	9.0	26.0	23.9
	1997	1.9	65.7	25.7	40.0	6.4	18.1	5.8	9.7	32.5	30.1
	1999	1.9	58.9	22.7	36.2	6.5	17.1	7.0	5.6	39.2	37.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ En Argentina, Brasil (excepto para 1993 y 1996), Chile (1990), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público.

b/ En los casos de Argentina (1994), Chile (1990), Colombia y México (1989 y 1994) no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos.

Por lo tanto, los asalariados no profesionales ni técnicos en establecimientos que ocupan hasta cinco personas fueron incluidos en la columna correspondiente a los establecimientos con más de cinco personas. Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se consideran los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.

c/ Incluye a profesionales y técnicos.

d/ La Encuesta Nacional de Hogares (PNAD) de Brasil no contiene información sobre el tamaño de los establecimientos, salvo para 1993 y 1996. Por lo tanto, en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas fueron incluidos los asalariados con contrato de trabajo (carteira) y en la de los que ocupan hasta cinco personas, aquellos sin contrato de trabajo.

e/ Incluye a los empleados del sector privado no profesionales ni técnicos que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.

f/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

g/ A partir de 1993 la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

h/ Las cifras de 1990 no son estrictamente comparables con las correspondientes a 1997, debido a cambios en la clasificación de profesionales y técnicos.

i/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).

j/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 5

AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS RURALES, 1990-1999 (En porcentajes)								
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados			Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total a/	Sector público	Sector privado	Total	Agricultura
Bolivia	1997	100.0	3.3	8.9	2.4	6.5	87.8	79.9
	1999	100.0	1.2	9.2	2.3	6.9	89.6	82.1
Brasil	1990	100.0	3.0	44.3	...	44.3	52.7	44.3
	1993	100.0	1.9	33.6	5.1	28.5	64.5	58.4
	1996	100.0	1.8	34.3	4.4	29.9	63.8	57.2
	1999	100.0	2.0	34.3	5.2	29.1	63.7	56.4
Chile b/	1990	100.0	2.8	64.9	...	64.9	32.3	25.0
	1994	100.0	2.6	66.6	...	66.6	30.8	21.5
	1996	100.0	2.4	64.2	3.6	60.6	33.3	26.6
	1998	100.0	2.8	64.5	...	64.5	32.7	24.4
Colombia	1991	100.0	6.3	48.6	...	48.6	45.0	25.5
	1994	100.0	4.5	54.2	...	54.2	41.3	22.4
	1997	100.0	4.2	50.6	...	50.6	45.1	25.0
	1999	100.0	3.7	47.2	3.7	43.5	49.2	27.9
Costa Rica	1990	100.0	5.1	66.2	10.5	55.7	28.7	16.8
	1994	100.0	6.8	69.0	9.6	59.4	24.2	11.1
	1997	100.0	7.1	67.8	9.0	58.8	25.2	11.3
	1999	100.0	8.2	69.2	8.9	60.3	22.7	9.5
EL Salvador	1995	100.0	6.0	49.6	3.2	46.4	44.3	26.8
	1997	100.0	4.0	50.9	3.1	47.8	45.1	28.1
	1999	100.0	4.1	50.8	3.9	46.9	45.2	26.3
Guatemala	1989	100.0	0.6	38.7	2.9	35.8	60.7	47.5
	1998	100.0	2.0	42.9	1.7	41.2	55.1	34.8
Honduras	1990	100.0	0.6	34.9	4.0	30.9	64.6	47.6
	1994	100.0	1.7	37.0	4.8	32.2	61.4	43.5
	1997	100.0	2.6	34.8	3.4	31.4	62.6	41.6
	1999	100.0	3.1	33.4	3.7	29.7	63.5	41.3
México c/	1989	100.0	2.5	50.2	...	50.2	47.3	34.6
	1994	100.0	4.0	48.6	5.5	43.1	47.4	30.8
	1996	100.0	5.1	48.1	6.4	41.7	46.7	28.6
	1998	100.0	4.5	45.6	6.0	39.6	49.9	29.2
Nicaragua	1993	100.0	0.2	38.4	6.6	31.8	61.3	45.8
	1998	100.0	3.3	43.7	...	43.7	53.0	39.7
Panamá	1991	100.0	2.9	39.1	12.5	26.6	58.0	45.5
	1994	100.0	3.3	47.0	11.8	35.2	49.7	34.4
	1997	100.0	2.2	46.1	10.1	36.0	51.6	33.4
	1999	100.0	3.2	44.9	10.1	34.8	51.9	31.6
Paraguay	1997	100.0	2.3	24.8	3.2	21.6	72.8	57.3
	1999	100.0	3.4	27.0	3.4	23.6	69.7	54.0
República Dominicana	1992	100.0	4.0	52.4	13.2	39.2	43.7	21.6
	1995	100.0	2.1	56.1	11.5	44.6	41.9	15.7
	1997	100.0	3.4	45.6	10.3	35.3	51.0	28.5
Venezuela	1990	100.0	6.9	46.6	8.3	38.3	46.5	33.3
	1994	100.0	7.6	47.6	7.4	40.2	44.8	29.7
	1997	100.0	5.4	49.6	5.4	44.2	44.9	33.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Incluye a los empleados domésticos. En Brasil (1990), Chile (1990 y 1994), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público.

b/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

c/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).

Cuadro 6

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)												
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado					Total b/	No profesionales ni técnicos
						Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
								En establecimientos de más de 5 personas	En establecimientos de hasta 5 personas	Empleo doméstico		
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	6.4	20.6	4.7	...	4.7	9.4	4.5	3.6	3.5	7.9	7.2
	1994	8.6	28.3	6.5	...	6.5	3.3	10.8	...
	1997	7.2	24.2	5.6	...	5.6	2.6	8.6	...
	1999	6.4	22.0	5.1	6.2	4.8	8.5	4.9	3.4	2.1	7.3	6.1
Bolivia	1989	4.2	16.2	3.9	4.1	3.5	7.7	3.6	2.7	1.6	4.1	3.8
	1994	3.5	10.3	3.2	3.9	3.0	7.3	2.7	2.0	1.0	2.5	2.2
	1997	3.6	10.1	3.9	4.6	3.6	8.8	3.2	2.2	1.1	2.5	2.3
	1999	3.4	8.2	4.1	4.7	3.7	7.4	3.8	2.4	1.8	2.3	2.2
Brasil c/	1990	4.7	16.1	4.1	...	4.1	8.2	3.8	2.6	1.0	3.8	3.4
	1993	4.3	15.6	4.2	6.4	3.6	10.9	3.5 d/	2.0	1.1	3.1	2.7
	1996	5.0	19.1	4.5	7.0	3.9	10.7	3.9 d/	2.5	1.5	4.2	3.7
	1999	4.4	14.7	4.1	6.6	3.5	6.9	3.2 d/	2.1	1.4	3.2	2.8
Chile e/	1990	4.7	24.8	3.8	...	3.8	7.4	3.5	2.4	1.4	5.4	5.0
	1994	6.2	34.2	4.9	...	4.9	9.6	4.0	2.9	2.0	6.3	4.9
	1996	6.8	33.7	5.1	6.5	4.8	11.2	3.8	2.9	2.0	8.3	6.4
	1998	7.4	33.8	5.6	...	5.6	11.7	4.3	3.0	2.2	8.6	6.5
Colombia f/	1991	2.9	7.4	2.7	3.9	2.5	5.3	2.4	...	1.3	2.4	2.2
	1994	3.8	13.1	3.4	5.5	3.1	7.9	2.6	...	1.7	3.4	3.0
	1997	3.8	10.9	3.6	5.7	3.2	6.9	2.7	...	1.6	3.2	2.9
	1999	3.3	9.5	3.7	6.3	3.2	6.8	2.8	...	2.1	2.2	1.9
Costa Rica	1990	5.2	6.8	5.4	7.3	4.4	9.0	4.3	3.2	1.5	3.7	3.4
	1994	5.7	10.8	5.5	7.8	4.6	8.4	4.4	3.6	1.6	4.4	4.0
	1997	5.6	8.4	5.8	8.2	4.8	9.0	4.8	3.2	1.8	3.8	3.6
	1999	6.0	10.4	5.9	8.8	5.1	9.7	4.8	3.6	1.7	4.4	4.0
Ecuador	1990	2.8	4.8	3.2	4.1	2.8	6.0	2.9	2.3	0.8	1.9	1.9
	1994	2.9	6.6	2.8	3.5	2.5	5.2	2.6	1.9	0.9	2.2	2.0
	1997	3.0	6.0	3.0	3.9	2.7	5.7	2.9	1.8	0.9	2.2	2.1
	1999	2.9	7.6	2.8	3.8	2.6	4.5	2.9	1.7	0.9	1.8	1.8
El Salvador	1995	3.4	8.6	3.5	5.3	3.0	6.9	2.8	2.0	1.0	2.1	2.0
	1997	3.8	9.9	4.5	5.9	3.8	7.8	3.2	2.3	1.9	2.2	2.1
	1999	4.2	9.9	4.6	6.9	4.0	8.2	3.7	2.4	2.1	2.5	2.3
Guatemala	1989	3.5	17.7	3.0	4.8	2.5	5.2	2.6	1.7	1.4	3.2	2.9
	1998	3.0	12.1	3.0	4.4	2.8	6.2	2.7	1.9	0.7	1.7	1.3
Honduras	1990	2.8	16.4	3.1	4.9	2.5	6.5	2.7	1.6	0.8	1.6	1.5
	1994	2.3	7.3	2.2	3.4	2.0	4.5	1.9	1.3	0.5	1.7	1.6
	1997	2.0	6.5	2.1	2.9	1.9	4.2	1.8	1.1	0.5	1.3	1.2
	1999	2.0	5.1	2.1	2.9	1.9	3.0	2.1	1.1	0.5	1.2	1.2

(continúa)

Cuadro 6 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)												
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado					Total b/	No profesionales ni técnicos
						Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
								En establecimientos de más de 5 personas	En establecimientos de hasta 5 personas	Empleo doméstico		
México g/	1989	4.4	21.7	3.5	...	3.5	6.9	3.1	...	1.4	4.8	4.4
	1994	4.4	18.3	3.9	5.0	3.6	9.5	3.0	...	1.2	3.7	3.3
	1996	3.7	15.2	3.3	4.9	2.9	6.4	2.8	1.7	1.2	2.5	2.3
	1998	4.1	18.2	3.5	5.3	3.1	6.9	3.1	1.9	1.3	3.0	2.6
Nicaragua	1993	3.5	8.5	3.3	3.4	3.2	6.1	3.1	2.3	2.1	3.6	2.9
	1998	3.1	11.1	3.2	...	3.2	6.3	2.6	1.9	1.7	2.1	2.0
Panamá	1991	5.0	11.8	5.5	7.4	4.4	9.4	4.1	2.6	1.3	2.5	2.3
	1994	5.1	17.7	5.1	7.3	4.1	9.4	3.8	2.4	1.3	3.5	3.4
	1997	5.6	15.4	5.6	8.0	4.6	10.0	4.1	2.6	1.4	3.7	3.4
	1999	5.8	11.4	6.3	8.7	5.5	11.1	4.8	2.7	2.2	3.3	3.0
Paraguay (Asunción)	1990	3.4	10.3	2.5	3.4	2.2	4.7	2.6	1.8	0.8	3.8	3.6
	1994	3.6	10.0	3.0	4.4	2.7	6.7	2.7	2.0	1.3	2.9	2.9
	1996	3.6	10.6	3.3	5.1	2.9	6.5	3.1	2.3	1.2	2.8	2.5
	1999	3.6	8.9	3.5	4.6	3.2	6.5	3.4	2.3	1.7	2.7	2.3
(Urbano)	1994	3.3	9.6	2.8	4.3	2.5	6.6	2.6	1.9	1.2	2.5	2.5
	1996	3.3	9.7	3.1	5.1	2.6	6.3	3.0	2.1	1.1	2.5	2.3
	1999	3.3	8.8	3.3	4.8	2.9	6.7	3.1	2.1	1.6	2.2	1.9
República Dominicana	1997	4.4	13.5	3.9	4.7	3.7	7.5	3.5	2.4	1.4	4.3	4.0
Uruguay	1990	4.3	12.0	3.7	4.0	3.6	7.6	3.7	2.5	1.5	5.1	5.1
	1994	4.8	12.3	4.6	5.3	4.2	9.6	4.5	2.9	1.7	3.9	3.5
	1997	4.9	11.5	4.8	5.9	4.5	9.8	4.6	3.0	1.8	4.0	3.5
	1999	5.4	14.1	5.3	6.7	4.9	11.2	4.9	3.2	2.1	4.1	3.6
Venezuela h/	1990	4.5	11.9	3.7	4.0	3.6	6.6	3.6	2.5	2.1	4.5	4.3
	1994	3.8	8.9	3.2	2.7	3.4	6.7	3.4	2.0	1.9	4.1	3.8
	1997	3.6	11.2	2.6	2.9	2.5	5.8	2.4	1.7	1.4	4.2	3.9
	1999	3.5	9.2	3.2	3.7	2.9	6.4	2.9	2.0	1.4	3.2	3.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En los casos de Argentina, Brasil (1990), Chile (1990, 1994 y 1998), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público. Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se incluye -cuando se trata de los trabajadores no profesionales ni técnicos- a los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos no se proveen cifras para el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.
- b/ Incluye a los trabajadores por cuenta propia profesionales y técnicos.
- c/ La Encuesta Nacional de Hogares (PNAD) de Brasil no contiene información sobre el tamaño de los establecimientos, salvo para 1993, 1996 y 1999. Por lo tanto en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas fueron incluidos los asalariados con contrato de trabajo (carteira) y en la de los que ocupan hasta cinco personas, aquellos sin contrato de trabajo.
- d/ Incluye a los empleados del sector privado no profesionales ni técnicos que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993 la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).
- h/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 6.1

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)												
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado					Total b/	No profesionales ni técnicos
						Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
								En establecimientos de más de 5 personas	En establecimientos de hasta 5 personas	Empleo doméstico		
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	7.3	22.2	5.1	...	5.1	11.4	4.7	3.7	4.4	9.4	8.8
	1994	9.7	28.0	7.1	...	7.1	4.5	12.3	...
	1997	8.2	25.7	6.1	...	6.1	2.7	10.2	...
	1999	7.4	24.0	5.7	7.1	5.3	9.9	5.1	3.5	2.6	8.5	7.1
Bolivia	1989	5.1	17.1	4.3	4.8	4.0	9.6	3.7	2.8	4.0	5.4	4.9
	1994	4.4	10.8	4.4	4.7	3.5	8.3	2.8	2.2	1.7	3.6	3.2
	1997	4.5	10.5	4.4	5.4	4.2	9.8	3.3	2.4	1.8	3.1	2.9
	1999	4.1	7.9	4.5	5.2	4.4	8.0	4.1	2.6	1.9	3.0	2.8
Brasil c/	1990	5.7	17.2	4.8	...	4.8	11.3	4.2	2.8	1.3	4.9	4.4
	1993	5.3	16.6	4.9	7.9	4.2	14.5	3.7 d/	2.0	1.5	4.0	3.6
	1996	6.0	20.1	5.2	8.4	4.6	13.8	4.2 d/	2.6	2.0	5.2	4.7
	1999	5.2	15.5	4.7	7.9	4.1	8.9	3.4 d/	2.2	2.1	4.1	3.6
Chile e/	1990	5.4	27.4	4.4	...	4.4	10.4	3.6	2.5	1.9	5.8	5.3
	1994	7.0	37.6	5.4	...	5.4	12.0	4.1	3.1	2.2	6.7	5.4
	1996	7.7	36.3	5.7	7.2	5.5	13.3	4.0	3.0	2.4	9.2	7.2
	1998	8.4	37.0	6.3	...	6.3	14.1	4.5	3.2	3.3	9.5	7.1
Colombia f/	1991	3.3	7.8	3.1	4.2	2.8	6.5	2.5	...	1.5	3.0	2.7
	1994	4.4	14.5	3.6	6.1	3.3	9.8	2.6	...	1.7	4.0	3.5
	1997	4.4	11.8	4.0	6.4	3.5	8.4	2.9	...	1.6	3.9	3.4
	1999	3.8	10.2	4.0	7.1	3.4	7.9	2.9	...	2.7	2.6	2.3
Costa Rica	1990	5.8	7.0	6.0	7.9	5.1	9.9	4.6	3.3	1.5	4.8	4.3
	1994	6.4	11.9	6.0	8.2	5.2	9.6	4.7	3.9	2.1	5.3	4.9
	1997	6.1	8.9	6.1	8.7	5.3	9.7	5.0	3.5	2.3	5.0	4.6
	1999	6.8	11.1	6.5	9.5	5.7	10.7	5.1	3.8	2.3	5.6	5.2
Ecuador	1990	3.3	4.9	3.6	4.6	3.2	8.0	3.0	2.4	1.1	2.4	2.3
	1994	3.4	7.2	3.1	3.8	2.9	6.7	2.6	2.0	1.1	2.9	2.6
	1997	3.4	6.3	3.3	4.1	3.1	6.9	2.9	1.8	1.3	2.7	2.6
	1999	3.4	8.2	3.0	4.2	2.7	4.9	2.9	1.7	1.4	2.3	2.3
El Salvador	1995	4.1	9.4	3.9	5.5	3.5	7.6	3.0	2.2	1.7	2.1	2.8
	1997	4.4	10.5	4.3	5.9	3.9	8.5	3.3	2.4	2.8	2.9	2.7
	1999	4.8	10.3	4.8	6.9	4.4	9.1	3.9	2.5	2.9	3.2	2.9
Guatemala	1989	4.0	18.6	3.3	4.8	2.8	6.2	2.7	1.8	2.6	3.9	3.6
	1998	3.8	13.3	3.5	4.8	3.3	7.6	3.0	2.0	1.0	2.4	1.8
Honduras	1990	3.4	20.3	3.3	5.1	2.9	7.3	2.8	1.7	1.6	2.4	2.2
	1994	2.7	7.8	2.5	3.8	2.2	5.2	2.0	1.3	1.6	2.1	2.0
	1997	2.5	7.1	2.2	3.3	2.0	5.3	1.9	1.1	0.8	1.8	1.7
	1999	2.4	6.7	2.3	3.1	2.1	3.8	2.3	1.2	0.8	1.7	1.6

(continúa)

Cuadro 6.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)												
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado					Total b/	No profesionales ni técnicos
						Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
								En establecimientos de más de 5 personas	En establecimientos de hasta 5 personas	Empleo doméstico		
México g/	1989	5.1	23.4	3.8	...	3.8	7.8	3.3	...	2.1	6.1	5.6
	1994	5.2	19.4	4.4	5.6	4.1	11.5	3.2	...	2.0	5.0	4.4
	1996	4.3	16.0	3.6	5.3	3.3	7.7	3.1	1.8	1.9	3.4	3.1
	1998	4.9	19.2	3.9	5.9	3.5	8.2	3.4	2.1	1.9	4.3	3.6
Nicaragua	1993	3.8	9.4	3.6	3.9	3.5	7.4	3.1	2.4	1.3	4.1	3.2
	1998	3.7	12.0	3.5	...	3.5	7.9	2.8	2.0	3.3	2.5	2.4
Panamá	1991	5.3	11.9	6.1	7.9	5.0	10.2	4.2	2.7	1.4	2.7	2.5
	1994	5.6	19.2	5.7	8.2	4.6	10.6	3.8	2.3	2.0	3.9	3.7
	1997	6.2	16.6	6.4	9.0	5.3	11.0	4.1	2.6	2.0	4.3	3.8
	1999	6.2	12.1	6.8	9.7	5.9	11.7	4.8	2.7	2.3	3.8	3.5
Paraguay (Asunción)	1990	4.2	10.4	2.9	4.0	2.6	5.8	2.6	1.9	...	4.8	4.6
	1994	4.4	10.6	3.5	5.1	3.2	8.5	2.7	2.1	2.1	3.5	3.5
	1996	4.3	11.7	3.6	5.5	3.3	7.3	3.2	2.4	2.0	3.5	3.2
	1999	4.1	8.9	3.8	4.7	3.6	7.0	3.4	2.3	1.9	3.1	2.6
(Urbano)	1994	4.0	10.0	3.2	5.0	2.9	8.2	2.7	2.0	1.9	3.0	3.0
	1996	3.9	10.3	3.4	5.5	3.0	6.9	3.1	2.2	1.7	3.1	2.9
	1999	3.8	8.7	3.6	5.2	3.2	7.5	3.2	2.0	1.7	2.6	2.3
República Dominicana	1997	4.8	14.5	4.0	4.6	3.9	8.0	3.6	2.6	2.2	4.8	4.5
Uruguay	1990	5.5	13.0	4.3	4.4	4.2	10.1	4.0	2.7	1.5	7.3	7.3
	1994	5.8	13.1	5.5	6.0	5.3	12.5	5.0	3.1	3.0	4.9	4.4
	1997	5.8	12.3	5.6	6.6	5.3	12.9	5.0	3.2	2.0	4.8	4.2
	1999	6.3	14.9	6.2	7.5	5.8	14.6	5.3	3.4	2.7	4.8	4.2
Venezuela h/	1990	5.1	12.0	4.0	4.4	3.9	7.6	3.7	2.5	3.4	5.1	4.9
	1994	4.3	9.1	3.4	3.1	3.5	7.6	3.4	2.0	2.9	4.6	4.3
	1997	4.0	11.4	2.8	3.2	2.7	6.7	2.5	1.7	2.2	4.6	4.3
	1999	3.8	9.4	3.3	4.1	3.2	7.4	3.0	2.0	2.0	3.7	3.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En los casos de Argentina, Brasil (1990), Chile (1990, 1994 y 1998), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público. Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se incluye -cuando se trata de los trabajadores no profesionales ni técnicos- a los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos no se proveen cifras para el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.
- b/ Incluye a los trabajadores por cuenta propia profesionales y técnicos.
- c/ La Encuesta Nacional de Hogares (PNAD) de Brasil no contiene información sobre el tamaño de los establecimientos, salvo para 1993, 1996 y 1999. Por lo tanto en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas fueron incluidos los asalariados con contrato de trabajo (carteira) y en la de los que ocupan hasta cinco personas, aquellos sin contrato de trabajo.
- d/ Incluye a los empleados del sector privado no profesionales ni técnicos que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993 la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).
- h/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 6.2

**AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA
OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999**
(En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)

País	Año	Total	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado					Total b/	No profesionales ni técnicos
						Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
								En establecimientos de más de 5 personas	En establecimientos de hasta 5 personas	Empleo doméstico		
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	4.7	13.6	4.7	...	3.9	6.6	4.0	3.4	2.0	5.8	4.5
	1994	6.7	29.4	6.5	...	5.4	3.2	8.3	...
	1997	5.6	19.6	4.8	...	4.8	2.5	6.2	...
	1999	4.8	15.0	4.4	5.5	4.0	6.8	4.3	3.0	2.1	5.3	4.4
Bolivia	1989	2.9	10.7	3.6	2.9	3.4	4.1	3.4	2.2	1.6	4.1	2.9
	1994	2.2	8.4	2.3	2.7	2.1	5.3	2.2	1.5	0.9	2.5	1.6
	1997	2.5	8.1	3.0	3.5	2.8	6.8	2.6	1.8	1.0	1.8	1.7
	1999	2.4	9.0	3.2	4.1	2.9	5.8	2.9	1.8	1.8	1.7	1.7
Brasil c/	1990	3.1	11.1	3.1	...	3.1	5.6	2.9	2.0	0.9	2.2	1.9
	1993	2.8	11.1	3.0	4.9	2.3	5.7	2.8 d/	1.8	1.1	1.7	1.4
	1996	3.6	15.4	3.6	5.7	3.1	7.0	3.2 d/	2.3	1.5	2.5	2.0
	1999	3.2	12.4	3.3	5.4	2.6	5.0	2.4 d/	1.8	1.4	2.0	1.6
Chile e/	1990	3.4	14.3	3.0	...	3.0	4.5	3.2	2.2	1.4	4.4	4.2
	1994	4.7	26.4	3.8	...	3.8	6.5	3.5	2.6	2.0	5.8	3.8
	1996	5.1	26.4	4.1	5.5	3.9	7.8	3.6	2.8	2.0	6.4	4.4
	1998	5.6	24.9	4.7	...	4.7	8.8	3.8	2.7	2.2	6.8	5.0
Colombia f/	1991	2.2	5.9	2.3	3.5	2.1	3.9	2.1	...	1.2	1.6	1.4
	1994	3.0	8.4	3.0	4.8	2.7	5.9	2.5	...	1.7	2.3	2.0
	1997	2.9	8.4	3.0	5.0	2.6	5.2	2.4	...	1.6	2.3	2.0
	1999	2.8	7.7	3.4	5.5	2.9	5.7	2.7	...	2.1	1.5	1.3
Costa Rica	1990	4.0	5.4	4.4	6.5	3.3	6.5	3.7	2.9	1.5	1.9	1.7
	1994	4.4	6.9	4.6	7.1	3.5	6.1	3.7	2.9	1.6	2.7	2.5
	1997	4.7	6.2	5.3	7.7	3.9	7.6	4.2	2.8	1.8	2.2	2.1
	1999	4.7	7.9	5.1	8.0	3.9	7.7	4.1	3.3	1.7	2.5	2.1
Ecuador	1990	2.0	4.5	2.5	3.4	2.0	3.5	2.6	1.9	0.7	1.2	1.2
	1994	2.1	4.8	2.3	3.1	2.1	3.2	2.7	1.7	0.9	1.5	1.4
	1997	2.4	5.2	2.7	3.6	2.4	4.2	3.1	1.7	0.9	1.5	1.4
	1999	2.1	5.3	2.5	3.2	2.3	4.1	2.9	1.4	0.9	1.2	1.2
El Salvador	1995	2.5	5.8	3.0	4.9	2.5	5.7	2.5	1.5	0.9	1.6	1.6
	1997	3.1	8.1	4.0	6.0	3.6	6.6	3.1	2.0	1.8	1.8	1.7
	1999	3.5	8.8	4.2	6.9	3.5	6.8	3.5	2.1	2.0	2.0	2.0
Guatemala	1989	2.6	14.4	2.7	5.0	2.0	3.5	2.4	1.5	1.4	2.1	1.9
	1998	2.0	8.6	2.2	3.8	1.9	4.2	2.2	1.5	0.6	1.2	0.9
Honduras	1990	2.0	4.3	2.2	4.7	1.9	4.8	2.5	1.2	0.8	1.0	0.9
	1994	1.6	5.1	1.8	2.9	1.5	3.3	1.7	1.1	0.5	1.2	1.1
	1997	1.4	4.6	1.7	2.5	1.5	2.9	1.6	0.9	0.5	1.3	0.8
	1999	1.5	3.8	1.8	2.7	1.5	2.4	1.8	1.0	0.5	0.8	0.8

(continúa)

Cuadro 6.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)												
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados							Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total	Sector público	Sector privado						
						Total a/	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
								En establecimientos de más de 5 personas	En establecimientos de hasta 5 personas	Empleo doméstico		
México g/	1989	2.8	9.4	2.9	...	2.9	4.8	2.8	...	1.3	2.3	2.3
	1994	2.9	11.6	3.0	4.2	2.6	5.3	2.5	...	1.1	2.0	1.8
	1996	2.5	11.8	2.7	4.2	2.2	4.1	2.3	1.4	1.1	1.4	1.3
	1998	2.7	13.2	2.8	4.4	2.3	4.5	2.5	1.5	1.1	1.7	1.6
Nicaragua	1993	2.9	6.6	2.8	2.9	2.7	4.4	2.8	2.3	2.1	3.0	2.6
	1998	2.3	6.0	2.7	...	2.7	4.7	2.4	1.6	1.5	1.7	1.6
Panamá	1991	4.6	11.2	4.8	6.9	3.3	7.9	4.0	2.6	1.3	2.0	1.6
	1994	4.1	12.0	4.2	6.1	3.2	7.1	3.7	2.5	1.2	2.4	2.3
	1997	4.6	10.1	4.8	6.8	3.9	8.3	4.0	2.7	1.4	2.5	2.3
	1999	5.1	8.7	5.7	7.6	4.9	9.9	4.8	2.9	2.2	2.1	1.9
Paraguay (Asunción)	1990	2.3	9.0	1.8	2.4	1.6	3.4	2.4	1.5	0.8	3.0	2.9
	1994	2.6	8.6	2.3	3.4	2.0	4.3	2.5	1.8	1.2	2.3	2.3
	1996	2.7	7.2	2.8	4.7	2.3	5.5	2.8	2.0	1.2	2.2	1.9
	1999	3.0	8.9	3.0	4.4	2.7	5.5	3.1	2.4	1.7	2.2	1.9
(Urbano)	1994	2.4	8.5	2.2	3.4	1.9	4.2	2.4	1.7	1.2	2.0	2.0
	1996	2.4	7.5	2.6	4.6	2.0	5.3	2.7	2.0	1.1	1.9	1.7
	1999	2.7	9.3	2.8	4.3	2.5	5.6	3.0	2.2	1.6	1.8	1.6
República Dominicana	1997	3.6	7.7	3.7	4.7	3.4	7.0	3.5	2.0	1.4	3.3	2.9
Uruguay	1990	2.7	6.9	2.7	3.4	2.5	4.8	2.8	1.9	1.5	2.1	1.8
	1994	3.4	9.9	3.4	4.4	3.1	6.4	3.4	2.5	1.7	2.7	2.2
	1997	3.7	8.3	3.8	5.0	3.4	6.7	3.8	2.6	1.8	2.9	2.3
	1999	4.1	11.5	4.2	5.6	3.8	8.0	4.0	2.8	2.1	3.1	2.4
Venezuela h/	1990	3.3	10.8	3.2	3.6	2.9	4.9	3.3	2.4	1.7	2.9	2.7
	1994	3.0	7.5	2.8	2.3	3.2	5.6	3.3	2.0	1.5	3.1	2.6
	1997	2.8	9.4	2.4	2.6	2.2	4.5	2.2	1.6	1.2	3.4	3.0
	1999	2.9	7.9	3.0	3.3	2.8	5.4	2.6	1.9	1.3	2.5	2.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En los casos de Argentina, Brasil (1990), Chile (1990, 1994 y 1998), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público. Además, en los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se incluye -cuando se trata de los trabajadores no profesionales ni técnicos- a los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos no se proveen cifras para el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.
- b/ Incluye a los trabajadores por cuenta propia profesionales y técnicos.
- c/ La Encuesta Nacional de Hogares (PNAD) de Brasil no contiene información sobre el tamaño de los establecimientos, salvo para 1993, 1996 y 1999. Por lo tanto en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas fueron incluidos los asalariados con contrato de trabajo (carteira) y en la de los que ocupan hasta cinco personas, aquellos sin contrato de trabajo.
- d/ Incluye a los empleados del sector privado no profesionales ni técnicos que trabajan en establecimientos cuyo tamaño no se declara.
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993 la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).
- h/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 7

AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN INSERCIÓN LABORAL, ZONAS RURALES, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)								
País	Año	Total	Empleadores	Asalariados			Trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados	
				Total a/	Sector público	Sector privado	Total b/	Agricultura
Bolivia	1997	1.3	10.5	3.5	3.7	3.4	0.8	0.6
	1999	0.8	3.9	3.4	4.2	3.1	0.6	0.4
Brasil	1990	2.0	9.3	2.2	...	2.2	1.5	1.3
	1993	1.8	11.6	2.2	2.9	2.1	1.3	1.2
	1996	2.0	13.5	2.8	4.0	2.6	1.3	1.1
	1999	1.8	12.4	2.6	3.8	2.4	1.0	0.8
Chile c/	1990	4.9	39.3	3.2	...	3.2	5.2	5.2
	1994	4.6	28.9	3.8	...	3.8	4.2	3.7
	1996	4.2	24.0	3.5	5.3	3.4	4.0	3.5
	1998	5.3	32.8	3.9	...	3.9	6.3	5.3
Colombia	1991	3.1	10.7	2.9	...	2.9	2.3	1.7
	1994	2.5	5.8	2.8	...	2.8	1.9	2.3
	1997	2.7	7.0	3.1	5.0	3.0	1.8	1.8
	1999	2.9	5.6	3.9	6.4	3.7	1.8	1.9
Costa Rica	1990	5.1	9.9	5.2	8.4	4.6	4.0	3.9
	1994	5.8	11.7	5.4	8.4	4.9	5.4	6.3
	1997	5.6	9.3	5.5	9.4	4.9	4.7	4.9
	1999	6.3	11.3	6.0	10.2	5.4	5.3	5.5
El Salvador	1995	2.4	5.5	2.7	5.4	2.6	1.7	1.4
	1997	2.4	4.3	3.1	5.7	2.9	1.5	1.1
	1999	3.4	10.2	3.3	6.8	3.0	2.8	3.1
Guatemala	1989	2.5	21.1	2.3	4.9	2.1	2.4	2.1
	1998	2.2	19.5	2.2	3.7	2.1	1.7	1.7
Honduras	1990	1.7	14.7	2.2	4.9	1.8	1.3	1.3
	1994	2.0	8.6	2.1	4.1	1.8	1.8	1.8
	1997	1.7	9.0	1.6	3.4	1.4	1.4	1.5
	1999	1.8	6.1	2.0	4.4	1.7	1.4	1.4
México d/	1989	3.0	9.3	2.7	...	2.7	3.0	2.6
	1994	2.7	9.7	2.6	5.1	2.3	2.2	1.8
	1996	2.3	7.1	2.4	4.9	2.0	1.6	1.3
	1998	2.6	8.7	2.9	5.2	2.5	1.8	1.6
Nicaragua	1993	2.2	4.8	2.7	3.0	2.6	1.9	1.4
	1998	2.1	8.8	2.8	...	2.8	1.1	0.8
Panamá	1991	3.4	10.8	5.2	7.7	4.0	1.9	1.9
	1994	3.5	13.8	4.1	6.7	3.2	2.2	1.6
	1997	4.0	16.4	4.5	8.1	3.3	3.1	2.3
	1999	4.2	15.4	5.1	9.7	3.8	3.8	2.3
Paraguay	1999	2.2	17.2	2.9	5.3	2.5	1.3	1.1
República Dominicana	1997	4.3	6.6	4.3	6.2	3.8	4.2	3.4
Venezuela	1990	3.8	9.5	3.3	4.3	3.1	3.5	2.9
	1994	3.4	7.2	2.9	4.3	2.6	3.4	3.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Incluye a los empleados domésticos. En los casos de Brasil (1990), Chile (1990, 1994 y 1998), México (1989) y Nicaragua (1998) se incluye a los asalariados del sector público.

b/ Incluye asalariados en todas las ramas de actividad.

c/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

d/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).

Cuadro 8

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LAS MUJERES COMPARADO CON EL DE LOS HOMBRES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes)													
País	Año	Disparidad de los ingresos laborales por grupos de edad a/						Disparidad salarial por grupos de edad b/					
		Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más	Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	65	87	77	61	59	51	76	94	82	72	72	54
	1994	71	87	88	64	72	50	76	94	80	69	73	61
	1997	70	95	83	66	67	49	79	98	92	77	63	66
	1999	65	94	76	64	58	54	79	95	84	69	78	73
Bolivia	1989	59	71	65	54	54	62	60	74	68	60	54	44
	1994	54	61	61	58	44	40	61	60	71	68	56	40
	1997	60	60	67	72	47	40	69	65	74	85	64	39
	1999	63	72	70	55	67	54	72	81	85	63	72	63
Brasil	1990	56	73	64	54	47	35	65	77	71	63	57	52
	1993	56	74	66	53	43	48	61	77	68	56	46	54
	1996	62	77	67	62	51	54	68	80	72	65	56	60
	1999	64	80	71	62	57	54	70	83	75	66	58	59
Chile	1990	61	81	67	60	56	52	66	86	72	63	54	61
	1994	67	81	84	71	56	54	70	84	78	67	64	56
	1996	67	86	82	60	64	57	73	93	82	67	62	67
	1998	66	90	77	69	59	54	74	93	83	69	67	69
Colombia c/	1991	68	88	77	64	56	55	77	87	79	73	75	74
	1994	68	97	80	69	52	48	83	104	90	82	67	57
	1997	79	90	95	83	60	58	77	92	85	73	64	60
	1999	75	101	86	69	68	55	83	101	94	76	75	66
Costa Rica	1990	72	86	75	66	60	61	74	87	78	66	62	81
	1994	69	82	76	64	60	55	75	84	79	70	65	77
	1997	78	99	79	73	74	51	87	102	87	79	87	55
	1999	70	87	75	67	64	59	78	89	79	75	72	70
Ecuador	1990	66	80	70	61	60	64	67	78	73	63	63	60
	1994	67	77	73	65	57	58	76	81	82	76	65	72
	1997	75	90	84	70	64	67	83	94	90	77	75	62
	1999	67	99	82	61	51	55	83	99	93	78	69	52
El Salvador	1995	63	76	70	58	52	47	79	80	81	72	85	61
	1997	72	97	74	69	64	53	88	100	85	85	91	73
	1999	75	84	79	71	67	60	88	87	93	84	86	70
Guatemala	1998	55	57	51	58	58	56	70	86	83	67	72	48
Honduras	1990	59	77	68	51	56	43	78	81	80	70	89	103
	1994	63	80	72	69	47	43	73	82	80	82	67	32
	1997	60	81	72	58	47	37	77	86	78	74	70	72
	1999	65	78	65	68	51	52	78	80	76	82	69	86
México	1989	55	71	63	52	46	48	73	86	78	69	59	82
	1994	57	83	65	57	45	46	68	91	74	78	49	49
	1996	59	83	61	62	45	52	73	90	73	66	72	84
	1998	57	84	71	51	54	40	72	89	79	68	63	72
Nicaragua	1993	77	107	87	62	64	67	77	90	88	54	64	95
	1998	65	92	73	60	47	43	77	103	77	73	56	47

(continúa)

Cuadro 8 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LAS MUJERES COMPARADO CON EL DE LOS HOMBRES, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes)													
País	Año	Disparidad de los ingresos laborales por grupos de edad a/						Disparidad salarial por grupos de edad b/					
		Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más	Total	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 años y más
Panamá	1991	80	76	90	83	73	74	80	71	89	86	74	67
	1994	71	81	77	73	58	54	75	80	86	73	63	52
	1997	74	82	81	71	73	52	76	81	87	73	73	50
	1999	83	101	90	79	79	61	84	99	92	77	78	59
Paraguay (Asunción)	1990	55	63	68	52	50	60	63	66	72	58	63	77
	1994	60	73	71	58	68	33	64	77	71	58	70	47
	1996	64	76	66	71	48	56	76	76	74	82	72	93
	1999	71	96	84	67	69	44	79	102	92	70	62	69
República Dominicana	1997	75	95	77	76	51	69	90	97	87	90	84	67
Uruguay	1990	45	63	60	46	37	30	64	79	73	61	59	49
	1994	61	76	65	58	56	51	63	76	66	59	60	51
	1997	65	79	72	63	59	55	67	79	71	64	60	55
	1999	67	79	77	63	65	55	68	79	75	61	66	53
Venezuela d/	1990	66	80	72	64	57	48	79	86	82	74	68	66
	1994	70	96	77	64	56	57	83	106	84	75	67	69
	1997	69	84	77	62	60	55	83	92	87	77	73	65
	1999	74	92	76	71	65	57	91	99	91	85	79	91

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere a las diferencias de ingreso en el total de la población ocupada.

b/ Se refiere a las diferencias de ingreso entre los asalariados.

c/ A partir de 1993 la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

d/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 9

**AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LAS MUJERES COMPARADO CON EL DE LOS HOMBRES,
SEGÚN NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS, 1990-1999**
(En porcentajes)

País	Año	Disparidad de los ingresos laborales por años de instrucción a/						Disparidad salarial por años de instrucción b/					
		Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina c/ (Gran Buenos Aires)	1990	65	...	66	...	63	51	76	...	73	...	68	62
	1994	71	...	62	65	65	63	76
	1997	70	73	66	67	69	55	79	60	57	69	76	64
	1999	65	64	82	58	63	51	79	63	72	58	77	66
Bolivia	1989	59	62	67	76	77	46	60	40	49	69	85	49
	1994	54	60	58	67	65	54	61	44	48	56	70	60
	1997	60	59	66	53	75	57	69	61	46	48	79	60
	1999	63	63	64	66	71	66	72	55	59	42	82	65
Brasil	1990	56	46	46	50	49	49	65	56	51	57	53	52
	1993	56	49	46	49	51	46	61	56	51	56	55	45
	1996	62	57	52	53	53	53	68	65	57	57	57	56
	1999	64	58	51	55	55	56	70	65	58	59	60	57
Chile	1990	61	56	58	69	62	49	66	64	49	66	69	55
	1994	67	93	70	69	69	54	70	83	68	66	72	58
	1996	67	83	65	70	70	53	73	74	68	74	73	60
	1998	66	71	63	65	71	54	74	72	64	71	75	63
Colombia d/	1991	68	57	60	70	72	64	77	71	70	78	78	68
	1994	68	59	68	65	71	57	83	80	81	83	86	66
	1997	79	69	65	108	88	61	77	74	74	71	78	67
	1999	75	66	71	75	73	70	83	79	86	84	81	74
Costa Rica	1990	72	53	62	65	73	67	74	58	66	67	76	66
	1994	69	61	55	58	64	70	75	61	63	68	67	75
	1997	78	61	58	61	77	75	87	66	67	70	83	77
	1999	70	49	62	57	65	68	78	59	68	66	73	71
Ecuador	1990	66	49	57	68	79	57	67	42	47	70	77	56
	1994	67	60	61	70	72	59	76	56	59	68	83	66
	1997	75	57	60	61	87	70	83	64	61	63	92	72
	1999	67	63	62	62	71	60	83	55	60	68	87	71
El Salvador	1995	63	61	56	63	69	65	79	59	56	67	83	72
	1997	72	77	67	76	80	66	88	80	73	85	92	71
	1999	75	73	75	78	80	71	88	79	79	81	88	73
Guatemala	1998	55	57	51	58	58	56	70	56	59	66	71	62
Honduras	1990	59	47	50	58	69	54	78	55	55	66	82	63
	1994	63	60	65	66	67	56	73	57	70	80	74	63
	1997	60	52	56	58	66	54	77	60	69	76	76	59
	1999	65	60	62	59	66	66	78	67	68	60	76	74
México e/	1990	55	61	50	70	62	46	73	71	68	83	78	63
	1994	57	...	58	65	70	48	68	...	59	78	76	56
	1996	59	56	67	71	63	49	73	67	69	81	76	63
	1998	57	72	56	65	63	47	72	61	65	75	78	56

(continúa)

Cuadro 9 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LAS MUJERES COMPARADO CON EL DE LOS HOMBRES, SEGÚN NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes)													
País	Año	Disparidad de los ingresos laborales por años de instrucción a/						Disparidad salarial por años de instrucción b/					
		Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	Total	0 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Nicaragua	1993	77	95	73	71	91	58	77	86	76	72	77	65
	1998	65	68	80	67	52	53	77	72	75	64	57	67
Panamá	1991	80	45	55	67	80	72	80	45	52	66	78	76
	1994	71	51	52	60	68	61	75	57	53	62	76	62
	1997	74	58	54	58	69	62	76	49	55	65	75	63
	1999	83	57	60	66	75	71	84	58	58	68	80	71
Paraguay	1990	55	69	55	60	65	42	63	51	50	58	72	58
	1994	60	64	59	66	67	52	64	64	59	66	75	51
	1996	64	69	62	55	67	58	76	56	61	60	81	70
	1999	71	62	76	62	74	63	79	72	75	61	86	67
República Dominicana	1997	75	57	60	60	75	66	90	67	71	67	95	75
Uruguay	1990	45	50	41	40	42	37	64	52	57	63	59	57
	1994	61	59	55	55	56	50	63	57	54	59	59	51
	1997	65	54	57	60	58	56	67	51	57	62	62	57
	1999	67	61	58	61	62	56	68	54	56	63	65	58
Venezuela f/	1990	66	62	58	68	61	62	79	73	68	77	78	71
	1994	70	68	62	70	63	67	84	83	75	90	71	76
	1997	69	71	61	64	60	63	83	74	73	71	75	70
	1999	74	71	65	66	63	66	91	83	73	75	77	74

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere a las diferencias de ingreso en el total de la población ocupada.

b/ Se refiere a las diferencias de ingreso entre los asalariados.

c/ Los niveles de instrucción de Argentina son 0 a 6 años; 7 a 9 años; 10 años y más.

d/ A partir de 1993 la cobertura geográfica de la encuesta se amplió hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

e/ Salvo para 1990, los niveles de instrucción de México son 0 a 5 años; 6 a 9 años; 10 a 12 años y 13 años y más.

f/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 10

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Empleo doméstico	Trabajadores independientes no calificados b/		
			Empleadores	Asalariados				Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	44.4	3.8	12.0	0.4	11.6	5.7	22.9	6.9	16.0
	1994	42.7	3.4	14.8	1.4	13.4	4.8	19.7	6.0	13.6
	1997	41.4	3.7	15.9	1.4	14.5	5.1	16.7	4.6	12.1
	1999	40.4	3.2	14.9	1.3	13.6	5.3	17.0	5.1	11.9
	(Urbano)	1999	42.2	3.2	14.9	1.4	13.5	5.8	18.3	5.4
Bolivia	1989	58.5	1.1	10.5	0.9	9.6	5.8	41.1	9.8	30.0
	1994	63.0	6.2	14.8	1.0	13.8	5.2	36.8	9.1	27.1
	1997	65.5	5.0	12.0	1.0	11.0	3.6	44.9	11.9	27.7
	1999	64.3	2.5	12.8	1.0	11.8	3.1	45.9	12.1	31.1
Brasil d/	1990	49.2	...	21.6	4.3	17.3	6.2	21.4	3.5	15.8
	1993	45.5	1.9	9.0	0.5	8.5	8.2	26.4	4.7	16.0
	1996	46.7	2.0	10.6	0.7	9.9	8.4	25.7	5.0	15.9
	1999	47.3	2.2	10.1	1.7	8.4	8.5	26.5	5.2	16.4
Chile e/	1990	38.8	0.8	10.3	0.9	9.4	7.0	20.7	5.7	14.0
	1994	34.6	1.8	9.4	0.8	8.6	6.1	17.3	5.4	11.2
	1996	34.3	2.0	10.1	1.0	9.1	6.1	16.1	4.2	10.7
	1998	34.4	2.6	10.7	1.0	9.7	5.9	15.2	4.1	10.2
Colombia f/	1991	5.6	27.3	6.4	20.0
	1994	5.3	25.0	6.2	18.4
	1997	4.5	30.8	7.1	22.9
	1999	5.2	35.7	7.5	26.7
Costa Rica	1990	36.9	4.4	10.5	0.8	9.7	4.4	17.6	6.4	10.1
	1994	38.0	5.0	12.6	1.4	11.2	3.8	16.6	4.6	11.1
	1997	39.6	6.1	12.2	1.0	11.2	3.5	17.8	4.8	12.4
	1999	41.6	6.0	13.2	1.4	11.8	5.1	17.3	4.5	11.9
Ecuador	1990	54.5	3.6	11.9	0.6	11.3	4.5	34.5	7.8	24.4
	1994	56.5	6.5	13.2	1.0	12.2	4.7	32.1	6.0	24.1
	1997	56.6	6.2	12.6	0.8	11.8	5.0	32.8	6.9	23.6
	1999	58.9	7.0	15.0	1.6	13.4	5.4	31.5	5.6	23.8
El Salvador	1990	55.6	2.7	13.6	0.3	13.3	6.1	33.2	8.7	21.8
	1995	51.0	4.9	10.7	0.2	10.5	4.4	31.0	8.1	20.2
	1997	52.5	4.8	11.8	0.6	11.2	4.4	31.5	7.1	21.5
	1999	52.2	4.1	14.6	0.8	13.8	4.3	29.2	6.7	20.0
Guatemala	1989	54.6	2.1	14.6	0.8	13.8	7.0	30.9	7.4	14.9
	1998	55.1	3.6	20.5	2.9	17.6	6.7	24.3	7.3	11.6
Honduras	1990	53.3	1.0	13.9	0.7	13.2	6.7	31.7	8.9	18.7
	1994	49.9	3.0	11.9	0.9	11.0	5.4	29.5	8.1	16.1
	1997	54.3	5.3	11.6	0.6	11.0	5.1	32.3	7.6	20.4
	1999	55.2	5.1	12.2	1.0	11.2	4.8	33.1	7.4	22.0

(continúa)

Cuadro 10 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Empleo doméstico	Trabajadores independientes no calificados b/		
			Empleadores	Asalariados				Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
México g/	1989	...	2.8	2.7	18.9	3.0	12.5
	1994	...	3.3	3.7	20.4	4.2	14.9
	1996	43.6	3.8	15.8	1.2	14.6	3.6	20.4	3.8	15.7
	1998	44.3	3.9	15.9	1.0	14.9	4.1	20.4	3.2	16.4
Nicaragua	1993	49.2	0.5	13.3	1.6	11.7	6.2	29.2	7.7	17.5
	1998	60.6	3.0	16.2	1.7	14.5	6.4	35.0	4.3	26.4
Panamá	1991	37.9	2.6	5.8	0.6	5.2	7.0	22.5	4.3	11.2
	1994	35.4	1.7	6.0	0.3	5.7	7.3	20.4	4.4	11.4
	1997	36.6	2.0	6.4	0.8	5.6	6.4	21.8	4.8	12.6
	1999	37.3	2.1	7.2	0.7	6.5	6.1	21.9	4.6	13.5
Paraguay (Asunción)	1990	55.5	6.8	17.0	1.1	15.9	10.5	21.2	5.2	15.5
	1994	54.6	7.1	14.6	1.3	13.3	11.5	21.4	5.3	15.9
	1996	57.1	4.7	14.6	0.8	13.8	9.3	28.5	6.4	19.9
	1999	54.4	4.7	14.9	1.3	13.6	9.1	25.7	5.7	19.2
(Urbano)	1994	61.2	7.2	16.0	1.0	15.0	10.5	27.5	5.4	20.2
	1996	62.9	4.9	15.0	0.6	14.4	9.3	33.7	5.6	24.3
	1999	61.1	5.0	15.8	0.9	14.9	9.2	31.1	5.5	23.0
República Dominicana	1992	3.2	32.8	5.6	23.0
	1995	3.8	30.6	4.9	22.1
	1997	47.0	2.1	9.1	0.7	8.4	4.4	31.4	6.8	21.3
Uruguay	1990	39.2	2.7	10.6	0.3	10.3	6.9	19.0	5.6	12.0
	1994	40.3	3.3	9.9	0.5	9.4	7.0	20.1	6.4	12.7
	1997	42.2	2.8	11.5	0.5	11.0	7.1	20.8	6.8	12.7
	1999	41.5	2.4	11.0	0.6	10.4	7.5	20.6	7.0	12.7
Venezuela h/	1990	39.2	4.9	6.7	0.2	6.5	6.3	21.3	4.1	15.3
	1994	45.3	4.2	9.7	0.5	9.2	4.0	27.4	5.9	19.0
	1997	49.4	3.6	11.3	0.5	10.8	4.3	30.2	6.1	19.9
	1999	53.7	3.9	12.6	0.5	12.1	2.0	35.2	6.7	23.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se incluye a los que tienen hasta cuatro empleados.

b/ Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica. Salvo en el caso de Argentina (1994, 1997 y 1998), en que no se pudo separar los calificados de los no calificados.

c/ Incluye a los ocupados en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.

d/ Hasta 1990 se clasificó bajo el encabezamiento "Microempresa" a los asalariados sin contrato de trabajo. En 1993 y de 1996 a 1999, en cambio, esta categoría comprende a los asalariados en establecimientos que ocupan hasta cinco personas, de modo que las cifras no son comparables con las de años anteriores.

e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

f/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG). En la encuesta correspondiente a 1994 no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos en que laboraban los asalariados.

h/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 10.1

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Empleo doméstico	Trabajadores independientes no calificados b/		
			Empleadores	Asalariados				Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	42.2	4.6	12.7	0.3	12.4	1.8	23.1	8.5	14.6
	1994	41.3	4.4	15.7	1.2	14.5	0.4	20.8	8.4	12.3
	1997	39.8	4.5	18.7	1.2	17.5	0.4	16.2	6.0	10.2
	1999	39.4	4.2	16.9	1.0	15.9	0.2	18.1	7.2	10.8
	(Urbano)	1999	40.9	4.1	16.8	1.2	15.6	0.2	19.8	7.6
Bolivia	1989	48.8	1.5	13.8	0.9	12.9	0.6	32.9	11.5	19.9
	1994	53.7	8.6	19.2	0.9	18.3	0.5	25.4	9.1	15.6
	1997	58.4	7.1	15.2	1.1	14.1	0.5	35.6	12.6	17.1
	1999	57.2	3.0	16.7	1.1	15.6	0.3	37.2	12.7	19.5
Brasil d/	1990	44.7	...	23.4	2.3	21.1	0.4	20.9	5.1	12.9
	1993	40.6	2.5	10.6	0.5	10.1	0.8	26.7	6.7	14.8
	1996	42.6	2.5	12.0	0.6	11.4	0.8	27.3	7.4	15.1
	1999	43.7	2.9	11.6	1.1	10.5	0.8	28.4	7.5	15.9
Chile e/	1990	33.8	0.9	10.7	0.7	10.0	0.2	22.0	6.3	14.3
	1994	30.1	2.0	9.8	0.7	9.1	0.1	18.2	6.2	10.9
	1996	30.2	2.3	10.7	1.0	9.7	0.2	17.0	4.8	10.6
	1998	30.0	2.9	10.5	0.8	9.7	0.1	16.5	5.0	10.2
Colombia f/	1991	0.3	28.4	6.2	20.9
	1994	0.2	26.0	6.7	18.7
	1997	0.2	32.6	8.4	22.9
	1999	0.5	37.3	8.4	26.5
Costa Rica	1990	35.1	5.7	11.1	0.8	10.3	0.2	18.1	5.7	10.8
	1994	36.2	6.1	13.1	1.5	11.6	0.3	16.7	4.4	10.9
	1997	38.5	7.8	13.4	1.0	12.4	0.2	17.1	5.2	11.0
	1999	39.5	7.7	14.7	1.4	13.3	0.4	16.7	4.4	10.9
Ecuador	1990	50.7	4.3	14.2	0.4	13.8	0.6	31.6	8.0	20.7
	1994	52.5	7.8	15.9	0.9	15.0	0.3	28.5	5.8	20.2
	1997	52.2	7.6	14.8	0.6	14.2	0.7	29.1	6.5	19.5
	1999	54.9	8.6	18.0	1.4	16.6	0.6	27.7	5.4	19.6
El Salvador	1990	45.9	3.8	18.6	0.4	18.2	0.4	23.1	6.0	12.8
	1995	43.0	6.7	14.5	0.2	14.3	0.5	21.3	5.2	11.5
	1997	44.7	6.3	15.2	0.6	14.6	0.3	22.9	5.6	12.2
	1999	45.7	5.5	19.6	1.0	18.6	0.6	20.0	4.2	11.3
Guatemala	1989	49.5	2.5	18.2	0.8	17.4	0.2	28.6	5.7	10.1
	1998	53.4	4.7	26.1	3.3	22.8	1.5	21.1	5.2	7.8
Honduras	1990	46.6	1.2	18.2	0.8	17.4	0.4	26.8	6.6	13.5
	1994	43.0	4.1	12.0	0.9	14.2	0.0	26.9	5.6	12.6
	1997	52.1	7.3	16.2	0.4	15.8	0.8	27.8	4.7	15.7
	1999	52.4	6.7	17.1	0.9	16.2	0.6	28.0	4.1	17.6

(continúa)

Cuadro 10.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Empleo doméstico	Trabajadores independientes no calificados b/		
			Empleadores	Asalariados				Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
México g/	1989	...	3.5	0.6	17.5	2.5	10.5
	1994	...	4.4	0.6	17.9	4.0	12.6
	1996	41.7	5.1	18.3	1.0	17.3	0.9	17.4	3.6	12.9
	1998	41.3	5.1	18.4	1.0	17.4	1.2	16.6	2.6	13.2
Nicaragua	1993	45.8	0.6	17.4	1.2	16.2	0.3	27.5	6.8	14.2
	1998	55.8	4.2	20.4	1.7	18.7	1.2	30.0	4.9	18.2
Panamá	1991	39.3	3.4	6.5	0.6	5.9	0.6	28.8	5.4	12.7
	1994	35.7	2.1	7.0	0.3	6.7	1.2	25.4	5.6	13.0
	1997	36.6	2.7	6.7	0.7	6.0	1.0	26.2	6.0	13.2
	1999	36.7	2.5	8.1	0.7	7.4	1.0	25.1	5.5	13.7
Paraguay (Asunción)	1990	48.0	10.2	21.4	0.8	20.6	0.0	16.4	4.3	11.5
	1994	47.9	8.8	19.3	1.2	18.1	1.6	18.2	5.4	11.9
	1996	51.1	6.2	19.3	0.9	18.4	1.0	24.6	6.6	15.0
	1999	45.4	6.1	16.4	1.9	14.5	0.8	22.1	5.7	15.3
(Urbano)	1994	55.1	9.0	21.2	1.0	20.2	1.4	23.5	5.3	15.4
	1996	56.7	6.6	20.1	0.8	19.3	0.9	29.1	6.0	18.4
	1999	53.7	6.8	19.1	1.2	17.9	0.9	26.9	5.3	18.2
República Dominicana	1992	0.2	36.2	5.8	24.0
	1995	0.2	35.1	5.3	24.4
	1997	47.5	2.7	9.9	0.5	9.4	0.4	34.5	8.7	20.8
Uruguay	1990	34.8	3.7	12.1	0.3	11.8	0.1	18.9	5.4	11.7
	1994	36.0	4.2	11.0	0.4	10.6	0.1	20.7	6.9	12.4
	1997	38.2	3.6	12.3	0.3	12.0	0.2	22.1	8.1	12.8
	1999	38.6	3.1	12.1	0.4	11.7	0.2	23.2	9.0	13.0
Venezuela h/	1990	39.1	6.5	8.2	0.2	8.0	1.9	22.5	4.0	15.7
	1994	47.8	5.8	11.3	0.4	10.9	1.5	29.2	6.5	19.0
	1997	50.4	4.8	13.8	0.4	13.4	1.5	30.3	6.8	17.4
	1999	54.6	5.2	15.2	0.3	14.9	0.1	34.1	7.2	19.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se incluye a los que tienen hasta cuatro empleados.
- b/ Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica. Salvo en el caso de Argentina (1994, 1997 y 1998), en que no se pudo separar los calificados de los no calificados.
- c/ Incluye a los ocupados en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.
- d/ Hasta 1990 se clasificó bajo el encabezamiento "Microempresa" a los asalariados sin contrato de trabajo. En 1993 y de 1996 a 1999, en cambio, esta categoría comprende a los asalariados en establecimientos que ocupan hasta cinco personas, de modo que las cifras no son comparables con las de años anteriores.
- e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).
- f/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG). En la encuesta correspondiente a 1994 no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos en que laboraban los asalariados.
- h/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 10.2

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Empleo doméstico	Trabajadores independientes no calificados b/		
			Empleadores	Asalariados				Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	48.0	2.3	10.6	0.4	10.2	12.5	22.6	4.0	18.6
	1994	45.6	1.6	13.0	1.5	11.5	12.3	18.7	1.8	16.8
	1997	43.9	2.5	11.2	1.6	9.6	12.7	17.5	2.3	15.2
	1999	41.9	1.7	12.2	1.9	10.3	12.7	15.3	1.9	13.4
	(Urbano)	1999	44.0	1.7	11.8	1.6	10.2	14.2	16.3	2.1
Bolivia	1989	71.5	0.4	6.1	0.9	5.2	12.9	52.1	7.5	43.6
	1994	75.0	3.1	9.0	1.1	7.9	11.2	51.7	9.1	42.1
	1997	75.2	2.1	7.9	0.9	7.0	7.7	57.5	11.1	41.8
	1999	75.3	1.7	7.6	0.7	6.9	6.7	59.3	11.3	45.9
Brasil d/	1990	56.8	...	18.8	7.6	11.2	15.6	22.4	0.9	20.7
	1993	53.2	1.0	6.6	0.6	6.0	19.8	25.8	1.6	17.8
	1996	52.7	1.3	8.3	0.7	7.6	19.7	23.4	1.6	17.1
	1999	53.1	1.3	8.0	2.7	5.3	20.3	23.5	1.7	17.1
Chile e/	1990	47.5	0.5	9.5	1.3	8.2	19.4	18.1	4.6	13.3
	1994	42.7	1.5	8.6	0.9	7.7	16.8	15.8	4.0	11.7
	1996	41.5	1.5	9.2	1.0	8.2	16.3	14.5	3.2	10.9
	1998	41.7	2.1	11.1	1.4	9.7	15.2	13.3	2.8	10.3
Colombia f/	1991	13.6	25.5	6.8	18.6
	1994	12.7	23.4	5.4	17.9
	1997	10.4	28.2	5.2	22.9
	1999	11.5	33.4	6.3	26.8
Costa Rica	1990	40.1	1.9	9.5	0.9	8.6	12.0	16.7	7.7	8.9
	1994	40.9	3.1	11.5	1.2	10.3	10.1	16.2	4.9	11.3
	1997	41.3	3.3	10.1	0.9	9.2	9.2	18.7	4.0	14.7
	1999	45.1	3.3	11.0	1.6	9.4	12.6	18.2	4.6	13.5
Ecuador	1990	61.1	2.3	7.6	0.9	6.7	11.6	39.6	7.5	31.0
	1994	62.8	4.4	8.8	1.1	7.7	11.8	37.8	6.2	30.5
	1997	62.8	4.0	9.2	1.2	8.0	10.9	38.7	7.5	30.2
	1999	65.1	4.4	10.3	1.9	8.4	13.1	37.3	5.8	30.5
El Salvador	1990	67.9	1.4	7.5	0.3	7.2	13.1	45.9	12.1	33.0
	1995	60.8	2.8	6.1	0.3	5.8	9.1	42.8	11.6	30.7
	1997	62.0	3.0	7.6	0.5	7.1	9.4	42.0	8.9	32.8
	1999	59.6	2.6	8.9	0.5	8.4	8.6	39.5	9.5	29.7
Guatemala	1989	62.7	1.3	8.7	0.8	7.9	18.1	34.6	10.1	22.7
	1998	57.3	2.2	13.3	2.3	11.0	13.3	28.5	10.0	16.5
Honduras	1990	63.3	0.8	7.5	0.6	6.9	16.0	39.0	12.3	26.5
	1994	55.6	1.5	6.8	0.8	6.0	13.7	33.6	12.0	21.4
	1997	57.3	2.7	5.5	0.8	4.7	10.7	38.4	11.4	26.7
	1999	58.5	3.2	6.3	1.2	5.1	9.9	39.1	11.3	27.2

(continúa)

Cuadro 10.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En porcentajes del total de la población urbana ocupada)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Empleo doméstico	Trabajadores independientes no calificados b/		
			Empleadores	Asalariados				Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
México g/	1989	...	1.2	7.1	21.9	4.0	16.7
	1994	...	1.1	9.6	25.0	4.6	19.1
	1996	47.6	2.0	11.4	1.5	9.9	8.3	25.9	4.2	20.7
	1998	49.6	1.9	11.6	0.9	10.7	9.0	27.1	4.4	22.0
Nicaragua	1993	54.2	0.5	7.9	2.2	5.7	14.1	31.7	9.0	22.0
	1998	67.4	1.3	10.7	1.8	8.9	13.5	41.9	3.6	37.4
Panamá	1991	35.1	1.3	4.5	0.5	4.0	17.8	11.5	2.3	8.6
	1994	35.3	1.0	4.5	0.5	4.0	18.1	11.7	2.3	8.7
	1997	37.1	1.0	6.0	1.0	5.0	15.3	14.8	2.8	11.8
	1999	38.6	1.4	6.0	0.8	5.2	14.4	16.8	3.1	13.3
Paraguay (Asunción)	1990	65.9	2.0	10.2	1.6	8.6	25.6	28.1	6.5	21.1
	1994	65.0	4.9	9.0	1.5	7.5	24.3	26.8	5.3	21.1
	1996	65.1	2.8	8.4	0.6	7.8	20.0	33.9	6.3	26.4
	1999	66.8	2.9	13.0	0.6	12.4	20.1	30.8	5.8	24.5
(Urbano)	1994	69.9	4.7	8.5	1.0	7.5	23.3	33.4	5.6	27.0
	1996	71.4	2.5	8.1	0.4	7.7	20.8	40.0	5.1	32.4
	1999	71.5	2.5	11.3	0.5	10.8	20.7	37.0	5.8	29.7
República Dominicana	1992	8.7	26.7	5.2	21.4
	1995	10.5	21.9	4.0	17.8
	1997	46.0	1.1	7.6	0.9	6.7	11.6	25.7	3.6	22.0
Uruguay	1990	46.1	1.4	8.5	0.4	8.1	17.1	19.1	6.0	12.3
	1994	46.3	2.0	8.2	0.6	7.6	16.8	19.3	5.7	13.0
	1997	46.8	1.6	10.2	0.7	9.5	16.7	18.3	5.0	12.6
	1999	45.4	1.6	9.3	0.7	8.6	17.4	17.1	4.4	12.2
Venezuela h/	1990	39.6	1.7	3.7	0.3	3.4	15.0	19.2	4.4	14.6
	1994	40.7	1.2	6.6	0.7	5.9	9.0	23.9	4.7	19.0
	1997	47.9	1.4	6.6	0.8	5.8	9.7	30.2	5.0	24.6
	1999	52.2	1.5	7.7	0.7	7.0	5.6	37.4	5.9	30.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se incluye a los que tienen hasta cuatro empleados.

b/ Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica. Salvo en el caso de Argentina (1994, 1997 y 1998), en que no se pudo separar los calificados de los no calificados.

c/ Incluye a los ocupados en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.

d/ Hasta 1990 se clasificó bajo el encabezamiento "Microempresa" a los asalariados sin contrato de trabajo. En 1993 y de 1996 a 1999, en cambio, esta categoría comprende a los asalariados en establecimientos que ocupan hasta cinco personas, de modo que las cifras no son comparables con las de años anteriores.

e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

f/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG). En la encuesta correspondiente a 1994 no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos en que laboraban los asalariados.

h/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 11

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Trabajadores independientes no calificados b/			Empleo doméstico
			Empleadores	Asalariados			Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	6.6	18.4	3.7	7.6	3.6	7.2	7.0	7.4	2.5
	1994	8.3	24.8	5.0	7.7	4.7	9.1	8.8	9.2	3.3
	1997	6.5	23.1	3.9	6.0	3.7	6.5	6.6	6.4	2.6
	1999	5.7	19.7	3.8	6.1	3.5	8.1	5.7	6.2	2.4
Bolivia	1989	3.6	11.8	2.8	4.5	2.6	3.9	3.3	4.0	1.6
	1994	2.7	8.1	2.4	3.6	2.0	2.2	2.0	2.3	1.0
	1997	2.6	7.1	2.5	5.7	2.2	2.2	2.1	2.6	1.1
	1999	2.5	7.1	2.6	5.0	2.4	2.2	1.9	2.4	1.8
Brasil d/	1990	4.1	...	3.6	7.6	2.6	3.4	3.3	3.6	1.0
	1993	2.6	11.3	2.2	5.1	2.0	2.7	2.6	3.4	1.1
	1996	3.4	14.0	2.7	5.9	2.5	3.7	3.5	4.5	1.5
	1999	3.0	10.3	2.4	3.6	2.1	2.8	2.7	3.5	1.4
Chile e/	1990	3.8	18.8	2.6	4.8	2.4	4.7	3.9	5.1	1.4
	1994	4.3	17.4	3.2	6.8	2.9	4.6	4.6	4.6	2.0
	1996	5.6	22.3	3.4	7.9	2.9	6.0	5.5	6.1	2.0
	1998	5.9	24.0	3.4	7.1	3.0	5.9	5.5	6.2	2.2
Colombia f/	1991	2.2	2.0	2.3	1.3
	1994	2.9	2.6	2.9	1.7
	1997	2.8	2.4	2.8	1.6
	1999	1.9	1.6	1.9	2.1
Costa Rica	1990	3.7	6.5	3.5	6.7	3.2	3.4	2.9	3.6	1.5
	1994	4.3	9.2	3.8	6.3	3.5	4.0	2.9	4.2	1.6
	1997	3.9	7.4	3.3	4.9	3.2	3.6	3.3	3.7	1.8
	1999	4.5	9.3	4.0	7.0	3.6	4.0	3.6	4.1	1.7
Ecuador	1990	2.0	4.0	2.3	3.4	2.3	1.8	1.7	1.9	0.8
	1994	2.4	6.1	2.0	3.9	1.9	2.0	1.8	2.1	0.9
	1997	2.3	5.5	2.0	5.0	1.8	2.1	1.8	2.2	0.9
	1999	1.9	6.0	1.8	2.6	1.7	1.8	1.6	1.9	0.9
El Salvador	1995	2.4	6.8	2.0	3.1	2.0	2.0	1.6	2.4	1.0
	1997	2.6	7.3	2.5	6.4	2.3	2.1	2.0	2.4	1.9
	1999	2.9	8.8	2.5	4.4	2.4	2.4	1.7	2.6	2.1
Guatemala	1989	2.8	13.1	1.8	3.9	1.7	2.8	2.4	3.5	1.4
	1998	2.0	7.7	2.2	4.1	1.9	1.3	1.2	1.5	0.7
Honduras	1990	1.6	7.6	1.7	3.9	1.6	1.5	1.1	1.6	0.8
	1994	1.6	4.8	1.4	2.5	1.3	1.6	1.1	1.7	0.5
	1997	1.5	4.7	1.2	2.6	1.1	1.2	1.0	1.3	0.5
	1999	1.5	4.4	1.1	1.7	1.1	1.2	1.1	1.3	0.5

(continúa)

Cuadro 11 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Trabajadores independientes no calificados b/			Empleo doméstico
			Empleadores	Asalariados			Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
México g/	1989	...	15.5	3.8	3.5	5.2	1.4
	1994	...	13.8	3.3	2.7	3.6	1.2
	1996	3.2	13.7	1.8	2.9	1.7	2.3	1.9	2.4	1.2
	1998	3.1	11.7	2.1	4.7	1.9	2.6	2.1	2.7	1.3
Nicaragua	1993	3.0	8.8	2.6	4.8	2.3	2.9	2.7	3.3	2.1
	1998	2.3	6.9	2.2	5.2	1.9	2.0	2.1	2.1	1.7
Panamá	1991	2.5	7.7	3.1	7.4	2.6	2.3	2.5	3.0	1.3
	1994	3.3	11.4	2.6	6.4	2.4	3.4	3.7	4.2	1.3
	1997	3.4	11.6	2.9	5.1	2.6	3.4	3.7	3.9	1.4
	1999	3.5	11.4	3.2	7.8	2.7	3.0	3.1	3.4	2.2
Paraguay (Asunción)	1990	3.1	8.2	1.9	3.8	1.8	3.6	2.4	4.1	0.8
	1994	3.0	8.7	2.3	4.9	2.0	2.4	2.0	2.6	1.3
	1996	2.5	7.2	2.3	3.3	2.3	2.5	2.1	2.7	1.2
	1999	2.6	6.2	2.5	4.1	2.3	2.2	2.2	2.3	1.7
(Urbano)	1994	2.7	8.3	2.1	4.7	1.9	2.3	1.9	2.4	1.2
	1996	2.4	6.8	2.2	3.7	2.1	2.3	2.2	2.5	1.1
	1999	2.3	5.7	2.2	3.8	2.1	2.0	1.9	2.1	1.6
República Dominicana	1997	3.8	9.9	2.6	5.1	2.4	4.0	4.2	4.1	1.4
Uruguay	1990	3.8	8.9	2.6	4.8	2.5	5.1	2.1	3.0	1.5
	1994	3.5	10.5	3.0	4.6	2.9	3.5	2.8	3.9	1.7
	1997	3.5	9.8	3.1	4.2	3.0	3.5	2.8	3.8	1.8
	1999	3.7	11.6	3.3	5.4	3.2	3.6	3.1	3.9	2.1
Venezuela h/	1990	4.2	9.5	2.5	3.5	2.5	4.3	4.0	4.5	2.1
	1994	3.6	7.5	2.2	6.0	2.0	3.8	3.5	4.0	1.9
	1997	3.6	9.4	1.8	2.9	1.7	3.8	4.0	4.2	1.4
	1999	3.1	7.6	2.1	4.0	2.0	3.1	3.3	3.1	1.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se incluye a los que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos no se proveen cifras para el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.

b/ Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

c/ Incluye a personas ocupadas en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.

d/ En el año 1990 se incluyó a los asalariados sin contrato de trabajo bajo el encabezamiento "Microempresas".

e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

f/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).

h/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 11.1

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN MASCULINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Trabajadores independientes no calificados b/			Empleo doméstico
			Empleadores	Asalariados			Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	8.3	19.9	3.8	8.9	3.7	8.8	7.3	9.6	4.4
	1994	10.1	25.2	5.2	9.4	4.9	10.6	9.3	11.4	4.5
	1997	7.7	23.8	4.0	6.5	3.8	7.6	7.3	7.8	2.7
	1999	7.3	21.7	4.0	7.9	3.8	7.1	6.1	7.8	3.1
Bolivia	1989	4.6	12.9	2.9	5.4	2.7	4.9	3.6	5.6	4.0
	1994	3.6	8.2	2.3	4.3	2.2	3.2	2.5	3.6	1.7
	1997	3.3	7.3	2.6	5.3	2.4	2.9	2.6	3.8	1.8
	1999	2.9	6.0	2.8	5.0	2.6	2.8	2.6	3.2	1.9
Brasil d/	1990	4.0	...	3.7	11.6	2.8	4.4	3.5	5.2	1.3
	1993	3.7	12.0	2.2	6.6	2.0	3.5	2.8	4.6	1.5
	1996	4.7	14.4	2.8	7.3	2.6	4.7	3.8	6.0	2.0
	1999	3.8	10.4	2.5	5.0	2.2	3.6	3.0	4.5	2.1
Chile e/	1990	5.0	21.5	2.8	6.7	2.5	5.2	4.3	5.7	1.9
	1994	5.2	17.5	3.4	8.9	3.0	5.2	5.1	5.4	2.2
	1996	7.0	23.1	3.6	9.1	3.0	7.0	6.4	7.3	2.1
	1998	7.6	27.1	3.6	8.1	3.2	7.0	6.2	7.4	3.0
Colombia f/	1991	2.8	2.4	2.9	1.5
	1994	3.5	3.0	3.5	1.7
	1997	3.4	2.6	3.5	1.6
	1999	2.4	1.9	2.4	2.7
Costa Rica	1990	4.5	6.8	3.6	8.0	3.3	4.3	3.9	4.5	1.5
	1994	5.4	9.9	4.3	7.4	3.9	4.8	3.7	4.9	2.1
	1997	4.7	7.9	3.7	5.7	3.5	4.5	3.9	4.9	2.3
	1999	5.7	10.1	4.2	8.0	3.8	5.2	4.6	5.5	2.3
Ecuador	1990	2.5	3.9	2.4	4.0	2.4	2.3	1.9	2.5	1.1
	1994	3.0	6.6	2.2	5.3	2.0	2.6	2.2	2.8	1.1
	1997	2.9	5.6	2.0	7.9	1.8	2.6	2.3	2.8	1.3
	1999	2.8	6.4	1.8	2.9	1.7	2.3	2.1	2.5	1.4
El Salvador	1995	3.2	7.4	2.2	3.4	2.2	2.8	2.2	3.8	1.7
	1997	3.3	7.9	2.5	5.8	2.4	3.2	2.7	3.5	2.8
	1999	3.5	9.3	2.6	4.5	2.5	2.9	2.4	3.4	2.9
Guatemala	1989	3.5	13.7	1.9	4.9	1.8	3.6	3.4	5.4	2.6
	1998	2.7	8.7	2.3	4.6	2.0	1.8	1.9	2.2	1.0
Honduras	1990	2.2	9.4	1.8	4.1	1.7	2.2	1.7	2.4	1.6
	1994	2.1	5.1	1.4	2.5	1.3	2.0	1.6	2.3	1.6
	1997	1.9	5.0	1.1	2.2	1.1	1.7	1.6	1.8	0.8
	1999	1.9	4.7	1.2	1.4	1.2	1.6	2.1	1.8	0.8

(continúa)

Cuadro 11.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN MASCULINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Trabajadores independientes no calificados b/			Empleo doméstico
			Empleadores	Asalariados			Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
México g/	1989	...	16.5	5.5	4.8	7.2	2.1
	1994	...	14.2	4.4	3.7	4.9	2.0
	1996	3.9	14.2	1.9	3.1	1.8	3.1	2.5	3.4	1.8
	1998	3.8	11.6	2.3	5.6	2.1	3.6	2.8	3.8	1.9
Nicaragua	1993	3.0	9.9	2.7	7.4	2.4	3.2	2.8	4.0	1.3
	1998	2.8	7.1	2.3	5.1	2.0	2.4	2.5	2.8	3.3
Panamá	1991	4.0	7.5	2.7	7.8	2.7	2.5	2.9	3.4	1.4
	1994	3.8	11.7	2.5	6.7	2.3	3.7	4.1	4.8	2.0
	1997	4.1	12.1	2.8	4.8	2.6	3.8	4.2	4.7	2.0
	1999	4.2	12.1	3.2	8.2	2.7	3.5	3.6	4.2	2.3
Paraguay (Asunción)	1990	4.2	8.2	2.0	4.8	1.9	4.5	2.9	5.2	...
	1994	3.9	9.0	2.3	5.8	2.1	2.9	2.5	3.2	2.1
	1996	3.3	7.6	2.5	3.5	2.4	3.1	2.6	3.6	2.0
	1999	3.0	6.4	2.5	3.9	2.3	2.6	2.4	2.8	1.9
(Urbano)	1994	3.5	8.4	2.2	5.3	2.0	2.8	2.5	3.0	1.9
	1996	3.1	7.0	2.3	4.0	2.2	2.9	2.7	3.3	1.7
	1999	2.8	5.8	2.1	3.7	2.0	2.3	2.1	2.6	1.7
República Dominicana	1997	4.4	10.8	2.7	4.8	2.6	4.7	4.6	4.8	2.2
Uruguay	1990	6.1	9.6	2.8	6.3	2.7	7.3	2.7	3.8	1.5
	1994	4.7	10.8	3.2	7.0	3.1	4.4	3.5	5.0	3.0
	1997	4.5	10.5	3.3	6.0	3.2	4.1	3.3	4.6	2.0
	1999	4.7	12.1	3.5	7.1	3.4	4.2	3.5	4.7	2.7
Venezuela h/	1990	5.1	9.5	2.5	3.9	2.5	4.9	4.8	5.4	3.4
	1994	4.2	7.6	2.2	6.4	2.0	4.2	3.9	4.7	2.9
	1997	4.1	9.5	1.7	2.8	1.7	4.3	4.6	5.0	2.2
	1999	3.4	7.7	2.1	4.3	2.0	3.3	3.8	3.8	2.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se incluye a los que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos no se proveen cifras para el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.

b/ Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

c/ Incluye a personas ocupadas en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.

d/ En el año 1990 se incluyó a los asalariados sin contrato de trabajo bajo el encabezamiento "Microempresas".

e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

f/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).

h/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 11.2

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN FEMENINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Trabajadores independientes no calificados b/			Empleo doméstico
			Empleadores	Asalariados			Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	4.2	13.2	3.5	5.8	3.4	4.5	5.7	4.2	2.0
	1994	5.5	23.0	4.4	5.5	4.2	6.4	4.2	6.5	3.2
	1997	4.9	21.1	3.7	5.3	3.4	4.7	3.4	4.9	2.5
	1999	3.7	12.6	3.2	4.6	3.0	4.3	3.4	4.4	2.4
Bolivia	1989	2.7	6.1	2.4	3.4	2.2	2.9	2.7	3.0	1.4
	1994	1.8	7.5	1.7	2.8	1.5	1.6	1.4	1.7	0.9
	1997	1.9	6.6	2.3	6.3	1.8	1.7	1.3	2.0	1.0
	1999	1.9	9.7	2.1	5.1	1.8	1.6	0.9	1.9	1.8
Brasil d/	1990	2.2	...	3.5	5.6	2.1	1.9	1.1	2.0	0.9
	1993	1.5	8.4	2.1	3.3	1.8	1.4	1.1	1.9	1.1
	1996	2.2	12.6	2.5	4.1	2.3	2.0	1.5	2.6	1.5
	1999	1.9	10.1	2.2	2.9	1.8	1.6	1.2	2.0	1.4
Chile e/	1990	2.6	10.2	2.3	3.1	2.2	2.9	2.9	3.9	1.4
	1994	3.2	17.2	2.7	3.8	2.6	3.3	3.2	3.3	2.0
	1996	3.6	20.4	3.1	5.6	2.8	3.9	3.3	4.1	2.0
	1998	3.7	16.8	3.2	6.2	2.6	4.2	3.6	4.4	2.2
Colombia f/	1991	2.2	1.9	2.3	1.2
	1994	2.0	1.9	2.0	1.7
	1997	2.0	1.9	2.0	1.6
	1999	1.3	1.1	1.3	2.1
Costa Rica	1990	2.1	5.0	3.1	4.5	2.9	1.7	1.6	1.8	1.5
	1994	2.8	6.5	2.9	4.0	2.8	2.5	1.7	2.9	1.6
	1997	2.4	5.3	2.9	3.7	2.8	2.1	2.1	2.1	1.8
	1999	2.7	6.1	3.6	5.6	3.3	2.1	2.0	2.1	1.7
Ecuador	1990	1.3	4.2	2.0	2.8	1.9	1.3	1.2	1.3	0.7
	1994	1.6	4.4	1.7	1.9	1.7	1.4	1.3	1.4	0.9
	1997	1.7	4.9	1.9	2.9	1.7	1.5	1.0	1.6	0.9
	1999	1.4	4.7	1.6	2.2	1.4	1.2	0.8	1.3	0.9
El Salvador	1995	1.7	5.2	1.6	2.9	1.5	1.6	1.3	1.7	0.9
	1997	2.1	5.9	2.3	7.2	2.0	1.7	1.5	1.8	1.8
	1999	2.4	7.6	2.2	4.2	2.1	2.0	1.4	2.2	2.0
Guatemala	1989	1.6	11.1	1.8	2.5	1.5	1.9	1.6	2.1	1.4
	1998	1.3	4.8	1.8	3.2	1.5	0.9	0.7	1.0	0.6
Honduras	1990	1.0	4.0	1.4	3.5	1.2	0.9	0.7	0.9	0.8
	1994	1.0	3.5	1.3	2.6	1.1	1.1	0.7	1.2	0.5
	1997	0.9	3.5	1.2	2.9	0.9	0.8	0.6	0.9	0.5
	1999	1.0	3.5	1.2	1.9	1.0	0.8	0.7	0.9	0.5

(continúa)

Cuadro 11.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN FEMENINA URBANA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO, 1990-1999 (En múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)										
País	Año	Total	Microempresas a/				Trabajadores independientes no calificados b/			Empleo doméstico
			Empleadores	Asalariados			Total c/	Industria y construcción	Comercio y servicios	
				Total	Profesionales y técnicos	No profesionales ni técnicos				
México g/	1989	...	9.4	2.3	1.7	2.6	1.3
	1994	...	11.6	1.8	1.1	2.1	1.1
	1996	1.7	11.3	1.6	2.6	1.4	1.3	1.1	1.4	1.1
	1998	1.9	12.5	1.6	3.2	1.5	1.6	1.5	1.6	1.1
Nicaragua	1993	2.5	7.0	2.4	2.8	2.3	2.6	2.6	2.7	2.1
	1998	1.8	6.0	2.2	5.4	1.6	1.6	1.3	1.7	1.5
Panamá	1991	2.0	8.4	3.1	6.7	2.6	1.6	1.1	1.8	1.3
	1994	1.9	10.1	2.9	6.0	2.5	2.3	1.9	2.5	1.2
	1997	2.4	9.3	3.2	5.5	2.7	2.3	1.8	2.5	1.4
	1999	2.6	8.7	3.5	7.1	2.9	2.0	1.5	2.1	2.2
Paraguay (Asunción)	1990	2.0	8.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.9	3.2	0.8
	1994	2.1	8.0	2.2	4.0	1.8	1.9	1.3	2.1	1.2
	1996	1.8	6.1	2.1	2.8	2.0	1.9	1.4	2.1	1.2
	1999	2.2	5.7	2.5	5.1	2.4	2.1	1.9	2.0	1.7
(Urbano)	1994	2.0	7.9	2.0	3.9	1.7	1.8	1.1	2.0	1.2
	1996	1.7	6.1	2.0	2.8	2.0	1.7	1.3	1.9	1.1
	1999	1.9	5.4	2.3	4.0	2.0	1.6	1.6	1.7	1.6
República Dominicana	1997	2.5	5.8	2.4	5.6	2.0	2.9	2.5	3.0	1.4
Uruguay	1990	1.9	6.3	2.0	3.1	1.9	1.8	1.2	1.9	1.5
	1994	2.2	9.4	2.5	2.5	2.5	2.2	1.5	2.5	1.7
	1997	2.4	7.4	2.6	2.9	2.6	2.3	1.6	2.6	1.8
	1999	2.5	10.4	2.9	4.1	2.8	2.5	1.9	2.7	2.1
Venezuela h/	1990	2.5	9.8	2.5	3.1	2.4	2.7	2.6	2.8	1.7
	1994	2.6	6.7	2.4	5.6	2.0	2.6	2.4	2.6	1.5
	1997	2.6	8.3	1.2	3.0	1.6	3.1	2.5	3.2	1.2
	1999	2.4	6.7	2.1	3.7	1.9	2.3	2.1	2.4	1.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. En los casos de Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se incluye a los que tienen hasta cuatro empleados. En los casos en que no se dispuso de información sobre el tamaño de los establecimientos no se proveen cifras para el conjunto de las personas ocupadas en sectores de baja productividad.

b/ Se refiere a trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados sin calificación profesional o técnica.

c/ Incluye a personas ocupadas en la agricultura, silvicultura, caza y pesca.

d/ En el año 1990 se incluyó a los asalariados sin contrato de trabajo bajo el encabezamiento "Microempresas".

e/ Datos provenientes de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN).

f/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta comprendía a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

g/ Datos provenientes de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).

h/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 12

**AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO Y EDAD,
EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990, 1994, 1997 Y 1999 a/**

País	Sexo	Grupos de edad																			
		Total				15 a 24 años				25 a 34 años				35 a 44 años				45 años y más			
		1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999
Argentina (Gran Buenos Aires)	Total	5.9	13.0	14.3	14.7	13.0	22.8	24.2	24.3	4.9	10.0	12.7	12.0	4.1	10.5	10.6	11.6	3.8	10.3	11.6	12.9
	Hombres	5.7	11.5	12.4	13.4	11.5	20.3	21.1	22.8	5.0	8.8	10.1	11.3	3.9	7.3	8.6	8.0	4.2	10.5	11.1	12.7
	Mujeres	6.4	15.5	17.2	16.5	15.6	26.7	28.9	26.3	4.9	11.9	16.8	13.0	4.3	15.4	13.8	16.1	3.0	10.0	12.4	13.2
Bolivia	Total	9.4	3.2	3.7	7.1	17.4	5.8	6.4	15.3	8.5	2.8	3.7	6.3	5.1	2.0	2.9	3.8	6.6	2.1	2.1	3.7
	Hombres	9.5	3.4	3.7	6.0	18.2	6.3	5.8	12.5	7.5	2.5	3.4	4.8	5.5	2.1	3.1	2.3	8.5	2.9	2.8	4.9
	Mujeres	9.1	2.9	3.7	8.5	16.5	5.2	7.1	18.5	9.9	3.2	4.2	8.2	4.6	1.9	2.5	5.5	3.8	0.9	1.2	1.9
Brasil	Total	4.5	7.4	8.0	11.4	8.3	14.3	15.1	21.7	4.4	6.9	7.4	10.5	2.4	4.3	5.0	7.0	1.5	2.6	3.8	5.5
	Hombres	4.8	6.4	6.7	9.4	8.7	12.4	12.8	18.4	4.7	5.5	5.6	8.0	2.8	3.8	4.2	5.5	2.0	2.7	3.7	5.3
	Mujeres	3.9	8.9	10.0	14.1	7.7	17.0	18.2	26.2	3.8	8.8	9.8	13.8	1.7	5.0	6.2	9.0	0.6	2.5	4.0	5.8
Chile	Total	8.7	6.8	6.0	10.1	17.9	16.1	13.2	21.8	8.3	6.5	5.9	9.9	5.1	3.7	4.1	7.4	5.3	3.7	3.4	6.3
	Hombres	8.1	5.9	5.1	9.4	17.0	14.0	10.7	20.4	7.5	5.5	5.0	9.3	4.8	3.0	3.6	6.4	5.6	3.9	3.7	6.7
	Mujeres	9.7	8.4	7.3	11.2	19.1	19.3	17.1	23.7	9.8	8.4	7.4	10.9	5.8	4.9	5.0	8.9	4.7	3.4	2.9	5.6
Colombia	Total	9.3	8.0	11.8	19.2	19.7	16.2	24.3	36.6	8.3	7.6	11.8	17.8	4.2	4.7	6.5	13.2	3.8	3.3	5.8	10.3
	Hombres	6.7	5.4	9.7	16.2	15.3	11.9	20.7	32.0	5.5	4.4	8.6	14.0	2.8	3.4	5.4	10.5	3.7	2.9	6.1	10.6
	Mujeres	13.0	11.6	14.7	23.0	24.8	21.0	28.3	41.6	11.8	11.6	15.6	22.1	6.2	6.3	7.9	16.4	3.9	4.2	5.1	9.7
Costa Rica	Total	5.3	4.2	5.8	6.1	10.5	9.7	13.0	14.8	4.9	3.8	4.4	5.3	2.5	2.3	3.9	3.0	2.9	1.6	3.0	2.3
	Hombres	4.9	3.7	5.3	5.3	9.8	8.6	11.4	14.8	4.1	3.7	3.6	3.8	2.3	1.5	3.9	2.1	3.1	1.6	3.1	1.9
	Mujeres	6.2	5.1	6.7	7.4	11.6	11.6	16.2	14.9	6.2	4.0	5.6	7.4	2.8	3.5	4.0	4.2	2.3	1.5	2.8	3.2
Ecuador	Total	6.1	7.1	9.2	14.2	13.5	14.9	18.9	25.9	6.4	6.6	9.7	13.6	2.7	3.9	4.7	9.0	1.3	2.7	3.8	8.3
	Hombres	4.2	5.7	6.9	10.5	11.2	12.7	15.1	20.0	3.2	4.4	6.4	8.0	1.7	3.1	3.6	5.5	1.3	2.9	3.4	8.6
	Mujeres	9.2	9.2	12.6	19.5	17.2	17.8	24.5	33.9	11.3	9.8	14.3	21.3	4.5	5.2	6.3	13.6	1.4	2.2	4.6	7.7
El Salvador	Total	9.9	6.8	7.3	6.9	19.3	14.0	14.6	13.9	9.2	6.8	7.7	6.1	5.7	2.6	4.4	4.4	4.3	3.4	3.5	3.8
	Hombres	10.0	8.3	8.8	8.9	17.7	15.4	16.1	16.2	8.4	7.5	8.1	6.0	7.0	3.7	6.1	6.0	6.5	5.4	5.4	6.1
	Mujeres	9.7	4.9	5.5	4.6	21.3	11.9	12.4	10.6	10.0	6.0	7.2	5.1	4.3	1.5	2.5	2.6	1.3	0.6	0.8	1.0
Guatemala	Total	3.5	2.8	7.1	4.8	2.9	3.8	1.6	1.8	1.2	0.9
	Hombres	3.3	3.6	7.2	6.0	2.6	4.5	1.5	2.4	1.4	1.3
	Mujeres	3.8	1.9	7.0	3.4	3.4	2.8	1.8	1.0	0.9	0.4
Honduras	Total	6.9	4.1	5.2	5.3	11.2	7.1	8.9	9.0	7.0	3.6	5.4	4.7	4.3	3.1	2.9	2.9	3.7	1.3	2.3	3.0
	Hombres	7.6	4.5	5.9	6.2	11.5	7.5	9.2	10.3	6.6	3.7	5.6	5.3	6.0	4.1	4.5	3.6	5.3	2.0	3.4	4.3
	Mujeres	5.9	3.4	4.3	4.0	10.7	6.6	8.5	7.4	7.6	3.6	5.2	4.1	2.0	1.3	0.8	2.2	0.7	0.1	0.7	1.1
México	Total	3.3	4.5	5.1	3.2	8.1	9.4	12.5	7.4	2.4	2.9	3.2	2.8	0.7	2.3	1.7	1.5	0.8	3.1	2.8	1.1
	Hombres	3.4	5.1	5.8	3.6	8.4	10.0	13.8	8.1	2.5	3.0	3.4	3.1	0.9	2.8	2.1	1.8	1.0	4.2	3.9	1.5
	Mujeres	3.1	3.6	3.9	2.6	7.6	8.3	10.3	6.2	2.0	2.7	2.9	2.3	0.2	1.2	1.0	0.8	0.1	0.4	0.5	0.4
Nicaragua	Total	...	14.1	13.1	13.8	...	20.1	20.9	20.9	...	14.5	13.7	11.0	...	11.1	9.2	12.3	...	10.6	7.4	10.5
	Hombres	...	16.5	13.6	14.0	...	20.3	18.9	17.9	...	17.3	13.2	10.3	...	13.5	11.2	14.3	...	13.9	10.1	12.9
	Mujeres	...	10.8	12.6	13.6	...	19.7	23.8	25.8	...	10.6	14.3	11.7	...	7.9	7.2	9.9	...	6.3	3.9	7.0
Panamá	Total	18.6	15.7	15.4	13.1	35.1	31.0	31.5	26.9	20.6	15.1	14.9	12.7	9.5	9.7	9.7	8.3	6.9	5.9	6.9	5.6
	Hombres	15.9	12.4	13.3	10.6	31.9	27.5	29.2	22.5	16.5	9.7	10.9	8.7	7.4	6.8	7.5	6.1	7.0	5.7	7.4	6.1
	Mujeres	22.8	21.0	18.2	17.0	39.9	36.9	34.6	33.5	26.3	22.7	20.1	18.8	12.5	14.0	12.2	11.0	6.5	6.2	6.0	4.6

(continúa)

Cuadro 12 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO Y EDAD, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990, 1994, 1997 Y 1999 a/																					
País	Sexo	Grupos de edad																			
		Total				15 a 24 años				25 a 34 años				35 a 44 años				45 años y más			
		1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999
Paraguay (Asunción)	Total	6.3	4.4	8.4	10.1	15.5	8.3	17.8	19.5	4.8	3.2	5.2	6.7	2.3	2.9	3.4	5.9	1.4	2.6	5.8	8.4
	Hombres	6.2	5.1	8.2	10.2	14.7	9.9	17.4	21.6	5.0	3.4	4.2	5.2	3.2	3.1	1.9	6.2	2.0	3.9	7.6	8.8
	Mujeres	6.5	3.5	8.7	10.1	16.5	6.5	18.2	17.1	4.7	3.0	6.5	8.8	1.1	2.6	5.1	5.5	0.0	0.7	3.4	7.7
República Dominicana	Total	19.7	17.0	17.0	...	34.1	30.6	27.8	...	17.3	16.1	15.7	...	9.2	10.0	10.2	...	7.4	7.4	8.7	...
	Hombres	11.3	12.1	10.9	...	22.3	24.0	20.0	...	9.2	10.4	8.0	...	5.0	6.3	6.9	...	4.0	5.8	6.1	...
	Mujeres	31.5	24.8	26.0	...	47.3	39.9	38.2	...	27.7	23.4	25.5	...	15.8	15.5	15.0	...	15.4	11.5	14.8	...
Uruguay	Total	8.9	9.7	11.4	11.2	24.4	24.7	26.3	25.8	8.2	8.4	10.5	10.0	4.3	5.5	7.1	7.2	3.5	3.8	5.3	6.1
	Hombres	7.3	7.3	8.9	8.6	22.2	19.8	21.8	21.4	6.0	4.9	7.5	7.2	2.5	3.4	4.4	3.7	3.0	3.4	4.4	4.9
	Mujeres	11.1	13.0	14.7	14.5	27.5	31.5	32.7	31.9	11.0	12.8	14.3	13.5	6.4	7.8	10.2	11.1	4.4	4.5	6.7	7.7
Venezuela b/	Total	10.2	8.9	10.6	14.5	19.3	17.1	19.8	25.7	11.3	9.1	10.6	14.7	5.9	5.3	6.8	10.2	4.5	4.2	5.5	7.8
	Hombres	11.2	9.1	9.0	13.6	19.9	17.2	16.4	22.2	12.3	8.8	8.3	12.8	6.9	5.9	5.7	10.1	5.5	4.9	5.6	9.4
	Mujeres	8.4	8.3	13.6	16.1	18.0	17.0	26.6	32.6	9.6	9.6	14.3	17.7	4.0	4.2	8.5	10.4	1.7	2.5	5.3	4.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Para los años exactos a que corresponden las encuestas de cada país véase, por ejemplo, el cuadro 11.

b/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 13

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO Y NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990, 1994, 1997 Y 1999 a/

País	Sexo	Grupos de edad																			
		Total				0 a 5 años				6 a 9 años				10 a 12 años				13 y más años			
		1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999
Argentina b/ (Gran Buenos Aires)	Total	5.9	13.0	14.3	14.7	6.8	14.0	16.8	17.0	5.9	...	16.6	17.4	3.0	15.0	14.4	14.5	...	7.7	9.4	10.2
	Hombres	5.7	11.5	12.4	13.4	6.1	13.1	15.6	19.4	4.7	...	15.7	15.8	3.4	12.1	9.8	12.2	...	5.9	7.6	8.1
	Mujeres	6.4	15.5	17.2	16.5	8.5	15.8	18.7	13.5	7.4	...	18.4	20.5	2.5	19.7	21.3	17.8	...	9.5	11.3	12.0
Bolivia	Total	9.4	3.2	3.7	7.1	7.1	2.4	2.7	3.4	9.3	2.8	2.1	7.9	13.1	3.7	5.4	10.5	8.1	3.8	4.1	6.0
	Hombres	9.5	3.4	3.7	6.0	9.0	3.1	3.2	2.8	8.2	3.1	1.8	7.0	12.5	3.9	4.6	7.5	7.9	3.1	4.7	5.5
	Mujeres	9.1	2.9	3.7	8.5	5.4	1.7	2.3	3.9	11.1	2.4	2.6	9.2	14.1	3.4	6.8	15.7	8.4	5.0	3.1	6.7
Brasil	Total	4.5	7.4	8.0	11.4	4.2	6.5	7.5	9.9	6.2	11.0	11.3	15.6	4.5	7.3	7.5	12.2	1.8	3.3	3.4	5.2
	Hombres	4.8	6.4	6.7	9.4	4.8	5.9	6.5	8.5	6.2	8.8	9.0	12.7	4.6	5.9	5.8	9.5	1.6	2.4	2.6	4.0
	Mujeres	3.9	8.9	10.0	14.1	3.1	7.4	9.2	12.1	6.2	14.4	14.8	20.1	4.5	8.8	9.3	14.9	2.1	4.2	4.2	6.4
Chile	Total	8.7	6.8	6.0	10.1	9.3	5.9	6.7	12.8	10.1	8.1	6.7	12.2	9.2	7.8	6.6	10.2	6.3	4.4	4.0	7.1
	Hombres	8.1	5.9	5.1	9.4	9.3	5.8	6.8	14.0	10.3	7.4	5.9	12.1	7.9	6.5	5.2	8.7	4.9	3.3	3.4	5.7
	Mujeres	9.7	8.4	7.3	11.2	9.2	6.2	6.6	10.7	9.5	9.6	8.1	12.5	11.7	10.2	9.1	12.5	8.0	6.0	4.8	8.8
Colombia	Total	9.3	8.0	11.8	19.2	6.6	6.2	9.3	15.3	11.3	9.7	14.5	23.2	12.4	10.2	14.7	23.2	7.4	5.2	7.6	14.1
	Hombres	6.7	5.4	9.7	16.2	5.1	4.7	8.7	13.8	8.2	6.3	11.5	19.2	8.1	6.5	11.4	18.6	0.6	3.4	5.9	12.4
	Mujeres	13.0	11.6	14.7	23.0	9.0	8.5	10.4	17.4	16.3	14.9	18.6	28.2	17.6	14.6	18.4	28.2	9.1	7.3	9.6	16.0
Costa Rica	Total	5.3	4.2	5.8	6.1	6.4	5.0	5.5	9.2	6.0	5.0	7.3	7.8	5.7	4.1	6.1	4.7	3.0	2.7	3.4	2.8
	Hombres	4.9	3.7	5.3	5.3	6.9	4.3	4.8	6.8	5.4	3.7	6.4	7.1	4.6	4.3	5.4	3.6	2.3	2.7	3.2	2.1
	Mujeres	6.2	5.1	6.7	7.4	5.2	6.6	7.2	13.3	7.3	7.5	8.9	9.3	7.2	3.9	7.1	6.1	3.9	2.6	3.6	3.6
Ecuador	Total	6.1	7.1	9.2	14.2	2.6	5.0	5.9	9.0	4.8	5.7	7.8	13.8	10.3	10.2	12.9	19.0	6.1	6.7	8.1	11.5
	Hombres	4.2	5.7	6.9	10.5	3.0	4.9	6.0	8.5	3.3	4.9	6.4	10.9	6.8	7.8	9.2	12.8	4.2	4.9	5.4	7.7
	Mujeres	9.2	9.2	12.6	19.5	2.0	5.0	5.9	9.5	8.0	7.3	10.5	18.8	14.9	13.6	18.3	27.0	8.7	9.0	11.7	16.1
El Salvador	Total	9.9	6.8	7.3	6.9	8.1	6.0	5.3	4.9	9.9	6.8	8.0	7.4	14.6	9.2	9.6	9.3	7.6	4.9	6.4	6.1
	Hombres	10.0	8.3	8.8	8.9	11.0	9.2	8.8	7.8	9.1	8.1	9.4	9.4	11.8	9.6	9.8	11.0	6.9	4.7	5.5	6.5
	Mujeres	9.7	4.9	5.5	4.6	5.2	2.6	1.6	1.9	11.2	4.8	5.8	4.7	17.8	8.7	9.3	7.3	8.6	5.2	7.4	5.7
Guatemala	Total	3.5	2.8	2.3	1.7	4.3	2.9	5.9	5.4	2.3	1.7
	Hombres	3.3	3.6	2.3	3.0	4.1	4.1	5.3	5.1	2.3	0.8
	Mujeres	3.8	1.9	2.3	0.3	4.7	1.1	6.5	5.8	2.3	3.3
Honduras	Total	6.9	4.1	5.2	5.3	5.1	3.0	4.8	4.8	7.7	5.0	5.4	6.3	9.3	4.4	6.3	4.3	6.3	2.8	3.6	4.0
	Hombres	7.6	4.5	5.9	6.2	7.3	3.8	6.6	7.0	8.1	5.9	6.0	6.9	8.0	3.8	5.9	4.9	5.3	2.3	3.3	3.3
	Mujeres	5.9	3.4	4.3	4.0	1.7	1.7	2.2	2.0	6.9	3.5	4.5	5.5	10.6	5.3	6.7	3.8	7.8	3.6	4.0	5.0
México	Total	3.3	4.5	5.1	3.2	1.3	3.9	3.5	2.1	4.3	5.0	5.8	2.6	3.8	4.9	5.2	3.7	2.4	2.6	4.6	3.9
	Hombres	3.4	5.1	5.8	3.6	1.6	5.4	4.8	3.2	4.4	5.7	6.7	3.0	4.4	5.3	5.7	4.0	2.1	2.8	4.2	3.9
	Mujeres	3.1	3.6	3.9	2.6	0.4	1.2	1.2	0.5	4.0	3.7	4.3	1.9	2.7	4.2	4.2	3.2	3.3	5.2	5.5	3.9
Nicaragua	Total	...	14.1	13.1	13.8	...	14.1	10.9	11.8	...	15.0	14.3	14.2	...	12.6	14.9	18.5	...	13.6	11.6	12.4
	Hombres	...	16.5	13.6	14.0	...	16.4	12.5	13.8	...	16.8	14.7	13.0	...	14.8	15.1	19.2	...	19.2	10.7	10.8
	Mujeres	...	10.8	12.6	13.6	...	11.1	9.0	9.0	...	12.0	13.8	16.2	...	10.2	14.7	17.8	...	4.8	12.7	14.0
Panamá	Total	18.6	15.7	15.4	13.1	10.7	9.6	12.1	7.2	18.4	16.0	16.6	14.2	24.9	19.7	18.2	16.2	14.8	12.5	11.3	9.6
	Hombres	15.9	12.4	13.3	10.6	9.6	9.6	13.6	7.1	16.5	13.2	15.6	12.4	20.5	13.9	14.4	11.7	12.9	9.9	8.2	7.1
	Mujeres	22.8	21.0	18.2	17.0	13.9	9.3	9.1	7.7	22.5	21.6	18.4	18.0	30.4	27.7	23.5	22.7	16.6	15.1	14.2	12.0

(continúa)

Cuadro 13 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN SEXO Y NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990, 1994, 1997 Y 1999 a/

País	Sexo	Grupos de edad																			
		Total				0 a 5 años				6 a 9 años				10 a 12 años				13 y más años			
		1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999	1990	1994	1997	1999
Paraguay (Asunción)	Total	6.3	4.4	8.4	10.1	4.4	5.2	7.8	16.3	6.4	5.2	9.4	9.8	8.4	4.5	10.6	11.1	3.7	1.3	3.4	5.3
	Hombres	6.2	5.1	8.2	10.2	4.2	7.6	9.3	19.8	6.7	6.2	9.0	9.8	7.9	4.1	8.8	9.9	2.9	1.1	3.4	7.1
	Mujeres	6.5	3.5	8.7	10.1	4.7	2.5	5.9	12.0	6.0	3.8	9.8	9.7	9.1	4.9	12.9	12.8	4.8	1.5	3.5	12.0
República Dominicana	Total	19.7	17.0	17.0	...	15.6	13.6	15.3	...	19.6	18.7	18.9	...	25.2	21.4	18.1	...	16.6	13.4	15.1	...
	Hombres	11.3	12.1	10.9	...	7.0	10.2	10.4	...	11.1	12.8	11.2	...	15.5	14.3	11.5	...	11.2	10.9	10.0	...
	Mujeres	31.5	24.8	26.0	...	30.5	21.3	24.8	...	34.7	29.8	32.7	...	37.2	30.5	26.2	...	21.8	16.1	19.5	...
Uruguay	Total	8.9	9.7	11.4	11.2	5.6	5.7	8.1	8.9	10.2	12.4	13.2	13.1	10.0	9.5	11.8	11.4	5.9	4.9	6.8	6.3
	Hombres	7.3	7.3	8.9	8.6	5.6	5.2	6.7	7.4	8.4	9.1	10.1	9.8	7.5	6.1	8.9	8.6	4.4	4.0	4.8	4.3
	Mujeres	11.1	13.0	14.7	14.5	5.6	6.5	10.7	11.9	13.0	17.5	18.1	18.2	12.8	13.3	14.9	14.5	7.2	5.6	8.3	7.8
Venezuela c/	Total	10.2	8.9	10.6	14.5	9.7	7.9	9.4	11.7	12.1	9.8	11.0	15.5	9.3	9.1	12.7	16.2	6.1	6.7	8.4	12.7
	Hombres	11.2	9.1	9.0	13.6	11.4	8.2	7.9	12.2	12.9	10.4	9.5	14.8	9.7	9.0	10.6	13.7	5.6	5.9	6.6	11.2
	Mujeres	8.4	8.3	13.6	16.1	5.4	7.1	13.4	10.6	10.1	8.5	14.3	17.0	8.7	9.2	15.5	19.7	6.7	7.8	10.4	14.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Para los años exactos a que corresponden las encuestas de cada país véase, por ejemplo, el cuadro 11.

b/ En 1990, los tramos de años de instrucción que contienen datos corresponden a los rangos 0 a 6, 7 a 9 y 10 años y más, respectivamente. En 1994, en cambio, el tramo de 0 a 5 años representa, en realidad, al rango entre 0 y 9 años de instrucción.

c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

AMERICA LATINA (17 PAISES): MAGNITUD DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA, 1990 - 1999
(En porcentajes)

País	Año	Hogares bajo la línea de pobreza a/					Hogares bajo la línea de indigencia				
		Total país	Zonas urbanas			Zonas rurales	Total país	Zonas urbanas			Zonas rurales
			Total	Área metropolitana	Resto urbano			Total	Área metropolitana	Resto urbano	
Argentina	1990	16.2	3.5
	1994	...	12.3	10.2	16.3	2.1	1.5	3.3	...
	1997	13.1	3.3
	1999	...	16.3	13.1	20.5	4.3	3.1	5.8	...
Bolivia	1989	...	49.4	22.1
	1994	...	45.6	16.8
	1997	...	46.8	19.2
	1999	54.7	42.3	39.1	56.4	75.6	32.6	16.4	14.5	25.0	59.6
Brasil	1990	41.4	35.6	63.9	18.3	13.3	37.9
	1993	37.1	33.3	52.9	15.3	11.6	30.2
	1996	28.6	24.6	45.6	10.5	7.6	23.1
	1999	29.9	26.4	45.2	9.6	7.1	20.5
Chile c/	1990	33.3	33.3	27.7	36.5	33.5	10.6	10.2	7.8	11.4	12.1
	1994	23.2	22.8	15.8	28.0	25.5	6.2	5.9	3.6	7.5	7.9
	1996	19.7	18.5	12.4	22.0	26.0	4.9	4.3	2.4	5.8	7.9
	1998	17.8	17.0	12.4	19.4	22.7	4.7	4.3	3.0	4.6	6.9
Colombia d/	1991	50.5	47.1	55.4	22.6	17.2	30.6
	1994	47.3	40.6	34.6	43.0	57.4	25.0	16.2	12.3	17.7	38.2
	1997	44.9	39.5	29.7	43.2	54.0	20.1	14.6	10.3	16.3	29.3
	1999	48.7	44.6	38.1	47.1	55.8	23.2	18.7	17.2	19.2	31.1
Costa Rica	1990	23.7	22.2	19.8	25.1	24.9	9.8	6.9	5.0	9.3	12.3
	1994	20.8	18.1	16.2	20.5	23.1	7.7	5.6	4.3	7.3	9.5
	1997	20.3	17.1	16.3	18.1	22.9	7.4	5.2	5.2	5.2	9.1
	1999	18.2	15.7	14.7	16.8	20.5	7.5	5.4	4.7	6.2	9.4
Ecuador	1990	...	55.8	22.6
	1994	...	52.3	22.4
	1997	...	49.8	18.6
	1999	...	58.0	27.2
El Salvador	1995	47.6	40.0	29.5	49.5	58.2	18.2	12.4	7.3	16.9	26.5
	1997	48.0	38.6	25.7	50.3	61.6	18.5	12.0	5.6	17.8	27.9
	1999	43.5	34.0	26.4	43.2	59.0	18.3	11.1	6.8	16.3	29.3
Guatemala	1998	53.5	38.8	30.9	48.0	64.7	28.0	12.9	6.6	20.1	39.6
Honduras	1990	75.2	64.5	54.9	68.8	83.5	54.0	38.0	26.8	43.0	66.4
	1994	73.1	69.6	63.7	75.8	76.1	48.5	40.8	33.5	48.6	54.9
	1997	73.8	67.0	62.3	71.7	79.9	48.3	36.8	30.9	42.7	58.7
	1999	74.3	65.6	58.4	72.9	82.3	50.6	37.1	28.7	45.6	63.2
México	1989	39.3	34.2	48.7	14.0	9.3	22.4
	1994	35.8	29.0	46.5	11.8	6.2	20.4
	1996	43.4	37.5	53.4	15.6	10.0	25.0
	1998	38.0	31.1	49.3	13.2	6.9	23.5
Nicaragua	1993	68.1	60.3	51.6	67.9	78.7	43.2	32.2	24.5	39.0	58.3
	1998	65.1	59.3	52.4	64.5	72.7	40.1	30.7	24.0	35.8	52.6
Panamá	1991	36.3	33.6	32.1	39.5	42.5	16.0	13.9	13.5	15.4	21.1
	1994	29.7	25.2	23.0	34.7	40.6	12.0	8.7	7.6	13.4	19.8
	1997	27.3	24.6	23.5	29.4	33.5	10.2	8.6	8.4	9.6	14.1
	1999	24.2	20.8	19.6	25.8	32.6	8.3	6.6	6.3	8.0	12.6
Paraguay	1990	36.8	10.4
	1994	...	42.4	35.4	51.1	14.8	9.5	21.3	...
	1996	...	39.6	33.5	48.1	13.0	8.0	20.1	...
	1999	51.7	41.4	32.9	52.7	65.2	26.0	13.9	6.9	23.0	42.0
República Dominicana	1997	32.4	31.6	33.6	12.8	11.0	15.2
Uruguay	1990	...	11.8	7.2	16.7	2.0	1.0	3.0	...
	1994	...	5.8	4.2	7.4	1.1	0.8	1.4	...
	1997	...	5.7	5.2	6.2	0.9	0.8	1.0	...
	1999	...	5.6	5.8	5.4	0.9	0.9	0.8	...
Venezuela f/	1990	34.2	33.4	25.3	36.0	38.4	11.8	10.9	6.9	12.2	16.5
	1994	42.1	40.9	21.4	46.2	47.7	15.1	13.5	4.3	15.9	22.9
	1997	42.3	17.1
	1999	44.0	19.4
América Latina g/	1990	41.0	35.0	58.2	17.7	12.0	34.1
	1994	37.5	31.8	56.1	15.9	10.5	33.5
	1997	35.5	29.7	54.0	14.4	9.5	30.2
	1999	35.3	29.8	54.3	13.9	9.1	30.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Incluye a los hogares bajo la línea de indigencia o en situación de extrema pobreza.

b/ Promedio de las cifras correspondientes a Río de Janeiro y São Paulo.

c/ Cálculos basados en las encuestas de caracterización socioeconómica nacional (CASEN) de 1990, 1994, 1996 y 1998. Las estimaciones son con las nuevas cifras de la cuenta de ingresos y gastos de los hogares aportadas por el Ministerio de Planificación y Cooperación.

d/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Ha comprendido a alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

e/ El tamaño de la muestra no es suficientemente grande como para efectuar estimaciones referidas al Distrito Federal.

f/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

g/ Estimación para 19 países de la región.

Cuadro 15

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): LÍNEAS DE INDIGENCIA (LI) Y DE POBREZA (LP)												
(En valores mensuales por persona)												
País	Año	Periodo de referencia de los ingresos	Moneda a/	Urbano		Rural		Cambio b/	Urbano		Rural	
				LI	LP	LI	LP		LI	LP	LI	LP
				Moneda corriente					Dólares EE.UU.			
Argentina	1990 c/	sept.	A	255 928	511 856	5 791.0	44.2	88.4
	1994	sept.	\$	72	144	1.0	72.0	143.9
	1997 c/	sept.	\$	76	151	1.0	75.5	151.0
	1999	sept.	\$	72	143	1.0	71.6	143.3
Bolivia	1989	oct.	Bs	68	137	2.9	23.8	47.5
	1994	jun.-nov.	Bs	120	240	4.7	25.7	51.4
	1997	may.	Bs	155	309	125	219	5.3	29.4	58.8	23.9	41.8
	1999	oct.-nov.	Bs	167	333	130	228	5.9	28.0	56.1	21.9	38.3
Brasil	1990	sept.	Cr\$	3 109	6 572	2 634	4 967	75.5	41.2	87.0	34.9	65.7
	1993	sept.	Cr\$	3 400	7 391	2 864	5 466	111.2	30.6	66.5	25.8	49.2
	1996	sept.	R\$	44	104	38	76	1.0	43.6	102.3	37.2	74.9
	1999	sept.	R\$	51	126	43	91	1.9	26.7	66.2	22.7	48.1
Chile	1990	nov.	\$	9 297	18 594	7 164	12 538	327.4	28.4	56.8	21.9	38.3
	1994	nov.	\$	15 050	30 100	11 597	20 295	413.1	36.4	72.9	28.1	49.1
	1996	nov.	\$	17 136	34 272	13 204	23 108	420.0	40.8	81.6	31.4	55.0
	1998	nov.	\$	18 944	37 889	14 598	25 546	463.3	40.9	81.8	31.5	55.1
Colombia	1991	agosto	\$	18 093	36 186	14 915	26 102	645.6	28.0	56.1	23.1	40.4
	1994	agosto	\$	31 624	63 249	26 074	45 629	814.8	38.8	77.6	32.0	56.0
	1997	agosto	\$	53 721	107 471	44 333	77 583	1 141.0	47.1	94.2	38.9	68.0
	1999	agosto	\$	69 838	139 716	57 629	100 851	1 873.7	37.3	74.6	30.8	53.8
Costa Rica	1990	junio	₡	2 639	5 278	2 081	3 642	89.7	29.4	58.9	23.2	40.6
	1994	junio	₡	5 264	10 528	4 153	7 268	155.6	33.8	67.7	26.7	46.7
	1997	junio	₡	8 604	17 208	6 778	11 862	232.6	37.0	74.0	29.1	51.0
	1999	junio	₡	10 708	21 415	8 463	14 811	285.3	37.5	75.1	29.7	51.9
Ecuador	1990	nov.	S/.	18 465	36 930	854.8	21.6	43.2
	1994	nov.	S/.	69 364	138 729	2 301.2	30.1	60.3
	1997	oct.	S/.	142 233	284 465	4 194.6	33.9	67.8
	1999	oct.	S/.	301 716	603 432	15 656.8	19.3	38.5
El Salvador	1995	ene.-dic.	₡	254	508	158	315	8.8	29.0	58.1	18.0	35.9
	1997	ene.-dic.	₡	290	580	187	374	8.8	33.1	66.2	21.4	42.8
	1999	ene.-dic.	₡	293	586	189	378	8.8	33.5	66.9	21.6	43.2
Guatemala	1989	abril	Q	64	127	50	88	2.7	23.6	47.1	18.7	32.7
	1998	dic. 97-dic. 98	Q	260	520	197	344	6.4	40.7	81.5	30.8	54.0
Honduras	1990	agosto	L	115	229	81	141	4.3	26.5	52.9	18.6	32.6
	1994	sept.	L	257	513	181	316	9.0	28.6	57.1	20.1	35.2
	1997	agosto	L	481	963	339	593	13.1	36.8	73.6	25.9	45.3
	1999	agosto	L	561	1 122	395	691	14.3	39.3	78.6	27.7	48.4
México	1989	3 ^{er} trim.	\$	86 400	172 800	68 810	120 418	2 510.0	34.4	68.8	27.4	48.0
	1994	3 ^{er} trim.	MN\$	213	425	151	265	3.3	63.6	127.2	45.3	79.3
	1996	3 ^{er} trim.	MN\$	405	810	300	525	7.6	53.6	107.2	39.7	69.5
	1998	3 ^{er} trim.	MN\$	537	1 074	385	674	9.5	56.8	113.6	40.7	71.3
Nicaragua	1993	21 feb.-12 jun.	C\$	167	334	129	225	4.6	36.6	73.3	28.2	49.4
	1997	octubre	C\$	247	493	9.8	25.3	50.5
	1998	15 abr.-31 ago.	C\$	275	550	212	370	10.4	26.3	52.7	20.3	35.5

(continúa)

Cuadro 15 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): LÍNEAS DE INDIGENCIA (LI) Y DE POBREZA (LP)												
(En valores mensuales por persona)												
País	Año	Período de referencia de los ingresos	Moneda a/	Urbano		Rural		Cambio b/	Urbano		Rural	
				LI	LP	LI	LP		LI	LP	LI	LP
				Moneda corriente					Dólares EE.UU.			
Panamá	1991	agosto	B	35	70	27	47	1.0	35.0	70.1	27.1	47.5
	1994	agosto	B	40	80	31	54	1.0	40.1	80.2	31.0	54.3
	1997	agosto	B	41	81	31	55	1.0	40.6	81.3	31.4	55.0
	1999	julio	B	41	81	31	55	1.0	40.7	81.4	31.5	55.1
Paraguay	1990 d/	jun., jul. ago.	₲	43 242	86 484	1 207.8	35.8	71.6
	1994	ago. - sept.	₲	87 894	175 789	1 916.3	45.9	91.7
	1996	jul. - nov.	₲	108 572	217 143	2 081.2	52.2	104.3
	1999	jul. - dic.	₲	138 915	277 831	106 608	186 565	3 311.4	42.0	83.9	32.2	56.3
República Dominicana	1997	abril	\$	601	1 203	451	789	14.3	42.1	84.3	31.6	55.3
Uruguay	1990	2º semestre	NUr\$	41 972	83 944	1 358.0	30.9	61.8
	1994	2º semestre	\$	281	563	5.4	52.1	104.1
	1997	año	\$	528	1 056	9.4	55.9	111.9
	1999	año	\$	640	1 280	11.3	56.4	112.9
Venezuela	1990	2º semestre	Bs	1 924	3 848	1 503	2 630	49.4	38.9	77.9	30.4	53.2
	1994	2º semestre	Bs	8 025	16 050	6 356	11 124	171.3	46.9	93.7	37.1	65.0
	1997 e/	2º semestre	Bs	31 711	62 316	488.6	64.9	127.5
	1999 e/	2º semestre	Bs	49 368	97 622	626.3	78.8	155.9

Fuente: CEPAL, División de Estadísticas y Proyecciones Económicas.

a/ Monedas nacionales:

Argentina: (A) Austral; (\$) Peso

Bolivia: (Bs) Boliviano

Brasil: (Cr\$) Cruzeiro; (R\$) Real

Chile: (Ch\$) Peso

Colombia: (Col\$) Peso

Costa Rica: (₡) Colón

Ecuador: (S/) Sucre

El Salvador: (₡) Colón

Guatemala: (Q) Quetzal

Honduras: (L) Lempira

México: (\$) Peso; (MN\$) Nuevo Peso

Nicaragua: (C\$) Córdoba

Panamá: (B) Balboa

Paraguay: (₲) Guaraní

República Dominicana: (RD\$) Peso

Uruguay: (NUr\$) Nuevo Peso; (\$) Peso

Venezuela: (Bs) Bolívar

b/ Serie "rf" del Fondo Monetario Internacional (FMI).

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Asunción.

e/ Total nacional.

Cuadro 16

ERICA LATINA (17 PAISES) : DISTRIBUCION DE LOS HOGARES SEGUN TRAMOS DE INGRESO PER CAPI EN TERMINOS DEL VALOR DE LA LINEA DE POBREZA, ZONAS URBANAS, 1990 - 1999

País	Año	Tramos de ingreso per cápita, en términos del valor de la línea de pobreza							
		0 a 0.5 (Indigentes)	0.5 a 0.9	0.9 a 1.0	0.0 a 1.0 (Pobres)	1.0 a 1.25	1.25 a 2.0	2.0 a 3.0	Más de 3.0
Argentina									
(Gran Buenos Aires)	1990	3.5	10.6	2.1	16.2	7.3	22.5	18.7	35.3
	1994	1.5	6.6	2.1	10.2	7.4	16.7	19.0	46.7
	1997	3.3	7.0	2.8	13.1	7.2	19.0	17.5	43.2
	1999	3.1	8.4	1.6	13.1	6.2	19.1	17.8	43.9
Bolivia									
	1989	22.1	23.2	4.1	49.4	9.0	16.4	10.6	14.5
	1994	16.8	24.2	4.6	45.6	9.8	19.3	10.2	14.9
	1997	19.2	22.6	5.1	46.8	9.7	17.2	11.2	15.2
	1999	16.4	20.8	5.1	42.3	10.8	18.5	11.4	17.0
Brasil a/									
	1990	14.8	17.3	3.7	35.8	8.3	16.6	12.3	27.1
	1993	13.5	16.0	3.8	33.3	8.5	19.0	13.3	26.0
	1996	9.7	11.9	3.1	24.6	7.3	17.5	15.5	35.1
	1999	9.9	13.1	3.4	26.4	8.0	18.1	15.3	32.3
Chile									
	1990	10.2	18.6	4.5	33.3	9.5	20.3	14.3	22.7
	1994	5.9	13.3	3.6	22.8	8.5	20.7	16.6	31.4
	1996	4.3	11.0	3.2	18.5	8.5	20.5	17.2	34.1
	1998	4.3	9.9	2.8	17.0	7.3	19.4	17.6	38.8
Colombia b/									
	1994	16.2	20.3	4.1	40.6	9.1	18.2	12.6	19.5
	1997	14.6	20.3	4.5	39.5	9.6	18.9	12.6	19.4
	1999	18.7	21.5	4.4	44.6	9.5	17.7	10.8	17.4
Costa Rica									
	1990	7.8	11.2	3.7	22.2	7.9	21.9	20.2	27.9
	1994	5.6	9.1	3.4	18.1	7.9	20.4	20.7	32.9
	1997	5.2	9.1	2.8	17.1	8.1	20.5	20.3	34.0
	1999	5.4	7.9	2.4	15.7	8.5	19.3	17.7	38.8
Ecuador									
	1990	22.6	28.1	5.2	55.8	10.5	16.7	8.8	8.2
	1994	22.4	24.7	5.2	52.3	10.1	19.1	9.1	9.4
	1997	18.6	25.6	5.6	49.8	10.0	19.4	10.7	10.0
	1999	27.2	25.5	5.3	58.0	7.9	16.1	7.9	10.1
El Salvador									
	1995	12.4	22.4	5.1	40.0	12.0	22.0	12.8	13.3
	1997	12.0	21.8	4.8	38.6	11.0	21.8	13.6	15.0
	1999	11.1	19.0	3.9	34.0	9.8	21.7	15.4	19.1
Guatemala									
	1989	22.9	21.0	4.3	48.2	8.5	17.3	11.0	15.0
	1998	12.9	21.7	4.2	38.8	10.9	20.0	12.5	17.8
Honduras									
	1990	38.0	22.7	3.8	64.5	8.2	12.0	6.5	8.8
	1994	40.8	24.5	4.3	69.6	7.6	12.0	5.1	5.8
	1997	36.8	26.0	4.2	67.0	8.2	12.5	5.9	6.4
	1999	37.1	24.4	4.2	65.6	8.2	12.9	6.4	7.0
México									
	1989	9.3	19.8	4.8	33.9	11.0	22.3	13.1	19.8
	1994	6.2	18.2	4.6	29.0	10.8	21.8	14.4	24.0
	1996	10.0	22.2	5.3	37.5	10.7	21.3	12.4	18.1
	1998	6.9	19.1	5.1	31.1	11.0	22.0	15.3	20.6
Nicaragua									
	1993	32.2	23.5	4.6	60.3	8.2	15.7	6.9	9.0
	1998	30.7	24.1	4.5	59.3	8.6	15.8	7.6	8.7
Panamá									
	1991	13.9	15.5	4.2	33.6	8.5	17.0	13.7	27.2
	1994	8.7	13.2	3.3	25.2	7.7	19.2	16.5	31.3
	1997	8.6	12.2	3.7	24.6	7.5	18.8	15.4	33.7
	1999	6.6	10.9	3.3	20.8	7.6	18.2	16.2	37.1
Paraguay (Asunción)									
	1990	10.4	21.7	4.7	36.8	13.6	19.6	14.2	15.9
	1994	9.5	20.9	5.0	35.4	11.6	20.4	13.4	19.3
	1996	8.0	19.2	6.4	33.5	11.3	22.2	13.5	19.5
	1999	6.9	20.8	5.2	32.9	11.9	19.9	16.2	19.2
República Dominicana									
	1997	11.0	16.6	4.0	31.6	10.4	21.5	15.6	21.0
Uruguay									
	1990	2.0	7.0	2.8	11.8	7.1	22.7	23.1	35.3
	1994	1.1	3.4	1.3	5.8	3.6	15.4	23.2	52.0
	1997	0.9	3.5	1.4	5.7	4.0	15.2	21.4	53.8
	1999	0.9	3.4	1.3	5.6	3.6	13.5	20.5	56.9
Venezuela c/									
	1990	10.9	17.5	5.0	33.4	10.9	21.5	14.8	19.4
	1994	13.5	22.0	5.4	40.9	10.4	21.4	12.9	14.4
	1997	17.1	20.7	4.5	42.3	10.6	19.3	11.5	16.3
	1999	19.4	20.5	4.1	44.0	10.3	19.5	11.5	14.8

Fuente : CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ En este país los valores de indigencia (0 a 0.5 líneas de pobreza) y de pobreza (0 a 1.0 líneas de pobreza) pueden no coincidir que se presentan en el cuadro 14. Esto se debe a que en Brasil para calcular la línea de pobreza se multiplicó el valor de la línea indigencia por un coeficiente variable y no fijo(2.0) como en el resto de los casos.

b/ A partir de 1993, se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se usó una encuesta de carácter nacional.

c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 17

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA POBREZA EN ALGUNAS CATEGORÍAS OCUPACIONALES, a/ ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Total población	Total ocupados	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos	
					En establecimientos que ocupan a más de 5 personas	En establecimientos que ocupan hasta 5 personas b/	Empleados domésticos	Industria y construcción	Comercio y servicios
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	21	10	...	12 c/	15	21	6	8
	1994	13	5	...	5 c/	7	10	4	3
	1997	18	8	...	8 c/	12	18	8	6
	1999	20	10	6	9	17	22	14	8
Bolivia	1989	53	39	...	42	53	31	46	40
	1994	52	41	35	48	58	31	52	44
	1997	52	43	30	42	50	35	59	46
	1999	49	41	23	41	53	27	66	43
Brasil d/	1990	41	32	...	30	48	49	40	36
	1993	40	32	20	31	39	47	43	33
	1996	31	22	14	22	27	35	28	22
	1999	33	24	14	26	32	39	33	27
Chile	1990	38	29	...	30 c/	38	37	28	23
	1994	28	20	...	20 c/	27	21	20	17
	1996	22	15	7	18	24	20	10	10
	1998	21	14	...	14 c/	21	19	11	9
Colombia f/	1991	52	41	27	45 e/	...	38	54	53
	1994	45	34	15	41 e/	...	31	42	42
	1997	40	33	15	37 e/	...	34	48	42
	1999	51	38	12	38 e/	...	35	60	54
Costa Rica	1990	25	15	...	15	22	28	28	24
	1994	21	12	5	11	19	25	24	18
	1997	23	10	4	10	17	23	21	18
	1999	18	10	3	9	14	27	17	16
Ecuador	1990	62	51	33	50	60	56	70	61
	1994	58	46	31	49	58	56	60	56
	1997	56	45	28	46	62	53	56	54
	1999	64	53	30	55	70	61	68	62
El Salvador	1995	54	34	14	35	50	32	50	41
	1997	56	35	13	35	48	40	50	43
	1999	39	29	9	26	44	41	43	35
Guatemala	1989	53	42	20	47	61	42	48	35
	1998	46	40	19	41	53	46	51	46
Honduras	1990	70	60	29	60	76	51	81	73
	1994	75	66	42	71	83	56	84	77
	1997	73	64	44	69	83	52	84	72
	1999	72	64	41	64	81	58	80	72
México	1989	42	33	...	37 g/	...	60	32	28
	1994	37	29	...	33 g/	...	56	27 h/	...
	1996	45	38	19	41	59	63	48	41
	1998	39	31	12	36	49	57	39	30

(continúa)

Cuadro 17 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA POBREZA EN ALGUNAS CATEGORÍAS OCUPACIONALES, a/ ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Total población	Total ocupados	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos	
					En establecimientos que ocupan a más de 5 personas	En establecimientos que ocupan hasta 5 personas b/	Empleados domésticos	Industria y construcción	Comercio y servicios
Nicaragua	1993	66	52	47	54	64	74	60	45
	1998	64	54	...	54 c/	68	74	59	52
Panamá	1991	40	26	12	24	38	31	42	38
	1994	31	18	6	16	30	28	26	25
	1997	33	18	6	17	27	26	32	25
	1999	26	15	5	12	24	20	24	26
Paraguay (Asunción)	1990	42	32	23	40	49	29	41	31
	1994	42	31	14	38	44	36	42	37
	1996	39	29	13	27	40	33	44	37
	1999	40	26	11	27	40	27	42	31
República Dominicana	1997	37	21	21	18	25	26	20	25
Uruguay	1990	18	11	8	10	17	25	21	14
	1994	10	6	2	6	7	13	12	7
	1997	10	6	2	5	9	12	10	9
	1999	9	5	2	5	9	12	12	9
Venezuela i/	1990	39	22	20	24	34	33	25	22
	1994	47	32	38	29	48	41	32	32
	1997	48	35	34	44	50	52	27	27
	1999	49	35	28	37	52	50	33	34

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere al porcentaje de ocupados de cada categoría que residen en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

b/ En los casos de Bolivia (1999), Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se considera sólo a los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.

c/ Incluye asalariados públicos.

d/ Para 1990, las columnas correspondientes a establecimientos que ocupan a más de 5 y hasta 5 personas se considera a los asalariados con y sin contrato de trabajo (carteira), respectivamente.

e/ Incluye a los asalariados en establecimientos de hasta 5 ocupados.

f/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

g/ Incluye a los asalariados públicos y a los pertenecientes a establecimientos con hasta 5 ocupados.

h/ Corresponde al total de trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos.

i/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 18

**AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA POBREZA EN ALGUNAS CATEGORÍAS OCUPACIONALES, a/
ZONAS RURALES, 1990-1999**
(En porcentajes)

País	Año	Total población	Total ocupados	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos	
					En establecimientos que ocupan a más de 5 personas	En establecimientos que ocupan hasta 5 personas b/	Empleados domésticos	Total	En agricultura, silvicultura y pesca
Bolivia	1997	79	79	35	48	41	49	87	89
	1999	81	80	14	25	58	37	86	88
Brasil c/	1990	71	64	...	45	72	61	70	74
	1993	63	57	56	58	53	53	59	60
	1996	56	49	33	46	35	40	54	56
	1999	55	49	39	47	40	41	54	55
Chile	1990	40	27	...	28	36	23	22	24
	1994	32	22	...	20	28	13	21	24
	1996	31	21	13	21	27	16	18	21
	1998	28	18	...	16 d/	21	13	17	21
Colombia	1991	60	53	...	42 d/ e/	...	54	67	73
	1994	62	55	...	55 d/ e/	...	57	61	59
	1997	60	48	16	40 e/	...	48	62	67
	1999	62	50	12	41 e/	...	45	64	66
Costa Rica	1990	27	17	...	13	23	22	24	27
	1994	25	14	7	3	20	23	21	24
	1997	25	14	5	9	20	25	21	24
	1999	22	12	3	7	21	22	17	21
El Salvador	1995	64	53	24	43	56	50	63	72
	1997	69	58	26	47	57	49	67	79
	1999	65	55	16	42	56	47	71	80
Guatemala	1989	78	70	42	72	76	61	71	76
	1998	70	66	40	63	77	60	69	69
Honduras	1990	88	83	...	71	90	72	88	90
	1994	81	73	40	65	79	74	78	81
	1997	84	79	37	75	86	74	83	85
	1999	86	81	38	79	89	75	85	89
México	1989	57	49	...	53 f/	...	50	47	54
	1994	57	47	...	53 f/	...	53	46	54
	1996	62	56	23	57	67	64	59	68
	1998	58	51	23	48	60	64	55	64
Nicaragua	1993	83	75	71	64	77	59	82	89
	1998	77	70	...	61	69	49	80	87
Panamá	1991	51	40	10	25	43	43	52	57
	1994	49	38	6	23	39	40	52	61
	1997	42	29	6	22	39	33	36	42
	1999	42	29	5	19	39	30	37	42
Paraguay	1999	74	65	10	47	57	43	75	79
Rep. Dominicana	1997	39	25	17	14	26	40	30	42
Venezuela	1990	47	31	22	35	36	44	31	36
	1994	56	42	27	50	50	53	42	44

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Se refiere al porcentaje de ocupados de cada categoría que reside en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza.

b/ En los casos de Bolivia (1999), Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana y Venezuela se considera sólo a los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.

c/ En 1990, en la columna correspondiente a establecimientos que ocupan a más de cinco personas fueron incluidos los asalariados con contrato de trabajo (carteira) y en la de los que ocupan hasta cinco personas, aquellos sin contrato de trabajo

d/ Incluye a los asalariados del sector público.

e/ Incluye a los asalariados en establecimientos que ocupan hasta cinco personas.

f/ Incluye a los asalariados del sector público y a los de establecimientos que ocupan hasta cinco personas.

Cuadro 19

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, SEGÚN CATEGORÍAS OCUPACIONALES, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes del total de la población urbana ocupada en situación de pobreza)								
País	Año	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos		Total b/
			En establecimientos que ocupan a más de 5 personas	En establecimientos que ocupan hasta 5 personas a/	Empleados domésticos	Industria y construcción	Comercio y servicios	
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	...	53	17	12	6	10	98
	1994	...	52	22	10	6	10	100
	1997	...	49	23	11	5	12	100
	1999	7	36	25	12	7	13	100
Bolivia	1989	18	15	17	5	12	31	98
	1994	11	18	19	4	11	29	92
	1997	7	14	13	3	16	29	82
	1999	6	15	15	2	19	33	90
Brasil d/	1990	...	32	26	10	5	18	91
	1993	9	32	11	12	6	17	87
	1996	8	31	12	13	7	16	87
	1999	7	28	11	14	7	18	85
Chile	1990	...	53	14	10	6	12	95
	1994	...	54	14	8	7	11	94
	1996	6	53	16	9	3	8	95
	1998	...	56	18	10	4	8	96
Colombia e/	1991	...	48 c/	...	5	8	26	87
	1994	4	58 c/	...	5	8	22	97
	1997	4	46 c/	...	5	10	30	95
	1999	3	38 c/	...	5	12	37	95
Costa Rica	1990	...	28	13	8	12	17	78
	1994	11	28	18	9	10	18	94
	1997	7	30	18	8	10	22	95
	1999	6	28	17	15	8	20	94
Ecuador	1990	11	21	13	5	11	29	90
	1994	9	23	15	6	8	29	90
	1997	9	24	15	6	8	27	89
	1999	6	23	18	6	7	27	87
El Salvador	1995	5	28	15	4	12	25	89
	1997	5	25	16	5	10	27	88
	1999	4	23	21	6	10	24	88
Guatemala	1989	7	26	20	7	8	12	80
	1998	4	19	24	8	9	13	77
Honduras	1990	7	27	17	6	12	23	92
	1994	7	33	14	5	10	19	88
	1997	7	30	14	4	10	23	88
	1999	6	27	14	4	9	25	85
México	1989	...	72 c/	...	5	3	11	91
	1994	...	71 c/	...	7	17 f/	...	95
	1996	7	36	23	6	5	17	94
	1998	14	33	15	4	3	16	85

(continúa)

Cuadro 19 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, SEGÚN CATEGORÍAS OCUPACIONALES, ZONAS URBANAS, 1990-1999 (En porcentajes del total de la población urbana ocupada en situación de pobreza)								
País	Año	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos		Total b/
			En establecimientos que ocupan a más de 5 personas	En establecimientos que ocupan hasta 5 personas a/	Empleados domésticos	Industria y construcción	Comercio y servicios	
Nicaragua	1993	19	17	15	9	9	15	84
	1998	...	25	18	9	5	26	83
Panamá	1991	12	24	8	8	7	16	75
	1994	9	30	19	14	7	19	98
	1997	8	29	9	10	9	18	83
	1999	6	26	11	8	7	24	82
Paraguay (Asunción)	1990	8	30	24	10	7	15	94
	1994	5	30	19	14	7	19	94
	1996	5	22	19	11	10	26	93
	1999	6	26	21	10	8	20	91
República Dominicana	1997	12	27	10	6	7	26	88
Uruguay	1990	16	30	11	15	10	15	97
	1994	8	32	13	16	13	15	97
	1997	7	27	17	15	12	19	97
	1999	5	26	15	17	15	20	98
Venezuela g/	1990	19	33	10	10	5	15	92
	1994	21	26	14	5	6	19	91
	1997	17	32	15	7	5	15	91
	1999	12	26	18	3	7	24	90

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ En los casos de Bolivia (1999), Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay (1990) y Venezuela se considera sólo a los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.
- b/ En la mayoría de los casos el total no suma 100% debido a que se ha excluido a los empleadores, los profesionales y técnicos y los asalariados del sector público.
- c/ Incluye a los asalariados en establecimientos de hasta 5 ocupados.
- d/ Para 1990, las columnas correspondientes a establecimientos que ocupan a más de 5 y hasta 5 personas se considera a los asalariados con y sin contrato de trabajo (carteira), respectivamente.
- e/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.
- f/ Corresponde al total de trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos.
- g/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 20

AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, SEGÚN CATEGORÍAS OCUPACIONALES, ZONAS RURALES, 1990-1999 (En porcentajes del total de la población rural ocupada en situación de pobreza)								
País	Año	Asalariados públicos	Asalariados del sector privado no profesionales ni técnicos			Trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos		Total b/
			En establecimientos que ocupan a más de 5 personas	En establecimientos que ocupan hasta 5 personas a/	Empleados domésticos	Total	Agricultura	
Bolivia	1997	1	2	2	0	94	89	99
	1999	0	1	2	0	95	90	98
Brasil c/	1990	...	9	26	4	57	51	96
	1993	5	23	2	3	66	61	99
	1996	3	21	2	3	70	65	99
	1999	4	20	2	3	69	64	98
Chile	1990	...	40	29	3	27	23	99
	1994	...	39	26	2	31	25	98
	1996	2	29	35	3	30	27	99
	1998	...	36	25	3	35	31	99
Colombia	1991	...	34 d/	...	2	58	35	94
	1994	...	47 d/	...	4	45	24	96
	1997	1	35 d/	...	3	57	35	96
	1999	1	31 d/	...	3	62	36	97
Costa Rica	1990	-	25	23	6	41	27	95
	1994	5	20	28	7	35	19	95
	1997	3	20	28	9	36	19	96
	1999	2	19	34	10	30	16	95
El Salvador	1995	1	23	15	3	52	36	94
	1997	1	23	15	4	54	39	97
	1999	1	18	17	5	55	38	96
Guatemala	1989	2	23	12	2	61	52	100
	1998	1	21	17	3	49	35	91
Honduras	1990	2	11	17	2	68	51	100
	1994	3	14	15	2	65	49	99
	1997	2	13	16	2	65	45	98
	1999	2	12	16	2	66	45	98
México	1989	...	50 d/	...	3	45	38	98
	1994	...	50 d/	...	3	45	35	98
	1996	3	20	22	4	49	35	98
	1998	6	19	18	2	49	29	94
Nicaragua	1993	6	13 d/	11	4	62	54	96
	1998	-	17 d/	16	3	60	49	96
Panamá	1991	3	9	9	3	75	65	99
	1994	3	10	15	4	68	56	100
	1997	2	11	17	4	65	50	99
	1999	2	9	20	4	65	45	100
Paraguay	1999	1	5	10	3	80	66	99
República Dominicana	1997	7	12	9	5	63	48	96
Venezuela	1990	5	27	15	4	47	39	98
	1994	5	23	19	6	45	31	98

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ En los casos de Bolivia (1999), Chile (1996), El Salvador, Panamá, República Dominicana y Venezuela se considera sólo a los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.

b/ En la mayoría de los casos el total no suma 100% debido a que se ha excluido a los empleadores, los profesionales y técnicos y los asalariados del sector público.

c/ Para 1990, las columnas correspondientes a establecimientos que ocupan a más de 5 y hasta 5 personas se considera a los asalariados con y sin contrato de trabajo (carteira), respectivamente.

d/ Incluye a los asalariados en establecimientos de hasta 5 ocupados.

Cuadro 21

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): MAGNITUD Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN HOGARES ENCABEZADOS POR MUJERES, ZONAS URBANAS, 1990-1999									
País	Año	Porcentaje de hogares encabezados por mujeres en cada estrato de pobreza				Distribución de los hogares encabezados por mujeres según estratos de pobreza			
		Total hogares	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres	Total hogares	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres
Argentina (Gran Buenos Aires)	1990	21	26	12	22	100.0	4.3	7.0	88.7
	1994	24	22	20	24	100.0	1.0	7.5	91.1
	1997	26	32	24	26	100.0	4.1	9.0	86.9
	1999	27	37	28	27	100.0	4.2	10.4	85.4
Bolivia	1989	17	23	16	15	100.0	30.2	25.5	44.3
	1994	18	20	17	18	100.0	18.1	27.0	54.9
	1997	21	24	22	19	100.0	22.2	30.0	47.8
	1999	21	24	19	21	100.0	19.2	23.4	57.4
Brasil	1990	20	24	23	18	100.0	16.0	25.1	58.9
	1993	22	23	21	22	100.0	12.3	20.9	66.8
	1996	24	24	22	24	100.0	7.7	15.9	76.4
	1999	25	24	24	26	100.0	6.7	18.3	74.9
Chile	1990	21	25	20	22	100.0	11.7	21.3	67.0
	1994	22	27	21	22	100.0	7.1	16.0	76.8
	1996	23	29	22	23	100.0	5.3	13.6	81.1
	1998	24	28	23	24	100.0	4.9	12.3	82.7
Colombia a/	1991	24	28	22	24	100.0	19.8	27.6	52.6
	1994	24	24	24	24	100.0	16.1	24.0	59.9
	1997	27	32	28	25	100.0	17.5	25.9	56.6
	1999	29	31	27	29	100.0	20.4	24.0	55.6
Costa Rica	1990	23	36	25	21	100.0	10.9	16.5	72.6
	1994	24	42	27	22	100.0	9.8	14.0	76.2
	1997	27	51	36	24	100.0	9.9	15.7	74.4
	1999	28	56	39	25	100.0	10.9	14.1	75.0
Ecuador	1990	17	22	16	15	100.0	28.9	31.2	39.9
	1994	19	23	18	18	100.0	27.3	28.1	44.6
	1997	19	24	19	17	100.0	23.9	31.1	45.0
	1999	20	23	21	18	100.0	30.9	31.4	37.6
El Salvador	1995	31	38	31	29	100.0	15.4	28.1	56.5
	1997	30	36	33	28	100.0	14.2	29.3	56.5
	1999	31	36	36	29	100.0	12.6	25.9	61.5
Guatemala	1989	22	23	21	22	100.0	24.2	24.3	51.5
	1998	24	24	22	25	100.0	12.8	32.4	63.8
Honduras	1990	27	35	21	21	100.0	50.4	21.1	28.5
	1994	25	28	25	21	100.0	45.8	29.2	25.0
	1997	29	32	28	28	100.0	40.3	28.6	31.1
	1999	30	32	30	28	100.0	39.4	28.7	31.9
México	1989	16	14	14	17	100.0	8.2	21.9	69.9
	1994	17	11	16	18	100.0	4.0	21.3	74.7
	1996	18	17	15	19	100.0	9.8	23.0	67.3
	1998	19	18	16	20	100.0	6.3	20.0	73.7
Nicaragua	1993	35	40	34	32	100.0	36.8	27.2	36.1
	1998	35	39	36	30	100.0	34.9	30.2	34.9

(continúa)

Cuadro 21 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): MAGNITUD Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN HOGARES ENCABEZADOS POR MUJERES, ZONAS URBANAS, 1990-1999									
País	Año	Porcentaje de hogares encabezados por mujeres en cada estrato de pobreza				Distribución de los hogares encabezados por mujeres según estratos de pobreza			
		Total hogares	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres	Total hogares	Indigentes	Pobres no indigentes	No pobres
Panamá	1991	26	34	29	24	100.0	18.0	22.0	60.0
	1994	25	35	25	24	100.0	12.1	16.2	71.7
	1997	28	37	29	26	100.0	11.4	16.7	71.9
	1999	27	45	28	26	100.0	10.8	14.5	74.7
Paraguay (Asunción)	1990	20	21	23	18	100.0	11.2	30.5	58.3
	1994	23	20	26	22	100.0	8.4	29.3	62.3
	1996	27	25	26	27	100.0	7.4	24.7	67.9
	1999	27	30	23	29	100.0	7.7	21.9	70.4
República Dominicana	1997	31	50	31	29	100.0	17.5	20.5	62.0
Uruguay	1990	25	28	22	26	100.0	2.2	8.4	89.4
	1994	27	21	23	27	100.0	0.8	4.0	95.1
	1997	29	27	23	29	100.0	0.8	3.9	95.3
	1999	31	29	26	31	100.0	0.8	4.0	95.2
Venezuela b/	1990	22	40	25	18	100.0	19.6	25.4	55.1
	1994	25	34	28	21	100.0	18.7	30.8	50.5
	1997	26	28	29	24	100.0	18.6	28.4	53.0
	1999	27	34	27	25	100.0	23.8	24.8	51.3

Fuente: CEPAL sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría alrededor de la mitad de dicha población, sólo con la excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional.

b/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 22

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): NIVEL Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES, POR ZONA, a/ 1990-1999 (En porcentajes)											
País	Año	Ingreso medio b/	Participación en el ingreso total del:				Ingreso medio b/	Participación en el ingreso total del:			
			40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico		40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico
Zonas urbanas						Zonas rurales					
Argentina c/	1990	10.6	14.9	23.6	26.7	34.8
	1997	12.4	14.9	22.3	27.1	35.8
	1999	12.5	15.4	21.6	26.1	37.0
Bolivia	1989 d/	7.7	12.1	22.0	27.9	38.2
	1997	7.2	13.6	22.5	26.9	37.0	3.6	9.8	19.4	28.8	42.0
	1999	7.2	15.2	24.1	28.0	32.7	3.1	6.9	21.3	33.6	38.3
Brasil	1990	10.4	10.3	19.4	28.5	41.8	4.7	14.5	21.3	26.1	38.2
	1996	13.6	10.5	18.1	27.0	44.3	6.8	13.4	23.3	23.7	39.6
	1999	12.3	10.6	17.7	26.1	45.7	6.7	14.0	23.1	22.8	40.2
Chile	1990	9.4	13.4	21.2	26.2	39.2	9.7	13.8	20.4	20.6	45.1
	1996	13.5	13.4	20.9	26.4	39.4	9.4	16.8	24.3	23.4	35.6
	2000	14.1	14.0	20.9	25.4	39.7	10.6	16.9	24.5	22.4	36.1
Colombia	1994	9.0	11.6	20.4	26.1	41.9	5.7	10.0	23.3	32.2	34.6
	1997	8.4	12.9	21.4	26.1	39.5	5.3	15.4	26.3	28.2	30.1
	1999	7.3	12.6	21.9	26.6	38.8	5.6	13.9	24.7	25.9	35.5
Costa Rica	1990	9.6	17.8	28.7	28.9	24.6	9.3	17.6	28.0	29.9	24.5
	1997	10.5	17.3	27.6	28.4	26.8	9.6	17.3	27.9	28.9	25.9
	1999	11.9	16.2	26.8	29.9	27.2	10.9	15.8	26.7	29.3	28.2
Ecuador	1990	5.5	17.1	25.4	27.0	30.5
	1997	6.0	17.0	24.7	26.4	31.9
	1999	5.6	14.1	22.8	26.5	36.6
El Salvador	1995	6.9	17.3	25.1	25.8	31.7	5.1	17.0	29.6	27.3	26.1
	1997	7.1	17.2	24.8	26.9	31.1	4.7	19.4	28.6	27.3	24.7
	1999	7.7	16.3	25.9	28.6	29.2	4.9	15.6	28.8	29.8	25.9
Guatemala	1989	7.7	12.1	22.6	27.4	37.9	5.0	14.4	24.7	25.7	35.1
	1998	8.8	14.7	22.0	26.0	37.5	6.2	15.2	21.8	25.2	37.9
Honduras	1990	5.5	12.2	20.8	28.1	38.9	3.3	13.1	22.1	27.3	37.4
	1997	4.7	14.3	22.8	26.1	36.8	3.6	14.4	24.6	27.5	33.5
	1999	4.6	14.3	24.0	27.9	33.9	3.3	13.9	23.9	29.1	33.0
México	1989	9.6	16.3	22.0	24.9	36.9	6.7	18.7	26.5	27.4	27.4
	1994	9.7	16.8	22.8	26.1	34.3	6.6	20.1	25.3	27.6	27.0
	1998	8.6	17.2	22.3	25.7	34.8	6.2	18.0	23.7	26.8	31.5
Nicaragua	1993	6.1	12.9	23.6	26.9	36.5	3.9	12.4	24.3	30.0	33.4
	1998	6.4	12.3	22.3	26.4	39.1	4.5	10.8	24.1	27.8	37.3
Panamá	1991	9.5	13.3	23.9	28.6	34.2	7.3	15.0	23.7	25.7	35.6
	1997	12.0	13.3	22.4	27.0	37.3	8.6	14.9	22.4	25.0	37.7
	1999	12.2	14.2	23.9	26.8	35.1	8.3	16.2	22.1	23.8	37.8

(continúa)

Cuadro 22 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): NIVEL Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES, POR ZONA, a/ 1990-1999 (En porcentajes)											
País	Año	Ingreso medio b/	Participación en el ingreso total del:				Ingreso medio b/	Participación en el ingreso total del:			
			40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico		40% más pobre	30% siguiente	20% anterior al 10% más rico	10% más rico
Zonas urbanas						Zonas rurales					
Paraguay	1990 e/	7.7	18.6	25.7	26.9	28.9
	1996	7.4	16.7	24.6	25.3	33.4
	1999	7.1	16.5	24.9	25.8	32.8	5.0	15.1	21.2	24.3	39.4
República Dominicana	1997	9.0	14.8	23.8	25.8	35.5	7.7	16.5	25.7	25.2	32.6
Uruguay	1990	9.3	20.1	24.6	24.1	31.2
	1997	11.2	22.0	26.1	26.1	25.8
	1999	11.9	21.6	25.5	25.9	27.0
Venezuela	1990	9.1	16.8	26.1	28.8	28.4	7.7	19.8	28.6	27.8	23.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Hogares de cada zona del país ordenados según su ingreso per cápita.

b/ Ingreso medio mensual de los hogares, en múltiplos de la línea de pobreza per cápita.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Ocho ciudades principales y El Alto.

e/ Área metropolitana de Asunción.

Cuadro 23

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, a/ ZONAS URBANAS, 1990-1999							
País	Año	Porcentaje de personas con ingreso per cápita menor que:		Índices de concentración			
		el promedio	el 50% del promedio	Gini b/	Varianza de los logaritmos	Theil	Atkinson
Argentina c/	1990	70.6	39.1	0.501	0.982	0.555	0.570
	1997	72.1	43.4	0.530	1.143	0.601	0.607
	1999	72.5	44.2	0.542	1.183	0.681	0.623
Bolivia	1989 d/	71.9	44.1	0.538	1.528	0.574	0.771
	1997	72.5	43.0	0.531	1.772	0.573	0.627
	1999	70.4	40.2	0.504	1.131	0.487	0.680
Brasil	1990	74.7	52.2	0.606	1.690	0.748	0.749
	1996	75.7	53.1	0.620	1.735	0.815	0.728
	1999	76.5	53.8	0.625	1.742	0.865	0.729
Chile	1990	73.8	45.1	0.542	1.204	0.600	0.663
	1996	73.5	45.7	0.544	1.206	0.604	0.662
	2000	74.7	45.9	0.553	1.246	0.643	0.654
Colombia	1994	74.6	48.1	0.579	1.491	0.749	0.724
	1997	73.8	46.5	0.577	1.571	0.714	0.866
	1999	74.2	46.1	0.564	1.312	0.707	0.701
Costa Rica	1990	63.6	29.6	0.419	0.727	0.295	0.493
	1997	65.3	32.2	0.429	0.779	0.323	0.507
	1999	66.3	34.5	0.454	0.881	0.356	0.538
Ecuador	1990	69.6	33.8	0.461	0.823	0.403	0.591
	1997	68.9	34.8	0.469	0.832	0.409	0.510
	1999	72.1	42.0	0.521	1.075	0.567	0.597
El Salvador	1995	69.5	34.3	0.466	0.836	0.428	0.526
	1997	70.0	34.6	0.467	0.864	0.428	0.523
	1999	68.0	35.7	0.462	1.002	0.388	0.768
Guatemala	1989	72.2	45.6	0.558	1.377	0.640	0.679
	1998	74.6	43.4	0.543	1.131	0.670	0.602
Honduras	1990	73.1	46.6	0.561	1.397	0.661	0.679
	1997	71.8	40.9	0.527	1.142	0.578	0.650
	1999	70.8	41.6	0.518	1.138	0.528	0.630
México	1989	75.2	42.5	0.530	1.031	0.678	0.583
	1994	73.6	41.6	0.512	0.934	0.544	0.534
	1998	73.2	41.5	0.507	0.901	0.578	0.530
Nicaragua	1993	71.4	42.6	0.549	1.256	0.595	0.661
	1998	72.3	43.4	0.551	1.271	0.673	0.689
Panamá	1991	70.3	44.2	0.545	1.312	0.577	0.656
	1997	71.8	45.6	0.552	1.362	0.632	0.673
	1999	71.4	43.8	0.533	1.223	0.558	0.629

(continúa)

Cuadro 23 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, a/ ZONAS URBANAS, 1990-1999							
País	Año	Porcentaje de personas con ingreso per cápita menor que:		Índices de concentración			
		el promedio	el 50% del promedio	Gini b/	Varianza de los logaritmos	Theil	Atkinson
Paraguay	1990 e/	69.2	33.4	0.447	0.737	0.365	0.468
	1996	72.9	37.9	0.493	0.916	0.515	0.544
	1999	70.0	39.1	0.497	0.997	0.490	0.575
República Dominicana	1997	71.9	39.5	0.509	1.003	0.538	0.574
Uruguay	1990	73.2	36.8	0.492	0.812	0.699	0.519
	1997	66.8	31.3	0.430	0.730	0.336	0.475
	1999	67.1	32.2	0.440	0.764	0.354	0.483
Venezuela	1990	67.7	34.4	0.464	0.903	0.403	0.538

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Calculados a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas de las zonas urbanas.

b/ Incluye a las personas con cero ingresos.

c/ Gran Buenos Aires.

d/ Ocho ciudades principales y El Alto.

e/ Área metropolitana de Asunción.

Cuadro 24

AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, a/ ZONAS RURALES, 1990-1999							
País	Año	Porcentaje de personas con ingreso per cápita menor que:		Índices de concentración			
		el promedio	el 50% del promedio	Gini b/	Varianza de los logaritmos	Theil	Atkinson
Bolivia	1997	75.4	53.6	0.637	2.133	0.951	0.788
	1999	71.3	52.9	0.640	2.772	0.809	0.846
Brasil	1990	72.5	45.5	0.548	1.266	0.627	0.704
	1996	73.1	47.6	0.578	1.424	0.727	0.675
	1999	73.8	47.4	0.577	1.357	0.773	0.662
Chile	1990	79.0	47.9	0.578	1.269	0.854	0.663
	1996	73.9	36.2	0.492	0.887	0.542	0.554
	2000	74.5	38.7	0.511	0.956	0.669	0.576
Colombia	1994	69.8	45.5	0.570	2.047	0.621	0.806
	1997	73.8	46.5	0.577	1.571	0.714	0.866
	1999	72.1	39.5	0.525	1.291	0.626	0.963
Costa Rica	1990	63.3	27.9	0.419	0.771	0.301	0.518
	1997	65.7	30.4	0.426	0.757	0.316	0.498
	1999	66.8	33.0	0.457	0.895	0.377	0.551
El Salvador	1995	64.4	29.9	0.442	0.961	0.352	0.656
	1997	66.3	31.0	0.423	0.670	0.343	0.441
	1999	64.8	34.0	0.462	1.302	0.382	0.768
Guatemala	1989	72.6	37.6	0.513	1.076	0.593	0.620
	1998	74.1	43.7	0.523	0.934	0.707	0.550
Honduras	1990	73.9	45.6	0.558	1.326	0.692	0.658
	1997	70.9	38.7	0.504	1.083	0.520	0.630
	1999	69.8	39.8	0.512	1.244	0.516	0.695
México	1989	68.8	33.5	0.453	0.769	0.401	0.490
	1994	69.5	34.9	0.451	0.720	0.385	0.458
	1998	70.2	41.5	0.486	0.846	0.467	0.506
Nicaragua	1993	69.2	41.6	0.536	1.348	0.553	0.790
	1998	68.2	42.4	0.558	1.765	0.598	0.819
Panamá	1991	72.9	44.0	0.535	1.083	0.949	0.588
	1997	74.1	45.4	0.555	1.211	0.696	0.627
	1999	74.0	44.5	0.540	1.089	0.720	0.597
Paraguay	1999	74.1	47.1	0.570	1.389	0.839	0.684
República Dominicana	1997	69.8	36.2	0.483	0.940	0.484	0.570
Venezuela	1990	67.0	31.3	0.431	0.724	0.348	0.468

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Calculados a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas de las zonas rurales.

b/ Incluye a las personas con cero ingresos.

Cuadro 25

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7.6	77.3		15.0
	1990	3.3	78.6		18.2
	1994	3.9	77.2		18.9
	1999	2.5	40.6	41.5	15.5
Bolivia	1997	11.9	31.1	44.4	12.6	48.3	34.9	15.3	1.5
	1999	7.2	25.8	48.1	18.9	47.4	30.5	21.1	1.0
Brasil	1979	48.2	34.6	14.1	3.1	86.8	9.7	1.9	1.6
	1990	41.0	37.5	18.2	3.3	79.0	16.9	3.7	0.3
	1993	40.7	38.9	17.6	2.8	77.9	17.4	4.3	0.3
	1999	27.0	42.7	26.7	3.7	62.8	27.2	9.5	0.5
Chile	1990	5.6	33.1	45.5	15.8	16.9	56.5	22.6	4.1
	1994	4.2	31.2	46.4	18.2	14.4	54.8	26.1	4.7
	1998	3.1	31.5	47.4	18.0	10.7	52.1	32.3	4.9
Colombia b/	1980	31.2	40.9	21.1	6.8
	1990	19.6	40.4	31.0	9.0
	1991	21.8	37.9	29.7	10.6	60.1	25.7	13.6	0.5
	1994	17.7	37.9	35.9	8.4	55.8	29.5	14.0	0.7
	1999	14.6	32.4	43.2	9.8	46.2	30.7	21.8	1.3
Costa Rica	1981	7.3	50.5	33.9	8.2	19.8	64.7	13.8	1.7
	1990	9.1	50.1	29.8	10.9	20.0	64.5	13.6	2.0
	1994	8.6	49.6	30.9	10.9	21.2	64.3	12.3	2.2
	1999	8.5	50.8	28.3	12.4	18.5	61.9	15.9	3.7
Ecuador	1990	5.8	45.9	37.0	11.4
	1994	4.8	42.3	39.5	13.4
	1999	6.0	41.0	39.5	13.6
El Salvador	1995	20.6	41.4	28.8	9.2	60.4	31.2	7.3	1.1
	1999	15.6	38.7	33.5	12.2	49.7	38.5	10.0	1.9
Guatemala	1989	33.9	42.6	19.2	4.3	75.9	21.8	2.1	0.2
	1998	25.3	43.5	24.3	6.9	67.3	29.1	3.4	0.2
Honduras	1990	24.1	55.7	15.3	5.0	57.6	39.8	2.3	0.3
	1994	20.5	56.1	17.3	6.0	45.9	49.3	4.4	0.4
	1999	16.3	57.7	19.9	6.2	45.5	49.1	5.2	0.3
México a/	1989	8.3	60.5	22.1	9.1	31.4	59.2	7.7	1.7
	1994	7.5	57.5	24.4	10.6	25.8	65.1	8.0	1.1
	1998	6.0	55.2	24.3	12.3	21.6	62.3	12.7	3.0
Nicaragua	1993	24.6	53.8	19.5	2.1	68.9	26.5	4.3	0.3
	1998	21.7	50.5	22.2	5.5	61.2	32.6	5.3	0.9
Panamá	1979	6.3	49.1	35.5	9.1	20.5	61.3	16.2	1.9
	1991	6.3	42.7	39.5	11.5	15.6	57.3	23.6	3.5
	1994	5.0	45.9	36.4	12.6	16.4	56.3	23.3	4.0
	1999	3.9	40.8	39.1	16.2	12.9	55.4	26.3	5.4

(continúa)

Cuadro 25 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Paraguay (Asunción)	1986	10.6	50.9	31.1	7.5
	1990	7.3	46.7	36.8	9.3
	1994	7.9	49.0	34.8	8.3
	1999	5.4	44.3	40.2	10.2	29.0	56.5	12.3	2.2
República Dominicana	1997	20.2	39.7	29.7	10.4	41.2	39.6	17.1	2.1
Uruguay	1981	7.4	55.5	31.8	5.3
	1990	3.7	52.6	35.4	8.3
	1994	3.5	51.1	37.6	7.8
	1999	2.8	48.6	39.4	9.2
Venezuela <i>c/</i>	1981	13.5	58.5	20.4	7.7	46.1	46.4	6.8	0.7
	1990	10.3	56.5	23.6	9.6	39.0	51.3	8.5	1.2
	1994	10.2	48.2	28.8	12.8	38.2	48.4	10.9	2.5
	1999	10.7	48.2	27.3	13.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 25.1

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7.6	78.9		13.5
	1990	3.1	81.6		15.3
	1994	4.8	80.1		15.0
	1999	2.5	46.0	39.9	11.7
Bolivia	1997	9.2	31.3	46.6	12.9	40.0	39.1	19.8	1.1
	1999	5.3	24.8	51.5	18.5	40.2	32.8	25.6	1.4
Brasil	1979	49.2	34.6	13.1	3.1	87.0	9.5	1.6	2.0
	1990	44.4	37.0	15.8	2.9	81.7	15.6	2.6	0.2
	1993	44.8	37.4	15.5	2.2	81.0	15.6	3.2	0.2
	1999	30.7	42.9	23.4	3.0	68.1	23.7	7.8	0.4
Chile	1990	6.0	33.5	45.6	14.9	18.8	57.0	20.5	3.6
	1994	4.5	32.1	45.6	17.8	16.2	55.5	24.1	4.1
	1998	3.4	33.4	46.6	16.7	11.3	54.7	29.8	4.2
Colombia b/	1980	29.5	42.7	21.3	6.6
	1990	18.2	42.5	30.7	8.6
	1991	22.1	39.8	28.4	9.7	64.3	23.5	11.6	0.5
	1994	18.1	39.0	35.1	7.8	60.3	28.3	10.9	0.5
	1999	15.0	34.0	42.2	8.9	50.2	29.7	19.1	1.0
Costa Rica	1981	7.8	52.4	31.6	8.2	19.6	65.8	12.7	1.9
	1990	10.5	50.1	28.6	10.8	22.3	63.7	12.2	1.8
	1994	9.4	47.9	31.5	11.2	22.4	64.7	11.0	1.9
	1999	9.5	52.0	26.8	11.6	19.3	63.3	13.6	3.7
Ecuador	1990	6.7	48.9	33.9	10.6
	1994	4.9	42.9	39.9	12.3
	1999	6.0	43.7	39.2	11.0
El Salvador	1995	20.7	43.5	26.7	9.1	61.1	31.5	6.7	0.7
	1999	16.0	38.7	32.8	12.4	48.6	40.6	9.0	1.8
Guatemala	1989	27.6	47.5	18.6	6.2	70.8	26.5	2.5	0.2
	1998	24.3	45.8	21.8	8.1	61.1	34.8	3.9	0.1
Honduras	1990	23.8	57.3	14.6	4.3	60.2	38.2	1.6	0.1
	1994	21.4	56.2	15.9	6.5	48.2	47.9	3.5	0.4
	1999	17.7	58.8	18.5	5.0	46.7	49.0	4.2	0.1
México a/	1989	7.6	58.1	23.8	10.5	31.4	58.6	8.4	1.5
	1994	7.1	56.1	25.2	11.5	27.4	63.5	7.9	1.2
	1998	6.2	55.5	25.3	12.4	19.9	62.6	13.6	3.4
Nicaragua	1993	26.0	54.2	17.7	2.1	72.1	23.3	4.4	0.2
	1998	24.0	50.7	20.6	4.7	65.7	30.1	3.5	0.8
Panamá	1979	6.5	52.6	32.3	8.6	20.3	63.5	14.6	1.6
	1991	7.2	47.1	36.0	9.7	17.8	58.2	21.2	2.8
	1994	5.6	49.5	34.8	10.1	18.2	59.1	19.9	2.8
	1999	4.3	43.9	37.9	13.8	14.8	59.4	21.9	3.9

(continúa)

Cuadro 25.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Paraguay (Asunción)	1986	7.7	52.3	31.2	8.8
	1990	5.6	46.6	38.8	9.1
	1994	7.4	47.5	37.2	7.8
	1999	5.3	43.1	42.8	8.8	30.4	56.0	11.8	1.7
República Dominicana	1997	24.5	39.2	27.5	8.8	46.6	36.7	14.5	2.1
Uruguay	1981	8.8	57.4	28.7	5.1
	1990	4.0	57.3	31.8	6.9
	1994	4.1	56.5	33.2	6.2
	1999	3.3	55.4	34.2	7.2
Venezuela c/	1981	15.3	59.0	18.6	7.1	49.0	44.5	6.0	0.5
	1990	11.9	58.4	21.1	8.6	44.4	48.8	6.0	0.8
	1994	12.2	51.0	26.0	10.8	43.5	45.2	9.7	1.6
	1999	13.5	51.4	24.7	10.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 25.2

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7.7	75.9		16.5
	1990	3.4	75.2		21.3
	1994	3.0	74.1		22.9
	1999	2.4	35.4	43.0	19.1
Bolivia	1997	14.5	30.9	42.3	12.4	56.9	30.5	10.8	1.8
	1999	9.0	26.9	44.9	19.2	55.0	28.1	16.4	0.5
Brasil	1979	47.3	34.5	15.0	3.2	86.6	9.9	2.2	1.3
	1990	37.9	38.0	20.4	3.7	76.1	18.5	5.0	0.4
	1993	36.8	40.3	19.5	3.4	74.3	19.5	5.7	0.4
	1999	23.4	42.4	29.9	4.3	56.7	31.1	11.5	0.7
Chile	1990	5.3	32.6	45.4	16.7	14.7	55.9	24.7	4.6
	1994	3.8	30.3	47.2	18.6	12.5	54.0	28.2	5.3
	1998	2.9	29.6	48.2	19.3	10.2	49.2	35.0	5.7
Colombia b/	1980	32.5	39.5	21.0	7.0
	1990	20.8	38.7	31.2	9.3
	1991	21.5	36.3	30.8	11.4	55.9	28.0	15.6	0.5
	1994	17.4	37.1	36.6	8.9	50.9	30.8	17.4	0.8
	1999	14.3	31.1	44.0	10.6	41.8	31.8	24.8	1.7
Costa Rica	1981	6.9	48.7	36.2	8.2	19.9	63.7	14.8	1.6
	1990	7.7	50.1	31.1	11.1	17.4	65.4	15.0	2.2
	1994	7.7	51.4	30.3	10.6	19.8	63.9	13.8	2.5
	1999	7.5	49.7	29.7	13.1	17.8	60.5	18.1	3.6
Ecuador	1990	5.0	43.1	39.8	12.1
	1994	4.8	41.8	39.2	14.3
	1999	5.9	38.3	39.8	16.0
El Salvador	1995	20.5	39.6	30.6	9.3	59.7	30.9	7.8	1.5
	1999	15.3	38.7	34.1	12.0	50.8	36.4	11.0	1.9
Guatemala	1989	38.9	38.7	19.6	2.8	80.8	17.4	1.7	0.2
	1998	26.2	41.5	26.6	5.8	73.2	23.7	2.8	0.3
Honduras	1990	24.2	54.4	15.9	5.5	55.0	41.5	3.1	0.4
	1994	19.8	56.0	18.5	5.6	43.4	50.8	5.3	0.4
	1999	15.2	56.7	21.1	7.1	44.2	49.2	6.3	0.4
México a/	1989	8.9	62.7	20.5	7.8	31.4	59.8	6.9	1.9
	1994	7.8	58.8	23.6	9.8	24.3	66.7	8.1	0.9
	1998	5.8	54.9	23.4	12.3	23.2	62.0	11.7	2.6
Nicaragua	1993	23.4	53.4	21.1	2.1	65.7	29.8	4.3	0.3
	1998	19.7	50.3	23.7	6.3	56.4	35.4	7.2	1.0
Panamá	1979	6.1	46.1	38.2	9.6	20.8	58.6	18.2	2.3
	1991	5.4	38.4	42.9	13.3	12.9	56.2	26.5	4.4
	1994	4.5	42.3	38.0	15.2	14.4	53.0	27.2	5.4
	1999	3.5	37.7	40.3	18.5	10.8	51.1	31.2	7.0

(continúa)

Cuadro 25.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Paraguay (Asunción)	1986	12.4	49.9	31.0	6.7
	1990	8.7	46.7	35.1	9.4
	1994	8.3	50.2	32.8	8.7
	1999	5.4	45.2	38.0	11.4	27.4	57.0	12.9	2.6
República Dominicana	1997	16.7	40.1	31.5	11.6	35.2	42.7	20.0	2.1
Uruguay	1981	6.1	53.9	34.6	5.5
	1990	3.3	48.0	38.9	9.7
	1994	2.8	45.8	42.0	9.4
	1999	2.3	41.6	44.8	11.3
Venezuela c/	1981	11.8	58.0	22.0	8.2	42.2	48.8	7.9	1.0
	1990	8.7	54.5	26.2	10.6	32.5	54.3	11.5	1.7
	1994	8.3	45.3	31.6	14.8	32.0	52.1	12.4	3.5
	1999	7.7	44.9	30.0	17.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 26

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	21.6	67.4		11.1
	1990	12.4	69.6		18.0
	1994	10.3	70.7		19.0
	1999	8.5	38.2	30.6	22.7
Bolivia	1997	34.1	17.3	28.4	20.3	78.3	12.2	5.8	3.8
	1999	27.9	19.9	23.7	28.5	79.4	12.6	4.8	3.2
Brasil	1979	70.0	12.6	10.0	7.3	96.0	1.9	1.0	1.0
	1990	55.5	17.1	16.8	10.7	89.2	6.3	3.7	0.8
	1993	53.4	19.0	17.7	10.0	88.3	6.8	3.9	1.0
	1999	45.3	21.6	21.8	11.3	82.6	10.2	5.8	1.4
Chile	1990	15.7	29.4	34.6	20.3	43.7	37.5	13.1	5.7
	1994	14.0	24.2	39.0	22.8	39.6	38.7	15.8	5.9
	1998	10.8	24.4	39.0	25.7	36.8	42.3	15.8	5.1
Colombia b/	1980	52.4	22.3	13.7	11.6
	1990	37.4	23.4	23.1	16.1
	1991	39.9	23.0	21.3	15.8	78.2	12.4	7.3	2.1
	1994	35.9	22.9	25.3	15.9	76.2	12.0	9.5	2.4
	1999	33.3	21.5	27.6	17.6	72.8	12.5	10.9	3.9
Costa Rica	1981	27.2	41.5	17.8	13.5	58.1	33.5	5.8	2.6
	1990	16.7	40.5	22.1	20.7	40.0	44.8	10.6	4.5
	1994	14.1	39.5	24.9	21.5	34.8	49.2	10.7	5.3
	1999	12.7	41.1	22.5	23.7	28.8	52.0	11.7	7.5
Ecuador	1990	16.1	43.0	21.9	19.0
	1994	11.7	39.8	24.6	24.0
	1999	11.5	37.2	27.1	24.2
El Salvador	1995	35.8	30.2	19.7	14.3	80.2	16.3	2.6	0.9
	1999	30.6	29.8	22.0	17.7	75.2	19.6	3.7	1.5
Guatemala	1989	51.5	26.6	13.8	8.1	90.7	7.3	1.5	0.5
	1998	42.4	29.9	17.5	10.2	87.1	10.2	2.3	0.5
Honduras	1990	42.7	31.0	18.2	8.1	81.4	15.9	2.5	0.2
	1994	35.1	34.4	22.0	8.5	69.9	25.1	4.5	0.5
	1999	31.4	36.6	21.0	11.0	69.3	24.8	5.0	0.9
México a/	1989	29.5	47.2	9.6	13.7	70.0	25.1	2.3	2.6
	1994	23.0	48.4	11.8	16.8	63.3	31.4	3.4	1.9
	1998	19.7	49.0	13.1	16.8	51.9	38.0	4.6	2.9
Nicaragua	1993	41.4	34.1	15.9	8.7	81.7	15.0	2.1	1.1
	1998	36.5	35.2	14.0	14.4	75.9	16.6	4.1	3.4
Panamá	1979	18.2	47.8	20.5	13.5	57.4	36.6	4.4	1.7
	1991	13.8	39.6	25.1	21.6	37.6	43.9	12.3	6.1
	1994	11.2	39.9	26.6	22.3	35.0	44.8	13.2	6.9
	1999	8.0	38.7	27.8	25.4	27.2	48.4	16.1	8.3

(continúa)

Cuadro 26 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Paraguay (Asunción)	1986	21.6	37.5	23.3	17.6
	1990	16.9	40.5	28.1	14.6
	1994	17.9	42.1	22.9	17.1
	1999	13.1	45.4	23.8	17.6	59.1	34.0	4.6	2.3
República Dominicana	1997	32.0	26.9	25.5	15.6	62.1	25.2	9.9	2.7
Uruguay	1981	26.6	46.4	18.2	8.8
	1990	17.2	46.3	23.6	12.8
	1994	14.5	46.3	25.3	13.8
	1999	9.2	47.8	27.4	15.6
Venezuela c/	1981	29.9	49.4	11.9	8.7	73.5	22.8	2.8	0.9
	1990	19.4	48.3	17.8	14.5	61.0	32.4	5.2	1.4
	1994	18.5	45.8	20.2	15.5	54.0	36.3	7.0	2.8
	1999	18.6	45.2	20.0	16.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 26.1

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	20.9	66.1		13.1
	1990	11.2	70.1		18.7
	1994	9.1	71.9		19.1
	1999	8.1	39.8	31.4	20.7
Bolivia	1997	25.1	18.4	32.3	24.2	71.3	15.6	7.9	5.2
	1999	19.4	21.1	27.0	32.6	69.9	19.0	6.9	4.3
Brasil	1979	67.9	13.7	9.7	8.6	95.9	2.0	1.0	1.1
	1990	54.6	17.8	16.6	11.0	89.0	6.6	3.4	0.9
	1993	52.8	19.7	17.4	10.1	88.4	6.9	3.7	1.0
	1999	45.7	22.6	20.6	11.1	83.5	10.3	5.0	1.3
Chile	1990	13.8	28.5	35.3	22.4	42.9	38.5	12.9	5.7
	1994	12.9	23.6	39.5	24.0	38.3	40.4	15.1	6.2
	1998	9.9	23.5	39.7	27.0	36.2	43.3	15.9	4.6
Colombia b/	1980	48.8	21.0	13.8	16.4
	1990	34.6	22.8	23.3	19.2
	1991	36.9	23.0	21.6	18.5	78.0	12.4	7.3	2.2
	1994	33.8	22.8	25.4	18.0	76.9	11.4	9.2	2.6
	1999	31.8	21.2	27.4	19.6	73.9	12.1	10.3	3.7
Costa Rica	1981	25.4	40.3	18.4	15.8	55.5	35.9	5.9	2.7
	1990	15.0	40.1	22.1	22.9	38.1	46.6	10.7	4.7
	1994	13.4	38.3	24.5	23.7	34.3	49.9	10.3	5.5
	1999	11.7	41.8	22.0	24.5	28.2	53.2	11.3	7.3
Ecuador	1990	14.0	43.4	20.6	22.1
	1994	10.1	39.7	23.7	26.5
	1999	10.1	37.8	25.8	26.3
El Salvador	1995	29.4	32.8	20.4	17.3	75.0	20.6	3.4	1.0
	1999	25.4	31.8	22.5	20.3	70.2	24.0	4.3	1.5
Guatemala	1989	45.3	29.9	13.9	10.9	87.9	9.9	1.6	0.6
	1998	34.2	34.6	17.9	13.3	82.2	14.1	3.1	0.6
Honduras	1990	39.7	32.9	17.2	10.2	81.0	16.5	2.2	0.3
	1994	32.3	34.3	21.9	11.5	69.0	26.8	3.6	0.6
	1999	29.3	38.2	18.7	13.8	71.2	23.1	4.7	1.0
México a/	1989	25.3	43.9	10.7	20.1	66.8	25.7	3.6	3.9
	1994	19.8	45.5	12.3	22.4	59.7	33.0	4.4	2.9
	1998	17.2	44.3	15.7	20.9	47.5	38.2	5.4	3.6
Nicaragua	1993	36.6	37.4	15.3	10.6	80.3	15.9	2.1	1.6
	1998	32.3	38.0	13.9	15.8	75.8	17.5	3.4	3.3
Panamá	1979	17.6	46.8	20.4	15.1	56.5	37.3	4.5	1.7
	1991	13.9	40.3	24.5	21.3	37.3	45.0	12.1	5.5
	1994	11.4	40.4	26.4	21.7	35.4	46.5	11.7	6.4
	1999	7.8	40.3	27.7	24.3	27.4	50.8	14.6	7.1

(continúa)

Cuadro 26.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Paraguay (Asunción)	1986	17.4	37.6	23.7	21.3
	1990	15.1	40.6	28.3	16.0
	1994	15.7	42.2	23.3	18.8
	1999	11.1	44.4	26.0	18.4	56.3	36.1	5.3	2.2
República Dominicana	1997	31.6	27.9	25.8	14.7	60.2	27.0	9.8	2.9
Uruguay	1981	26.6	47.4	18.3	7.7
	1990	17.5	47.4	23.4	11.7
	1994	14.7	47.7	25.7	11.9
	1999	9.8	50.2	26.6	13.4
Venezuela c/	1981	26.0	50.9	12.1	11.1	70.9	25.0	2.9	1.2
	1990	17.5	49.6	17.4	15.5	58.9	34.5	5.1	1.6
	1994	17.3	46.5	19.7	16.4	53.6	37.4	6.2	2.8
	1999	18.4	47.1	19.7	14.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 26.2

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	22.3		68.3	9.4
	1990	13.5		69.1	17.4
	1994	11.4		69.7	19.0
	1999	8.8	36.8	29.9	24.6
Bolivia	1997	42.0	16.3	24.9	16.8	85.3	8.8	3.6	2.3
	1999	35.6	18.8	20.8	24.8	88.2	6.6	2.9	2.2
Brasil	1979	72.0	11.6	10.3	6.1	96.2	1.8	1.1	0.9
	1990	56.2	16.4	17.0	10.3	89.4	5.9	3.9	0.8
	1993	53.9	18.4	17.9	9.8	88.1	6.7	4.2	1.0
	1999	45.0	20.6	22.9	11.5	81.7	10.2	6.6	1.6
Chile	1990	17.4	30.1	34.0	18.5	44.5	36.4	13.4	5.8
	1994	15.0	24.7	38.5	21.8	40.9	37.0	16.5	5.6
	1998	11.7	25.3	38.5	24.5	37.4	41.2	15.8	5.6
Colombia b/	1980	55.5	23.5	13.7	7.4
	1990	39.9	23.9	22.9	13.3
	1991	42.3	23.0	21.1	13.6	78.4	12.4	7.3	2.0
	1994	37.6	23.0	25.3	14.2	75.5	12.6	9.7	2.2
	1999	34.6	21.8	27.7	16.0	71.5	12.9	11.5	4.1
Costa Rica	1981	28.7	42.6	17.3	11.4	60.9	31.1	5.6	2.5
	1990	18.2	40.9	22.1	18.9	42.0	43.0	10.6	4.4
	1994	14.8	40.4	25.3	19.5	35.3	48.5	11.1	5.1
	1999	13.6	40.4	22.9	23.0	29.5	50.8	12.1	7.7
Ecuador	1990	18.0	42.7	23.1	16.2
	1994	13.1	39.8	25.4	21.7
	1999	12.8	36.6	28.3	22.3
El Salvador	1995	40.7	28.2	19.1	12.0	84.7	12.6	1.9	0.7
	1999	34.7	28.2	21.5	15.6	79.5	15.9	3.1	1.5
Guatemala	1989	56.7	23.9	13.7	5.8	93.4	4.9	1.3	0.3
	1998	49.0	26.2	17.1	7.6	91.3	6.8	1.5	0.4
Honduras	1990	45.1	29.6	18.9	6.4	81.8	15.4	2.7	...
	1994	37.4	34.5	22.1	6.0	70.8	23.5	5.3	0.5
	1999	33.1	35.4	22.8	8.7	67.6	26.3	5.3	0.9
México a/	1989	33.3	50.1	8.6	8.1	72.9	24.6	1.1	1.4
	1994	25.9	51.0	11.3	11.9	66.6	29.9	2.5	1.1
	1998	22.0	53.1	10.7	13.1	55.9	37.8	3.9	2.2
Nicaragua	1993	45.5	31.1	16.3	7.0	83.1	14.1	2.1	0.6
	1998	39.9	32.9	14.0	13.3	76.0	15.7	4.8	3.5
Panamá	1979	18.6	48.6	20.6	12.1	58.3	35.9	4.2	1.6
	1991	13.7	39.0	25.6	21.8	37.9	42.7	12.6	6.7
	1994	10.9	39.5	26.8	22.8	34.6	43.1	14.7	7.5
	1999	8.3	37.3	27.9	26.5	26.9	45.9	17.6	9.5

(continúa)

Cuadro 26.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Paraguay (Asunción)	1986	25.4	37.5	22.9	14.3
	1990	18.4	40.3	27.9	13.3
	1994	19.8	42.0	22.6	15.6
	1999	15.0	46.2	21.8	16.9	62.0	31.7	3.9	2.4
República Dominicana	1997	32.3	26.0	25.3	16.4	64.1	23.4	10.0	2.5
Uruguay	1981	26.6	45.6	18.1	9.7
	1990	17.0	45.4	23.9	13.7
	1994	14.4	45.2	25.0	15.4
	1999	8.7	45.6	28.2	17.6
Venezuela c/	1981	33.6	48.1	11.7	6.6	76.5	20.1	2.7	0.6
	1990	21.3	46.9	18.1	13.6	63.5	30.0	5.4	1.1
	1994	19.6	45.1	20.7	14.6	54.4	35.0	7.9	2.8
	1999	18.7	43.3	20.2	17.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 27

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	17.8	67.2		15.0
	1990	13.1	69.0		17.9
	1994	8.1	70.2		21.7
	1999	7.3	35.9	32.7	24.2
Bolivia	1997	31.7	19.7	30.8	17.8	74.5	15.9	6.7	2.8
	1999	23.3	22.7	28.8	25.2	74.5	15.1	7.9	2.4
Brasil	1979	60.9	19.2	12.4	7.6	93.2	4.0	1.3	1.4
	1990	47.5	24.3	18.4	9.8	85.0	10.3	3.9	0.8
	1993	53.6	23.0	16.2	7.2	86.5	9.2	3.6	0.7
	1999	39.5	25.4	24.5	10.6	79.3	13.1	6.5	1.1
Chile	1990	12.9	26.9	36.5	23.8	36.8	40.9	15.2	7.1
	1994	11.7	22.8	40.2	25.4	34.3	40.9	17.7	7.1
	1998	9.4	22.6	40.9	27.0	33.0	42.4	19.1	5.6
Colombia b/	1980	47.1	25.3	16.1	11.5
	1990	28.4	28.2	26.9	16.5
	1991	35.3	24.4	24.2	16.0	75.9	13.5	8.8	1.8
	1994	32.0	23.1	28.7	16.2	73.1	13.3	11.2	2.4
	1999	29.3	21.5	31.7	17.5	68.4	14.0	13.8	3.7
Costa Rica	1981	20.4	43.4	23.0	13.3	42.0	47.3	8.2	2.5
	1990	14.1	41.1	24.1	20.7	32.9	50.7	11.7	4.6
	1994	12.7	39.7	25.8	21.7	31.1	52.6	11.2	5.0
	1999	11.6	41.9	23.2	23.3	26.3	54.0	12.2	7.5
Ecuador	1990	14.5	43.1	24.1	18.2
	1994	11.1	39.5	27.0	22.4
	1999	11.3	38.0	28.4	22.3
El Salvador	1995	33.7	31.5	21.3	13.5	74.2	20.9	4.0	1.0
	1999	28.9	30.3	24.2	16.5	68.0	25.0	5.4	1.6
Guatemala	1989	45.5	29.9	16.2	8.4	84.1	13.5	1.9	0.5
	1998	39.5	31.8	19.0	9.7	80.2	16.8	2.6	0.4
Honduras	1990	38.2	36.7	18.2	7.0	74.8	22.2	2.8	0.2
	1994	32.0	38.9	20.5	8.7	62.3	32.2	4.9	0.6
	1999	29.3	41.0	20.3	9.4	63.1	30.9	5.2	0.9
México a/	1989	21.7	50.4	13.2	14.6	59.8	34.1	3.5	2.6
	1994	19.0	50.0	14.0	16.9	54.6	39.4	4.0	2.0
	1998	17.3	49.7	15.2	17.8	47.1	43.7	6.3	3.0
Nicaragua	1993	33.5	41.0	18.1	7.4	74.1	21.4	3.5	1.1
	1998	33.8	38.0	15.3	12.9	70.9	21.8	4.4	2.9
Panamá	1979	14.0	46.3	25.3	14.4	47.8	42.3	7.8	2.1
	1991	11.7	37.6	29.1	21.6	34.0	45.2	14.9	5.8
	1994	9.3	38.7	29.2	22.8	32.4	45.8	15.2	6.6
	1999	7.2	36.7	29.8	26.3	26.9	48.0	16.8	8.3

(continúa)

Cuadro 27 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Paraguay (Asunción)	1986	18.7	40.8	24.8	15.7
	1990	14.7	41.6	29.3	14.4
	1994	15.7	42.1	25.8	16.4
	1999	11.9	42.2	28.1	17.7	52.6	38.5	6.4	2.4
República Dominicana	1997	28.3	29.0	26.4	16.2	57.0	27.5	12.4	3.2
Uruguay	1981	21.3	47.4	21.8	9.5
	1990	14.2	46.3	26.2	13.3
	1994	12.2	46.9	27.6	13.4
	1999	8.4	47.5	28.7	15.3
Venezuela <i>c/</i>	1981	24.3	52.3	14.7	8.7	67.0	28.8	3.5	0.8
	1990	16.6	49.6	19.7	14.1	56.7	36.1	5.8	1.4
	1994	16.3	45.9	22.1	15.7	51.4	37.8	7.9	2.9
	1999	17.3	44.6	21.5	16.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 27.1

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	18.6	68.1		13.3
	1990	12.5	71.1		16.3
	1994	8.3	73.7		18.0
	1999	7.4	40.7	32.7	19.2
Bolivia	1997	25.7	21.0	34.3	18.9	68.2	19.1	9.0	3.6
	1999	17.8	23.7	32.5	26.0	66.8	20.1	10.2	2.9
Brasil	1979	63.5	19.2	10.4	7.0	93.7	3.9	1.0	1.4
	1990	51.4	23.8	16.2	8.6	87.3	9.2	2.9	0.6
	1993	53.7	23.4	15.5	7.4	87.5	8.8	3.1	0.7
	1999	43.0	26.5	21.4	9.1	81.0	12.8	5.3	0.9
Chile	1990	13.2	28.7	37.3	20.8	39.2	42.0	13.8	5.0
	1994	12.2	24.2	40.7	22.8	36.4	42.0	16.0	5.5
	1998	10.0	24.3	41.5	24.3	35.2	43.8	16.9	4.0
Colombia b/	1980	46.8	25.3	15.3	12.7
	1990	29.8	28.6	25.4	16.1
	1991	36.8	25.5	22.5	15.2	78.4	13.0	7.2	1.4
	1994	33.8	24.1	27.0	15.1	77.0	12.8	8.4	1.8
	1999	31.1	22.0	30.1	16.7	73.3	13.2	10.9	2.6
Costa Rica	1981	21.7	45.6	20.5	12.2	44.9	46.3	6.9	2.0
	1990	15.7	43.1	22.4	18.8	35.7	50.9	10.0	3.4
	1994	13.9	41.7	24.7	19.7	33.9	52.7	9.5	3.9
	1999	12.2	44.9	22.1	20.7	29.1	54.7	10.6	5.7
Ecuador	1990	14.2	46.9	21.9	17.1
	1994	10.8	41.9	26.2	21.2
	1999	11.2	40.8	27.2	20.8
El Salvador	1995	31.7	34.4	20.6	13.3	74.6	21.1	3.6	0.7
	1999	27.0	32.9	23.7	16.4	68.2	25.9	4.7	1.2
Guatemala	1989	45.0	32.1	14.1	8.8	84.2	14.0	1.4	0.4
	1998	36.6	35.2	17.7	10.6	78.0	19.1	2.6	0.4
Honduras	1990	39.1	38.7	15.1	7.1	76.0	22.1	1.7	0.2
	1994	32.7	39.3	19.0	9.1	64.9	31.7	2.9	0.5
	1999	30.0	42.8	17.5	9.8	65.8	29.7	3.9	0.7
México a/	1989	23.3	48.5	12.3	15.9	59.8	34.1	3.5	2.5
	1994	19.1	49.6	13.4	17.8	54.5	39.9	3.7	1.9
	1998	17.0	49.0	16.2	17.8	46.5	44.1	6.4	3.0
Nicaragua	1993	33.3	42.2	16.6	7.8	78.0	18.2	2.7	1.1
	1998	33.9	40.6	14.0	11.5	74.3	20.5	3.0	2.1
Panamá	1979	16.2	48.3	22.8	12.8	50.6	42.3	5.8	1.3
	1991	14.2	42.0	26.4	17.5	38.3	46.0	11.9	3.8
	1994	11.5	42.2	27.5	18.7	36.5	47.2	11.8	4.4
	1999	8.8	40.9	28.8	21.5	30.6	50.2	13.6	5.5

(continúa)

Cuadro 27.1 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN MASCULINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Paraguay (Asunción)	1986	17.5	40.8	24.3	17.4
	1990	14.6	41.5	30.0	13.8
	1994	14.9	43.3	26.2	15.6
	1999	11.6	42.9	29.2	16.3	52.8	39.1	6.1	1.9
República Dominicana	1997	31.6	31.4	24.5	12.6	60.1	27.1	10.4	2.4
Uruguay	1981	22.9	49.6	20.4	7.2
	1990	16.0	49.4	24.3	10.3
	1994	13.8	50.5	25.7	10.0
	1999	9.8	51.8	26.6	11.8
Venezuela c/	1981	25.6	53.8	12.5	8.1	68.7	28.0	2.6	0.6
	1990	17.8	52.5	17.4	12.3	58.7	35.8	4.6	1.0
	1994	18.1	48.8	19.8	13.4	55.2	36.8	6.1	1.9
	1999	19.7	48.0	19.7	12.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 27.2

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	16.2		65.6	18.2
	1990	14.0		65.7	20.3
	1994	7.7		64.5	27.7
	1999	7.1	29.1	32.6	31.2
Bolivia	1997	39.6	17.9	26.3	16.2	82.4	12.0	3.8	1.9
	1999	30.4	21.4	24.1	24.2	83.6	9.4	5.3	1.7
Brasil	1979	55.7	19.1	16.3	9.0	91.8	4.5	2.0	1.6
	1990	41.6	25.0	21.7	11.7	80.0	12.7	6.3	1.1
	1993	53.4	22.7	16.7	7.1	85.4	9.7	4.2	0.7
	1999	34.9	23.8	28.6	12.7	76.7	13.5	8.3	1.4
Chile	1990	12.3	23.5	35.1	29.2	24.8	35.2	22.5	17.4
	1994	10.6	20.3	39.3	29.8	25.2	36.1	24.8	13.9
	1998	8.6	20.0	40.1	31.2	24.6	37.0	26.8	11.6
Colombia b/	1980	47.6	25.4	17.4	9.6
	1990	26.5	27.6	29.0	16.9
	1991	33.2	22.8	26.8	17.2	69.9	14.8	12.5	2.8
	1994	29.4	21.7	31.1	17.8	63.4	14.7	18.2	3.7
	1999	27.1	20.8	33.6	18.5	57.5	15.9	20.5	6.2
Costa Rica	1981	17.5	38.8	28.0	15.7	31.1	51.3	13.3	4.3
	1990	11.4	37.5	27.1	24.0	23.5	50.2	17.6	8.7
	1994	10.6	36.4	27.7	25.3	22.5	52.5	16.6	8.4
	1999	10.6	37.3	24.9	27.2	18.8	52.3	16.6	12.2
Ecuador	1990	15.1	36.6	28.0	20.2
	1994	11.6	35.8	28.3	24.3
	1999	11.5	34.0	30.0	24.5
El Salvador	1995	36.2	28.0	22.0	13.8	73.0	20.3	5.0	1.7
	1999	31.3	27.3	24.8	16.7	67.7	22.7	7.0	2.7
Guatemala	1989	46.3	26.3	19.8	7.6	83.8	11.2	4.0	1.0
	1998	43.3	27.6	20.6	8.5	85.0	11.6	2.8	0.6
Honduras	1990	36.8	33.7	22.7	6.8	69.6	22.7	7.3	0.4
	1994	31.0	38.2	22.8	8.0	53.6	33.9	11.4	1.1
	1999	28.4	38.8	23.8	9.0	56.3	33.8	8.6	1.4
México a/	1989	18.5	54.4	15.0	12.0	60.0	33.8	3.2	2.9
	1994	18.9	50.6	15.1	15.3	54.9	38.4	4.5	2.2
	1998	17.7	50.9	13.6	17.8	48.2	42.9	5.9	3.0
Nicaragua	1993	33.6	39.5	20.0	6.9	62.3	30.8	5.7	1.2
	1998	33.6	34.6	17.0	14.8	60.5	25.6	8.5	5.3
Panamá	1979	10.6	43.3	29.1	16.9	32.1	42.2	19.2	6.5
	1991	7.9	30.7	33.4	28.0	17.5	42.2	26.5	13.8
	1994	5.7	33.0	31.9	29.4	18.2	40.8	26.8	14.2
	1999	4.7	30.4	31.3	33.6	15.1	40.8	27.1	17.0

(continúa)

Cuadro 27.2 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En porcentajes)									
País	Año	Zonas urbanas				Zonas rurales			
		Años de instrucción				Años de instrucción			
		0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Paraguay (Asunción)	1986	20.2	40.9	25.4	13.5
	1990	14.7	41.8	28.3	15.2
	1994	16.8	40.4	25.3	17.5
	1999	12.4	41.4	26.7	19.5	52.1	37.1	7.2	3.6
República Dominicana	1997	23.5	25.6	29.3	21.6	48.7	28.6	17.5	5.2
Uruguay	1981	18.6	43.7	24.2	13.4
	1990	11.6	42.0	29.0	17.4
	1994	10.0	42.2	30.0	17.8
	1999	6.6	42.1	31.5	19.8
Venezuela c/	1981	21.2	48.9	19.9	9.9	56.9	33.5	8.2	1.5
	1990	14.0	43.9	24.3	17.8	46.7	38.0	12.1	3.2
	1994	12.8	40.2	26.6	20.4	37.1	41.6	14.7	6.6
	1999	13.1	38.9	24.7	23.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 28

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, POR ZONA, 1980-1999 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7.8	7.8	7.7
	1990	9.0	8.9	9.2
	1994	9.1	8.8	9.4
	1999	10.1	9.8	10.5
Bolivia	1989	10.2	10.6	9.9
	1994	10.0	10.3	9.7
	1999	10.4	10.5	10.2	6.2	6.9	5.6
Brasil	1979	6.4	6.4	6.4	4.2	4.4	4.1
	1990	6.6	6.3	6.8	3.6	3.3	4.0
	1993	6.5	6.2	6.8	3.7	3.4	4.2
	1999	7.5	7.2	7.9	4.9	4.4	5.4
Chile	1987	9.9	9.9	10.0	7.4	7.1	7.6
	1990	10.1	10.0	10.2	7.9	7.6	8.1
	1994	10.4	10.4	10.5	8.2	8.0	8.4
	1998	11.4	11.2	11.5	9.6	9.4	9.8
Colombia b/	1980	7.5	7.6	7.5
	1990	8.5	8.5	8.5
	1991	8.5	8.4	8.7	5.5	5.2	5.8
	1994	8.7	8.6	8.8	5.8	5.5	6.2
	1999	9.2	9.0	9.3	6.5	6.2	6.8
Costa Rica	1981	8.8	8.7	8.9	6.7	6.6	6.8
	1990	9.1	8.9	9.3	6.9	6.7	7.2
	1994	8.8	8.8	8.8	6.6	6.5	6.7
	1999	8.8	8.6	9.0	7.0	6.8	7.1
Ecuador	1990	9.4	9.1	9.6
	1994	9.7	9.6	9.8
	1999	9.6	9.4	9.8
El Salvador	1997	8.8	8.7	8.9	5.2	5.2	5.1
	1999	9.0	8.9	9.0	5.5	5.5	5.5
Guatemala	1989	6.7	7.3	6.2	2.9	3.4	2.4
	1998	7.5	7.6	7.5	3.6	4.1	3.1
Honduras	1990	7.0	6.9	7.0	4.1	3.9	4.3
	1994	7.3	7.2	7.4	4.8	4.7	5.0
	1999	7.6	7.3	7.8	4.9	4.7	5.1
México a/	1984	9.7	9.9	9.5	8.3	8.5	8.1
	1989	8.7	8.9	8.6	6.8	6.8	6.7
	1994	8.9	9.0	8.8	7.0	6.9	7.1
	1998	10.1	10.2	10.0	7.8	8.1	7.5
Nicaragua	1993	7.0	6.8	7.2	3.6	3.3	4.0
	1998	7.5	7.2	7.8	4.2	3.8	4.6

(continúa)

Cuadro 28 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, POR ZONA, 1980-1999 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Panamá	1979	9.2	9.0	9.3	6.9	6.8	7.0
	1991	9.6	9.2	9.9	7.6	7.3	8.0
	1994	9.6	9.3	9.9	7.6	7.3	8.1
	1999	10.0	9.8	10.3	8.0	7.6	8.4
Paraguay (Asunción)	1986	8.7	9.0	8.5
	1990	9.3	9.5	9.1
	1994	9.1	9.1	9.0
	1999	9.4	9.5	9.4	6.5	6.4	6.5
República Dominicana	1997	8.4	8.0	8.8	6.3	6.0	6.7
Uruguay	1981	8.6	8.4	8.7
	1990	9.2	8.9	9.4
	1994	9.2	8.9	9.5
	1999	9.5	9.1	9.8
Venezuela <i>c/</i>	1981	8.0	7.7	8.2	5.1	4.9	5.4
	1990	8.4	8.2	8.7	5.7	5.2	6.2
	1994	8.7	8.4	9.1	6.0	5.7	6.4
	1999	8.8	8.2	9.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 29

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, POR ZONA, 1980-1999 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7.4	7.0	7.7
	1990	8.8	8.9	8.8
	1994	9.0	9.0	9.0
	1999	10.2	10.1	10.3
Bolivia	1989	8.8	9.9	7.8
	1994	9.3	10.3	8.3
	1999	9.4	10.5	8.5	3.6	4.7	2.5
Brasil	1979	5.1	5.3	4.9	2.4	2.5	2.3
	1990	6.2	6.3	6.1	2.6	2.6	2.6
	1993	6.3	6.4	6.2	2.7	2.7	2.8
	1999	7.0	6.9	7.1	3.3	3.2	3.4
Chile	1987	9.3	9.7	9.0	5.5	5.6	5.5
	1990	9.7	10.1	9.5	6.2	6.3	6.2
	1994	10.2	10.4	10.0	6.6	6.7	6.5
	1998	11.5	11.7	11.3	7.2	7.2	7.1
Colombia b/	1980	6.8	7.4	6.2
	1990	8.2	8.6	7.8
	1991	8.1	8.5	7.8	4.1	4.1	4.1
	1994	8.3	8.6	8.1	4.4	4.3	4.4
	1999	8.6	8.9	8.4	4.8	4.7	4.9
Costa Rica	1981	7.5	7.9	7.3	4.6	4.7	4.5
	1990	9.6	10.0	9.3	6.3	6.6	6.0
	1994	9.1	9.3	8.9	6.0	6.0	6.0
	1999	9.3	9.4	9.1	6.5	6.5	6.5
Ecuador	1990	8.9	9.2	8.6
	1994	9.7	10.0	9.5
	1999	9.9	10.1	9.7
El Salvador	1997	7.9	8.7	7.4	2.9	3.3	2.6
	1999	8.2	8.8	7.7	3.2	3.6	2.9
Guatemala	1989	5.6	6.4	4.9	1.5	1.9	1.1
	1998	6.5	7.2	5.8	1.9	2.4	1.4
Honduras	1990	6.4	6.8	6.1	2.5	2.6	2.4
	1994	7.0	7.5	6.6	3.4	3.4	3.4
	1999	7.3	7.6	7.1	3.5	3.5	3.6
México a/	1984	8.4	8.8	8.1	6.9	7.1	6.7
	1989	7.5	8.1	7.0	4.7	5.0	4.5
	1994	8.0	8.5	7.6	5.0	5.3	4.8
	1998	8.9	9.4	8.5	4.7	4.9	4.5
Nicaragua	1993	6.4	6.8	6.0	2.4	2.4	2.3
	1998	7.0	7.4	6.6	3.2	3.2	3.2

(continúa)

Cuadro 29 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, POR ZONA, 1980-1999 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Panamá	1979	8.5	8.6	8.3	4.4	4.4	4.3
	1991	9.6	9.6	9.7	6.1	6.1	6.2
	1994	9.9	9.9	10.0	6.4	6.3	6.6
	1999	10.4	10.4	10.5	7.1	6.9	7.2
Paraguay (Asunción)	1986	8.8	9.4	8.3
	1990	9.0	9.3	8.8
	1994	8.9	9.2	8.6
	1999	9.3	9.6	9.0	4.8	5.0	4.5
República Dominicana	1997	8.2	8.2	8.2	4.7	4.8	4.6
Uruguay	1981	7.3	7.3	7.3
	1990	8.3	8.3	8.4
	1994	8.6	8.6	8.7
	1999	9.2	9.0	9.3
Venezuela <i>c/</i>	1981	6.8	7.3	6.4	3.1	3.3	2.7
	1990	8.2	8.4	8.0	4.0	4.2	3.8
	1994	8.3	8.4	8.1	4.7	4.7	4.6
	1999	8.3	8.2	8.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 30

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS, SEGÚN SEXO, POR ZONA, 1980-1999 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina a/ (Gran Buenos Aires)	1980	7.4	7.0	8.2
	1990	8.7	8.6	8.9
	1994	9.3	9.0	9.7
	1999	10.4	10.0	11.1
Bolivia	1989	9.0	9.7	8.2
	1994	9.3	10.0	8.5
	1999	9.6	10.2	8.8	3.8	4.7	2.8
Brasil	1979	5.9	5.6	6.4	3.1	3.0	3.4
	1990	6.7	6.3	7.2	3.0	2.7	3.5
	1993	6.0	6.0	6.0	2.8	2.7	2.9
	1999	7.3	6.9	7.9	3.5	3.3	3.8
Chile	1987	9.9	9.7	10.3	6.2	5.9	7.6
	1990	10.2	10.0	10.6	6.8	6.4	8.5
	1994	10.6	10.4	10.9	7.1	6.8	8.3
	1998	11.7	11.5	12.0	7.4	7.1	8.7
Colombia b/	1980	7.1	7.2	6.9
	1990	8.7	8.6	8.8
	1991	8.4	8.2	8.6	4.3	4.1	4.9
	1994	8.6	8.4	8.9	4.7	4.3	5.6
	1999	8.9	8.7	9.1	5.1	4.7	6.1
Costa Rica	1981	8.1	7.8	8.6	5.4	5.2	6.3
	1990	10.1	9.7	10.6	6.7	6.4	7.8
	1994	9.2	9.0	9.7	6.2	5.9	7.1
	1999	9.3	9.1	9.7	6.6	6.3	7.5
Ecuador	1990	9.0	8.8	9.3
	1994	9.7	9.6	10.0
	1999	9.8	9.6	10.0
El Salvador	1997	8.1	8.2	7.9	3.5	3.5	3.6
	1999	8.3	8.5	8.2	3.9	3.8	4.0
Guatemala	1989	6.1	6.2	6.0	2.2	2.2	2.2
	1998	6.7	6.9	6.4	2.5	2.7	2.1
Honduras	1990	6.5	6.4	6.8	2.9	2.8	3.4
	1994	7.1	7.1	7.2	3.8	3.6	4.7
	1999	7.2	7.1	7.4	3.8	3.6	4.4
México a/	1984	8.9	8.8	9.0	7.2	7.2	7.3
	1989	8.0	8.0	8.1	5.2	5.2	5.2
	1994	8.3	8.3	8.3	5.5	5.5	5.5
	1998	9.5	9.5	9.5	5.5	5.6	5.3
Nicaragua	1993	6.8	6.8	6.9	3.0	2.7	4.1
	1998	7.1	7.0	7.3	3.5	3.2	4.6

(continúa)

Cuadro 30 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS, SEGÚN SEXO, POR ZONA, 1980-1999 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de años de instrucción			Promedio de años de instrucción		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Panamá	1979	8.9	8.6	9.5	5.0	4.7	6.8
	1991	9.9	9.2	10.8	6.4	5.8	8.6
	1994	10.2	9.6	11.0	6.6	6.0	8.6
	1999	10.6	10.1	11.5	7.1	6.5	9.0
Paraguay (Asunción)	1986	8.9	9.1	8.6
	1990	9.2	9.2	9.1
	1994	9.1	9.1	9.1
	1999	9.5	9.5	9.5	5.2	5.2	5.2
República Dominicana	1997	8.5	8.0	9.3	5.2	4.9	6.0
Uruguay	1981	7.8	7.5	8.2
	1990	8.6	8.2	9.2
	1994	8.8	8.4	9.3
	1999	9.3	8.9	9.8
Venezuela <i>c/</i>	1981	7.2	7.0	7.7	3.5	3.4	4.3
	1990	8.4	8.1	9.2	4.3	4.1	5.3
	1994	8.5	8.1	9.3	4.9	4.6	6.3
	1999	8.5	7.9	9.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ A partir de 1996 en México y de 1997 en Argentina, se dispuso de antecedentes que permiten calcular el número de años de instrucción. Las cifras anteriores corresponden a estimaciones a partir de las categorías primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, y superior.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 31

**AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): CEMIT ^{a/} DE JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE TRABAJAN
20 O MÁS HORAS SEMANALES, SEGÚN SEXO, POR ZONA, 1980-1999**
(En promedios)

País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de CEMIT			Promedio de CEMIT		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Argentina (Gran Buenos Aires)	1980	5.1	5.3	4.8
	1990	2.7	2.6	2.7
	1994	5.2	5.2	5.2
	1999	4.1	3.9	4.4
Bolivia	1989	2.4	2.8	2.0
	1994	2.0	2.3	1.6
	1999	2.4	2.6	2.1	2.1	2.3	1.3
Brasil	1979	2.8	3.1	2.2	1.8	2.0	1.5
	1990	2.3	2.5	2.0	2.1	2.2	1.7
	1993	2.3	2.5	2.1	1.8	1.9	1.5
	1999	2.4	2.6	2.3	2.0	2.1	1.8
Chile	1990	2.2	2.3	2.0	2.3	2.4	2.3
	1994	3.1	3.3	2.8	2.9	2.9	2.7
	1998	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.2
Colombia b/	1980	2.2	2.3	2.2
	1990	2.3	2.3	2.2
	1991	1.8	1.9	1.7	2.2	2.4	1.7
	1994	2.1	2.1	2.1	1.9	2.0	1.7
	1999	2.2	2.1	2.3	2.8	2.9	2.4
Costa Rica	1981	3.8	3.7	4.0	3.3	3.4	2.8
	1990	3.5	3.6	3.4	4.2	4.3	3.6
	1994	3.6	3.7	3.4	4.2	4.4	3.7
	1999	3.9	3.9	3.9	4.5	4.6	4.4
Ecuador	1990	2.2	2.3	2.0
	1994	2.1	2.3	1.9
	1999	1.7	1.8	1.7
El Salvador	1997	2.9	2.9	2.9	2.5	2.6	2.4
	1999	2.8	2.9	2.5	3.1	3.2	2.9
Guatemala	1989	2.3	2.5	2.1	2.2	2.2	1.9
	1998	2.0	2.1	2.0	1.5	1.6	1.1
Honduras	1990	1.6	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4
	1994	1.3	1.4	1.2	1.7	1.7	1.5
	1999	1.5	1.6	1.4	1.6	1.6	1.7
México	1984	3.2	3.1	3.3	2.6	2.6	2.8
	1989	2.4	2.6	2.0	2.0	2.0	1.7
	1994	2.0	2.1	1.9	2.0	2.2	1.6
	1998	1.7	1.4	2.1	1.1	1.0	1.5
Nicaragua	1993	2.6	2.4	2.8	2.3	2.2	2.9
	1998	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.8

(continúa)

Cuadro 31 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): CEMIT <i>a/</i> DE JÓVENES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE TRABAJAN 20 O MÁS HORAS SEMANALES, SEGÚN SEXO, POR ZONA, 1980-1999 (En promedios)							
País	Año	Zonas urbanas			Zonas rurales		
		Promedio de CEMIT			Promedio de CEMIT		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Panamá	1979	3.9	4.3	3.4	4.1	3.9	4.7
	1991	2.8	3.1	2.3	2.8	3.0	2.1
	1994	2.8	2.9	2.4	2.7	2.8	2.4
	1999	3.8	3.7	3.8	3.2	3.2	3.1
Paraguay (Asunción)	1986	1.4	1.7	1.1
	1990	1.6	1.9	1.2
	1994	2.1	2.4	1.8
	1999	1.6	1.5	1.8
República Dominicana	1997	3.2	3.1	3.3	4.0	4.2	3.5
Uruguay	1981	3.1	3.3	2.8
	1990	2.3	2.4	2.1
	1994	2.8	2.9	2.7
	1999	3.2	3.3	3.0
Venezuela <i>c/</i>	1981	5.7	5.9	5.3	5.9	6.0	5.3
	1990	3.3	3.4	2.9	3.2	3.3	2.9
	1994	2.9	2.9	2.9	2.8	3.0	2.2
	1999	2.6	2.6	2.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/* CEMIT significa Capacidad Equivalente Mensual de Ingresos por Trabajo y corresponde al ingreso mensual equivalente según el valor de la hora de trabajo, expresado en líneas de pobreza. Este indicador no incluye a los familiares no remunerados.
- b/* A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/* A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 32

**AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): CEMIT a/ DE PERSONAS DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD QUE TRABAJAN
20 O MÁS HORAS SEMANALES, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999**
(En promedios)

País	Año	Zonas urbanas					Zonas rurales				
		Promedio de CEMIT					Promedio de CEMIT				
		Total	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	Total	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Argentina (Gran Buenos Aires)	1980	9.0	5.7	7.4	12.2	16.3
	1990	4.6	2.9	3.4	4.6	7.9
	1994	9.7	6.0	6.8	10.0	16.4
	1999	7.6	4.2	4.6	7.2	12.6
Bolivia	1989	4.8	3.2	3.6	4.7	7.6
	1994	4.6	2.5	3.2	4.0	8.4
	1999	4.0	2.4	2.7	3.7	6.5	1.7	1.2	2.1	3.1	6.4
Brasil	1979	7.0	4.2	7.4	10.8	20.7	3.1	2.9	6.6	9.6	11.0
	1990	5.7	3.0	4.5	7.1	15.2	3.4	2.9	5.3	7.2	16.8
	1993	5.7	2.9	4.4	7.1	15.8	3.3	2.7	5.4	7.1	17.5
	1999	5.6	2.8	3.9	6.2	14.8	3.2	2.4	4.0	6.4	18.1
Chile	1990	4.1	2.1	2.4	3.2	7.5	3.3	2.5	2.6	3.7	8.8
	1994	6.5	3.2	3.5	5.1	12.1	4.6	3.0	3.4	5.3	15.9
	1998	7.9	3.3	4.0	6.0	14.3	5.5	3.9	4.1	7.7	16.1
Colombia b/	1980	4.6	2.3	3.7	5.9	12.3
	1990	4.3	2.3	3.0	4.6	8.6
	1991	3.1	1.9	2.4	3.3	5.8	3.7	3.0	4.7	6.4	10.1
	1994	4.1	2.1	2.7	4.1	8.9	2.9	2.4	3.1	4.2	8.2
	1999	3.6	1.9	2.1	3.4	7.6	3.4	2.6	3.4	5.1	8.5
Costa Rica	1981	7.8	5.2	6.1	8.8	13.9	8.0	7.1	7.5	11.4	18.3
	1990	5.7	3.2	4.0	5.9	9.4	5.9	4.9	5.4	7.4	11.6
	1994	6.3	3.6	4.3	6.2	10.1	6.5	5.2	5.8	8.0	13.7
	1999	6.4	3.4	4.3	6.2	10.3	7.0	5.2	6.1	8.2	14.1
Ecuador	1990	3.5	2.1	2.7	3.8	5.7
	1994	3.4	1.8	2.4	3.5	5.2
	1999	3.5	1.6	2.0	3.2	6.0
El Salvador	1997	4.8	2.2	3.3	5.7	9.9	3.2	2.8	4.9	2.9	13.8
	1999	5.2	2.8	3.7	5.3	10.1	4.4	4.0	4.8	5.7	10.9
Guatemala	1989	4.4	2.6	3.8	6.3	10.5	3.4	3.1	4.6	8.5	15.9
	1998	4.1	2.2	3.0	5.8	9.4	3.3	2.8	5.1	6.3	14.1
Honduras	1990	3.4	1.6	2.5	5.2	10.0	2.3	1.9	3.3	7.4	8.4
	1994	2.6	1.4	1.8	3.1	7.0	2.7	2.0	3.7	5.2	6.6
	1999	2.9	1.5	2.1	3.5	6.6	2.5	2.0	2.5	7.1	6.0
México	1984	5.4	2.4	4.6	6.4	8.8	4.0	2.5	3.9	8.0	10.6
	1989	4.8	3.1	3.8	5.8	8.8	3.7	3.0	4.5	6.0	7.9
	1994	5.1	2.3	3.6	5.8	10.1	3.4	2.6	3.8	6.3	8.8
	1998	5.8	1.9	3.3	5.4	12.0	3.8	2.1	3.1	26.0	10.2
Nicaragua	1993	3.7	2.8	3.4	4.0	6.9	2.7	2.3	3.7	4.6	9.1
	1998	4.0	2.0	3.1	4.0	9.6	2.9	2.2	3.6	4.2	8.5
Panamá	1979	7.0	3.8	5.0	8.0	13.2	4.7	3.4	5.1	8.6	14.3
	1991	6.5	3.3	4.1	5.9	10.7	6.1	3.8	5.1	7.5	12.2
	1994	6.2	3.4	3.8	5.7	10.3	5.4	3.4	4.7	6.7	10.1
	1999	6.7	3.1	3.9	6.1	10.8	5.8	3.4	4.4	7.1	11.6

(continúa)

Cuadro 32 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): CEMIT ^{a/} DE PERSONAS DE 25 A 59 AÑOS DE EDAD QUE TRABAJAN 20 O MÁS HORAS SEMANALES, SEGÚN AÑOS DE INSTRUCCIÓN, POR ZONA, 1980-1999 (En promedios)											
País	Año	Zonas urbanas					Zonas rurales				
		Promedio de CEMIT					Promedio de CEMIT				
		Total	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	Total	0 a 5 años	6 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más
Paraguay (Asunción)	1986	3.7	1.5	2.3	4.1	7.4
	1990	3.7	2.0	2.7	4.0	7.1
	1994	4.0	1.9	2.7	4.1	8.3
	1999	4.7	1.9	4.8	3.4	9.5
República Dominicana	1997	5.2	3.5	4.4	5.1	9.0	5.2	4.6	5.6	6.1	8.8
Uruguay	1981	6.3	4.3	5.4	7.2	12.1
	1990	4.3	2.8	3.4	5.0	6.8
	1994	5.3	3.4	4.1	5.9	8.8
	1999	6.0	3.7	4.4	6.5	10.2
Venezuela ^{c/}	1981	9.1	6.1	8.1	11.4	17.8	7.4	6.2	9.3	14.2	23.3
	1990	5.4	3.9	4.6	5.8	8.5	5.1	4.4	5.8	6.8	9.4
	1994	4.3	3.1	3.7	4.5	6.7	4.1	3.5	4.6	4.7	7.1
	1999	4.3	2.7	3.5	4.4	7.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

- a/ CEMIT significa Capacidad Equivalente Mensual de Ingresos por Trabajo y corresponde al ingreso mensual equivalente según el valor de la hora de trabajo, expresado en líneas de pobreza. Este indicador no incluye a los familiares no remunerados.
- b/ A partir de 1993 se amplió la cobertura geográfica de la encuesta hasta abarcar prácticamente la totalidad de la población urbana del país. Hasta 1992, la encuesta cubría a alrededor de la mitad de dicha población, con excepción de 1991, año en el que se realizó una encuesta de carácter nacional. Por lo tanto, las cifras de 1980 y 1990 se refieren sólo a ocho ciudades principales.
- c/ A partir de 1997 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglosamiento urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional.

Cuadro 33

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INDICADORES SOBRE GASTO PÚBLICO SOCIAL, a/								
1990/1991-1998/1999								
País y cobertura c/	Periodo	Gasto público social			Periodo	Variaciones porcentuales del gasto público social b/		
		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total
Argentina d/ (SPNF Consolidado)	1990/1991	1211	17.7	62.2	1990/1991-1994/1995	30.7	3.3	3.1
	1994/1995	1583	21.0	65.3	1994/1995-1998/1999	6.6	-0.5	-1.7
	1998/1999	1687	20.5	63.6	1990/1991-1998/1999	39.4	2.8	1.4
Bolivia (GG)	1990/1991	1990/1991-1994/1995
	1994/1995	121	12.4	49.4	1994/1995-1998/1999	38.4	3.7	7.1
	1998/1999	168	16.1	56.5	1990/1991-1998/1999
Brasil e/ (SPNF Consolidado)	1990/1991	786	18.1	48.9	1990/1991-1994/1995	18.6	1.9	11.2
	1994/1995	932	20.0	60.0	1994/1995-1998/1999	8.5	1.0	0.4
	1998/1999	1011	21.0	60.4	1990/1991-1998/1999	28.6	2.9	11.6
Chile (GC)	1990/1991	440	13.0	60.8	1990/1991-1994/1995	35.7	0.6	3.9
	1994/1995	597	13.6	64.7	1994/1995-1998/1999	38.6	2.4	2.1
	1998/1999	827	16.0	66.8	1990/1991-1998/1999	88.2	3.0	6.0
Colombia (SPNF)	1990/1991	158	8.0	28.8	1990/1991-1994/1995	88.0	3.5	11.1
	1994/1995	297	11.5	39.9	1994/1995-1998/1999	28.3	3.5	-4.4
	1998/1999	381	15.0	35.5	1990/1991-1998/1999	141.1	7.0	6.7
Costa Rica (SPNF Consolidado)	1990/1991	476	15.7	38.9	1990/1991-1994/1995	12.6	0.3	-0.6
	1994/1995	536	16.0	38.3	1994/1995-1998/1999	16.2	0.8	4.8
	1998/1999	622	16.8	43.1	1990/1991-1998/1999	30.8	1.1	4.2
El Salvador (GC)	1990/1991	1990/1991-1994/1995
	1994/1995	60	3.3	21.3	1994/1995-1998/1999	37.8	1.0	5.7
	1998/1999	82	4.3	27.0	1990/1991-1998/1999
Guatemala (GC)	1990/1991	52	3.4	29.9	1990/1991-1994/1995	27.2	0.7	8.7
	1994/1995	66	4.1	38.5	1994/1995-1998/1999	63.4	2.1	7.7
	1998/1999	107	6.2	46.2	1990/1991-1998/1999	107.8	2.8	16.4
Honduras (GC)	1990/1991	60	7.9	36.5	1990/1991-1994/1995	-0.8	-0.2	-3.8
	1994/1995	59	7.7	32.7	1994/1995-1998/1999	-3.4	-0.3	1.6
	1998/1999	57	7.4	34.3	1990/1991-1998/1999	-4.2	-0.5	-2.2
México (Sector Público Presupuestario)	1990/1991	259	6.5	40.8	1990/1991-1994/1995	38.0	2.3	11.6
	1994/1995	358	8.8	52.4	1994/1995-1998/1999	12.4	0.3	6.1
	1998/1999	402	9.1	58.5	1990/1991-1998/1999	55.2	2.6	17.7
Nicaragua (GC Presupuestario)	1990/1991	48	10.8	35.4	1990/1991-1994/1995	8.4	1.8	5.5
	1994/1995	52	12.6	40.9	1994/1995-1998/1999	10.7	0.1	-3.9
	1998/1999	57	12.7	37.0	1990/1991-1998/1999	20.0	1.9	1.6
Panamá (SPNF)	1990/1991	497	18.6	40.0	1990/1991-1994/1995	22.0	1.2	3.2
	1994/1995	606	19.8	43.2	1994/1995-1998/1999	5.9	-0.4	-4.7
	1998/1999	642	19.4	38.6	1990/1991-1998/1999	29.2	0.8	-1.5

(continúa)

Cuadro 33 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INDICADORES SOBRE GASTO PÚBLICO SOCIAL, a/								
1990/1991-1998/1999								
País y cobertura c/	Periodo	Gasto público social			Periodo	Variaciones porcentuales del gasto público social b/		
		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total
Paraguay (GC Presupuestario)	1990/1991	56	3.1	39.9	1990/1991-1994/1995	133.9	3.9	3.5
	1994/1995	131	7.0	43.4	1994/1995-1998/1999	0.4	0.5	2.8
	1998/1999	132	7.4	46.2	1990/1991-1998/1999	134.8	4.4	6.3
Perú (GC)	1990/1991	69	3.3	31.1	1990/1991-1994/1995	104.4	2.5	3.7
	1994/1995	140	5.8	34.8	1994/1995-1998/1999	37.1	1.1	3.6
	1998/1999	192	6.8	38.3	1990/1991-1998/1999	180.3	3.5	7.2
República Dominicana (GC)	1990/1991	64	4.3	38.4	1990/1991-1994/1995	56.3	1.8	2.8
	1994/1995	100	6.1	41.2	1994/1995-1998/1999	34.5	0.5	-1.5
	1998/1999	135	6.6	39.7	1990/1991-1998/1999	110.2	2.3	1.3
Uruguay (GC)	1990/1991	888	16.8	62.4	1990/1991-1994/1995	40.5	3.5	8.5
	1994/1995	1248	20.3	70.8	1994/1995-1998/1999	23.3	2.5	1.7
	1998/1999	1539	22.8	72.5	1990/1991-1998/1999	73.3	6.0	10.1
Venezuela (GC)	1990/1991	337	9.0	34.0	1990/1991-1994/1995	-14.9	-1.4	1.3
	1994/1995	287	7.6	35.3	1994/1995-1998/1999	9.2	1.1	2.0
	1998/1999	313	8.6	37.3	1990/1991-1998/1999	-7.0	-0.4	3.3

Fuente: CEPAL, base de datos sobre gasto social de la División de Desarrollo Social.

a/ Incluye el gasto público en educación, salud y nutrición, seguridad social, trabajo y asistencia social, y vivienda y alcantarillado.

b/ Las dos últimas columnas corresponden a diferencias entre los porcentajes del periodo final y del inicial.

c/ SPNF: Sector público no financiero; GG: Gobierno general; GC: Gobierno central.

d/ Incluye el gasto del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y Gobierno Central de Buenos Aires, y de los gobiernos municipales.

e/ Estimación del gasto social consolidado, que incluye el gasto federal, estadual y municipal.

Cuadro 34

**AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INDICADORES SOBRE GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EDUCACIÓN Y SALUD,
1990-1991 Y 1998-1999**

País y cobertura a/	Periodo	Gasto público social en educación			Gasto público social en salud		
		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total	per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total
Argentina b/ (SPNF Consolidado)	1990/1991	226	3.3	11.6	271	4.0	14.0
	1994/1995	318	4.2	13.1	373	5.0	15.4
	1998/1999	383	4.7	14.4	380	4.6	14.3
Bolivia (GG)	1990/1991
	1994/1995	52	5.3	21.1	31	3.1	12.5
	1998/1999	62	6.0	20.9	34	3.3	11.4
Brasil c/ (SPNF Consolidado)	1990/1991	162	3.7	9.9	156	3.6	9.6
	1994/1995	226	4.9	14.6	158	3.4	10.2
	1998/1999	187	3.9	11.2	163	3.4	9.7
Chile (GC)	1990/1991	87	2.6	12.0	70	2.1	9.6
	1994/1995	129	2.9	13.9	108	2.5	11.8
	1998/1999	202	3.9	16.3	145	2.8	11.7
Colombia (SPNF)	1990/1991	63	3.2	11.5	23	1.2	4.2
	1994/1995	86	3.4	11.6	75	2.9	10.1
	1998/1999	120	4.7	11.2	104	4.1	9.7
Costa Rica (SPNF Consolidado)	1990/1991	115	3.8	9.4	150	5.0	12.3
	1994/1995	136	4.1	9.8	159	4.7	11.4
	1998/1999	163	4.4	11.3	181	4.9	12.5
El Salvador (GC)	1990/1991
	1994/1995	35	2.0	12.6	23	1.3	8.3
	1998/1999	52	2.7	17.0	29	1.5	9.4
Guatemala (GC)	1990/1991	25	1.6	14.3	14	0.9	8.1
	1994/1995	29	1.8	16.6	15	0.9	8.8
	1998/1999	40	2.3	17.3	22	1.3	9.6
Honduras (GC)	1990/1991	32	4.3	19.9	20	2.6	12.0
	1994/1995	31	4.1	17.2	21	2.8	11.7
	1998/1999	32	4.1	18.9	16	2.0	9.4
México (Sector Público Presupuestario)	1990/1991	104	2.6	16.4	118	3.0	18.6
	1994/1995	157	3.8	23.0	96	2.4	14.0
	1998/1999	167	3.8	24.4	93	2.1	13.5
Nicaragua (GC Presupuestario)	1990/1991	22	5.0	16.3	20	4.6	15.0
	1994/1995	20	4.9	15.8	20	4.7	15.2
	1998/1999	26	5.7	16.7	20	4.5	13.2
Panamá (SPNF)	1990/1991	125	4.7	10.2	164	6.1	13.3
	1994/1995	151	5.0	10.8	204	6.7	14.5
	1998/1999	198	6.0	11.9	223	6.8	13.5

(continúa)

Cuadro 34 (conclusión)

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INDICADORES SOBRE GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EDUCACIÓN Y SALUD, 1990-1991 Y 1998-1999							
País y cobertura a/	Periodo	Gasto público social en educación			Gasto público social en salud		
		per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total	per cápita (en dólares de 1997)	como porcentaje del PIB	como porcentaje del gasto público total
Paraguay (GC Presupuestario)	1990/1991	22	1.2	15.8	6	0.3	3.8
	1994/1995	61	3.2	20.0	20	1.1	6.7
	1998/1999	66	3.7	23.0	19	1.1	6.5
Perú (GC)	1990/1991	28	1.3	12.7	15	0.7	6.8
	1994/1995	56	2.3	13.9	27	1.1	6.5
	1998/1999	62	2.2	12.3	38	1.3	7.5
República Dominicana (GC)	1990/1991	18	1.2	10.5	15	1.0	8.7
	1994/1995	34	2.1	13.9	21	1.3	8.7
	1998/1999	57	2.8	16.9	31	1.5	9.0
Uruguay (GC)	1990/1991	130	2.5	9.1	154	2.9	10.8
	1994/1995	151	2.5	8.6	212	3.5	12.1
	1998/1999	218	3.3	10.3	187	2.8	8.8
Venezuela (GC)	1990/1991	129	3.5	13.1	57	1.6	5.8
	1994/1995	139	3.7	17.1	41	1.1	5.0
	1998/1999	140	3.8	16.7	49	1.4	5.9

Fuente: CEPAL, base de datos sobre gasto social de la División de Desarrollo Social.

a/ SPNF: Sector público no financiero; GG: Gobierno general; GC: Gobierno central.

b/ Incluye el gasto del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y Gobierno Central de Buenos Aires, y de los gobiernos municipales.

c/ Estimación del gasto social consolidado, que incluye el gasto federal, estadual y municipal.

